

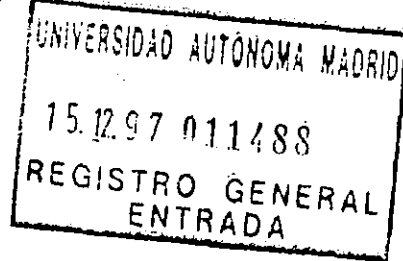
"Liberales en el Trienio"

Tesis Doctoral

Fernando Casas Mínguez

Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Madrid

Director: Dr. D. Francisco Murillo Ferrol



RD. 102. 190
30 cm.

2

Indice

<u>Capítulo 1. Guerra y Revolución.-</u>	Páginas.
1.1. Crisis y cambio.	1
1.2. Pronunciamiento.	4
1.3. La Guerra de Independencia.	9
1.4. Restauración y revolución.	20
1.5. Restauración en España.	26
1.6. Conspiración y revolución.	51
 <u>Capítulo 2. Gobierno Provisional.-</u>	
2.1. Revolución y provincialismo.	57
2.2. Gobierno de la Junta.	63
2.3. Juntas de provincias.	84
2.4. Convocatoria de Cortes ordinarias	98
2.5. Juntas preparatorias	107
 <u>Capítulo 3. Revolución y Constitución.-</u>	
3.1. Constitución de 1812 y Restauración.	114
3.2. España y la Constitución de 1812.	124
3.3. Difusión Constitucional:	
Autoridades.	134
Clero.	142
Sociedades patrióticas.	172
 <u>Capítulo 4. Sistema Constitucional:</u>	
<u>Cortes y Elecciones.-</u>	178



	Páginas
4.1. Cortes y representación .	179
4.2. Representación y sufragio.	192
4.3. Normativa electoral.	213
4.4. Las elecciones de 1820.	223
Atmósfera	226
Tendencias políticas.	231
4.5. Celebración de las Juntas electorales.	239
De parroquia y Cuerpo electoral.	242
De partido.	260
De provincia.	266

Capítulo 5. Sistema Constitucional.-

5.1. Monarca, Gobierno y Cortes.	286
5.2. Política del Gobierno.	307
5.3. El programa	314
Economía y fomento.	
Plan de Hacienda.	320
Participación.	326
Beneficencia.	328
5.4. Las Cortes.	336
Composición.	

Capítulo 6. Gobierno y Cortes: políticas y programa.-

6.1. Programa de reformas.	358
Orden y seguridad.	
Escisión en el liberalismo.	
6.2 Debate sobre participación.	365

	Páginas
6.3. Plan de Hacienda.	392
6.4. Reforma económica y deuda: Monacales.	404
6.5. Enfrentamientos y derrota del Gobierno	437
 <u>7. Elecciones de 1821: entre la reacción y la subversión.-</u>	
7.1. La moderación en crisis.	457
7.2. Presión de la Santa Alianza.	472
7.3. Las Cortes y el orden constitucional.	479
7.4. Fragilidad del sistema constitucional.	490
7.5. Revolución y reacción.	509
7.6. Elecciones de 1821.	
Atmósfera electoral.	521
Campaña del Gobierno.	532
7.7. Tendencias políticas.	
El debate sobre los partidos.	553
Absolutistas, moderados y exaltados.	559
7.8. Desarrollo de las elecciones.	571
Juntas de parroquia y partido	581
Juntas de provincia	585
Los resultados	595
 <u>Capítulo 8. Caída del sistema Constitucional.-</u>	
8.1. El Gobierno de la crisis.	607
8.2. Las Cortes de 1822-1823.	625
8.3. Confrontación Gobierno y Cortes.	646
8.4. Fin de la Constitución.	669

Introducción.

En 1820 los liberales españoles llevaron a cabo una revolución prodigiosa, incruenta y sin convulsión. En nombre de la razón y del interés general, pretendían hacer reformas radicales en el Estado y la sociedad.

Cuando llegaron al poder invocaron la moderación como estrategia para sacar adelante sus políticas. Trataban de evitar, a toda costa, los extravíos de la experiencia revolucionaria francesa. Desconfiaban de la violencia y consideraban inútil la pasión por la libertad, para consolidar su proyecto de cambio.

A juicio de los partidarios del constitucionalismo que accedieron al poder gracias a Riego, sólo el interés sensible nacido de la propiedad podía dotar de firmeza a las instituciones liberales, en la Europa que les había tocado vivir.

Analizar la vida política de esos años, prestando especial atención a la participación, las elecciones y las Cortes, será el cometido de estas páginas.

C A P I T U L O 1

Capítulo 1. Guerra y Revolución.-

1.1 Crisis y Cambio.

En ciencias sociales está muy difundido el supuesto de que no es la continuidad sino el cambio lo que realmente precisa explicación. Sin embargo, hay situaciones históricas concretas, como el período de profunda crisis ¹ que se inicia en nuestro país con la guerra de independencia², en las que el verdadero problema consiste en explicar la persistencia³ del Antiguo Régimen sometido a convulsiones y sobresaltos.

¹ Distingue Burckhardt entre crisis verdaderas, las que conmueven la base política y social, que son siempre raras, y los momentos tormentosos, en los que ninguna transformación vital tiene lugar, y se hace todo lo imaginable para que todo siga como estaba, aunque produzcan un largo e intenso estrépito. Sobre la distinción J. Burckhardt, Reflexiones sobre la historia universal, México, 1961.

² Para medir el alcance de la crisis provocada por la guerra pueden consultarse entre los coetáneos :Conde Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid 1953, págs 56 y sigs.; Argüelles, Examen histórico de la reforma constitucional, Madrid 1970; y los estudios de M. Artola, Los orígenes de la España contemporánea, Madrid 1959 ; Lovett G.H , "La Guerra de Independencia y el nacimiento de la España contemporánea, Barcelona, 1975.

³ En la historia, a pesar de los muchos motivos para el descontento y el inconformismo, la pasividad y la aquiescencia han dominado sobre las críticas, las protestas u otras formas de activismo político. Paralelamente, las explicaciones que privilegian las fuerzas que contribuyen a mantener el orden y el equilibrio han venido predominando en las ciencias sociales. Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia, Barcelona 1972.

La revolución⁴ española de 1820 hay que enmarcarla en la oleada revolucionaria que inundó la Europa de la Restauración. En 1819 las fuerzas de la revolución se alzaron en Alemania, Italia, España, Portugal y Grecia. El propio Metternicht, viajando por las provincias austríacas de Italia, quedó asombrado por las actividades de los carbonarios y el espíritu jacobino que reinaba por todas partes ⁵. A comienzos del siguiente año, tenía lugar el pronunciamiento en Cabezas y el desencadenamiento del proceso revolucionario en España.

En nuestro país, como en tantos otros que entre 1808 y 1814 libraron violentas guerras nacionales, se había despertado un espíritu de crítica⁶ que llenaba de preocupación a los soberanos y a las potencias europeas. El propio Fernando VII manifestó reiteradamente su inquietud por

⁴ En un sentido amplio se puede afirmar que las revoluciones suponen una transferencia por la fuerza del poder del Estado. En la medida en que la revolución implica apoderarse del poder del Estado, su probabilidad y naturaleza varían obviamente en función de la organización del Estado. Como hipótesis se suele señalar que, siendo iguales todos los demás aspectos, un Estado debilitado es más susceptible de sufrir una revolución que un Estado fuerte. Montesquieu, Grandeza y decadencia de los romanos, Madrid, 1962.

⁵ En relación con las convulsiones de esta época de desasosiego, pueden consultarse las obras de H.Nicholson, El Congreso de Viena, Madrid, 1985; J.Droz, "Europa, Revolución y Restauración, Madrid, 1979. y por los aparentes paralelismos con nuestro país S.Sanchez Montero, Las conspiraciones liberales en Francia, Sevilla 1972.

⁶Sobre ese espíritu y la ilusión que producen las crisis Cfr. Burckardt, ob. cit. A ello se refería también Tocqueville cuando hablaba de esa especie de religión que poseían los franceses en vísperas de la Revolución en El Antiguo régimen y la revolución, Madrid, 1969.Lib.3,cap.II.

los revolucionarios. En un Real decreto publicado pocos días antes de aceptar el cambio de régimen y proceder al juramento de la Constitución de 1812 manifestaba el Monarca:

"(...) Donde quiera que la vista se extienda no puedo menos de advertir con dolor, y aun mengua de la Europa entera, que el genio del mal inquieto y revoltoso, inspirando ideas demagógicas y revolucionarias, hace sentir sus terribles efectos en todas las naciones, aun las más ilustradas, obligándolas a recursos fuertes para contener sus progresos (...) ⁷ ".

Consecuencia de aquel espíritu, de los cambios sobrevenidos en todas las sociedades, por el colapso de la guerra, y el ejemplo triunfante de la Revolución francesa, (que según decía Tocqueville⁸ había conquistado Europa haciendo creer que el método general para llegar al poder era la audacia y la violencia), los poderes restaurados más débiles no tardaron en sucumbir. Así sucedió con la Monarquía absoluta de Fernando VII, a pesar de la confianza que en sus vasallos tenía el Monarca. En efecto, en el Real decreto anteriormente citado, decía el desconcertado Rey:

⁷ El cometido de la disposición citada era abordar la división de los Ministerios en secciones auxiliares para el mejor despacho de los negocios y estudiar las reformas conducentes al bien de la Monarquía. Ver Gaceta de Madrid, 3 de marzo 1820.

⁸ Véanse al respecto esos esbozos informes pero valiosísimos que son los Inéditos sobre la Revolución. Madrid, 1973.

"(...) Veo también con gusto y satisfacción mía, que en el pueblo español, siempre fiel y constante, no ha podido tener entrada (el genio del mal inquieto y revoltoso), a pesar de todos sus esfuerzos, y de las instigaciones⁹ de algunos pocos seducidos ¹⁰ (...)".

Como la realidad se encargaría de probar muy pronto, el diagnóstico de los consejeros del Monarca constituía una auténtica huida de la realidad.

1.2.Pronunciamiento.

Un acto de fuerza, el pronunciamiento del ejército expedicionario acantonado en Cabezas de San Juan, fué el detonante de la caída en 1820 del régimen monárquico absolutista de Fernando VII y la vuelta al sistema constitucional. De forma violenta, pero relativamente

⁹ El Monarca enfocaba la revolución de acuerdo con el modelo conspiratorio, según el cual las revoluciones son obra de los agitadores. La explicación conspirativa, iniciada por el genial Burke (Reflexiones sobre la revolución francesa, Madrid, 1973), proviene de la teoría equivocada de que todo lo que ocurre en la sociedad, especialmente lo que no suele gustar a la gente, es producto directo del designio de algunos individuos o grupos poderosos. Este enfoque reposa en una verdad a medias y se convierte en mentira porque pasa por alto las condiciones sociales y políticas que contribuyen a la eficacia de los conspiradores. La interpretación conspirativa suele encontrar el favor de quienes creen que la Revolución es siempre un mal. Contra la tesis conspirativa Tocqueville, ob.cit. 1969.Lib.1,cap.III

¹⁰ Ver Gaceta de Madrid, 3 de marzo 1820.

incruenta ¹¹ tuvo lugar al cabo de seis años de Restauración, una transmisión de poder diversa a la contemplada por la lógica del sistema jurídico entonces vigente. Cualquier intento por explicar, desde una perspectiva jurídica, ese cambio político ¹² resultaría vano. Como ya señaló un violento crítico de la revolución francesa, aludiendo al fenómeno revolucionario, se trata de una "cuestión ajena a la ley"¹³.

Se ha definido el pronunciamiento como un golpe militar realizado con fines políticos¹⁴. Dos notas esenciales de él son, la presencia de la milicia en los medios y de la

¹¹ En Cádiz, la convocatoria al pueblo para el solemne juramento de la Constitución, que llevó a cabo el ejército, al mando de los generales Freire y Villavicencio, acabó en matanza. Una descripción sobre lo ocurrido el 10 de marzo puede leerse en la Gaceta, 21 de marzo de 1820.

¹² El modelo político busca la génesis de las revoluciones en la estructura y el entramado del poder. Considera que las revoluciones revelan conflictos de intereses contrapuestos de grupos que pugnan por el control del poder. Ver Ch. Tilly Las revoluciones europeas, 1942-1992, Barcelona 1995.

¹³ El hecho revolucionario puede acabar teniendo fuerza normativa y, por tanto, ser fuente del derecho. Pero admitir que pueda producir derecho no equivale, de suyo, a otorgar a la revolución naturaleza jurídica. Por el contrario, los golpes de estado y los movimientos revolucionarios tienden a ser percibidos como exponentes de la impotencia del derecho para solucionar los conflictos. Burke refiriéndose a este asunto en sus Reflexiones señalaba: "(...) la cuestión de destronar o deponer a los reyes será siempre (...) una cuestión fuera de lo común y completamente ajena a la ley (...)". Ob.cit.

¹⁴ Frente al planteamiento conspirativo de Comellas, Los primeros pronunciamientos en España, Madrid, 1958; Fontana ha puesto de relieve la amplia participación civil en esos movimientos conspiratorios, ver La Quiebra de la Monarquía Absoluta, Barcelona, 1971. Cap.VII.

política en los fines. Los pronunciamientos españoles de la época de Fernando VII no eran exclusivamente, ni tenían como objetivo colocar a un militar al frente del Gobierno¹⁵. Esas intentonas por derribar al régimen absoluto contaban con el respaldo de los grupos sociales que los inspiraban o dirigían, como intelectuales, elementos de la burguesía comercial o personas sin uniforme de diversa extracción. A los militares se les asignaba un papel fundamental en el desencadenamiento del golpe, pero los civiles debían secundarlo para que tuviera éxito¹⁶.

El movimiento revolucionario de 1820 fué iniciado por el ejército, respaldado por la burguesía comercial, la burocracia urbana y tuvo a su favor la indiferencia de la mayoría del país. Dió lugar a una revolución política¹⁷, de carácter urbano, en un país agrícola y estuvo propiciado por la debilidad de un régimen exhausto y un entorno

¹⁵ Sobre la serie de movimientos frustrados que se produjeron de 1814 a 1820 ver Fontana, (1971) ob.cit.cap V.

¹⁶ Durante el primer tercio del siglo XIX, el pronunciamiento, (entendido como un tipo de golpe militar, surgido de una conjura en que los militares han participado, pero no solos sino alentados y hasta dirigidos por civiles), no constituyó un fenómeno particular de España, sino que sus rasgos esenciales se manifestaron también en otros países de Europa durante esta misma época. Sanchez Mantero R, Las conspiraciones liberales en Francia (1815.1823), Sevilla 1972.

¹⁷ Aunque se trate de un acontecimiento eminentemente político, las revoluciones no se producen en el dominio aislado del poder del Estado, al margen absolutamente de la organización social. Al contrario, los procesos sociales que se desarrollan en el entorno de un Estado afectan también profundamente a la perspectiva y naturaleza de la revolución, pero lo hacen indirectamente. Cfr., Ch. Tilly. ob.cit. Cap.1.

internacional inicialmente propicio. No hay que buscar en la economía¹⁸ las raíces de la revolución sino que, como trataremos de explicar, tuvo un carácter eminentemente político¹⁹.

El éxito del débil movimiento revolucionario en nuestro país se debió, entre otras circunstancias ²⁰, a que contábamos con un Estado dramáticamente debilitado²¹, un ejército democratizado con serios motivos de descontento y los intereses comerciales que despertaban en Europa²² las

¹⁸ Es dudoso que las crisis económicas produzcan inmediatamente crisis históricas fundamentales, sólo pueden crear un terreno más favorable para la difusión de ciertos modos de pensar, de plantear y resolver las cuestiones, complican todo el desarrollo ulterior de la vida estatal. Gramsci, La política y el Estado moderno, Barcelona 1973.

¹⁹ Atendiendo la clasificación que propugna Smit sobre las teorías de los fenómenos revolucionarios. Las divide en dos grandes grupos : políticas y societarias, según que se centren en los fallos en el sistema político o en los cambios esenciales de la estructura social. Foster R. y J.Green (comps), Revoluciones y rebeliones en la Europa moderna, Madrid, 1972 .

²⁰ Existían las características consideradas esenciales para la caída del viejo régimen: pérdida de la capacidad coercitiva del Gobierno, desintegración de la élite dirigente, existencia de un mito revolucionario y pérdida de legitimidad del régimen. Sobre las situaciones revolucionarias ver Brinton, Anatomía de la Revolución, Madrid, 1962. y Stone, Theories of Revolution, World Politics, tomo 18, n°2, enero 1966.

²¹ Montesquieu es uno de los autores que, con más insistencia, pone en relación la duración y estabilidad de los estados con la fuerza de sus instituciones. Ver especialmente los capítulos I, VI y X de "Grandeza y decadencia de los romanos, Madrid, 1962. Para un análisis sobre el uso con "conciencia teórica" del concepto de decadencia Cfr.Morlino, Cómo cambian los regímenes políticos, Madrid, 1985.pág.74.

²² Si se desea conocer qué estados son susceptibles de sufrir una revolución, no basta con atenerse sólo al examen de su política interna, sino que resulta indispensable observar su posición en el sistema de relaciones entre los estados. En tal

colonias americanas²³.

Comprender la caída del régimen de Fernando VII bajo el empuje de un pronunciamiento militar fracasado, exige analizar la magnitud de la crisis en que quedó sumido el país a partir de los acontecimientos de 1808, y la debilidad del exhausto régimen monárquico absolutista instaurado en 1814. Comenzaremos, por tanto, haciendo referencia a los años de la Guerra de Independencia, y los cambios sobrevenidos en la estructura política, (desintegración del sistema y de sus gobernantes), económica y social²⁴ como consecuencia del impacto bélico. Proseguiremos describiendo las políticas, los acontecimientos y las decisiones del régimen absolutista, instaurado por Fernando VII a su vuelta del exilio, en la medida en que pudieron haber influido en que los representantes de grupos sociales importantes ²⁵ se

sentido conviene recordar que las guerras, (producto de las interacciones entre estados), han venido ejerciendo una poderosa influencia sobre las perspectivas revolucionarias

²³ Sobre las ambigüedades y ambiciones de la diplomacia inglesa hacia las colonias españolas, puede consultarse F.R.Chateaubriand, Memorias de Ultratumba, tomo II, Barcelona, 1982.

²⁴ La guerra, escribía Ortega, hace temblar en sus cimientos todas las aparentes inconvencionalidades... produce un tiempo alucinado y de visión irreal. Cométense los mayores errores de perspectiva... uno de ellos creer que las ideas puestas en primer término durante la guerra son las que regirán los años futuros. Ver El Espectador, T.I. Madrid, 1966.

²⁵ Los grupos más dispuestos a la rebelión no suelen ser los que sufren las peores injusticias, sin aquellos que por su situación social, económica, organización y conexiones políticas están dotados de mayor poder. Lo que las investigaciones han venido a mostrar, desde Tocqueville para acá, es que con demasiada frecuencia los movimientos populares han sido

sintieran inclinados a desafiar a ese régimen, y emprendieran actuaciones dirigidas a derrocar o provocar el hundimiento de la Monarquía absoluta²⁶.

1.3. La Guerra de Independencia.-

En mayo de 1808 la vieja maquinaria del Estado se hundió manifestándose, abiertamente, la crisis de la organización política del Antiguo Régimen. Aunque las expresiones que se han utilizado para describir este hecho varían, existe una coincidencia sustancial en reconocer la profundidad de la crisis. Entre los historiadores, Suárez refiere que estos sucesos " pusieron de relieve la debilidad interna de la monarquía"²⁷; por su parte Artola destaca "la quiebra total de las personas e instituciones representativas del Antiguo Régimen"²⁸, y un protagonista de los acontecimientos como Agustín Argüelles, rememorando lo ocurrido en mayo afirma que "estremeció y desquició la monarquía en ambos mundos, causó

constituidos, conducidos y apoyados no por los segmentos oprimidos de la sociedad sino por grupos que, además de tener mucho por lo que luchar, tenían algo con qué hacerlo. A.Tocqueville, (1969) ob.cit., Lib.3, Cap VI.

²⁶ En última instancia, como bien afirmaba Crick " las revoluciones tienen lugar usualmente porque los gobiernos se derrumban". Véase del autor citado, En defensa de la política, Madrid, 1968, Cap VI.

²⁷ La crisis política del Antiguo régimen en España, Madrid, 1958, pág.27.

²⁸ Ob.cit.págs. 103 y sigs.

una subversión total en el Estado que disolvió la sociedad"²⁹.

Si la estructura política de la Monarquía, que tan trabajosamente habían reparado los gobiernos ilustrados³⁰ durante el siglo anterior, se desplomó ³¹ fué porque se encontraba lo bastante corroída como para venirse abajo por el impacto de un accidente externo como la invasión napoleónica³².

Un planteamiento no simplista de "la sangrienta lucha en que tan justamente se vió empeñada la Nación" obliga a considerarla no sólo como una guerra nacional, sino también como un enfrentamiento en el territorio peninsular de las dos potencias hegemónicas - Francia e Inglaterra³³ -. Por otra parte, suele señalarse como una diferencia esencial de la acción antinapoleónica en España, - en relación con las demás guerras coetáneas-, el que no fué llevada a cabo por el

²⁹ Ob.cit.pág.87.

³⁰Ver Sarrailh J., La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, 1974.

³¹ Sobre la subsistencia de Imperios débiles, agobiados por el mal gobierno, véanse las reflexiones de Montesquieu ob.cit., cap.XXIII.

³² En un pasaje ya clásico Montesquieu señala: "...Si el azar de una batalla, es decir, una causa particular, derrumba un Estado, es que existe una causa general que pone a ese Estado en situación de perecer..." Ob.cit., pág. 116.

³³ Ver al respecto la interpretación de Woodward E. L, Historia de Inglaterra, Madrid 1982, Cap.14.

Estado sino por el pueblo³⁴.

El completo fracaso del aparato estatal, propició que el potencial revolucionario del pueblo³⁵ se pusiera de manifiesto en los primeros momentos de la insurrección³⁶. De ahí que suela señalarse como una de las consecuencias del conflicto bélico la creación de una situación revolucionaria, que contribuyó a impulsar el largo proceso de transición de la Monarquía absoluta al Estado liberal. Durante el reinado de Carlos IV había dado comienzo el drama que se desarrollaría durante medio siglo³⁷.

En nuestro país, por tanto, una crisis nacional general, dependiente de la crisis occidental³⁸, y ligada a un conflicto militar internacional desembocó en una situación revolucionaria. Después de tres siglos de indiferencia

³⁴ De interés los comentarios de L.Díez del Corral, en "El liberalismo Doctrinario" Madrid, 1973, págs. 486 y sigs.

³⁵ Blanco White refiriéndose a ese pueblo escribió, desde su exilio inglés, lo siguiente: "el carácter religioso que ha tomado la revolución es como una densa niebla que oculta y desfigura los objetos". En Cartas de España, Madrid, 1972, Carta 13.

³⁶ Sobre este aspecto puede consultarse con provecho la obra de Lovett, Gabriel H, ob.cit, págs. 160 y sigs.

³⁷ Apunta R.Herr que la desamortización de Carlos IV fué un acontecimiento capital en la transformación de la España del Antiguo Régimen. Ver Hacia el derrumbe del Antiguo régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV. Moneda y Crédito 118, Madrid, 1971.

³⁸ Una reflexión sobre la dependencia Europea de nuestras crisis y guerras cíclicas, en Murillo F., En que se trata de los hispanistas, Ensayos sobre Sociedad y Política II, Barcelona, 1988.

colectiva, señalaba Vicens³⁹, el pueblo iba a meter baza en los asuntos públicos. Aunque fueron las minorías, integradas por la parte más culta del país, quienes intentaron dar al "espíritu público el impulso y dirección que correspondía a tan ilustre empresa⁴⁰".

Entre las minorías del país existían profundas divergencias sobre la estrategia que había que adoptar para salir de la crisis desencadenada por la invasión. Por un lado se encontraban los denominados afrancesados, que temerosos de la revolución popular aceptaron las reformas y el cambio de dinastía aprobado por los reyes⁴¹ ; de otra parte los absolutistas, que rechazaban con la misma intensidad a Napoleón y sus posibles reformas ⁴² ; y, por último, los liberales, tan opuestos al invasor como el pueblo pero que repudiaban el régimen vigente hasta el momento de la insurrección y, por tanto, eran partidarios de reformarlo.

Fueron los liberales, herederos del espíritu ilustrado,

³⁹ J.Vicens Vives, "Aproximación a la historia de España", Madrid, 1970, pág.138. y "Noticias de Cataluña", Madrid, 1980.

⁴⁰ A. Argüelles, ob.cit, págs. 81 y sigs.

⁴¹ Los afrancesados repudiaban el régimen vigente hasta la insurrección, pero aceptaron por miedo a la revolución el cambio dinástico como instrumento para implantar pacíficamente las necesarias reformas, evitar el desastre de la guerra e impedir la pérdida de America. Véase H Juretschke, Los afrancesados en la Guerra de Independencia, Rialp, Madrid 1962.

⁴² F. Suarez rechaza que se pueda hablar en el absolutismo de una unidad monolítica y de una actitud de rechazo total a las reformas, ob.cit.

quienes aprovecharon la guerra, para emprender reformas inspiradas en la ideología del invasor⁴³. Ellos tuvieron la capacidad suficiente como para hacerse con el control de las Cortes Generales, -principal institución política en la nueva organización del poder-, y la habilidad necesaria para satisfacer con su programa las reformas solicitadas por un sector importante de la opinión pública⁴⁴. Como es sabido, el liberalismo español construyó durante la guerra napoleónica, las bases de una revolución burguesa, y acuñó toda la mitología llamada a incorporarse, irreversiblemente a la conciencia nacional.

Entre las medidas más importantes de la obra revolucionaria de las Cortes soberanas, reunidas en Cádiz a comienzos de septiembre de 1810, merecen citarse, por su indudable interés, los decretos sobre la libertad de imprenta (10 de noviembre de 1810); libertad de comercio (26 enero 1811 y 22 de marzo de 1811); abolición de la tortura y apremios (22 abril, 1811); incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la nación (6 de agosto de 1811); libre admisión en los colegios militares (17 de agosto de 1811); abolición del voto de Santiago (14 de octubre de 1812);

⁴³ El odio contra lo francés, les forzaría a plantear las reformas como una resurrección de las antiguas libertades castellanas destruidas. El Discurso Preliminar de la Constitución estaba plagado de alusiones a la restauración de las tradiciones y libertades patrias. Y Argüelles, insistirá en ese planteamiento en su Examen histórico, ob.cit.págs. 259 y sigs.

⁴⁴ Puede consultarse M.Artola,(1959) págs.287 y sigs y también A. Argüelles, ob.cit. pags. 196 y sigs.

reducción de terrenos comunes a dominio particular (4 de enero de 1813); abolición de la Inquisición (22 de febrero de 1813); protección del derecho de propiedad (8 de junio de 1813); libre establecimiento de fábricas (8 de junio de 1813). Junto a la Constitución política de la monarquía de 1812, estos decretos simbolizaban el contenido de la obra revolucionaria de la asamblea constituyente gaditana.

Aunque algunas de las medidas adoptadas por las Cortes generales y extraordinarias se justificaban alegando que era "muy urgente reunir fondos para sostener la sangrienta lucha"⁴⁵, o bien en razón a "los heroicos esfuerzos que los españoles de todas clases han hecho y hacen en las críticas actuales circunstancias de la patria contra sus iniquos opresores" ⁴⁶; otras, sin embargo, serían aprobadas por la asamblea legislativa argumentando la necesidad de "remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la Monarquía"⁴⁷.

A los dos años escasos de publicarse la Constitución de

⁴⁵El entrecomillado corresponde al Decreto de 22 de marzo de 1811, que regula la enajenación y venta de algunos edificios y fincas de la Corona, con el objeto de fomentar la riqueza particular y la general del Estado.

⁴⁶El entrecomillado pertenece al Decreto de 17 de Agosto de 1811, por el que se suprimen las pruebas de nobleza para el ingreso en los Colegios Militares.

⁴⁷El texto citado forma parte del Decreto de 6 de Agosto de 1811, sobre abolición de los señoríos, que en su artículo IV declaraba : "Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional (...)."

1812, y cuando en la mayoría de las provincias todavía no se habían puesto en práctica los decretos aprobados por las Cortes, regresaba el Monarca de su cautiverio y procedía a anular todo lo hecho en aquel célebre período. Años más tarde refiriéndose a este episodio afirmarí el diputado Domecq :

" (...) Un simple decreto suyo, bastó para encerrar en oscuras prisiones a los que más habían contribuido a aquel glorioso resultado (su regreso al trono) (...) ⁴⁸"

Sin duda la afirmación era tan eficaz como exagerada. Sostener semejante planteamiento implica otorgar al Monarca un poder superior al que posiblemente tenía y silenciar la actuación que, en el proceso de vuelta atrás, tuvieron los detractores del régimen liberal.

La crisis desencadenada con la invasión Napoleónica, obstruyó toda perspectiva de desarrollo normal del antiguo régimen. El levantamiento, la guerra y la revolución, produjeron una conmoción de la base social y política, ocasionaron transformaciones vitales en instituciones tan esenciales como el ejército y la iglesia y, en fin, acabaron engendrando una situación cualitativamente distinta a la situación anterior⁴⁹.

⁴⁸ El pasaje pertenece a su intervención durante las Cortes del Estatuto. Estamento de Procuradores, sesión 19 septiembre de 1834.

⁴⁹ La distinción entre crisis verdaderas y momentos tormentosos procede de J Burckardt, ob.cit. págs. 216 y sigs.

La crisis tuvo una función reveladora importante, sirvió para poner sobre la superficie los conflictos, las contradicciones y los puntos más sensibles de las instituciones, que en circunstancias normales no se manifiestan ⁵⁰. Pero además de ser una advertencia de los detractores del sistema, contribuyó a su supervivencia. En virtud de ese carácter ambivalente que poseen las crisis, sirvió a los partidarios del régimen para mantener, provisionalmente, el status-quo articulando soluciones de recambio para retrasar el cambio inevitable.

En efecto, las clases dirigentes tradicionales que habían perdido buena parte de su protagonismo durante la confusión de los años de guerra⁵¹, rápidamente adquirieron plena conciencia de la amenaza que el cambio operado representaba para sus intereses, de ahí que muy pronto pusieran en marcha el resorte reaccionario⁵². La cuestión metafísica de la soberanía fué uno de los pretextos utilizados por los enemigos del nuevo régimen para derrocarlo. Desde entonces se fué preparando la revancha de

⁵⁰Comenta Burckardt en sus " Reflexiones" que los períodos llamados "crisis" hacen época, en el sentido que marcan la culminación de un proceso y la inauguración de otro. Ver J.Buckardt, ibidem.

⁵¹ Lo común a todas las situaciones de crisis es que obstruyen las perspectivas de un desarrollo normal y, cuando finalizan, han engendrado una situación nueva, cualitativamente distinta de la situación antigua. Ibidem.

⁵² La expresión pertenece a Machado. Su reflexión sobre la reacción a fondo que sigue en España a todo avance de superficie, puede leerse en Juan de Mairena, Vol.I, Buenos Aires, 1968.

los "magistrados, prelados, grandes y militares "⁵³ que alertados por la crisis, conspiraron para recuperar nuevamente el poder ⁵⁴. Su estrategia se vió favorecida por la propuesta aprobada a instancias del diputado Capmany en las Cortes extraordinarias, según la cual los diputados no podían obtener empleo de provisión Real hasta un año después de cumplir su legislatura. Con esta proposición quedaron excluidos del Gobierno y de la Regencia todos los individuos que compusieron ese Congreso. Merece la pena recoger el comentario que durante la legislatura de 1822 hizo en las Cortes Argüelles ante una propuesta similar:

"(...) Si en este rasgo de desprendimiento se dió un ejemplo de desinterés que hará honor a sus virtudes (...) fué mayor el testimonio de que en la ciencia práctica del Gobierno no se habían hecho grandes progresos. (...) Así se vió que los primeros cargos recayeron casi siempre en manos de los enemigos de las reformas, (...) en las crisis políticas como aquella no se debió obrar como en las épocas de orden⁵⁵ (...)

Desde la perspectiva liberal, comentando la peripecia de

⁵³ Quintana, Cartas a Lord Holland, en Obras Completas, Madrid, 1946.

⁵⁴ La capacidad de la clase dirigente tradicional para organizarse y recuperar el poder en momentos de crisis, constituye una muestra de su envidiable vitalidad. Ver al respecto los comentarios de Gramsci en ob.cit. pág.117.

⁵⁵ D.SS. Cortes, sesión de 12 de marzo de 1822.

ese, (en expresión castiza), "movimiento en dirección inversa" diría Quintana:

"(...) En España al principio, cuando todos se contaban presa de Napoleón (...) clamaban por remedio. Más este celo se resfrió mucho luego que desvanecido el peligro se entró en la necesidad de sacrificar a la cosa pública las prerrogativas que cada clase disfrutaba⁵⁶ (...)".

Y proseguía describiendo quiénes integraban esos grupos y las razones de que no pudieran "acomodarse gustosos a las nuevas leyes" :

"(...) Ni el clero, que en cualquier orden liberal de cosas ve disminuirse su influjo y sus riquezas; ni los magistrados, que sentían desvanecerse la intervención que han afectado siempre sobre todos los negocios de gobierno y administración; ni los militares, que miraban como exclusivamente suyo el mando político de las provincias; ni los grandes, que iban a perder los privilegios que aun les duraban de la antigua aristocracia; ni los regulares, en fín, a quienes por necesidad se acortaría su ración y se disminuían su guarida ⁵⁷ (...)".

A pesar del sesgo ideológico del combativo escritor en

⁵⁶ Quintana, ob. cit. Carta 1ª.

⁵⁷ Ibídem..

el exilio, el texto puede servir para comprender las razones que llevaron a los partidarios del antiguo régimen, una vez pasada la contienda bélica, a dedicar sus energías al descrédito de la obra de las Cortes, y sus protagonistas, para recuperar así el control del poder que se les había escapado ⁵⁸.

Aunque no conviene exagerar el influjo de las conspiraciones absolutistas para entender la caída del régimen liberal, tampoco hay que olvidar las tramas, artificiosamente construidas, y las disparatadas acusaciones de republicanismo⁵⁹ dirigidas contra destacados dirigentes de las Cortes para desacreditarlos. En las primeras sesiones de las Cortes del Trienio, un diputado mencionó esta conspiración tan tosca, pero perfectamente adecuada para contribuir a la liquidación de la primera experiencia liberal:

"(...) Los enemigos del sistema constitucional forjaron el año 14 la ridícula farsa del supuesto general Audinot; y el incendiario periódico 'Procurador de la Nación y el Rey' publicó la (...) declaración voluntaria de este fingido personaje. Desde entonces se principió a extraviar la opinión

⁵⁸ Toreno refiere en su obra las tramas urdidas contra las Cortes al regreso del Monarca. Ob. cit.

⁵⁹ Se instruyó un gran proceso en el que se trató de probar que los principales promotores y fundadores de la Constitución tenían el proyecto de destruir la Monarquía y la religión católica, estableciendo en España el gobierno republicano y la tolerancia de todo culto. Un resumen en Quintana, ob. cit.

pública, y las gentes sencillas llegaron a creer que los liberales o amantes de la Nación y del Rey trataban de convertir (comisionados por Napoleón) la Monarquía moderada en república (iberiana) (...)"⁶⁰

Estas tramas estuvieron dirigidas a hacer odiosa la Constitución para la mayoría del pueblo, fervientemente monárquico y cuyo apego al texto de Cádiz - que desconocían - era escaso; perseguían, asimismo, el descrédito de los liberales y, de esta forma, contribuyeron a crear unas condiciones más propicias para garantizar el éxito de la conspiración, urdida por el Monarca y "los enemigos de la libertad"⁶¹, con el objetivo de derribar el régimen liberal y restaurar el régimen legítimo de 1808.

1.4. Restauración y revolución.

Un golpe de estado, llevado a cabo por el Monarca y los grupos sociales opuestos a las reformas de las Cortes, permitió a la Corona recuperar la soberanía neta y, en línea con la orientación política contrarrevolucionaria dominante

⁶⁰ El pasaje pertenece a la intervención del Diputado por Cuenca, García Page. D.SS, Cortes, sesión de 12 Septiembre de 1820.

⁶¹ Entre los que citaba Quintana a "prelados, magnates, militares, magistrados", añadiendo: "Todos se entendieron entre sí para poner en manos del Rey sin reserva alguna el poder y autoridad del Estado". Ob.cit.

en Europa, emprender el proceso restaurador. Según Argüelles, el trastorno del año 1814 fué posible gracias al ardid de que se valieron los enemigos de la Constitución presentando como aliciente:

"(...) Cortes, libertad de imprenta, olvido de lo pasado, y todo lo que en una célebre asamblea de Europa se presentó por un Ministro que quiso justificar aquella contrarrevolución, como sólidas bases de un Gobierno bien constituido. Aquellas promesas arrastraron a todos los que por desgracia jamás reflexionan ni se corrigen⁶² (...) "

La Restauración y su principio, la legitimidad⁶³, representaba - afirma Burckardt -⁶⁴ una reacción contra el espíritu de la Revolución Francesa. Supuso un intento de establecer en Europa formas de vida y de derecho anteriores y desterrar los logros más profundos de la Revolución. Fué en el Congreso de Viena⁶⁵, el primero europeo total de la

⁶² D.SS.Cortes sesión de 27 de marzo de 1822.

⁶³ Con la Restauración comienza la divergencia antitética entre la legalidad y la legitimidad. El llamado principio de legitimidad monárquico dinástica valió, hasta entrado el siglo XX, como la legitimidad por antonomasia. Para un resumen de la historia de las relaciones entre legalidad y legitimidad puede consultarse a C.Schmitt, Legalidad y legitimidad, Madrid 1971.

⁶⁴J.Burckardt, ob.cit. pág.248 y sigs.

⁶⁵ Sobre el Congreso de Viena y el "sindicato de monarcas" que fué la Santa Alianza puede consultarse a Nicholson H. ob. cit.

Europa moderna ⁶⁶, donde se formalizaría el proyecto Restaurador, poniendo la idea de Europa al servicio de una ideología política contrarrevolucionaria. Si la revolución francesa fué una revolución política que procedió a la manera de las revoluciones religiosas⁶⁷, la Restauración fué una contrarrevolución religiosa que procedió a la imposición de sus principios siguiendo la pauta de los viejos hábitos políticos⁶⁸. En Viena se consagró uno de los principios sobre el que debía descansar el nuevo orden social y político: la legitimidad.

El principio de legitimidad constituía una abstracción, que se esgrimía como ideal frente a la idea revolucionaria "francesa" y sus ideales abstractos de soberanía nacional, libertad e igualdad. Según sus postulados sólo eran soberanos legítimos aquellos a los que correspondía el Trono por herencia. El principio de la legitimidad, fletado y "hábilmente mantenido en circulación"⁶⁹ por Talleyrand para hacer frente a la crisis, explotaba la creencia compartida de que la mejor manera de luchar contra las nuevas ideas era apoyar las antiguas: el Trono y el Altar.

⁶⁶ La idea ha sido recogida de la obra de W.Naef, La idea del Estado en la Edad Moderna, Madrid, 1946, pág. 171 y sigs.

⁶⁷ Tocqueville (1969) ob.cit.Libro 1,cap.III.

⁶⁸ E, Kedourie, El Nacionalismo, Madrid 1985.

⁶⁹ Un ameno relato sobre el Congreso de Viena puede encontrarse en C.Brinton, Las vidas de Talleyrand, Madrid, 1966.

La idea de legitimidad tenía una naturaleza doblemente polémica; hacía referencia, en primer lugar, al sujeto de la soberanía: frente a la "usurpación" nacional, la dinastía histórica; y, en segundo término, hacía alusión al ejercicio del poder soberano: frente a un soberano limitado por la Constitución, defendía el postulado de que un rey legítimo no puede estar limitado por ninguna ley. El principio había sido concebido, originalmente, por Talleyrand con un propósito inmediato: restablecer a los Borbones y poner a salvo la Monarquía de Francia de las iras de los vencedores⁷⁰. La argumentación esgrimida giraba en torno a un planteamiento bien simple: la Francia revolucionaria, jacobina y napoleónica había sido culpable de la guerra; por tanto, la mejor forma de castigar la abominable idea revolucionaria era borrar esos veinticinco años y restablecer a Francia, en la medida de lo posible, en la situación de 1789, es decir que Luis XVIII gobernase un país tan próspero como Luis XVI. El principio que, según todos los indicios, no parece que el discreto Tayllerand se tomara demasiado en serio⁷¹, sirvió en cambio de base para edificar la construcción europea. Fué en París, donde los soberanos europeos de la Restauración invocando la Santísima Trinidad, sellaron un acuerdo retórico y en apariencia inútil, en el que proclamaban el contenido de su programa político conjunto:

⁷⁰ Ibidem.

⁷¹ De este viejo intrigante dice Brinton: "Pertenecía a una sociedad demasiado sabia, demasiado moderada para confundir la palabra con la realidad" Prefacio; Ibidem.

"(...) Determinación inquebrantable de seguir como norma de conducta (...) en la administración de los Estados (...) los preceptos de la religión(...)".

Partiendo de la idea de hermandad contenida en las Santas Escrituras, y de la consideración de Europa como nación cristiana, estos soberanos autoproclamados "delegados de la Providencia" constituyeron una Santa Alianza por la que se comprometían los tres monarcas contratantes (Austria, Prusia y Rusia), "unidos por lazos de fraternidad", prestarse "en toda ocasión y en todo lugar asistencia, ayuda y socorro". Así nació la Santa Alianza, como un intento ampuloso de sustituir la idea revolucionaria de fraternidad entre los pueblos por un nuevo concepto, según el cual la igualdad de los pueblos consiste en el sometimiento a los soberanos y "la felicidad de las naciones muy largamente agitadas" en el ejercicio de los deberes que el divino Salvador ha enseñado a los hombres"⁷². Lo que estas espléndidas declamaciones muestran es el modo en que las potencias europeas definieron la crisis: redujeron el problema de Europa a un asunto político y el problema político a una cuestión religiosa.

La proclama de la Santa Alianza adquirió mayor fuerza con motivo de la firma en París del Tratado de la Cuádruple

⁷² Se han entrecomillado las expresiones literales tomadas del texto del Acta de Constitución de la Santa Alianza firmada en París el 26 de septiembre de 1815.

Alianza⁷³ , en virtud del cual las cuatro potencias victoriosas convenían:

"(...) En renovar en épocas determinadas (...) reuniones consagradas a los grandes intereses comunes y al examen de las medidas que serán juzgadas más saludables para el reposo y la prosperidad de los pueblos y para el mantenimiento de la paz en Europa (...)" .

A partir de ese histórico momento, los soberanos de la Restauración pusieron en marcha la Europa de los Congresos: nuevo procedimiento colectivo de resolver los litigios. La fórmula ha sido percibida como el germen de las futuras organizaciones internacionales⁷⁴. El Tratado y la fórmula proporcionaron, en su tiempo, la cobertura jurídica que precisaban las potencias para decidir su intervención en los asuntos de cualquier país que estimaran constituía una amenaza para el nuevo orden político. En efecto, en sucesivos Congresos (Tropau, 1820; Laybach, 1821 y Verona, 1822), las potencias acordaron su intervención para hacer frente a lo que consideraban como situaciones revolucionarias, (en Italia y España), que ponían en peligro el principio de la legitimidad sobre el que se sustentaba el sistema.

⁷³ A este tratado, firmado el 19 de noviembre de 1815, se incorporaba Gran Bretaña. Además de la vigilancia de Francia y una alianza militar, se introducía una nueva práctica diplomática: los congresos como fórmula para resolver conflictos.

⁷⁴ Esta es la opinión que al respecto sostiene C. Bertier de Savigny, *La Restauración*, Madrid, 1980.

La ideología de la Restauración constituyó una estrategia defensiva, que en vez de responder a los nuevos problemas planteados por la revolución liberal, pretendía hacerles frente mediante un extravagante retroceso. El predominio en Europa de este planteamiento, que abordaba los problemas de un nuevo siglo con remedios propios del pasado, es una de tantas muestras de la profundidad de la crisis. La opción escogida por los dirigentes europeos puede ser percibida no tanto como un producto de las condiciones socioeconómicas, sino más bien como una muestra de la arrogancia y el resentimiento de las antiguas clases dirigentes. En fin, estas clases dirigentes europeas, que diseñaron el artificio de la Restauración quisieron devolver en un momento, valiéndose de la religión y por la fuerza, el respeto a las viejas Monarquías. Si aceptamos, con Burke, que el espíritu de innovación es generalmente resultado de un temperamento egoísta y una visión limitada, habría que admitir que fueron unos dirigentes generosos y de una imaginación exuberante.

1.5. La Restauración en España.

El programa de Restauración de Fernando VII estaba contenido en el Decreto de 4 de mayo. Considerando la orientación reaccionaria de las potencias europeas, es posible afirmar que, desde un punto de vista ideológico, los planteamientos del Monarca español no desentonaban con las

ideas y principios preponderantes en Europa y consagrados en Viena.

Por el mencionado Decreto, anulaba Fernando VII la obra de las Cortes, (más precisamente, la borraba, como si no hubiera tenido lugar), y proponía un programa de reformas. Contagiado el Monarca por el adversario político en su respeto a la ley, pero no hacia las personas, al tiempo que procedía a anular el Código sagrado en el que estaba encarnada la obra revolucionaria de los liberales gaditanos, procedía a desacreditar la "pretendida Constitución política de la Monarquía" desentrañando sus defectos ocultos y arremetiendo contra sus hipotéticos efectos perversos:

"(...) Una Constitución en que bajo falsas apariencias de libertad se minaban los cimientos de la Monarquía, se abría la puerta a la irreligión, y se suscitaban ideas cuya consecuencia necesaria era la guerra de los que por sus vicios o (...) su pereza nada tiene contra los que gozan de los frutos de su trabajo, del patrimonio de sus mayores o de los empleos debidos a sus servicios. Tales han sido en todos los siglos las resultas de las revoluciones populares, y las ocultas pero verdaderas miras de los promovedores de ellas (...) ".

Pero además de refutar su contenido, tachándola de despótica, antimonárquica e irreligiosa, aludía para fundar su anulación a sus defectos formales. En primer lugar "vicio

de legitimidad", es decir:

"(...) fué obra de personas que de ninguna provincia de la monarquía tenían poderes para hacerla (...)" ;

Pero por si no bastara con ese vicio haría otras referencias polémicas que pretendían desacreditarla, entre las que merecen citarse las siguientes :

"(...)La falta absoluta de libertad en las deliberaciones (...)"

o bien, que fué publicada :

"(...) siguiendo el mismo sistema empleado en las asambleas revolucionarias de Francia (...)" .

El programa de reformas, anunciado por el Monarca en el citado decreto, estaba en la línea de las solicitadas por el Manifiesto de los Persas⁷⁵. De algunas de las reformas prometidas, entre ellas la pronta convocatoria de Cortes legítimamente congregadas, (que hubiera podido dar lugar a un régimen semejante al de la Carta Francesa y que, por tanto, hubiera tenido cabida en el sistema de la Restauración europea), el Rey hizo caso omiso, y la actuación del régimen

⁷⁵ Un análisis detallado del contenido de esa Contra-Constitución de 1812 puede leerse en F. Murillo. El Manifiesto de los Persas y los orígenes del liberalismo español, en su obra Ensayos sobre sociedad y política I, Barcelona 1987.

Monárquico legitimista estuvo dirigida, fundamentalmente, al restablecimiento de la organización política y social existente antes de estallar la crisis de 1808. De las Restauraciones europeas la de España fué la más intransigente⁷⁶. La vuelta del Rey, que no asistió a la guerra, fué hábilmente instrumentalizada para la reintegración completa del antiguo régimen.

El régimen se refugió en el mesianismo monárquico⁷⁷, como justificación última, y utilizó para sacar adelante su programa de lucha "contra las innovaciones peligrosas e inmaduras" métodos represivos⁷⁸. Esta política inmovilista y reaccionaria, que en el sentir de los liberales convertía al rey en "instrumento ciego de un bando implacable"⁷⁹, encontró en la jerarquía eclesiástica un aliado incondicional. La Monarquía, no dudó en demandar la colaboración de la Iglesia, como "los dueños de la opinión pública", en los términos siguientes:

"(...) Los tristes efectos de una invasión tan espantosa ... aún no han desaparecido, ni es de esperar que se borren

⁷⁶ Ver al respecto, Luis Díez del Corral, ob.cit. Cap.XXII.

⁷⁷ Ver Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, 1974, pág. 384.

⁷⁸ En virtud de real orden, durante las noches del 10 y 11 de mayo se iniciaron los arrestos de regentes, ministros, diputados de las cortes ordinarias y extraordinarias. Providencias que se extendieron en días sucesivos a las provincias. Ver al respecto, Torenó, ob.cit. págs.521 y sigs.

⁷⁹ Ibidem.pág.524.

por entero, si por todos los medios imaginables no dirigen a tan laudable objeto sus conatos todos aquellos que dueños de la opinión pública por sus talentos, virtudes y carácter pueden dedicar su influencia a instruir y rectificar las opiniones, y hacer conocer los verdaderos intereses tanto en lo espiritual como en lo temporal. El Clero español () nada a dejado que desear a su majestad en cuanto al primer objeto, fín principal de sus tareas (...) "⁸⁰.

La iglesia institucional proporcionó al régimen su legitimación religiosa⁸¹ contribuyendo, desde los púlpitos, a la mitificación de la figura del Deseado⁸². Además prestaría su valiosa colaboración en las tareas de represión política de liberales y afrancesados. Y a cambio, el monarca amparó a la iglesia dispensándole una atención especial⁸³. Pero esta intensa alianza pronto quebraría ante la precisión

⁸⁰ Circular del Ministerio de Hacienda 30 de septiembre de 1818.

⁸¹ El clero podía auxiliar poderosamente a su Majestad "instruyendo al pueblo sobre cuáles son sus verdaderos intereses tanto en lo espiritual como en lo material", Circular del M° de Hacienda septiembre de 1818.

⁸² Cuenca, J.M. Iglesia y burguesía en la España liberal, Madrid, 1979 pág. 17. Refiere el complejo tejido de la restauración política y la simbiosis de motivaciones de la Iglesia y Corona frente al enemigo común, subvertidor de un orden querido por la Providencia.

⁸³ Pintos Veites escribe al respecto que "en dos meses la estructura de la Iglesia... quedaba en forma idéntica a como había estado antes de la salida del Rey de la Península. en "La política de Fernando VII entre 1814 y 1820" Pamplona 1958, págs. 109-111. Entre las medidas concretas adoptadas : restablecimiento de la Inquisición, devolución a los regulares de sus conventos, propiedades y reposición de nuevo de todas sus prerrogativas. Ver también, J.M. Cuenca, ob.cit, pág. 75.

del gobierno de tener que recurrir, una vez más, a los bienes y privilegios de la Iglesia para reparar la máquina del estado ⁸⁴.

El régimen restaurado de Fernando VII tuvo que hacer frente a la desastrosa situación creada en el país a consecuencia de la guerra de la Independencia. La larga contienda había constituido una catástrofe de grandes proporciones, cuyas consecuencias duraron hasta los años cuarenta del siglo. La España que sale de la guerra estaba degradada como gran potencia, en trance de perder las Indias y asolada. Cuatro años después de la llegada del Monarca la situación del país seguía siendo pavorosa:

"(...) Destruídos por la guerra los capitales, disminuidos por consecuencia necesaria los productos, aniquilado el comercio y la industria, cerrados casi totalmente a nuestros frutos los mercados de América, privado el Erario por la defección de aquellos dominios de los cuantiosos ingresos que le reportaban, y aumentadas por consecuencia de las convulsiones políticas las necesidades verdaderas o ficticias, ⁸⁵ (...)".

Por un lado la estructura territorial de la nueva

⁸⁴ Fontana, ob.cit, Cap.IV.

⁸⁵ Circular del M° de Hacienda 30 septiembre 1818. Estaba dirigida a persuadir de la necesidad de arrostrar las dificultades de toda innovación y reformar el sistema de Hacienda.

Monarquía⁸⁶ había sufrido una alteración profunda, y por otro, la guerra ocasionó la pérdida de los mercados continentales y, como consecuencia la quiebra del comercio colonial, lo que equivale a decir todo el comercio exterior español⁸⁷. La dislocación por la guerra del complejo económico⁸⁸ que ligaba las economías peninsulares con los mercados ultramarinos imponía una política adecuada para compensar la nueva situación⁸⁹.

Por si fuera poco, el estado, además de haber sufrido una disolución extraordinariamente grave de la unidad política⁹⁰, se encontraba arruinado económicamente⁹¹ y

⁸⁶ Entendiendo por tal, con mayúsculas, no su acepción corriente de forma de gobierno, sino la clásica de unidades políticas distintas sometidas a un soberano común. Al respecto consúltese J.Mª Jover "España en la transición del siglo XVIII al XIX" en ob.cit.

⁸⁷ Fontana ob.cit (1973), págs.44-47.

⁸⁸ Como señala Vicens, la guerra de independencia "dejó el país en ruinas"; y la escisión de la mayor parte del Imperio colonial en América arrebató al país "uno de los elementos esenciales del mecanismo económico". Vicens Vives, La industrialización y el desarrollo económico de España de 1800 a 1936; en "Coyuntura económica y reformismo burgués", Barcelona 1969.

⁸⁹ Fontana ha analizado con rigor esta alteración en Ob. cit. (1971). Vid, cap.2.

⁹⁰ Díez del Corral, ob.cit, Cap.XXI.

⁹¹ La penuria del estado afectaba a ministros, miembros de la alta administración y empleados de los distintos ramos de la administración. Sobre el continuo clamor por falta de pagas véanse Pintos, ob.cit. pág.258, 298 y 339. y Fontana(1971), ob.cit. CapIV.

virtualmente colapsado en su organización administrativa⁹², como consecuencia de los años de la larga y costosa guerra. Así que, en plena crisis política y económica europea, con un país asolado y sin metales preciosos de América, los gobiernos de Fernando VII estaban obligados a hacer frente a una creciente partida de gastos si deseaban: asegurar la tranquilidad interior, reconquistar las colonias, asegurar el funcionamiento de la administración y liberarse de la agobiante deuda interior⁹³.

En un decreto publicado cuando la caída del régimen absolutista se encontraba próxima⁹⁴, hacía el Monarca un breve resumen de lo que había llamado su "paternal atención": la organización del ejército y de la armada, el arreglo de la Real hacienda, la administración de justicia, la decadencia de la agricultura, del comercio, y de la industria, que eran las tres fuentes de la riqueza pública. Y después de sintetizar su propósito:

" (...) He deseado con desvelo hallar los medios convenientes para restablecer el orden y el buen sistema en todos los ramos de la administración pública, y cicatrizar

⁹² A ese desorden e indisciplina generales en todos los ramos de la administración, incluso el militar, se achaca el fracaso de las reformas intentadas durante el sexenio y se atribuye el descontento. Véase Comellas, El Trienio constitucional, Madrid, 1963, pág.15.

⁹³ Fontana ob.cit. (1971), Cap.XI.

⁹⁴ Real decreto de 3 de marzo de 1820. Gaceta de Madrid, 4 de marzo de 1820.

las llagas que abrió en el cuerpo político del Estado una guerra destructora⁹⁵ (...) ".

Pasaba a mencionar una serie de razones que retardaron las más sabias y premeditadas resoluciones, refiriéndose en concreto a las siguientes:

"(...)Las circunstancias de Europa, las atenciones de nuestras descarriadas Colonias, la dificultad así en desterrar abusos, como también en reprimir innovaciones peligrosas⁹⁶ (...)".

La situación del país era de tal gravedad que colocó al Monarca ante la necesidad de dirigirse a Roma, solicitando le concedieran la facultad de cobrar un subsidio del clero. La Bula de Su Santidad de 17 de abril de 1817, puso fin al privilegio fiscal de la Iglesia, la Corona obtuvo la facultad de cobrar del estado eclesiástico un subsidio de 30 millones "en recompensa de la contribución directa que le correspondía satisfacer por los diezmos que posee". Pero la medida provocó el lógico descontento, creó una situación de conflicto entre ambas instituciones y dió lugar a reclamaciones de algunas corporaciones eclesiásticas, sobre la inexactitud de las evaluaciones de su riqueza. Gracias a estas reclamaciones consiguieron los eclesiásticos que se les rebajara la cuota

⁹⁵Ibidem.

⁹⁶ Ibídem.

a 25 millones. No obstante lo cual, el clero no se mostró bien dispuesto a colaborar, como lo prueba el hecho de que el débito a la Hacienda por este concepto era en marzo de 1820 de 20 millones ⁹⁷.

Tampoco parece que agradara a la Iglesia, en exceso, prestar su cooperación en cometidos de administración fiscal. La Monarquía contaba con una administración colapsada e ineficaz, por lo que precisaba de los servicios de la administración eclesiástica para aumentar su eficacia. Por Real orden de 26 de abril de 1818, el cura párroco más antiguo era designado como vocal de la junta encargada del reparto de la contribución⁹⁸. Más adelante, el Rey se volvería a dirigir a los curas párrocos y eclesiásticos, por medio de una circular, en la que después de condenar el "tenebroso sistema fiscal", declaraba su intención de restablecer las fortunas de sus vasallos sin hacer que el peso recayera sobre las clases infelices. El texto del escrito, por el que se les excitaba a concurrir a la formación del catastro⁹⁹ estaba concebido en los términos siguientes:

⁹⁷ D.SS. Cortes, sesión de 13 y 14 de julio de 1820, Memoria sobre los presupuestos, Secretaria de Estado de Hacienda.

⁹⁸ Real Orden de M° Hacienda de 26 Abril 1818 que desarrollaba el artículo 7 de la Instrucción de 1 junio de 1817. resuelve que el cura párroco más antiguo del pueblo sea ()el vocal de la Junta particular de contribución y repartimiento; pero si el reverendo Obispo de la diócesis diputare eclesiástico de su satisfacción puede este serlo con preferencia ()

⁹⁹ Circular de Ministerio de Hacienda de 30 Septiembre 1818.

" (...) El clero español (...) debe contribuir a auxiliar poderosamente a SM en por la guerra como paralizadas por el tenebroso sistema fiscal(...). Si el Real Erario, aun en medio del vicioso sistema anterior ha podido salir de sus apuros pecuniarios a favor de las cuantiosas sumas que por otra parte entraban en sus arcas, sin reparar en la justicia o la injusticia de los medios, S.M. está muy lejos de volver a tales medidas. (...) El peso de las cargas públicas ya no serán exclusivamente para los hombros de la clase infeliz, pues los que sacan mayores ventajas del Estado están más obligados a sostenerle (...)".

Pero el espíritu de reforma que trasluce este escrito no convencería a los curas párrocos y eclesiásticos, quienes se resistieron a prestar su indispensable colaboración en actuaciones que, por percibir las como muy impopulares, no entendían que les reportara mucho provecho y sí, en cambio, un gran daño ante sus feligreses. Una buena muestra de ese rechazo a colaborar puede hallarse en la orden de Hacienda de agosto de 1819 cuyo contenido textual era el siguiente:

"(...) Ante la resistencia de algunos eclesiásticos a desempeñar el encargo de perito repartidor de la contribución(...) Se determina que los eclesiásticos, por lo honorífico y como contribuyentes, pueden ser nombrados por las Juntas locales peritos repartidores de la contribución general; pero sin obligarles a la aceptación si lo

resistieren (...) "¹⁰⁰.

El Secretario de Estado de Hacienda, Canga Argüelles, al presentar años más tarde ante las Cortes su Memoria con los presupuestos, resumía la situación del régimen absoluto con estas gráficas palabras:

"(...) La historia económica de la Nación española en los últimos seis años ofrece la imagen de la miseria del Erario(...)".

Y proseguía dando cuenta de las dificultades de todo tipo (guerra ideológica, insurrección de América, epidemias) que impedían al país salir de la desastrosa situación en que se encontraba sumido:

"(...) Apenas restablecida de los desastres que la guerra de la Independencia le había causado, y cuando el goce de la paz le aseguraba los medios de labrar su bienestar, fecundando los manantiales de la riqueza pública, la repentina aparición de Bonaparte en el territorio de la Francia; el proyecto tan costoso como infecundo de sujetar por la fuerza a los disidentes de América; la necesidad de apartar la introducción de la peste levantina en nuestro suelo, y la funesta propagación de fiebre amarilla en las Andalucías, comprometiéndonos en nuevos y costosos

¹⁰⁰ Real Orden de Ministerio de Hacienda de 28 de Agosto de 1819.

desembolsos, llenaron de luto a los pueblos, desconcertaron el plan de los tributos y derramaron la pobreza en las Cajas públicas, agobiando al Ministerio con la dura necesidad de hacer frente a obligaciones pecuniarias infinitamente superiores a la fuerza del Tesoro y a la posibilidad del contribuyente¹⁰¹ (...)" .

En la administración de hacienda, tan decisiva en ese momento, reinaba un completo desbarajuste. La escandalosa situación obedecía a falta de actividad en las oficinas, ocasionando inexactitud en los ajustes de los años 1815, 1816 y 1817, según parece debido a documentos detenidos, con grave perjuicio de la Real Hacienda¹⁰²; también existía informalidad de los Escribanos y Subdelegados de las dependencias de Rentas, que no expresaban:

"(...) Contra quiénes se han seguido, ni el fraude aprehendido, y ponen por reos nombres distintos de los que resultan en las causas" ¹⁰³ (...)" ;

Por último, no faltaba la simple corrupción, descubriéndose alcances crecidos contra los empleados en la

¹⁰¹ D.SS Cortes, sesión de 13 y 14 de julio de 1820. Memoria sobre los presupuestos de la Nación española y los medios para cubrir el déficit.

¹⁰² Orden comunicada por el M° de Hacienda, 7 de enero de 1818.

¹⁰³ Real Orden de Ministerio de hacienda de 27 noviembre de 1818.

recaudación¹⁰⁴. Esta última conducta, era percibida como "muy poco conforme con los sentimientos de los buenos empleados" y fué atribuida a:

"(...) La inmoralidad de unos, la indolencia y abandono con que los Jefes respectivos proceden en el desempeño de sus cargos(...)".

Es posible que los empleados de las oficinas de hacienda, que sufrían atrasos en sus haberes por la situación de penuria que padecía el país, trataran de resarcirse por su cuenta de los pagos que se les adeudaba ¹⁰⁵.

La miseria afectaba a todos los ramos de la administración, y muy especialmente al ejército, lo que añadía un estorbo más a los esfuerzos infecundos, para recuperar por la fuerza América. Una pintura atroz del alcance que tenía esta miseria en el Ejército fué hecha ante las Cortes, pocos años después, por alguien tan poco sospechoso como el Marqués de las Amarillas ¹⁰⁶, en estos expresivos términos :

¹⁰⁴ Circular de la Dirección de Rentas de 11 febrero de 1819. y Real Orden M° de Hacienda, 19 diciembre de 1819.

¹⁰⁵ La carencia de dinero repercutió hasta en las viudas del montepío ministerial, que desde 1815 sólo recibieron "catorce mesadas ." Ver Real cedula de S.M. de 4 de octubre de 1819.

¹⁰⁶ Se trataba del único Ministro del primer gobierno liberal de Fernando VII puesto por el monarca y que contaba con su confianza.

" (...) Cuando en los años de paz parecía que el ejército, descansando de sus fatigas y de las privaciones de todo género que sufrió con heroica constancia, debía disfrutar de los haberes que adquirió a costa de su sangre, se ha visto fatalmente sumergido en la miseria, y los progresos que en tan precioso tiempo debió hacer en su disciplina y su instrucción han sido obstruidos por las dificultades que a cada paso presentaba la falta de recursos, y el modo con que recibía los que se le asignaban; en general, no solamente han dejado de satisfacerse las gratificaciones correspondientes al vestuario, armamento, montura, remonta y demás indispensable para que ejército fuese disponible, sino que aun en la percepción de los haberes de oficiales y parte de la tropa se ha sufrido la escasez y el atraso hasta un punto extremo ¹⁰⁷. (...)".

Después de describir cuál era la situación general, pasaba el Ministro a detallar en su Memoria el penoso estado en que discurría la vida de los oficiales: :

"(...) Los oficiales, a media paga años seguidos, empeñados, oscurecidos, en la terrible situación a cada momento de no poder alimentar sus familias, imposibilitados de vestir como exige el decoro de su clase, dándose algunos por esta causa de baja para el servicio que no podían hacer

¹⁰⁷ D.SS. Cortes, sesión de 14 de julio de 1820. Exposición sobre el estado del ejército leída por el Secretario del Despacho de Guerra.

en su penoso estado, han debido en efecto de toda la virtud que tienen acreditada para conservar como conservan el amor a su carrera¹⁰⁸ (...)" .

Y aunque al comienzo de su exposición había advertido el Secretario del Despacho de la Guerra que no pretendía "afligir el ánimo de las Cortes" con una relación exagerada de las necesidades que había experimentado el ejército y que, por tanto, se centraría en :

"(...) Decir solamente aquello que baste para que se juzgue con acierto del valor de su sufrimiento, y de la urgencia de mejorar su estado¹⁰⁹ (...)" ;

no pudo evitar el Marqués de las Amarillas, al referirse en su extensa Memoria a la situación de la tropa mencionar unas condiciones verdaderamente patéticas:

"(...) Los soldados han estado desnudos, mal alimentados, dejando una parte de su reducido socorro diario para proveerse de alguna prenda de vestuario; privados en ocasiones de hacer el servicio porque se hallaban descalzos; mal asistidos de utensilio en sus cuarteles; sin cobrar sus premios; sufriendo todo lo que puede dar al hombre una idea desventajosa de su situación; y por fín, cuando obtenían la

¹⁰⁸ Ibidem.

¹⁰⁹ Ibidem.

licencia absoluta, tomaban en vez de sus alcances un papel sin crédito, pasando por la amargura(), de no recibir ni aun aquel escaso haber que con tanta honra, tantas heridas y tanta virtud ganaron en largos años de trabajos y vigiliass

¹¹⁰(...) ".

y para completar el cuadro agregaba más adelante:

"(...) En repetidas ocasiones ha faltado hasta la leña para guisar los ranchos(); y que en la plaza de Ceuta llegó a tal punto la desnudez del regimiento de Africa que fué preciso mandar que no saliese la tropa de sus cuarteles¹¹¹ (...)".

Después de una atenta lectura del contenido de este informe, que no requiere de mayores comentarios, es fácil entender, las dificultades en el reclutamiento y las numerosas deserciones que se producían¹¹². De las deserciones no se libraba el crecido cuerpo de tropas del ejército expedicionario, reunido en Andalucía ¹¹³, lo que

¹¹⁰ Ibidem.

¹¹¹ Ibidem.

¹¹² Para combatir a un tiempo una y otra el Supremo Consejo de Guerra emitió una Circular, de 26 de febrero de 1818 por la que se establecía : () Deberá admitirse a los pueblos los desertores que aprehendan y presenten por el cupo que les quepa en el presente reemplazo().

¹¹³Real Orden del ministerio de Guerra, de 25 de septiembre de 1819.

era extremadamente grave considerando la importancia que otorgaba el Monarca a ese ejército; hasta el punto que en medio de la penuria general el Rey había mandado lo siguiente:

"(...) Persuadido de que uno de los más importantes, ó tal vez el mayor de los servicios que en las actuales circunstancias pueden prestar (...) las beneméritas tropas es el de la pacificación de sus dominios de Ultramar, se ha servido resolver que las asignaciones que señalen (...) los militares destinados a sus familias, sean pagadas con preferencia a toda otra atención (...) ¹¹⁴".

A la vista de todo lo anterior, resulta comprensible que cundiera el sentimiento, entre algunos de los jefes del ejército expedicionario, de que no era una idea feliz ni una opción política acertada la decisión de que ese ejército se embarcara a América para luchar contra los disidentes y recuperar por la fuerza las colonias de Ultramar. En este contexto de indisciplina¹¹⁵, miseria y desnudez lo que resulta difícil de entender es que no se produjera una sublevación en aquel ejército. Sobre todo si consideramos,

¹¹⁴ Real Orden de Ministerio de Guerra de 10 de junio de 1819.

¹¹⁵De la importancia de las deserciones dan cuenta diversas medidas adoptadas como: Circular del Supremo Consejo de Guerra de 26 de febrero de 1818; Circular de 24 de febrero de 1818; Circular del consejo Supremo de 22 de abril de 1818; y en relación con el ejército expedicionario de Andalucía la Real Orden de 1819 incitando a las autoridades que persigan con mayor tesón a los desertores.

que se trataba de una institución democratizada; que en la situación de vacío de poder de los años de la contienda había adquirido un excesivo protagonismo en la política interna; pero además, en sus filas existía un profundo descontento por las recientes reformas.

La reforma se había emprendido para aliviar la carga que significaba el ejército sobre el erario. En virtud de esa gran reforma, en 1818 fueron suprimidos 10.000 oficiales y 100.000 hombres. El propio Marqués de las Amarillas reconocería, en su intervención ante las Cortes, el lógico descontento provocado por la reforma, y señaló que la causa se encontraba "en el modo" en que se realizó la reforma, ya que en palabras del Ministro:

"(...) Los oficiales no fueron colocados por mérito señalado ni aún por su utilidad, sino por la casualidad de ser o no reformado el batallón en que servían, y como sólo una parte de las salidas que se ofrecían a los oficiales ha tenido lugar, el cuadro quedó todavía muy fuerte y costoso
¹¹⁶ (...)".

Si recapitulamos sobre la situación del ejército, el cuadro no podía resultar más desolador; en primer término, una situación general de privaciones, falta de disciplina e

¹¹⁶ D.SS.Cortes sesión de 14 de julio de 1820.

instrucción, escasez y atraso en la percepción de haberes¹¹⁷; como consecuencia de la cual existía hasta la imposibilidad de alimentar a las familias, y esta circunstancia afectaba también a las familias de aquellos que prestaban sus servicios en pacificar las colonias de Ultramar¹¹⁸. Unido a todo ello, una reforma en la que los militares suprimidos se quedaban sin las salidas ofrecidas. Por tanto, no debe causar sorpresa que entre los miembros del ejército arraigara un sentimiento de indignación justificada ante injusticias concretas y se mostraran dispuestos a conspirar contra el régimen o, al menos, a prestar su apoyo a los partidos que prometían una reforma. De esta manera, no es extraño que entre los miembros de este ejército, que disponían de una apropiada estructura organizativa, un cierto nivel social, conexiones políticas, y que además de tener mucho por lo que luchar tenían algo con qué hacerlo, se reclutaran quienes se pusieron al frente del movimiento revolucionario.

En plena crisis política y económica europea, con un país asolado y sin metales preciosos de América, los gobiernos de Fernando VII tenían que remover muchos

¹¹⁷Real Orden de Ministerio de Guerra de 4 de septiembre de 1817 y de 29 de mayo de 1818, para que continúe el alojamiento que pesa sobre el vecincario hasta que los oficiales no perciban sus pagas.

¹¹⁸ Real orden de 19 de junio de 1819.

obstáculos si querían llevar a cabo, con éxito ¹¹⁹ su programa de gobierno. En las difíciles circunstancias por las que atravesaba el país resultaba excesivo intentar, a un tiempo, la organización del ejército y de la armada, el arreglo de la Real hacienda, la administración de justicia; y, de otra parte, atender la decadencia de la agricultura, del comercio, y de la industria, que eran las fuentes de la riqueza pública.

Como hemos podido ir viendo, el Monarca y sus Gobiernos no consiguieron tener éxito en su empresa de "cicatrizarse las llagas que abrió al cuerpo político del Estado la guerra", a pesar de contar desde los comienzos con la adhesión de la inmensa mayoría del pueblo y el apoyo interesado de instituciones y grupos sociales importantes. Como razones del fracaso de sus "sabias y premeditadas resoluciones" adujo el Monarca :

"(...) Las circunstancias de Europa, las atenciones de nuestras descarriadas Colonias, la dificultad así en desterrar abusos, como también en reprimir innovaciones peligrosas¹²⁰ (...)".

En su interpretación global del sexenio, Fontana señala la descabellada experiencia que intentaron los distintos

¹¹⁹ Real decreto de 3 de marzo de 1820. Gaceta de Madrid, 4 de marzo de 1820.

¹²⁰ Gaceta de Madrid, 4 de marzo de 1820.

gobiernos de Fernando VII¹²¹: levantar un España postrada y en ruinas dentro del marco político y social tradicional. Tenían que aumentar la recaudación de la hacienda, construir una marina, reconquistar América, fomentar el desarrollo agrícola, superar la crisis de las actividades comerciales e industriales y, todo ello, sin tocar en nada el marco intangible de la vieja sociedad ni molestar excesivamente a los privilegiados ¹²². En opinión del autor citado, los distintos ministros fracasaron porque no fueron capaces de elaborar políticas adecuadas para compensar las consecuencias de la nueva situación ¹²³, y permanecieron ciegamente aferrados al mismo género de política practicada cuando los mercados americanos absorbían la capacidad exportadora de la agricultura castellana y la industria catalana¹²⁴. En suma, acometer esa empresa respetando el marco del antiguo régimen era, en opinión del citado historiador, irrealizable.

Relatando la historia de esos años de restauración, el Ministro de Hacienda del primer gobierno liberal comentaba en su Memoria presentada a las Cortes:

¹²¹ Fontana. (1971) ob.cit., Cap.XI

¹²² Fontana, (1971). ibidem.

¹²³ Mientras los gobiernos británicos y franceses reaccionaron a las crisis de posguerra con políticas proteccionistas, el español abrió los restos del mercado colonial a las harinas extranjeras. Vid. Fontana, ob.cit.

¹²⁴ Además de continuar con la política de libertad de importación de cereales extranjeros hicieron una serie de catastróficas concesiones en relación a los mercados de México y las Antillas, Ibidem.

"(...) Varios fueron los arbitrios y nulas las reformas y las providencias adoptadas por el Gobierno para salir de tan triste posición¹²⁵ (...) "

Aunque tuvo el valor de disculpar, hasta cierto punto, la actuación del gobierno al reconocer :

"(...) porque la penuria general opuso estorbos invencibles al logro de sus intentos¹²⁶ (...) "

En su intervención resumía Canga el impacto que produjeron las reformas intentadas por los Gobiernos de la Restauración:

"(....) Pobreza, desolación y miseria fueron los resultados de los azarosos afanes del Ministerio en la época a que me refiero; y quejas y disgustos en los súbditos, e inquietudes alarmantes en los que debieran estar más sometidos, ha sido el cuadro lastimoso que presentó la Nación a principios del mes de Marzo ¹²⁷ (...) ".

Ninguna de las reformas emprendidas por los diversos Gobiernos de Fernando VII sirvieron para sacar al Estado de su penuria, ni al ejército de su miseria, y a la postre

¹²⁵ D.SS.Cortes, sesión de 13 y 14 de julio de 1820.

¹²⁶ Ibidem.

¹²⁷ Ibidem.

provocaron un profundo descontento en grupos sociales importantes que acabaría contribuyendo al éxito del movimiento revolucionario.

En efecto, existen abundantes testimonios sobre el descontento provocado a consecuencia de la reforma de la contribución, realizada por Garay en 1817¹²⁸. La reforma fué emprendida con el propósito de que el peso de las cargas públicas no recayeran sobre la clase más infeliz y, además, decía estar inspirada en la filosofía de que "los que sacan mayores ventajas del Estado están más obligados a sostenerle". El nuevo sistema de hacienda pretendía sustituir "la tortuosa astucia fiscal" por "principios de justicia distributiva"; sin embargo, sus resultados fueron contrarios a los previstos y el impuesto acabaría afectando no a los que eran más capaces de pagarlo, sino a los más incapaces de defenderse de él. Se atribuyó a un "defecto de organización"¹²⁹ el que "() la contribución todavía no está nivelada de provincia a provincia, de pueblo a pueblo y de individuo a individuo(...)". Consecuencia de ese defecto fué la queja más generalizada contra el sistema por su "desproporción y arbitrariedad de los repartimientos".

La impopularidad de la contribución general debió ser

¹²⁸Sobre la reforma de Garay, ver Fontana ob.cit. (1971), cap.V.

¹²⁹ Circular del Ministerio de Hacienda a las Juntas de contribución de 22 de julio de 1818.

tan grande que los eclesiásticos, con cuyo auxilio se contaba para la formación del catastro ¹³⁰, decidieron resistirse a que se les nombrara como peritos repartidores en las Juntas locales ¹³¹. El influjo de la reforma en el cambio fué reconocido durante las deliberaciones de las Cortes del Trienio. A la cuenta de la contribución general se cargó el éxito de la sublevación de Cabezas. Esta opinión, al menos, fué la que con matices defendieron la mayoría de los diputados de las Cortes :

"(...) Para mí es más que probable que el descontento general que causó la contribución fué una de las principales causas que influyeron en que la Nación se decidiese a libertarse a toda costa de los males que sufría con ella ¹³² (...)" .

En ese contexto de penuria y decepción generada por la reforma de la contribución hay que situar la indiferencia ante la caída del régimen mostrada por el pueblo y la Iglesia; aquel, porque en medio de su miseria, se les gravaba con contribuciones excesivas y que percibían como

¹³⁰ En este sentido véase la Circular del Ministerio de hacienda, de 30 de septiembre de 1818, excitando a los curas párrocos y eclesiásticos.

¹³¹ La resistencia, que debió tener cierta importancia, motivó la Real orden del Ministerio de Hacienda de 18 de Agosto de 1819, que determina que no se les obligue.

¹³² D.SS, Cortes sesión de 6 octubre de 1820, intervención de Calderón en la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda sobre contribución general.

arbitrarias; y los miembros de la institución eclesiástica, decepcionados por la incapacidad de la Corona en mantener su inmunidad fiscal al gravar al estado eclesiástico con 30 millones, en recompensa por los diezmos que poseería .

1.6. Conspiración y Revolución.

Se ha llegado a afirmar que la historia de estos seis años fué la de una conspiración permanente¹³³. Hablando sobre las conspiraciones y el grado de implicación del ejército en las tramas, manifestó a las Cortes un diputado por Cádiz:

" (...) Yo he sido revolucionario y conspirador para restablecer la Constitución, - diría Moreno Guerra- y desde 1º de Enero de 1819 teníamos ya (...) 25.000 hombres y un general de reputación, el Conde La Bisbal (...) una empresa tan grandes estuvo secreta cerca de dos años, el de 1818 y parte del de 19, hasta el 8 de julio, que nos vendió el malvado Sarsfield ¹³⁴ (...)".

Un mes antes de comenzar el pronunciamiento, Fernando VII se había dirigido a sus vasallos, por medio de una Real

¹³³ A. Derozier, "Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España", Madrid, 1978.

¹³⁴ D.S.S. Cortes, Sesión de 22 marzo 1821. Discusión del dictamen de la comisión especial encargada de informar sobre el estado político de la Nación.

orden, refiriendo las causas que impedían compensarles, como sería su deseo. Achacaba su fracaso en conseguir sus fines a " las repetidas convulsiones políticas " y la raíz de estas convulsiones la situaba en "la más escandalosa inmoralidad".:

"(...) El Rey nuestro Señor no ha cesado desde su restitución al trono de sus mayores de procurar con el mayor anhelo el bien de sus vasallos (...) con no menor afán en prodigar sus beneficios entre los muchos que durante su llorada ausencia habían defendido heroicamente la religión y la patria; pero por desgracia, el gran número de estos, y la escasez de un Erario agotado por la dilapidación a que por espacio de seis años estuvo entregada la nación, ha impedido la general recompensa(...) ¹³⁵ ".

El mismo texto, proporcionaba una descripción de estos "perturbadores del orden" :

"(...) Cruel enemigo del hombre en sociedad, hijo de la flaqueza humana, que como nacido entre el desorden de las pasiones no puede sufrir la ley ni la autoridad que las refrenan, no cesa de procurar medios que le conduzcan a sus depravados designios, haciendo a sus secuaces (creídos capaces de reformar al género humano), declarar la guerra a la religión, las costumbres y a la autoridad, sembrando para ello en juntas clandestinas, y entre los que no penetran el

¹³⁵ Real Orden de 8 de diciembre 1819.

veneno de las ideas y son los que se dejan arrastrar de la novedad, las máximas más erróneas y delincuentes¹³⁶ (...)".

Y finalizaba señalando la necesidad de llevar a cabo un remedio ejemplar para acabar con esa amenaza:

"(...) Si bien nunca puede faltar alguno que procure perturbar el orden con sus crímenes en todos tiempos, las reliquias de la revolución pasada en toda Europa ha aumentado tan considerablemente el número de estos reos que pide un remedio ejemplar¹³⁷ (...)".

Pero los repetidos intentos del Gobierno por contener a los perturbadores no sólo constituyeron un fracaso, sino que les incitó a persistir en la empresa. Al respecto, la Junta provisional nacida de la revolución decía en su manifiesto :

"(...) Para ahogar una revolución indispensable y manifestada siete veces en cinco años, adoptaron los medios violentos e impolíticos que la engendran en donde no existe y la precipitan donde está preparada¹³⁸ (...)"

El movimiento revolucionario fué conducido y apoyado no por los grupos sociales más oprimidos, sino por aquellos que

¹³⁶ Ibidem.

¹³⁷ Ibidem.

¹³⁸ Manifiesto de la Junta provisional a las Cortes, Madrid, 1820.

además de tener motivos por los que luchar tenían algo con qué hacerlo. De un lado, el Ejército reunido en Andalucía para hacer la costosa y mal preparada expedición de Ultramar:

"(...) Creía (el ejército) que enviarle a guerras sin gloria (...) era querer deshacerse de él como de un enemigo peligroso¹³⁹ (...)".

De otro, la burguesía comercial e industrial que, a partir de su definición de los nuevos problemas económicos de una España sin colonias, apoyaron el movimiento revolucionario llevado a cabo en nombre de la Constitución de 1812 ¹⁴⁰. La escuálida burguesía comercial e industrial, que hasta 1808 había prosperado con la explotación de las colonias, vivió en provechosa alianza con el Antiguo régimen. Cuando la pérdida de los mercados ultramarinos arruinó el sistema de tráficos, estos mismos comerciantes obligados a orientar su actividad hacia su propio país no pudieron eludir tomar partido acerca de la necesidad de reformas que facilitasen la articulación de un mercado nacional ¹⁴¹. Sus propuestas de reforma, que analizaremos con mayor detenimiento, perseguían remover los obstáculos que la supervivencia del antiguo régimen oponía al crecimiento general, liberando la fuerza productiva latente en una

¹³⁹ Ibidem.

¹⁴⁰ Fontana, J. ob. cit. cap XI.

¹⁴¹ Fontana (1971) ibidem.

agricultura dominada por manos muertas y mayorazgos, diezmos y derechos señoriales.

En consecuencia, la pérdida de las colonias y la crisis económica empujaron gradualmente a la burguesía comercial e industrial al campo del liberalismo revolucionario; se va a encontrar a la vez enfrentada al régimen político absolutista por su ineficiente política económica y combatiendo el régimen señorial, cuya persistencia obstaculizaba el progreso general y, especialmente, su propio progreso. Esta toma de posiciones en los órdenes económico y social, impuesta por la concreta coyuntura de la posguerra, vino a sobreañadirse a una ideología que a la sazón contaba con adhesiones también las clases medias e ilustradas del país (burocracia civil y militar, profesionales e intelectuales urbanos)¹⁴², y que oponía la Monarquía representativa de la Constitución de Cádiz a la Monarquía absoluta impuesta por Fernando VII al regresar a España tras la guerra de Independencia.

El liberalismo español que había conocido su gran ocasión histórica durante la guerra de la Independencia, en la posguerra encontró una plataforma social de contornos cada vez más precisos ¹⁴³. En su lucha contra el absolutismo, los revolucionarios liberales, contaron con una parte importante

¹⁴² Sobre sus precedentes ilustrados, Elorza A. La ideología liberal en la Ilustración española, Madrid, 1970.

¹⁴³ Jover, España en la transición del siglo XVIII al XIX, en Política, Diplomacia y humanismo popular, Madrid, 1976.

del ejército, y en algunos lugares del país, según parece, dispusieron de la alianza de los artesanos y el proletariado, que dependían de ellos y culpaban al antiguo régimen de la crisis ¹⁴⁴; en casi toda España tuvieron a su favor la expectante indiferencia del pueblo, campesino en su rebotante mayoría.

¹⁴⁴ Véase Fontana, Nacimiento del proletariado industrial y primeras etapas del movimiento obrero en :Cambio Económico y actitudes políticas, Barcelona, 1973, pág. 57.

C A P I T U L O 2

Capítulo 2. Gobierno Provisional.-

2.1. Revolución y Provincialismo.

En 1820 la "fábrica del despotismo se vino abajo de un soplo" ¹⁴⁵. La expresión utilizada por Galiano para referirse a la caída del régimen absoluto era ingeniosa pero inexacta. Porque pasaba por alto, de forma implícita, la larga serie de conjuras fracasadas que, con la inapreciable colaboración de las logias, habían venido brotando durante seis años en todas partes. Hasta el punto que la historia de esos años de restauración absolutista ha llegado a ser considerada como la de un complot permanente. Reflexionando sobre esta pasmosa facilidad con que se realizan, en apariencia, las revoluciones señalaba Arendt:

"(...) Ello se debe a que los hombres que las ponen en marcha se limitan a tomar el poder de un régimen en plena desintegración; en realidad, son las consecuencias, no las causas, de la ruina de la autoridad política(...)".

El enfoque que hace suyo Arendt es especialmente aplicable a nuestro país y puede ayudar a entender la caída,

¹⁴⁵ Se trata de un encendido discurso contra la Santa Alianza relatando el conflicto entre "el principio de la Soberanía Nacional, de donde nace la dicha de los pueblos y la estabilidad de los tronos y el principio del despotismo, que sólo trae la miseria y la inseguridad para el déspota mismo". D.SS. Cortes, sesión de 24 de mayo 1823.

después de seis años de conspiración, del régimen monárquico absolutista, en ruinas, en 1820. La cronología de los acontecimientos es conocida. El uno de enero parte del ejército expedicionario se pronunció por la Constitución en las Cabezas de San Juan. Conscientes de que el éxito de la insurrección peligraba si la opinión pública no se pronunciaba, una columna móvil comenzó a recorrer Andalucía, con el objeto de interesar a los pueblos en la causa que había tomado a su cargo la fuerza militar¹⁴⁶. Esta división, a cuyo mando estaba el coronel Riego, pereció por falta de auxilio¹⁴⁷. Ya estaba apagado el movimiento insurreccional y pronto a terminarse cuando tuvo lugar una "combinación dichosa de circunstancias"¹⁴⁸: el que fué designado como "glorioso alzamiento de las provincias", y la proclamación de la Constitución por el ejército que el Monarca había encargado de la represión de los conjurados.

¹⁴⁶ Los avatares de la columna fueron relatados por los ayudantes de dicho ejército. Ver San Miguel E, y Miranda de Grao, F. "Memoria sucinta de las operaciones del ejército nacional de San Fernando desde su alzamiento en 1° de enero de 1820 hasta el restablecimiento total de la Constitución Política de la Monarquía, Madrid, 1820.

¹⁴⁷ Años más tarde, rememorando los hechos comentaría Domecq: "cuando el ínclito Riego pasó por Medina, pueblo eminentemente patriota, en el convite en que se celebró su llegada, su brindis fué, todos lo saben, brindo por la indiferencia de Medina; tal era la oposición, el terror que aquel caudillo notaba, que le parecía un favor la indiferencia. Al atravesar por Málaga, ciudad célebre por su exaltado patriotismo, ¿qué hicieron sus habitantes?. Encerrarse en sus casas; cerrar las puertas y balcones. Su jefe de estado mayor el Sr. San Miguel claramente lo refiere: tocábamos todas las teclas; pero ninguna sonaba. D.SS, Estamento de procuradores, sesión de 19 de septiembre de 1834.

¹⁴⁸ El entrecomillado pertenece a la intervención de Domecq. Ibidem.

El influjo beneficioso del "provincialismo" fué subrayado varias veces en el curso de las sesiones de Cortes cuando debatían el proyecto de división del territorio:

"(...) Cuando en San Fernando sonó el grito de la libertad, aunque hizo sensación en la corte, creció cuando Galicia lo repitió, y acabó cuando Aragón se pronunció(..). Al provincialismo debemos dos veces nuestra independencia y nuestra libertad.(..) No al provincialismo aferrado en sus fueros y privilegios, sino al provincialismo hermanado e identificado con unas mismas ideas, unas mismas leyes¹⁴⁹ (...)".

En varios núcleos urbanos de la geografía peninsular ciudadanos pertenecientes a distintos grupos sociales proclamaron la Constitución de 1812 y, antes de tener noticia del juramento del Monarca, procedieron a cambiar las autoridades y crear Juntas superiores de gobierno¹⁵⁰. Sucedió en San Fernando, el día 3 de febrero; en la Coruña el 21 del mismo mes; en Oviedo el 29; en Zaragoza el 5 de marzo; en Tarragona el 8 y Barcelona el 10 en Pamplona el día

¹⁴⁹ El párrafo pertenece al discurso de Banqueri, diputado por Granada, oponiéndose al proyecto de división propuesto en que aparecían 51 provincias dividida en cuatro clases. Su oposición a las 15 provincias pequeñas obedecía al inconveniente que representan para la libertad.D.SS. Cortes extraordinarias, sesión 4 de octubre 1821.

¹⁵⁰ Un resumen de las quince Juntas provinciales, las actuaciones emprendidas y sus relaciones con la Provisional puede verse en el interesante estudio de Blanca E. Buldain, Régimen político y preparación de Cortes en 1820, Madrid, 1988.

16¹⁵¹. Conviene notar que, salvo la primera, se trataba de provincias muy alejadas en su mayoría del escenario de los acontecimientos. La Gaceta relatando lo sucedido en la ciudad de Tarragona decía:

"(...) El día 8 (...) a las nueve de la noche se declaró por la Constitución el regimiento (...) puso presos al gobernador, (...) y al coronel. El 9 se formó el regimiento (...), a las ocho se reunieron en la sala consistorial (...) jefes (...) agregados (...) canónigos, comerciantes (...) se instaló una junta (...) Concluido estos actos se publicó la Constitución¹⁵²(...)".

En Barcelona los acontecimientos discurrieron de forma diferente. Merece la pena recoger el relato que hizo sobre ellos uno de sus más directos protagonistas porque ilumina sobre el carácter que tuvo en muchos lugares el movimiento:

"(...) Aclamado el día 10 por el pueblo de Barcelona (...) mi mando se reduce a la parte militar, (...) mis disposiciones no se han excedido (...) y no me separaré de esta marcha (...) hasta aguardar la resolución del Rey (...) Impelido del deber en que he sido constituido por el cúmulo de las extraordinarias circunstancias, hago a VE esta

¹⁵¹ El Dictamen de la comisión especial sobre las Juntas Provisionales, incluye extrañamente a Pamplona, que proclamó la Constitución el día 16 y omite Tarragona; ver D.SS. Cortes, sesión 17 de septiembre de 1820.

¹⁵² Gaceta Extraordinaria de Madrid. 19 marzo de 1820.

manifestación para que sirva elevarla a noticia a S.M., acompañada de mis humildes respetos, y de la más solemne protesta de que ni he dado siquiera un paso para que se me revistiese del encargo que estoy ejerciendo, ni aspiro a conservarlo (...). Deseando que VE me comunique las órdenes que fueren más del Real agrado para que sirvan de norte en mis operaciones (...) ¹⁵³».

Desconociendo estos detalles de lealtad monárquica¹⁵⁴ y forzado por su definición imaginaria de los acontecimientos, el Rey poco predispuesto a correr riesgos, proclamó su decisión de jurar la Constitución política de la Monarquía el día 7 de marzo¹⁵⁵. Realizó el juramento interino el 9 de marzo ¹⁵⁶ lo que pudo ser interpretado como que el monarca sancionaba el "glorioso alzamiento de las provincias".

Para ponderar el impacto que el juramento de la Constitución por parte del Monarca pudo provocar, conviene

¹⁵³ Los partes que el 19 de marzo dirigió el teniente general D. Pedro Villacampa al Secretario de Estado y del Despacho de Guerra con motivo del restablecimiento del sistema constitucional en, aparecen en Gaceta de Madrid 23 de marzo 1820.

¹⁵⁴ Una de las actuaciones emprendidas por el Marqués de las Amarillas desde su Ministerio de la Guerra fué mediante orden reservada sondear el estado de opinión del ejército. Real orden de 7 de junio de 1820. Ver B,E.Buldain, ob. cit. p. 250

¹⁵⁵ Memoria del Secretario del Despacho de Gobernación, D.SS.Cortes, sesión del 11 de julio 1820.

¹⁵⁶ El discurso político oficial lo expresaba de esta forma : "el Monarca se apresuró a identificar su voluntad con la de sus súbditos". D.SS. Cortes, sesión de 17 septiembre de 1820.

tener presente que hacía escasos meses, Fernando VII se había dirigido a sus "amados vasallos" mencionando la necesidad de un remedio ejemplar contra los "reos perturbadores del orden", cuyo número había aumentado con la revolución de Europa. La descripción de estos reos se hacía combinando expresiones denigratorias de carácter moral con otras de naturaleza política:

"(...) Cruel enemigo del hombre en sociedad, hijo de la flaqueza humana, que como nacido entre el desorden de las pasiones no puede sufrir la ley ni la autoridad que las refrenan, no cesa de procurar medios que le conduzcan a sus depravados designios, haciendo a sus secuaces (creídos capaces de reformar al género humano), declarar la guerra a la religión, las costumbres y a la autoridad, sembrando para ello en juntas clandestinas, y entre los que no penetran el veneno de las ideas y son los que se dejan arrastrar de la novedad, las máximas más erróneas y delincuentes (...) ¹⁵⁷ ".

Poco tiene que ver este discurso con el que hizo el Monarca el diez de marzo de 1820. En su Manifiesto dirigido a la Nación, (memorable por el "marchemos francamente"), hacía alusiones a sus maduras meditaciones sobre las variaciones de "nuestro régimen fundamental", más adaptables al carácter nacional; y disimulaba la ausencia de argumentos para explicar su cambio de actitud y su disposición a andar

¹⁵⁷ Real orden de 8 diciembre 1819.

por la "senda constitucional", acudiendo a socorridas generalidades:

"(...) El progreso rápido de la civilización europea, la difusión universal de luces hasta entre las clases menos elevadas, la más frecuentemente comunicación (...) habían suscitado ideas y deseos desconocidos a nuestros mayores resultando nuevas e imperiosas necesidades, ni tampoco dejaba de conocer que era indispensable amoldar a tales elementos las instituciones políticas, a fin de obtener aquella conveniente armonía entre los hombre y las leyes (...) ¹⁵⁸ ".

2.2. Gobierno de la Junta Consultiva.-

Fernando VII "condescendió"¹⁵⁹ en la formación de la Junta Provisional de Madrid, que tomó el título de consultiva. La Junta estuvo integrada por diez personas "de la confianza del pueblo". En el decreto que notificaba su juramento y la existencia de la Junta, daba cuenta genérica de su cometido:

¹⁵⁸ El Manifiesto que abandonaba el tratamiento de vasallos y comenzaba con el de Españoles, apareció publicado en Gaceta extraordinaria de Madrid, doce de marzo de 1820.

¹⁵⁹ Es el término que utilizaban los integrantes de la comisión que redactaron el informe sobre las juntas provisionales, D.SS. Cortes, sesión 17 septiembre de 1820.

"(...)Todas las providencias que emanen del Gobierno hasta la instalación de las Cortes serán consultadas con esta Junta, y se publicarán con su acuerdo (...)".

Ninguno de los integrantes de este órgano provisional había sufrido represión durante el período de la restauración absolutista (1814-20), y algunos se habían visto agraciados por el favor real¹⁶⁰.

La Junta Provisional, dió a conocer de inmediato toda una serie de medidas arrancadas al Monarca : el decreto para el restablecimiento de los ayuntamientos constitucionales, el nombramiento de los jefes políticos superiores de las provincias, la reposición de las diputaciones provinciales que existían en el año 1814, mientras no pudieran elegirse otras¹⁶¹ . Todas estas decisiones eran indispensables para garantizar el gobierno interior del país y facilitar la realización de la elección de diputados de Cortes.

La Junta provisional, junto con el Monarca, el Gobierno y las Juntas de provincias¹⁶² , fueron los encargados de mantener el orden para poner en vigor la Constitución, "bajo la actitud imponente y armada del ejército de la Isla" y la

¹⁶⁰ Ver B. E. Buldain, ob.cit.

¹⁶¹ Gaceta de Madrid, 9 de marzo de 1820.

¹⁶² Durante el proceso revolucionario se vive en una situación no de doble soberanía sino múltiple, con el poder del Estado en manos de los moderados. Sobre las inaplicables etapas de la Revolución ver Brinton. ob. cit.

vigilancia de las Sociedades patrióticas. Coordinada y conflictivamente estas instituciones y asociaciones rigieron el país hasta la instalación de las Cortes y la puesta en vigor del entramado de poderes previsto por la Constitución. El Manifiesto dirigido por la Junta a las Cortes resumía los esencial de la estrategia :

(...) El movimiento del Ejército y del pueblo había sido sólo el relámpago precursor de la tempestad que amenazaba, (...) ¿cómo impedir su funesta impresión? Conteniendo la exaltación, y desarmando la arbitrariedad; guiando al Monarca por el camino de la ley, y al pueblo por el de la obediencia racional; (...) previniendo la explosión de la revolución¹⁶³ (...)." .

La pretensión de esta conducta moderada proclamada por la Junta era "hacer amable la causa de la libertad"¹⁶⁴.

Entre los protagonistas de este período provisional existió conciencia plena de la especificidad del momento por el que atravesaban. En primer lugar, tenían claro que la Constitución todavía no ejercía su imperio. La no vigencia de la Constitución durante el período provisional fué señalada por varios diputados con motivo de las deliberaciones sobre el dictamen de la comisión de infracciones de la

¹⁶³ Manifiesto de la Junta provisional a las Cortes, Madrid, julio de 1820.

¹⁶⁴ Ibidem.

Constitución, en la denuncia interpuesta ante las Cortes por el presunto arresto inconstitucional en Valencia del general Elío ¹⁶⁵:

"(...) Es necesario no confundir aquel período de revolución con una época tranquila en que ya ejercen todo su imperio la Constitución y las leyes ¹⁶⁶ (...)" .

De manera más contundente comentó la especificidad de ese período de transición el diputado por Valencia Navarro. Intervino en defensa de la actuación de las autoridades y mostrando su opinión contraria a quienes solicitaban "los beneficios de una ley de que no son dignos". Después de expresar su irritación contra quienes se atrevían a interponer una reclamación ante las Cortes, en defensa nada menos que de Elío y denunciando a las autoridades de Valencia, por su presunta actuación inconstitucional insistió en su fogoso discurso sobre la generalizada inobservancia de la Constitución por todas la autoridades:

"(...) En el interregno desde el 9 de marzo hasta el 9 de julio últimos no hubo otra regla que prescribiese la debida marcha a los funcionarios públicos, más que las

¹⁶⁵ La comisión sustentaba una opinión favorable a la formación de causa contra el juez de primera instancia y el auditor que procedieron al arresto del teniente general Elío y otros en Valencia.D.SS, sesión 6 septiembre de 1820.

¹⁶⁶ D.SS. Cortes, sesión de 6 de septiembre de 1820. Intervención del diputado Victorica.

disposiciones arrancadas por la anomalía y monstruosidad de las circunstancias al Rey, de acuerdo con la Junta provisoria (...) Cuando este poder central, todo bondad, (...) tuvo a bien prescindir de la vigorosa observancia de nuestra Constitución política, no se descubre razón ninguna legal que impusiese a las autoridades subalternas la necesidad de tomar un rumbo diverso¹⁶⁷ (...) ".

Pero fué el Calderón quien, sin descuidar el fondo del asunto, habló de la necesidad de comenzar infringiendo la Constitución para restablecerla. En su intervención, después de admitir que había existido infracción de la Constitución y las leyes, en la actuación del juez y el auditor que arrestaron a Elío señaló:

"(...) Una triste experiencia me enseña las agitaciones y apuros en que se halla un juez que desea el acierto; necesita quebrantar la ley muchas veces para evitar desgracias. La Constitución misma no se habría restablecido, sino a fuerza de infringirla: ¿cómo habría de ejecutarse en el primer tiempo de su restablecimiento? ¹⁶⁸ (...)".

La Junta provisional, órgano por quien el Jefe supremo del Estado se enteraba de la "verdadera situación de la

¹⁶⁷ Ibidem.

¹⁶⁸ Sobre el fondo del asunto, reconocía que había existido infracción de Constitución en el juez y el auditor, "pero se hallaron en circunstancias críticas que exigen indulgencia". D.SS. Cortes, sesión 6 de septiembre de 1820.

Nación"¹⁶⁹, era formalmente un "cuerpo consultivo", y sobre ella recayó el cometido de "ir dirigiendo la opinión pública por la senda de la razón y según los verdaderos principios constitucionales". Los diputados de Cortes, redactores del informe sobre las Juntas, refirieron las actuaciones llevadas a cabo por la Junta provisional para el mantenimiento del orden y la instauración del nuevo régimen:

" (...) Hizo a un mismo tiempo respetar las leyes en los momentos que más riesgo corrían de ser olvidadas, y removió los obstáculos que se oponían a la planificación del nuevo sistema ¹⁷⁰ (...)".

En términos generales, se podría resumir el contenido de su actuación señalando que repuso parte de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, participó en la designación del nuevo gobierno y adoptó las medidas dirigidas a facilitar la pronta reunión de las Cortes. Pero ese resumen, como pronto veremos, no hace justicia a la gran importancia de su cometido esencial: frenar el proceso revolucionario. El mencionado Manifiesto Regio del domingo 12 de marzo contenía un pasaje que anticipaba la estrategia de moderación que propugnaban quienes se habían hecho con el control del nuevo régimen:

¹⁶⁹ D.SS. Cortes, Dictamen de la comisión especial para examinar las Juntas Provisionales. Sesión de 17 de septiembre de 1820.

¹⁷⁰ Ibidem.

"(...) Confiad pues en vuestro Rey, que os habla con (...) efusión sincera (...) y el sentimiento íntimo de los altos deberes que le impuso la Providencia.(...) Guardaos de dejaros seducir por las falaces apariencias de un bien ideal, que frecuentemente impiden alcanzar el bien efectivo. Evitad la exaltación de pasiones, que suele transformar en enemigos a los que sólo deben ser hermanos, acordes en afectos como lo son en religión, idioma y costumbre (...) ¹⁷¹ ".

Sobre estas ideas de tranquilidad y moderación insistieron los periódicos cuando informaban de la opinión que sobre el advenimiento del régimen constitucional en España existía en el extranjero:

"(...) Los ingleses dicen (...) : contemplando lo que el pueblo y la milicia han hecho en los últimos dos meses, los hombres ilustrados de todas las naciones deben alegrarse del triunfo que coloca a la España en el rango que había perdido a los ojos de la Europa (...) si se reflexiona esta es una de las revoluciones más interesantes de cuantas han acontecido en tiempos antiguos y modernos ¹⁷² (...) ".

"(...) Los alemanes dicen: acontecimientos que acaba de mudar la faz de España y que ya no puede la censura ocultarnos, producen gran sensación, (...) mantienen la

¹⁷¹ Gaceta de Madrid, 12 de marzo de 1820.

¹⁷² El Conservador, n° 63, 28 de mayo de 1820.

fermentación que reina en la juventud alemana, revelan su poder y acaso su destino a esos numerosos ejércitos que junto al amor de la Patria y de la independencia nacional (...) la Alemania toda ve con admiración a aquellos altivos castellanos cuyo carácter no ha bastado a degradar siglos de abatimiento, romper sus cadenas, reconquistar su libertad, proclamarla y dejar al punto las armas a los pies del Rey, que abraza noblemente el partido de las leyes y declara no querer reinar sino por ellas. Creemos que en la disposición que están los ánimos, se debe mirar la revolución de España como el principio del movimiento general que va a poner sucesivamente a todas las naciones de Europa y a sus Soberanos bajo la poderosa salvaguardia de formas constitucionales¹⁷³ (...).".

La Junta Provisional puso mucho empeño en transmitir la sensación de colaboración estrecha con el Monarca, según parece también estuvo fuertemente condicionada por él. Mucho más débil fué, sin embargo, el influjo que sobre ella ejercieron las numerosas Juntas provinciales, erigidas antes y después de proclamarse la Constitución y que tanta desconfianza inspiraban a la Junta consultiva:

"(...) El aspecto de las provincias levantadas, que

¹⁷³ Ibidem. La intencionada selección de la prensa extranjera estaba sin duda dirigida a imponer la definición que interesaba sobre la realidad. A este respecto enmarcar la revolución de España en un pretendido movimiento revolucionario europeo contribuía a dotar a la revolución, en esos momentos iniciales, de una fuerza mayor de la que poseía.

habían formado sus juntas provisorias cada una de por sí, y cortada toda comunicación con el Gobierno, (...) amenazaba una escisión, o que tal vez levantase la cabeza la hidra del federalismo ¹⁷⁴ (...)" .

Las relaciones entre la Junta provisional y el Monarca atravesaron por situaciones tensas y conflictivas debido, fundamentalmente, a las resistencias del Rey a respetar unas reglas mínimas que facilitaran la actuación del gobierno provisional y que permitieran se llevaran a cabo las reformas que la instauración del régimen constitucional requería. Los miembros de la Junta realizaron, aparentemente, esfuerzos para que existiera un ambiente de colaboración. Así por ejemplo, no procedieron a la reposición de golpe de la legislación de las Cortes extraordinarias y ordinarias, que desarrollaban los preceptos constitucionales, sino que decretos considerados como importantes, iban apareciendo con una sorprendente parsimonia: el 10 de marzo quedó restablecido el decreto que suprimía el Tribunal de la Inquisición, el 15 de abril quedó restablecido el decreto de 8 de junio sobre el derecho de propiedad ; el 17 de abril el decreto de 11 de agosto de 1811 sobre incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la Nación. Algunos diarios llegaron a arremeter contra la Junta por lo que entendían era un modo de proceder inadecuado:

¹⁷⁴ Manifiesto de la Junta provisional a las Cortes, Madrid, 1820.

"(...) ¿El Gobierno actual en el hecho de jurar la Constitución que formaron las Cortes, no aprobó y reconoció la legitimidad de las Cortes extraordinarias y ordinarias? ¿En el hecho de jurar estas leyes fundamentales no se sujetó a la obediencia de las que de ellas emanan, como son todos los decretos dados por las mismas? (...) Luego ¿por qué no se declaran tan vigentes todos los decretos correspondientes a España? ¿Por qué estos decretos se han de sujetar al escrutinio, vista, examen y propuesta de una junta provincial provisional? monstruosísimo es a la verdad que hayan de salir estos decretos de uno en uno, como si estas leyes expresas, emanadas de las fundamentales y constutuidas por la misma autoridad nacional extraordinaria hubieran de estar sujetas a la sanción del Rey ¹⁷⁵ (...)".

De otra parte, la Junta llegó a admitir que el Monarca en el mismo decreto que nombraba los jefes políticos, convocaba elecciones municipales y suprimía el tribunal de la Inquisición, hiciera alarde de su poder:

"(...) Deseando que se establezcan desde luego todas las instituciones que derivan de la Constitución política de la monarquía que he jurado, y que deben contribuir a consolidar más firmemente sus bases, he juzgado que para dar el debido pleno efecto a lo que prescribe el art. 371, de la

¹⁷⁵ El pasaje pertenece al artículo titulado "Reflexiones critico políticas sobre el Gobierno", aparecido en La ley n° 13 martes 16 de mayo 1820,

Constitución misma relativo a la libertad política de la prensa, me consulte la Junta provisional cuanto crea oportuno acerca de la ejecución de los reglamentos promulgados sobre esta materia por las Cortes ¹⁷⁶(...)".

Esta actitud deferente de la Junta no consiguió evitar que se produjeran enfrentamientos. Los conflictos estuvieron motivados por razones diversas: el retraso del Monarca, de dos semanas, en la comunicación oficial a las potencias europeas del cambio de régimen¹⁷⁷; la tardanza de un mes en proceder al nombramiento del nuevo Gobierno¹⁷⁸; la pretensión inusitada, formulada por medio de su Ministro de la Gobernación García de la Torre, (no cesado a pesar del cambio de régimen), de que la convocatoria de Cortes se realizara no según las normas de la recién proclamada Constitución política de la Monarquía, sino atendiendo el procedimiento que recomendaba el extinto Consejo de Castilla. De ahí que entre los obstáculos que tuvo que remover la desconcertada Junta se encontraban el nombramiento del nuevo gobierno y todo lo relacionado con la pronta convocatoria de las Cortes. El Rey había mandado que se celebrasen pronto Cortes el mismo día 9 de marzo en que juró la Constitución; y tuvo que ser la Junta Provisional quien se encargara, el

¹⁷⁶ Gaceta de Madrid, 10 de marzo de 1820.

¹⁷⁷ B. E. Buldain, ob.cit., 384.

¹⁷⁸ El 8 de abril publicaba la Gaceta de Madrid el nombramiento de Agustín Argüelles como Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.

día 17, de proponer los medios para que se verificase la reunión deseada, siendo el día 22 de marzo, cuando se expidió el Real decreto de convocatoria¹⁷⁹.

Donde mejor se aprecia el influjo del Monarca durante el período de provisional es en la política de nombramientos. Se atrevió a imponer como nuevo Ministro en un puesto clave del Gobierno, la Secretaría del Despacho de la Guerra, a una persona de su entera confianza: el Marqués de las Amarillas. Actuando por su cuenta¹⁸⁰ el Marqués consiguió atraer la atención de la Junta. La dedicación principal del encargado de la cartera de Guerra fué adoptar las medidas más convenientes para frenar la revolución, entre todas destacó el licenciamiento del ejército de Andalucía, brazo armado del movimiento revolucionario. Sin embargo, no parece que sobre esta polémica iniciativa existiera desacuerdo con la Junta, aunque sí participaban del lógico temor a hacerla pública por sus eventuales repercusiones¹⁸¹. De ahí que esperaron hasta la disolución de la Junta y la instalación de las nuevas Cortes para proceder a su publicación.

¹⁷⁹ D.SS. Cortes. Sesión 17 septiembre 1820, Informe de la Comisión especial sobre las juntas provisionales.

¹⁸⁰ Sin conocimiento ni aprobación de la Junta cursó la orden de embarque de tropas y pertrechos a Ultramar, Buldain, ob.cit, p. 249

¹⁸¹ Muy pronto apareció un artículo en prensa sobre el asunto: "(...) Se necesitan tropas ..gente empeñada en la defensa de la libertad.. hasta la reunión de Cortes .., antes de deshacer el ejército defensor de la independencia, es preciso librarnos de las intrigas que se forman en los pueblos levíticos, por los asesinos de la libertad en 1814, y que temen la ley de 1820 (...)". El Conservador N°. 14 domingo 9 de abril 1820.

De una naturaleza semejante a la anterior fué la actuación, con firmeza y de espaldas a la Junta, emprendida por el encargado del despacho de Guerra en beneficio de la liberación del teniente general Elío , - artífice del golpe de estado de 1814, al regreso del Monarca-, que tenía "la odiosidad del pueblo" y había sido apresado y encarcelado en Valencia. La Junta quiso dejar claro que desconocía la actuación del Marqués de las Amarillas, y que no había tomado parte en ella. Llegando incluso a expresar su desacuerdo y asombro:

"(...) La Junta provisional hacía presente que aunque nada se la había consultado sobre asunto de tanta importancia, no podía persuadirse se hubiese expedido la Real orden de que Elío pasase de cuartel a Navarra, que ha producido fatales efectos y la alarma (...) ¹⁸² ".

Además de ocupar su tiempo en desbaratar algunos planes del encargado del despacho de la Guerra, Marqués de las Amarillas, la Junta dedicó sus mejores esfuerzos en no decidir sobre asuntos especialmente polémicos, frenar las iniciativas existentes en las Juntas de provincia, apagar el entusiasmo popular y enfriar a las Sociedades Patrióticas. Decididos a que "los extravíos de la exaltación" no pusieran en peligro los cimientos de la libertad, no dudaron un

¹⁸² El texto pertenece a la exposición enviada por la Junta al Ayuntamiento de Valencia.D.SS. Cortes, sesión 4 octubre 1820.

momento en proceder contra los autores de escritos ¹⁸³ que arremetían contra las decisiones adoptadas por el Ministro de la Guerra. La prensa radical refería al respecto:

"(...) Impunidad de los asesinos de Cádiz (...) confinamiento y separación de oficiales decididos: Empecinado, Alejandro O'Donnell, Mina (...) fueron causa de la representación que hicieron al gobierno los del pueblo que asiste a las sesiones del café de Lorencini, y aunque estamos lejos de defender el modo o forma de dirigir la queja (...) no apoyaremos el atentado del Gobierno contra la seguridad individual(...) ¿si hubieran sido obispos se les habría guardado las consideraciones¹⁸⁴ (...)"

Como insinuaba la representación, se toleraba mal que la Junta al mismo tiempo que emprendía medidas contundentes contra las Sociedades, contemporizara en exceso con las incontinencias de personalidades significativas del régimen anterior, y no tuviera el menor inconveniente en mostrarse débil y permisiva con las actuaciones, palabras y silencios de significadas autoridades eclesiásticas.

Una de las actuaciones más polémicas de las adoptadas

¹⁸³ La prensa recogía esta información: " En estos días han sido procesados varios individuos de la reunión del café Lorencini, por haber tomado la voz del Pueblo en una representación firmada por centenares de ciudadanos, contra el ministro de la Guerra. Ver La ley n° 16 viernes 26 de mayo.

¹⁸⁴ Ver La Ley n° 16, 23 de mayo de 1820.

por la Junta fué el acuerdo que sobre el asunto de los diputados firmantes de la representación de 4 de mayo de 1814, los denominados persas. Según informó el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, la opinión pública venía manifestando su disgusto al Monarca, por no haberse tomado determinación alguna con los Diputados de las Cortes ordinarias que firmaron el manifiesto presentado al Rey en Valencia. Contra estos diputados, a los que se culpaba de ser los autores del trastorno del sistema constitucional en aquel año, se manifestaron también varias comisiones de reuniones patrióticas de Madrid. Varias veces comparecieron ante el Rey para pedir que los pusiera en prisión. La salida que se dió a este negocio importantísimo tiene interés porque define bien el espíritu de moderación que impregnaba a la Junta:

"(...) Mas por la Constitución pertenecía sólo a las Cortes mandar esa diligencia. (...) Sin embargo, los clamores y explicaciones se redoblaban para persuadir la perniciosa influencia que causaban en los ánimos de muchos la presencia en el público de los referidos Diputados, y la que creían habrían de tener en las elecciones de los individuos de las presentes Cortes. (...) S.M., se sirvió decretar, oído el dictamen de la Junta provisional, que hasta la próxima reunión de las Cortes, a quienes toca exclusivamente juzgar de los delitos(...), les asignen para su permanencia los monasterios o conventos (...); no comprendiendo en esta medida de seguridad a los Rdos. Obispos por el justo respeto que

merece su alto carácter (...) ¹⁸⁵ ".

Aplazar decisiones importantes alegando que había que aguardar la vigencia de la Constitución podía constituir una excusa, pero no fué aceptado como un buen argumento; y menos procediendo de una Junta provisional cuyo poder tenía su origen en un acto de fuerza.

La prensa más radical insertaba en sus páginas artículos que reflejaban la decepción que ocasionaba, en algunos sectores del país, la fórmula de cambio adoptada :

"(...) Parece que un hado fatal persigue a la generosa Nación (..) que un letal veneno circula por sus venas: el letargo más pesado acomete a los ministros luego que pisan la morada de los Reyes. (..) Las Secretarías se hallan llenas de hijos del favor, sin talentos, sin méritos (..) los tribunales (..) algunos sin aptitud (..). Tal es nuestra fatalidad que los mismos grandes hombres que en otro tiempo lanzaron rayos ardientes de patriotismo, los mismos que hicieron gustar el santo e inapreciable fruto de la libertad, en el día dormidos apáticos e indolentes nos hacen retrogradar nos inspiran desconfianza(..). ¡Tanto desanima el padecer por la patria; La Constitución sólo existe en nuestros corazones: para la Nación es en la actualidad una

¹⁸⁵ D.SS. Cortes, Memoria del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia leída en las Cortes en la sesión de 12 de julio 1820.

mera teoría que jamás llegará a estar en práctica en la actual crisis si el gobierno no se pone de buena fe al frente de la revolución ¹⁸⁶ (...)" .

La estrategia política que orientó la actuación de la Junta Consultiva fué evitar el trastorno que eventualmente pudieran producir los cambios. En su concepto, "la reacción de la libertad contra la opresión" (revolución) debía ser prudente:

"(...) Toda variación, o sea revolución, (...) sólo puede ser feliz cuando indicada por el pueblo, sea ejecutada por el Gobierno (...). La fuerza disuelta y tumultuaria de los pueblos no sirve (...) para establecer nuevas instituciones. Así pues, lo que necesitábamos era transformar el Gobierno pero no destruirle¹⁸⁷ (...)" .

Evidencias palpables de esta prudencia pueden hallarse en las medidas adoptadas en el importante ramo de la Justicia. El Informe elevado a las Cortes por el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, tratando de instruir a los miembros del Congreso sobre el estado en que se hallaban las Audiencias y juzgados, daba cuenta de la acción de la Junta dirigida a hacer amable la causa de la libertad a jueces y magistrados:

¹⁸⁶ El Conservador N°44. 9 de mayo 1820

¹⁸⁷ Manifiesto de la Junta provisional a las Cortes. Madrid, 1820.

"(...) La Audiencia de Valladolid continúa con los magistrados que la componían en el anterior sistema (...). En la de Granada, como en la que precede, (...) En la de Valencia se hallan suspensos de sus plazas el regente y cuatro ministros en virtud de providencia acordada por el ayuntamiento a instancia del pueblo (...), reintegrados en sus plazas los ministros que había en el año de 1814 (...). En Galicia ocurrió igual suceso, procediendo al arresto de cuatro ministros (...) En la de Mallorca continúan los ministros que la componían en el anterior sistema (...), pero se ha jurado la Constitución (...). La de Aragón, Cataluña, Asturias, Sevilla y Canarias continúan con los magistrados que tenían anteriormente ¹⁸⁸ (...) ".

Más adelante continuaba el Secretario del Despacho refiriendo las medidas adoptadas por el Rey y la Junta para adaptar la administración de justicia de los pueblos al sistema constitucional:

"(...) Deseando S.M que en los pueblos subalternos de las provincias se adoptase igualmente el sistema constitucional en el ramo de administración de justicia, tuvo a bien habilitar por decreto de 14 de Marzo último a los alcaldes mayores y corregidores para que interinamente, y con el título de jueces de primera instancia, continuasen ejerciendo

¹⁸⁸ Memoria leída en las Cortes por el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia. D.SS. Cortes, sesión 12 de julio 1820.

las funciones propias de tales jueces. (...) La habilitación de los corregidores y alcaldes mayores ha sufrido alguna alteración por el carácter de aquellos y por el estado y naturaleza de los pueblos. En algunos de los que fueron de señoría no permitieron que continuasen los alcaldes mayores (...); en otros los ayuntamientos constitucionales y el vecindario se declararon contra los jueces (...) ; y por haber cesado algunos de ellos fué preciso nombrar interinamente jueces de primera instancia en varios pueblos¹⁸⁹ (...)" .

Si atendemos al contenido de la intervención del encargado del Despacho de Justicia, hay que admitir que en este ámbito hubo, por parte de la Junta provisional, una propensión continuista indudable. La estrategia política aplicada en los momentos de desconcierto inicial, por conveniencia o para salir del paso, fué aceptada por asentimiento, por la mayoría de las ciudades y pueblos que contaban con Audiencias y juzgados. Aunque hubo excepciones en provincias, como las de Galicia y Valencia¹⁹⁰ , en que las presiones del pueblo contra sus magistrados, forzó que se produjeran cambios en las Audiencias; y pueblos de señorío, en los que los ayuntamientos o los vecinos se negaron a aceptar la continuidad y hubo que proceder a

¹⁸⁹ Ibidem.

¹⁹⁰ Las conspiraciones fracasadas, y consiguiente represión, en Galicia (Porlier) y en Valencia (Vidal), es posible que favorecieron esa mayor sensibilidad hacia los jueces en ambas ciudades. Un resumen de las mismas puede hallarse en Artola, España de Fernando VII, ob.cit.

nombramientos interinos.

Teniendo en cuenta el significativo papel que desempeñaron los jueces durante el anterior régimen, esta actuación de la Junta de "dejar todo como estaba" produjo desconcierto. Muy pronto aparecieron publicados en la prensa comentarios sobre la falta de energía de los artífices del cambio, el riesgo que significaba hacer la revolución con los agentes del absolutismo y mantener al frente de los tribunales a antiguos jueces y magistrados, esto es, de los que tiemblan ante el poder ejecutivo y distinguen para sancionar entre pobre y rico :

"(...) Nos hemos empeñado llamar revolución a la indolencia y la apatía, y generosidad al sueño de las leyes. (...) Entre tanto en España se sostenga la idea de consolidar la revolución con los mismos agentes que por necesidad se hallan acostumbrados al porte y máximas del régimen que se quiere abolir, y que por lo tanto carecen de la energía necesaria para sobreponerse al miedo, (...) y a su interés personal, caminamos tortuosamente a la libertad, o por mejor decir, rectamente a otra nueva esclavitud. Pongamos por ejemplo el poder judicial: ¿cómo es posible que servido ahora por los mismos jueces acostumbrados a una irresponsabilidad casi absoluta, a torcer las leyes según sus caprichos, a temblar delante de las órdenes de un Ministro déspota, y a hacer distinción entre aplicar las penas sobre los criminales entre el rico y el pobre, el grande y el

pequeño, puedan ahora prescindiendo de sus antiguas máximas y costumbres proceder con intrepidez.(...) No hay más que echar una ojeada sobre lo que pasa en Madrid en las causas formadas contra los enemigos de la Constitución (...), y los acalorados que en favor de ella salieron un poco de los límites del respeto. En tanto que los primeros se salvan, por locos unos y otros están tranquilos por inacción o miedo de los jueces, contra los segundos no se pierde un momento para sacarlos culpables¹⁹¹ (....)".

A favor de esta desconfianza hacia los jueces jugaba el recuerdo de sus manejos durante la experiencia constitucional anterior:

"Una de las principales armas de que se valieron los enemigos de la Constitución en el año 1813 y 14 para hacerla odiosa a los pueblos, fué la de persuadirlos que por aquella no podían ser perseguidos ni arrestados los delincuentes. La ignorancia de algunos jueces y alcaldes y la perversidad de otros (...) dieron margen a que ardiese por todas partes tan fausto error¹⁹² (...)".

La decisión de no hacer cambios y que persistiera el pasado, en bloque, en una institución de tanta importancia y en momentos tan críticos, acabó aniquilando la autoridad de

¹⁹¹ El Conservador, n° 62, 27 de mayo 1820

¹⁹² El Conservador n° 30, 25 de abril de 1820.

los magistrados y ocasionando el descrédito de la justicia. Como veremos más adelante, los absolutistas más radicales, llegaron a no temer las leyes porque los jueces les protegían contra ellas; los liberales más exaltados cesaron de respetarlas, porque ya no podían defenderlos.

2.3. Juntas de provincias.

Sobre las Juntas de algunas provincias, erigidas "por el entusiasmo del patriotismo", recayó la gran empresa de colaborar en el restablecimiento de la Constitución, conservando al mismo tiempo la tranquilidad pública y el respeto a las leyes. Según el discurso oficial, estas Juntas y las nuevas autoridades se encargaron de "velar sobre la conducta de los que se adelantasen a traspasar sus límites", y fueron, los órganos para hacer llegar a los oídos del Monarca los votos de unión y amor a su Real persona a la par de sus deseos. En el caso de las constituidas antes del juramento, presionaron para que el Monarca procediese pronto a la aceptación del Código constitucional.

Valorando las funciones que durante la crisis y a partir del juramento de la Constitución realizaron estas Juntas se llegó a afirmar en las Cortes lo siguiente:

"(...) A su celo, a su ilustración y al influjo de su crédito en la opinión se debe en gran manera la tranquilidad y el orden con que la Nación ha consumado sin violencia, y

sin abandonar la senda del orden, una revolución asombrosa, objeto de la admiración y aun de la envidia de los pueblos cultos de Europa ¹⁹³ (...)" .

Al constituirse las Juntas, las autoridades principales que gobernaban en algunas provincias fueron destituidas. La explicación dada sobre este hecho en las Cortes fué:

"(...) Ya porque sus ideas no eran conformes con las nuevas instituciones deseadas y proclamadas por los pueblos, ya porque los pueblos no podían tener en ellas la confianza necesaria en estos momentos tan críticos¹⁹⁴ (...)".

Estas destituciones no implicaban de suyo, en modo alguno, que se hubiera producido un vuelco en el control del poder y el acceso de una posible facción radical. El examen de las proclamas y las actuaciones emprendidas por algunas Juntas de provincias, como las de Barcelona y Zaragoza, impide afirmar que estos nuevos poderes, de creación y apariencia popular, fueran además una muestra palpable de exaltación revolucionaria. Ciertamente es difícil hablar de exaltación ante proclamas como las que dirigió a los catalanes su jefe político:

"(...) Con el entusiasmo propio de vuestro noble

¹⁹³ Memoria del Secretario del Despacho de Gobernación, D.SS.Cortes, sesión de 11 de julio de 1820.

¹⁹⁴ Ibidem.

carácter y la moderación que os distingue, os habéis pronunciado en este día por la Constitución política de la Monarquía española(..). No nos proponemos otra cosa sino el restablecimiento de nuestras leyes fundamentales, las cuales prescriben el respeto más profundo a la santa religión de nuestros padres(..). El amor al orden debe ser nuestra divisa en estas circunstancias extraordinarias¹⁹⁵ (...).".

Por su parte, en Zaragoza, el Capitán General Marqués de Lazán, que consiguió permanecer en su cargo poniéndose a la cabeza de la sublevación popular, manifestaba en su proclama:

"(...) Deberá contarse en los anales de vuestra gloria el día 5 de marzo, en que (..) jurásteis la observancia de un Código luminoso lleno de equidad y justicia, cuyo primer objeto es la religión santa que profesamos, y unir nuestra felicidad con los derechos del Soberano. (..) Sea vuestra moderación y generosidad objeto de la admiración pública ¹⁹⁶ (...)".

A la vista de lo expuesto, no sería correcto afirmar que el radicalismo fuera la nota característica de las autoridades que publicaron este género de alocuciones. Mas bien al contrario, lo que estos escritos evidencian es la

¹⁹⁵ Proclama dada el 10 de marzo por el Jefe superior y Capitán general de Barcelona D. José de Castellar. Gaceta de Madrid, 25 de marzo 1820.

¹⁹⁶ La proclama del 7 de marzo apareció publicada en la Gaceta de Madrid el 18 de marzo de 1820.

gran capacidad que poseían los dirigentes tradicionales para orientarse, contemporizar y frenar el movimiento popular en momentos de crisis. Por hábito y porque estaban mejor adiestradas, las antiguas autoridades que no se habían significado en exceso durante el régimen anterior, supieron en los momentos difíciles, mantenerse a flote y conseguieron encauzar el torrente sin correr excesivos riesgos.

Gracias al testimonio de uno de sus protagonistas durante los días de crisis, contamos con información de primera mano sobre la estratagema contemporizadora que seguían la autoridades, para no perder el control del poder:

"(...) Se notaba alguna inquietud, producida por la variedad de noticias funestas que habían esparcido sobre el estado de algunas provincias (...) El pueblo se hallaba en el mismo estado de fermentación, y todo amenazaba una revolución espantosa; se decía que la guarnición de esta plaza estaba decidida a la subversión (...). En momentos tan críticos llegó a mi casa morada el general (...) del ejército reunido Manuel Freire (...) queriendo observar la misma conducta de contemporizar, sin oponerse abiertamente al pueblo con una fuerza, de que no se podía tener confianza, se comisionaron algunos oficiales para que explorasen las voluntades con sagacidad, pidiéndose dilatase el rompimiento hasta saber el partido que seguía la Nación toda, y recibir las órdenes de la capital, de donde faltaban dos partes; (...) las noticias que aquellos oficiales adquirieron (...) que sólo se esperaba

la noche para romper los diques de la obediencia, y para poner la ciudad en convulsión. (...) Todo me convencía de la necesidad de tomar una providencia antes de que llegase la noche, que salvase a Cádiz (...); y pareciéndonos lo mejor salir a la plaza de San Antonio a invitar al pueblo reunido a que esperasen tranquilos noticias (...) empezó a hablar el general Freire, fué interrumpido con una aclamación espantosa y unánime de viva la Constitución, repitiéndose las voces con exaltación y júbilo (...) fué necesario ceder al torrente, y sólo se logró el sosiego con ofrecer al día siguiente sería proclamada la Constitución¹⁹⁷ (...)." .

Esta estrategia dual resultó un éxito probado en muchos casos menos en éste que, paradójicamente, sí contamos con la teorización de uno de sus protagonistas. El final del episodio de Cádiz no pudo ser más dramático. Merece la pena recoger en extenso el testimonio que sobre los sucesos desgraciados de Cádiz ofreció uno de sus protagonistas:

"(...) La noche fué alegre (...) se conservó el orden hasta las 11 de la mañana siguiente, que reunido en la misma plaza de S. Antonio para gozar (...) , apareció el batallón de guías del general, haciendo fuego con bala a la multitud. (...) Nos costó contener el ardor de la tropa (...) cometieron los excesos en que siempre incurre la soldadesca cuando les

¹⁹⁷ El parte del Capitan general del departamento de Cádiz Juan de Villavicencio está fechado en Cádiz 11 marzo 1820, y apareció publicado en la Gaceta de Madrid 21 de marzo de 1820.

falta el freno de la subordinación¹⁹⁸ (...)" .

No obstante la naturaleza moderada de la mayoría de las Juntas de provincia, la Junta provisional de Madrid intentó su disolución¹⁹⁹. Entre los argumentos que daba la prensa afín al Gobierno para apoyar esa medida destacaban dos: que no estaban prevenidas por la Constitución y el riesgo de anarquía. Ambos argumentos no produjeron la menor convicción y encontraron la réplica apropiada:

" (...) Injustamente reclaman algunos periódicos contra la organización y sistema de las Juntas Superiores de provincias, bajo el especioso pretexto de que no se hallan prevenidas en la Constitución y que apareciendo en la Nación otros tantos Gobiernos como provincias, nos hallamos expuestos a una anarquía; estas voces no son más que expresión de los enemigos de la Constitución, pues hasta que todo se halle ya establecido conforme a ella no puede observarse en nada: La Constitución es un sistema y un sistema se compone de relación de las partes con el todo, y mientras falten partes que plantear no hay todo, (...) no hay Constitución; (...), son tan necesarias las Juntas Superiores y tan constitucionales como que sin ellas ya no habría Constitución ²⁰⁰ (...) " .

¹⁹⁸ Ibidem.

¹⁹⁹ B. Buldain, ob. cit. p. 153. "

²⁰⁰ El Conservador n° 61 viernes 26 de mayo.

Las Juntas superiores de las provincias y algunas de las autoridades provisionales, constituidas o no en Juntas, hicieron uso de vastas competencias, como si cada una "fuese la única autoridad soberana de aquella provincia"²⁰¹. Decidieron actuar en su territorio con independencia de las indicaciones de la Junta Consultiva, el Monarca y el Gobierno. En temas de orden público (caso de Elío en Valencia), ejército (mantener el ejército sin licencia en La Coruña), impuestos (Cataluña, Málaga..), y libertad de imprenta (Cataluña, Valencia, Mallorca) se atribuyeron competencias y tomaron sus propias decisiones al margen de la Provisional. Por su importancia merece la pena atender las actuaciones realizadas en materia de impuestos.

El Rey de acuerdo con la Junta provisional, había decidido por un Real decreto de 13 (marzo) " que no se hiciese novedad por ahora en el sistema de contribuciones". La medida además de estar inspirada en el espíritu de continuidad que guiaba a la Junta, obedecía a que se consideraba imposible :

"(...) Sustituir momentáneamente a las que rigen (...) sin que se resintiese el Estado de la paralización que acompaña siempre al tránsito violento de un orden de cosas a otro (...)" .

²⁰¹ Ver al respecto la intervención del diputado por Cataluña Ginés Quintana en D.SS.Cortes, sesión de 3 de agosto de 1820.

Sin embargo el decreto, las Juntas provinciales no sólo manejaron a su antojo los fondos públicos, sino que decidieron introducir reformas en el sistema impositivo. Las medidas adoptadas por las autoridades al margen de la Junta provisional indujeron al Monarca a dirigirse a los ciudadanos:

"(...) He (...) visto con dolor por varias exposiciones(...) de intendentes de Cataluña, Málaga, Córdoba, Granada, Castilla, Asturias y otros pueblos se ha desestancado el tabaco (...) Por las noticias que llegan diariamente a este ministerio se ha enterado el Rey de que en la mayor parte de las provincias no solamente se ha desestancado el tabaco y otras rentas de la misma naturaleza, sino que no se pagan las contribuciones (...) S.M.^{no} puede mirar sin el mas vivo dolor atacada la subsistencia del Estado en su origen ²⁰²(...) "

Este modo de proceder impidió que el Gobierno, sin recursos, pudiera atender las necesidades generales del Estado. Además de la supresión de los derechos de puertas, -llevada a efecto en una gran parte de las capitales del Reino-, y el desestanco del tabaco, algunas provincias optaron por la rebaja de la contribución directa. El problema más grave que ocasionaron estas actuaciones, según opinión emitida meses más tarde por el Gobierno, fué que

²⁰² Gaceta, 1 de abril 1820.

contribuyeron a generalizar la equivocada opinión de que las nuevas leyes eximían a los pueblos del pago de los tributos. Lo que sí produjeron como resultado inmediato fué que los exigüos recursos del Tesoro quedaron disminuídos enormemente, "haciendo crecer sus estrecheces y aumentando el rigor terrible de los compromisos del Ministerio"²⁰³ .

Esta especie de "revuelta fiscal" del pueblo tenía su origen en el rechazo general que inspiraba un sistema impositivo que era percibido como injusto e insoportable. Es muy posible que cuando las Juntas eximían del pago de los impuestos en algunos lugares, se estaban limitando a autorizar lo que de facto venía sucediendo; mientras que en otros, como fácilmente se puede deducir de la lectura de la prensa, la medida pudo servir para obtener la adhesión del pueblo al nuevo régimen:

"(...) Al pueblo rudo e ignorante de sus derechos como es el español, no se le persuade con reflexiones, es menester estimularle por el interés porque esto está al alcance de todos y conviene con sus deseos. Si en las capitales se redujeran a una mitad los derechos de puertas, si se perdonara a los pueblos una parte de sus atrasos y rebajara otra aunque fuera pequeña en los tercios sucesivos, tendría el actual gobierno por el mejor del mundo, y cerrarían los

²⁰³ El pasaje entrecomillado pertenece al discurso del Secretario del despacho de Hacienda. D.SS. Cortes, 13 y 14 de julio de 1820.

oidos a las perfidas y codiciosas sugerencias de frailes y clérigos mal intencionados²⁰⁴ (...)".

Es comprensible que en la situación de penuria por la que atravesaba el país, los pueblos se dejaran persuadir por los discursos de quienes, interesadamente, hacían equivalente el advenimiento del sistema constitucional, con la supresión del pago de los tributos. Años más tarde, rememorando en las Cortes del Estatuto los años del Trienio, un procurador insistiría en ese planteamiento:

"(...) La idea más favorable que en 1820 tenían algunos pueblos de la Constitución fué creer que con ella no se pagarían contribuciones ²⁰⁵ (...)".

Según reconoció el Secretario del Despacho universal de Hacienda, los pueblos se resistieron a someterse a leyes fiscales, no derogadas aún, y como no pagaban sus impuestos, impidieron el giro de las operaciones, y pusieron al Gobierno:

"(...) En el apuro que nace de la escasez del Erario y de la imposibilidad de evitarle y de establecer un sólido sistema, mientras el augusto poder y la bien adquirida opinión del

²⁰⁴ El Conservador N° 29, 24 de abril 1820.

²⁰⁵ D. SS. Estamento de procuradores, sesión de 19 septiembre de 1834, Intervención de Domecq.

Congreso no remueva tan poderosos obstáculos (...) "²⁰⁶ .

Refirió también en su Memoria, el citado Ministro, las consecuencias que para el normal funcionamiento de la administración estatal representó esta resistencia institucional protagonizada por las autoridades de muchas provincias a los impuestos junto con:

"(...)la disposición adoptada por las provincias de invertir los rendimientos de sus rentas exclusivamente en sus obligaciones, prohibiendo se pague nada de lo librado a su cargo; de ello había de resultar la devolución de multitud de libranzas (...)ocasionaron el doble ahogo de carecer en la corte aun de lo necesario para sostener la guarnición, o a lo menos dejar desatendidas otras obligaciones (...) "²⁰⁷ .

El encargado del Despacho de Hacienda trató de transmitir en su discurso a las Cortes la gravedad del momento vivido y las medidas excepcionales que adoptó para salir del paso:

"(...) La necesidad era muy extremada, peligrosa la situación política del Estado, de muy funesta consecuencia los daños que debía producir la escasez de fondos me decidí

²⁰⁶ El entrecomillado pertenece a pasajes del discurso del Secretario del Despacho de Hacienda, D.SS. Cortes, sesión 13 y 14 de julio de 1820.

²⁰⁷Ver D.SS. Sesión de 13 y 14 de julio.

a valerme del crédito mercantil para el socorro de las obligaciones más ejecutivas del Erario (...) no existían las Cortes ni su Diputación, siendo imposible acudir a la autoridad legítima para salir del apuro. Las extraordinarias circunstancias del tiempo ¿no autorizaban al Gobierno para valerse de una negociación a fin de salir del paso, empeñando temporalmente una finca, así como las mismas circunstancias han dispensado el rigor de algunos de los artículos de la Constitución, porque observados con escrupulosidad no se hubiera verificado la reunión del Congreso?²⁰⁸ (...)"

En razón de su cargo el Secretario del despacho de Hacienda estaba impedido, formalmente, para dar otra interpretación de esos hechos. Es probable que la expresión hidra federalista, utilizada por la Junta consultiva, haya estado inspirada en estas decisiones perturbadoras de las provincias. Sin embargo es posible conjeturar que esta "hidra federalista" que invadió las provincias, y las correspondientes decisiones fiscales, adoptadas durante el período de la provisional, tuvieron algún influjo favorable en el restablecimiento del sistema constitucional.

Por último, conviene recordar que durante estos momentos de crisis y oscilación política, los poderes provisionales constituidos contaron con la inapreciable colaboración de las sociedades patrióticas y la presencia imponente del ejército

²⁰⁸ D.SS. Cortes, sesión 13 y 14 de julio de 1820.

de la Isla. Resulta sorprendente que el informe elevado a las Cortes por la Junta consultiva, con motivo de su disolución, para dar cuenta de las actividades realizadas durante su gobierno provisional, hiciera caso omiso de las Sociedades patrióticas.

Las Cortes fueron quienes se encargaron de reconocer la importancia de estas " asociaciones creadas por el celo patriótico sin la concurrencia de la autoridad, para sostener la vacilante opinión pública en los días de mayor crisis"²⁰⁹. Pero los elogios de la mayoría del Congreso eran sospechosos, estaban dirigidos a crear las condiciones favorables para que los diputados aceptaran que había llegado el momento de proceder a su supresión²¹⁰ .

En efecto, el dictamen elaborado por los enemigos del exceso de celo y las sociedades patrióticas, contenía un espacio dedicado a elogiar la labor que ejercieron antes de proceder a amordazarlas:

"(...) Las Sociedades patrióticas (...) cooperaron a preservar tal vez a la Nación de las reacciones ominosas, calmando la ansiedad de los leales, enfrenando las maquinaciones de los disidentes y templando la vehemencia de

²⁰⁹ Dictamen del proyecto de ley sobre libertad de discusiones políticas, D.SS.Cortes, sesión de 16 de septiembre de 1820.

²¹⁰ D.SS.Cortes sesión de 4 de septiembre de 1820.

los impetuosos; (...) forzando por decirlo así, en sus mismas trincheras a las autoridades precarias e interinas para que no se desviasen una sola línea de la senda constitucional²¹¹ (...)." .

De otra parte, la presencia imponente del ejército de la Isla y de las tropas que en distintas provincias se pronunciaron por la Constitución, proporcionaban tranquilidad a los partidarios de las nuevas instituciones²¹². Por el contrario, su licencia, disolución o traslado sembraba inquietud entre los liberales :

"(...) Nunca se necesitan tropas más que ahora, y no tropas así como quiera sino gente empeñada en la defensa de la libertad. En guardar su puesto cada soldado hasta la reunión de Cortes consiste su tranquilidad y la nuestra(..) antes de deshacer el ejército defensor de la independencia (...) es preciso librarnos de las intrigas que se forman en los pueblos levíticos, por los asesinos de la libertad en 1814, y que temen la ley de 1820, y de la vista odiosa de todos los malos. Los amantes del Rey y de la Patria no queremos sangre, calabozos ni presidios; pero tampoco la impunidad absoluta. Váyanse los malvados(..). El Gobierno puede haber sido engañado en esta última providencia porque aún ocupan sus principales empleos gente mala, pero la Junta

²¹¹Ver DD.SS.Cortes, sesión de 14 de octubre de 1820.

²¹² Al respecto intervención de Argüelles en D.SS.Cortes sesión de 7 de septiembre de 1820.

consultiva debió regirse por el espíritu de los hombres verdaderamente fuertes y enérgicos que componen las de Galicia, Aragón y Navarra etc., en las que en vez de licenciar tropas, han reunido y recurren para todo eventeo a las milicias nacionales ²¹³ (...)".

2.4.Convocatoria de Cortes ordinarias.

Por decreto de 22 de marzo de 1820 el Rey, de acuerdo con la Junta provisional, convocó Cortes ordinarias para los años 1820 y 1821 con arreglo a lo prevenido por la Constitución de 1812. El Manifiesto que la Junta provisional publicó con tal motivo, hacía referencia a la reunión de Cortes como " la medida más importante".

En relación con la convocatoria, la Junta provisional barajó, entre otras alternativas, restablecer las Cortes de 1814 disueltas por el Monarca o convocar unas Cortes extraordinarias. El restablecimiento de las Cortes del año 14 resultaba inviable, ante todo, por el rechazo que existía entre los diputados liberales hacia los representantes de aquella legislatura que firmaron el manifiesto del 12 de abril (los denominados persas). De haber sido más reducido el número de los "diputados persas", es muy posible que la

²¹³ Ver El Conservador N°. 14, 9 de abril 1820.

Junta provisional hubiera optado por el restablecimiento de las Cortes de 1814. La misma doctrina que utilizaron para justificar el restablecimiento del Consejo de Estado podía ser aplicada al respecto :

"(...) La cesación de la Constitución fué un acto violento y forzado, los cuales no pueden producir el efecto de los legales y ordenados.(...) La Constitución no fué destruida sino suspendida su observancia; y restablecida felizmente, lo han sido también las instituciones y los nombramientos de los funcionarios que de ella proceden²¹⁴ (...)" .

Los protagonistas del reciente cambio, excluidos de los centros de poder, defendían la opción de convocar unas Cortes extraordinarias. Quintana apuntó, para rebatirlas, las razones en que basaban su propuesta. En su opinión estimaban que ²¹⁵:

" (...) El Congreso nacional encerrado en los estrechos límites que marcan la Constitución a las Cortes ordinarias, no podía abarcar los objetos que tenían que tocarse después del trastorno del año 14 y los seis de despotismo que le

²¹⁴ Ver dictamen que la comisión primera de legislación efectuó en constestación a la proposición de 25 de agosto de 1820 del diputado Pérez Costa. En D.SS. Cortes, sesión extraordinaria de 5 de octubre de 1820.

²¹⁵ Ver de Quintana, Cartas a Lord Holland, en Obras Completas, Madrid, 1946.

siguieron(...)" .

Por tanto, el interés primordial de los pertenecientes a este grupo iba más allá de unas simples Cortes ordinarias limitadas en el tiempo:

"(...) Nos hallábamos en circunstancias críticas, (...) eran arduos los negocios que habían de tratarse, (...) por lo mismo las Cortes presentes debían haber sido no ordinarias, como por nuestra desgracia pensó (la Junta), sino extraordinarias ²¹⁶ (...) " .

En fín, alegando razones de coherencia y oportunidad políticas los miembros de la Junta se decidieron por escoger la convocatoria de Cortes ordinarias. En primer lugar coherencia con el pronunciamiento de Cabezas:

"(...) Que se había hecho a nombre y con la voz de la Constitución, ella sola y - continúa Quintana - sin límite ni restricción ninguna era la que habían jurado las provincias, los pueblos, las autoridades, el Rey ²¹⁷ (...) " .

²¹⁶ Ver panfleto de Romero Alpuente: Discurso sobre la urgentísima necesidad de Cortes Extraordinarias, Madrid, 1820. Entre los asuntos a tratar mencionaba Romero Alpuente: nuevo sistema de hacienda, organización del ejército permanente y de la milicia activa, arreglo de los eclesiásticos, señoríos, educación pública penas contra los infractores de la Constitución.

²¹⁷ Ibidem.

Por otra parte, si consideramos que el principal objetivo de los integrantes de la Junta Provisional fué, según parece, controlar el cambio e impedir que el movimiento iniciado derivara en el desencadenamiento de un proceso revolucionario, no resultaba lo más oportuno convocar Cortes extraordinarias. Existía temor a erigir, en Madrid una asamblea que en los momentos críticos que vivía el país, asumiera el encargo de "la pronta y gloriosa consolidación del sistema constitucional"²¹⁸ ".

Estando pendientes la celebración de las elecciones, y desconociendo cuáles iban a ser sus resultados, la convocatoria de Cortes extraordinarias equivalía a poner en peligro la aspiración de estabilidad, orden y tranquilidad. Quienes pensaban que la revolución ya estaba hecha, y creían que ahora sólo era preciso consolidarla, les infundía temor la equívoca propuesta de Cortes extraordinarias. El razonamiento lo expuso Quintana en los siguientes términos:

"(...)Unas Cortes extraordinarias(...) llevaban consigo la posibilidad de reforma(...) en aquella ley fundamental que nos había servido de áncora en la tempestad y bandera de reunión en el peligro, - añadiendo a renglón seguido- el partido entonces imperceptible de los que querían formas de libertad más amplias, el infinitamente más grande de los que no querían ninguna, hubieran tomado aquí su punto de apoyo

²¹⁸ Ver Romero Alpuente, ibidem.

para sus (...) intrigas, y ningún orden, ningún asiento de cosas se hubiera podido conseguir. ¿Quién había de imaginar que unas cortes ordinarias no fuesen bastantes a establecer sólidamente el gobierno sobre las bases constitucionales? Tales pues debían convocarse, y así lo fueron (...). Lo demás ¿no hubiera sido empezar de nuevo la revolución? ²¹⁹ (...)".

Como fácilmente puede deducirse de las palabras de Quintana, la política seguida por los miembros de la Junta Provisional, encaminada a controlar el proceso de cambio iniciado, coincidía con los planteamientos y contaba con el apoyo de los hombres del doce, quienes consideraban la convocatoria de Cortes ordinarias y las consiguientes elecciones como el antídoto apropiado para frenar a aquellos que querían más libertad y a quienes no querían ninguna.

El decreto de convocatoria²²⁰ contenía veintidós artículos y un breve preámbulo, encaminado a persuadir de la conveniencia de una inmediata convocatoria de las Cortes ordinarias, en consideración a la apremiante situación del Estado y la necesidad de poner en planta, en todos los ramos de la administración, la misma Constitución. Además, el preámbulo justificaba las ineludibles variaciones que sus artículos introducían en las normas constitucionales que regulaban las elecciones a Cortes: singularidad de la

²¹⁹ Ibidem.

²²⁰ Arch.Cortes, leg.76,nº42.

convocatoria, fecha de celebración de elecciones en los distintos grados, y época en que debían celebrarse las sesiones de Cortes. La Junta justificó esas alteraciones en su Manifiesto:

"(...)Hemos cuidado en cuanto las circunstancias permiten seguir el espíritu de la Constitución, ya que no podíamos de manera alguna acomodarnos a su sentido literal en la resolución de las diferentes cuestiones que se nos iban presentando (...)".

Considerando estas modificaciones cabe decir que, desde una perspectiva jurídico constitucional, el Decreto suponía un quebrantamiento inconstitucional²²¹ de la Constitución. En primer lugar, porque la Ley fundamental no otorgaba al Monarca facultades para convocar Cortes (arts.171 y 172), ni siquiera extraordinarias (art.162,3); pero al no existir la Diputación permanente de Cortes y desechada la idea de restablecer las Cortes de 1814, no existía, en opinión de la Junta provisional, otra forma de poner en vigor el régimen constitucional:

"(...) No existiendo Diputación Permanente no hay quien convoque las Cortes Extraordinarias (...) y no se diga que otro tanto sucede con las ordinarias porque la convocación de estas no se fía sino a la misma marcha regular de las

²²¹ Schmitt, Teoría de la constitución, Madrid p.116.

instituciones ²²². Tampoco nos hallamos en ninguno de los tres casos expresados para convocarlas²²³ (...)." .

De ahí la decisión de que el Monarca hiciera las veces de "la marcha de las instituciones", y otorgaran a quien designaban como Jefe Supremo de la Nación, la iniciativa de la convocatoria :

"(...) En la actual situación (...) sólo el Rey, el jefe Supremo de la Nación puede convocar las próximas Cortes. (...) Como la mayor prueba del anhelo con que aspira a ver establecida la Constitución que espontáneamente ha jurado (...) "²²⁴ .

Atribuir al poder regio esa extraordinaria facultad excepcional, explicable por la provisional concentración de poderes en el ejecutivo, tenía la ventaja indudable de crear una apariencia de continuidad legal; pero sobre todo, dotaba de legitimidad - tradicional, se entiende - a la legalidad

²²² Romero Alpuente invertía el argumento y replicaba en su folleto: " Así(..) como la necesidad autorizó al Rey para que hiciera las veces de marcha de las instituciones, así le autorizaba para que hiciera las veces de Diputación permante. Ibidem.

²²³ Se refieren a los supuestos contemplados por los tres apartados del art. 162: cuando vacare la Corona; cuando el Rey se imposibilitare; cuando en circunstancias críticas y negocios arduos tuviera el Rey por conveniente.

²²⁴ Ver Manifiesto de la Junta Provisional a la Nación, Marzo de 1820. Ante este planteamiento decía Romero Alpuente: habiendo par las Cortes ordinarias igual reparo que para las extraordinarias, se le dió para las que convenían. Ibidem.

constitucional instaurada y, sin duda lo más importante, podía ser utilizado políticamente como prueba de la aceptación espontánea que el Monarca prestaba al nuevo sistema.

En efecto, que el Monarca efectuara la Convocatoria de Cortes servía para apaciguar a unos ante el cambio, la mayoría de los ciudadanos; y para contener inicialmente a otros, clero, parte del ejército y la nobleza. Pero sobre todo, ante las denominadas "potencias aliadas" podía contribuir a crear, de momento, la sensación engañosa de que el Monarca caminaba francamente por la senda de la Constitución.

La resolución de congregar de inmediato Cortes ordinarias entrañaba, inevitablemente, realizar las elecciones y comenzar las sesiones en fechas distintas a las fijadas por la Constitución. Pero el decreto (art.5) no sólo modificaba las fechas en que debían celebrarse las elecciones sino que también abreviaba los intervalos que, según las normas constitucionales, debían existir entre las Juntas Electorales de Parroquia, Partido y Provincia. Así, el intervalo de un mes quedó reducido a una semana entre las Juntas Electorales de Parroquia y Partido, y a quince días entre estas últimas y las de Provincia. La preocupación por poner en marcha, con celeridad, las instituciones constitucionales les llevó a acortar los plazos en que debían celebrarse las Juntas electorales.

Comentario aparte merece el artículo 3° del mencionado decreto, según el cual los individuos que habían sido diputados en las Cortes ordinarias de 1813 y 1814 podían ser reelegidos diputados²²⁵. Los redactores de esta norma pretendían, evidentemente, impedir una interpretación estricta del art. 110 del Código gaditano que prohibía la reelección de diputados para dos legislaturas seguidas. La importancia de la excepción radica en que a través de ella estaba respaldándose la obra y sobre todo a los hombres de las Cortes de 1814 disueltas por la fuerza. Lógicamente, ese insistente espíritu de retorno que inspiraba las decisiones del Gobierno provisional tenía, en ocasiones, un carácter polémico y perjudicaba especialmente a los actores de la revolución de 1820.

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, y si consideramos que, según la Ley fundamental, el Monarca carecía de competencias para hacer cualquier modificación o reforma en las leyes constitucionales, puede afirmarse que el decreto que comentamos implicaba un quebrantamiento inconstitucional de las leyes constitucionales. No obstante, el propio decreto señalaba que estas violaciones se realizaban a título excepcional, es decir, bajo el supuesto de que las prescripciones quebrantadas permanecían inalterables y, por tanto, no eran suprimidas ni colocadas temporalmente fuera de vigor. A este respecto el artículo 22

²²⁵ Según el art. 110 de la Constitución, los diputados no podían volver ser reelegidos sino mediando una diputación.

después de afirmar que las variaciones eran efecto indispensable del "estado presente de la Nación", indicaba que " en lo sucesivo (debía) observarse en todo escrupulosamente lo que sobre el particular previene la Constitución política de la Monarquía". Se podría afirmar, en conclusión, que la puesta en vigor en el país del texto constitucional comportó, fatalmente, la necesidad de comenzar violando sus preceptos.

2.5. Juntas preparatorias para las Elecciones.

Acompañaban al mencionado decreto sendas Instrucciones conforme a las cuales debían celebrarse las elecciones en las Provincias e Islas Adyacentes y en las Provincias de Ultramar ²²⁶. Estas Instrucciones eran similares, por no decir idénticas, a las utilizadas para la celebración de las elecciones del año 1812.

Según establecía la Instrucción, recibido el Decreto de convocatoria, el Jefe superior de cada Provincia debía convocar una Junta Preparatoria para facilitar las elecciones. Además del Jefe Político, debían formar parte de la Junta el Obispo o, en su defecto el eclesiástico más condecorado, el Intendente, Alcalde más antiguo, el Regidor,

²²⁶ Instrucción conforme a la cual deberán celebrarse en la Península e Islas Adyacentes las elecciones de Diputados de Cortes para las ordinarias de los años de 1820 y 1821 .

el Síndico Procurador y dos hombres buenos designados por aquellos.

Las Juntas preparatorias cesaban en sus funciones cuando comenzasen a practicarse las elecciones. Pero hasta entonces desempeñaban los cometidos siguientes: imprimir y difundir con celeridad la convocatoria de Cortes, la Instrucción y el Manifiesto de la Junta Provisional dirigido a convencer de los fundamentos constitucionales en que el decreto de convocatoria se apoyaba; distribuir las provincias en partidos si no los tuviera, fijando el número de electores que les correspondiese y, en fín, "allanar todas las dificultades para que puedan verificarse las elecciones" (art.9) .

En la mayoría de las provincias ²²⁷, las Juntas se constituyeron e iniciaron sus trabajos hacia finales de marzo y principios de abril, excepción hecha de Canarias "donde el 19 de mayo se ignoraba aún la revolución de España"²²⁸. No todos los obispos asistieron a las sesiones de las Juntas Preparatorias. Hubo provincias en las que las autoridades eclesiásticas alegando ausencia, (Alava, Asturias, Burgos, Cádiz, Palencia, Segovia, Toledo y Canarias), o enfermedad

²²⁷ Lo que sigue ha sido elaborado consultando las Actas de las Juntas Preparatorias para elecciones a Cortes, que se conservan en el Archivo de las Cortes. Los expedientes contenidos en el Legajo nº4, van desde los Números 1 (comienza en Álava), hasta el 33, (finaliza en Zamora).

²²⁸ El Universal Observador, nº 31, 11 de Junio de 1820.

(Aragón, Galicia y Murcia), excusaron su presencia y enviaron a un suplente²²⁹ .

Hay datos para suponer que, en determinados casos, la inasistencia de los miembros del clero revelaban las tensiones existentes entre las autoridades eclesiásticas y las del régimen recién instaurado ²³⁰ . Podría considerarse como un indicador de esa tensión el acuerdo que recogían por escrito las actas de las Juntas preparatorias de la provincia de Murcia y cuyo tenor literal era el siguiente:

" (...) Que se oficie al Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis a fin de que sirva disponer lo necesario para los días en que se ha de oficiar la misa del Espíritu Santo en esa catedral y el discurso análogo a las circunstancias ²³¹ (...)".

No obstante este oficio, el Obispo que no comparecía a las reuniones convocadas por el jefe político (J. Romero Alpuente) se abstuvo también de concurrir a la celebración de tan señalado acto ²³² .

²²⁹ Arch.Cortes, Leg.4, n°1,n°3,n°6,n°,7,n°8,n°23, n°25;; y leg.4 n°2,n°12,n°21 respectivamente.

²³⁰ Sólo tres obispos (Toledo, Barcelona y Mallorca) se manifestaron abiertamente a favor del sistema constitucional. E.Buldain Jaca, Regimen politico y preparación de Cortes de 1820. Madrid, 1988, pág. 220.

²³¹ Actas de la Juntas Preparatorias de Murcia, Sesión tercera. Arch. Cortes, Leg.4, Exp.21.

²³² Ver al respecto el Acta de la Junta Electoral de la provincia de Murcia, Arch. Cortes, Leg.6 Exp.n°21.

Los pueblos elevaron escritos a sus correspondientes Juntas preparatorias tratando de encontrar respuesta a cuestiones relacionadas con el desarrollo del próximo proceso electoral. En relación con las elecciones de parroquia, merecen mencionarse las propuestas elevadas a las Juntas por pueblos que, considerando contaban con población suficiente, solicitaban segregarse y practicar por sí solos la elección de los compromisarios ²³³. También en el mismo grado, algunas feligresías, que afirmaban contar con un número bastante de vecinos, elevaron escritos a sus Juntas para que les permita nombrar por sí elector parroquial²³⁴, o las hay que, alegando una disminución en el número de vecinos pedían se les permitiera reunirse con las próximas para verificar el nombramiento del elector parroquial²³⁵.

En relación a las elecciones de partido, las Juntas preparatorias recibieron instancias de pueblos, cabezas de partido, que ubicados entre provincias limítrofes, solicitaban se les indicase a cuál pertenecían ²³⁶. Un asunto que atrajo la atención de algunas Juntas fué el

²³³ Actas de la quinta sesión de la Junta preparatoria de Granada. Arch.Cortes, Leg.4, Exp.nº14.

²³⁴ Acta de la Junta Preparatoria de Murcia, sesión quinta. Arch.Cortes. Leg.4, Exp.nº21.

²³⁵ Esto sucedió en la Provincia de Jaén. Ver Actas de las Juntas preparatorias de Jaén, Arch.Cortes, Leg.4, Exp.17

²³⁶ Entre los casos que podrían mencionarse se encuentra de Antequera, que pregunta si pertenece a la provincia de Sevilla o Granada; y los de Reinosa y Carrión, cuya pertenencia disputan Palencia y Toro. Arch.Cortes, Leg.4, Exp.nº14. y Leg.4. Exp.nº29. respectivamente.

reparto de la provincia en partidos. Entre todas sobresale la actuación emprendida por la activa Junta Preparatoria de Murcia. Según el gobierno las Juntas debían procurar atenerse, en lo posible, a lo practicado para las elecciones a Cortes ordinarias del año 1813. No obstante, los miembros de la citada Junta estimando que su provincia no tenía señalados los partidos como quisieran las Cortes y la ley constitucional, acordaron crear una comisión para que rectificase el "repartimiento" existente y mandando que la nueva distribución "se imprima y circule con el competente oficio que exprese las causas de su variación, haciéndose dicha circulación por veredas". La Junta perseguía corregir, por su cuenta, la desproporción que, en distintos partidos, existía entre población y electores. Pero no logró su cometido debido a la intervención Secretario de Gobernación quien, ante la denuncia presentada por ciudadanos de Murcia, dirigió una orden a la Junta en la que decía:

"(...) Atendida la premura de tiempo y la necesidad de evitar todo entorpecimiento para la elección de diputados a Cortes, dicha Junta Preparatoria debe atenerse en cuanto a la división de partidos y asignación de electores ...a lo que se hizo para las Cortes de 1813 y 1814 (...)"²³⁷.

El alcalde constitucional de Cabanes, en Valencia, consultó a la Junta "si los que han obtenido empleos

²³⁷ Actas de las Juntas Preparatorias, Murcia Arch.Cortes, Leg.4, Exp.21.

municipales en tiempo del gobierno intruso pueden elegir y ser elegidos"²³⁸ . A este respecto, la Constitución señalaba "la calidad de ciudadano se pierde por admitir empleo de otro gobierno" (art.24,2), y en esta circunstancia se encontraban los "afrancesados". La Junta, haciendo una interpretación singular²³⁹ , pero generosa, del citado artículo respondió que "dicha sola circunstancia no priva a ningún ciudadano del voto activo y pasivo".

Buscando algo más que simple asesoramiento se dirigió a la Junta de Granada el alcalde constitucional de Cartajima interrogando sobre "de qué caudales echaría mano para acudir a los gastos que se originasen a los electores parroquiales que pasaban a la capital de Ronda a celebrar la elección de partido, y los que igualmente se causasen en caso de que algún vecino fuese elector para la Junta que había de celebrarse en esa ciudad de Granada". Ante la situación de penuria por la que atravesaba el país, como quedó registrada en otras actas²⁴⁰, la respuesta que ofreció la Junta citada fué, sencillamente, que observaran el método seguido en las elecciones de 1813.

²³⁸ Acta de la Junta preparatoria de Valencia, Leg.4, Exp. 30.

²³⁹ Integraban entre otros la Junta preparatoria de Valencia: el obispo, Veremundo Arias, expulsado por sus "sermones incendiarios", el discutido Conde de Almodóvar y el moderado canónigo Gareli, fundador de la primera cátedra de D° Constitucional, diputado en las Cortes de 1820 y luego ministro. Arch.Cortes, Leg,4, Exp.30.

²⁴⁰ La junta acordó omitir de las órdenes todo lo relativo a Galicia para que la impresión resultara menos costosa. Actas de Galicia, Arch.Cortes.Leg. 4 Exp.12 .

Antes de disolverse, algunas Juntas hicieron a los ciudadanos recomendaciones sobre el sentido de su voto. Tal fué el caso de la Junta de Jaén que apelaba a que los votos fueran "discretos y uniformes"²⁴¹ , lo cual equivalía, como más adelante se encargaron de aclarar, dirigirlos a aquellos "hombres que sumidos en el último abatimiento y rodeados de asombrosos obstáculos, (habían) sabido romper con valentía el círculo de la esclavitud".

²⁴¹ Acta de la sesión cuarta de las Juntas Preparatorias de la Provincia de Jaén. Arch.Cortes. leg.4,Exp.17.

C A P I T U L O 3

Capítulo 3. Revolución y Constitución.-

3.1. Constitución de 1812 y la Restauración europea.

El pronunciamiento de Cabezas se hizo al grito de "libertad, Constitución y patria" ²⁴². La Constitución de 1812, "hija de la necesidad y la madurez del siglo" ²⁴³, constituía el programa del movimiento conspiratorio. Los liberales con el apoyo del ejército consiguieron que, después de siete conspiraciones ²⁴⁴ en algo más de cinco años, las provincias y el Rey proclamaran la Constitución.

Gracias a "la revolución sin ejemplo" ²⁴⁵, verificada en nombre de la Constitución de 1812, España y su ley fundamental se convirtieron durante el Trienio en foco de atención del liberalismo europeo. Que el sagrado código se convirtiera en grito de guerra contribuyó a contener a sus adversarios internos y a dotar al sistema de una fortaleza

²⁴² Manifiesto de la Junta provisional a las Cortes, (julio 1820), en Marqués de Miraflores, Documentos a los que se hace referencia en los Apuntes histórico-críticos sobre la revolución en España, Londres, 1834.

²⁴³ Ibidem.

²⁴⁴ Comellas, J.L, Los primeros pronunciamientos en España 1814-20. Madrid, 1958.

²⁴⁵ La expresión se recoge en El Universal Observador, n° 11, 22 de mayo, 1820. Abundando en este planteamiento en otro periódico se escribía: "...todas las revoluciones de los pueblos han llevado consigo un carácter de sangre y horror... La libertad ha nacido siempre o de una guerra con el extranjero o de una guerra civil. ¡España, patria mía! tú eres única entre las naciones...", Conservador n° 2, martes 28 de marzo de 1820.

superior a la que tenía. Es posible que las revoluciones en Italia aumentaran las adhesiones al nuevo régimen y resulta indudable que propició discursos retóricos sobre la mágica potencia del Código.

Los liberales españoles, ignorantes del peligro que el contagio revolucionario podía significar para la estabilidad del sistema constitucional, se vanagloriaban orgullos de ser un ejemplo:

"(...) La Constitución nos ha elevado al grado de altura en que somos el blanco a donde se dirigen las miradas de todos los pueblos de la tierra y nos gloriamos de que dos naciones sigan presurosas nuestras mismas huellas"(...) ²⁴⁶.

De otra parte, según pusieron de relieve en las Cortes los diputados, entre ellos existía el convencimiento, de que la Constitución de 1812 podía contar con la aceptación de los soberanos de las potencias europeas. Esta convicción la expresaron reiteradamente en sus intervenciones en la cámara.

²⁴⁶ El tribuno del pueblo, Noviembre de 1820. Los diarios resumían la opinión de la prensa extranjera : " los ingleses dicen: contemplando lo que el pueblo y la milicia han hecho (...), los hombres ilustrados deben alegrarse del triunfo que coloca a la España en el rango que ha perdido a los ojos de Europa; (...) esta es una de las revoluciones más interesantes de cuantas han acontecido en tiempos antiguos o modernos(...) "Los alemanes dicen: acontecimientos que acaban de mudar la faz de España y que ya no puede la censura ocultarnos, producen gran sensación (...) Nuestros papeles políticos publican íntegra la Constitución de las Cortes, en favor de la cual acaban de pronunciarse diez millones de almas, y que un puñado de cortesanos sofocó durante seis años". "El Conservador, n° 63 27 de mayo de 1820.

El diputado exaltado Moreno Guerra, señaló como mérito de la Constitución el de haber sostenido los tronos el año 1812, de ahí que fuera respetado por los reyes legítimos ²⁴⁷.

Esta creencia no desapareció cuando las potencias de la Santa Alianza, reunidas en Laybach a comienzos de 1821, decidieron intervenir en Nápoles donde se había proclamado la Constitución española de 1812. Una prueba tan aplastante del poco apego de los soberanos europeos al texto de Cádiz no hizo cundir el pánico en las Cortes e inspiró discursos emotivos como el que pronunció Martínez de la Rosa. Partiendo del supuesto de que " el principio de nuestra mudanza política estaba atacado en aquel Reino", pasaba a hacer un inventario de los méritos de la Constitución:

"(...) Esa misma Constitución, tan calumniada ahora, es la que en aquella época conservó unidos a los españoles, les dió Patria y Gobierno, y mantuvo la resistencia heroica que al fin produjo la emancipación del continente y restituyó a los legítimos Tronos su perdida dignidad y firmeza(...)" ²⁴⁸.

Sin embargo, las notas diplomáticas que las potencias de la Santa Alianza reunidas en Verona, enviaron al Monarca en

²⁴⁷ El diputado por Cádiz, hizo esa manifestación cuando denunciaba ante las Cortes el ataque de la Santa Alianza a Nápoles, por considerarlo un ataque a nuestra Constitución.D.SS. Cortes, sesión 3 de marzo de 1821.

²⁴⁸ Intervención para presentar el dictamen de la comisión política. D. SS. Cortes, sesión 22 de marzo de 1821.

1822, evidenciaron hasta qué punto los soberanos de Francia, Rusia, Prusia y Austria rechazaron desde un principio la Constitución política a la que años atrás habían dispensado tantos elogios. Cada nota mostraba algún motivo especial para considerar inaceptable el Código y el sistema constitucional instaurado en España. La de Francia desenmascaraba, con una lógica implacable, el rechazo implícito de Fernando VII hacia la Constitución:

"(...)Una insurrección militar sujetó al Rey Fernando a una Constitución que no había reconocido ni aceptado al volver a subir al Trono ²⁴⁹ (...)"

El comunicado de Rusia convertía la Constitución en el instrumento del despojo de la autoridad real y destrucción de la monarquía y el orden social:

"(...) Una revolución nacida de un motín militar ha roto repentinamente todos los lazos del deber, trastornando todo orden legítimo y descompuesto los elementos del edificio social, que no han podido caer sin cubrir todo el país con sus escombros. Se ha creído poder reemplazar este edificio arrancando a un Soberano, ya despojado de toda autoridad Real y de toda libertad de voluntad, con el restablecimiento de la Constitución de las Cortes del año de 1812, que confundiendo todos los elementos y todos los poderes, partiendo solo del

²⁴⁹ D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 9 de enero de 1823.

principio de oposición (...) debía necesariamente destruir esta autoridad central y tutelar que hace la esencia del sistema monárquico²⁵⁰ (...).".

La nota de Prusia insistía en los males de la nueva situación que hacía sinónimo de anarquía, ultraje y despojo de derechos:

"(...) Los males inseparables de un estado de cosas en que se habían olvidado todos los principios constitutivos del orden social. La anarquía sucedió a la revolución, el desorden a la anarquía. Una posesión tranquila de muchos años cesó bien pronto de ser un título de propiedad; muy pronto fueron revocados en duda los derechos más solemnes (...). En aquellos días (...) a qué grado no fué despojada la religión de su patrimonio, el Trono del respeto de los pueblos, la Majestad Real ultrajada, la autoridad transferida a unas reuniones en que las pasiones ciegas de la multitud se disputaban las riendas del Estado²⁵¹ (...).".

Metternich, que suscribía la nota de Austria, puso de relieve la amenaza que la Constitución española representaba para los Tronos y los pueblos:

"(...) La Constitución española ha sido donde quiera el

²⁵⁰ Ibidem.

²⁵¹ Ibidem.

punto de reunión y el grito de guerra de una facción conjurada contra la seguridad de los Tronos y el reposo de los pueblos(...) El movimiento peligroso que había comunicado la revolución de España a todo el mediodía de la Europa ha puesto al Austria en la penosa necesidad de apelar a medidas poco conformes con la marcha pacífica que hubiera deseado²⁵² (...)" .

La conmoción que provocaron esas "proclamas incendiarias" entre los diputados fué considerable. Sirvan como muestra, las palabras repletas de indignación del escritor y poeta Duque de Rivas, ahora diputado Saavedra:

"(...) ¡Vituperan nuestro Código sagrado! ¡Este Código por el que moriremos todos! ¡Este Código que hizo traducir a su lengua el Emperador de Rusia! ¡Este Código que hizo jurar ese mismo Emperador a algunos pocos españoles que se hallaban en sus dominios, y que reconoció el Rey de Prusia el año 14! (...) ²⁵³ " .

Los desahogos verbales los completó el Congreso con una contestación al gobierno francés, que contó con aprobación por asentimiento. El mensaje contenía una reivindicación vana de la libertad del Monarca para proceder al juramento de la Constitución:

²⁵² Ibide.

²⁵³ D. SS. Cortes extraordinarias, sesión de 11 de enero de 1823.

"(....) La España está regida por una Constitución promulgada, aceptada y jurada en el año de 1812, y reconocida por la Potencias que se reunieron en el Congreso de Verona. Consejeros pérfidos hicieron que S.M. Católica el Rey D.Fernando VII no hubiese jurado a su vuelta a España este Código fundamental, que toda la Nación quería, y que fué destruido por la fuerza sin reclamación alguna de las Potencias que le habían reconocido. Mas la experiencia de seis años y la voluntad general le movieron a identificarse en 1820 con los deseos de los españoles (...) ²⁵⁴ ".

Meses más tarde Argüelles, en una de las últimas sesiones de Cortes, destacó de nuevo la actitud ambigua que hacia la Constitución de 1812 habían mantenido los soberanos de las potencias europeas:

"(...) Qué contradicción, señores, no presentan esos Príncipes de Europa que conspiran hoy contra nosotros para derribar una Constitución que reconocieron y aún elogiaron en el año de 1813 y 1814, cuando conocida por su versión en las principales lenguas de Europa, no había merecido todavía el anatema. (...) Sin embargo, apenas se restauró en 1820, cuando los que hoy se llaman santos aliados se apresuraron a condenarla y proscribirla antes que hubiese podido producir buenos ni malos efectos. El designio (...): usar contra ella todo linaje de contradicción y de intriga, y por cierto que

²⁵⁴ D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 9, enero de 1823.

tantos y tan numerosos enemigos no debieran haber tardado cuatro años en destruir un libro. (...) Es pues indisputable que la Constitución fué proscrita por los santos aliados en una época tan anticipada, que las causas que los haya determinado se podían derivar del año de 1820 ²⁵⁵(...) " .

En efecto, la Constitución de 1812, utilizada como "grito de guerra", y el movimiento revolucionario realizado en su nombre en España, fueron considerados, por las potencias de la Santa Alianza en 1820 incompatibles con el reposo de Europa; y que no aceptaran los liberales españoles reformar el texto Constitucional²⁵⁶ se alegó como motivo para proceder a la invasión.

La contestación del Gobierno a la nota de Francia, ofrecía la impresión engañosa de que se habían previsto los riesgos del cambio político emprendido:

" (...) No ignoró el Gobierno nunca que instituciones adoptadas libre y espontáneamente por la España causarían recelos a muchos de los Gabinetes de Europa, y sería objeto de las deliberaciones del Congreso de Verona; mas seguro de sus principios, y apoyado en la resolución de defender a toda

²⁵⁵ El pasaje corresponde al discurso de Argüelles apoyando la declaración de guerra a Francia, pronunciado ante las Cortes congregadas en Sevilla. Gaceta española, Sevilla, 23 mayo de 1823. Cortes extraordinarias.

²⁵⁶ La pretensión de que "mudasen la Constitución" incluía dos asambleas. Ver al respecto la intervención de Canga Arüelles en D.SS Cortes extraordinarias. sesión de 9 de enero 1823.

costa su sistema político actual y la independencia nacional, aguardó tranquilo el resultado de aquellas conferencias (...)"²⁵⁷ .

Parece más plausible pensar, sin embargo, que tardaron en darse cuenta del peligro que verdaderamente representaba para ellos estar enfrentados a la Santa Alianza. Lo que más sorprende en toda esta peripecia, es que los liberales españoles del Trienio, aferrados a la moderación, estuvieran tan aquejados de ceguera involuntaria. Su concentración en los conflictos y las reformas de dentro, parece que les incapacitó para comprender las razones y el alcance del repudio que su Constitución inspiraba fuera.

Parecía evidente que los soberanos de las potencias europeas, dispuestos a considerar el texto de Cádiz como políticamente aceptable cuando se encontraban amenazados por una crisis, lo rechazaban una vez que creían haberse liberado de la catástrofe. Las palabras mesuradas del Conde de Toreno, poco después de que Austria barrenara la Constitución de 1812 con su invasión de Nápoles, constituyen una muestra de la ceguera dominante:

"(..) Las potencias aliadas reconocen la causa de España, (...) Nosotros tenemos tratados celebrados con esas potencias, que han sido reconocidos anteriormente a la época

²⁵⁷D.SS.Cortes, sesión de 9 enero de 1823.

de nuestra restauración (del sistema constitucional). Por ellos se ve que estas potencias habían reconocido el Gobierno establecido por nuestra Constitución. Además todas estas potencias tienen aquí embajadores (...) lo cual no han hecho con ningún otro de los que esta año ha habido mudanza. (...) En las declaraciones hechas por los Emperadores de nuevo se han obligado a reconocer la causa de España (...), porque hay tratados existentes y pasos diplomáticos que aseguran que la España no está en estado de temer que se turbe su tranquilidad por nación alguna extranjera. Yo digo esto (...) para que se sepa que hasta esto tenemos a nuestro favor (...) ²⁵⁸ ".

Más cauto y desconfiado hacia las intenciones de la Santa Alianza, fué el planteamiento movilizador y radical que en la misma sesión hizo el diputado por Cádiz Moreno Guerra, por cierto uno de los conspiradores de Cabezas:

"(...) Señor, la cuestión del día creo que no interesa sólo a estas siete personas (...) sino a la Nación y a la Europa entera. Cuanto en los últimos manifiestos de Laibach se dice de Nápoles y del Piamonte, podrá decirse mañana de nosotros, si no lo han dicho ya, y debemos manifestar que la Nación entera es la que se ha libertado a sí misma, no las

²⁵⁸ D. SS. Cortes, sesión de 13 de junio de 1821. Discusión del dictamen sobre premios a los caudillos del ejército de San Fernando y Galicia.

sectas ni las facciones (...) ²⁵⁹ ".

3. 2. España y la Constitución.

Los años transcurridos bajo una reacción sin horizontes habían contribuido a mitificar el proyecto de cambio que el texto constitucional encerraba. En opinión de Miraflores:

" (...)La Constitución ...hubiera quedado hundida en el polvo de los archivos si el mal aconsejado Monarca hubiese cumplido lo que prometió en su famoso Decreto de 4 de marzo - agregando más adelante- ...La Constitución del 12 no hubiera tenido jamás importancia propia en España si una vez abolida, no se hubiese verificado a su nombre la reacción política de 1814 y las persecuciones injustas y atroces que entonces se verificaron..."²⁶⁰.

Para determinados sectores sociales del país, la Constitución simbolizaba el reverso de los males que durante los "mal llamados seis años" habían padecido y despertaba adhesiones. Muestra de la intensidad de estas adhesiones

²⁵⁹Ibidem.

²⁶⁰ Apuntes histórico-críticos para escribir la historia de la revolución española desde el año 1820 hasta 1823, Londres, 1834.

pueden considerarse la serie de pronunciamientos fallidos, con apoyo popular, encaminados a derribar por la fuerza el régimen absolutista. Los participantes en toda esa serie de movimientos conspirativos -cuyos resultados eran inciertos, cuando no dramáticos -, habían sentido la necesidad de participar en la lucha por la Constitución, cuando era lo mejor que podían tener en lugar del régimen constitucional²⁶¹.

El sistema constitucional despertó, desde el principio hasta el fin, adhesiones tan intensas como la mágica potencia atribuida a la Ley fundamental. Del Código sagrado esperaban sus poéticos partidarios la regeneración política, el renacimiento económico y la recuperación del malogrado prestigio internacional de la nación y sus habitantes, los cuales, por cierto, gracias al nuevo sistema se convertían automáticamente en seres civilizados:

"(...) Como el despertar de un sueño nos hallamos poseedores de la libertad civil (...): la ley va a recobrar su antiguo vigor, la representación nacional su justo poder, el ciudadano sus derechos. Bajo el escudo de la libertad veremos renacer nuestras pasadas glorias, los talentos desenvolverse, las ciencias perfeccionarse, y la agricultura e industria

²⁶¹ En ocasiones viven las sociedades momentos en los que domina un intenso interés por participar en la vida pública. Una explicación endógena sobre las razones de ese interés puede hallarse en A.O Hirschman, Interés privado y acción pública; México, 1986

originar la riqueza del hombre activo y aplicado. La Nación española ocupará un lugar distinguido en el mapa político de las naciones libres de donde había desaparecido; y sus habitantes no serán considerados cafres u hotentotes entre los pueblos civilizados (...). Bajo el influjo benéfico de su gobierno sabio revivirán los restos de una sabiduría sofocada por la persecución y el fanatismo ²⁶² (...)"

Ciertamente influyó en este desbordante optimismo liberal la satisfacción generalizada sobre el modo en que se estaba llevando a cabo la revolución :

"(...) Todas las revoluciones de los pueblos han llevado consigo un carácter de sangre y horror (...) La libertad ha nacido siempre de una guerra con el extranjero (...) o de una guerra civil. ¡España, España patria mía! (...) tú eres única entre las naciones (...). Naciones de la Europa, que dos meses hace nos tratábais de bárbaros y esclavos, confesadlo: ¿En donde se ha oído a una sola voz el sacrosanto nombre de la libertad sino en España? ¿En dónde sino en ella se ha visto que la fuerza destinada a sostener el despotismo, no sólo se ha unido al pueblo, sino que haya sido la primera en proclamarla? (...) ¿Donde jamás se vió que un Monarca unido a los ciudadanos sacrifique de corazón en el altar de la Patria? (...) Por fín somos libres (...) ¡Naciones! admirad a la España; ¡ejércitos! imitad a los valientes de ella.

²⁶² El Conservador n° 1, 27 de marzo de 1820.

Presentad a la liga tiránica del despotismo la frente austera de la verdad (...). Individuos, pueblos, aprended de nosotros que la libertad no se adquiere con puñales (...); se conquista con la unidad de opiniones, con el amor decidido a la patria y con virtudes heroicas²⁶³ (...)" .

Cuando estaba claro que el sistema constitucional se acercaba al fin, los liberales seguían manteniendo como "divisa" el lema "Constitución o Muerte"²⁶⁴. Lo que a nosotros puede sonar como ridículo, es un reflejo de la intensidad que, en algunos sectores sociales, llegó a alcanzar la adhesión al texto de Cádiz y del valor taumatúrgico ²⁶⁵ que atribuyeron al Código. Un diputado como Canga Argüelles, poco dado a los excesos verbales, después de bosquejar la lastimosa situación del país y proclamar que los liberales no capitularían jamás llegó a declarar en las Cortes:

"(...) Constitución, según se proclamó y juró en Cadiz el año de 1812, y se juró y proclamó en las Cabezas el año 1820, o la muerte", sea la divisa de nuestra conducta. (...) ²⁶⁶ " .

²⁶³ El Conservador, n° 2, 28 de marzo de 1820.

²⁶⁴ Diario de Barcelona, n° 114 , 24 , abril 1823.

²⁶⁵ Díez del Corral, L, El liberalismo doctrinario, Madrid, 1978.

²⁶⁶ D.SS, Cortes, sesión de 7 de marzo de 1822.

Sobre este rasgo mágico, reflexionó muy críticamente Alcántara, canónigo del Sacromonte y diputado por Málaga, en una corrosiva intervención oponiéndose a que se aprobara una nueva reforma del clero:

"(...) Creímos (...) que restablecida la Constitución los españoles todos se habían levantado a la altura de sus luminosos principios y de sus sublimes teorías, y movidos por el celo más laudable, apremiados por aquella noble impaciencia que acompaña siempre el deseo ardiente del bien, quisimos hacer de una vez por todas las reformas y consumir en un día lo que solo es obra del tiempo, de la educación y de las luces, y no de una orden o de un decreto ²⁶⁷ (...) ".

Del celo y la exaltación de la clase política, participaban los ciudadanos de algunos núcleos urbanos, como lo prueban las palabras que profirieron los asistentes a la Tertulia Patriótica de Lacy cuando el sistema se acercaba a su final:

"(...) Los hombres libres (...) nada temen de las hordas de esclavos que intentan arrebatarlos nuestra preciosa libertad y que si tienen la temeridad de acercarse a nuestros muros se verán escarmentados al sólo grito de Constitución o Muerte (...) "²⁶⁸.

²⁶⁷ D.SS.Cortes, sesión 3, febrero 1823.

²⁶⁸ Novales, A, Las sociedades patrióticas, Madrid, 1975, vol.1. pág. 281

Pero conviene tener presente que estas intensas adhesiones estaban circunscritas a individuos pertenecientes a grupos sociales de contados núcleos urbanos: escuálidas burguesía comercial e industrial, proletariado industrial, artesanos, individuos de la alta y media nobleza, funcionarios, clero secular y militares²⁶⁹.

Otra muy distinta parece ser que fué la actitud del resto del país, campesino en su rebotante mayoría. La prensa de la época percibía estas diferencias de actitudes ante la Constitución y las expresaba en sus escritos en los siguientes términos:

"(...)Para un pobre labrador debió ser un enigma incomprensible el entusiasmo que en los primeros momentos del recobro de la libertad observó en los que la amaban como se merece... pues aunque conociese la opresión no alcanzaba a conocer lo que influía el despotismo en su malestar, y este mismo hombre se enajenará de gozo cuando llegue a comprender las ventajas de una constitución que le asegura un buen gobierno (...)"²⁷⁰

Viendo con alguna perspectiva el cambio del año 1820, Domecq señaló años más tarde, en el Estamento de Procuradores

²⁶⁹ Ver al respecto, Domínguez Ortiz, ob.cit.; y Fontana, 1971, Cap.VIII.

²⁷⁰ Miscelánea, n°111, 19 de junio 1820.

de las Cortes del Estatuto lo siguiente:

"(...) En el alzamiento de 1820, cuando el ínclito Riego pasó por Medina, pueblo eminentemente patriota, en el convite en que se celebró su llegada, su brindis fué, todos lo saben, brindo por la indiferencia de Medina; tal era la oposición, el terror que aquel caudillo notaba, que le parecía un favor la indiferencia. Al atravesar por Málaga, ciudad célebre por su exaltado patriotismo, ¿qué hicieron sus habitantes?. Encerrarse en sus casas; cerrar las puertas y balcones. Así pereció por falta de auxilio aquella división (de Riego). Su jefe de estado mayor el Sr. San Miguel claramente lo refiere: tocábamos todas las teclas; pero ninguna sonaba (...)"

Hay indicios vehementes para pensar, que una de las medidas que los liberales utilizaron con alguna profusión, en los momentos iniciales, para combatir esa indiferencia o ese miedo, y acceder sin dificultades al control del poder en las provincias, fué difundir la creencia de que "con la Constitución desaparece la contribución general". Era un clamor que en el pueblo existía una importante y generalizada aversión hacia la contribución general, desde su entrada en vigor. Ese rechazo popular hacia la contribución, se había hecho patente en la resistencia que ofrecían los pueblos para que se cobrara y los continuos recursos y reclamaciones que

suscitaba ese gravamen ²⁷¹. Por la comparecencia ante las Cortes del Secretario del Despacho Universal de Hacienda sabemos que las autoridades de las Juntas provisionales de provincias hicieron uso de una generosidad irresponsable, que puso al sistema en peligro y a su ministerio en estrecheces:

"(...) La supresión de los derechos de puertas, llevada a efecto en una gran parte de las capitales del Reino; el desestanco del tabaco; la rebaja de la contribución directa, y -añadiría- la equivocada opinión de que las nuevas leyes eximen a los pueblos del pago de los tributos, disminuyeron enormemente los recursos del Tesoro, haciendo crecer sus estrecheces y aumentando el rigor terrible de los compromisos del Ministerio (...) ²⁷².

En este escenario, de un pueblo agobiado por contribuciones y unas nuevas autoridades que se comprometen a su rebaja inmediata, hay que situar las palabras que vertió en las Cortes el diputado Calderón cuando reconocía:

"(...) Para mí es más que probable que el descontento general que causó la contribución fué una de las principales causas que influyeron en que la Nación se decidiese a liberarse a

²⁷¹ D.SS. Cortes, sesión 6 octubre 1820.

²⁷² Canga Argüelles, Memoria del Secretario del Despacho de Hacienda. D.SS. Cortes, sesión 13 y 14 julio 1820.

toda costa de los males que sufría con ella (...) ".²⁷³

Utilizar los impuestos como arma para contar con el apoyo del pueblo hacia el sistema constitucional facilitando así el cambio de régimen, constituyó una estratagema necesaria, según se deduce del artículo comunicado que apareció en prensa:

"(...)Al pueblo rudo e ignorante de sus derechos como es el español, no se le persuade con reflexiones, es menester estimularle por el interés porque esto está al alcance de todos y conviene con sus deseos. Si en las capitales se redujeran a una mitad los derechos de puertas, si se perdonara a los pueblos una parte de sus atrasos y rebajara otra aunque fuera pequeña en los tercios sucesivos, tendría el actual gobierno por el mejor del mundo, y cerrarían los oídos a las pérfidas y codiciosas sugestiones de frailes y clérigos mal intencionados²⁷⁴ (...)".

Pero de la instrumentalización de los impuestos muy pronto se arrepentieron los liberales moderados en el poder. En efecto, en el estado de la desgraciada Nación, "oprimida por una deuda enormísima de más de 14.000 millones", el Gobierno se mostró dispuesto a conceder la rebaja de la contribución a la mitad, pero en ningún caso a consentir, que

²⁷³ Ibídem.

²⁷⁴ El Conservador N° 29 , 24 de abril 1820.

se identificara el sistema constitucional con la supresión de la contribución, el desestanco del tabaco, ni otras de las medidas adoptadas.

El desbarajuste contributivo que debió propiciar, la desintegración del antiguo régimen, o la actuación de las presionadas autoridades en los inicios del cambio, hizo indispensable la intervención de Argüelles fijando las repercusiones del sistema constitucional en materia de contribuciones. Su planteamiento fué el siguiente :

"(...) Se acabaron con la Constitución los apremios,* esas ejecuciones militares, las visitas domiciliarias, la prisión de los alcaldes, y otras tropelías que sufrían los pueblos; pero no por eso se acabó la necesidad de contribuir con equidad y proporción. (...) ²⁷⁵ ".

Los partidarios del régimen liberal percibían junto a una ignorancia general, la existencia de "inveteradas prevenciones contra el sistema constitucional"²⁷⁶, ambos hechos les llevó a desplegar grandes esfuerzos para que sus ideas se extendieran a todas las clases del pueblo que, en su sentir, no estaba menos dispuestos a recibir el error que la verdad.

²⁷⁵ D.SS. Cortes, sesión 8 octubre 1820.

²⁷⁶ Miscelánea n° 79, 29 abril 1820.

3.3. Difusión Constitucional.-

Autoridades.

Como herederos espirituales de la ilustración, los hombres que redactaron la Constitución de 1812 tenían una confianza casi absoluta en los beneficiosos efectos que podían derivarse de la difusión de las luces entre el pueblo. Tanta importancia concedían los liberales a la educación de los ciudadanos, desde la más tierna infancia²⁷⁷, que estuvieron dispuestos a comprender la instrucción entre las tareas fundamentales del Gobierno ²⁷⁸.

Los liberales compartían la convicción ilustrada de que "los pueblos embrutecidos y contagiados por el error", no son susceptibles de ninguna reforma pacífica²⁷⁹. Consideraban la educación casi como un atributo del poder del Estado, pero esa instrucción (apostolado constitucional) debía responder a su interés político y estar al servicio del programa de reformas.

²⁷⁷ Recuérdese que el art. 366 de la Constitución decía: "En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñarán a los niños a leer..y el catecismo de la religión católica, que comprenderá (...) las obligaciones civiles".

²⁷⁸ La preocupación por la educación de las clases bajas estaba en Smith: "(...)El Estado podría facilitar esa educación estableciendo en cada parroquia.. una pequeña escuela (...)". La riqueza de las Naciones [1776], México 1994, Lib.5, Cap.I, Par.III, Art.II.

²⁷⁹ Conde de Cabarrús, Cartas, Madrid 1973. Las famosas Cartas (sobre los obstáculos de la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la opinión pública) fueron reimprimas en 1820.

Una consecuencia de esta prioridad otorgada a la enseñanza fué que los legisladores de las Cortes constituyentes dedicaran a la Instrucción Pública un título específico del Código²⁸⁰, cuyos artículos, por cierto, guardaban una semejanza indudable con proyectos educativos elaborados por representantes significativos del movimiento ilustrado²⁸¹.

Los gobernantes del Trienio dedicaron toda su atención a esta materia, aunque faltos de recursos para acometerla por sí mismos se vieron obligados a delegar el ejercicio de su competencia. En todo caso controlaron muy de cerca a quienes ejercían esos cometidos, lo que evidenciaba una contradicción con sus principios en defensa de la libertad y la no intervención.

Desde los primeros instantes del Trienio, los partidarios del sistema constitucional consideraron como uno de los mayores obstáculos a la regeneración política el que provenía de "la ignorancia en que, por lo general, debe hallarse un pueblo dominado largo tiempo por tantas especies

²⁸⁰ El Título IX, arts, 366 al 371 inclusives.

²⁸¹ Compárese el texto de Cabarrus: "haya en cada lugar una o más escuelas ... destinadas a enseñar a los niños a leer, escribir y contar..., y un catecismo político..." (Carta segunda, ob.cit.), con lo dispuesto en el art. 366 de la Constitución : "En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñarán a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles".

de despotismo". La ignorancia, que había servido como argumento, para eximir al pueblo de responsabilidad en la caída del sistema el año 14, era preciso combatirla. La lucha contra la ignorancia significaba, en buena medida, vincular el porvenir del régimen al éxito de la empresa educadora. La prensa incitaba a alcanzar ese objetivo:

"(...)Ilustración, ilustración, esta es la base de la felicidad pública, este es el objeto que deben proponerse todos los que escriban inspirados del amor a su patria.(...) Hablar de patria, libertad y soberanía, sin explicar lo sublime de estas voces a naciones envejecidas en los hierros y amaestradas en la escuela de la esclavitud(..). Acaso se les fascinará con el mágico poder que encierran esas palabras(..)se las hará aclamarlos con entusiasmo; pero este método no es nada seguro(..) es preciso persuadirle de su conveniencia, y lo perjudicial y absurdo de las antiguas instituciones (...). Si en vez de inoportunos y ridículos sarcasmos contra la religión se hubiera enseñado al pueblo a apreciar sus derechos no lloraríamos seis años de ignominiosa arbitrariedad (...). Apresurémonos pues a hacérsela conocer (la constitución) (...).Combátanse con energía los abusos del poder(...)"²⁸² .

En fechas próximas a las elecciones el mismo diario insistía en la importancia de la creación de ciudadanos:

²⁸² La ley n°. 3 martes 11 abril 1820

"(...) La educación y la instrucción son los mejores medios que la política puede emplear para gobernar a los pueblos.(...) Los hombres son infelices, insociables y malvados, porque se desprecia instruirlos en sus verdaderos intereses. A la política pertenece formar las costumbres de los ciudadanos ²⁸³ (...)".

De la importancia que debieron conceder a esa estrategia es bien elocuente el discurso pronunciado en las Cortes por un diputado catalán pasados tres años. Las provincias vecinas a Francia estaban siendo devastadas por una desoladora insurrección y, con tal motivo, las Cortes discutían el dictamen de la comisión de Guerra sobre la organización de la Milicia activa. El diputado Adán tomó la palabra y empezó a lamentar que se vieran en la necesidad de decretar sacrificios penosos, que estuvieran pereciendo en esas provincias tantas víctimas, y, en fin, que la cuchilla de la ley estuviera cayendo sobre tantos desgraciados que justamente han expiado sus delitos. Y finalizó su intervención con una perorata sobre la estrategia emprendida para hacer y consolidar la revolución, en la que arremetió sin contemplaciones contra la excesiva importancia concedida a la educación:

"(...) Si desde el año 1820 hubieran encontrado acogida la idea de que no son las leyes las que hacen las

²⁸³ La ley, n° 23, 20 de junio de 1820.

revoluciones, y se hubiesen adoptado medidas para la consolidación de un sistema que tantos enemigos debía encontrar, el estado tendría otro aspecto de que en el día tiene; pero se creyó que la fuerza del convencimiento era bastante para ponernos en el caso de sostener estas instituciones, y se persuadieron muchos de que a favor de ese mismo convencimiento y de los principios de moderación, podríamos conseguir que nos respetasen²⁸⁴ (...).".

En los momentos iniciales, los partidarios del régimen liberal, convencidos de que la opinión pública era la que debía dirigir el destino de las naciones, desplegaron grandes energías para que sus ideas se extendieran entre todas las clases del pueblo que, como decía Cabarrús, tanto se calumnia y que ciertamente no está menos dispuesto a recibir el error que la verdad.

Las autoridades, inclinadas a la moderación, llevaron a cabo su propaganda constitucional publicando proclamas e incitando a los creadores de opinión, especialmente eclesiásticos, para que hicieran pública, mediante ceremonias y rituales solemnes, su adhesión al sistema constitucional.

Las proclamas que las autoridades, alcaldes y jefes políticos, dirigían a los ciudadanos en los primeros momentos perseguían como objetivo frenar los ímpetus de algunos

²⁸⁴ D.SS. Cortes, sesión 29 de diciembre de 1822.

ciudadanos y calmar los posibles temores de un pueblo atónito. Ambos objetivos solían figurar unidos en las mesuradas proclamas. En Madrid, (igual que como ya vimos ocurrió en Cataluña y Zaragoza) lo primero que hizo el alcalde constitucional fué llamar al orden:

"(...) Habiéndose prestado S.M. espontáneamente a jurar la Constitución política de la Monarquía Española (...) y constitúidose el Ayuntamiento (...) creen los alcaldes propio de su deber recordar a este muy heroico vecindario (...) que les corresponde adoptar las medidas necesarias y útiles para conservarla tranquilidad pública (...) ²⁸⁵".

Por su parte, la nueva autoridad, el Jefe político de Madrid, Miguel Gayoso de Mendoza, Señor de Rubianes en un bando, elocuente por su obsesión contra las reuniones públicas, dado el mismo día 10 de marzo mandaba:

"(...) Que en esta Cortes y todos los pueblos de la provincia se cele por las Autoridades Constitucionales la quietud y el sosiego público, pues establecido el régimen que ha de gobernar hasta la instalación de las Cortes, no hay pretexto alguno para alterarle, ni el regocijo general puede encubrir las miras torcidas de aquellos pocos que se agregan

²⁸⁵ El texto corresponde al bando del 10 de marzo de 1820, de los nuevos alcaldes interinos, Rodrigo Aranda y Sainz de Baranda. Citado en J.S. Pérez Garzón, Milicia Nacional y revolución burguesa, Madrid 1978.

a las reuniones públicas con fines siniestros (...) ²⁸⁶ ".

Existía temor a que el pueblo se desmandara, y a que el afán de participación que había brotado resultara excesivo. Este sentimiento, que agobiaba a los liberales en el poder, (o quienes actuaban en su nombre), era otro de los resortes que impulsaba el interés por la instrucción. Se les trataba de instruir, por consiguiente, para que que recibieran con gusto la mudanza y, al mismo tiempo, otorgaran su apoyo al sistema constitucional que había echado andar por la senda de la moderación. Salas recogió en sus lecciones hasta dónde llegaba el miedo al pueblo :

"(...) Creía que una revolución hecha por el pueblo mismo sería para mi patria la mayor de las calamidades : una calamidad más terribles mil veces que el despotismo que la oprimía (...) ²⁸⁷ ".

Además de la sana preocupación por el orden y la tranquilidad, los liberales trataron de persuadir a los ciudadanos de la compatibilidad entre Constitución y Religión. En este sentido, un rasgo común de las proclamas que las autoridades constitucionales hicieron circular en los primeros momentos fué la profesión pública de lo que

²⁸⁶ Ibidem.

²⁸⁷ El texto pertenece al prólogo de la obra que publicó en 1821, R. Salas, Lecciones de Derecho público Constitucional, Madrid, 1982

podríamos denominar fé católica-constitucional :

"(...) Los que se proponen hacerla odiosa (a la Constitución) (...) para asustarnos abusan del Augusto nombre de la Religión: ¡ah! ; si pudiérais ver las dañadas intenciones que cubren con este sagrado velo! El primero de los mandatos positivos de la Constitución es el siguiente: la Religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, (...) ¿ Y así hay bastante falta de pudor para alucinar con la maligna especie de que la Constitución es contraria a la Religión? (...) ²⁸⁸ ".

Ningún artículo de la ley fundamental fué tan machaconamente repetido, en los momentos iniciales del régimen, como el artículo doce. En esta empresa de "conversión constitucional" ²⁸⁹ los liberales parecían dispuestos a no retroceder ante nada. Con el fin de conferir a su discurso un mayor poder expresivo y calar mejor en el alma del pueblo no dudaron en utilizar simbología y terminología religiosas: procesiones cívicas, expresiones como Sagrado Código, Carta Santa y Espíritu Santo de la Constitución. Todo valía en el terreno de la retórica para sacralizar la ley fundamental.

No obstante, este esfuerzo debió parecer vano si no se

²⁸⁸ Proclama de la Junta de Gobierno de Córdoba.

²⁸⁹ Ver M. Revuelta Política religiosa de los liberales en el siglo XIX, Madrid, 1973.

contaba con la inapreciable colaboración del clero. Obviamente, diseñar una campaña de propaganda centrada en la "conversión constitucional", sin la presencia de eclesiásticos, - los más expertos propagandistas-, era condenarse de antemano al fracaso. No siempre fué posible contar con la colaboración voluntaria de los eclesiásticos. Lo que brotaba de una parte del clero, espontáneamente, era un volcán de denuestos. De ahí que, como veremos, precisaron recurrir a la coacción, demasiadas veces por cierto, para obtener el apoyo requerido. Produce alguna perplejidad comprobar hasta dónde fueron capaces de llegar los dirigentes liberales en ese incesante y perpetuo afán por controlar al clero y las presiones que realizaron, desde el poder y con violencia, para que los eclesiásticos participaran, (predicando y platicando en favor de la Constitución), en las tareas de creación de un "sentimiento constitucional". Para vencer las eventuales resistencias del clero, no dudaron en crear todas las medidas represivas precisas ni en emplear la dura ley contra los eclesiásticos que desatendían sus órdenes.

Clero.-

Las autoridades del nuevo régimen solicitaron de forma expresa la participación del clero en la campaña de "conversión política- constitucional". En tal sentido, la Junta Provisional, de acuerdo con el monarca, y siguiendo lo

estipulado al respecto por la Constitución, publicó un decreto encomendado a "personas dignas de respeto y consideración" , la tarea de instruir al pueblo en sus derechos y obligaciones, y que además " reparen los los dolorosos abusos que (...) se han experimentado, combatiendo las falsas imputaciones dirigidas contra la Constitución"²⁹⁰. Aunque no se les citaba expresamente, habían sido miembros del clero secular y regular quienes, con su retórica reaccionaria, habían promovido, durante la atmósfera de desbordamiento emocional que acompañó la proclamación de la monarquía absoluta²⁹¹, los "dolorosos abusos y falsas imputaciones".

Conviene recordar al respecto, que el discurso reaccionario de los años de restauración constituyó una prolongación de los ataques que destacados miembros de la institución eclesiástica habían dirigido al régimen constitucional durante el agitado período de la Cortes de Cádiz. La oposición frontal de la jerarquía eclesiástica al régimen gaditano se acentuó cuando se adoptaron medidas, (leyes desamotizadoras y de reforma de los regulares), que fueron percibidas como un atentado en toda regla a sus intereses. De ahí que al tener lugar la restauración del régimen absoluto, una parte del clero, liderado por la jerarquía, cometiera excesos en la persecución y represión

²⁹⁰ Decreto de 24 de abril de 1820

²⁹¹ Herrero, J Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, 1974, pág. 395.

de liberales y afrancesados. Esta violenta y fanática reacción era un fiel reflejo de la naturaleza del conflicto existente: la iglesia no estaba dispuesta a aceptar los valores, principios y reglas sobre los que reposaba el régimen constitucional. La virulencia en mostrar su profundo desacuerdo seguramente expresaba, más que un estéril deseo de revancha, la fragilidad de una iglesia politizada por los años de guerra, con profundas divisiones y tensiones en su seno y seriamente debilitada por las excomuniones y los procesos. No obstante, las manifestaciones exuberantes de piedad ²⁹², que tuvieron lugar durante los años de restauración, contribuyeron a encubrir la crisis interna de la iglesia y la espiritual de la sociedad, dando una apariencia de unidad posiblemente inexistente.

Al producirse la instauración del sistema constitucional en 1820, los liberales decidieron que había que contrarrestar la campaña contra el texto de Cádiz realizada por la Iglesia durante los años de reacción. De ahí la machacona insistencia para que los miembros de la Institución que había condenado por herética la obra de las Cortes, colaboraran activamente en la tarea de educación política constitucional. Este inexplicable planteamiento tenía cierta lógica. Sin duda se puede deber a la pobreza de la imaginación pero, más concretamente, respondía a la

²⁹² Una descripción de los festejos religiosos conmemorando el triunfo de la idea monárquica pura y la abolición de la soberanía nacional pueden hallarse en Santos Oliver, M. Mallorca durante la primera revolución, citado por Herrero. J en *Ibídem*.

creencia persistente y generalizada en que el influjo de la religión sobre la mayoría del pueblo era casi ilimitado; en virtud de lo cual, imaginaban que todo intento de reforma política tenía que hacerse "injertando los débiles vástagos de la libertad en el tronco del catolicismo" ²⁹³.

El 12 de abril de 1820, el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia dirigió una orden a los prelados eclesiásticos seculares y regulares:

"(...)Previniéndoles reinasen sobre sus subditos, a fin de que arreglasen su conducta al sistema constitucional y se abstuviesen de toda discusión política en el púlpito y demás parajes destinados al ejercicio del ministerio(...) "

Además, al amparo de los preceptos constitucionales, el Gobierno de acuerdo con la Junta adoptó medidas dirigidas a impulsar un mayor compromiso ²⁹⁴. En concreto se exigió a los miembros del clero que verificaran ceremonias solemnes de juramento de la Constitución y, desde los pulpitos, platicasen sobre sus virtudes. El sistema constitucional obtuvo del clero respuestas variadas que podríamos arbitrariamente agruparlas en tres posturas: resistencia activa, adhesión plena y cautelosa sumisión.

²⁹³ Blanco White, J. Cartas de España, Madrid, 1974, Carta 13.

²⁹⁴ Decreto 24 de abril de 1820.

Resistencia .

De un lado estaban quienes creían que con la constitución la religión se acaba. Los miembros de este grupo utilizaban la retórica reaccionaria, en concreto la tesis del riesgo, para negar su apoyo al nuevo régimen. A juicio de quienes compartían esta actitud, el sistema constitucional era una amenaza para ese bien supremo que es la religión²⁹⁵, en cuyo nombre y junto con el pueblo, lucharon contra el ejército invasor durante la guerra de Independencia²⁹⁶. Quienes pertenecían a este grupo se resistían a jurar la Constitución y desde los púlpitos declamaban sobre los peligros de " estos fatales tiempos".

La Memoria del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia²⁹⁷, en la parte relativa a "la policía superior eclesiástica y establecimiento de los regulares", incluía información sobre comportamientos de este tipo que sucedieron hasta la instalación de las Cortes. Daba cuenta el encargado del despacho que, a pesar de la orden de 12 de abril, "no se han contenido algunos eclesiásticos dentro de los límites de los deberes que la religión y las leyes imponen". Pasando a realizar un relato de incontinencias diversas, como "sermones subversivos", "conductas sospechosas de desafecto", "rumores

²⁹⁵ Sobre la lógica y una tipología de los argumentos reaccionarios véase Hirschman, A. Retóricas de la intransigencia. México, 1991.

²⁹⁶ Herrero, J., Ob.cit., pág. 226.

²⁹⁷ D.SS. Cortes, sesión de 12 julio 1820.

de procedimientos subversivos" :

" (...) El P. M. Maduga, de la orden de Santo Domingo, predicó un sermón subversivo y lleno de especies constitucionales (...). El corrector de la Victoria en Burgos, Fr. Miguel Gonzalez Cordavias, cometió igual delito en la parroquia de San Lorenzo(...)".

Además, teniendo noticias el Gobierno de que algunos Rdos. Obispos se hacían sospechosos por su conducta inspirando desafecto a la Constitución, se les dirigió un exhorto, de acuerdo con la Junta Provisional. Lo mismo hizo con diferentes canónigos que estaban en igual caso, a quienes se les reprendió y amonestó por conducto de su Prelado.

El apéndice a la Memoria incluía un parte remitido por el jefe político de la provincia de Sevilla en el que refería rumores preocupantes:

" (...) Empezaron a esparcirse rumores en esta ciudad de desafecto al sistema actual de gobierno: noticias de la corte, de Zaragoza y otras capitales aseguraban tener enemigos por todas partes; papeles incendiarios se comunicaban clandestinamente; (...) no he podido haber uno de estos papeles de combustión; sin embargo sé que los hay; está declarado judicialmente por testigos(...). Canónigos y prebendados de esta catedral hay que tienen contra sí la opinión general (...) se les amenazó de muerte por un anónimo

en los muros de la misma iglesia. Sacerdotes prostituidos, vuestras intrigas se han descubierto; persuadíos, que la primera sangre que va a derramarse es la vuestra, si hay el menor alboroto o reacción:(...) infames temblad, y no toméis el sagrado nombre de la religión para solapar vuestras comodidades. (...) D. Blas Ostolaza y D. Pedro García Coronel (...) se me aseguró tenían reuniones con personas sospechosas, y eran sus habitaciones el foco donde repartían los rayos de la insurrección (...).".

La prensa liberal, daba cuenta diaria de este tipo de "noticias desagradables". Su información al respecto era más detallada que la de ministro del ramo, y además no silenciaba los nombres de aquellos prelados que en el ejercicio de su sagrado ministerio no tenían el comportamiento que señalaban las leyes. De acuerdo con las críticas formuladas, es posible afirmar que de los eclesiásticos esperaban como mínimo: que exhortaran a sus súbditos la obediencia a la Constitución y platicasen entre los fieles sobre la bondad del nuevo sistema y la necesidad de obedecer las leyes dadas por el Rey y las Cortes.

La Constitución política de la Monarquía consagraba la libertad de la imprenta (art. 371) y abolía el tormento (art.303); sin embargo aquel derecho precioso fué despilfarrado atormentando regularmente a los eclesiásticos. La prensa sumamente interesada por las ceremonias de juramento, sermones, confesiones, rumores y conspiraciones,

recogía en sus páginas continuas denuncias y presuntas irregularidades en el comportamiento del clero que estuvo sometido a una vigilancia incómoda. Como muestra de una retahíla interminable recogemos unas cuantas noticias:

"(...) El obispo de Zamora, su cabildo y el obispo de Málaga, se hallan acusados ante la opinión pública de disidentes a la voluntad de la Nación y el Monarca(...) ²⁹⁸ ".

"(...) Se observa en muchos pueblos (tardanza y entorpecimiento) (...) no sólo no se ha jurado la Constitución, sino que ni aun se les ha proporcionado los medios para que la conozcan(..).¿ Creerá Vd. que en la villa de Almadones y otros pueblos de la provincia de Guadalajara aun no se ha practicado este acto religioso? ²⁹⁹ (...) ".

"(...)Sermón del fraile Valcarce (León) el domingo 12 de marzo en que llegó el memorable decreto del 7 de marzo insultando a los españoles. (...)No cesan de trabajar secretamente valiéndose del sagrado confesonario (...). Sé por un párroco (...)que han llegado a sus pies varios penitentes arrojados de los otros confesonarios; porque preguntados si admitían bien la Constitución, dijeron que sí, pues que en nada se oponía a la religión de sus padres.(...)Aún el cabildo no ha jurado la Constitución (...) y el obispo lo hizo ayer

²⁹⁸ El conservador N° 4, 30 de marzo 1820.

²⁹⁹El Conservador N° 13, 8 de abril 1820.

privadamente por sólo la precisión de haberse principiado las sesiones de las Juntas preparatorias para las elecciones de diputados³⁰⁰ (...)" .

"(..)Abuso del confesonario de los que se apellidan ministros del Altísimo contra la Constitución: Iglesia del Rosario y San Bernardo de Madrid ³⁰¹ (...)" .

"(...) De Málaga (..) la mañana del 4 se supo el Decreto de su Majestad por la ocupación de temporalidades de los clérigos (..) y juró el Cabildo la Constitución(..)³⁰² " .

Después de ofrecer como información un rumor inconcreto sobre "conspiración de religiosos indignos de ese nombre", venía el lamento :

"(...) Se dice existía (una conspiración) y se ha descubierto el 18 de este mes (..) (sus) ramificaciones se extienden a Toledo y otros pueblos (..) Sacerdotes y algún obispo que otro, que antes predicaban (..) sumisión a las órdenes del Rey, ahora predicán contra la expedida por su Majestad en punto a la Constitución llamándole iluso³⁰³ (...)" .

³⁰⁰ El conservador, n°14, 9 de abril 1820

³⁰¹ Ibídem.

³⁰², El Conservador, n° 16, 11 abril 1820.

³⁰³ El Conservador N° 17, 12 de abril.1820

Incluso los mezquinos conflictos privados podrían engendrar una denuncia pública:

"(..) Abogado de Jumilla escribe quejándose contra el cura párroco porque prohibió su discurso por el día de la publicación de nuestra sagrada carta³⁰⁴ (...)" .

Pero por encima de todo, lo que había era un miedo difuso a los eclesiásticos, percibidos en bloque como conspiradores, por sus virtuales comportamientos escandalosos:

" (...)Noticias de conspiración en Santiago: "Aquí estamos llenos de oscilaciones con los frailes". Anúncianse de muchas partes que algunos clérigos ilusos, tal vez protervos y vendidos a la persiana facción que intentaban mover la guerra civil (...) de nada más se ocupan que en inquietar las conciencia y en incendiar la ominosa tea de la discordia.
³⁰⁵ (...) " .

"(...)Nos apresuramos a denunciar un abuso escandaloso que es necesario que se reprima si han de afianzarse las nuevas instituciones(...). En la mañana del jueves 6(...) en la Iglesia de San Sebastian un eclesiástico manifestó a una penitente que no podía confesarla ni absolverla, pues la

³⁰⁴ El Conservador N° 26, 21 de abril 1820.

³⁰⁵ El Conservador n°41 6 de mayo 1820.

adhesión a la Constitución de que ella se gloriaba era mayor delito que un homicidio ³⁰⁶ (...)" .

Desde la prensa liberal aparecían comentarios alarmados por el impacto que podía producir en el pueblo, lo que percibían como actuación de desprecio y hostilidad del clero hacia las nuevas instituciones:

"(...) Los sujetos de poca instrucción a cuyos oídos lleguen los pérfidos y clandestinos susurros de que la Religión se acaba, de que el Rey ha perdido toda su autoridad, de que la Constitución no es más que la contribución directa; que oyen desde los púlpitos declamaciones sobre los peligros de estos fatales tiempos y de la boca de personas que estan habituados a respetar, insinuaciones (...), reticencias (...), que a cada momento confirman más y más sus temores ¿cómo no han de estar inquietos y agitados? ¿cómo han de deponer sus inveteradas prevenciones contra el sistema constitucional? que no pueden apreciar porque no lo conocen sino porque experimentan sus ventajas, y que no pueden experimentar estas sino acaso con una lenta y dudosa progresión. Sólo hay un medio, si no para instruirle de pronto al menos para tranquilizarle. El pueblo

³⁰⁶ Miscelánea N° 71 12 de abril de 1820 Tres días más tarde, aparecía inserta una exposición del clero de San Sebastián manifestando que "aman y han jurado la Constitución. Suplemento del Miscelánea N° 73, de 15 de Abril 1820..

de España es eminentemente religioso, oiga la voz de su obispo, y de su párroco que le anuncien y aprueben con claridad y firmeza que lejos de padecer detrimento la pureza de la religión, los legítimos derechos del trono y el bienestar de la patria, ganan mucho con el establecimiento de la Constitución(...) ³⁰⁷".

Una explicación sobre las dificultades que existían para que los curas explicaran al pueblo la Constitución y la contribuyeran a que fuera amada, la suministraba un párroco de Extremadura: hay curas que no la aman; que no la entienden; que temen comprometerse con sus prelados compañeros o vecinos. El citado párroco recordaba más adelante:

"(...) En 1814 se advertía a todo el que tenía que predicar que cuidase de desacreditar la Constitución, regalando a los que habían sido adictos a ella los epítetos de libertino, fracmasón, hereje (...) ateo, ³⁰⁸ (...)." .

El anónimo párroco, convencido de la necesidad de la instrucción, y de que corriera a cargo de eclesiásticos ilustrados, formulaba una propuesta:

"(...) Salir ahora de todas las diócesis misiones

³⁰⁷ Miscelánea n° 79, 29 de abril de 1820..

³⁰⁸ Miscelánea N° 78, 28 de abril de 1820.

políticas, encargadas a eclesiásticos virtuosos e ilustrados, que difundieren el conocimiento de los principios constitucionales entre la gente rústica, le desenvolviesen sus ventajas le demostrase su perfecta armonía con la religión de sus padres. (...) Los jefes políticos son los que deben dar impulso a esas mejoras: consolidar el régimen es la primera de sus incumbencias, la más importante de sus obligaciones. Las amonestaciones pastorales auxiliadas por las autoridades civiles surtirían sin duda muy buen efecto(...) "³⁰⁹ .

Adhesiones del clero.

El sacerdote extremeño debía pertenecer al segundo grupo de eclesiásticos, (en opinión de los partidarios del sistema constitucional el minoritario), que no vacilaron en animar a los fieles a que aceptaran sin el menor reparo el nuevo orden, porque consideraban que era favorable a la religión y base de la felicidad de los pueblos y los reyes ³¹⁰. Los integrantes de este grupo trataban de, (en expresión frecuentemente utilizada entonces), "desimpresionar" al pueblo, leyendo desde el púlpito el artículo doce , el "augusto exordio" de la Constitución³¹¹ y, además,

³⁰⁹Ibidem.

³¹⁰ Dufour, Del Catolicismo liberal, al liberalismo exaltado: el canónigo D.Santiago Sedeño y Pastor, en Rev.Trienio, mayo 1983.

³¹¹ Recuérdesse que el texto del preámbulo comenzaba: "En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre,Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad".

estableciendo comparaciones fantásticas entre la ley fundamental y los libros sagrados en los términos siguientes:

"(...) La libertad que nos concede (la Constitución) es muy semejante a la del Evangelio, pues así como éste nos libra de la esclavitud del pecado y del demonio, aquella nos pone a cubierto del despotismo, la arbitrariedad y del capricho (...) "³¹².

Como es fácilmente comprobable, la retórica simplista de los religiosos reaccionarios, exagerando los peligros del régimen liberal, quedaba con creces compensada con los alegatos de muchos de sus contrincantes progresistas, cuando se dedicaban a acentuar los efectos benéficos del sistema.

Si los enemigos del régimen ponían de relieve con sus argumentaciones, la incompatibilidad de la Constitución con la religión e insitían, por tanto, en el peligro de que la religión se pierda como en Francia; quienes lo apoyaban basándose en la equivocada creencia de que todo lo bueno viene junto, hablaron de la perfecta armonía de la Constitución con la religión de sus padres.

Por el realce que le dió la prensa, quizá merezca la pena recoger en extenso el discurso pronunciado por el

³¹² Dufour, ob.cit.

Párroco de Santiago, con ocasión del juramento que prestaron sus feligreses a la Constitución:

"(...) La Constitución, (..)producto de las luces y de las leyes fundamentales de la Monarquía(..). (...) La más cruel guerra fué la ocasión del mayor de todos los bienes: la Constitución(..). derribada por causa de los temores que inspiraron en el Rey (...)".

Después de "desimpresionar" sobre los males que podían temerse de la Constitución:

"(..) ¿La religión se retirará? no,(y citaba el artículo doce) (..); guardaos pues bien de creer a aquellos que identificando su bolsillo con la religión, hacen vanas e insensatas declamaciones para sorprender vuestra piedad donde no hay causa alguna que temer, son seductores que cubren con el manto de la religión sus groseras pasiones si quieren manifestar gran celo por su pureza (de la religión) que procuren acreditarla por el ejercicio de virtudes cristianas que respondan de la dignidad de su vocación por su desinterés, caridad, moderación, sufrimiento, por sentimientos de compasión con los miserables: así se acredita la religión y no por el medio de las prisiones y calabozos(...)."

Reflexionó sobre la inutilidad de la Inquisición que había sido abolida, ("puede hacer muchos hipócritas, jamás un

hombre religioso"), para concluir su discurso :

"(...) En el nuevo orden de cosas el estado gana todo y la religión nada sufre (...) ³¹³ ".

La importancia obvia del escrito consistía en que era un eclesiástico quien, desde una perspectiva religiosa, asumía la defensa de la causa constitucional y, al tiempo, arremetía contra los miembros del clero a los que desenmascaraba: alegaban defender la religión cuando "bajo el manto de la pureza de la religión" estaban defendiendo sus groseras pasiones y a un poder que ejerció su dominio valiéndose de instrumentos aterradores.

El mismo día que informaban, con satisfacción, sobre el juramento de la Constitución en las parroquias de la capital, (el día 25 de marzo), por los vecinos y el clero, los periódicos dieron puntual noticia de los comportamientos de adhesión al sistema constitucional que llevaban a cabo los prelados:

"(...)El 2 (...) predicó de Constitución en Segovia su obispo Isidoro Perez de Celis (...) (...)El 1 de Abril publicó el obispo de Salamanca D, Fr. Gerardo Vázquez una pastoral (...) desvaneciendo con mucha fuerza la infame voz esparcida por algunos malévolos de la incompatibilidad del régimen

³¹³El Conservador N° 3, 29 de marzo de 1820.

constitucional con la religión(...) "³¹⁴ .

Las páginas de la prensa prestaban especial atención, a aquellos obispos cuyas manifestaciones de adhesión podían ser mejor aprovechadas en interés de la causa. Conviene destacar, entre las actitudes de adhesión del clero, la del obispo de Barcelona. En una circular, considerada como modélica por los liberales, se atrevió a descalificar a los clérigos, (sus súbditos), que rechazaban el sistema constitucional y desde el púlpito al confesonario declamaban en su contra:

"(...)Cuál sea el objeto que se proponga cada uno de estos incautos, es difícil penetrarlo; pero lo cierto es que sea el que fuere no legitima los medios de que se valen, ni les autoriza para zaherir directa ni indirectamente la Constitución, para desacreditar la nueva forma de Gobierno, ni para presagiar males y calamidades de su establecimiento, pues este modo de proceder es diametralmente opuesto al sagrado carácter de ministros de Dios (...) "³¹⁵ " .

En el escrito que el 2 de Abril de 1820 dirigió al clero secular y regular el obispo de Barcelona, calificaba de:

"(...) crimen horroroso conducta de los eclesiásticos que en conversaciones esparcen temores pintando la

³¹⁴ Miscelánea N° 72, 14 de abril

³¹⁵ Miscelánea n° 78, 28 de abril de 1820.

Constitución jurada por el Rey (...) como presagio de ruina de la Religión ³¹⁶ (...)".

Sin embargo, el apoyo de los eclesiásticos no era muy amplio ni tampoco debió ser muy claro. Por lo cual algunos periódicos, en línea con las orientaciones del Gobierno, realizaron una llamada para conseguir un compromiso decidido y una mayor movilización, con el objetivo de "disipar las siniestras impresiones que por tanto tiempo ha recibido el vulgo ignorante e incauto":

"(...)Entre la multitud de cartas pastorales, órdenes circulares, sermones y demás producción de esta clase que se componen con motivo del restablecimiento del régimen constitucional, que llegan a nuestras manos, vemos muy pocas que a imitación de la de los Srs. Cardenal arzobispo de Toledo y obispo de Barcelona hablen con lenguaje franco, decidido y constitucional, cual conviene a las circunstancias. En la mayor parte de estos escritos encontramos ciertamente máximas de doctrina sana y católica sobre la obediencia a las leyes y a las autoridades; pero las vemos expresadas en términos tan vagos que pueden aplicarse a todos los tiempos y a todas las situaciones, a todos los gobiernos reconocidos espontáneamente o por violencia, justos o despóticos, vigorosos o débiles. Los hombres ilustrados no se contentan con esto y exige más de los ministros de una

³¹⁶ Miscelánea N° 78, Viernes 28 de abril 1820

religión que es el complemento de la perfección de las instituciones políticas y civiles, y de unos funcionarios públicos encargados de la enseñanza de la moral. Y en efecto ¿cómo con este lenguaje, que hemos oído calificar de ambidestro y acomodaticio, se han de disipar las siniestras impresiones que por tanto tiempo ha recibido el vulgo ignorante e incauto, y que por una obstinada sequedad le inspira todavía la más atroz perfidia? (...) "³¹⁷.

Los eclesiásticos que aceptaban el sistema constitucional, que eran una nutrida minoría, contaban con el problema de que su posición les situaba frente al Nuncio Apostólico ³¹⁸ quien, "a la sombra de doctrinas centonas y anticuadas", desde el principio de la feliz revolución declaró una guerra abierta al sistema constitucional y alentó posiciones reaccionarias ³¹⁹.

Cautela en el clero.

Por último, estaban aquellos miembros del clero que combinaron su silenciosa sumisión con la adopción de un comportamiento camaleónico. Los integrantes de este grupo

³¹⁷ Miscelánea n° 79, 29 de abril de 1820.

³¹⁸ Dufour atribuye el fracaso del sistema constitucional al papel reaccionario de la Iglesia acaudillada por Giustiniani. Ver ob., cit..

³¹⁹ Las expresiones pertenecen al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, al estallar el conflicto con Roma por la negativa a admitir como nuevo embajador a Villanueva, propuesto por el gobierno. D.SS. Cortes sesión de 23 de enero de 1823.

fueron descritos en términos muy expresivos por varios rasgos; en primer lugar porque elaboraban escritos en los que se encontraban:

"(...)Ciertamente máximas de doctrina sana y católica sobre la obediencia a las leyes y a las autoridades; pero las vemos expresadas en términos tan vagos que pueden aplicarse a todos los tiempos y a todas las situaciones, a todos los gobiernos reconocidos espontáneamente o por violencia (...)".

A estos "funcionarios públicos encargados de la enseñanza de la moral", les reprochaban su lenguaje y escasa pasión:

"(...)¿Cómo con este lenguaje, que hemos oído calificar de ambidestro y acomodaticio, se han de disipar las siniestras impresiones que por tanto tiempo ha recibido el vulgo ignorante e incauto, y que por una obstinada sequedad le inspira todavía la más atroz perfidia"(...) ³²⁰".

Como ejemplo de este comportamiento de cautelosa sumisión, puede considerarse la carta pastoral que dirigió a sus feligreses, por intermedio de los párrocos, el Obispo de Tortosa:

"(...) En 17 del corriente el jefe político (...) nos

³²⁰ Miscelánea n° 79, 29 de abril 1820.

ofició, pidiéndonos circulásemos las correspondientes órdenes para hacer saber a todos nuestros súbditos que nuestro augusto Monarca había jurado la Constitución (...) ; que la indicada Constitución excluye toda creencia heterodoxa y protege por ley fundamental la religión católica(...); y últimamente que ordenásemos al clero secular y regular (...) que jurase con la mayor solemnidad la mencionada Constitución política. Esto nos dice el señor jefe político; y nosotros os mandamos (...). Hemos jurado con nuestro cabildo y con las comunidades religiosas de esta ciudad la Constitución política de la Monarquía, porque habiéndola jurado nuestro católico Monarca, no podemos ni debemos negarnos a jurarla, del mismo modo que estamos obligados a jurarla(...). Persuadid a vuestros feligreses que la Constitución no solo declara la religión católica(...) única verdadera(...) sino que excluye toda secta, (...). Así, aunque se haya abolido el tribunal de la inquisición, no por eso deben temer los fieles que falte (...) la fé(...) "³²¹...

Desde las páginas de la prensa, comportamientos tibios y escasamente comprometidos con el régimen, como el del obispo de Tortosa y otros, fueron percibidos como poco entusiastas. El temor era que pudieran ser interpretados por el pueblo, como una velada condena del sistema constitucional.

³²¹ Carta pastoral de D. Manuel Ros de Medrano, Obispo de Tortosa a todos los párrocos. Gaceta de Madrid, 18 de abril.

Parecido temor les infundía comprobar que sus obispos, impávidos, optaban por no hacer nada. De ahí que presionaran sobre algunos prelados para obtener de ellos mayor compromiso. Como muestra de esta presión puede considerarse la respetuosa exposición que la Sociedad Patriótica Constitucional de León dirigió a mediados de mayo al Ilmo. Sr. Obispo, que en torno a la celebración de las elecciones se hallaba de visita pastoral por su diócesis.

"(...) Ilmo. Sr. La Sociedad Patriótica constitucional de esta ciudad (...) ha visto no sin dolor (...) a aquellos que por su carácter sacerdotal y por una de sus primeras obligaciones debieran haber sido los primeros en disipar las tinieblas de la ignorancia, ser unos fríos espectadores del sistema actual de gobierno, o unos equivocados profetas de lo que está tan distante de suceder(...)".

Los miembros de la Sociedad patriótica ponían en conocimiento del Obispo el contenido del decreto de 24 de abril por el que "nuestro amado Monarca", mandaba que en las Iglesias y en los conventos se explique la Constitución; y lamentaban que hasta ahora en este obispado nada se hubiera hecho:

Ilmo Sr.: La Constitución jurada por nuestro Monarca el 9 de marzo (...) ni ataca a la santa religión de nuestros abuelos, ni abre la puerta para que se desprecie a sus ministros(...). Ella prescribe solamente lo justo; y los

abusos introducidos en los siglos de barbarie llamarán la atención de nuestro gobierno (..). El suave viento de la filosofía ha comenzado a disipar la lóbrega nube de la superstición(...)".

Después de señalar la ignorancia como el manantial perenne de todas las plagas que han afligido a la humanidad los firmantes de la exposición solicitaban la colaboración del prelado:

"(...) ¿Seremos tan insensatos que demos lugar a que persevere por más tiempo los ignorantes en el error de que la Constitución es opuesta a nuestra religión cristiana? (..) haga vuestra ilustrísima lo que esté de su parte para que desaparezca esta impostura ³²²(...)".

Pero no resultaba fácil la colaboración de los prelados. con el sistema constitucional. Uno de los más comprometidos inicialmente, llegando a hacer mediante pastoral su adhesión pública al nuevo sistema, como vimos fué el obispo de Barcelona. En su extensa circular, dirigida a los sacerdotes de su diócesis, les proponía acatamiento al sistema y no sembrar la desunión en términos que no dejaban lugar a dudas:

"(...) Dejemos a la Nación y al Rey en la justa libertad

³²² El Conservador N° 63 28 de mayo 1820

de hacer las leyes (...) cuidemos solo de obedecerlas. El mayor de los males, y que puede sepultar a la España en un abismo de desgracias es la división de voluntades, y el fomentarla (...) es un delito horroroso. Cuántas lagrimas tendría que derramar la Iglesia si viera que alguno de sus ministros, que deben ser el consuelo, el alivio, la guía y el símbolo de la paz entre los fieles, por fines particulares o por un celo indiscreto, intentasen dividir los ánimos de los españoles (...). Yo me estremezco al considerara solo que esto cabe en la posibilidad (...). La España puede cubrirse de gloria ... mientras el norte de todos los ciudadanos sea, (...) la religión (...) y mientras no se permita que la voz de desunión ni la de partido resuene entre nosotros ³²³(...)".

Solicitaba con firmeza al clero un comportamiento ejemplar sin desvíos ni sembrar la desunión:

"(...)Confío que todo el clero de esta diócesis se comporte de un modo irrepreensible, (...) mas cuando por desgracia hubiese alguno que se apartase de esta senda, no dude (...) que será castigado con la mayor severidad (...) no disimulo en mis súbditos desvío alguno, que ya sea por indiscreción, por un falso celo o por malicia pueda contribuir a sembrar la desunión³²⁴ (...) "

³²³ Gaceta de Madrid, 2 de mayo de 1820, la pastoral estaba fechada en Barcelona el 2 de abril.

³²⁴ Ibídem.

El prelado refería las quejas motivadas por el comportamiento de algunos eclesiásticos, las injustas calumnias dirigidas contra el clero y, en fin, solicitaba obediencia a un régimen que la Nación y el Rey habían aceptado:

"(...) Con el más vivo sentimiento he oído quejas sobre el modo con que proceden en las circunstancias actuales algunos pocos eclesiásticos inconsiderados de uno y otro clero, que en sus conversaciones públicas y privadas no reparan en sembrar la desconfianza, y en pintar el nuevo sistema adoptado por el Rey y por la Nación española como un presagio seguro e infalible de su próxima ruina, y como una señal indubitable de que la religión santa de Jesucristo va a desaparecer de entre nosotros. No dudo que a algunas de estas quejas puede haber dado motivo la calumnia con que los espíritus inquietos y poco amantes de nuestra santa religión procuran desacreditar al clero (...); pero tampoco dudo que entre los muchos eclesiásticos (...) que se hallan en esta ciudad y en toda la diócesis, puede haber algunos indiscretos que por ignorancia, o por temor de que el nuevo sistema perjudique su comodidad o sus intereses, se atrevan a soltar expresiones, y a difundir ideas contrarias a las nuevas instituciones que la Nación ha proclamado, que el Rey ha admitido y abrazado voluntariamente, y que con la mayor firmeza y aplauso va estableciendo en toda la España

(...) "³²⁵.

A los "incautos" que, contra el carácter de su ministerio, desacreditaban la nueva forma de Gobierno, les proponía como modelo de conducta la que observó el divino Maestro:

"(...) Unos ángeles de paz deben ser los sacerdotes en medio de los fieles para instruirlos, para guiarlos, para socorrerlos y para consolarlos; pero jamás para sembrar entre ellos la desunión ni para alarmarles con ideas que puedan encender el fuego destructor de la discordia. Es tanto más perfecta la conducta de los ministros del Señor, en cuanto más se asemeja a la que observó su divino Maestro, el cual en toda la larga carrera de su predicación jamás entró en cuestiones políticas, ni se mezcló en materias del gobierno (...) y lejos de esto obedeció sus leyes y preceptos, y se sujetó a satisfacer sus tributos³²⁶ (...)".

La pastoral del obispo de Barcelona fué objeto, según indicamos, de especial atención; los liberales llegaron a proponerla como el modelo de compromiso a seguir. Sin embargo, un año después, en Abril de 1821, el obispo de Barcelona fué tachado de escasa adhesión hacia el sistema constitucional y expulsado de su diócesis. Entre su jaleada

³²⁵ Gaceta de Madrid 2 de mayo 1820. La pastoral está fechada en Barcelona el 2 de abril.

³²⁶ Ibidem.

pastoral y la expulsión tuvieron lugar dos hechos significativos que polarizaron la vida política. De un lado, la ley de reforma de los monacales y, de otro, el aplastamiento de la revolución de Nápoles en nombre de la Santa Alianza.

A modo de conclusión, se puede afirmar que el conflicto fundamental, surgido en las Cortes de Cádiz, entre la Iglesia y el sistema constitucional persistía en el Trienio. Los graves enfrentamientos obedecían a que los supuestos valorativos básicos en que reposaba el régimen constituían una amenaza al poder de la iglesia. Las persecuciones habidas durante los años del sexenio absolutista, seguramente contribuyeron a agravar el enfrentamiento y dieran a la contienda unos aires de revancha.

Los liberales escarmentados con la pasada experiencia, desconfiaban globalmente del clero y sometieron a sus miembros a una estrecha vigilancia. Por una parte la prensa y las sociedades patrióticas, halagando a los que se comprometían, fulminando críticas a los fríos espectadores y amenazas contra los adversarios. Aquellos incautos eclesiásticos que, no sintiéndose intimidados por la presión de los liberales, se empeñaran en ejercer su derecho a la libertad de expresión contra el sistema constitucional, se entendió que iban contra el interés general de la sociedad, y por lo tanto cometían un delito.

Aunque siempre resulte arriesgado reflexionar de forma ponderada sobre estos asuntos, con frecuencia tiene uno la impresión de que eran desproporcionadas la severidad y dureza de las autoridades del sistema constitucional hacia los eclesiásticos, constituidos en el centro de la atención política³²⁷.

Para una correcta comprensión de la posterior escalada reaccionaria, que tuvo lugar durante los años del Trienio, y fué más allá de la simple retórica, conviene no pasar por alto los ataques frontales contra la autoridad de la Iglesia, su patrimonio, las personas y la propia institución eclesiástica.

Dentro de esta ofensiva hay que enmarcar la campaña de crítica burlesca, a través de los papeles periódicos y folletos, a que fué sometida la Iglesia. Esta campaña de descrédito, que parecía dirigida a conseguir que el influjo del clero dejase de reinar sobre el espíritu del pueblo, comenzó nada más llevarse a cabo el cambio de régimen. Uno de los ejemplos más sobresalientes fueron los Lamentos del Pobrecito Holgazán³²⁸. Reimpresos en los principales núcleos

³²⁷ Según el decreto de 17 de abril de 1821, el eclesiástico que en sermón al pueblo, carta pastoral o edicto, tratase de que no se guarde la Constitución podía ser declarado indigno del nombre de español, perdería todos sus empleos, sueldos, honores y temporalidades, sufriría ocho años de reclusión y después sería expulsado para siempre del territorio de la Monarquía.

³²⁸ Las famosas Cartas aparecieron anunciadas en la prensa periódica. Así junto a la noticia de que el "heroico pueblo... dispensó una entrada triunfal al coronel Arco-Agüero..." Figuraba

de población, las caricaturas de Miñano debieron su éxito no tanto a los méritos literarios -que los tenía-, ni a los vicios escandalosos que denunciaba, sino sobre todo a que halagaba viejos prejuicios y alimentaba la hostilidad que existía entre los grupos sociales de los núcleos urbanos hacia la iglesia y sus eventuales abusos.

No es difícil imaginar que esas invectivas, a veces despiadadas, contra un clero que los liberales tendían a percibir como tercamente aferrado a sus privilegios y poco favorable a la libertad, -a pesar de las continuas y constantes abrumadoras evidencias en contrario-, estorbaran la cooperación de los eclesiásticos, incrementaran su hostilidad hacia el régimen y propiciaran, sobre todo a partir de las medidas religiosas que pronto comenzaron a ser aprobadas por las nuevas Cortes, que el conflicto constitucional adquiriera la forma de lucha religiosa y, en el seno de la propia Iglesia tomara el carácter de guerra teologal³²⁹. Puede considerarse como indicador de la tensión que llegó a alcanzar el mencionado conflicto, el número de clérigos que, a los dos años de existencia del régimen, encabezaron las partidas realistas y la hipertrofia de los

un Aviso: "Publicadas tres cartas de los Lamentos, recomendamos esta obrita". Ver El Conservador N° 24, de 19 abril, 1820.

³²⁹ M. Revuelta, . ob.cit.

componentes de índole religiosa en esos levantamientos ³³⁰.

A la vista de lo anterior, uno puede sentirse tentado a pensar, quizá equivocadamente, que existía un empeño inusitado en imaginar a la Iglesia como más amenazante de lo que realmente era. La tolerancia que los liberales hicieron gala con otros grupos sociales, instituciones y personas, que habían apoyado el antiguo régimen y prosperado en su sombra (nobleza, jueces, empleados públicos), se echa en falta en el caso de la Iglesia. Es obvio que requería tiempo y esfuerzo limar viejas asperezas, pero no parece que ese objetivo formara parte del contenido del programa político liberal. De los eclesiásticos se exigía más y la inevitable intransigencia eclesiástica se toleraba menos, a pesar de que no tenía, como sucedió en las etapas iniciales un carácter general.

Como hipótesis es posible conjeturar que el clero podía estar funcionando como chivo expiatorio. Ciertamente los eclesiásticos eran temidos y canalizaban el sentimiento difuso de peligro y la hostilidad existente. Pero que los liberales proyectaran sobre la poderosa institución eclesiástica el sentimiento de desprecio y hostilidad acumulado contra el antiguo régimen, el Monarca y esa poderosa sociedad cortesana a quien no podían odiar, acabó

³³⁰ Torras, J ha analizado con rigor la ambivalencia de esos levantamientos en su excelente trabajo, Los alzamientos realistas de 1822 en Cataluña, incluido en su obra Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823, Barcelona, 1976.

provocando en el clero, (convertido en enemigo), una reacción brutal que muy pronto impidió el normal funcionamiento del sistema constitucional.

Sociedades patrióticas.-

En la gran empresa de educación política constitucional, las sociedades patrióticas desempeñaron un papel decisivo. Al producirse el cambio de régimen, las Sociedades Patrióticas poblaron distintas ciudades de la geografía peninsular con el propósito decidido de consolidar el régimen constitucional, difundiendo la instrucción, "entre un pueblo dominado largo tiempo por tantas especies de despotismo", para hacerlo conocer y apreciar. Un artículo inserto en la prensa moderada de la época aludía a ellas en los términos siguientes:

" (...) El deseo de conservar y mejorar su existencia social, es sin duda el que ha hecho a útiles ciudadanos mirar las reuniones públicas como un baluarte de sus derechos y un medio para mantenerlos(..) y a este impulso(..) se han juntado otros motivos(..). El principal es consolidar el régimen constitucional, difundiendo la instrucción para hacerlo conocer y apreciar, y oponiéndose a toda tentativa que lo ataque³³¹ (...)".

³³¹ Miscelánea, n°95, 3 de junio 1820.

Al presentarse a las Cortes el proyecto de ley que regulaba las Sociedades patrióticas, los redactores del dictamen comenzaban refiriendo la historia de las sociedades:

"(...) Erigidas, por el más desinteresado patriotismo y sin la concurrencia de la autoridad, para sostener la vacilante opinión pública en los días de mayor crisis³³² (...)" .

En opinión de Gil Novales muchas de esas sociedades no surgieron tanto de una práctica liberal, como de la emoción condenatoria del régimen anterior³³³ .

Además de crear opinión, las sociedades realizaron importantes cometidos. El dictamen de la comisión de Cortes que presentó el proyecto de ley sobre la libertad de discusión de materias políticas hacía un recuento de ellos:

"(...) En los días de mayor crisis, cooperaron a preservar tal vez la Nación de las reacciones ominosas, calmando la ansiedad de los leales, enfrenando las maquinaciones de los disidentes, y templando la vehemencia de los impetuosos (...). En los momentos de oscilación, ejercieron cierta potestad tribunicia, forzando por decirlo

³³² D.SS. Cortes, sesión 7 septiembre de 1820.

³³³ A. Gil Novales, Las Sociedades Patrióticas, Madrid, 1975.

así, en sus mismas trincheras a las autoridades precarias e interinas para que no se desviasen una sola línea de la senda constitucional ³³⁴ (...) "

La voluminosa y documentada investigación que sobre las Sociedades Patrióticas ha realizado Gil Novales, ha contribuido a ponderar la diversidad de sociedades y la distinta importancia de esas reuniones públicas en función de los núcleos urbanos en los que estuvieran radicadas. Normalmente aquellas que se encontraban en las ciudades más populosas, que contaban con líderes de calidad, el apoyo de órganos de prensa o autoridades locales a su favor, lograron gozar de un mayor prestigio y alcanzar una mayor repercusión nacional y éxito en sus actuaciones. Pero lo que resulta innegable es que en un país analfabeto, sin partidos políticos y con escasa tradición de participación en la vida política, estas reuniones adquirieron en el nuevo régimen un gran protagonismo.

En los momentos iniciales del sistema constitucional las Sociedades contribuyeron, con su sola presencia, a dotar al régimen de una fuerza de la que carecía. A través de actuaciones de presión , (manifestaciones, d° de petición), sobre las autoridades para la adopción o veto de medidas diversas (rebaja del pan, licencia en el ejército) crearon adhesiones y dieron estabilidad al sistema. Mediante sus

³³⁴ D.SS. Cortes, sesión de 16 de septiembre de 1820.

sesiones, organizando actos cívicos y conmemoraciones, influyeron en la opinión, vigilaron las autoridades y contuvieron la exaltación. Por último, a las Sociedades se les atribuyó el mérito del buen resultado en las primeras elecciones.

Sin embargo, las Cortes actuaron contra las reuniones libres de los ciudadanos "donde pueden instruirse las clases pobres que no tienen medios de mantener sus hijos en universidades", y a las que acudían para discutir libremente sobre temas políticos, aficionarse a la libertad y ocuparse de la causa del Estado³³⁵. Su pretensión fué la supresión de las Sociedades, que empezaron a ser percibidas como peligrosas por lo que significaban de freno al poder de las instituciones.

Junto con las Sociedades Patrióticas, participaron en la difusión de las nuevas ideas los papeles periódicos y folletos que surgieron en una cantidad que llegó a sorprender a los propios liberales ³³⁶. Puede afirmarse que el periodismo político, nacido en Cádiz ³³⁷, conoció en el Trienio una auténtica explosión. No eran órganos de expresión de selectas minorías, sino de educación y

³³⁵ D.SS.Cortes sesión de 14 octubre de 1820, intervención del diputado por Granada Solana.

³³⁶ Revuelta, M. Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. El Trienio Constitucional. Madrid, 1973. pág. 54.

³³⁷ R, Solís, El Cádiz de las Cortes, Madrid, 1954, pág.457.

propaganda, destinados a los ciudadanos de todos los niveles culturales y sociales, hasta casi analfabetos.

Por medio de editoriales ("Variedades") o a través de secciones fijas, los periódicos comenzaron a comentar el texto constitucional y las leyes que lo desarrollaban. Sus glosas estuvieron dirigidas inicialmente a desvanecer errores, "que han cundido entre personas débiles y poco instruidas", como la compatibilidad del Rey y la religión con la Constitución³³⁸. Posteriormente algunos periódicos llevaron a cabo comentarios sistemáticos del articulado. Merece especial atención los emprendidos, desde el primer número, por el Universal Observador, periódico de tendencia afrancesada:

" (...) Ocurriendo aquellos dolorosos sucesos cuya memoria estremece a todo español, vimos a la patria moribunda fluctuar en un mar de ansiedades (...), faltaba una ley fundamental (...) El cielo benigno oyó los votos de la nación, y cuando se veía confinada entre el mar y la muerte proclamó en Cádiz una Constitución moderada de gobierno monárquico representativo: Constitución que esencialmente es la antigua ley fundamental de España (...) "³³⁹.

En esta empresa de divulgación constitucional emprendida

³³⁸ Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura, n° 58, 13 de marzo y n° 72 de 14 de abril.

³³⁹ Universal Observador, n° 1, 12 de mayo de 1820.

por los periódicos también colaboraron los folletos y, en especial, habría que destacar dos tipos. De un lado, los publicados bajo la denominación genérica de Catecismo Político o Catecismo Cristiano Constitucional, pensados "para la ilustración del pueblo, instrucción de la juventud, y uso de las escuelas de las primeras letras" ³⁴⁰. De otra parte, las denominadas Cartillas, que poseían un carácter más polémico y , entre ellas, unas estaban dirigidas a instruir a los ciudadanos sobre el funcionamiento de los tribunales y otras, redactadas a veces en tono jocoso, destinadas a los diputados sugiriéndoles las reformas que había que emprender para atender las urgencias de la nación ³⁴¹.

³⁴⁰ A.J.C.Catecismo Político Arreglado a la Constitución de la Monarquía Española, Madrid, 1820., D.R.V y F. Catecismo Político , Barcelona., Catecismo Cristiano Constitucional, Palma de Mallorca, 1823.

³⁴¹ Cartilla Forense o Continuación del Catecismo Político Constitucional, Valencia, 1820.; Cartilla Crítico-Política Instructivo-constitucional para el gobierno de los señores diputados de Cortes, Madrid, 1820.

C A P I T U L O 4

Capítulo 4. Sistema Constitucional: Cortes y Elecciones.-

4.1. Cortes y Representación.

En el Manifiesto regio del 10 de marzo, Fernando VII anunciaba que había jurado la Constitución y, a renglón seguido, que iba a convocar Cortes:

"(...) He jurado esa Constitución por la cual suspirábais, y seré siempre su más firme apoyo. Ya he tomado las medidas oportunas para la pronta convocación de las Cortes³⁴² (...)"

Desde la perspectiva liberal, una razón obvia, pero sustancial, para no demorar la reunión de Cortes era que en tanto no "estuviese en planta" la institución fundamental del nuevo régimen y arreglados a la Constitución los demás poderes del Estado, ni el "sagrado Código" estaba realmente en vigor, ni la Nación había recobrado su soberanía plena.

Pero además de la necesidad de cancelar, cuanto antes, el período de provisionalidad, en que el poder del Estado estaba en manos de las Juntas, el Rey y el Gobierno, existían otros motivos que aconsejaban la inmediata convocatoria de

³⁴²Gaceta Extraordinaria de Madrid, 12 de marzo de 1820.

Cortes: los partidarios del sistema constitucional veían la Representación Nacional como el "valladar de la libertad" recién conquistada y la pieza clave del nuevo edificio.

Hasta tal punto había quedado encarnado en las Cortes el nuevo régimen monárquico representativo que, durante este segundo período constitucional, iba a generalizarse la significativa expresión "el gobierno de las Cortes" por contraposición al antiguo en el que, se dirá:

" (...) ciertas clases por el azar del nacimiento o por los medios de seducción o abusando de su carácter obtenían exclusivamente todos los puestos o destinos(..), mirando el estado como su patrimonio (...) ".

Sin duda contribuyó a esta identificación del sistema constitucional con las Cortes el comportamiento seguido por el Monarca y los enemigos del sistema constitucional al finalizar la contienda. Conviene recordar a este respecto que el aplastamiento de la Constitución y la posterior implantación del régimen absoluto se realizaron el año 1814 procediendo contra la representación nacional y encarcelando a sus diputados más significativos.

La especial atracción que la institución de las Cortes ejercía sobre los ciudadanos fué puesta de relieve por Martínez de la Rosa. Cuando el régimen se hallaba amenazado desde el exterior por las potencias de la Santa Alianza, y

desde el interior por una crisis de gobierno y conspiraciones, el diputado por Granada no dudó en afirmar:

"(...) La libertad está asegurada mientras subsistan Cortes en España, y esta verdad es tanto más evidente, cuanto que en la época de infausta memoria en que se destruyó la Constitución fué menester cerrar esas puertas para poner las cadenas a la Nación, (...) La idea de nuestras antiguas Cortes, sepultada en el olvido por el despotismo, y conservada solo en los polvorosos archivos de los eruditos, se ha unido al recuerdo glorioso de nuestra independencia. Esta idea de las Cortes está tan arraigada en los españoles, que en estos tres meses como ha manifestado el señor Giraldo, al menor asomo de peligro, a la menor nube que se levanta sobre el horizonte político, el deseo general, la voz pública, el anhelo de todos eran las Cortes. Dije que sería libre la Nación mientras éstas subsistiesen, y ahora añado que subsistirán mientras subsiste en la Nación esa persuasión íntima ³⁴³(...)".

En el entramado de poderes diseñado por la Constitución³⁴⁴ las Cortes gozaban de una superior autoridad

³⁴³ Ver D. SS.Cortes, sesión 3 de marzo de 1821.

³⁴⁴ De la abundantísima bibliografía sobre la Constitución de 1812 me permito escoger: R.Salas, "Lecciones de Derecho Público Constitucional", Madrid 1821; M.Fernández Almagro, Orígenes del régimen constitucional español, Barcelona 1976; L. Sanchez Agesta, Historia del Constitucionalismo español, Madrid.1964; J.Solé Tura y E.Aja, Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936), Madrid 1978.

jerárquica. La supremacía de las Cortes derivaba del postulado ideal, recogido por los hombres de Cádiz, según el cual el funcionamiento del estado debía reposar en el Derecho. El pasaje al que nos referimos, que merece la pena citar en extenso, decía:

"(...) reglas fijas, claras y sencillas que determinan con exactitud y precisión la autoridad que tienen las Cortes de hacer leyes de acuerdo con el Rey, las que ejerce el Rey para ejecutarlas y hacerlas respetar, y las que se delega a los jueces y tribunales para la decisión de todos los pleitos... con arreglo a las leyes del reino (...) "³⁴⁵.

El Título que la Constitución dedicaba a las Cortes, (Título III, arts 27 al 167), tenía una extensión desmesurada, (141 artículos distribuidos en 11 capítulos), y comprendía preceptos tan heterogéneos como legislación electoral y normas de derecho parlamentario. Sus artículos regulaban su composición, facultades de las Cortes, elecciones, funcionamiento, formación y aprobación de las leyes, Diputación permanente y Cortes extraordinarias.

Reflejo de la supremacía de las Cortes sobre los restantes poderes del Estado era el lugar que el Título ocupaba en el articulado del texto constitucional. Estaba colocado delante de los preceptos que regulaban lo referente

³⁴⁵ Discurso Preliminar, pág. 27.

al poder regio, (Título IV arts. 168 al 241), y los Tribunales de justicia (Título V, arts. 242 al 308).

Pero lo que realmente delataba esa superioridad era su particular organización y las competencias atribuidas por el Código. El augusto cuerpo soberano de la representación nacional gozaba de absoluta autonomía y se reunía automáticamente, por ley, todos los años (art.104)³⁴⁶. Ningún poder, ni siquiera el Rey, podía suspender o disolver sus sesiones (art. 172,1). El Rey sólo podía influir en las Cortes para prorrogarlas o efectuar una convocatoria extraordinaria³⁴⁷ (arts. 107 y 162,3).

Las Cortes tenían asignadas competencias fundamentales para el funcionamiento del Estado: legislativas, interpretativas, económicas, presupuestarias, financieras, políticas, de administración y fomento, judiciales (art. 131). En el desempeño de sus vastas competencias estaban sujetas exclusivamente a la Constitución. Este rasgo marcaba una ostensible diferencia entre la asamblea legislativa y los restantes poderes del estado, cuya actuación debía discurrir de acuerdo con las leyes emanadas por las Cortes³⁴⁸.

³⁴⁶ Discurso preliminar, pág. 38.

³⁴⁷ El Monarca aprovechó esta facultad, para expresar su desagrado hacia el Gobierno, no acudiendo al cierre de la primera legislatura evitando así, pronunciarse sobre la solicitud de Cortes extraordinarias. D.SS. Cortes sesión de 9 noviembre de 1820.

³⁴⁸ Los artículos constitucionales insistían infatigablemente en este aspecto. Véanse, entre otros, los arts. 170, 173, 179, 373.

Sólo ante las Cortes eran responsables los Secretarios de Despacho (indispensable contrapartida de la irresponsabilidad del Rey) y demás empleados públicos (art. 131, 25). Únicamente ellas tenían competencia para suspender las formalidades prescritas en defensa de los derechos de los ciudadanos (art.308), proceder a la reforma de la ley fundamental (arts. 376 y sigs.), asumir, de forma efectiva, la defensa de la Constitución (arts. 160,1 y 372 y sigs.). Por último, las Cortes tenían atribuida la estremecedora competencia de inhabilitar al Monarca (art. 162).

No obstante la superioridad jurídico-formal de las Cortes, los años del Trienio pusieron de relieve la especial interacción y la eventual dependencia existente entre el poder ejecutivo (Monarca y Gobierno) y la asamblea legislativa, y de qué diferentes maneras el Monarca podía afectar mediante su decisiones, el ejercicio del poder de veto y la política de nombramientos, el funcionamiento de las Cortes.

En efecto, como iremos viendo en su momento, el Monarca podía llevar a cabo actuaciones muy variadas para entorpecer el funcionamiento de las Cortes. Entre otras desatender la solicitud de convocatoria de Cortes extraordinarias, para finalizar proyectos en curso o abordar asuntos importantes; o interferir en el funcionamiento de las Cortes extraordinarias, requiriéndolas para tratar sobre asuntos ajenos al objeto de la convocatoria.

Asímismo el Rey entorpeció sistemáticamente el funcionamiento de las Cortes mediante la destitución, en momentos clave, de los Secretarios del despacho que contaban con la confianza de la cámara y también mediante el nombramiento o el mantenimiento de quienes carecían de esa cualidad.

Cuando en la asamblea constituyente gaditana los diputados debatieron sobre la representación, los partidarios del antiguo régimen esgrimieron su opinión en contra de una asamblea única y electiva y defendieron que las Cortes:

(...) " contrapeso que debe tener la autoridad real para moderar su poder (...) no deben ser un cuerpo homogéneo sino compuesto de cámaras separadas o estamentos (...) ³⁴⁹ " ;

Sostuvieron su opinión con abrumadoras razones históricas, políticas, de interés estatal y, en fin, por las mismas Cortes. Sin embargo, prosperó y quedó plasmada en la Constitución la propuesta, defendida por los liberales, de unas Cortes:

" (...) fundadas en el principio de un solo cuerpo y electivo (...) "

³⁴⁹ El texto entrecomillas pertenece a la intervención del diputado Inganzo. D.SS. Cortes Generales y Extraordinarias. Sesión de 12 de septiembre de 1811.

El antiguo modo de congregar las Cortes fué rechazado por ser imperfecto, por no ser uniforme en el país y, además, " no ser compatible con un buen sistema representativo"³⁵⁰.

Ciertamente, en el texto del Discurso Preliminar, leído en las Cortes constituyentes al presentar el proyecto de ley fundamental - , y durante el desarrollo de las deliberaciones, llegó a reconocerse que las antiguas Cortes se congregaban por estamentos. Pero simultáneamente, invocando el principio de soberanía nacional, fué proclamado el derecho de las Cortes a hacer novedad.

La innovación que introdujeron los redactores del Código consistía en que a diferencia de los congresos antiguos, en los que:

" (...) Magnates y prelados (asistían) no por elección ni representación de ninguna clase, sino como defensores de sus fueros (...) ",

Creábase la nueva representación de Cortes fundada en individuos iguales o, en palabras del citado Discurso :

" (...) Los españoles son llamados a representar a la nación sin distinción de clases ni estados. Los nobles pueden ser elegidos, pero en igualdad de derechos con todos los

³⁵⁰ D.SS.Cortes Generales y Extraordinarias.sesión 12 de septiembre de 1811.

ciudadanos (...) " ³⁵¹.

La nueva representación se edificó sobre dos supuestos; uno de ellos, el postulado individualista, impregnaba la redacción de los artículos 29 al 33 de la Constitución, según el cual, en palabras del Discurso Preliminar:

"(...) Sienta la doctrina de que el número de representados es la base de la representación - añadiendo a continuación - no se atiende a los caudales, ni a las clases, sino únicamente a las personas(...) " ³⁵² .

El término usado por los legisladores para consignar de forma inequívoca este planteamiento fué el de "almas". Por cada setenta mil almas de la población (art.31) habrá un diputado.

El otro postulado derivaba de la alegoría nacional, es decir, de la consideración del pueblo como persona moral, en quien reside indivisiblemente la soberanía. En virtud del principio de soberanía nacional, el derecho a la Representación pertenecía a la Nación; de donde deducían, como corolario, que la Diputación de Cortes constituye un encargo que la Nación encomienda³⁵³.

³⁵¹ Discurso Preliminar, pág. 31.

³⁵² Ibidem.

³⁵³ Véase en este sentido los arts. 27, 100 y 117 de la Constitución de 1812.

Esta concepción de la representación fué manejada, con afán polémico, cuando los diputados de Cortes de la legislatura extraordinaria de 1821 discutían sobre los diputados suplentes de Ultramar. La comisión de poderes había presentado un dictamen, atendiendo la proposición del diputado por Valencia Sancho, alegando que desde el tiempo transcurrido de la fecha de convocatoria de Cortes, habían podido presentarse los Diputados de todas las provincias de Ultramar, a excepción de Filipinas; en virtud de lo cual, solicitaba la anulación de la elección de suplentes de América por ser contraria a la Constitución ³⁵⁴.

La elección de suplentes para cubrir la representación de América se había llevado a cabo pasando por alto la normativa electoral, en atención a consideraciones de conveniencia política. Se hizo un apaño para salir del paso, contrario a la Constitución, y esta idea la compartían todos. Lo que no entendían los representantes americanos era que, de repente, trataran de enredar el asunto:

"(...) Convengo con el Sr. Sancho (...) que la elección de suplentes es contraria a la Constitución (...); una vez establecida (...), sancionada por S.M, y aun más confirmada por el Congreso (...) ¿se podrá tratar de anular esta elección sin una nueva causa? (...), se conspira hoy con un ardid aparentemente ingenioso a dejar la representación americana

³⁵⁴ D.SS. Cortes extraordinarias.Sesión de 23 septiembre de 1821.

reducida a la menor expresión posible (...) y para ello se declaran incapaces de intervenir en el Congreso a los mismos que hasta hoy se han declarado aptos y manifestado que lo son ³⁵⁵ (...).

El diputado por Madrid Gasco acudió, para refutar la argumentación política, a un razonamiento jurídico-constitucional sobre el artificio de la representación nacional, donde arremetía contra el espíritu de provincialismo. Dijo algo tan fuerte como "ojalá hubiesen desaparecido entre nosotros hasta los nombres de las provincias que nos han elegido". Merece la pena recoger su encendida intervención:

"(...) El decreto de 22 de marzo de 1820, en que se hizo la convocación de Cortes (...), estableció un método de elecciones absolutamente desconocido en la Constitución, y sólo con el fin de dar representación supletoria a las provincias de Ultramar. (...) En 20 de abril de 1820 se expidieron las órdenes para las provincias de Ultramar convocando Cortes, (...) diecisiete meses van corridos desde aquella fecha; tiempo suficiente para que los Diputados se hayan podido trasladar a la Península (...) Se ha dicho (...) que la representación de la América está disminuida; pero ¿quién de nosotros es representante de ninguna provincia en particular? Todos lo somos de la Nación española; por consiguiente, tan

³⁵⁵ La intervención recogida es del diputado Puchet. Ibidem.

representante soy yo de las provincias de América como de la de Madrid que me ha honrado con nombrarme. Por consiguiente, haya o no Diputados suplentes por America, esté o no esté completo el número de propietarios, la Representación nacional siempre subsistirá íntegra. Establézcase este principio, y destiérrese para siempre ese espíritu de provincialismo que existe todavía para nuestra desgracia. Todos (...) somos Diputados de la Nación española, todos representamos a todas sus provincias. (...)¿Se dirá en el día que está a falta la Representación nacional porque la provincia de Cádiz no tiene los diputados que le corresponden (...) ,lo mismo que Guadalajara ? (...) No son las provincias en particular a las que representamos aquí; representamos a la Nación española, y ojalá hubiesen desaparecido entre nosotros hasta los nombres de las provincias que nos han elegido. La Representación nacional no se disminuye, ni porque salgan los suplentes, ni porque falten algunos Diputados propietarios de la Península o de America³⁵⁶ (...).".

El corolario de la tesis "todos somos la Nación" y que, por tanto, la representación nacional subsistirá íntegra, era que cualquier agravio cometido, en su caso, contra un diputado equivalía a hacérselo a la representación nacional. Así lo entendieron, por cierto, las Cortes extraordinarias en 1823 cuando examinaron la exposición del ex-diputado D.José

³⁵⁶ Ibidem,

Moreno Guerra, en la cual hacía presente:

"(...) Haber sido llamado por el intendente del ejército D. Bernardo Elizalde a juicio de conciliación por injurias ante el alcalde constitucional D. Vicente Bertrán de Lis; que habiéndose presentado a dicho juicio se vió sorprendido al verse demandado por un discurso pronunciado en el Congreso (...) había creído deber quejarse a las Cortes de un agravio hecho en su persona a la Representación nacional ³⁵⁷ (...)".

Frente a la protesta de algunos diputados, alegando que las Cortes extraordinarias no pueden entender otros negocios que aquellos para los que fueron estrictamente convocadas por el Rey ³⁵⁸, intervinieron los diputados de Cádiz manifestando la justicia y razón por la que :

"(...) Las Cortes deben tomar como cosa propia la exposición del Sr. Moreno Guerra, para que adoptando sobre ella una providencia, se corte de raíz un mal que si se tolerase, podría ser fatal a la libertad, atacando a una de las columnas que sostienen el edificio constitucional, cual es el poder legislativo, cuando de hecho se anulara la inviolabilidad de los Diputados en sus opiniones. (...). Opino que esta exposición pase a una comisión especial (...) porque se trata de desagraviar, no al Sr. Moreno Guerra, sino a la

³⁵⁷ D.SS. Cortes extraordinarias, sesión de 5 enero 1823.

³⁵⁸ Fué el razonamiento que esbozó el diputado Buey. Ibidem.

Representación nacional, a la Nación entera, que ha proclamado en su Constitución como una de las bases principales de su sistema político la inviolabilidad de las opiniones de los Diputados (...) "³⁵⁹ .

Argüelles en una intervención breve, después de asumir la tesis expuesta de que la inviolabilidad de los Diputados era esencial a la Representación nacional adujo:

"(...) Yo no veo aquí al Sr. Moreno Guerra: no veo sino a la Nación española atacada en su representación, lo cual no puede quedar impune, pues de lo contrario se perdería la inviolabilidad de los Diputados (...) "³⁶⁰ .

4. 2. Representación y sufragio.

El modo de concebir la representación que sustentaron las Cortes de Cádiz, y que hicieron valer las del Trienio, permitía distinguir entre derechos civiles y políticos, reservando el disfrute de estos últimos a determinados

³⁵⁹ Esta intervención corresponde al discurso del Diputado Istúriz, quien llegó a comentar del intendente Elizalde: " Yo no sé cómo puede haber una persona tan estúpida que haya intentado una acción de esta naturaleza". Ibidem.

³⁶⁰ Ibidem.

individuos: los ciudadanos. La idea fué expuesta durante las sesiones de Cortes constituyentes en los siguientes términos:

"(...) Hay dos clases de derechos unos civiles y otros políticos, los primeros generales y comunes a todos los individuos (...) y los segundos pertenecen exclusivamente al ejercicio de los poderes públicos que constituyen la soberanía ³⁶¹(...)".

La gran diferencia que existía entre los derechos que corresponden a un mero español y los que se disfrutaban como ciudadanos la manifestó un diputado catalán:

"(...) Como español - decía Aner- tiene derecho a ser protegido por la ley, goza de la seguridad de su persona y conserva la propiedad de sus bienes... Como ciudadano además de la protección que goza por ley les corresponden los derechos políticos (...) " ³⁶².

De acuerdo con la teoría de la representación esbozada, la Constitución regulaba el sufragio como un derecho que la nación otorgaba no a todos los españoles, sino exclusivamente a aquellos considerados como ciudadanos. En base a los artículos de la ley fundamental, que aludían a la condición

³⁶¹ D.SS.Cortes Generales y Extraordinarias, sesión de 6 de septiembre de 1811.

³⁶² Ver D.SS.Cortes Generales y Extraordinarias, sesión 5 de septiembre de 1811.

de ciudadano, cabe afirmar que quedaban excluidos en principio de esa calidad, los originarios de Africa, las mujeres, los menores de veinticinco años, los extranjeros y el clero regular. Como bien recordaba el diputado Calatrava en las Cortes del Trienio a los regulares se les excluyó porque se les consideraba "muertos para el mundo"³⁶³.

Pero las disposiciones constitucionales aquilataban más esa prerrogativa "que dimana del pacto social"³⁶⁴ " y, atendiendo a situaciones jurídicas de distinta naturaleza (civil, administrativa, mercantil o laboral), reservaban el goce del precioso derecho de ciudadano a los cabezas de familia vecinos y residentes (incluido el clero secular), con propiedades o trabajo estable, de reconocida solvencia e independencia de criterio (art.25).

El requisito de vecindad y residencia que establecía la Constitución para votar en las Juntas electorales de parroquia implicaba que quedaban excluidos de votar en las elecciones quienes se encontrasen, eventualmente, ausentes de su domicilio, por ejemplo, la "benemérita clase militar" en campaña. El concepto de vecindad resultaba problemático. En el curso de los debates de las Cortes del 20 alguien señaló en qué consistía esencialmente:

³⁶³ El comentario lo hizo en el debate sobre el modo con que los militares habían de gozar como ciudadanos del derecho del voto. Ver D.SS.Cortes, sesión 11 de septiembre de 1820.

³⁶⁴ Expresión utilizado por El Universal Observador, n° 18, junio de 1820

"(...) En ser cabeza de familia, tener una casa abierta en un pueblo por más de seis meses al año, decidirse a formar parte del todo de este mismo pueblo, y estar a las cargas correspondientes a este todo³⁶⁵ (...)" .

No obstante las restricciones mencionadas, entre los liberales de las dos épocas existió la creencia de que el derecho al sufragio daba a la Constitución un carácter bastante popular; sobre todo considerando cómo había venido siendo regulado, hasta entonces, en otros países. Esta opinión fué manifestada de forma abierta en los términos siguientes:

"(...) Los franceses bajo pretexto de precaver reuniones muy numerosas, que fácilmente degeneran (...) han despojado a la mayor parte de su nación de los derechos más preciosos del ciudadano, limitando el derecho de dar su voto en las elecciones a los que paguen al Estado más de 300 francos de contribución anual, -añadiendo a continuación-, los que no son ricos ninguna intervención tienen en el nombramiento de sus representantes³⁶⁶ (...)" .

El planteamiento esbozado hacía posible, en fin,

³⁶⁵ Fué el concepto que en el curso de las discusiones manejó en su intervención Romero Alpuente, para justificar su negativa a que los militares votasen en los pueblos en que estén de paso. Ver D.SS. Cortes, sesión 11 septiembre 1820.

³⁶⁶ Ver El Universal Observador Español, no 60, 10 de julio de 1820.

establecer requisitos especiales, superiores a los de ciudadano, para aquellos que fueran a desempeñar el honroso cargo de diputados, porque:

"(...)La nación (...) tiene derechos para buscar en las personas que han de ser depositarias de su confianza cuantas seguridades crea necesarias ³⁶⁷ (...)".

Inspirado en este razonamiento el artículo 92 de la Constitución disponía que para ser elegido diputado había que ser ciudadano en pleno uso de sus derechos, mayor de 25 años y nacido en la provincia o vecindado en ella durante siete años y "tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios". La propia Constitución, (art. 93) suspendía la aplicación de esta disposición, hasta que las Cortes declaren haber llegado el tiempo. Por tanto, durante las elecciones celebradas en el Trienio lo estipulado por el art. 92 careció de efecto.

No obstante, cuando se encontraban las Cortes arrinconadas de nuevo en Cádiz, deliberaron y aprobaron en una de las últimas sesiones del año 1823, una proposición relativa a los requisitos de elegibilidad de los diputados de Cortes, que el diputado Albear sometió a la consideración de la asamblea, en la que después de declarar:

³⁶⁷ Ver D.SS Cortes Generales y extraordinarias, sesión 5 de septiembre de 1811.

" (...) Removidos los estorbos y sueltas en lo posible todas las trabas que encadenaban la libre circulación de las propiedades territoriales en el año 1812, principal o único motivo por el que en juicio de la comisión encargada de extender el proyecto de Constitución se se suspendía (...) el efecto del art. 92 de ella³⁶⁸ (...) "

Proponía a las Cortes decretaran:

" (...) haber llegado ya el tiempo de que pueda y deba tener efecto el art. 92 de la Constitución ³⁶⁹ (...) "

El artículo segundo del proyecto, fijaba la cuota de la renta requerida:

" (...) Será de 1000 ducados u 11.000 rs.vn., y los bienes de que haya de provenir, de los predios rústicos y urbanos; pero si el ciudadano, además de propietario fuese agricultor o ejerciese constantemente otro género de industria útil, de la que reciba también sueldo, haber o interés, bastará que aquellos le puedan producir en arrendamiento, o le produzcan la mitad de la cuota referida para ser elegido³⁷⁰ (...) ".

³⁶⁸ Exposición de motivos del proyecto de decreto, leído en las Cortes en la sesión del 13 de julio de 1823.. Ver Gaceta española, Cádiz, 14 de julio de 1823.

³⁶⁹ Ibidem.

³⁷⁰ Ibidem.

En la comisión de legislación que examinó la proposición hubo división de opiniones. Unos, la mayoría, proponían al Congreso que pasara la proposición al Gobierno para que informe lo que crea conveniente después de haber oído el Consejo de Estado. Otros manifestaron, después de una detenida meditación y sin necesidad de recurrir a informes, que disponían de suficientes datos para desecharla sin vacilación. Vale la pena recoger las razones que adujeron los firmantes del voto particular:

"(...) Siempre repugnaría al pundonor de la nación española dictar un decreto que parecería arrancado por la fuerza de las bayonetas extranjeras, sancionado por una cobarde y débil condescendencia (...). Por otra parte (...) las circunstancias no son más favorables (...) la propiedad de los bienes raíces (está acumulada en muy pocas manos) (...); el Crédito público conserva la mayor parte de los bienes que se le han adjudicado; subsisten todos los conventos de religiosas; los cabildos retienen las fincas (...); S.M. no ha tenido a bien sancionar la ley sobre la pronta desamortización de las capellanías de sangre; (...) ahora se empieza a repartir (...) los baldíos (...); tampoco se han desamortizado todos los predios de los propios ³⁷¹ (...)"

Por último expresaron su discrepancia con Albear por un

³⁷¹ Voto particular de Ruiz de la Vega, Posada y Oliver. Sesión de 26 de julio de 1823. Gaceta Española, Cádiz 27 de julio de 1823.

doble motivo. En primer término porque se excedía cuando colocaba entre las rentas procedentes de bienes propios los sueldos que proceden de la riqueza nacional, incluidas las rentas eclesiásticas. Pero además objetaron la proposición por imprecisa:

"(...) En cuanto a que a lo menos la mitad de la renta proceda de bienes raíces (...), el citado art. 92 solamente exige que los bienes sean propios, y nadie dirá que únicamente podemos tener propiedad sobre bienes raíces, ni negará que son de la clase de propios los buques, los censos, las fábricas, las acciones de banco, las obras literarias, las imprentas y otros semejantes ³⁷² (...)".

En opinión de los firmantes del voto particular de admitir las Cortes la proposición la consecuencia sería:

"(...) Se excluirían de ser Diputados de Cortes casi todos los eclesiásticos, los militares, los empleados, los comerciantes, los fabricantes, los magistrados, los jueces, los letrados, los médicos, la mayor parte de los labradores, y otros que son de los más ilustrados ³⁷³ (...)".

Una vez destrozada con dignidad la proposición, finalizaban con un comentario tranquilizador:

³⁷² Ibidem.

³⁷³ Ibidem.

"(...)No es tampoco de temer que las juntas electorales de provincia abusen de lo dispuesto en el art. 93, colocando en el Congreso personas poco a propósito para tan augusto cargo³⁷⁴ (...)".

Por cierto, sobre la presentación de candidatos a la representación nacional, las normas electorales nada regulaban. Al no contemplar formalmente las candidaturas, y ser rudimentaria la maquinaria electoral, los requisitos de nacimiento o vecindad (art.91) podían alentar la doble elección de un mismo individuo por diferentes provincias. En la práctica resultaban beneficiados por este precepto, entre otros, los miembros de la burocracia estatal, natural de provincias pero residente en Madrid y los empleados públicos nombrados por el gobierno, siempre que desempeñaran su cargo en provincia distinta a la de su nacimiento. De esta forma, el propósito de "precaver la peligrosa influencia del gobierno"³⁷⁵ que inspiró la redacción del art. 97³⁷⁶ podía verse burlado en la práctica .

Durante el Trienio, como ya sucedió durante las sesiones de las Cortes generales y extraordinarias, un nutrido grupo de representantes presentaron al comienzo de la legislatura

³⁷⁴ Ibidem.

³⁷⁵ D SS. Cortes Generales y Extraordinarias, sesión 28 de septiembre de 1811.

³⁷⁶ El citado artículo decía: "ningún empleado público nombrado por el gobierno podrá ser elegido diputado de Cortes por la provincia en que ejerce su cargo".

de 1822 la proposición de que los diputados " no puedan obtener empleo alguno de provisión real hasta un año después de cumplir su legislatura"³⁷⁷. La inhabilitación para admitir empleos se hacía extensiva al tiempo que el art. 130 señalaba para las pensiones y condecoraciones de provisión Real. Sus autores no pretendían:

"(...) Llevar a los hombres al más alto grado de perfección (...) (sino) evitar que algunos caigan en la última degradación. Se trata (...) de debilitar y reducir al más estrecho límite la influencia ministerial, que en los Estados representativos, como la experiencia ha demostrado, procura introducirse en el poder Poder legislativo (...) "³⁷⁸ ".

El transcurso de varias legislaturas había hecho cundir entre los diputados el sentimiento de que era necesaria preservar la representación contra lo que significativamente expresaban como "los ataques sordos del Poder ejecutivo ":

"(...) Cuando el representante ejerce las altas funciones para que ha sido elegido ¿De qué serviría que (...) fuese elegido por la libre y espontánea voluntad del pueblo, por el voto de sus conciudadanos, si después que estuviese ejerciendo su ministerio pudiera (...) ser lisonjeada su

³⁷⁷ D.SS..Cortes, sesión 12 de marzo de 1822.

³⁷⁸ Intervención del diputado Velasco.Ibidem.

ambición y su interés con los cargos y las recompensas ?³⁷⁹
 (...) "

El sistema electoral era indirecto a cuatro grados, y combinaba distintas formas de ejercer ese "precioso derecho" al sufragio. En el primer grado, el voto era público; en el segundo, y cuarto grado el sufragio era a través de diferentes ceremonias secretas: conferenciando entre sí los compromisarios (art.53); acercándose a la mesa los electores de partido y nombrando al Secretario quien se elija para que lo escriba en una lista (art. 88); en las juntas de partido, el voto de los electores parroquiales era "mediante cédulas" (art.73).

Reflexionando Mill sobre la publicidad del voto señalaba que, frente al voto secreto, estaba más de acuerdo con el postulado de que en el sufragio "tiene el votante la obligación moral absoluta de considerar, no su interés privado, sino el público³⁸⁰". Si se comparte este planteamiento "el voto debe ser dado a la vista del público, siendo sometido a la críticas de éste, cuyos individuos todos se hallan interesados en el cumplimiento de dicho deber³⁸¹". No obstante estos razonamientos, admitía Mill que en

³⁷⁹ Ibidem.

³⁸⁰ El entrecomillado corresponde al razonamiento que hacía sobre el asunto el entusiasta defensor de la libertad y el derecho a la extravagancia que era Stuart Mill, J. Ver su obra Del Gobierno representativo. cap.X, Madrid, 1965.

³⁸¹ Ibidem.

beneficio del pueblo y para evitar abusos electorales de personajes eminentes, podía ser preferible el voto secreto³⁸².

El voto secreto mediante cédulas produjo disensiones entre los miembros de la comisión redactora del proyecto de Constitución. Argüelles sostuvo en el debate su tesis particular de que :

"(...) La publicidad en las elecciones es la que puede evitar los fraudes y cohechos que en ellas pueden intervenir³⁸³ (...)".

Y tan enigmático como casi siempre, fundó su postura en el misterio:

"(...)La influencia que tiene el secreto en las elecciones es más fácil de concebir que de explicar³⁸⁴ (...)".

En defensa del criterio de la comisión adujo Pérez de Castro:

"(...) La Comisión ha creído que no deja de haber

³⁸²Ibidem.

³⁸³ En D.SS Cortes, sesión 25 de septiembre de 1811, se puede ver las citas sobre la discusión del artículo 73 del proyecto de Constitución, relativo a las elecciones de partido.

³⁸⁴ Ibidem.

inconveniente en uno y otro partido; pero al cabo, (...) creyó que el escrutinio secreto favorecía más la libertad del voto, porque la firmeza de los ciudadanos a quienes los intrigantes soliciten y exijan palabras difícilmente sabrá sostenerse a la vista de los solicitadores ³⁸⁵ (...)"

En favor del voto secreto apuntó Quiroga una razón social de peso:

"(...) Puede suceder que todos o la mayor parte de los electores sean colonos de algún señor; y si es pública la votación se verían como precisados a elegirle ³⁸⁶ (...)"

Alcocer defendió, desde un planteamiento moral, "(que la libertad del hombre no lo precipite)", y un argumento paradójico que el voto fuese público:

"(...) En la votación secreta hay entera libertad para votar mal, y tiene ciertos diques en las públicas, por lo que juzgo que así sean ³⁸⁷ (...)"

Hay datos bastantes para sostener, como hipótesis, que nuestro país reunía " razones irresistibles a favor del voto secreto" , (de tipo social, ideológico, y económico). A todas

³⁸⁵ Ibidem.

³⁸⁶ Ibidem.

³⁸⁷ Ibidem.

ellas los redactores de la Constitución añadieron las de carácter estrictamente político. En efecto, que los ciudadanos estuvieran forzados a emitir su voto en presencia de las autoridades civiles (alcaldes, delegados del gobierno) y eclesiásticas (cura párroco), debía comportar una limitación a su libertad. Sin duda, recurrir al voto público en primer grado era indispensable si aspiraban que la mayoría de los ciudadanos, analfabetos, ejercieran de manera efectiva su derecho. Menos explicación y mayores riesgos, para la limpieza en el ejercicio del sufragio, como veremos en su momento, tenía la fórmula de voto mediante ceremonia secreta ante las autoridades en las Juntas de Provincia, según decía el artículo 88: "acercándose a la mesa donde se halle el Presidente, los escrutadores y Secretario, y éste escribirá en una lista a su presencia el nombre de la persona que cada uno elige.

En los largos debates habidos durante las Cortes extraordinarias del año 1821, sobre el proyecto de división del territorio, entre las insistentes objeciones que se hicieron a las quince nuevas provincias pequeñas que aparecían en el proyecto, fué el influjo que podía tener en ellas el Gobierno durante las elecciones.

Pero Argüelles, que había estado ausente mientras las Cortes de 1821 ventilaban esos asuntos, persistió en su vieja argumentación. En esta ocasión ilustró su rechazo a que pudiera tener lugar el pernicioso influjo del ejecutivo

haciendo referencias al ejemplo inglés. Se atrevió, incluso, a resaltar en este punto la superioridad de la Constitución gaditana:

"(...) La verdadera corrupción (...) de la que es preciso guardarse en los sistemas representativos (...) es la que usa el Ministerio en la elección de los miembros del Parlamento. La mayoría viene ya formada de las elecciones. Este defecto está precavido entre nosotros por la Constitución: ningún influjo ejerce ni puede ejercer el Gobierno en nuestro sistema de elección para Diputados a Cortes ³⁸⁸ (...)".

La asistencia del párroco (art. 46), (que a nosotros hoy nos puede parecer chocante), obedeció a una adición que hizo el cura Terrero, liberal sin remedio, en la Asamblea gaditana. La normativa del proyecto, en palabras del párroco de Algeciras, "confinaba a los eclesiásticos"³⁸⁹. La razones que indujeron a los diputados a aceptar la presencia de los párrocos, (no presidencia como propuso el párroco), fueron varias, a saber: daban solemnidad a la votación, cerraban el camino a "manejos solapados y ocultos", y además garantizaba la fiabilidad del escrutinio, porque, según se adujo, con general aprobación mientras ventilaban este artículo del proyecto:

³⁸⁸ D.SS.Cortes, sesión 12 de marzo de 1822.

³⁸⁹ D.SS. Cortes Generales y Extraordinarias, sesión de 25 de septiembre de 1811.

" (...) No tienen los pueblos tanta confianza en los escribanos como en los párrocos (...) "³⁹⁰.

En otro orden de cosas, y teniendo presente que la gran mayoría de la población era analfabeta, las disposiciones constitucionales que obligaban a que las actas de los electores parroquiales estuviesen firmadas por los compromisarios, y disponían que la elección en las Juntas de Partido se efectuase mediante cédulas, estaban introduciendo, en la práctica, un mecanismo implícito de restricción en el sufragio. Pudiendo afirmarse, por tanto, que para la gran mayoría de los ciudadanos, su derecho a participar en las elecciones quedaba circunscrito al nombramiento en las Juntas de Parroquia de los compromisarios que se encargaban de designar a los electores parroquiales. El asunto de la firma dió lugar a una reclamación de los electores de partido en las elecciones celebradas en Canarias³⁹¹. Según los datos que obraban en el Acta, la certificación del elector del partido del Hierro venía autorizada con la firma del secretario y sin las del presidente y escrutadores. Se trataba de "un amaño preparado con estudio y mala fé", para entorpecer la elección de diputados. La Junta electoral de provincia no juzgó atendible la reclamación y la Comisión de poderes de las Cortes validó el nombramiento.

³⁹⁰ Según dijo el diputado Villanueva. Ibidem.

³⁹¹ Ver D.SS.Cortes sesión de 24 de septiembre de 1820.

Para verificar las elecciones el territorio se dividía en circunscripciones que solían coincidir con la división provincial (ver cuadro adjunto). Se apartaban de esta regla general Santander, que aunque era provincia independiente se unía a Burgos a efectos de la elección³⁹² ; y Galicia³⁹³ , que para practicar las elecciones dividía su territorio en siete provincias y a estas en sus respectivos partidos. Comentario aparte merece lo que la instrucción ofrecía a la provincia de Cádiz; su territorio se hallaba incorporado a Sevilla , pero :

"(...) Si para el tiempo de hacer las elecciones se hubiese otra vez desmembrado, (...) ³⁹⁴ elegirá separadamente (...)".

Desde luego que Cádiz hizo las elecciones aparte, nombrando el número de diputados, cuatro, que tuvo asignados para las ordinarias de 1813.

La distribución de diputados y suplentes entre las provincias se efectuó por la Instrucción con arreglo al Censo de población del año 1797.

³⁹² Art.7, nota 1ª. Instrucción conforme a la cual deberán celebrarse en la Península e Islas Adyacentes las elecciones de Diputados de Cortes para las ordinarias de los años de 1820 y 1821.

³⁹³ Ibidem, art. 8.

³⁹⁴ Con arreglo al decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 19 de diciembre de 1812.

CUADRO 1.- DISTRIBUCIÓN DE DIPUTADOS.

PROVINCIAS	POBLACIÓN	DIPUTADOS	SUPLENTE
ALAVA	67.523	1	1
ARAGÓN	657.376	9	3
ASTURIAS	364.238	5	2
AVILA	118.061	2	1
BURGOS	470.588	7	2
CÁDIZ	304.371	4	1
CATALUÑA	858.818	12	4
CÓRDOBA	258.224	4	1
CUENCA	254.290	4	1
EXTREMADURA	428.493	6	2
GALICIA	1.142.630	16	5
GRANADA	692.924	10	3
GUADALAJARA	121.115	2	1
GUIPÚZCOA	104.491	1	1
JAÉN	206.807	3	1
LEÓN	239.812	3	1
MADRID	239.812	3	1
MANCHA	205.548	3	1
MURCIA	383.226	5	2
NAVARRA	221.728	3	1
PALENCIA	118.064	2	1
SALAMANCA	209.988	3	1
SEGOVIA	170.235	2	1
SEVILLA	489.852	7	3
SORIA	198.107	3	1
TOLEDO	374.867	5	1
TORO	97.370	1	1
VALENCIA	825.059	12	4
VALLADOLID	187.390	3	1
VIZCAYA	111.436	2	1
ZAMORA	71.401	1	1
ISLAS	186.979	3	1
CANARIAS	173.865	2	1

Fuente: Instrucción conforme a la cual deberán celebrarse elecciones a Cortes (...).

395

Como puede comprobarse en el anterior cuadro, el número de diputados que correspondía elegir a cada provincia estaba en función de su población. El mínimo de habitantes necesarios para designar un diputado era el de sesenta mil (60.000). La provincia que no alcanzaba esa cifra debía unirse a la más inmediata para verificar las elecciones; esto ocurría, como veremos, con una de las provincias electorales de Galicia, La Coruña, que para elegir su diputado se debía unirse con la de Betanzos.

Las restantes provincias, por cada 70.000 habitantes elegían un diputado. Si efectuada esta operación resultaba en la provincia una población sobrante superior a las treinta y cinco mil almas (35.000) podían designar un diputado más (art.32).

El procedimiento para la distribución de los diputados entre las circunscripciones, que las normas constitucionales prescribían, ocasionaba ciertamente desigualdad en la representación. Para observar esta desigualdad hemos confeccionado el cuadro 2. Tiene cinco columnas, en las tres primeras figuran las provincias, la población que les corresponde según el censo, y el número de diputados titulares y suplentes asignados a cada una, respectivamente. La cuarta columna, "Sobrantes", recoge el exceso de población, (superior a 35.000), que resulta en la provincia después de efectuado el reparto (un diputado por cada 70.000 almas) .

CUADRO 2.- DESIGUALDAD EN LA REPRESENTACIÓN DE PROVINCIAS.

PROVINCIAS	N° ALMAS	DIP/SUP	SOBRANTES	SIN REPRES
ALAVA	67.523	1/1		
ARAGÓN	657.376	9/3		27.376
ASTURIAS	364.238	5/2		14.238
AVILA	118.061	2/1	48.061	
BURGOS	470.588	7/2	38.588	
CADIZ	304.371	4/1		24.371
CATALUÑA	858.818	12 /4		18.818
CÓRDOBA	258.224	4/1	48.224	
CUENCA	254.290	4/1	44.290	
EXTREMADURA	428.493	6/2		8.493
GALICIA	1.142.630	16/5		22.630
GRANADA	692.924	10/3	62.924	
GUADALAJARA	121.115	2/1	51.115	
GUIPÚZCOA	104.491	1/1		34.491
JAÉN	206.807	3/1	66.807	
LEÓN	239.812	3/1		29.812
MADRID	229.101	3/1		8.101
MANCHA	205.548	3/1	65.548	
MURCIA	383.226	5/2		33.226
NAVARRA	221.728	3/1		11.728
PALENCIA	118.064	2/1	48.064	
SALAMANCA	209.988	3/1	69.988	
SEGOVIA	170.235	2/1		30.235
SEVILLA	489.852	7/3		24.223
SORIA	198.107	3/1	58.107	
TOLEDO	374.867	5/1		24.867
TORO	97.370	1/1		27.370
VALENCIA	825.059	12/4	55.059	
VALLADOLID	187.390	3/1	47.390	
VIZCAYA	111.436	2/1	41.436	
ZAMORA	71.401	1/1		1.401
ISLAS	186.979	3/1	46.979	
CANARIAS	173.865	2/1		33.865

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Instrucción.

La provincia cuya cantidad de población sobrante más se aproxime a las 35.000 almas, más beneficiada resultaba con el procedimiento de reparto. A la vista de esto, la provincia que salía mejor parada con el sistema de distribución utilizado, era Burgos, (incluso contando con Álava que gozaba de trato excepcional), seguida de Vizcaya, Cuenca y Baleares y así sucesivamente.

La última columna, "sin representación", recoge el exceso de población que no contaba a efectos de la asignación por no alcanzar la cifra estipulada de los 35.000. Esta columna se lee a la inversa que la anterior: cuanto más próxima esté la cifra al tope de 35.000 más perjudicada resultaba con el reparto. Según esto las "agraviadas" eran Guipúzcoa, Canarias, Murcia y Segovia

Comentario aparte merece la distribución de la representación en Galicia. Los dieciséis diputados titulares, asignados a la provincia, se repartían entre la siete provincias en que era dividida a efectos de las elecciones; y los cinco suplentes se asignaban a las cinco de mayor población.

CUADRO 3.- CIRCUNSCRIPCIONES DE GALICIA.

PROVINCIAS	N° ALMAS	DIP.	SUP.	ALMAS SOBRANTES	ALMAS SIN REPRESENT.
SANTIAGO	399.112	5	1		5.112
ORENSE	259.816	4	1	49.816.	
LUGO	170.142	2	1		30.142
TUY	118.030	2	1	48.030.	
MONDOÑEDO	81.578	1			11.578
CORUÑA+ BETANZOS	42.595+ 27.405	1			
BETANZOS	87.952	1	1		17.952
TOTAL	1.142.630	16	5		

Elaboración propia.

Fuente: Actas de las Juntas Preparatorias de elecciones a Cortes ³⁹⁶.

El cuadro se ha trazado siguiendo el modelo del anterior. Como puede observarse en el cuadro, La Coruña cuya población no llegaba a setenta mil (ni aún al mínimo de 60.000) se unía con Betanzos, la más inmediata (art.33), para completar su población y poder elegir un diputado. Bajo la columna "almas sobrantes" figuran las provincias de Orense y Tuy que contaban con un exceso de más de 35.000 almas, (sobre las 70.000), por lo que, según el art. 32 de la Constitución podían elegir un diputado más. La última columna del cuadro recoge el exceso de población que quedaba sin representación, siendo al respecto la provincia de Lugo la más perjudicada.

³⁹⁶ Archivo Cortes, Legajo n°4, exp.12.

4.3. Normativa Electoral.-

La elección era indirecta a cuatro grados, en las Juntas de parroquia se practicaban dos. Para proceder a las elecciones de diputados se celebraban en cada circunscripción Juntas electorales de Parroquia, Partido y Provincia. El procedimiento electoral descrito sintéticamente era como sigue: cada provincia celebraba Juntas de parroquia, donde los ciudadanos elegían los compromisarios, (más de nueve pero no más de treinta y uno), quienes se encargaban posteriormente de designar a los electores parroquiales, (cuyo número se fijaba en razón al de vecinos); los electores parroquiales se congregaban en pueblos cabezas de partido para designar, en las Juntas de partido, un número total de electores que debía ser triple al de diputados, pero nunca inferior a cinco; por último, los electores de partido congregados en la capital elegían, en Juntas de provincia, a los diputados que correspondieran a la provincia.

El procedimiento de elección en el primer y segundo grados (Juntas de parroquia) podía llegar a tener especial complejidad. Conscientes de ello, las autoridades encargadas en cada provincia de organizar las elecciones elaboraban y hacían circular instrucciones y extractos deducidos de los artículos constitucionales que regulaban esta materia "para mayor comodidad de los pueblos".

Por parroquia se entendían "las matrices y que tengan pila bautismal y párroco propio, a las cuales deberán agregarse los vecinos de las sufragáneas o anexas y, en cualquier caso de duda se seguirá la práctica que se hubiere observado en punto a estas agregaciones". Según el denominado Censo de Godoy la cifra rondaría las diez y nueve mil.

Para celebrar las elecciones en el primer grado, las normas electorales que procuraban adaptarse a la realidad del país, distinguían en razón a su población diferentes tipos de parroquias. Las parroquias con más de 150 vecinos, en las que las juntas se encargaban de realizar en el mismo acto el nombramiento de compromisarios y la designación de electores. Esta modalidad era la que predominaba, entre otras, en las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia caracterizadas todas ellas por la concentración de la población en ciudades y pueblos. Sin embargo, aquellos lugares en los que la población estuviese dispersa, como eran los casos de Galicia, Asturias, y Vascongadas, el método era más complicado. Las parroquias en que el número de vecinos oscilaba entre 20 y 150, elegían por sí compromisarios y éstos se congregaban con los de las vecinas para nombrar los electores. Y cuando las parroquias no alcanzaban el mínimo de 20 vecinos, estos debían juntarse con los de las parroquias próximas incluso para la designación de compromisarios³⁹⁷.

³⁹⁷Parece que en la provincia de Alava, excepto en la capital, los vecinos de la mayoría de las parroquias debían juntarse con los de las próximas no sólo para designar los electores sino también para el nombramiento de los

El número de electores que designaban las parroquias estaba en función de su población. Correspondiendo 1 elector si el número de vecinos oscilaba entre 150 a 300, dos si excedían los 300, tres si sobrepasaba los 500 y así sucesivamente.

Para nombrar un elector las parroquias designaban 11 compromisarios, si tenían que nombrar dos elegían 21 y, si tres o más 31 compromisarios, sin que en ningún caso pudiera rebasarse esa cifra. Cada persona elegía, mediante voto público, tantas personas como compromisarios correspondían a la parroquia, el secretario los escribía en una lista y salían elegidos los que obtuvieran la mayoría simple de los votos. Los compromisarios se retiraban a un lugar apartado y "conferenciando entre sí" procedían a nombrar elector o electores de parroquia, resultando elegidos quienes obtuvieran la mayoría absoluta de los votos.

En los núcleos urbanos, que contaban con parroquias con muchos vecinos, uno de los inconvenientes de las juntas electorales era su desmesurada duración ³⁹⁸, en algunos casos más de un día sin interrupción. Por el contrario,

compromisarios. Así en Villabezana, pueblo situado a cinco leguas de Vitoria, que contaba con 8 vecinos, se congregaban los 476 vecinos de otros 34 pueblos para nombrar compromisarios y los dos electores que les correspondían.

³⁹⁸ Sabemos por noticias de prensa que esto ocurría en las Juntas Electorales de la parroquia de S. Lorenzo de Madrid, donde 4000 ciudadanos tenían que nombrar cada uno 31 compromisarios.

aquellas zonas del país de población dispersa el mayor obstáculo para la celebración de las juntas consistía en la débil implantación de los ayuntamientos constitucionales, si faltaba o no funcionaba la institución clave quedaba malogrado todo el proceso.

Transcurrido un mes (art.60) de la celebración de las Juntas de parroquia los electores parroquiales se congregaban en los pueblos cabeza de partido de su demarcación para designar los electores que se encargarían del nombramiento de los diputados de Cortes.

Cada partido debía elegir por los menos un elector. Y el número total de electores de partido que correspondía a cada provincia, debía ser triple al de diputados que tuviera asignados, pero en ningún caso inferior a cinco (arts.63 y 64). El procedimiento utilizado para el reparto de electores entre los partidos, ocasionaba que partidos diferentes por el tamaño de su población tuvieran asignado el mismo número de electores. En última instancia, la causa de esta desigualdad en la representación residía en que el mandato del art. 273 de la constitución ("...se establecerán partidos proporcionalmente iguales...") estaba pendiente de cumplir.

Como ejemplo de esta desigualdad podemos citar la circunscripción de Murcia, donde en el partido de la capital tocaban a un elector por 10.945 vecinos, mientras que en el

de Hellín 2033 vecinos nombraban un elector. Las normas electorales, en su art. 65, habían previsto un mecanismo corrector, consistente en la atribución a los partidos de más población de los electores sobrantes, si los hubiere. Pero la aplicación de esa norma no contribuía mucho a subsanar el defecto señalado ³⁹⁹.

Cuadro 4.- Desigualdad en la representación.

PARTIDOS Y ELECTORES DE LA PROVINCIA DE MURCIA				
PARTIDOS	N°VECINOS	ELECTORES PARROQUIA	ELECTORES PARTIDO	COCIENTE VEC/E. PDO.
MURCIA	42.376	212	4	10.594
CHINCHILLA	2616	13	1	2.616
VILLENA	7975	40	1	7.975
CIEZA	8955	45	2	4.477
LORCA	10960	55	2	5.480
SEGURA	4678	24	1	4.678
ALBACETE	2304	11	1	2.304
CARTAGENA	7270	36	2	3.635
HELLIN	2033	10	1	2.033
TOTAL	89.167 (23,2%)	446	15	5.944

Fuente: Elaboración propia sobre las Actas Juntas preparatorias. ⁴⁰⁰

En el otro polo se situaban el caso de Alava. La

³⁹⁹ A no ser que el art. 65 del texto constitucional fuera interpretado de forma distinta a lo que podía deducirse de su tenor literal. Cosa que algunas provincias, como Cádiz, hicieron. Así, después de dar a cada partido un elector fueron distribuidos directamente los restantes entre aquellos cuatro que contaban con mayor población, según puede verse en el cuadro adjunto:

⁴⁰⁰ Arch.C., Leg.4., n° 21

la representación.

Cuadro 5. Proporcionalidad en la representación.-

PROVINCIA DE ÁLAVA: VECINOS Y ELECTORES.

PARTIDO	VECINOS	ELECTORES PARROQUIA	ELECTORES PARTIDO	COCIENTE VEC/E. PDO
VITORIA	2368	12	1	2368
SALVATIERRA	2403	12	1	2403
LAGUARDIA	2572	12	1	2572
AMURRIO	2462	12	1	2462
SALVATIERRA	2379	12	1	2379
VILLAREAL	2374	12	1	2374
TOTAL	14558	72	6	2426

Fuente: Elaboración propia. Actas Juntas preparatorias. ⁴⁰¹

El actas de las Junta preparatorias de la provincia de Cádiz y las de la provincia de Jaén suministraban una interesante información sobre la población de los distintos partidos de la provincia, que teóricamente podía participar en los diferentes grados del proceso electoral. Si comparamos las cantidades globales de ambos cuadros, resultan evidentes las diferencias en el porcentaje de ciudadanos (vecinos), sobre el total de la población de ambas provincias (21% de Cádiz frente al 26,5 % de Jaén). Asimismo puede detectarse la desigualdad que la aplicación de la normativa electoral

⁴⁰¹ Archivo Cortes, legajo 4,exp.1.

ocasionaba entre los electores de las diferentes parroquias. respecto de la población que les elegía, debido a la prima que el sistema electoral establecía en favor de las parroquias pequeñas.

CUADRO 6. Ciudadanía y electores: Cádiz.

PARTIDO	N° ALMAS	VECINOS	ELECTORES PARROQUIA	ELECTORES PARTIDO
CÁDIZ	98.464	19.692	98	4
JEREZ	63.424	13.840	72	2
PUERTO	40.354	8.950	55	2
MEDINA-SID.	40.160	8.032	41	2
ALGECIRAS	31.758	6.611	32	2
SANLUCAR	30.211	6862	35	2
TOTAL	304.371	63.987 (21%)	333	14

Fuente: Actas Juntas preparatoria.⁴⁰²

Cuadro 7. Vecinos, compromisarios y electores: Jaén.

PARTIDO	VECINOS	COMPROMISARIOS (% SOBRE VECINOS)	ELECTORES PARROQUIA	ELECTORES PARTIDO
JAEN	12.774	523 (4,1%)	62	2
BAEZA	11.568	417 (3,8%)	51	2
UBEDA	10.934	482 (4,4%)	71	2
ANDÚJAR	5.318	199 (3,6%)	26	1
ALCALÁ	6.838	218 (3,2%)	37	1
MARTOS	6.715	239 (3,6%)	34	1
TOTAL.-	54.147 (26,5%)	2079 (3,8%)	281	10

Fuente: Actas Junta preparatoria.⁴⁰³

Las Juntas duraban dos días, el primero dedicado a su constitución, nombramientos de secretario y escrutadores y, en fin, presentación a examen de las certificaciones de los

⁴⁰² Archivo Cortes, leg. 4, Exp.7.

⁴⁰³ Archivo Cortes, Leg. 4 Exp. 17.

electores parroquiales. En el segundo, después de proceder a examinar la legitimidad de los nombramientos, se verificaba el sufragio de los electores de uno en uno y mediante cédulas (art.73). Resultaban elegidos quienes obtuvieran la mayoría absoluta de los votos emitidos. Si efectuado el escrutinio ninguno lograba la mayoría requerida, tenía lugar una segunda vuelta entre los dos más votados y, de producirse un empate decidía la suerte ⁴⁰⁴ .

La comisión de legislación del año 1820 examinó y no resolvió, la duda de un ciudadano de Extremadura, sobre la "verdadera inteligencia del artículo 73". Solicitaba de las Cortes una resolución sobre si el presidente, secretarios y escrutadores, en escrutinio secreto, podían registrar las cédulas al tiempo de entregarlas, o tenían que esperar hasta hacer el cómputo de los votos. Entre los diputados existía división de opiniones; unos sostenían que al no poderse votar una persona a sí misma, debía ver el presidente, secretario y escrutadores las cédulas al tiempo de votar; otros consideraban que si las votaciones eran secretas no podían verse las cédulas hasta hacer el cómputo de los votos⁴⁰⁵ .

La elección podía recaer en cualquier ciudadano, incluso aunque no fuese elector parroquial, en pleno uso de sus

⁴⁰⁴ Ver art.74 de la Constitución.

⁴⁰⁵ Después de un extenso debate el asunto no se votó por no existir suficiente número de diputados. Gaceta española, Sevilla, 4 junio 1823. Sesión del día 3 de junio.

derechos, vecino y residente en el partido. Cabría considerar la existencia de una velada restricción del sufragio en estas Juntas, sobre todo teniendo presente que junto a la necesidad de saber escribir, para poder emitir el voto, existía la precisión de tener que desplazarse y permanecer durante, al menos, dos días fuera del lugar de residencia habitual.

Aproximadamente un mes después de las juntas de partido se congregaban , en las capitales de provincia los electores de partido para designar mediante voto público a los diputados a Cortes. En todo lo demás, el modo de proceder en estas Juntas era idéntico a lo descrito sobre las juntas de partido en lo relativo a la constitución; duración y el recurso al sorteo en caso de empate. Una particularidad de las juntas electorales de provincia era que todas estaban presididas por el jefe político. Es decir, que los electores que acudían a las capitales tenían que emitir su voto público ante la autoridad de la provincia que había sido nombrada por el gobierno. Esta circunstancia colocaba al ejecutivo en una situación estratégica inmejorable para dejar sentir su influencia en la fase última del proceso electoral. Algunos por su modo de proceder llegaron a ser comparados con "bajás de tres colas". Como veremos al tratar sobre las elecciones de 1821, el Gobierno no pudo evitar caer en la tentación de controlar a través de estos servidores públicos el proceso electoral.

El texto constitucional contenía una serie de preceptos (especialmente los artículos.48, 68 y 82), según los cuales las Juntas debían celebrarse a puerta abierta y no estaba permitida la asistencia a las juntas de individuos con armas (art.56), encaminados a garantizar la libertad, y que el derecho de votar se ejerciera sin coacciones.

Existían otras disposiciones, dirigidas a asegurar la limpieza del complicado proceso electoral, que otorgaban a los integrantes de las juntas electorales, competencias para resolver las dudas que se suscitasen sobre si los ciudadanos que concurrían a votar reunían "las calidades requeridas" (art.50) o para decidir, a pluralidad de votos, sobre la legitimidad de los poderes de los electores que concurrían a las juntas de partido y provincia⁴⁰⁶. Por último, las propias Cortes, asumiendo cometidos de justicia electoral, a través de las denominadas Juntas Preparatorias, eran las encargadas de examinar y resolver los poderes o calidades de los diputados electos. Fundaban su decisión en los informes que, en base a las actas de las juntas electorales, elaboraba la comisión de Poderes, creada al efecto. Las dudas que pudieran suscitarse sobre los nombramientos de sus miembros las decidían por votación, "debiendo salir del salón el diputado cuyos poderes se trate"⁴⁰⁷.

⁴⁰⁶ Las juntas decidían en el acto y contra el acuerdo no cabía recurso alguno.

⁴⁰⁷ Ver al respecto el Capítulo II del Reglamento de las Cortes de 4 de septiembre de 1813.

Cabe pensar que esta competencia asumida por las Cortes podían prestarse a componendas sin cuento. Pero resulta difícil imaginar que la institución clave del nuevo estado legislativo, donde la nación soberana estaba representada y cuyo poder prevalecía sobre los restantes, expusiera a sus miembros al control de unos jueces que, hasta entonces, habían sido instrumentos del poder real⁴⁰⁸.

4. 4. Elecciones de 1820.-

El traductor del Curso de política constitucional, aludía, en sus páginas a "... esos memorables días... en que el pueblo español, rotas las cadenas volvía a recobrar sus perdidos derechos, al cabo de seis años de opresión..." en los siguientes términos:

"(...) Concurrían los ciudadanos pacíficamente, y llenos de alegría a los sitios señalados, nombraban sus escogidos, y se contentaban con recomendar a voz en grito, que se buscasen sólo hombres amigos de la causa común, que conociesen los males de su patria, y que fuesen capaces de prestarla remedio en su angustiada situación ⁴⁰⁹ (...)"

⁴⁰⁸ Al respecto, D.SS.Cortes, Juntas preparatorias, sesiones de 20 y 22 de febrero de 1822.

⁴⁰⁹ Nos referimos a Marcial Antonio López, diputado electo de las Cortes ordinarias, que tradujo libremente al español la obra de B.Constant. Curso de política constitucional, Madrid 1820, Tomo I, p. 168.

Esta escueta descripción omite referencias que pueden resultar de interés para entender el desarrollo del proceso electoral en sus distintos grados. Las valiosas investigaciones monográficas sobre el Trienio, tampoco se demoran mucho cuando tratan este asunto; sin embargo sostienen la hipótesis, de forma bastante generalizada, según la cual el sistema electoral establecido por la Constitución favorecía la moderación. En este sentido, comentando los resultados de las primeras elecciones afirma Novales :

"(...) Es posible que un método de elección directa de los diputados hubiese dado un resultado más democrático, y por lo tanto más radical ⁴¹⁰ (...)".

Resulta obvio que, por definición, siempre que exista sufragio universal, un método de elección directa es el más democrático. Pero cuál sea el sentido de ese voto popular dependerá, desde luego, de la inclinación política de la mayoría de los votantes. Dar por supuesta una mayoría radical - en sentido liberal, se entiende - entre los electores del año 1820 es de un optimismo exuberante y, además, no parece que se compadezca con los hechos. Recurrir a la variable del voto para descubrir radicalismo es seguir una pista falsa. En efecto, si uno atiende los comentarios que sobre las elecciones de parroquia aparecían en prensa y analiza con algún detenimiento los resultados disponibles de

⁴¹⁰ En este sentido puede consultarse su obra "El Trienio Liberal", Madrid 1980, pág.15.

las elecciones en esas Juntas, que eran el escalón más directo y popular, no encuentra datos que avalen la tesis arriba consignada.

Siendo respetuoso con los datos existentes, es posible afirmar, como hipótesis de trabajo, que los votos emitidos por los ciudadanos en esas asambleas no iban dirigidos, precisamente, a ciudadanos caracterizados por la defensa de la ideología liberal, cualquiera que fuera la intensidad de su radicalismo. Según los datos disponibles y las informaciones existentes, todo parece apuntar a que eran ciudadanos que hacían profesión pública de su aversión hacia el régimen constitucional -a veces sin duda muy radicalizados- quienes conseguían ser votados.

De acuerdo con la hipótesis esbozada, lo que debemos que plantearnos como problema no es exactamente ¿qué hubiera pasado de haber contado con un sistema de electoral más directo, y por tanto democrático?, sino más bien, ¿ qué sucedía en el curso de ese complicado procedimiento electoral para que se produjera una distorsión en el sentido del voto popular?.

Aunque intentaremos contestar este interrogante con alguna parsimonia, podemos avanzar la respuesta: las elecciones de las Juntas electorales que se celebraban en las capitales de provincia, eran susceptibles de ser controladas por la autoridad superior de la provincia, esto es, los jefes

los jefes políticos nombrados por el Gobierno y que presidían la Junta. Aunque su capacidad de presión estaba condicionada por factores diversos, relacionados con el proceso electoral, (como el mayor o menor número de electores), y las características propias de la ciudad, tales como la combatividad del clero, la existencia de universidades, sociedades patrióticas, prensa, la presencia de acuartelamientos y otros rasgos de este tipo.

El reducido número de electores que acudían a las Juntas de partido y el más reducido de los que se congregaban en las Juntas de provincia, aunque representaran intereses de grupos sociales tradicionales podían sentirse eventualmente cohibidos por una presionante atmósfera liberal de las capitales y, por tanto, ser vulnerables a la lógica presión. Obligados a ejercer su derecho en público, en presencia de la máxima autoridad de la provincia designada por el Gobierno y bajo el influjo de las "intrigas saludables", es razonable pensar que sus impulsos ideológicos genuinos se vieran seriamente contrarrestados en el ambiente liberal de las capitales de provincia donde estaba el centro de las luces⁴¹¹ .

Atmósfera electoral.

Suele señalarse que desde el 7 de marzo - fecha en que

⁴¹¹ La expresión fué utilizada por Diaz del Moral en la discusión del proyecto de división del territorio, D.SS. Cortes extraordinarias, sesión 2 de octubre de 1821

Fernando VII aceptó el cambio de régimen-, hasta que abrieron sus sesiones las cortes, dominó en el país una atmósfera festiva. El aire de júbilo se manifestaba por múltiples motivos: colocación de una lápida de la constitución⁴¹², apertura de una sociedad patriótica, recibimiento de alguna personalidad que vuelve del exilio o prisión⁴¹³.

En general, se podría afirmar que los partidarios del nuevo régimen optaron por hacer patente su entusiasmo, ante el cambio operado, celebrando el triunfo y no ensañándose con el oponente político⁴¹⁴. Fueron estas muestras de regocijo de los liberales, junto al silencio de los absolutistas - algunos de los cuales imitando la conducta del monarca se plegaron al régimen constitucional sin creer en él- y, en fin, el deseo general de cambio, existente en grupos sociales importantes⁴¹⁵, los que conjuntamente proporcionaron al nuevo régimen una apariencia de solidez de la que ciertamente carecía pero que, a la postre, durante los primeros meses iban a contribuir a sostenerlo.

⁴¹² Un testimonio del ambiente vivido en un pueblo catalán por la colocación de la lápida, es recogido por Nuria Sales, *Historia dels mossos d'esquadra*. Barcelona 1962, págs. 211 y sigs.

⁴¹³ Sobre las celebraciones que con estos motivos se llevaron a cabo en distintas ciudades, puede consultarse A. Gil Novales *Las Sociedades Patrióticas I*, Madrid 1975.

⁴¹⁴ Los primeros días.. fueron de gozo puro" decía La Ley nº1, 1 de abril de 1820.

⁴¹⁵ Mesonero, *Memorias de un setentón*, Madrid, 1982.

Pero entreverado con el gozo por la "gloriosa restauración" había también un temor difuso. Este temor puede detectarse en la suspicacia que despertaban determinadas medidas adoptadas por la Junta Provisional en los primeros momentos. Así, al publicarse el 2 de abril el decreto por el cual el Rey mandaba que los militares que habían cumplido se licencien y vuelvan a sus hogares, el Conservador (periódico considerado de tendencia liberal exaltada) reflexionaba sobre la decisión en los siguientes términos:

"(...) El inconveniente de detener dos o tres meses más a los cumplidos es menor que la desconfianza que va a inspirar en las provincias dicha orden. Nunca se necesitan tropas más que ahora, y no tropas así como quiera sino gente empeñada en la defensa de la libertad. En guardar su puesto cada soldado hasta la reunión de cortes consiste su tranquilidad y la nuestra. ... Antes de deshacer el ejército defensor de la independencia, es preciso librarnos de las intrigas que se forman en los pueblos levíticos por los asesinos de la libertad de 1814, y que temen la ley de 1820, y de la vista odiosa de todos los malos. Los amantes del rey y de la patria no queremos sangre, calabozos ni presidios; pero tampoco la impunidad absoluta⁴¹⁶ (...)".

Finalizaba el artículo lamentando que los miembros de la Junta Consultiva se hubieran dejado engañar, al adoptar

⁴¹⁶ El Conservador n° 14, 9 de abril de 1820.

una medida de esta naturaleza cuando aún se encontraban al frente de puestos importantes gentes cuya adicción al régimen constitucional era dudosa, y reprochándoles no hubieran actuado como lo hicieron las Juntas de Aragón, Galicia etc., provincias en las que las Juntas correspondientes decidieron congelar la licencia.⁴¹⁷

El recuerdo de la reciente reacción absolutista del 14 pesaba sin duda, en la desconfianza que existía hacia la política del gobierno provisional encaminada, principalmente, a frenar el proceso revolucionario recién iniciado. Respondían a esta orientación la serie de nombramientos realizados, a través de los cuales el mando superior de las provincias recayó en personas cuyo apego a las ideas liberales era dudoso. Esta actuación provocó expresiones de desaprobación entre un sector del liberalismo. Los papeles periódicos, recogiendo ese malestar, lo explicaban en los términos siguientes:

"(...) Existe en las provincias, y digámoslo todo, en la corte, una desconfianza secreta del gobierno, que estimula a los buenos a mantenerse unidos y armados, no con intenciones anárquicas, con proyectos de desobediencia al Rey, que queremos todos los españoles y que defenderemos con nuestra sangre contra el poder del orbe entero, sino por el temor de verse sumidos en los males que sufrieron esos seis años de

⁴¹⁷ Ibidem.

amarga memoria. - Y añadía mas adelante- Fúndase ese recelo, quizá no del todo imprudente, en ver al frente de las provincias, y en puestos elevados de la capital a hombres detestados por sus delitos, enemigos irreconciliables de la Constitución; fúndase en ver proclamar por mucho como virtud heroica la prescripción de las leyes y como una medida que la política aconseja el olvido absoluto de lo pasado ⁴¹⁸ (...).".

Los mencionados nombramientos provocaron el consiguiente malestar entre los ciudadanos de las poblaciones afectados por esas medidas. A este respecto, se tienen noticias de las quejas de individuos de Aragón, Cataluña y Valladolid ⁴¹⁹ contra la designación en sus respectivas provincias del Marqués de Azara, Enrique O'Donnell y Santocildes, lamentándose que fiase la patria sus destinos a personas que no sólo no eran francos ni decididos amantes de la Constitución, sino que durante los acontecimientos revolucionarios tuvieron una conducta sospechosa.

Por otra parte, contribuía a reforzar este descontento la creencia, dominante en un sector del liberalismo, en que existía lenidad por parte de los jueces, a la hora de aplicar las leyes a quienes atacaban la Constitución. Esta percepción sobre la actuación judicial propició que los liberales,

⁴¹⁸ La Ley, n° 6, 21 de abril de 1820.

⁴¹⁹ Ibidem.

especialmente aquel sector encuadrado en el seno de Sociedades Patrióticas, empezaran pronto a llevar a cabo actos de justicia popular, imagen invertida de lo que hacían los tribunales⁴²⁰.

En medio de este desconcertante telón de fondo, aunque con un ambiente superficialmente festivo, las tendencias políticas rivales intentaron, sirviéndose de asociaciones (sociedades patrióticas), medios de comunicación (prensa y folletos), instituciones (Iglesia y ejército) y, en fín, organismos gubernamentales, movilizar a los ciudadanos convertidos ahora en árbitros de la disputa política.

Tendencias políticas: liberales y absolutistas.

Al restablecerse en 1820 el régimen constitucional, no existían en el país organizaciones de ámbito nacional capaces de encuadrar al electorado. Faltaban los partidos, "especie de milicia política con sus jefes y oradores que influyen en las elecciones". Razones de tipo ideológico ayudan en parte a explicar esa carencia: la idea de los partidos no era vista con agrado ni siquiera por algunos liberales. Prevalecía entonces la concepción "rusoniana" según la cual la expresión de la voluntad general, única, exige que no haya sociedad

⁴²⁰ El Conservador, n° 62, 27 de mayo, denunciaba el comportamiento de los jueces en las causas contra los conspiradores. De justicia del pueblo habló Romero Alpuente, D.SS Cortes, sesión de 7 de septiembre de 1820.

parcial en el Estado.

Seguramente la causa de esto habría que buscarla, no tanto en que repugnara a la concepción individualista del liberalismo la constitución de organizaciones que recordaban las corporaciones estamentales, a las que debían sacrificar su independencia ⁴²¹, sino a la connotación ideológica que en esos momentos para algunos suscitaba el concepto. En este sentido, cuando el diputado de Cortes José Moreno Guerra utilizó en el Congreso, a la semana del comienzo de las sesiones, la expresión "partido liberal", fué interrumpido por los diputados y Palarea tomando la palabra dijo:

"(...) Me he admirado mucho de oír al Sr. Moreno Guerra llamar partido a los liberales: los serviles son un partido; los afrancesados son un partido, pero los liberales son toda la Nación; los liberales no son ni han sido nunca un partido; son, repito, toda la Nación (...)" ⁴²²

Junto a la inexistencia de los partidos hay que mencionar, para entender el desarrollo de las elecciones, otro hecho significativo: el desconocimiento de la figura del candidato y, obviamente, toda suerte de candidaturas. Al menos formalmente nadie figuraba como candidato a la diputación de Cortes. Para entender esta particularidad uno

⁴²¹ De interés sobre este asunto el artículo publicado en Miscelánea, n° 104, 12 de junio de 1820.

⁴²² D.SS. Año 1820, Sesión de 16 de Julio, t.I, pág. 164.

puede remontarse a la concepción de la soberanía que inspiraba la representación y el sufragio, esto es, la soberanía como atributo de la nación y , enlazando con ello, el sufragio como una función que la nación encomienda a los ciudadanos y, en cuanto tal, irrenunciable. En virtud de lo cual, ningún ciudadano elegido por la nación podía excusarse o excluirse de la representación nacional.

No obstante la ausencia de candidatos y la inexistencia de partidos, las elecciones generaron una rudimentaria "campaña" o mejor, propaganda ⁴²³ electoral. Como podrá comprobarse más adelante, durante el período previo a la celebración de las elecciones, los partidarios de las tendencias políticas rivales emprendieron una variada gama de actuaciones encaminadas a influir en la opinión, estimular la participación y atraerse el voto del pueblo convertido en árbitro de la disputa política. Desde el púlpito, las Sociedades patrióticas, cuartos de bandera, los periódicos y folletos, emprendieron los ciudadanos actuaciones, de carácter pedagógico y realizaron propuestas de mejora local, dirigidas a movilizar e influir en los ciudadanos.

Meditando sobre el asunto de los candidatos, es decir, sobre los perjuicios o ventajas que derivaban de que los pretendientes a la representación nacional hiciesen públicas

⁴²³ Seguramente sería más correcto utilizar la expresión propaganda: las resonancias religiosas del término dan cuenta más adecuadamente del contenido y los métodos utilizados para atraerse la adhesión del voto de los ciudadanos.

sus solicitudes, para que de este modo se enterase el pueblo de cuántos aspiraban al desempeño de funciones públicas, un autor anónimo escribió:

"(...) Aunque a primera vista aparezcan ventajas considerables en adoptar semejante sistema (si el pueblo conoce sus representantes caminaría con confianza), no es reducible a la práctica sin temor de perjudiciales consecuencias⁴²⁴ (...)" .

Más adelante pasaba a señalar de dónde provenían y cuáles eran esas perjudiciales consecuencias:

"(...)Este (el pueblo), siendo en la mayor parte dirigido por preocupaciones y juicios precipitados, se dejaría arrastrar por ideas erróneas (..) y procedería a pedir que se excluyese del (..) cargo de su representante a quien pudiera desempeñar(..) éste en el mejor modo (...) "⁴²⁵ .

Y finalizaba haciendo la reflexión siguiente:

"(...) Es preciso, pues, para entablar un sistema racional, presuponer ejecutores racionales. Desgraciadamente no se halla en este caso todavía la España, porque la mayor

⁴²⁴ El entrecomillado pertenece a la nota XXVI de la obra del ciudadano Gudín, Suplemento al Contrato Social de Rousseau. libro I, Madrid, 1821. El libro fué traducido y aumentado con notas del mismo autor anónimo.

⁴²⁵ Ibidem.

parte de los componentes de su pueblo, por ignorancia unos, por preocupaciones otros, y no pocos por malicia, aún serían conducidos por unos caminos muy torcidos, cuando no fuesen absolutamente contrarios a la razón (...) ⁴²⁶ ".

Lo que el comentarista anónimo del Suplemento al Contrato de Rousseau está poniendo de relieve con su reflexión, es la desconfianza que hacia el voto del pueblo existía en el liberalismo radical, pero que posiblemente podíamos hacer extensiva a toda la corriente liberal. Entre los partidarios del sistema constitucional debía cundir la opinión de que el derecho al sufragio universal, concedido a un pueblo ignorante y susceptible de ser manejado, constituía un serio obstáculo para la voluntad general. De ahí que los liberales se mostraran firmemente partidarios de la elección indirecta y consideraran los derechos de petición y reunión, (en cuanto formas suplementarias de participación), indispensables para corregir el sentido del voto popular y dar a la política de los gobiernos la orientación más apropiada.

En el momento revolucionario por el que atravesaba el país, ese derecho alabado y precioso que era el de sufragio, fué utilizado más o menos solapadamente, según mostraremos más adelante, como el antídoto apropiado contra las veleidades revolucionarias. Los liberales moderados se

⁴²⁶ Ibidem.

sirvieron del planteamiento "ya tenemos Constitución, elección y Cortes", para justificar sus restricciones a la participación política⁴²⁷. Este aspecto conservador que históricamente ha tenido el sufragio, sobre todo si al voto se reduce toda la participación política, tendemos a olvidarlo con demasiada frecuencia.

Simplificando podemos reducir a dos las tendencias políticas que contendieron en las primeras elecciones: liberales y absolutistas. Aunque la realidad, como casi siempre sucede, es bastante más compleja y no acabe de encajar en esa cómoda tipología. Integraban la tendencia liberal los "doceañistas", autores de la Constitución del año 12 y que padecieron exilio o prisión durante el sexenio, y quienes durante este mismo período protagonizaron las conspiraciones contra el régimen y fueron los autores del cambio político. Aunque los prohombres de las Cortes de Cádiz, por su mayor prestigio y experiencia política, fueran considerados los jefes naturales de esta tendencia, su liderazgo fué discutido y sus planteamientos contestados antes de la instalación de las Cortes. Entre los motivos que originaron las diferencias, pueden citarse : la falta de discernimiento en la elección para los empleos públicos por parte de la Junta Consultiva (Jefes políticos, empleados públicos, jueces) que recaían en personas poco adictas a la

⁴²⁷ Ver Hirschman Interés privado y acción pública, México 1986. En su disgresión histórica sobre el sufragio universal, el autor subraya esta interpretación del voto como medida restrictiva y conservadora.

constitución ⁴²⁸ y los nombramientos y licencias en el ejército; la debilidad en la aplicación de las leyes por "el delirio de una moderación insensata" que, entendían, ponía en grave peligro la libertad⁴²⁹ y, por último, la estrategia política de moderación y freno seguida por la Junta Provisional, que tuvo su reflejo en la resistencia a poner en pie de golpe toda la obra legislativa de las Cortes extraordinarias⁴³⁰.

Detrás de estas disputas, de naturaleza política y jurídico constitucional, existían diferencias de mayor calado relacionadas con el distinto planteamiento que, sobre el modelo de régimen y la participación política, empezaban a brotar en el seno de la corriente liberal. De un lado

⁴²⁸ En el diario "El Conservador" n° 62 del 27 de mayo podía leerse: "Entre tanto se sostenga la idea de consolidar la Revolución con los mismos agentes que por necesidad se hallan acostumbrados al porte y máximas del régimen que se quiere abolir... caminamos tortuosamente a la libertad...".

⁴²⁹ En el citado artículo se advierte que "la actual conducta se parece demasiado a la que observamos en la anterior época constitucional..." y pronostica la caída del sistema porque : "...las mismas causas producirán eternamente los mismos efectos..". La Ley, n° 4, 14 de abril 1820.

⁴³⁰ En un artículo titulado "Reflexiones critico-políticas sobre el Gobierno", aparecido en La Ley, se planteaba la cuestión siguiente: "... ¿ El gobierno actual en el hecho de jurar la Constitución que formaron las Cortes, no aprobó y reconoció la legitimidad de las Cortes... y no se sujetó a la obediencia de las leyes que de ellas emanan como son todos los decretos dados por las mismas... ? Para finalizar con la siguiente exclamación: "¡...Monstruosísimo es a la verdad que hagan salir estos decretos de uno en uno, como si estas leyes expresas, emanadas de las fundamentales y constituídas por la misma autoridad nacional extraordinaria hubieran de estar sujetas a la sanción del Rey!". La Ley, n° 13, de 16 de mayo 1820.

estaban, los que pronto se conocerían como "exaltados", quienes escarmentados por el fracaso de la pasada experiencia apostaban por un sistema en el que coexistiera el entramado de poderes del régimen con lo que ellos denominaban el "elemento democrático". Lo que significaba apoyar medidas que impulsen el proceso revolucionario, (rebaja de las contribuciones y liquidación de los señoríos), y den un mayor protagonismo a los ciudadano que conocen sus derechos, (ley que amplíe el derecho de petición y las reuniones públicas). Medidas todas ellas que, como veremos, no eran del agrado del ala más moderada del liberalismo.

Su insistencia por incrementar la participación provenía de la poca confianza que les inspiraba la Junta provisional y el Ministerio, y el temor a que de las elecciones surgiera una representación nacional "amoldada a su gusto". Temían que las instituciones, aisladas, no fueran capaces de adoptar las medidas que contribuyeran a crear los "intereses materiales de la revolución"⁴³¹ ; en particular mencionaron:

"(...)Los que puedan hacer que jornaleros y proletarios sientan, por experiencia inmediata y pronta la utilidad del nuevo régimen que se acaba de establecer, y estos efectos no pueden realizarse sino transformando en ciudadanos activos, en hombres independientes, en propietarios, a simples braceros y a gente baldía y holgazana (...)".

⁴³¹ Miscelánea del Comercio..., n°112, 20 de junio 1820.

Frente a la corriente liberal en trance de división, se encontraban los absolutistas (tampoco demasiado unidos), partidarios del antiguo régimen y la monarquía neta. Lideraban esta tendencia miembros del alto clero y, muy pronto, el Nuncio Apostólico. Ciertamente el juramento de la Constitución por el Monarca ocasionó entre ellos notable desconcierto y dió lugar a una división de actitudes y comportamientos ante el nuevo régimen. De un lado se encontraban quienes, desde sus comienzos, se dedicaron a urdir tramas para derrocarlo. De otra parte estaban quienes, por cálculo o simple desorientación, se plegaron en apariencia a la nueva situación y, aprovechando todas las oportunidades, intentaban defender sus intereses amenazados. En cualquier caso unos y otros se dedicaron muy pronto, de forma abierta o velada, violenta o pacífica, a denigrar a los liberales como enemigos del Rey, de Dios y de la Nación.

4.5. Celebración de elecciones.-

El Decreto de Convocatoria disponía que las Juntas Electorales de Parroquia, Partido y Provincia se celebraran los días 30 de abril, 7 y 21 de mayo respectivamente. En Canarias, donde la noticia del restablecimiento del sistema constitucional llegó más tarde, las elecciones se verificaron en fecha distinta.

Las elecciones se practicaron en un ambiente de

tranquilidad aparente aunque sobre el inquietante telón de fondo de la amenaza contrarrevolucionaria. Las páginas de los diarios recogían entre sus noticias "rumores de conspiración de frailes" procedentes de Santiago y otros lugares de Galicia en vísperas de las Juntas de Parroquia⁴³². Es fácil entender en este contexto la decisión de la tropa acantonada en Lugo de postergar su licencia hasta finalizadas las elecciones sin exigir prima de reenganche.⁴³³

En fechas próximas a las Juntas electorales de Provincia refiere la prensa los tumultos que tuvieron lugar en distintos lugares de Aragón (Alcañiz y Calatayud), promovidos por militares, de inconfundible carácter absolutista - "...los sediciosos trataron de quitar la lápida de la Constitución" - y que ocasionaron cierta alarma entre los liberales⁴³⁴.

Hubo lugares especialmente conflictivos, en los que las autoridades adoptaron medidas excepcionales para asegurar la

⁴³² Bajo el seudónimo de Juan Claro apareció un suelto que decía: "Anúnciase de muchas partes que algunos clérigos ilusos, tal vez protervos y vendidos a la persiana facción, intentaban mover la guerra civil...en nada más se ocupan que en inquietar las conciencias e incendiar la ominosa tea de la discordia..." El Conservador, n° 41, 26 de mayo de 1820.

⁴³³ Ver a este respecto Novales, Las Sociedades Patrióticas, T.I. pág.173.

⁴³⁴ La noticia sobre estos tumultos nocturnos que tuvieron lugar en fechas próximas a las elecciones del 17 (los días 14 y 17 de mayo) fueron recogidas por El Universal Observador, n°, 9, de 20 de mayo; y El Conservador, N° 62 de 27 de mayo 1820.

tranquilidad pública. Tal fué el caso de Valencia, donde el ayuntamiento constitucional acordó , a instancias de una representación de cuarenta y cinco vecinos, solicitar del juez de primera instancia, el arresto del general Elío y otros militares, clérigos, magistrados, empleados en rentas y paisanos, todos ellos "enemigos mortales" del nuevo sistema⁴³⁵.

Sorprende, sin embargo, la ausencia de noticias sobre las alteraciones del orden constitucional producidas por el incumplimiento del mandato del gobierno provisional de celebrar elecciones. Según la Instrucción para el gobierno económico-político de las Provincias, era responsabilidad de quien presidía el Ayuntamiento de cada pueblo avisar a los vecinos de la fecha de celebración de las Juntas⁴³⁶. Parece que en algunos núcleos rurales de población dispersa, - campos de Galicia, Asturias, Alava y Navarra, - los ayuntamientos constitucionales⁴³⁷ no estaban implantados debido acaso a la ignorancia y, quizá también, a que los grupos sociales tradicionales, amparándose en el obstáculo que suponía el

⁴³⁵ Sobre los sucesos de Valencia y las infracciones a la Constitución, cometidas por jueces y autoridades durante el Gobierno Provisional, puede consultarse D.S.C. ses. 6 de setiembre y 4 de octubre de 1820.

⁴³⁶ Decreto CCLXIX, de 23 de Junio de 1813-

⁴³⁷ Sobre los nuevos ayuntamientos liberales y su importancia para la participación de los ciudadanos, pueden consultarse los Diarios de Sesiones, Memoria leída por el Secretario de Gobernación el 11 de Julio de 1820 y 4 de marzo de 1821. Sobre la reforma municipal A.Posada, Evolución legislativa del régimen local español, Madrid 1910, págs.348 sigs.

medio natural, estorbaban la aplicación de los preceptos constitucionales⁴³⁸. Es de sospechar, porque no existen datos bastantes para medir su alcance, que en esos campos pudo haber tenido lugar una suerte de "silenciosa revuelta electoral" . Acaso por este motivo, cuando las Cortes publicaron el Decreto para combatir a los conspiradores y los infractores de la Constitución, elaboraron uno de sus artículos en los términos siguientes: " ...cualquier persona que impidiese la celebración de Juntas Electorales cumplirá pena de privación de empleos, sueldos y honores que obtenga, y diez años de presidio" , para señalar a continuación "si para ello se usase de fuerza con armas, o de alguna conmoción popular, será castigada a muerte". ⁴³⁹

Celebración de las Juntas Electorales:

Juntas de Parroquia y Cuerpo Electoral.

De acuerdo con nuestros cálculos, el número de ciudadanos con derecho a voto en este escalón del proceso electoral podía rondar, sobre poco más o menos, la cifra de dos millones y medio. Hemos llegado a esta cantidad

⁴³⁸ Sobre los conflictos relacionados con la implantación de los ayuntamientos constitucionales C.de Castro, La revolución liberal y los municipios españoles, Madrid 1979, págs.57 y sigs.

⁴³⁹ El mencionado Decreto de las cortes fué publicado el 17 de abril de 1821.

hipotética a través de dos métodos distintos pero, en ambos casos, tomando como base la población que arrojaba el recuento efectuado, con fines electorales, el año 1821. Según dicho censo, publicado en 1822, la península e islas adyacentes contaban con 11.663.980. habitantes.

La primera fórmula utilizada para efectuar el cálculo, ha consistido en descontar del total de población mayor de 25 años, (que andaba en torno al 48,81 %) , el porcentaje que correspondía a la población femenina, (cuya cifra alcanzaba el 50,48 %) , dando como resultado la cifra de 2.818.783 varones mayores de 25 años. Ahora bien, posteriormente, y teniendo en cuenta las exclusiones que establecen los preceptos electorales, hemos deducido de ésta última cifra a los individuos pertenecientes al clero regular (según parece algo más de 61.000), los dependientes domésticos (cuyo número no bajaba de los 200.000) y, en fín, a la población reclusa.

Hemos llegado a una cantidad similar a la anterior, operando sobre los datos de población que suministran las Actas de las Juntas Preparatorias de Provincias. De las 33 provincias existentes hemos operado sobre cuatro: Alava, Cádiz, Jaen y Murcia. Realmente no hemos seleccionado estas provincias obedeciendo a un criterio lógico sino causal, es decir a la circunstancia de ser las actas de las mencionadas provincias las únicas que suministran una información detallada. En concreto, son las que ofrecen el número real de

ciudadanos que podían votar en las elecciones parroquiales de los distintos partidos.

Según estos datos, el porcentaje de ciudadanos (vecinos) que sobre el total de la población gozaba en las provincias citadas de derecho al sufragio oscilaba entre el 23,2 % , en las provincias de Jaén y Murcia, y el 21% de Cádiz , estando el porcentaje de Alava en el 21,56% . Si aplicamos el promedio de esos porcentajes al total de población de la península e islas adyacentes resulta que algo más de dos millones y medio de ciudadanos tenían derecho a participar, mediante su voto, en las Juntas electorales de Parroquia.

Cuadro 8.- Ciudadanos y electores.-

PROVINCIAS Y POBLACIÓN SEGÚN CENSO DE 1797		NÚMERO VECINOS	ELECTORES PARROQUIA	ELECTORES PARTIDO	DIPUTADOS
ALAVA	67.523	14.558	72	6	1
CADIZ	304.371	63.987	333	14	4
JAEN	206.807	54.147	281	10	3
MURCIA	383.226	89.147	446	15	5

Fuente: Elaboración propia sobre las Actas Juntas preparatorias elecciones.

Completando los cálculos y a partir de la información que suministran las Actas de las Juntas preparatorias de las provincias es posible especular sobre la cifra teórica de electores que, sobre poco más o menos, podían intervenir en los distintos grados de proceso electoral.

Cuadro 9.- Número de electores en la Península e Islas.

PARTICIPACIÓN	JUNTAS ELECTORALES	NÚMERO TOTAL
CIUDADANOS	DE PARROQUIA	2. 500.000
COMPROMISARIOS	DE PARROQUIA	110.000
ELECTORES PARROQUIA	DE PARTIDO	11.000
ELECTORES PARTIDO	DE PROVINCIA	492

F. Casas. Elaboración propia.

No es posible desconocer el hecho de que la casi totalidad del cuerpo electoral estaba constituido por pura clase rural. En un medio rural vivía el 81,34 % de la población española y dentro de la estructura social, la población agraria era la más numerosa oscilando del 54,72% al 60,49% según los censos de 1797 y 1826 respectivamente⁴⁴⁰.

⁴⁴⁰ Los datos sobre la población española han sido tomados de la obra de Moreau de Jonnes, Alexander, Estadística de España, traducida y adicionada por P. Madoz, Barcelona 1835.

Cuadro 10. Clasificación socioeconómica de la población.

CONCEPTO	NÚMERO	%
CLERO	203.298	1,98
NOBLEZA	1.440.000	14,02
EMPLEADOS CIVILES Y MILITARES	343.047	3,43
ABOGADOS, NOTARIOS Y ESTUDIANTES	199.566	1,94
ADMINISTRACIÓN, EJÉRCITO Y MARINA	590.000	5,75
DOMÉSTICOS	840.276	8,18
COMERCIANTES	103.017	1,00
FABRICANTES	119.250	1,16
ARTESANOS	812.976	7,91
LABRADORES	2.721.291	26,52
JORNALEROS	2.893.713	28,20
TOTAL.....	10.268.000	100,00

Fuente: Moureau de Jonnes, Estadística de España.p,74 .

La presentación de los datos que ofrece Moureau es más castiza: clero 1 sobre 50; nobleza 1 sobre 7; empleados 1 sobre 30; administración 1 sobre 18; criados 1 sobre 12; comerciantes 1 sobre 100; artesans 1 sobre 12; labradores 1 sobre 4; fabricantes 1 sobre 90; jornaleros 1 sobre 4.

Cuadro 11. Estructura social de la población en 1826.

CONCEPTO	HABITANTES	CON POBLACIÓN DEPENDIENTE	%
CLERO	150.319	186.498	1,33
NOBLEZA	403.382	1.436.000	10,16
BURGUESÍA	451.310	1.579.585	11,17
POB. AGRICOLA	1.836.320	8.613.460	60,94
POB. INDUSTRIAL	515.168	2.318.256	16,40
TOTAL	3.356.499	14.133.799	100,00

Fuente. Moureau de Jonnes, ob.cit.

Moureau, dividía la población por clases, (sobre la población del censo de 1826), según aparece en el cuadro 12.

Precisaba, no obstante, la posibilidad de que se figurasen dobles empleos inevitables en "las masas" de población que indicaban las cifras.

Cuadro 12. División en clases sociales.

CONCEPTO	POBLACIÓN TOTAL	POB. RELATIVA
NOBLEZA	1.440.000	1 sobre 9 habitantes
PECHEROS*	1.579.000	1 sobre 9 habitantes
POB. AGRÍCOLA	8.613.000	1 sobre 3 habitantes
POB. INDUSTRIAL	2.318.000	1 sobre 6 habitantes
TOTAL GENERAL	13.950.000	

Fuente. Moureau de Jonnes, ibidem. (* En la nota 25 el traductor, que era Pascual Madoz, aclaraba: usamos esta palabra como término medio entre nobles y proletarios).

El medio rural predominaba en todas las regiones, incluso en las de más importancia urbana, aunque ciertamente existían diferencias considerables. Las regiones de mayor grado de urbanización eran Andalucía, Murcia, Baleares, Granada y Valencia. Según el censo de 1797 sólo 22 poblaciones, consideradas como eminentes aglomeraciones urbanas, (aunque sin alcanzar el tipo de vida ciudadano), superaban los 20.000 habitantes; Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla constituían, por ese orden, los principales núcleos de población.

Domínguez Ortiz en un pasaje de su obra sobre la sociedad española del XVIII refiere:

"(...) La inmensa población era rural y vivía dispersa en caseríos y lugares o concentrada en pueblos de mayor vecindario; en ocasiones la presencia de una sede episcopal o de un núcleo de burguesía mercantil o industrial daba categoría urbana a núcleos muy reducidos de vecindario, tal era el caso de los puertos del norte (...). En cambio, centros populosos de Andalucía y La Mancha, aunque combinaran las actividades agrícolas con un artesanado extenso, no alcanzaban el tipo de vida ciudadano ⁴⁴¹ (...)" .

Esta pintura sobre nuestra sociedad de fines del dieciocho seguramente seguía siendo válida en el primer tercio de la centuria siguiente. Por cierto, un rasgo de ese cuerpo electoral que no conviene desconocer es que, en su rebosante mayoría, el potencial elector era analfabeto. El porcentaje de españoles que sabían leer y escribir oscilaba entre el 5,96% y el 9.21%, según los datos que proporcionan los censos de 1797 y 1841, respectivamente⁴⁴² .

No resulta difícil imaginar el alcance de esa miseria espiritual, que tanto preocupó a los ilustrados, considerando

⁴⁴¹ A. Domínguez Ortiz, *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Barcelona, 1993.

⁴⁴² Sanchez Agesta, *La Historia del Constitucionalismo español*, Madrid, 1962.

el estado en que se encontraba la educación primaria en España. Una encuesta realizada por el primer Gobierno constitucional el año 1820 proporcionaba la información siguiente. En Burgos 279 pueblos no tenían escuela; en Guadalajara faltaban 76; en Jaén 12; en Soria 91; en Avila sólo 30 tenían maestros verdaderos, en Málaga había pocos alumnos que supieran leer; en la Mancha los padres no enviaban sus hijos a la escuela, preferían mandarlos a cuidar el ganado. El balance de conjunto no podía ser más desolador:

"(...) Sólo una provincia (Cádiz), se encuentra en una situación pasable, y otras dos (Cataluña y Navarra) en una situación bastante buena. Las demás hablan de "mal estado" (Soria), "muy mal estado" (Salamanca, Toledo y Asturias)(..) total abandono de la primera educación (Córdoba)⁴⁴³ (...)".

Más grave, si cabe era el hecho que pocas regiones españolas sentían la necesidad de educación obligatoria (Granada era una de las excepciones). La razón era bien simple, no se planteaban un problema que no estaban en condiciones de resolver. Vivían en la miseria, y sin dinero no había maestro.

Se desconoce el número exacto de parroquias en las que se congregaban los ciudadanos para efectuar la designación de

⁴⁴³ Un resumen aparece en la Memoria del Secretario del Despacho de Gobernación, D.SS.Cortes, sesión de 4 de marzo de 1821.

compromisarios y elector parroquial; el número de las existentes, según los datos que proporcionaba el Censo de 1797⁴⁴⁴, era de 19.186 pero esta cifra tendría que corregirse, seguramente a la baja, por las agregaciones que, a efectos electorales, procedía llevar a cabo al no contar muchas parroquias con el mínimo de población que la Constitución exigía para verificar en ellas la elección.

Sobre el desarrollo de las elecciones, en las parroquias radicadas en los núcleos urbanos y que contaban con un crecido número de votantes, comentaba Marcial A. López:

"(...) el inconveniente único que se ha tocado, ha sido la larga duración de estos actos, que como no pueden interrumpirse según la constitución, ha causado grandes inconvenientes, siendo uno de los principales el no haber podido muchos ciudadanos votar ⁴⁴⁵ (...)".

El anterior comentario alude a lo acaecido durante la celebración de las elecciones de Madrid, en aquellas parroquias con casi cuatro mil ciudadanos, donde cada vecino tenía que designar treinta y un compromisarios quienes, posteriormente, se encargaban de escoger a los electores parroquiales. Algo similar parece que sucedió en otras poblaciones del país, lo que provocó que algunos

⁴⁴⁴ Censo de Frutos y Manufacturas de España e Islas Adyacentes, Imprenta Real, Madrid 1803.

⁴⁴⁵ Op. cit. pág.169

ayuntamientos, como el de Cartagena, dirigieran exposiciones a las cortes dando cuenta de la "imposibilidad de hacerse las elecciones parroquiales debidamente en una sola iglesia, por la numerosa población que concurría a ella" y solicitaran que "a imitación de lo que acordaron las Cortes extraordinarias con respecto a Cádiz, se habilitasen algunas ayudas de parroquias en la ciudad y extramuros, designándoles el número de electores según el de vecinos que les perteneciese"⁴⁴⁶.

Al no existir reglamento alguno sobre las juntas parroquiales , lo que de ordinario ocurría era que los vecinos no acudían a la hora señalada, ni a la misa del Espíritu Santo, ni a las elecciones de secretario y escrutadores y:

"(...) tomándose los ciudadanos todo el tiempo que gustan para ir a dar su voto ausentándose al instante y no permaneciendo en la junta para los actos sucesivos a las elecciones, (...) en las parroquias grandes se pueden hacer (las elecciones) muy largas (...) todo cuanto quieran los vecinos "⁴⁴⁷ (...)".

El desarrollo de las Juntas de Parroquia estaba mediatizado por las tensiones locales. A este respecto

⁴⁴⁶ Exposición del Ayuntamiento de Cartagena, D.SS, Cortes, ses. del 3 de octubre 1820.

⁴⁴⁷ El texto corresponde a la proposición de Cortés a la cámara, solicitando se forme un reglamento sobre las juntas parroquiales. D.SS.Cortes sesión de 25 de septiembre 1820.

resulta bastante expresiva la denuncia de los vecinos de Colmenar:

"...los principales del pueblo hacían las elecciones en día de trabajo, distinto del señalado para que no pudiesen votar los trabajadores..."⁴⁴⁸ .

La razón de este abuso hay que achacarla al conflicto que en ese pueblo , como en tantos otros de la meseta, existía entre labradores arrendatarios y ganaderos⁴⁴⁹.

También fué motivo de incidentes y conflictos en pueblos y ciudades, el asunto de si los ciudadanos que concurrían a las Juntas para emitir el voto reunían o no la condición de elector. Resulta complicado calibrar el alcance de este problema debido a la regulación que, por agilizar los trámites del procedimiento electoral, hacían sobre el asunto las disposiciones que desarrollaban los preceptos constitucionales⁴⁵⁰. A este respecto, la Orden emanada de las Cortes generales y extraordinarias establecía :

⁴⁴⁸ Esta actuación de "los principales del pueblo" fué denunciada en la Sociedad de Lorencini. Gil Novals. ob.cit.

⁴⁴⁹ De Castro. op.cit.p.79.

⁴⁵⁰ Nos referimos al artículo 50 del texto constitucional que decía: " Si se suscitasen dudas sobre si en algunos de los presentes concurren las calidades requeridas para poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo que le parezca; y lo que decidiere se ejecutará sin recurso alguno por esta vez y para un sólo acto".

"(...) para comprobar las tachas que generalmente ocurren en todas las juntas, no podrán hacerse informaciones ni diligencias por escrito en contra de la reputación de ciudadano en que se halle cualquier individuo (...)"⁴⁵¹

En un país donde la miseria era grande y el desbarajuste en la administración de hacienda proverbial, aunque el número de deudores del crédito público fuera notable, no debía resultar objetivamente fácil descartar a los ciudadanos que acudían a votar con esa tacha. Desconocemos el alcance preciso que tuvo el fenómeno, no obstante, debió ser bastante general. El diputado Moreno Guerra refiriéndose a estas juntas, "regularmente bastante ruidosas, porque la libertad siempre es bulliciosa " comentaría:

"(...) ¿Cuál es la provincia donde no hayan procurado ir a votar aquellos mismos que por tener deudas a favor de los fondos públicos, o estar insolventes, tenían suspensos los derechos de ciudadanos, y otras nulidades y defectos semejantes? (...)" ⁴⁵².

En Madrid hubo ciudadanos que se vieron privados del

⁴⁵¹ Orden de las Cortes GG. y EE. 30 de junio de 1813. "(...) Para comprobar las tachas que generalmente ocurran en todas las juntas, no podrán hacerse informaciones ni diligencias por escrito en contra de la reputación de ciudadano en que se halle cualquier individuo", en Colección de Decretos y Ordenes, Cortes generales y Extraordinarias, Madrid, 1814.

⁴⁵² D.SS. Cortes ordinarias. Ses. 8 de marzo 1821.

derecho a emitir su voto alegando, como motivo de exclusión, su condición de sirviente doméstico. Las páginas de los diarios informaron y opinaron sobre el asunto en los siguientes términos:

"(...) Se nos avisa de haberse suscitado la duda de si los dependientes de comercio, conocidos en algunas partes bajo la denominación de factores, cajeros y otras varias, están comprendidos en la clase de sirvientes domésticos: que tienen suspensos sus derechos de ciudadanía en virtud de lo dispuesto en el art. 25. de la Constitución (...) No creemos que tales individuos puedan ni deban ser considerados de tal clase. Lo odioso debe restringirse, lo favorable ampliarse, y en consecuencia nosotros no contaríamos en la clase de sirvientes domésticos más que aquellos que sirviesen inmediatamente a personas, no los que sirviesen a establecimientos ⁴⁵³ (...)".

Sobre el mismo tema debieron también producirse problemas en los núcleos rurales, en este caso la condición de sirviente se asimilaba a los individuos que desempeñando diversos oficios (caseros, temporeros, capataces), vivieran en casa de sus señores. Es posible que, tanto en el campo como en las ciudades, se utilizara abusivamente el art. 25 para privar del voto a los adversarios políticos.

⁴⁵³ Miscelánea, n° 77 4 de mayo 1820.

Las Cortes, a instancias de la indicación planteada por uno de sus miembros⁴⁵⁴, y con el fin de evitar los altercados que podrían suscitarse en las juntas electorales de parroquia, por la diferente inteligencia que se daba a la voz "sirvientes domésticos", publicaron, en vísperas de las elecciones del año 1821, una orden cuya parte central decía:

" (...)Bajo la referida voz sólo deben comprenderse los criados que estipulen o contraten prestar a las personas de sus amos como objeto principal algún servicio casero y puramente mecánico, con exclusión de cualquiera que pertenezca a las labores o ejercicio de campo, y de los relativos a las ciencias, artes, comercio, industria, educación de niños o jóvenes, desempeño de oficinas de Cuenta y Razón, y demás iguales y semejantes clases ⁴⁵⁵ (...) "

De distinto carácter fué el altercado que debió tener lugar en las Juntas de Parroquia de Lopera y Martos, pueblos de la provincia de Jaén, donde no sólo admitieron dos Freires a participar en la elección, sino que uno de ellos llegó a desempeñar el empleo de escrutador, contraviniéndose lo

⁴⁵⁴ La indicación leída por el diputado Sr. García en la sesión de 29 de sep. de 1920 decía : " He observado en algunas juntas electorales de parroquia cuestiones muy acaloradas por querer incluir entr los sirvientes domésticos a los caseros, temporeros, capataces, y apeadores que viven en las casas de campo de sus amos, y a los administradores, contadores y tesoreros que habitan en las de sus señores particulares"; para finalizar pidiendo que se fijara la significación de las palabras "sirviente doméstico".

⁴⁵⁵ Orden de 24 de Junio de 1821.

establecido de forma terminante por el Decreto de 14 de Junio de 1813 ⁴⁵⁶. Los vecinos de esos pueblos elevaron la correspondiente reclamación a las Cortes. La Comisión de Poderes resolvió que:

"(...)sin perjuicio de la validación del nombramiento de los SS Diputados (...) se prevenga al Jefe Político de Jaén que en adelante evite que se repitan semejantes admisiones como contrarias a la ley ⁴⁵⁷ (...)".

El clero regular es evidente que no se resignó a quedar fuera de un proceso del que los liberales, por ley, les habían excluído. Pero fué el clero secular, especialmente los párrocos, quien disponían de condiciones más favorables para controlar, quisieran o no, este grado del proceso electoral. Su influjo debió ser abrumador en todo el país, a veces a su pesar. La prensa periódica, incontenible, lo destacaba con desasosiego:

"(...)Es menester decirlo: sabemos que la influencia del clero se ha manejado con tal actividad en cierto distrito, que ha logrado tener treinta y tantos curas por electores parroquiales, entre cincuenta y seis números, total de

⁴⁵⁶ Según el mencionado decreto quedaban excluidos del derecho de sufragio activo y pasivo "los Caballeros de Justicia profesos de la orden de San Juan de Jerusalén, Los freires clérigos de la misma Orden y los de las Ordenes Militares.

⁴⁵⁷ Informe de la Comisión de Poderes sobre los Diputados Electos. Archivo de las Cortes, Leg.4,nº106.

nombrados. Hablamos del partido de Huete por si alguno quisiese asegurarse de la verdad de la noticia. A pesar (...) de que el cura de la parroquial del Cristo de aquella ciudad, en la plática que dirigió a la Junta se explicó en el sentido que cualquiera conocerá diciendo: que la Religión de Jesucristo se hallaba atacada por esos filósofos modernos, por ese cúmulo de papeles subversivos e incendiarios, y por esos charlatanes de café. Haciendo recaer sobre esta advertencia la recomendación hacia las personas de reconocida cristiandad ⁴⁵⁸ (...)." .

Con cierto tono de preocupación, informaba el diario Miscelánea, sobre las elecciones de Palencia, que fueron "acaloradas", y dieron a los eclesiásticos "el triunfo en la lucha", y Valladolid, donde algún eclesiástico llegó a obtener "casi unanimidad de votos". Después de resaltar lo evidente, "en general los pueblos de Castilla tienen más disposición a elegir clérigos que seglares", el comentario que estos resultados suscitaba en los redactores del periódico era tan incierto como poco ocurrente:

"(...) si los clérigos entendiesen del gobierno nosotros no lo sentiríamos, pero si son sólo teólogos podrá ser muy fatal su nombramiento, pues excelentes para cuidar de la pureza del dogma (...) suelen tener una ignorancia profunda, o lo que es peor abrigar errores funestos en las materias de

⁴⁵⁸ La Colmena, n° 31, 23 de mayo de 1820.

administración pública ⁴⁵⁹ (...)".

Acaso por lo insólito recogía el diario Conservador lo ocurrido en una Junta Parroquial de Galicia, donde:

"(...) proponiéndose a sí mismo el cura párroco para elector, gritaron los feligreses que no les acomodaba (...) que querían gente a su modo, que los clérigos los tenían acabados⁴⁶⁰ (...) "

En fin, este breve relato puede servir como una muestra evidente de la combatividad del clero y su envidiable aptitud para plegarse a las nuevas condiciones políticas. Pero también pone de relieve que el clero, especialmente la figura del párroco, - que pertenecían al pueblo por nacimiento, aunque por su instrucción estuviera por encima de él-, ostentaba un considerable ascendiente sobre amplias capas de la población. Tomás de Salas, en sus Comentarios a la Constitución, aludía al riesgo que en los "lugares cortos" significaba la asistencia del cura párroco :

"(...) ¿ Quién no ve la grande influencia que el párroco, acaso la única persona que sabe algo del pueblo, debe tener sobre el espíritu de sus ignorantes y sencillos parroquianos acostumbrados a dejarse guiar dócilmente por su

⁴⁵⁹ Miscelánea del Comercio, Artes y Literatura, n°86, 17 de mayo de 1820.

⁴⁶⁰ El Conservador, n° 53, 18 de mayo de 1820.

pastor en los negocios más importantes de su vida?⁴⁶¹(..)".

Pero forzoso es reconocer que los "manejos electorales", cuando se producían, no provenían sólo de parte del clero; los empleados del gobierno no les iban a la zaga. Especialmente en las parroquias radicadas en los núcleos urbanos, que les resultaban más próximas y donde debían gozar de una mejor posición para ejercer su influjo, se aplicaron a esa tarea con total dedicación. Una muestra de ello podía ser la información que suministraba El Miscelánea:

"(...)El 30 se celebraron en Burgos elecciones parroquiales con mucho orden, excepto en las parroquias de Santiago y San Gil, donde hubo grande acaloramiento, porque había sujetos que querían sacar electores de su facción, es decir enemigos de las nuevas instituciones, y lo mismo hubiera sucedido en la parroquia de San Lesmes a no estorbarlo la energía del Jefe político que presidía la reunión ⁴⁶² (...)".

Por emplearse con más energía de la cuenta se interpuso un recurso de queja por infracción de la Constitución contra el jefe político de Murcia. Al no dar resultado sus manejos para controlar las elecciones municipales en las juntas de

⁴⁶¹ Ramon Salas, Lecciones de derecho Público constitucional, Madrid, 1982. pág. 191.

⁴⁶² Miscelánea del Comercio, Artes y Literatura, n° 83, 10 de mayo de 1820.

parroquia de Hellín, (valiéndose de "paniaguados" suyos), mandó la fuerza armada, "como si fuese un bajá de tres colas", para despojar los concejales y se procediese a nuevas elecciones.⁴⁶³

Sobre el influjo de los jefes políticos especulaba Salas en sus Lecciones en la forma siguiente:

"(...) ordenar que las asambleas primarias y las demás electorales, sean presididas por un empleado del gobierno, dependiente de él, me parece que no deja de ser arriesgado por la influencia que deben tener los presidentes en estas asambleas, cuyos miembros estarán naturalmente dispuestos a conformarse con la voluntad de unos empleados, de los cuales, como jefes de la administración civil, pocas veces dejarán de depender en algún modo ⁴⁶⁴(...)".

Sin embargo, como el citado autor reconoce, este riesgo con ser importante aún era mayor en las juntas de partido y, sobre todo en las de provincia.

Juntas Electorales de Partido.-

El número de ciudadanos que, como electores de

⁴⁶³ D.SS, Cortes sesión de 8 marzo 1821. El entrecomillado corresponde a la intervención de Moreno Guerra.

⁴⁶⁴ Tomás Salas, op.cit.pág. 191.

parroquia, podían intervenir en los comicios que se verificaban en estas asambleas superaban la cifra de once mil (11.500 aproximadamente). Se distribuían entre los casi trescientos partidos en que estaban divididas las 33 provincias. La provincia que contaba con mayor número de partidos era Galicia (con 47 partidos), seguida de Burgos (con 23 partidos); la que menos Toro con un único partido. El partido que tenía que designar en su asamblea mayor número de electores era el de Madrid (11 electores), seguido del de Valencia (con 9). Gracias al seguimiento que el periódico Universal realizó sobre las elecciones de Partido, que se celebraron en Madrid el año 1821, sabemos que en esa Junta intervenían más de cien electores parroquiales - 119 para ser exactos-. ⁴⁶⁵

Conviene recordar, por otro lado, que los ciudadanos que acudían a votar en este grado debían poseer un grado de instrucción mínimo porque, según las disposiciones constitucionales, la elección en esta fase se verificaba "mediante cédulas" ⁴⁶⁶.

No existen demasiadas noticias sobre el desenvolvimiento

⁴⁶⁵ El Universal Observador, 6 Noviembre 1821.

⁴⁶⁶ Los electores eran nombrados de uno en uno, resultaban elegidos quienes obtuvieran mayoría absoluta de los votos y si en el primer escrutinio ningún ciudadano lograba la mayoría requerida se realizaba un segundo escrutinio "entre los dos que hayan tenido mayor número de votos". Véanse al respecto los arts. 73, 74 y 75 de la Constitución de 1812.

de estas juntas. Los problemas que surgieron, derivaban del examen de las reclamaciones de infracción cometidas en las elecciones parroquiales. En este sentido, en la Junta de Partido de Zamora un elector solicitó la nulidad del nombramiento de otros dos presentes, en un caso por carecer el nombramiento de la firma de un compromisario, y en el otro, por considerar ilegítima la designación como elector de un párroco por la parroquia en que ejercía sus funciones y no por aquella en que residía. Ambas reclamaciones resultarían desestimadas por la Junta, pero el autor de la impugnación la hizo público en la prensa⁴⁶⁷ y elevó una exposición a las Cortes solicitando declarasen :

"(...) Si un párroco que vive fuera de los límites de su parroquia ha de tener el voto activo y pasivo (...) en la Junta parroquial que vive, o en la que es pastor (...)".

En respuesta a esta consulta, las Cortes, por medio de una orden ⁴⁶⁸, declararon que " los Párrocos que vivan fuera del recinto de sus parroquias no pueden dar ni recibir votos en las juntas electorales en las que sean Pastores".

También carecemos de información completa sobre la condición social de las personas que resultaban designadas como electores de partido. No obstante, sobre la base de los

⁴⁶⁷ El constitucional, 24 de mayo de 1820.

⁴⁶⁸ Orden de 12 de junio de 1821.

escasos datos existentes, suministrados por algunas actas electorales y las informaciones de prensa de varias provincias, es posible arriesgar algunos comentarios. En primer lugar, llama la atención el hecho de que nunca falte en las provincias algún eclesiástico como elector de partido. En el caso de las provincias castellanas, como León, Palencia, Soria, Valladolid, los miembros de este grupo social constituían la mayoría. Concretamente en Valladolid su predominio fué aplastante: sobre un total de quince electores, once eran eclesiásticos ⁴⁶⁹. En las elecciones del partido de Huete, "a pesar" de que la mayoría de los electores parroquiales eran eclesiásticos, el nombramiento de electores de partido recayó en dos sujetos de "reconocida cristiandad pero no menos conocidos por su patriotismo y acreedores a la confianza de sus ciudadanos" ⁴⁷⁰.

Aparte de eclesiásticos, obtuvieron la designación personas pertenecientes a otros grupos sociales, entre los cuales abundaban militares, abogados, empleados del gobierno y hacendados. En base a la información que suministran las Actas electorales⁴⁷¹ de algunas provincias hemos elaborado, atendiendo a la profesión, el siguiente cuadro sobre los resultados de las elecciones de partido.

⁴⁶⁹ Archivo Cortes, Actas Juntas Electorales. Leg.6, n° 24.

⁴⁷⁰ Ver La Colmena, n° 31, 23 de mayo de 1820.

⁴⁷¹ Archivo Cortes, Leg.6, exp.2; leg.6, exp.5; leg.6.exp.16; leg.6. exp.20; leg.6 exp.23; leg.6. exp.27 y leg. 6 exp.31.

Cuadro 13. Condición social de electores de partido

PROVINCIA	ECLES	FUN	E. PUB	MIL.	ABOG	PROP	OTR.
ARAGÓN	11	1	2	1	3	8	
BALEARES	-		3	2	1		1
GUADALAJARA	4						2
LEÓN	4						4
NAVARRA	2	1	2				4
PALENCIA	4						2
SORIA	5					1	3
VALLADOLID	11						4

Elaboración propia. Actas Juntas electorales.

Especial atención merecen los resultados de las elecciones de partido en la provincia de Aragón. De los doce partidos en que se encontraba dividida la provincia, en todos aparecían eclesiásticos, excepto en el de la capital, que resultaron elegidos un oficial del gobierno, un ministro de la audiencia y un vocal de la junta gubernativa, en suma, ciudadanos vinculados al gobierno o a la administración pública. Algo semejante ocurrió también en los partidos de otras capitales de provincia. Así, relatando los resultados de las juntas de partido de Cuenca señalaba "La Colmena":

"(...) En Cuenca (...) el espíritu público se ha mostrado tan inflexible y decidido, tan celoso de los derechos que acaba de recobrar, que ni un sólo eclesiástico ha salido elector(...)" .

El anterior comentario pone de manifiesto una constante

que hemos venido destacando insistentemente, nos referimos a esa actitud general de los liberales de descalificar al clero sólo por serlo⁴⁷².

Hubo algún diario que este dominio del clero en las elecciones lo aportó como una prueba de la bondad del nuevo sistema. Así, refiriendo la elección por el partido de Sigüenza de Fernando Romo, "que lleva treinta años de canónigo,... padre general de los pobres", observaba el Universal⁴⁷³ :

¿(...) quién podrá creer que es mala la Constitución?(...)".

Sin embargo, entre los diarios de tendencia liberal, dichos resultados ocasionaban preocupación. Debido a que el clero, como categoría social, era percibido en bloque como adversario y entre los eclesiásticos era fácil encontrar quienes se comportaran de forma que confirmaran esa percepción.

Los comportamientos que se apartaban de esa regla eran notables pero, sin embargo, no parece que modificaran la sesgada percepción inicial del clero. Como muestra de este

⁴⁷² Sobre el fenómeno de la percepción defectuosa del otro bando, característico de las épocas de crisis, resultan especialmente valiosas las reflexiones del profesor Murillo en su Prólogo al libro de M. Ramírez. "Los Grupos de presión en la segunda república", Madrid, 1970

⁴⁷³ El Universal Observador, n° 8, 19 de mayo 1820.

otro tipo de comportamientos, merece citarse el sermón que pronunció el Magistral D. Pedro Muñoz Arroyo en las Juntas de Partido de Antequera. El citado clérigo puso de relieve en su intervención las diferencias entre la impía revolución de Francia y la situación de España, citó a Fichte y Schelling, como expresión de la tendencia de las luces en favor de la religión y más adelante añadió:

"... ¿ Qué hay pues que temer para nosotros de la aplicación de estos principios de libertad, igualdad y justicia, que han hecho la felicidad de Inglaterra, que son el engrandecimiento de los Estados Unidos de América, y que (...) (constituyen) la base de la felicidad de los pueblos y los reyes?(...)".

Juntas Electorales de Provincia.-

Los electores de partido acudieron a las treinta y tres capitales de provincia para designar, mediante voto público, en una junta presidida por el jefe político, es decir una autoridad dependiente del poder ejecutivo, a los ciento cuarenta y nueve diputados que correspondían a la península e Islas adyacentes. Como ya indicamos el número total de ciudadanos que intervenían, como electores, en el último escalón del proceso ascendía a 492. La junta electoral que congregó, realmente, mayor número de electores era Galicia con sesenta y tres (63), seguida de Valencia (35), Cataluña

(29), Aragón (26), Granada (24), Burgos (23) , Madrid (21) ; entre las asambleas menos numerosas se encontraban Guadalajara y Palencia (6) Guipuzcoa y Toro (7), Avila, Baleares, Jaén , León, La Mancha, Navarra y Soria (9) que contaba con menos.

A medida que se acercaba la fecha de estos comicios, se puede detectar en las ciudades un aumento de informaciones y actos que directa o indirectamente estaban relacionados con las elecciones. Entre las primeras merecen citarse las " pinturas sobre las calidades" con que debería estar adornado un "digno diputado de Cortes", que aparecieron publicadas en la prensa.

En sus sus reflexiones políticas sobre el manifiesto de la Junta provisional, invitaba el Universal a que con "ardimiento patriótico desempeñaran los ciudadanos el derecho más útil, más importante y que más señala su dignidad de ciudadano; derecho por cuyo ejercicio se coloca cada uno en el "goce de la porción de soberanía que le cabe como ciudadano". Pasando luego a hacer una pintura de las calidades que debían reunir los diputados:

"(...) Que a una probidad sin tacha reúna los conocimientos del interés común; que sea tan prudente y detenido en las resoluciones como vehemente y activo en su ejecución; laborioso, incorruptible de ánimo constante, a quien los peligros no intimiden, ni le domine el poder, ni le

deslumbren los honores, ni le seduzca la ambición. Tal es la difícil empresa que es necesario llenar, cuando se trata de dar a la patria un representante⁴⁷⁴ (...)".

En la Coruña se publicó un "juicioso papel" intitulado Observaciones sobre la próxima elección de diputados de Cortes, que después de manifestar la suma importancia de que recaigan en personas de instrucción, carácter firme y de conocida adhesión a los principios constitucionales, se daban reglas para conocer los sujetos que se hallaban adornados de estas calidades⁴⁷⁵. Advirtiéndole de la necesidad de instruir a los pueblos sobre esta materia, y de prevenir a las autoridades y buenos ciudadanos para que "velen sobre los manejos, que en algunas partes no se dejarán de emplear en todos los grados de la elección".

El famoso discurso sobre las cualidades, que mencionaba Miscelánea, se insertó en el Diario Patriótico Constitucional de la Coruña, y se difundió por la prensa de Madrid:

" (...) 1. Debe ser un hombre de conocida probidad, franco en sus ideas, pero circunspecto religioso sin hipocresía ni superstición, modesto prudente para no destruir en vez de edificar; (...)

2. Convendría fuese un sabio en toda la extensión del

⁴⁷⁴ El Universal, n° 6 17 de mayo 1820

⁴⁷⁵ Miscelánea n° 83 , 10 mayo 1820.

significado (...) Por lo que a mi corto entender debe poseer esencialmente, es la legislación canónica y civil y la política (...).

3. Es necesario que el Diputado, ya que no todos pueden ser Demóstenes o Cicerones, por lo menos sepan producirse con claridad, precisión y buen lenguaje, o que tengan el don de la palabra que viene a ser lo mismo (...).

4. Por último es indispensable que sea decidido patriota, y aunque a la verdad ésta ha debido y ahora más que nunca debe ser la principal divisa que marque a un Diputado de Cortes lo he dejado para este lugar como para cerrar mi discurso y advertir a mis compatriotas que ahora es mucho más interesante esta circunstancia⁴⁷⁶ (...).

En el la Colmena después de advertir a los ciudadanos que desconfiasen de los hombres que bajo la máscara de patriotismo ocultan muchos vicios (son venales, intrigantes, aduladores y débiles), y quieren sacrificar a su interés peculiar el bien estar de todo un pueblo, mostraba los rasgos del candidato:

"(...) El verdadero patriota, el amigo de la libertad, no es susceptible de dolo. Siempre impávido, resiste con igual tesón las asechanzas de los tiranos y las pérfidas sugerencias de un malvado. Vigilante por la conservación de su independencia, observa atento a los ocultos enemigos de

⁴⁷⁶ La Colmena n° 40, 1 de junio de 1820.

ésta, síguelos en su marcha tenebrosa, y sorprendiéndolo en el momento de ejecutar sus depravados planes, levanta al cielo su voz para confundirlos, y que caiga la espada de la ley sobre ellos; pero sumiso al gobierno, cuya elección le toca como derecho el más precioso, sabe venerarlo y penetrarse de que sin decoro y sin respeto no hay autoridad, y sin autoridad no hay orden⁴⁷⁷ (...)" .

Las elecciones en los distintos grados estaban envueltas en actos litúrgicos que requerían la colaboración del clero. Especial relevancia tenían las ceremonias solemnes que, con la participación de la jerarquía eclesiástica debían tener lugar previa celebración de las Juntas electorales de Provincia.

Que el Estado constitucional, hiciera un uso instrumental de la Iglesia y sus ceremonias religiosas, comprometiendo a los eclesiásticos en actos políticos comportaba riesgos. En muchos lugares contribuyó a revelar los conflictos existentes en diferentes provincias entre la jerarquía eclesiástica y el nuevo régimen. Extrañó sobremanera que en Sevilla, "una Iglesia metropolitana donde hay tantas dignidades y canónigos de oficio" se diera ese encargo a un prebendado "sin embargo estar prevenido expresamente por la constitución en el art. 86 que lo haga el

⁴⁷⁷ La Colmena, n° 37 29 de mayo de 1820.

obispo ó en su defecto el eclesiástico de mayor dignidad⁴⁷⁸. En Murcia el obispo también eludió predicar en tan señalado día, y ello a pesar de la recomendación que, antes de disolverse, le dirigió la Junta Preparatoria de las elecciones de la Provincia:

"(...) A fin de que se sirva disponer lo necesario para los días en que se ha de oficiar la misa del Espíritu Santo y el discurso análogo a las circunstancias⁴⁷⁹ (...)" .

El día de celebración de las elecciones, el Universal Observador abría sus páginas con una celebrada cita de Bentham: "Cuando un pueblo está seguro de sus derechos, goza de ellos con mesura y tranquilidad"⁴⁸⁰ . Una idea sobre el modo de verificarse estas elecciones puede extraerse, por ejemplo, del contenido del Acta de la Provincia de Jaén:

"(...) Se procedió por los nueve señores electores a la votación nominal de los tres diputados para las Cortes ordinarias y uno suplentes que corresponden a esta provincia (...), escribiendo yo el Secretario en una lista el nombre de la persona que tuve a bien elegir con presencia e inmediación a los Srs. presidente y Escrutadores, y estos últimos

⁴⁷⁸ Informe de la Comisión de poderes de las Cortes , Arch.Cortes, leg.4 n° 106.

⁴⁷⁹ Actas de las Juntas Preparatorias de la Provincia de Murcia, Arch. Cor. leg.n°4,exp.21.

⁴⁸⁰ El Universal Observador, n° 10, 21 de mayo de 1820.

prestaron seguidamente también su voto de que hice igual anotación. Acto continuo y sin preferencia se fueron acercando a la mesa los demás señores electores y dieron el suyo que escribí con separación en la misma lista. Concluida la votación se hizo el escrutinio de los votos por los Srs. Presidente , escrutadores y Secretario y resultó que los había reunido todos Dr. D. Francisco de Paula Castanedo, canónigo de la Sta. Iglesia de esta ciudad por lo cual quedó legítimamente electo diputado para las Cortes ordinarias y así se publicó por el Jefe Político (...) ⁴⁸¹ ".

Y así, sucesivamente iban saliendo los diputados elegidos.

La Junta electoral de Valladolid, acordó apartarse del método de elección preceptuado por la Constitución⁴⁸², estableciendo:

"(...)Que. para que se votase con más libertad se acercase cada elector a la mesa y diere su voto en secreto a sólo el secretario, y le viese escribir en una papeleta de las que se hallaban prevenidas y que finalizada cada votación se revolviesen las papeletas y se mostrasen al Jefe Político y Escrutadores a fin de que se hiciese la regulación

⁴⁸¹ Actas electorales. Archivo Cortes, legajo.6 nº19.

⁴⁸²Según el artículo 88:(...)se eligirán de uno en uno, acercándose a la mesa donde se halle el Presidente, los escrutadores y Secretario, y éste escribirá en una lista a su presencia el nombre de la persona que cada uno elige(..)".

de votos (...)"⁴⁸³.

Según referimos más arriba en Valladolid de 15 electores 11 eran eclesiásticos. Todo apunta a que no les inspiraba demasiada confianza la discreción del jefe político; de ahí que para preservar el secreto de su voto decidieran optar por la fórmula inconstitucional que apareció recogida en el acta.

Para ser proclamado diputado era preciso obtener "pluralidad absoluta de votos". En el supuesto de que ninguno alcanzara esa mayoría volvía a repetirse la votación entre los dos candidatos que, en el primer escrutinio, obtuvieran mayor número de votos. Según las Actas de las Juntas electorales, las elecciones verificadas en Salamanca y Valencia fueron reñidas. En las de Salamanca, había que nombrar tres titulares y un suplente. Pues bien, el primer diputado fué designado por sorteo, debido al reiterado empate que se producía en las votaciones entre dos candidatos (Clemente Carrasco, catedrático, y Toribio Núñez⁴⁸⁴); hubo también empate en la votación del segundo representante y del diputado suplente, siendo preciso recurrir en ambos casos a

⁴⁸³ La Comisión de Poderes propuso a la Junta Preparatoria de Cortes que ante esta manifiesta inobservancia de la Constitución se declarara nula y procediera a practicar otra nueva, como sucedió. Arch. Cort. Informe de la Comisión de Poderes sobre los Diputados Electos. Leg. 6, n° 106.

⁴⁸⁴ La disputa era entre dos miembros del claustro de la universidad de Salamanca. El diputado T. Núñez, "benthamista", obtendría acta en las siguientes elecciones

(el elector de Morón D. Antonio Romero, el de Ecija D. Fernando Aguila el de Antequera Pco. Muñoz Arroyo y yo) (...). Nuestro plan fué descubierto, y desde el momento empezaron las intrigas y las maniobras (...). He visto que los má (electores) no tenían idea exacta del ministerio sublime, que la patria les ha fiado, y (...) en suma, que se ha hecho de é una negociación: yo te doy mi voto para que tú me lo des, a los míos (...) ⁴⁸⁷".

Si consideramos fiable la información que, sin embozo suministraba la prensa cabe afirmar que en muchas Juntas d provincia el acto solemne de la elección constituía un rit en el que se formalizaban acuerdos secretos adoptado previamente por los electores. Prueba de ello lo constituye los siguientes artículos insertos en las páginas de Miscelánea:

"(...) Se nos anuncia de Badajoz con fecha del 20, que a día siguiente serían elegidos diputados para las próximas cortes los Srs. Muñoz Torrero, Calatrava y Alvarez Guerra. Se hablaba también de los Srs. Golfín, Herrera D. Juan Justo D. Clemente Carrasco que están en Salamanca ⁴⁸⁸ (...)".

Y el mismo diario anunciaba en el número siguiente:

⁴⁸⁷ Manifiesto de D. Rafael Riego, elector del partido de Sevilla a todos los de la Provincia. Sevilla, 1820. Citado por Gil Novales, A., Rafael del Riego, la revolución de 1820 d a día. Madrid, 1976.

⁴⁸⁸ Miscelánea..nº 90 de 26 de mayo de 1820.

un segundo escrutinio⁴⁸⁵. En las elecciones celebradas en Valencia, provincia que debía designar doce diputados y cuatro suplentes, fué preciso acudir en seis ocasiones a la segunda vuelta para designar a tres de los diputados propietarios y otros tantos suplentes. Si nos ceñimos exclusivamente a este aspecto de la votación es posible afirmar que fueron las elecciones verificadas en estas dos provincias las más disputadas.

Señala Boix que en las elecciones a diputados hubo sin duda intrigas, pero disimuladas ⁴⁸⁶. El mismo autor indica que "los títulos que se buscaban entre los diputados eran de tres clases: padecimientos durante el abolido régimen; intervención en su mudanza y afiliación a la masonería". Sin embargo, " el héroe de Cabezas" que, según esos criterios, tenía méritos sobrados no consiguió su acta de Diputado. En el Manifiesto que publicó Rafael Riego lamentando que no hubiera recaído en él la elección, explicaba, cándidamente, su fracaso de la forma siguiente:

"(...)Dí a entender a los electores la necesidad de que nos reunieramos para conferenciar y depurar los méritos de los candidatos, comparándolos entre sí para tomar lo mejor. En mi posada alojamiento se han tenido tres o cuatro juntas

⁴⁸⁵ Actas de la Junta electoral Provincia de Salamanca. Archivo Cortes, Legajo, 6,nº 24.

⁴⁸⁶ Ver Vicente Boix, Historia de Valencia, Valencia 1847, pág. 17.

"(...) De Galicia nos avisan que indicaban por Diputados E. Peñafiel, J. A. López, J. Escario, J.M. Moscoso, V.Vazquez, J.Becerra, J.A. Pose, A. Ruiz Prado, J.A. Temes, J.Quiroga, Abad de Crespo, Manuel M. Acevedo, Marqués de Valladares. J. Rodríguez(...)"⁴⁸⁹.

Todas estas predicciones sobre los ciudadanos que iban a ser designados próximamente diputados se veían confirmadas por los resultados de los comicios de forma casi total.

Consta que estos acuerdos previos a las elecciones podían ir, a veces, más allá de la mera confección de una lista, incluyendo compromisos con los electores sobre temas del programa político que previsiblemente serían objeto de debate en las Cortes. Así, durante un la deliberación sobre la ley de señoríos se enzarzaron en una corta discusión dos diputados en razón a posibles pactos previos o, más precisamente, posibles mandatos recibidos en las Juntas electorales. En el curso de la refriega Moreno Guerra, exaltado, reprocharía :

"(...) Moscoso ha dicho que la junta electoral de Galicia le había encargado no se asociase con los que apoyaron el decreto de 6 de Agosto de 1811. (...)"

ataque que no dudó en rebatir, el diputado aludido matizando:

⁴⁸⁹ Miscelánea, n° 91 de 29 de mayo.

"(...) Lo que yo dije es que la junta electoral, había recibido varias cartas en las que se nos decía que en los sujetos que se nombraran para Diputados, debían concurrir circunstancias que nunca podrían encontrarse en aquellos que sostuvieran el decreto de señoríos ⁴⁹⁰ (...)".

En ocasiones, los "manejos e intrigas" electorales en torno a la confección de listas provocaban enfrentamientos con aquellos que, como Riego, resultaron perjudicados. En ese contexto habría que situar los ataques que en su manifiesto dirigió a los Diputados electos por su Junta

" hombres de quienes jamás debía hacerse mérito (...)comerciante de Madrid que por notoriedad se halla en estado de quiebra ⁴⁹¹ (...)".

Esta práctica de las "intrigas disimuladas", que debió estar bastante extendida, provocó debates y reclamaciones. El problema planteado era en qué medida esas actuaciones no constituían una infracción del art.49 ⁴⁹² de la Constitución. Así, en un escrito comunicado, sobre las elecciones en la provincia de Navarra, hacía el Conservador

⁴⁹⁰Ver D.SS, Cortes ordinarias, sesión de 4 de abril 1821.

⁴⁹¹ Su diatriba se dirigía especialmente contra González Azaola y Manuel S. Toscano.

⁴⁹² Según el citado artículo 49, antes de dar comienzo la junta electoral, en sus distintos grados, el presidente debía preguntar "si algún ciudadano tiene que exponer alguna queja relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona ."

en sus páginas las siguientes reflexiones:

"(...) Si dichos diputados no han cohechado para que recayera sobre ellos la elección ¿qué culpa tienen de que así lo hayan realizado los electores?. Si han comprado a estos es otra cosa; y en tal caso acúsense todos ante la ley y castíguense con arreglo a ella, mas no siendo así, amigo, si vamos a criticar a todos los que tienen mala fama ⁴⁹³ (...)".

Un aire entre festivo y marcial envolvió la jornada electoral en algunas capitales. A este respecto, describiendo la elección a Diputados a Cortes en Oviedo comentaba "El Universal:

"(...)La elección (...) se ha hecho por unanimidad de votos en todos los elegidos excepto uno que tuvo solamente nueve (...). Algunos días antes de hacerse la elección ya eran designados en esta ciudad casi todos en el mismo lugar u otro inmediantamente del que han merecido. Así que fué muy celebrada, y los electores recibieron al concluirse la elección las pruebas más decisivas de la aprobación. Se reunió un gran número de los que componen la Sociedad Patriótica de esta ciudad (...) y llevando consigo música militar, y tres niños de cuatro a seis años, graciosamente vestidos, entró en el salón en que se había celebrado, felicitó a los electores por medio del presidente de la

⁴⁹³ El Conservador, n° 77, 11 de junio de 1820.

Sociedad y los acompañó hasta el lugar que debían ocupar mientras cantaban el Te Deum ⁴⁹⁴(...)".

La importancia del anterior relato estriba no tanto en que destaque de nuevo las maniobras previas a las elecciones, sino en que, implícitamente, está atribuyendo un relevante protagonismo en esa capital a la Sociedad Patriótica y al regimiento.

La preocupación por las elecciones de diputados, de la que sabían dependían la marcha del régimen, fué más que notable en las Sociedades Patrióticas. Muestra de ello lo constituye la propuesta de la Sociedad de Málaga de "crear sociedades similares en los pueblos cabeza de partido, o en todos aquellos que sin serlo reúnan suficiente vecindario e instrucción " ⁴⁹⁵. Asimismo refleja ese interés el acuerdo adoptado por la Sociedad de Palma de nombrar una " comisión de ciudadanos encargada de velar por el éxito en las elecciones " ⁴⁹⁶.

Durante el período electoral, las Sociedades organizaron procesiones⁴⁹⁷ , fiestas cívicas⁴⁹⁸ y agasajos

⁴⁹⁴ La descripción ha sido tomada de "El Universal Observador.." , nº 20, 31 de mayo 1820.

⁴⁹⁵ Sobre la llamada Confederación Patriótica de Málaga puede verse Novales op. cit. (1975), pág.485.

⁴⁹⁶ Ibidem., pág.289.

⁴⁹⁷ Novales recoge en su obra la celebrada en León el día de la elección . Ibidem. pág.154.

militares⁴⁹⁹; promovieron políticas dirigidas a que "beneficien el espíritu público" (rebaja de impuestos, supresión de los d° de puertas, bajada del precio del pan⁵⁰⁰), elaboraron "listas de los que más se habían distinguido en la persecución de los amantes de la libertad"⁵⁰¹ y, en fín, ocupaban sus sesiones recomendando a los ciudadanos que votaran a "los que hubieran sufrido persecución en el régimen anterior ⁵⁰² ,o a "aquellos que a un estudio profundo y vastos conocimientos, reúnan la probidad y una opinión sin tacha" ⁵⁰³. Todas estas actuaciones producían efectos distintos en función del grado en que se practicaba la elección.

Las posibilidades de los liberales para influir, a través de las Sociedades, en los ciudadanos y compromisarios

⁴⁹⁸ Estos actos cívicos también se celebraron durante las elecciones de partido para celebrar " la acertada elección". Las páginas de la prensa recogieron el que tuvo lugar en la Coruña. "El Conservador, n° 53, 18 mayo 1820.

⁴⁹⁹ Novales refiere las organizadas en fechas próximas a las elecciones en Madrid, León, y La Coruña, (págs.71, pág.157, y pág.173, respectivamente), Ibidem..

⁵⁰⁰ Ibide. pág. 87.

⁵⁰¹ En víspera de las elecciones de Partido comunicaba la prensa la lectura de una lista en Lorencini, denunciando a " una porción de sujetos como traidores a su patria. El Conservador, n° 45 de 10 de mayo 1820. Más sobre la confección de las listas en la Sociedad Patriótica Amigos de la Libertad de Madrid puede verse en Novales, op.cit. pág.52

⁵⁰² Sesión de la Sociedad de Lorencini de Madrid, Ibidem.pág. 66.

⁵⁰³ Sobre esta preocupación ver la información sobre la Junta Patriótica constitucional de amigos del País de la ciudad de Sevilla, en Novales ob.cit. pág. 431

que se congregaban en las múltiples Juntas de parroquia desparramadas por el país debieron ser escasas. De ahí que tuvieran dificultades para contrarrestar el preocupante influjo del clero y conseguir que:

"(...)El pueblo vote a las clases acomodadas y(...) no se vaya a la facción⁵⁰⁴(...)";

Sin embargo la situación era diferente en las juntas electorales de partido y provincia. El número de votantes se reducía, el número de juntas electorales también, la situación era propicia para que, en medio de esa más o menos presionante atmósfera creada por las Sociedades patrióticas, las instituciones civiles y los regimientos militares, influyera los liberales con éxito en el ánimo de los electores que acudían a las Juntas. Al menos podían contribuir a contener audacias. Así, sobre las elecciones celebradas en la Coruña informaba la prensa:

"(...) Los electores del partido de la Coruña al reunirse en esta ciudad fueron agasajados por todo el pueblo por su acertada elección y sobre todo por la sociedad patriótica que les convidó a una función cívica y los hizo socios a todos por aclamación. Al feliz éxito de las elecciones contribuyó mucho el hallarse los jueces de primera instancia establecidos en sus respectivos partidos, gracias

⁵⁰⁴ Novales op. cit. 12.

a la actividad y energía de nuestra Junta de Gobierno⁵⁰⁵ (...)" .

No sólo Sociedades patrióticas y jueces prestaban su valiosa colaboración a las elecciones de esa provincia. También los militares se sintieron implicados en el proceso:

"(...) El coronel y plana mayor del Regimiento de voluntarios de Castilla residentes en La Coruña, dispusieron dar un convite al Comandante General de las tropas nacionales, D. Carlos Espinosa, el día de las elecciones de Diputados a Cortes. Todo fué júbilo y entusiasmo en este banquete. La música entonó el himno inmortal de Riego⁵⁰⁶ (...)" .

El importante influjo de las Sociedades patrióticas en las primeras elecciones fué públicamente reconocido en las Cortes, cuando debatían el proyecto de ley sobre estas reuniones en los términos siguientes:

"(...) Ellas son las que han sabido dirigir el espíritu público, designar al pueblo las personas que eran meritorias de representarle, porque el pueblo no tenía los conocimientos necesarios (...) ⁵⁰⁷" .

⁵⁰⁵ El Conservador, n° 53, 18 de mayo 1820.

⁵⁰⁶ El Conservador n° 70, 4 de junio de 1820.

⁵⁰⁷ Intervención de Moreno Guerra en la discusión sobre el proyecto de ley para la organización de las Sociedades Patrióticas, D.D S.S de Cortes ses. 14 de octubre 1820.

Los defensores del sistema constitucional, dispuestos a no desaprovechar la ocasión, extrajeron de los resultados electorales el mayor rendimiento posible. Para lo cual construyeron frente al Monarca, y sobre los datos existentes, la definición de la realidad que resultaba más conveniente para sus intereses. En primer lugar, comenzaban señalando el significado más obvio de las elecciones:

"(...) Al considerar la elección que las provincias y capital de España han hecho para diputados en Cortes (...) el amado Rey (...) conocerá casi matemáticamente la opinión pública ⁵⁰⁸ (...)".

y a continuación proponían las interpretaciones que había que dar sobre esa opinión. En primer lugar, en la medida en que los resultados de las elecciones permitían que volvieran a sus escaños las personas proscritas en el año 14, eso quería decir que además del respaldo a las personas, los resultados dotaban de legitimidad a sus obras. El proyecto de cambio de entonces, y el cambio que se había verificado en su nombre ahora. Con lo cual estaban reflejando la adhesión del pueblo al sistema constitucional en su conjunto:

"(...) El voto público se ha expresado de un modo enérgico y unísono en favor de cuantos ciudadanos han sufrido desde el año 14 la proscripción y las angustias que propina

⁵⁰⁸ El Universal n° 16 sábado 27 de mayo de 1820.

la venganza y la calumnia (...) y si por acaso restaban en su Real ánimo algún temor, alguna sospecha, algún recelo, (...) acaba de ver y oír el verdadero voto público, la opinión constante y general, la (...) expresión de los deseos del pueblo español en las elecciones. ¿A quién eligen? A aquellos mismos que se habían hecho creer que eran enemigos del trono, del altar y de la nación. En todos los ángulos ha resonado la voz, Constitución, Constitución (...), y en todos para hacerla estable se han meditado las elecciones para diputados y en todos han sido nombrados los que por la Constitución han sufrido⁵⁰⁹ (...)" .

Pero además completaban esta interpretación polémica con miradas al pasado, no desaprovechando la ocasión de hacer las indispensables referencias para desacreditar el anterior régimen:

"(...) El ánimo del Rey (fué) una vez engañado y sorprendido con el especioso pretexto de la opinión pública (...) Lo pasado fué un engaño que produjo muchos errores, lo presente es una lección que producirá mil desengaños. Entonces hablaron pocos y callaron todos, ahora hablan todos, y los pocos han enmudecido⁵¹⁰ (...)" .

Un periódico de tendencia radical, mostraba su optimismo

⁵⁰⁹ Ibidem.

⁵¹⁰ Ibidem.

después de que el pueblo con sus votos se hubiera pronunciado, de manera solemne, por el restablecimiento de la Constitución:

"(...) ¿Quién pues podrá oponerse a la expresa voluntad del Monarca, del pueblo y del ejército? ¿Acaso las clases privilegiadas? No las haremos tal injuria (...). Estas mismas clases que en Francia opusieron una tenaz resistencia a la asamblea nacional, en España puede decirse que se han confundido con el pueblo (...). S.M. constante en la marcha constitucional ha dado ya su sanción real a la mayor parte de los benéficos decretos que emanaron de las Cortes tanto extraordinarias como ordinarias.. ¿Qué resta(...)para hacer completa nuestra grande obra?(...)que las Cortes próximas despejen de toda maleza el camino por donde va a transitar el carro de nuestro triunfo ⁵¹¹(...)".

⁵¹¹ El Conservador N° 96 viernes 30 de junio 1820.

C A P I T U L O 5

Capítulo 5. Sistema Constitucional.-

5.1. Monarca, Gobierno y Cortes.-

La instalación y apertura de las Cortes significó el fin del Gobierno Provisional, en que el poder lo detentaban la Junta provisional, el Monarca, el Gobierno y las Juntas provinciales, (con el ardoroso apoyo de las Sociedades patrióticas y la vigilancia atenta del ejército), y el comienzo de un nuevo período caracterizado por la vigencia total de la Constitución política de la Monarquía de 1812.

Los titulares del Gobierno, cuyo nombramiento no se cerró completamente hasta el mes de abril⁵¹², pasaron a desempeñar sus puestos y comenzó a funcionar el entramado de poderes diseñado por la Constitución: Cortes, Monarca⁵¹³, Gobierno, Consejo de Estado y Tribunales, como elementos del Estado nacional; y Ayuntamientos, Diputaciones y jefes políticos, como componentes del gobierno político de las provincias.

Los ministros del Gobierno venían, en su mayoría, de

⁵¹² El nombramiento de Agustín Argüelles como Secretario del Despacho de Gobernación aparecía en La Gaceta del 8 de abril.

⁵¹³ "Situación inédita- afirma Artola- dado que hasta entonces ambas instituciones habían sido mutuamente excluyentes. M. Artola, Antiguo régimen y revolución liberal, Madrid 1978, pág. 218.

presidio⁵¹⁴ y todos, excepto el Secretario del despacho de Guerra, podían pretender un pasado liberal. En principio, no era una empresa fácil que reinara la confianza entre el Rey y unos ministros a los que Fernando VII había enviado a presidio y, según todos los indicios, designó por la fuerza⁵¹⁵.

El Monarca y sus Secretarios del Despacho, tenían que alcanzar un grado importante de entendimiento, que facilitara su indispensable colaboración en las tareas de gobierno. Pero esta colaboración, tenía que llevarse a cabo, en medio de las críticas circunstancias y los graves problemas que tenía planteado el país, (consolidación del sistema constitucional, secesión de las colonias, estancamiento económico, crisis social, un Estado casi en bancarrota, miseria en el ejército y entre los empleados públicos, desbarajuste en la administración, epidemias, mendicidad y bandolerismo), y funcionando dentro del marco establecido por la Constitución.

La admirable estructura de poderes⁵¹⁶ organizada por la Constitución partía del principio de soberanía nacional (art. 3). Proclamado ese principio los liberales habían dividido el

⁵¹⁴ La noticia de la llegada de Argüelles, el día 6 de mayo, a Valencia desde Mallorca apareció inserta en "El Conservador, nº 48, el 13 mayo 1820.

⁵¹⁵ B.EBuldain Jaca. Regimen político y preparación de Cortes en 1820. Madrid 1988.

⁵¹⁶ Ver comentario de Cano Manuel, en D.SS.Cortes, sesión 3 de marzo de 1821.

ejercicio de la autoridad soberana en potestad legislativa, ejecutiva y judicial. El propósito que perseguían separando los poderes lo subrayaron en el Discurso Preliminar:

" (...) No puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo justicia ni prosperidad en un Estado donde el ejercicio de toda autoridad esté reunido en una sola mano⁵¹⁷ (...) "

Los legisladores de Cádiz, siguiendo el modelo de la Constitución francesa de 1791, acoplaron la soberanía nacional con la forma monárquica de gobierno, y dejaban en manos del Rey (art.16) la potestad ejecutiva:

"(...) El Rey, como jefe del gobierno y primer magistrado de la nación, necesita estar revestido de una autoridad verdaderamente poderosa (...). Toda la potestad ejecutiva la deposita la Nación por medio de la Constitución en sus manos ⁵¹⁸ (...) ".

Esta potestad debía ejercerla por medio de los Secretarios del Despacho (art.225)⁵¹⁹, a quienes el Monarca

⁵¹⁷ Discurso Preliminar leído en las Cortes al presentar la Comisión de Constitución el proyecto de ella. Reimpreso en Madrid 1820.pág. 22.

⁵¹⁸ Ibidem. pág. 45.

⁵¹⁹ El intento del Monarca de efectuar un nombramiento inconstitucional, (sustitución de Vigodet por Carvajal como Capitán General de Castilla la Nueva), ocasionó el primer enfrentamiento entre Fernando VII y el sistema. Ver DD.SS. Cortes. Actas de las Sesiones secretas y de la Diputación permanente. Sesión de 16 de noviembre de 1820.

nombraba y separaba libremente⁵²⁰ (art.171,16). Expresión del principio de separación de poderes, eran los preceptos constitucionales que impedían fuesen designados como Secretarios del Despacho los miembros del Congreso (art. 129).

Existía la creencia de que con esta rígida separación quedaba mejor garantizada la función fiscalizadora y de control que sobre los Secretarios del despacho tenían que llevar a cabo las Cortes (art. 226). Así, cuando el Rey solicitó, en sesión famosa, que las Cortes le propusieran los Secretarios del Despacho, los diputados justificaron constitucionalmente su negativa amparándose en la división de poderes :

"(...) El equilibrio de los tres poderes, el contrapeso entre ellos subsiste mientras cada uno se circunscribe dentro del círculo de sus atribuciones. El poder ejecutivo cuida de la observancia de las leyes; el judicial las aplica, y el legislativo es respecto de ellos un fiscal que observa su conducta para ver si traspasan sus límites. Siendo esto así, ¿cómo podrían las Cortes proponer los Secretarios del Despacho, para ser luego fiscales y censores de los mismos que merecieron su elección? ¿No sería esto opuesto a la

⁵²⁰ La experiencia constitucional de estos años destacó la importancia de esta facultad atribuida en exclusiva al Monarca. Ver al respecto D .SS. Cortes, sesión 3 de marzo de 1821.

libertad y a la división de poderes?⁵²¹ (...)" .

Sólo el Consejo de Estado ⁵²² (art.236) estaba facultado por la Constitución para aconsejar al Rey. Los cuarenta integrantes de este órgano ⁵²³, único Consejo reconocido por la Constitución para asesorar en los asuntos graves⁵²⁴ (art.236), eran nombrados por el Monarca (art.233) a propuesta de las Cortes⁵²⁵ (art.234) y sólo podían ser removidos por causa justificada ante el Tribunal Supremo (art.239) .

La Constitución establecía una serie de restricciones al poder regio (art.172), los miembros de la Comisión redactora del proyecto, las justificaron argumentando que eran indispensables para contener los poderes amplios otorgados al Monarca :

⁵²¹ Ver la intervención del diputado Martínez de la Rosa en D.SS.Cortes, sesión de 3 de marzo de 1821.

⁵²² El Monarca trató, sin éxito, en la primera crisis de Gobierno, destitución del Ministerio de Argüelles, que fueran las Cortes quien le indicaran nombres para el nuevo Gobierno. Ibidem.

⁵²³ El número real de Consejeros no alcanzó esa cifra, entre otros motivos porque seis de sus miembros no tomaron posesión. Ver D.SS.Cortes, sesión de 7 de marzo de 1821.

⁵²⁴ La reforma religiosa fué una de las materias que más dictámenes del Consejo provocó. Ver Memoria del habilitado para el Despacho de la Secretaría de Gracia y Justicia, D.SS.Cortes sesión de 7 de marzo de 1821.

⁵²⁵ Las ternas de Consejeros que las Cortes proponían al Monarca eran votadas en sesiones secretas. Por cierto que el Congreso no otorgó a Riego ni siquiera la posibilidad de aparecer en una terna. Ver Actas sesiones secretas de las Cortes ordinarias, sesión de 20 de octubre de 1820.

"(... .) El inmenso poder que se ha adjudicado a la autoridad real necesita de un freno que constantemente le contenga en sus límites; tiene a su mando el ejército , el manejo de la tesorería y la provisión de empleos y gracias, sin que la facultad de las Cortes tenga a su disposición medios tan terribles para traspasar los límites prescritos a sus facultadas, debilitadas ya en gran manera por la sanción del Rey ⁵²⁶ (...) ".

En efecto, contenía el artículo 172 de la Constitución doce restricciones que estaban encaminadas a preservar la libertad e independencia de la nación, que protegían las Cortes, y los derechos de los ciudadanos: libertad, igualdad y propiedad ⁵²⁷. Los redactores del proyecto, se esforzaron en justificar las restricciones del mencionado precepto combinando los argumentos históricos con otros de carácter político:

"(...) Restricciones que la autoridad del Rey no puede menos de tener si no ha de ser un nombre vano la libertad de la nación. La comisión (...) ni aun en esto pretende ser original: los fueros de Argagón le ofrecieron felizmente la

⁵²⁶ Ibidem.pág.40.

⁵²⁷ Las restricciones 1ª a 7ª más la 12ª, del art.172, están dirigidas a preservar la libertad e independencia de la nación, (territorio bienes y monarquía); desde la 8ª a la 11ª están dirigidas a proteger los derechos de los ciudadanos: propiedad, igualdad, y libertad.

fórmula de las restricciones ⁵²⁸ (...)".

La Constitución otorgaba al Monarca, a quien con terminología "rusoniana" designaba el Discurso Preliminar como "primer magistrado", participación en la autoridad legislativa, (arts.27,171,14 y 142 sigs.), que residieron en las Cortes. El propósito de esta cooperación era conseguir "un justo y estable equilibrio entre ambos poderes". Los miembros de la comisión redactora del texto gaditano se sintieron obligados a justificar esta circunstancia, para que no existiera la equivocada creencia de que contradecían la división de poderes proclamada, y lo hicieron recurriendo al socorrido argumento histórico:

"(...)La Comisión ha consultado en esta parte la índole de la constitución antigua de España, por la que es visto que el Rey participaba de algún modo de la autoridad legislativa(...) "⁵²⁹

Las Cortes del Trienio debatieron, en otra de sus sonoras confrontaciones políticas, sobre el procedimiento que debía seguir el Congreso para responder a la iniciativa legislativa del Monarca. Unos diputados estimaban que esas propuestas del Rey debían seguir el mismo camino que las planteadas por cualquier otro representante del Congreso,

⁵²⁸ Discurso Preliminar, pags 27 y 46 ss., Madrid, 1820.

⁵²⁹ Ibidem. pág. 23.

pudiendo por tanto no ser admitidas a discusión (arts. 132 y sigs.). Otros opinaron que las propuestas de ley que el Rey presentara a las Cortes debían ser necesariamente debatidas, y no requerían pasar por el mismo trámite⁵³⁰ exigido para las propuestas de ley que presentaban los miembros de la representación nacional:

"(...) Un Sr. Diputado es una centésima (...) parte, según el número de diputados de la Nación, del Poder de ella que se llama Cortes, (...). El Rey, el jefe del Estado, cualquiera que sea su denominación, es un poder del Estado y como tal, encargado de hacer cumplir las leyes y de observar su marcha, y de cooperar a su misma formación (...)por medio de la sanción. Luego es claro que sobre sus propuestas es forzoso deliberar, aunque puedan las Cortes desécharlas ⁵³¹ (...)" .

Si bien la Constitución atribuía al Rey con las Cortes la potestad legislativa (art. 27), conviene subrayar que las Cortes podían legislar sin el Monarca, mientras que el Rey no podía hacer leyes sin las Cortes (art. 171,14 en relación al

⁵³⁰ Fijado en el capítulo VIII del título III. El proyecto propuesto(art.132.) debía ser leído dos días después y las Cortes deliberaban si lo admitían a discusión (art. 133) o, por su gravedad, pasaba a una comisión (art.134),cuatro días después los proyectos que no iban a comisión eran leídos por tercera vez y señalaban las Cortes día de discusión (art.135).

⁵³¹ Discurso del diputado Gareli en D.SS.Cortes sesión de 3 de febrero de 1822. En reñida votación los diputados rechazaron esta interpretación.

art.125). No obstante, el Rey sancionaba las leyes (art. 142) y disponía de una prerrogativa tan importante como el derecho de veto suspensivo (arts. 144 y sigs.), previo dictamen del Consejo de Estado (art.236). El artículo estipulaba que negada la sanción, las Cortes "no pudieran tratar del mismo asunto aquel año" (art. 147).

Durante las deliberaciones de la asamblea constituyente, hubo intentos de enmendar el artículo del proyecto que regulaba el veto, por considerar injusto , escandaloso y un atentado a los fundamentos de la Constitución ⁵³² que la asamblea estuviera sujeta a un veto temporal. En opinión del diputado Gallego, lo que el dictamen de la Comisión acreditaba era "cuán lejos está la tendencia democrática", que la malicia previa había atribuido al proyecto. Pero además de razones de oportunidad política expuso otras relacionadas con los convenientes frenos y contrapesos entre poderes para apoyar la conveniencia del veto:

"(...) Las Cortes sirven de enfrenar la potestad del Rey; pero no olvidemos que éste debe también enfrenar los extravíos de aquellas, resultando así el equilibrio de ambas autoridades, no por el medio de una lucha perpétua, sino por el de la mutua armonía.(...) Puede excederse el Rey, pueden extraviarse las Cortes, y para que el descarrío recíproco no

⁵³² Las expresiones pertenecen al discurso de García Herreros. D.SS.Cortes Generales y Extraordinarias, sesión 4 de octubre de 1811.

produzca graves males al Estado, se ha concedido la iniciativa y formación de todas las leyes a éstas, y un veto temporal al Monarca. (...) Real y efectiva debe ser la repulsa del Rey, si la diere. Más no lo será si se adopta la opinión de que en el mismo año se vea obligado a sancionar las leyes, si las Cortes se las presentan⁵³³(...)".

Durante el Trienio, el atemorizado Monarca se sintió incapaz, en un primer momento, de usar esa prerrogativa, (en contra del dictamen del Gobierno y el Consejo de Estado), para expresar su repulsa a la ley que regulaba la reforma de los monacales (25 de octubre de 1820). Pero una vez que las potencias de la Santa Alianza ejerciendo de policías internacionales aplastaron los experimentos revolucionarios europeos, y mientras el país estaba envuelto en escandalosas insurrecciones, el Monarca recuperó su maltrecho ánimo y vetó la segunda ley sobre sociedades patrióticas en abril de 1821 y fulminó con un contundente veto, en esta ocasión atendiendo gustoso el dictamen del Gobierno y del Consejo de Estado, el proyecto de la ley de señoríos.

En un entorno político tan propicio, Fernando VII incluso se atrevió, en el mismo acto en que desechaba el mal denominado proyecto de ley de señoríos, (arguyendo que era contrario a las ideas liberales, al respeto a la propiedad y el amor a la justicia), a someter a la deliberación de las

⁵³³ Ibidem.

escandalizadas Cortes otro alternativo, (posiblemente del Gobierno), cuyas bases reposaban en el alivio de los pueblos y el respeto a la propiedad⁵³⁴ .

En fín, según la Constitución la persona del Rey era sagrada e inviolable, signos externos del poder que había perdido, y no estaba sujeta a responsabilidad (art. 168). Pero las Cortes podían incapacitar al Monarca y excluir a sus sucesores legítimos (arts. 187 y 181 respectivamente). La Constitución facultaba a la Diputación permanente para convocar Cortes extraordinarias (art. 162), al objeto de proceder a ejecutar esa delicada competencia.

Aunque fuera "emanación del soberano congreso", la Diputación permanente no nació para estatuir leyes, ni para alterarlas o derogarlas sino para hacerlas respetar. Como guardián de las leyes los integrantes⁵³⁵ de las Diputación tuvieron que emplearse a fondo durante los convulsos años del Trienio ⁵³⁶. Daba la impresión que el cierre de las Cortes, momento en que la Diputación entraba en funcionamiento, operaba como una señal para el inicio o la intensificación de

⁵³⁴ Era la aportación del Monarca a las nuevas Cortes recién instaladas. D.SS. Cortes ordinarias, sesión de 7 de marzo de 1822.

⁵³⁵ Según el art. 157 nombrarán las Cortes tres de las provincias de Europa y tres de las de Ultramar y el último por suerte entre uno de Europa y otro de Ultramar.

⁵³⁶ El artículo de la Constitución que regulaba la Diputación permanente fué criticado certeramente por Campany a causa de su "laconismo "estudiado". Ver D.SS. Cortes Generales y extraordinarias, sesión de 8 de octubre de 1811.

los movimientos conspiratorios.

Durante la experiencia del Trienio, con motivo del nombramiento inconstitucional del Capitán General de Castilla la Nueva, realizado por Fernando VII desde el Escorial, la primera Diputación permanente de las Cortes, presidida por el eclesiástico Muñoz Torrero, (redactor y profundo conocedor de los entresijos del sagrado Código), amenazó al Monarca con el apartado segundo del artículo 162:

"(...) Se supone dominado el ánimo de V.M. por personas enemigas del bien público, hasta el punto de juzgarle sin la libertad precisa para gobernar a una gran Nación que se halla en circunstancias tan extraordinarias. De aquí nacen las voces y las reclamaciones a la Diputación, para que medite si ha llegado el caso segundo del art. 162 de la Constitución. Esta idea (...) que estremece a la Diputación, la indica únicamente para hacer conocer a V.M toda la extensión de los peligros que existen⁵³⁷ (...)".

El poder regio constitucionalmente limitado iba a verse, durante esos agitados años, también personalmente controlado. La corte del monarca y la sociedad de los cortesanos constituían una élite poderosa⁵³⁸, como quedó probado en los

⁵³⁷Ver Actas Secretas de la Diputación Permanente. Sesión 16 noviembre de 1820.

⁵³⁸ Sobre este campo feraz de estudio, es imprescindible consultar Norbert Elías, La sociedad cortesana, México 1982.

enfrentamientos continuos contra el sistema constitucional. Los dirigentes liberales lucharon, sin éxito, por conseguir que los nombramientos cortesanos recayeran en personas "que se hayan granjeado la estima de la Nación por su conducta sin mancha y por su manifiesta adhesión a la Constitución ⁵³⁹ "; de poco sirvieron las recomendaciones para persuadirle :

"(...) Es imposible (...) que permanezcan más al lado de V.M. ciertas personas que han cargado sobre sí la execración pública; contentándose por ahora la Diputación con indicar al mayordomo mayor, al confesor de V.M. ⁵⁴⁰ (...) "

El insistente afán por contener el "furor de mandar", del que hablaba Jovellanos, fué palpable durante el Trienio. La Diputación permanente de las Cortes se sintió, "con dolor", obligada a "llamar enérgicamente" la Augusta atención del Rey quien a veces ejercía con despecho sus facultades constitucionales:

"(...) Porque (...) en circunstancias críticas, al plantearse un nuevo sistema, y cuando más necesita el Gobierno recobrar la fuerza moral (...) se pusiese al frente

⁵³⁹ El nombramiento inconstitucional del Capitán General de Castilla la Nueva desencadenó la primera grave crisis del régimen. Sesión de la Diputación permanente de 16 de noviembre. Ver Actas de las Sesiones Secretas de las Cortes ordinarias y Extraordinarias de los años 1820, 1821, 1822, y 1823. Y de las celebradas por las Diputaciones permanentes.

⁵⁴⁰ Actas de la Diputación permanente de las Cortes, sesión de 16 de noviembre de 1820.

del valiente ejército español a un general decrepito (...). Que por segunda vez ha sido sorprendido el Real ánimo de V.M. asegurándose haber nombrado para el mismo ministerio a un general aunque dotado de valor y virtudes, no tiene las cualidades necesarias (...), se ha mostrado siempre desafecto al sistema⁵⁴¹ (...)".

Aunque no faltaran motivos, la Diputación no se atrevió a poner en marcha la competencia que le otorgaba el art. 162 de la Constitución, ni siquiera en las jornadas de primeros de julio de 1822, cuando el Rey urdió la conspiración para derribar, valiéndose de la Guardia Real, el sistema constitucional.

Fueron las Cortes de 1823, en su peregrinar hacia el Sur, las que utilizaron la competencia estremecedora durante las sesiones que celebraron en Sevilla. En su precipitada huida de las bayonetas del ejército invasor, procedieron a inhabilitar al Monarca⁵⁴² sin seguir el procedimiento estipulado al efecto, por la Constitución. De forma inconstitucional inhabilitaron temporalmente al Monarca para obligarle a que les acompañara. La motivación alegada para adoptar la decisión fué la negativa del Monarca de trasladarse a Cádiz con la Representación Nacional:

⁵⁴¹ Actas Secretas de la Segunda Diputación permanente, sesión de 4 de septiembre de 1821.

⁵⁴² Ver al respecto los comentarios de Leopoldo Alas en su Conferencia 21 del Ateneo durante el curso 1885-1886, *La España del siglo XIX*, Madrid, 1886.

" (...) No queriendo pues S.M ponerse a salvo y pareciendo más bien a primera vista que S.M. quiere ser presa de los enemigos de la patria, S.M. no puede estar en el pleno uso de su razón; está en un estado de delirio, (...) Yo creo pues que ha llegado el caso que señala la Constitución, y en el cual a S.M. se le considera imposibilitado (...) Pido a las Cortes (...) se declare que es llegado el caso provisional de considerar a S.M. en el del impedimento moral señalado en el art. 187 de la Constitución, y que se nombre una regencia provisional⁵⁴³ (...)" .

Esta competencia atribuida a las Cortes da una idea de la superior autoridad jerárquica que los artículos del Código otorgaban a la Representación nacional. Un repaso -en modo alguno exhaustivo- de algunos preceptos que hacen referencia a las Cortes pueden contribuir a ponderar esa supremacía. En primer lugar, y no era un asunto baladí, la Constitución de 1812 colocó el Título "De las Cortes" (T.III, arts. 27 al 167), por delante del que regulaba lo referente a la Corona (Título IV, arts, 168 al 221). Pero lo que mejor daba cuenta de esa superioridad eran su organización y competencias.

El augusto cuerpo soberano de la representación nacional gozaba de absoluta autonomía y se reunía automáticamente, por

⁵⁴³ La proposición fué realizada por Alcalá Galiano en la sesión del día 11 junio de 1823. Ver Gaceta Española, Cádiz 21 de junio de 1823.

ley, todos los años (art.104)⁵⁴⁴. Ningún poder, ni siquiera el Rey, podía suspender o disolver sus sesiones (art.172,1). El Rey sólo podía influir en las Cortes para prorrogarlas o efectuar una convocatoria extraordinaria⁵⁴⁵ (arts. 107 y 162,3).

En el desempeño de sus vastas competencias legislativas, interpretativas (261,10), económico-financieras, de administración y fomento, políticas (art. 131), estaban sujetas exclusivamente a la Constitución. Este rasgo marcaba una ostensible diferencia entre la asamblea legislativa y los restantes poderes del estado, cuya actuación debía discurrir de acuerdo con las leyes emanadas por las Cortes⁵⁴⁶. Los años del Trienio pusieron de relieve en qué medida las Cortes podían condicionar y bloquear el programa de reformas propuesto por el Gobierno.

Sólo ante las Cortes eran responsables los Secretarios de Despacho (indispensable contrapartida de la irresponsabilidad del Rey) y demás empleados públicos (art. 131, 25). En fin, únicamente ellas tenían competencia para

⁵⁴⁴ Discurso preliminar, pág. 38.

⁵⁴⁵ El Monarca aprovechó esta facultad, para expresar su desagrado hacia el Gobierno, no acudiendo al cierre de la primera legislatura evitando así, pronunciarse sobre la solicitud de Cortes extraordinarias. D.SS. Cortes sesión de 9 noviembre de 1820

⁵⁴⁶ Los artículos constitucionales insistían infatigablemente en este aspecto. Véanse, entre otros, los arts. 170, 173, 179, 373.

suspender las formalidades prescritas en defensa de los derechos de los ciudadanos (art.308), proceder a la reforma de la ley fundamental⁵⁴⁷ (arts. 376 y sigs.), y asumir, de forma efectiva, la defensa de la Constitución (arts. 160,1 y 372 y sigs.).

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, puede afirmarse que esta supremacía que gozaban las Cortes derivaba del postulado ideal, recogido por los hombres de Cádiz, según el cual el funcionamiento del estado debía reposar en el Derecho. El pasaje al que nos referimos, que merece la pena citar en extenso, decía:

"(...) reglas fijas, claras y sencillas que determinan con exactitud y precisión la autoridad que tienen las Cortes de hacer leyes de acuerdo con el Rey, las que ejerce el Rey para ejecutarlas y hacerlas respetar, y las que se delega a los jueces y tribunales para la decisión de todos los pleitos... con arreglo a las leyes del reino (...) "⁵⁴⁸.

Postulado que además de conducir a la subordinación del poder ejecutivo a las Cortes, contribuyó a estatuir unos jueces que no tenían otra función que aplicar mecánicamente textos legales de significación cierta. Los autores de la

⁵⁴⁷ Al no estar excluida la forma de gobierno del cometido de la reforma, ello significaba, al menos en hipótesis, conceder a las Cortes la posibilidad eventual de suprimir la Monarca.

⁵⁴⁸ Discurso Preliminar, pág. 27.

Constitución dejaron entrever su desconfianza hacia los jueces,- a quienes miraban como antiguos servidores de la monarquía absoluta -, al proclamar además que la interpretación de las leyes dudosas debía reservarse al propio legislador (art. 261, 10).

Un breve resumen de la estructura de poderes fué esbozado por el doceañista Cano Manuel, "sentado en la primera cátedra de constitución de España", con ocasión de la primera crisis de gobierno del sistema constitucional y para defender su opinión en defensa de una rígida separación entre los poderes:

"(...) El poder legislativo es el encargado de hacer las leyes que se dirigen al bien y la felicidad de la Nación. Primer límite de este poder: el derecho que se reservan los ciudadanos para ejercer el supremo sobre todos aquellos a quienes han hecho los depositarios (...) mediante la libertad de imprenta. (...) Segundo límite, este dimana del poder ejecutivo , porque no hay ley que no pueda venir a ser funesta si no hubiera un elemento conservador, y éste es el Poder ejecutivo (...), para no abusar de la facultad de contener los extravíos del legislativo, tiene la obligación de oír a los cuerpos intermedios , (...) el Ministerio y el Consejo de Estado (...). El Poder judicial, cuyo objeto es aplicar las leyes, pero ¿qué restricciones tiene? La primera la de la libertad de la imprenta (...) Segundo límite: el derecho que se han reservado todos los españoles para

reclamar las infracciones usando el arma temible de la responsabilidad. Tercer límite: el juicio de visita decretada por la ley (...) El poder ejecutivo, que es el más delicado de todos. (...) de su uso nacen ventajas considerables a la Nación y su abuso produce males que jamás se pueden remediar (...) El Poder legislativo es el observador o fiscal del Poder ejecutivo (...) por medio de leyes preventivas que sirvan de norma a los funcionarios públicos. (...) El querer que cada uno de ellos traspase los límites prescritos y que se mezcle en las atribuciones de los otros es efecto de un buen deseo (...) pero las consecuencias serían funestas: se iba a abrir un portillo en el alcázar de nuestra libertad, en la ley fundamental, en la Constitución. No ha sido una vana ostentación de legislar la separación de los tres poderes y la fijación de las reglas para su ejercicio (...) amaestrada la nación (...) lo que hicieron fué establecer al lado del Rey un cuerpo (...) el art. 236. (Consejo de Estado) este es el cuerpo constitucional que la Nación quiere que el rey tenga a su lado para consultar. (...) ¿Por qué, pues, acudir a nosotros cuando las Cortes solo deben tratar de cosas y no de personas⁵⁴⁹ (...)?"

Según Constant, al establecer que el Monarca era inviolable (art.168) y los ministros responsables (art. 226), la Constitución estaba separando el poder ministerial del poder regio:

⁵⁴⁹ Ver D.SS.Cortes sesión del 3 de marzo 1821.

"(...) El poder ministerial, aunque emanado del poder real, tiene, sin embargo una existencia realmente separada de este último y la diferencia es esencial (...) El poder real (...) es un poder neutro. El de los ministros es un poder activo⁵⁵⁰ (...)".

Esta separación entre el poder de los ministros y el Monarca permitió a los diputados, en defensa de la libertad de la Nación y las prerrogativas del trono, censurar los extravíos del Gobierno que provocando la desobediencia de los ciudadanos había perdido su fuerza moral, y solicitar al Monarca la destitución de los ministros⁵⁵¹. Pero la separación entre el Monarca y las Cortes permitió al Rey, en defensa de sus facultades constitucionales, desairar a las Cortes y mantener al frente del Gobierno unos Secretarios del despacho censurados por el Congreso pero en los que el Monarca confiaba.

Los rasgos que debía reunir el Monarca en el que Constant pensaba para encarnar el poder neutro fueron especificados en su conocido tratado:

"(...) Un ser aparte, por encima de las diversidad de opiniones no teniendo otro interés que el mantenimiento del

⁵⁵⁰ Ver B. Constant, Principios de Política, Cap.II, en la obra (que recopilación diversos trabajos del autor), Curso de Política constitucional, Madrid, 1968.

⁵⁵¹ Ver D.SS. Cortes, sesión 13 de diciembre de 1821.

orden y el mantenimiento de la libertad (...) Este augusto poderío de la realeza (...) se pierde (...) ya rebajando el poder del monarca al nivel del poder ejecutivo, ya elevando el poder ejecutivo al nivel del monarca(...) ⁵⁵² ".

La inmensa utilidad que Constant atribuía al poder neutro, encarnado en la persona del Monarca, como jefe del estado, consistía en lograr:

"(...) que todos (los poderes) se apoyen, se entiendan y obren de mutuo concierto (...)".

La construcción jurídica del poder neutro, elaborada con sagacidad por Constant, tenía serias dificultades políticas que se hicieron evidentes con el funcionamiento práctico de la Constitución política de la Monarquía de 1812. Durante la experiencia constitucional del Trienio quedó patente, como iremos notando, lo complicado que resultaba hacer funcionar el delicado mecanismo cuando, debido a los conflictos fundamentales existentes, faltaba real y soberana disposición. Hubiera constituido un enigma que rodara el sistema constitucional, cuando el augusto poder regio, (conspiraciones al margen), estaba dispuesto a perderse rebajándose al nivel del poder ejecutivo; y por su parte, el no menos augusto cuerpo soberano de la representación nacional se mostraba insistentemente proclive a humillarle,

⁵⁵² Ibidem.

para degradar su autoridad.

5.2. Política del Gobierno.

El Gobierno iba a proseguir con la estrategia de moderación que había iniciado la Junta provisional, para inspirar tranquilidad a las fuerzas sociales tradicionales y la Santa Alianza. La prensa liberal más radical había hecho notar su desacuerdo con aspectos de esa política, mediante escritos en los que lamentaba "el olvido de los seis años de amarga memoria", que se emprendieran reformas tolerando en puestos elevados "hombres detestados por sus delitos y enemigos de la Constitución", y la exclusión cuidadosa de los promotores del movimiento revolucionario de puestos relevantes⁵⁵³.

Los miembros del Gobierno defendían su estrategia de moderación, que contó con un difuso pero suficiente apoyo inicial en las Cortes, porque confiaban que combinada con los elogios públicos tributados al Monarca, como Rey constitucional, podía contribuir a la consolidación del

⁵⁵³ Ver La Ley, n° 11, 9 de mayo. Días más tarde insitía otro diario: "Entre tanto en España se sostenga la idea de consolidar la revolución con los mismos agentes que por necesidad se hallan acostumbrados al porte y máximas del régimen que se quiere abolir, y que por lo tanto carecen de la energía necesaria (...), caminamos tortuosamente a la libertad, o por mejor decir, rectamente a otra nueva esclavitud. El Conservador, N° 62, 27 de mayo 1820.

sistema. Esperaban que Fernando VII, que "libre y espontáneamente" juró la Constitución ⁵⁵⁴, podía servir como instrumento de contención social frente a los absolutistas⁵⁵⁵. Y debieron imaginar que su programa de reformas y la presencia amenazante de la Santa Alianza, (o como ellos decían " la Europa que tiene fijos los ojos en nosotros"), podían servir de dique para contener ese ala radical que empezaba a emerger en el liberalismo.

Los comienzos estuvieron centrados en abordar y responder con moderación y eficacia los que definían como problemas apremiantes del país, para consolidar el sistema constitucional. Entendían que la revolución estaba hecha y lo que quedaba por hacer era crear las condiciones de seguridad adecuadas, hacer aflorar los verdaderos intereses, salvar el crédito y la contención de los radicalismos políticos de los extremos. Uno de los fervientes defensores de esta estrategia, el diputado por Galicia Moscoso, cuando fué designado Secretario del Despacho de Gobernación, habló sobre la delicada situación del Gobierno de Argüelles impulsor de la estrategia:

⁵⁵⁴ Discurso de contestación al del Monarca presentado para su aprobación. D.SS. Cortes ordinarias, sesión de 10 de julio de 1820

⁵⁵⁵ En elogios las Cortes no le fueron a la zaga. Sirva como muestra este trozo del discurso del Presidente de las Cortes con motivo del juramento de Rey: " El día del nacimiento de V.M fué la aurora de la restauración de España". D.SS. Cortes ordinarias, sesión 9 de julio de 1820.

"(...) Colocado entre el doble frenesí que embarga el cuerpo político, el de los hombres de religión y Rey con hábitos antiguos, y el de la libertad (...) "⁵⁵⁶.

En el marco de esta estrategia, la más importantes de las decisiones adoptadas por el Gobierno fué la disolución del ejército de la Isla, símbolo de la revolución, que las Cortes consintieron primero y justificaron implícitamente después ⁵⁵⁷. La medida se adoptó a instancias del Secretario del Despacho que inspiraba más desconfianza, el de la Guerra.

El Marqués de las Amarillas propuso la medida durante el período de la Junta provisional, pero por temor a sus posibles repercusiones, la Junta provisional estimó más prudente dejar que la adoptara el Gobierno una vez instaladas las Cortes. Las polémicas actuaciones preparatorias del Secretario del despacho de Guerra (sus calculadas reformas y traslados) no dejaron de ocasionar protestas y representaciones en contra⁵⁵⁸. Pero fué la disolución del ejército de la Isla la que ocasionó el primer conflicto grave, sirviendo para ponderar el riesgo que entrañaba la

⁵⁵⁶ Ver al respecto, Memoria del Secretario del Despacho de Gobernación, José M^a Moscoso. en D.SS. Cortes ordinarias, sesión de 3 de marzo de 1822.

⁵⁵⁷ Medida adoptada el 16 de julio, criticada por parte del ejército, instituciones y sociedades, y ampliada el 4 de agosto. Ver D.SS.Cortes, sesión de 7 de septiembre de 1820.

⁵⁵⁸ Florez Estrada denunció escandalizado que pusieran en una cárcel los que pidieron la remoción del Marqués de las Amarillas como ministro de la Guerra. D.SS.Cortes, sesión 31 de julio de 1820.

equilibrada estrategia de moderación.

La impopular medida fué defendida ante las Cortes, después de haber sido puesta en práctica, con argumentos convincentes, pero que no produjeron la menor convicción:

"(...) La necesidad de desvanecer en Europa impresiones poco favorables a nuestra restauración y (...) la dificultad y penuria que causaba su manutención ⁵⁵⁹ (...)".

La decisión ocasionó protestas en el Ejército, las autoridades de Cádiz, las Sociedades Patrióticas y la prensa. Provocó descontento porque chocaba con los intereses de algunos jefes y oficiales del ejército que había sido el promotor del cambio, también por el momento escogido para llevarla a cabo:

"(...) Cuando empezaban a esparcirse contra (ese ejército) ciertas voces de un pretendido republicanismo (...) y, mientras en muchos destinos se encuentran colocados jefes que han combatido abiertamente el sistema constitucional ⁵⁶⁰ (...)".

Pero sobre todo por el riesgo que significaba para el sistema constitucional. Comentando las graves consecuencias

⁵⁵⁹ D.SS.Cortes, sesión de 7 de septiembre de 1820.

⁵⁶⁰ Ibidem.

de la medida señalaría, años más tarde, el diputado por Extremadura González Alonso:

"(...) La disolución del ejército de la Isla, baluarte de la libertad, y la expedición de licencias absolutas al resto del ejército cuando estábamos rodeados de Potencias armadas que no querían nuestras instituciones, nos ha hecho perder la fuerza física; la persecución a los hombres que clamaban contra estas medidas, nos ha hecho perder la fuerza moral⁵⁶¹ (...)" .

El Gobierno, para acallar el descontento optó por mantener la disolución y, a cambio, sacrificar formalmente al Marqués de las Amarillas, único Secretario del Despacho puesto por el Rey ⁵⁶². El Marqués dejó de ser Ministro, aunque mantuvo su poder.

Las protestas y representaciones que desde las instituciones y las Sociedades patrióticas llegaron al Gobierno como consecuencia de la disolución del ejército, movió al Ministerio a impulsar, de forma discreta, la intervención de las Cortes para limitar la libertad de discusión pública de materias políticas, esto es, la

⁵⁶¹ Impugnaba con su intervención una de las medidas "vigorosas" para dar seguridad del reino: que el Gobierno a propuesta de los jefes políticos pueda suspender los ayuntamientos. Ver D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 22 de octubre de 1822.

⁵⁶² E. Vayo, Historia de la vida y reinado de Fernando VII, Madrid 1842.

regulación de las sociedades patrióticas. Como veremos, ambas decisiones, (disolución del ejército y regulación de las Sociedades), están en el origen de la grave escisión que se produjo en el seno del liberalismo.

El Gobierno hizo explícitas las razones en que fundaba su decisión de disolver el ejército de la revolución, en el curso del debate entablado entre el Secretario de Gobernación, Argüelles, y el diputado por Cádiz, Gutierrez Acuña. El diputado intervino en el Congreso para expresar su oposición a la manera con que había procedido el Gobierno en el asunto de la separación del ejército de la Isla; acudió a razones legales ("la ley de 16 de julio 1820 bien examinada es inconstitucional") y de conveniencia política (convulsiones pasadas y reformas pendientes). Pero debió pensar que dotaba de mayor poder expresivo a su discurso con referencias a las representaciones populares y observó:

"(...) Representó el ejército (...) al Gobierno, y como él lo hicieron la Diputación provincia y el ayuntamiento constitucional de Cádiz, la Isla, el Puerto, Jerez, Sanlúcar, etc.; y también representaron las mismas corporaciones a las Cortes, porque creyéndolo un caso grave, pensaron que podría ocuparse de él el Poder legislativo ; sin embargo en el Congreso no se ha dado cuenta de estas representaciones (...). El Gobierno no obstante lo expuesto, repitió sus órdenes (...), el noble caudillo (...) viene velozmente (...) propone ciertas transacciones; ¿ y estas podrán ser nunca peligrosas

ni denigrantes al Gobierno, si refluyen en bien de la Patria
?⁵⁶³ (...)".

En su contestación, el Secretario del Despacho de la Gobernación comenzó admitiendo que el Gobierno no podía desentenderse de las representaciones, pero en la medida que esas constituían una parte de la opinión y uno de los elementos del juicio del Gobierno "podía no acceder a esa parte". Y pasó a realizar una definición "more geométrico" de la acción del Gobierno:

"(...) El Gobierno ocupa el centro del Reino, y desde allí tiene que tender la vista y acudir a toda la circunferencia. Las consideraciones que se le presentan por varias partes; la conveniencia pública y una necesidad urgentísima le obligaron a tomar esta medida impopular. Es fácil lucir en el partido del pueblo: pocos sacrificios cuesta determinarse a lisonjear sus deseos, aún diré sus caprichos e imprevisión; pero la gran dificultad consiste en tomar medidas útiles a la Patria, aunque impopulares; sacrificarse por ella, y sacrificar por ella, no sólo el reposo, los intereses, sino la propia reputación. Este mérito no es de todos⁵⁶⁴ (...)."

En su discurso hacía Argüelles una evidente distinción

⁵⁶³ Ver D.SS.Cortes, sesión 7 de septiembre de 1820.

⁵⁶⁴ Ibidem.

entre el camino fácil, los que lucen en el "partido del pueblo", y el sacrificado, de los que toman medidas útiles a la Patria. Por tanto, el corolario que cabía extraer era que para los moderados liberales sólo ellos estaban capacitados para gobernar o legislar en interés de la Nación; mientras que los intereses del pueblo eran, casi por definición, contrarios a los de la madre Patria. No acababan de asumir que los deseos del pueblo fuesen útiles a la Nación. Tampoco veían con claridad que además de servir de contraste y para el intercambio de pareceres, quienes estaban en minoría o ejercían la oposición podían ser tomados en cuenta y desempeñar alguna función en el Congreso.

Utilizando la lógica argumental tan apreciada por Martínez de la Rosa, su tesis sobre el modo de gobernar podría formularse así: "no basta con detentar el poder del Estado, es menester que todos estén persuadidos de quién es el depositario de la soberanía nacional". Partiendo de la consideración de que ellos encarnaban la voluntad Estatal, no parecían dispuestos a hacer demasiadas concesiones a los que defendían políticas diferentes, y por consiguiente extremas.

5.3. El Programa.

Economía y fomento .-

El primer Gobierno constitucional tuvo una particularidad sobre los cinco restantes: fué el único que

dispuso de las condiciones propicias para presentar un programa de actuación política propio. Los demás fueron nombrados por el Monarca de manera precipitada, para taponar las crisis o agravarlas, y con el decidido propósito de romper la continuidad en la acción del gobierno.

Los principios y el contenido del programa de actuación política del Gobierno Argüelles fueron esbozados con la instalación de las Cortes. En primer lugar, el Rey anticipó lo esencial, en el discurso que pronunció en el acto solemne de juramento de la Constitución y apertura de las Cortes⁵⁶⁵.

El Monarca en su breve intervención hizo una muy ligera alusión a "los males" ocasionados por "causas antiguas", e incrementados por "la invasión y por el sistema extraviado de los tiempos que siguieron". Y apelando a los "deberes de la dignidad Real y el amor de mis pueblos" recomendaba a las Cortes :

"(...) Lo esencial y urgente que es establecer el crédito público sobre las bases inmutables de la justicia de la buena fé y de la escrupulosa observancia y satisfacción de los pactos de donde nace el bienestar y la tranquilidad de los acreedores, la confianza de los capitalistas naturales y extranjeros y el desahogo del Erario⁵⁶⁶ (...)" .

⁵⁶⁵ D.SS. Cortes Ordinarias, sesión 9 de julio 1820.

⁵⁶⁶ D.SS. Cortes, sesión de 9 de julio de 1820.

De forma más extensa, desarrollaron los contenidos del programa, en sus Exposiciones al Congreso, los miembros del Gobierno. En efecto, cuando los ministros efectuaron su primera comparecencia ante los diputados desbrozaron su definición de los problemas y las líneas acción política que pensaban impulsar. Dos Memorias son las que poseen desde esta perspectiva un mayor interés, la del Secretario del Despacho de Gobernación y la del Despacho Universal de Hacienda.

El Secretario del Despacho de Gobernación, Agustín Argüelles, en el acto solemne de presentación ante las Cortes de su Memoria, relató las actuaciones que había sido ya emprendidas y las leyes de la anterior experiencia constitucional puestas en vigor por la Junta consultiva durante el período provisional concluido. Mencionó entre las medidas sancionadas: los estorbos recientemente removidos con el propósito de acotar y cerrar las propiedades⁵⁶⁷, eximir a la ganadería de injustas gabelas⁵⁶⁸ y a la agricultura del voto de Santiago⁵⁶⁹ y, la abolición del ruinoso método de comunidad. Aludió también al restablecimiento de "la libertad y franqueza de la industria" -decreto de 8 de Junio de 1813-, para que todos los españoles pudieran libremente establecer fábricas y artefactos⁵⁷⁰, ejerciendo cualquiera profesión

⁵⁶⁷ Renovando el decreto de 8 de junio de 1813.

⁵⁶⁸ Reponiendo el decreto de 4 de agosto de 1813.

⁵⁶⁹ Renovando el decreto de 12 de octubre de 1812.

⁵⁷⁰ Reponiendo el decreto de 8 de junio de 1813.

industrial u oficio útil, sin necesidad de examen, título ni incorporación a gremio alguno.

Destacó con especial énfasis el papel del Gobierno en la vida económica:

"(...) Las personas ilustradas saben que la protección que el Gobierno debe a la agricultura y a la industria es más bien negativa que positiva; que su acción debe limitarse a remover estorbos, a hacer respetar la propiedad, y dejar obrar libremente al interés individual, causa harto más eficaz que todos los estímulos que puede suministrar el favor del Gobierno ⁵⁷¹ (...)".

De acuerdo con su razonamiento, indicó como medidas para la protección del comercio y la navegación, la elaboración de un sabio código marítimo y mercantil, donde quede asegurada la propiedad y la libertad que es el alma del comercio.

Quiso hacer una clara advertencia sobre la nueva orientación que pensaba seguir el Gobierno en materia de obras públicas, tratando de especificar las prioridades de su actuación :

"(...) Sería equivocarnos mucho si creyéramos al Gobierno en estado de atender en largo tiempo de un modo

⁵⁷¹ D.SS. Cortes, sesión 11 de julio 1820.

eficaz a este linaje de empresas (camino, canales, acequias), por útiles y provechosas que sean. Las urgentes necesidades del Erario y la urgentísima de establecer el crédito público, absorberán al pronto todos los medios, y no permitirán que el Gobierno dedique a ello sus cuidados, ni el Erario sus recursos ⁵⁷² (...)" .

De nuevo el Erario y la Deuda, el estado deplorable de la Hacienda y afianzar el Crédito público aparecían como objetivos esenciales. Aunque Argüelles matizando su rígida intervención, añadió que no quería decir, en modo alguno, que un Gobierno liberal e ilustrado deba desentenderse de las industrias:

"(...) En las manos del Gobierno las fábricas solo pueden ser útiles consideradas como escuelas o como anticipaciones precisas para montar los establecimientos, cuando no hay capitalistas o asociaciones particulares que se encarguen de estas empresas (...) ⁵⁷³ " .

Continuó describiendo, superficialmente, el contenido de su vasto programa de acción política: en instrucción pública, (arreglo general de la enseñanza uniforme y regular en el Reino); en obras públicas, (formación de un depósito o

⁵⁷²D.S.S. Memoria leída en las cortes por el Sr. Secretario del Despacho de la Gobernación día 11 de julio 1820.

⁵⁷³ Ibidem.

"almacén de luces" para el arreglo de caminos, y demás obras públicas, donde puedan acudir los ayuntamientos y Diputaciones como autoridades competentes, y la iniciativa privada); en beneficencia, (una ley que simplifique y uniformice la práctica de esa hermosa y respetable virtud); en salud pública, (socorro mediante una suscripción general de los afectados por las epidemias, medidas activas de vigilancia y precaución y, en fin, que la Junta suprema de sanidad medite sobre la perfección del reglamento de salud pública); y por último, mencionó la nueva ley de división del territorio español. El objetivo propuesto: organizar de "un modo fijo, uniforme y activo" la acción del gobierno. En suma, dotar de mayor eficacia a los poderes públicos facilitando la comunicación y cumplimiento de las órdenes, el funcionamiento de la justicia, y el reparto y recaudación de los impuestos.

Conviene subrayar, que en línea con lo aprobado en Cádiz, -y ahora puesto en vigor-, insistió especialmente en su compromiso por tratar de reducir a propiedad particular los baldíos y otros terrenos comunes⁵⁷⁴, (bien asignando suertes o por medio de la enajenación). La filosofía general de su planteamiento, expuesta ante el Congreso, era ir "aboliendo o estrechando el ruinoso método de comunidad" y, a la par, "ensanchar el derecho de propiedad", como fórmulas que conducirían al incremento de la prosperidad.

⁵⁷⁴ Reponiendo el decreto de 4 de enero de 1813.

En este sentido, a tono con los tiempos, formuló una definición muy sesgada del problema de las fincas de propiedad comunal. Adujo Argüelles, de forma sentida pero sin lógica, que estaban condenadas a un "estado perpetuo de esterilidad y de languidez". De ahí que proclamara, como la solución más adecuada para abordar el problema, pasar las fincas a propiedad particular. Manifestó su profunda convicción de que sólo cuando se pongan en manos del interés individual se "beneficiarán las fincas con el abono del trabajo" y saldrán de su triste situación. Este discurso marcadamente ideológico encontró una rápida réplica ⁵⁷⁵.

Plan de Hacienda.-

El Secretario del Despacho Universal de Hacienda de España y Ultramar, Canga Argüelles, al presentar ante las Cortes su Memoria sobre los presupuestos ⁵⁷⁶, señaló como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno la reducción de gastos públicos, para disminuir las cargas. La orientación general de su política, que expuso "con la santa libertad que el bien de la Patria reclama, y con la franqueza que inspiran

⁵⁷⁵ Razonamiento refutado en la proposición que presentó el diputado por Sevilla, el magistrado Vecino, pidiendo remover el obstáculo de "la acumulación de inmensos territorios en las solas manos de los grandes(.) en las provincias meridionales" representa para la agricultura. Llegó a proponer "repartirlos en suertes". D.SS. de las Cortes, sesión 19 de julio de 1820.

⁵⁷⁶ D.SS. Cortes, Memoria sobre los Presupuestos .Sesión 13 y 14 de julio 1820

las nuevas leyes", descansaba en una valoración negativa de la, en su creencia, improductiva autoridad estatal, que reposaba en el sacrificio de los ciudadanos:

"(...) Es preciso convenir que casi todos los gastos públicos son improductivos,- sentado lo cual añadía-, la justicia aconseja que las obligaciones del Estado se limiten a lo puramente necesario ⁵⁷⁷ (...)."

De acuerdo con el razonamiento expuesto, señaló su intención de aplicar el "cuchillo saludable de la reforma" para cortar los abusos y aligerar las cargas. Incluía dentro de ese concepto las mercedes y pensiones, que por importe de casi 15 millones de reales, eran otorgadas sin necesidad de trabajo diario. Merece la pena recoger parte de la intervención:

"(...) Distribuir fondos públicos en favor de los sujetos que la bondad de los Monarcas reputó con derecho del disfrute, sin necesidad de compensarlos con un trabajo diario (...) Las mercedes y pensiones que se otorgan sin provecho del pueblo, que las costea en medio de su miseria y ahogos, son unos documentos de inmoralidad y de dureza(...). Los últimos años (...) el gasto (...) ascendía a la cantidad de 14. 816.418. (...) Empléese el cuchillo saludable de la reforma en cortar los abusos y aligerar la carga de las mercedes y

⁵⁷⁷Ibidem.

pensiones⁵⁷⁸ (...)" .

El encargado del (ostentoso) Despacho universal de Hacienda que percibía los gastos públicos como improductivos, miraba los impuestos como un "sacrificio indispensable". En palabras de Canga:

"(...) Debemos ser defendidos, gobernados y juzgados, y cada ciudadano está obligado a entregar al Estado parte del producto de su trabajo, como lo ejecuta para mantener su casa. El que este sacrificio sea obligatorio no impide que se mire como perdido respecto a la riqueza pública (...) ⁵⁷⁹ " .

Alineándose con los planteamientos esbozados por Argüelles concluía su razonamiento afirmando:

"(...) De ahí que nunca sea excesivo el cuidado y el afán del Gobierno por disminuirle (el sacrificio). (...) La justicia aconseja que se limite a lo puramente necesario⁵⁸⁰ (...)" .

A lo largo de su Memoria hizo insistentes referencias a la situación desgraciada del Erario, debido a la suma de sus

⁵⁷⁸ Ibidem.

⁵⁷⁹ Ibidem.

⁵⁸⁰ DD.SS.. Cortes. Ses 13 y 14 de julio 1820. Memoria sobre los presupuestos () que presenta a las Cortes el Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda.

débitos, a la miseria y desgracia del pueblo ("me llena de luto -decía- verme en la dura necesidad de indicar sacrificios"), y a los poderosos estorbos, (estadísticos, administrativos, sociales e ideológicos), para la reforma en el sistema de Hacienda. Hizo mención de los principios constitucionales "bajo los cuales debe caminar el plan de hacienda" (proporcionalidad, igualdad de las contribuciones), incluyendo también como objetivo de su plan el fomento del trabajo o "apartar los alicientes a la holgazanería".

Una vez esbozado el problema, sus dimensiones, y los recursos y dificultades para la solución ofreció su plan. Las ideas esparcidas en su dilatada exposición, las resumió en un paquete de medidas que sometía a la aprobación del Congreso. Unas relativas a su actuación pasada (el crédito extraordinario de 40 millones), otras relacionadas con los cambios exigidos por el sistema constitucional -" efecto de las novedades-", (providencia para pagar los cesantes y jubilados de hacienda, supresión de limosnas, mercedes, rentas y derechos); por último, incluía las relacionadas con el funcionamiento rutinario de la administración, el presupuesto de Gastos de las Secretarías del Despacho.

En relación a los ingresos proponía la rebaja- en algo más de la mitad- de la cantidad que los pueblos debían pagar por contribución; y distintas medidas para cubrir el déficit del Erario. En este último sentido mencionaba, entre otras, dos fórmulas: abrir un préstamo de 200 millones y la

enajenación de bienes eclesiásticos. Apuntando que los créditos procedentes de la deuda se admitieran para la compra de las fincas eclesiásticas.

El planteamiento que esbozaron los Secretarios del Despacho de Gobernación y el de Hacienda, es clave para entender el programa de acción política diseñado por el Gobierno. En resumen, el contenido global del programa consistía en la estrategia vehemente de la moderación, enlazada con la supremacía concedida a la seguridad. Y a un tiempo, la necesidad de "ensanchar la propiedad", porque sólo del interés egoísta que engendra la sagrada propiedad brota trabajo y se produce la ansiada prosperidad.

Mérito de ambos ministerios es, formalmente, la decisión más importante de las que intentó poner en práctica el Gobierno tan moderado como generoso en sus prejuicios: la ley de reforma de los regulares. La ley de los monacales, aprobada por las Cortes respondía a lo que consideraba el Gobierno, por encima de toda su retahíla de medidas, como el objetivo prioritario. Recuérdese que según el propio Argüelles, el objetivo fundamental de la acción de gobierno, a lo que iba realmente a "dedicar sus cuidados" era la atención de las necesidades del Erario y la "urgentísima" de restablecer el crédito público.

El proyecto contenía todos los objetivos deseados por Argüelles y desenvueltos también por Canga: promovía la

prosperidad removiendo obstáculos, dividiendo la propiedad, estimulando el interés e incitando al trabajo; servía para atender las necesidades del erario y restablecer el Crédito público; y lo más importante, contribuía a disminuir el poder de la Iglesia.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que la orientación de la política económica y financiera, diseñada por el gobierno liberal, (que como veremos, contó con el respaldo de las Cortes), implicaba una decidida intervención del poder del Estado. Según iremos comprobando el modelo de Estado liberal en la práctica, que diseñaron entre Gobierno y Cortes, era el de un Estado muy activo (remover cargas, liquidar la propiedad comunal, despojar a la Iglesia de su patrimonio, vender los bienes para "ensanchar la propiedad", y estimular el interés hacia la propiedad y el trabajo).

Los problemas que no tuvieron en la definición de los nuevos parámetros jurídicos, los encontraron cuando dieron comienzo a sus actuaciones sobre la reforma eclesiástica. La puesta en práctica de las secularizaciones, nacionalizaciones y privatización de la propiedad eclesiástica, constituía una empresa superior a sus fuerzas. Los inevitables torpedeos de sus políticas demostraron que no estaban a la altura de la empresa. Para alcanzar ese objetivo tan laborioso, ingrato y difícil era preciso disponer de un poder, una cohesión, unos recursos, una organización y unos apoyos sociales de los que

carecían en absoluto y, como veremos, no se supieron ganar.

Participación política y Sociedades patrióticas.-

Llama particularmente la atención el clamoroso silencio que existía en las Memorias del Gobierno sobre un asunto político tan importante como las llamadas Sociedades patrióticas. Ninguna mención y escasas referencias aparecían en las Memorias presentadas por los miembros del Gobierno⁵⁸¹. No obstante, hay indicios vehementes para pensar que existía hacia ellas una seria preocupación, debido a su presencia abrumadora y el excesivo protagonismo que tuvieron durante el período provisional⁵⁸².

Una posible explicación de esta especie de conspiración del silencio pudiera estar en la propia inquietud que provocaban. El Gobierno y los diputados de la mayoría, como pronto veremos, estaban alarmados por lo que consideraban como un "exceso de celo y ardimiento patrióticos". De los ciudadanos que se congregaban en los cafés preocupaba, sobre todo, el uso intenso que hacían del derecho de petición, la vigilancia indiscreta que habían venido ejerciendo sobre la Junta provisional, y la que empezaban a ejercer sobre los

⁵⁸¹ En relación con la polémica sobre las Sociedades patrióticas, puede leerse el documentado trabajo de A. Gil Novales. "Las sociedades patrióticas", tomo I, Madrid, 1975.

⁵⁸² Por cierto que en el Manifiesto que la Junta presentó a las Cortes dando cuenta del proceso revolucionario y sus actuaciones tampoco dedicaba mucho espacio a las Sociedades patrióticas.

primeros pasos del propio Gobierno. Alarmaba al Gobierno que las sociedades de distintas provincias actuaran de manera concertada y, en suma, que provocaran esa pasión intempestiva por participar que existía en algunos núcleos urbanos.

De acuerdo con su estrategia moderada el Gobierno liberal, fascinado por remover obstáculos, hubiese deseado pura y simplemente la supresión de las sociedades. Pero el Gobierno nada podía hacer porque, según las restricciones al poder ejecutivo que establecían los preceptos de la Constitución (art.172,13), las materias relacionadas con las libertades y derechos eran competencia exclusiva de las Cortes.

Con el pretexto de que habían dejado de ser políticamente necesarias y alegando que esas excrecencias del cuerpo político eran organizativa y funcionalmente inconstitucionales, aprobaron las Cortes la polémica ley reguladora de la libertad de discusión en materias políticas. Bajo esta perífrasis amordazaban las reuniones patrióticas y las ponían bajo el control del Ministerio de la Gobernación.

Con el decreto los diputados liberales no sólo removieron un estorbo, sino que proporcionaron más poder al ejecutivo. La ley de 21 de octubre sobre Sociedades Patrióticas, virtual acta de defunción, constituyó la muestra palpable del grado de cooperación que alcanzaron en poco tiempo las Cortes y el primer Gobierno.

Pobreza y Beneficencia.-

Por motivos ideológicos, los liberales descuidaron los problemas relacionados con la desorganización social. Al producirse el cambio de régimen, el estado en que se encontraban casi todos los denominados establecimientos piadosos de la Nación era lastimoso. Los pueblos elevaron repetidos recursos sobre este asunto, refiriendo que las casas de expósitos todas estaban perdidas, y eran sepulcros, no casas de humanidad: " en ellas, por un cálculo prudente, de cada 100 niños mueren 90 o 96".

La situación lamentable de las casas de expósitos y los restantes establecimientos piadosos (hospitales, hospicios, asilos) provenía de las enajenaciones de sus fincas efectuadas en 1804, que los habían dejado sin fondos ⁵⁸³ ; a ello había que añadir los efectos que ocasionaban las reformas recientes, y las pensiones consignadas a favor de muchos sobre el fondo pío benéfico ⁵⁸⁴. En suma, todas tenían créditos inmensos contra el Estado, que de nada les servían, porque no podían cobrarlos. Madrid mismo se había visto amenazado de tener que poner en la calle a los enfermos del hospital y a los pobres del hospicio ⁵⁸⁵ .

⁵⁸³ Richard Herr. ob.cit.(1971); fué entonces cuando comenzó la definición de estas instituciones eclesiásticas como establecimientos públicos (Dtos.19,septiembre,1798).

⁵⁸⁴Discusión del dictámen de las comisiones de beneficencia y salud pública. Ver D.SS. Cortes extraordinarias, sesión de 8 Noviembre 1821.

⁵⁸⁵ Intervención de Martel en D.SS.Cortes extraordinarias 16 de octubre de 1821.

Del estado de estos establecimientos tuvo inmediata noticia el Gobierno en el período provisional. El hermano mayor de la junta de hospitales se apresuró a elevar a la Junta Consultiva una exposición poniendo en conocimiento de las autoridades que carecía de auxilios para sustentar y socorrer a los pobres enfermos de los hospitales ⁵⁸⁶. Manifestaba que habían disminuido los fondos por haberse suspendido las corridas de toros, por la falta de solvencia de las consignaciones sobre la renta de lotería, por la dilación del cobro de sisas, por la denegación del maravedí por cada libra de carnero, por la falta de ingreso de rifas y, en fin, por otras causas que en unión con las anteriores habían contribuido a reducir a nulidad sus ingresos. Pedía se le socorriese y reintegrase en el derecho de percibir los fondos que le estaban aplicados.

La Junta provisional, en un informe apresurado del día antes de su disolución, (8 de julio), decía que no le era posible dar dictamen sobre el asunto. Sin embargo deslizó un comentario adverso a semejantes establecimientos porque había muchos vicios que corregir y una necesidad absoluta de rectificar su administración. Para finalizar señalando, de acuerdo con la Constitución, (arts. 321 y 335), que los ayuntamientos y Diputaciones eran los encargados de cuidar de los establecimientos piadosos y de beneficencia; por tanto, debían ser dichas corporaciones las que formaran expediente

⁵⁸⁶ Ver D.SS.Cortes sesión de 1 de agosto de 1820.

sobre el estado de hospitales y emitieran su informe sobre las mejoras que fuesen susceptibles realizar. Consultado sobre el asunto el Consejo de Estado opinó que debían expedirse las órdenes más eficaces para que, con toda preferencia y a la mayor brevedad, se solventasen los créditos que los hospitales tuviesen vencidos por razón de estancias de militares enfermos y los que les perteneciese por arbitrios sobre los derechos municipales.

El Gobierno, por su parte, hizo frente al problema utilizando el ingenio y tácticas dilatorias. Muestra de ingenio fué la propuesta contenida en la Memoria del Secretario del Despacho de hacienda. En opinión del ilustre hacendista, si se quería suprimir la desvalida mendiguez, "que tanto desacreditaba al gobierno", había que dedicar los fondos de beneficencia:

"(...) Al fomento de la agricultura y de la industria, (...) dedicar exclusivamente a un objeto tan interesante: los propios, los pósitos, los productos del fondo pío, (...) el importe de las rentas de obras pías (...) ⁵⁸⁷ ".

Y para el sostenimiento de las Casas de Beneficencia y Misericordia (que quedaban sin fondos) hizo una propuesta peculiar, consistente en aplicar el producto de lanas y aceite que recogía la Hacienda. A cambio de la entrega de

⁵⁸⁷ D.SS. Cortes, sesión 13 y 14 de julio 1820.

estos productos, se les encomendaba a esas instituciones piadosas el obraje de paños para el ejército; y con esta solución tan ingeniosa se conseguían varios objetivos. En primer término, que la Hacienda no sufriera las pérdidas que venía padeciendo en la venta de sus efectos; y además de que el Tesoro economice gastos y no despilfarre, el método propuesto permitiría, convertir en hombres útiles a los que caminaban a su ruina:

" (...) Agregados al sostenimiento de las casas de beneficencia y de misericordia todos los fondos posibles de los indicados, nada más útil a ellas, ni más ventajoso al Erario que encomendarles el obraje de los paños y lienzos para el abasto del ejército. La hacienda pública recoge por producto algunas de sus rentas de lana y aceites que pudieran aplicarse a la empresa; y destinando a aquellos depósitos de caridad una cantidad alzada de las que hoy invierte en comisiones de vestuarios, las tropas quedarían servidas, el Tesoro economizaría gastos, la Hacienda no sufriría las pérdidas que hoy experimenta en la venta de sus efectos y apartaríamos de nosotros la desvalida mendiguez que tanto desacredita al gobierno, convirtiendo en hombres útiles a los que en el día caminan a su funesta ruina por la senda detestable del crimen, compañero de la ociosidad⁵⁸⁸ (...)."

Mientras se decidía el Gobierno sobre la puesta en

⁵⁸⁸ Ibidem.

práctica del anterior proyecto, en vez de tomar decisiones para solventar el asunto de los hospitales de Madrid, envió el expediente a las Cortes para que lo informasen.

Las Cortes atendiendo la indicación del eclesiástico Villanueva, aprobó el nombramiento de una comisión especial del Congreso que tomando el debido conocimiento del estado de las rentas del hospital y del déficit resultante propusiera los arbitrios oportunos. La comisión especial de Beneficencia emitió rápidamente su dictamen. La medida que sometió a la consideración de las Cortes, para facilitar socorros momentáneos y contribuir al alivio de la necesidad de estos establecimientos ⁵⁸⁹, como la exención del pago de impuestos, fué rechazada por los diputados de todas las tendencias. La razón que alegaron fué que, según la Constitución, en el pago de contribuciones no debía haber privilegio ni exención alguna⁵⁹⁰. Las Cortes acordaron dirigirse al Gobierno para que de los fondos píos, pague a los hospitales sus atrasos antes que las pensiones de los

⁵⁸⁹ Integran la Comisión de Beneficencia: Obispo auxiliar de Madrid, Obispo de Sigüenza, Castanedo (eclesiástico), Villanueva (eclesiástico), Gasco, Vargas Ponce, Gisbert. Consultar D.SS. Cortes, sesión 4 de agosto de 1820

⁵⁹⁰ El argumento fué utilizado por Martínez de la Rosa. Por su parte el diputado Romero Alpuente también expresó su rechazo alegando :¿ Las Cortes están establecidas para socorrer a (...) los hospitales o para socorrer a toda la Nación y promover su felicidad? (...) " Ver D.SS. Cortes, sesión de 4 de agosto de 1820.

particulares⁵⁹¹; estudie la supresión de aquellas pensiones de particulares injustificadas, y que en lo sucesivo, no conceda pensiones sobre esos fondos.

Según admitió el propio Gobierno al finalizar el año económico (julio de 1821), el ramo de la beneficencia no se había reglamentado ni había recibido las mejoras necesarias. Del asunto del aceite y los paños nada se hizo. El Gobierno, en cambio, se dirigió a los Rdos. Obispos y Arzobispos, a fin de que dieran limonas para socorro de los asilos "donde se alberga la infelicidad" y acordó, por vía de ensayo, la creación de Juntas de beneficencia (30 de julio de 1821).

Mientras el Gobierno recurría a la piedad, las Cortes consiguieron aprobar precipitadamente la ley de Beneficencia⁵⁹². El diputado por Salamanca y miembro de la comisión, Martel, insistió en la necesidad de que el Congreso Nacional abordara esta urgencia:

"(...) Hemos atendido a todas las clases ¿y desatenderíamos a los más menesterosos(...). Las Cortes están convencidas de esto, e igualmente de la necesidad de crear un sistema uniforme de administración y régimen, y de nuevos

⁵⁹¹ Según señalaba la comisión en su dictamen, los fondos píos administrados por el colector general de espolios y vacantes, concedió a estos hospitales la pensión anual de 150.000 reales y no habían percibido ni un maravedí. Ibidem.

⁵⁹² Las Cortes aprobaron la ley en diciembre de 1821. Ver D.SS.Cortes sesión de 27 de diciembre de 1821.

recursos para su dotación⁵⁹³ (...) " .

A pesar de la retórica, un tema tan urgente y que afectaba a tantos ciudadanos fué abordado tarde y con descuido, (se aprobó la ley pero no había "arbitrios" para su puesta en práctica). De momento el Estado no parecía dispuesto a devolver lo que debía a quienes se encargaban del cuidado de los enfermos, los ancianos y los huérfanos, tampoco a "dar el gran salto y asumir esa competencia"⁵⁹⁴ . Una explicación hipotética de esta falta de sensibilidad hacia los indigentes, no puede desconocer el prejuicio anticlerical existente. La actitud hacia las instituciones eclesíásticas, que secularmente habían asumido esas funciones, contaminaba a pobres, enfermos y mendigos. No parece que los liberales estuvieran dispuestos a excluir este problema de su confrontación con la Iglesia. Si querían debilitar el ascendiente económico político y social de la Iglesia, debían utilizar su estrategia dual (atacar primero y dismantelar después) también contra esos establecimientos cuya organización y administración estaba en manos de los eclesíásticos.

Por tanto, el prejuicio anticlerical de los liberales

⁵⁹³ Intervención del diputado por Salamanca Martel en el inicio de la discusión del proyecto de beneficencia presentado por la Comisión de Cortes. Ver DD.SS. Cortes extraordinarias, sesión 16 de octubre de 1821.

⁵⁹⁴ Herr veía la desamortización como otra oportunidad para robustecer el Estado moderno. Ob.Cit., (1971), V.

explica, en parte, la falta de sensibilidad hacia la humanidad indigente y un poco del rechazo que dispensaban hacia estos temas; sus prejuicios de clase, les hacía especialmente sensibles para detectar los vicios que padecían los establecimientos⁵⁹⁵. Así, alguien tan cauto en sus juicios como Martínez de la Rosa justificó su oposición a la propuesta de conceder exención de impuestos a los hospitales alegando:

"(...) Esta clase de privilegios o exenciones concedidas a particulares o corporaciones siempre envuelve fraude, de lo que creo que ningún Sr. Diputado dejará de estar convencido, por ser una cosa pública y notoria lo mucho que se abusa de estos privilegios. Sabido es que a la sombra de los que se han dispensado a varios conventos, entraban más víveres de los que se necesitaban, llegando tal vez el escándalo hasta comerciar (...)".

⁵⁹⁵ La forma de razonamiento es semejante a la que se utiliza por los detractores de las políticas sociales de los Estados de bienestar. Ver Hirschman, Retóricas de la intrasigencia, México 1991.

5.4. Las Cortes.-

Las Cortes se reunieron el 26 de junio y el 9 de julio prestó el Rey un nuevo juramento a la Constitución, sin que pudiera impedirlo una "intentona" absolutista cuyo objeto era estorbar su reunión mediante un plan "infernial" para secuestrar al Monarca ⁵⁹⁶.

Hombres importantes de las anterior experiencia Constitucional ocupaban un escaño en el Congreso (Muñoz Torrero, Calatrava, Espiga, Conde de Toreno, Cano Manuel, Martínez de la Rosa, Moscoso, García Page, Fernandez Golfín, López Cepero), cuando no estaban en el Gobierno (caso de Agustín Argüelles, Canga, García Herreros o Evaristo Perez de Castro).

Hemos elaborado un discutible cuadro sobre la extracción social de los diputados en base a la información que proporcionan las Actas electorales, las Condiciones y semblanzas de los diputado de la legislatura de 1820-1821, la prensa periódica y el indispensable Diccionario Biográfico de Gil Novales⁵⁹⁷ .

⁵⁹⁶Comisión Especial para examinar el estado político de la Nación. Ver D.SS.Cortes, sesión de 20 de marzo de 1821. La causa de Domingo Baso (secretario del Rey) y José M^a Erroz (capellán) comenzó a publicarse en la Gaceta de Madrid, 26 de marzo de 1823.

⁵⁹⁷ Diccionario Biográfico del Trienio Liberal, dirigido y redactado por Gil Novales A., Madrid 1991, Eds. El Museo Universal.

Cuadro 1. Composición social de las Cortes de 1820-1821.

PROVINCIAS	ECLE	FUN	MIL	EM. P	PROF	H-NO*	C. I	OT.
ALAVA				1				
ARAGÓN	2	3J	1		1	2		
ASTURIAS	2				2	1N		
AVILA	1				1			
BURGOS	2	1-J		2	1			1
CADIZ*	1		1		1		1C	
CATALUÑA	1	1-J	1		6		3	
CÓRDOBA	1		1			1/1N		
CUENCA	2	1-C		1				
EXTREMADURA	2		1		3			
GALICIA	4	5	3	1		2/1N		
GRANADA	2	4	1		2	1		
GUADALAJARA	1							1
GUIPÚZCOA								1
JAÉN	1				2			
LEÓN	2	1						
MADRID		1			2			
MANCHA	1	1	1					
MURCIA		2	1		1			1
NAVARRA	1	1	1G					
PALENCIA	1							1
SALAMANCA	1	2C						
SEGOVIA		1						1
SEVILLA*	2			1	2		2	
SORIA	2		1					
TOLEDO	1		1		1	2		
TORO								1
VALENCIA	4	4C	3		1			
VALLADOLID	1	1J	1					
VIZCAYA		1			1			
ZAMORA	1							
ISLAS	1				1	1N		
CANARIAS		2						
TOTALES	40	32	18	6	28	12	6	7

(* N= Nobles.)

Elaboración propia en base a las Actas electorales

La clasificación de ocupaciones requiere aclaración. En la tabla figuran divididos los diputados en eclesiásticos, militares, funcionarios, empleados públicos, profesionales, hacendados y nobles, comerciantes e industriales. Para operar con la discutible clasificación me he visto forzado a realizar groseras asimilaciones. Así, en la casilla de profesionales se incluyen abogados, médicos, escritores, periodistas; la de eclesiásticos, incluye al cura párroco, canónigo y obispo; la de militares, desde teniente hasta teniente general; dentro de los empleados públicos, contabilizo a los escribanos, jueces, diputados provinciales y alcaldes. Y la columna de propietario incluye también lo que en otras provincias denominan hacendado y a los nobles; sucede que algunos nobles preferían figurar como hacendados. Por último, en el supuesto extraño de que un propietario o hacendado consigne además otra ocupación (hacendado y, por ejemplo, teniente general o abogado), opto por incluir a la persona en la casilla de hacendado.

El cuadro que aparece a continuación, puede servir para medir la mayor o menor representatividad de los distintos grupos sociales. Para lo cual hemos relacionado los porcentajes que arrojan la división ocupacional de las Cortes, con lo que cada grupo social representa sobre el total de la población.

Cuadro 2. Grupos sociales y Representación nacional.

CONCEPTO	CORTES %	POBLACIÓN %
CLERO	2 7	1,98
NOBLEZA	8	14,02
EMPLEADOS CIVILES Y MILITARES ADMINISTRACIÓN, EJÉRCITO Y MARINA	3 7,5	9,18
ABOGADOS, NOTARIOS Y ESTUDIANTES	1 9	1,94
FABRICANTES y COMERCIANTES	4	2,16
	4,5	27,28
	99. 0	27,28
DOMÉSTICOS		8,18
ARTESANOS		7,91
LABRADORES		26,52
JORNALEROS		28,20
TOTAL.....		100,00

Fuente: Moureau de Jonnes, (Estadística de España.pág,74).

Lo que más llamaba la atención era el alto porcentaje de eclesiásticos que obtenían acta de diputados para el Congreso. Sobre el total de la población los eclesiásticos representaban el 1, 98 %, y en la contienda electoral obtuvieron el 27 % de los escaños. El éxito abrumador del clero pone de relieve, obviamente, la capacidad de las personas pertenecientes a la institución eclesiástica, para plegarse a las nuevas condiciones, su superioridad organizativa, el indudable arraigo social, en suma, el inmenso influjo de la Iglesia en la sociedad española.

Los liberales se asombraban que en instituciones no religiosas y en circunstancias adversas o por lo menos no muy

favorables, personas pertenecientes a la institución eclesiástica consiguieran hacerse con el control de la situación. Como puede verse en el cuadro, sólo en seis provincias dejaron los eclesiásticos de obtener representación. Los eclesiásticos obtenían nombramientos en provincias diferentes, sin excluir aquellas en las que los liberales más radicales obtuvieron su escaño (Aragón, Asturias, Cádiz, Cataluña, Galicia, Murcia y Valencia).

La razón de este fenómeno, estriba en que la institución eclesiástica no era monolítica y como el resto de la sociedad estaba afectada por escisiones ideológicas y crisis. En su seno existían las diferencias que podían existir en los demás grupos sociales, por más que los prejuicios pretendieran presentar a sus miembros de otra forma. En las Cortes los eclesiásticos militaron en todas las tendencias: los hubo absolutistas (Lobato), moderados (Muñoz Torrero) y defensores de posturas radicales (Cortés).

Pero tanto clero, ocasionaba preocupación entre los liberales, que llegaron a decir como reproche "piensan en Europa que estas Cortes son un concilio" . Con la intención de reducir el influjo de los eclesiásticos presentó una proposición el diputado Arrieta (5 de abril 1821) para que se hiciese extensivo a los eclesiásticos (arzobispos, obispos, canónigos, curas párrocos y demás eclesiásticos afectos al servicio de la Iglesia) lo que mencionaba el art. 97 de la Constitución, de manera que no pudieran ser nombrados

Diputados por la provincia en que se hallen empleados⁵⁹⁸.

En opinión del diputado moderado por Cuenca García Page la proposición equivalía a dar una "descarga a metralla contra el clero más benemérito", más activo, y que tenía más popularidad en la Nación, esto es "contra la clase de los párrocos"⁵⁹⁹.

Molestaba que los eclesiásticos contaran en la Representación con un número tan preponderante respecto a los demás ciudadanos⁶⁰⁰. Por esto se les llegó a decir que excitaban los odios de las demás clases del Estado, sugiriendo que su presencia chocaba directamente con la Constitución, donde no existían clases de ciudadanos ni corporaciones privilegiadas.

Si sumamos los porcentajes de funcionarios civiles, con los militares y los empleados públicos (37,5%) arrojan como total el mayor porcentaje de la representación nacional. Pero en proporción, el número seguía siendo inferior al de los

⁵⁹⁸ D.SS. Cortes, sesión 8 de junio de 1821 lectura del dictamen y deliberación 20 junio de 1821. Los obispos de Mechoacán, Mallorca, Sigüenza, y el auxiliar de Madrid, obtuvieron acta de diputados en las Cortes por las provincias de Asturias, Soria, Palencia, Mancha respectivamente.

⁵⁹⁹ Sesión del 20 junio de 1821.

⁶⁰⁰ El diputado Arrieta apeló incluso a la imagen exterior: "los extranjeros continuarán diciendo que la España es una Nación gobernada por clérigos y frailes .. imputación .. degradante de las demás beneméritas clases". D.SS.Cortes sesión de 20 de junio de 1821.

eclesiásticos; lo que no deja de ser sorprendente si consideramos que por su situación estratégica y conexiones políticas, el punto de partida de las personas pertenecientes a estos grupos debía ser más favorable para conseguir la representación a través de las conocidas como "intrigas saludables". Lo anterior evidencia la debilidad de la burocracia estatal y la fortaleza de la institución eclesiástica. Por último, el porcentaje de comerciantes e industriales (4%) procedentes de provincias periféricas era bajo. Sin embargo, superaba el escaso peso estadístico (2%), que tenían las personas pertenecientes a este grupo social.

Dentro de las "intrigas saludables" para salir elegido diputado parece indispensable mencionar la actuación de la masonería. Al margen de otras consideraciones, y sin exagerar su protagonismo, la fantástica secta había proporcionado su discreta organización para canalizar la serie de movimientos conspiratorios que jalaron el sexenio. Al producirse el cambio de régimen, la asociación pudo seguir siendo utilizada como recurso privilegiado: aportaba una rudimentaria maquinaria electoral. De forma semejante, una vez instaladas las Cortes, la asociación ya desvirtuada en su contenido filantrópico original⁶⁰¹ podría haber sido convertida en el indispensable recurso para ordenar y disciplinar la actuación de la Asamblea facilitando posiblemente una cierta coordinación con el Gobierno.

⁶⁰¹ Ver Ferrer Benimeli, José F., *Masonería española contemporánea.*, Vol.1. Madrid 1980.

La masonería por tanto, venía a llenar un vacío que no ocupaban los partidos inexistentes. Quizá lo anterior explique, que cuando estallaron los enfrentamientos en las filas de la tendencia liberal, encuadrada de forma rudimentaria en la masonería, surgiera la insólita Comunería para recoger en sus filas a los liberales más radicales o exaltados.

Otro asunto que merece la pena considerar es el peso abrumador de los ciudadanos de provincias residentes en Madrid en el proceso electoral. Para entender su dimensión basta con leer los nombres de electores de partido que figuraban en el Acta de elección de diputados de Madrid ⁶⁰². De los once electores que integraban la lista del partido de Madrid, seis fueron elegidos diputados por las provincias de procedencia.

Estas Cortes, abrumadoramente liberales, contaron sin embargo con presencia testimonial de absolutistas. Así proyectos de ley tan definitorios como el de vinculaciones ⁶⁰³ y el de reforma de monacales⁶⁰⁴ obtuvieron ciento veintiocho (128) votos a favor y veinticuatro (24) en contra

⁶⁰² Arch. Cortes, Leg.6, exp.nº 19.

⁶⁰³ Votaciones en D.SS.Cortes sesión de 14 de septiembre de 1820.

⁶⁰⁴ Votaciones D.SS.Cortes sesión de 22 de septiembre de 1820.

el primero; y ciento siete votos a favor (107), y treinta y dos (32) en contra el último.

Es posible afirmar que las opiniones políticas manifestadas en las elecciones estaban sujetas a una cierta distribución geográfica⁶⁰⁵; asimismo, podían estar condicionadas por pasadas experiencias de carácter político -como la existencia de Juntas, o el peso de la masonería medido a través de los movimientos conspiratorios (en Cádiz, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Valencia)- o medidas de reforma como las desamortizaciones pasadas ⁶⁰⁶ .

Si examinamos las votaciones nominales que se produjeron en el Congreso con motivo de las votaciones sobre asuntos clave (monacales, vinculaciones, diezmos, sociedades patrióticas) podemos hacernos una idea aproximada sobre las provincias de procedencia de los partidarios de las distintas tendencias políticas en que muy pronto quedaron divididas las Cortes ⁶⁰⁷ .

⁶⁰⁵ Al respecto la obra clásica de Siegfried, *Tableau politique de la France de l'Ouest*, publicada en 1913 y que ha sido reeditada recientemente Paris, 1995.

⁶⁰⁶ R.Herr, cita Galicia, Murcia, Córdoba, Sevilla, Granada y Madrid como provincias en las que se llevaron a cabo ventas de fincas de mayor valor. ob.cit.(1971).

⁶⁰⁷ Los cuadros siguen siendo elaborados sin tomar en cuenta los representantes de las denominadas Provincias de Ultramar.

Cuadro 3. Tendencias políticas en las Cortes de 1820.

PROVINCIAS	DIPUTADOS	ABSOL	MODER	EXALT
ALAVA	1		1	
ARAGÓN	9	3	3	3
ASTURIAS	5		3	2
AVILA	2	1	1	
BURGOS	7	2	5	
CÁDIZ	4		2	2
CATALUÑA	12	3	6	3
CÓRDOBA	4	1	1	2
CUENCA	4		3	1
EXTREMADURA	6		6	
GALICIA	16		16	
GRANADA	10	2	6	2
GUADALAJARA	2		2	
GUIPÚZCOA	1		1	
JAÉN	3		1	2
LEÓN	3	1	2	
MADRID	3		2	1
MANCHA	3		2	1
MURCIA	5	1	1	3
NAVARRA	3	2	1	
PALENCIA	2	1	1	
SALAMANCA	3	2	1	
SEGOVIA	2		2	
SEVILLA	7	1	5	1
SORIA	3	1	2	
TOLEDO	5		5	
TORO	1	1		
VALENCIA	12	5	3	4
VALLADOLID	3	2	1	
VIZCAYA	2		1	1
ZAMORA	1	1		
ISLAS	3		3	
CANARIAS	2		2	
TOTALES	149	30	91	28

F.Casas, elaboración propia.

La división en tendencias que aparece en el cuadro, ha sido construida fundamentalmente sobre el sentido del voto de los diputados en relación con asuntos significativos y polémicos, pero sin descartar los matices que proporcionan las deliberaciones. Ocurría con alguna frecuencia que un diputado con opinión contraria a un proyecto de reforma, (por ejemplo, vinculaciones), modificaba su criterio cuando veía que su propuesta no prosperaba y se inclinaba a la opción más votada. Es posible concluir, por tanto, que en las Cortes había más absolutismo ideológico del que pudiera inferirse de las cifras del cuadro.

Según puede observarse en el cuadro 3, los adversarios de las reformas liberales procedían de las provincias del centro (Zamora, Valladolid, Salamanca, Palencia, Avila, León, Burgos, Aragón), norte (Vizcaya, y Navarra), algunas provincias andaluzas (Granada, Sevilla) y de la periferia (Cataluña y Valencia). Los exaltados provenían de las provincias periféricas, (Murcia, Valencia, Cataluña), de Aragón y Asturias y también las provincias andaluzas (Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada) contaban con representación de esta tendencia. Por último, como puede observarse en el cuadro, el predominio de la tendencia moderada era abrumador. Casi todas las provincias contaban con representantes próximos a esta tendencia.

Si examinamos la extracción social de los que solían inclinarse a defender las opciones políticas características del absolutismo el cuadro resultante podría ser :

CUADRO 4. Extracción social de los diputados de tendencia absolutista.

ECLE	FUN	MIL	EM. PU	PROF.	HAC/N	COM.	OTR.
15 (40)*	5 (32)	2 (18)	2 (6)	3 (28)	2 (12)	(6)	1 (7)

* Entre paréntesis figura el total de los representantes pertenecientes a ese grupo social.

F.Casas. Elaboración propia.

Sobre la exaltación, el cuadro resultante sería el que aparece a continuación.

CUADRO 5. Extracción social de los diputados de tendencia exaltada.

ECLE	FUN	MIL	EM. PU	PROF.	PRO.	COM.	OTR.
3 (40)	7 (32)	4 (18)	2 (6)	6 (28)	3 (12)	2 (6)	1 (7)

F.Casas. Elaboración propia.

Destacar en exceso los determinantes sociales del comportamiento político puede conducir a la paradoja de eliminar la política del comportamiento político. Estos cuadros no han pretendido tal cosa. Tampoco explican mucho, pero contribuyen a aislar las predisposiciones generales que parecen ser compartidas por determinadas categorías sociales. Otra utilidad de los tediosos cuadros es que ponen de relieve la dificultad que plantea proceder a efectuar análisis causales de la conducta política de un grupo de personas, y

el riesgo que comportan las correlaciones apresuradas coloreadas de prejuicios.

Programa.

El programa de actuación política diseñado por el Gobierno contó desde el primer momento con el apoyo de las Cortes. Los miembros del Congreso, de mayoría liberal, se apresuraron a proclamar, abiertamente, que compartían la orientación moderada del Gobierno, en su discurso de contestación a la Corona:

"(...) Las Cortes, al paso que obrarán con la circunspección y detenimiento propios de una nación grande (...), se lisonjean de hallar en el Gobierno de V.M aquel apoyo y toda aquella fortaleza que se requieren para consolidar un sistema nuevo⁶⁰⁸ (...)"

El respaldo de la mayoría del Congreso a la "circunspección" del Gobierno quedó reflejado en actuaciones insignificantes, pero de un valor simbólico innegable. Por ejemplo, cuando las Cortes resolvieron, para contentar al Monarca corregir la redacción del artículo 1º de la ley de supresión de la Compañía de Jesús :

"(...) El señor Presidente (José Espiga), encargado por la comisión de legislación de la redacción del decreto (...)

⁶⁰⁸ D.SS. Cortes ordinarias sesión 10 de julio de 1820.

ofrecía de nuevo a la resolución del Congreso el citado artículo en la forma siguiente: "Se restablece en su fuerza y vigor la ley 4ª título 26, libro 1º de la Novísima Recopilación , por exigirlo así el bien general de la Nación, y en su consecuencia queda suprimida en toda la Monarquía española la orden conocida con el nombre de Compañía de Jesús⁶⁰⁹ (...)".

El texto definitivo fué aprobado sin la expresión "por exigirlo el bien general de la Nación". La corrección se efectuó a instancias del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, quien al presentar la sanción del proyecto de ley de supresión de la Compañía de Jesús, había notado "algo sentida la delicadeza de S.M " al oír la causa en que se fundaba el artículo 1º.

Este apoyo a la estrategia política, se concretó también en decisiones concretas sobre asuntos tan importantes como la disolución del ejército de la Isla y la ley de sociedades patrióticas. Pero la estrategia del Gobierno, como pronto se pudo comprobar no era unánimemente compartida por los diputados. Un sector importante mostró su oposición, por la preocupación que despertaba en ellos el estado de apatía combinado con quejas, agitación y rumores de conspiración en las provincias.

⁶⁰⁹ D.SS. Secretas de las Cortes, sesión de 31 de agosto de 1820.

La discrepancia afloró en el Congreso a raíz de un divertido escrito que corría impreso, enviado por el Obispo de Orihuela al Secretario del Despacho de Justicia. Denunció el papel ante el Congreso el conspirador y diputado por Cádiz Moreno Guerra. Su lectura alarmó y desencadenó un acalorado y desmesurado debate en el curso del cual el diputado Romero Alpuente intervino y presentó la siguiente indicación:

"(...) No debemos dudar de que se está minando de continuo y apurando todo los recursos para que no que consolide el sistema constitucional. Si esto es así ¿por que no se han de tomar todas las medidas necesarias? (...) Llámese a los Ministros (...) Hago la indicación siguiente: que esta sesión en que se trata de si el capítulo de la Constitución relativo a las formalidades de los arrestos debe o no suspenderse, se declare permanente, y ahora mismo vengan los Secretarios del Despacho⁶¹⁰ (...)." ."

Era la segunda vez que se insistía en el argumento "dadas las circunstancias deben las Cortes decretar (art.308) la suspensión de algunas formalidades prescritas para el arresto⁶¹¹ ". La indicación de Romero Alpuente estuvo

⁶¹⁰ Ver D.SS Cortes ordinarias, sesión 19 de julio de 1820.

⁶¹¹La primera proposición la presentó el diputado por Aragón Valentín Solanot. Fundaba la necesidad de tomar medidas enérgicas en las "señales de reacción que se manifiestan para destruir el sistema (en Zaragoza) y las que se han manifestado (Cádiz). Ver D.SS. Cortes, sesión de 16 de julio de 1820.

precedida de las intervenciones de otros diputados manifestando una seria preocupación por lo que pasaba en provincias. La crispación creada dió lugar a que el diputado por Aragón, Solanot, recordara que con las objeciones de conciencia de un Obispo dió comienzo la ruina de la anterior experiencia constitucional. En fin, alarmismo o no, lo que resultaba palpable es que en los escaños del Congreso había diputados que veían como un riesgo la estrategia del Gobierno, y consideraban ese exceso de moderación como el causante de la ruina del sistema constitucional en el año 14.

El grupo de diputados (Toreno, Martínez de la Rosa), que desde el comienzo prestó su apoyo al Gobierno, consideraba que el Congreso, como la razón, debía caracterizarse por su "carácter firme y decoroso" y como cuerpo legislativo tenía que poseer una "tranquila imperturbabilidad". Estos diputados manejando la ingeniosa "tesis del riesgo", sustentaron perpetuamente la idea de que "el desmedido celo por la libertad destruye la propia libertad", y proclamaban que "la voz impetuosa del entusiasmo" y moverse a golpes de impulsos era impropio de un Congreso. Consideraban, por último, como un rasgo que honra a un Congreso deliberativo el de "la superioridad sobre los acontecimientos". Los partidarios de esta actitud imperturbable, (no se alarmaban por síntomas de reacción, como las denuncias de conspiración y los impresos más o menos subversivos de Obispos), consiguieron que el Congreso rechazara la propuesta de Romero Alpuente argumentando :

"(...) Esa prevención funesta que se tiene contra las Cortes del año 14 no debe precipitarnos al extremo opuesto; no sea que por mostrar celo y previsión para atajar males distantes, causemos otros más graves, más cercanos (...) ¿a qué esa voces de peligro, de alarma, de sesión permanente? Es menester no olvidar que la Europa entera tiene fijos los ojos sobre nosotros, y que tal vez la suerte de muchas naciones depende de nuestra moderación⁶¹² (...)."

Pero no hay que dejarse llevar por la eficaz retórica del discurso. Días después, el mismo diputado, pronunció en el Congreso hermosas palabras en defensa del orden por encima de todo:

"(...) Si el fin principal del establecimiento de la sociedad civil es la conservación de la vida y de la propiedad; si por asegurar estos derechos hacemos tantos y tan costosos sacrificios y si, en último análisis a este objeto se reducen principalmente todas las leyes, todas las instituciones humanas no es necesario demostrar la importancia de examinar los medios más eficaces de asegurar esos bienes cuando se encuentran amenazados ⁶¹³ (...)" .

La amenaza provenía de las hordas de ladrones y bandoleros que "infestan los caminos del Reino y que en su

⁶¹² D.SS. Cortes ordinarias, sesión 19 de julio de 1820.

⁶¹³ Ver D.SS. Cortes ordinarias, sesión de 30 de julio de 1820.

osadía han llegado a imponer contribuciones a los dueños de sembrados ". La preocupación de Martínez de la Rosa, por aplacar a la gente de bien que desea tranquilidad, obedecía a su afán de impedir que se repitiera la experiencia pasada:

"(...) los enemigos de la Constitución empezaron a calumniarla el año 14, acusándola de poner trabas al castigo de los delincuentes y de favorecer en cierto modo la impunidad la injusticia de los malvados⁶¹⁴ (...)".

La proposición estaba dirigida, en última instancia, contra aquellos que culpaban a la Constitución de ser responsable de todos los desórdenes, de todas las calamidades "causadas por el desconcierto y la calamidad de muchos siglos".

La réplica a Martínez de la Rosa corrió a cargo en esta ocasión del diputado Florez Estrada. Comenzaba su intervención haciendo un diagnóstico diferente del mismo problema. En su opinión de todos los grandes males que en el día afligían a la nación dos eran los más graves:

"(...): el odio implacable al sistema constitucional de un gran número de individuos y la impunidad de los criminales de esta clase ⁶¹⁵ (...)".

⁶¹⁴ Ibidem.

⁶¹⁵ Ver D.SS Cortes ordinarias, sesión de 31 de julio de 1820.

Evocó el diputado por Asturias la gravedad del problema, formulando a los miembros del Congreso una pregunta provocadora⁶¹⁶ :

"(...) ¿Por qué Código (...) está dispuesto que los llamados persas (...) no se hallen arrestados en cárceles y sí confinados enteramente libres(...), cuando a los que llevados de un celo si se quiere indiscreto, pero nunca criminal, por haber pedido la remoción de un Ministro se les pone desde el momento y continúan en una cárcel incomunicados?(...)"

Para finalizar ofreció, sin éxito, una propuesta de solución distinta a la que hasta ahora la asamblea había venido ventilando :

"(...) El remedio de tamaños males no es (...) perseguir ladrones, contrabandistas y gitanos. (...) no son éstos los que amenazan la existencia de las leyes, por más que amenacen la seguridad del individuo; (...) El verdadero remedio que se penetre el Congreso que nosotros somos llamados para hacer observar las leyes y no para derogarla o eludirlas⁶¹⁷ (...)"

Podemos afirmar, por tanto, que nada más instalarse el Congreso y dar comienzo la vida parlamentaria, las

⁶¹⁶ Que el encargado del despacho Gracia y Justicia no contestó porque era un "negocio muy delicado". Ibidem.

⁶¹⁷ Ibidem.

discrepancias previas existentes entre los diputados y, en especial, entre los que aparecían como liberales iban brotando a medida que aparecían asuntos de más o menos relevancia, interpretados a la luz de la historia pasada.

La discusión entre los liberales sobre el pasado surgió a raíz de la lectura de una Exposición del presidente de la Junta provisional de Galicia al Gobierno. Anunciaba que con la instalación de las Cortes habían decidido cesar en el ejercicio de sus atribuciones. Solicitaban del presidente de las Cortes procediera a "legitimar sus operaciones y procedimientos". Por último manifestaba la disposición existente entre los miembros del Gobierno provisional de esa provincia de reinstalarse siempre que las circunstancias lo requieran⁶¹⁸.

El diputado por Aragón Romero Alpuente, presentó la indicación de que pasara la exposición a una comisión para proceder a la aprobación de las actuaciones de la Junta. Apuntó además la conveniencia de que informara sobre lo que debía hacerse caso de estar amenazado el reino. Martínez de la Rosa, diputado por Granada, se opuso enérgicamente a que las Cortes tomaran en consideración el asunto, por impolítico, y porque contemplaba como inconstitucional debatir de "esa especie" (la propuesta de reinstalación). Sostuvo que no había peligros que temer pues con el juramento

⁶¹⁸ Ver D.SS.Cortes, sesión de 21 de julio de 1820.

por el Rey de la Constitución, la revolución había concluido. Istúriz, diputado por Cádiz, impugnó la doctrina de Martínez de la Rosa, defendiendo la existencia de un derecho superior a la Constitución que es el de la propia conservación, porque "¿qué hará una provincia cuando se halla amenazada?"⁶¹⁹ . Pero la refutación más dura a Martínez de la Rosa provino del diputado por Cádiz Moreno Guerra:

"(...)He oído con escándalo atacar el derecho de insurrección, que es uno de los más sagrados que tienen los pueblos, el cual nos libró de Napoleón, y después nos ha reunido aquí sacándonos de los presidios y de los calabozos
⁶²⁰ (...)".

El Conde de Toreno quiso hablar para rebatir los "principios subversivos de todo orden que se habían sentado" con el pretexto de vanos temores, y confundiendo la defensa de la libertad y la independencia con principios contrarios a la Constitución. Pero el debate se interrumpió:

"(...)El murmullo de los Sres, Diputados, que indicaban su deseo de que no continuase semejante discusión,

⁶¹⁹ En diciembre de 1821 Cádiz se sintió amenazada por el Gobierno. Las autoridades constituidas en Junta decidieron incumplir los mandatos del Ministerio. Sobre sucesos de Cádiz, Cfr. Cap 7.5.

interrumpió al Sr. Conde de Toreno ⁶²¹ (...) "

⁶²¹ Paradójicamente, Las Cortes de 1820-21 finalizaron reproduciendo este debate interrumpido por murmullos, con motivo de los movimientos de desobediencia civil de diciembre de 1821. Ver D.SS.Cortes extraordinarias, sesiones 11 y 23 de diciembre de 1821 y 2 de febrero de 1822.

C A P I T U L O 6

Capítulo 6 .- Gobierno y Cortes: Política y programas.

Desde la instalación de las Cortes (9 de julio de 1820) hasta la celebración de las nuevas elecciones (octubre a diciembre de 1821) la vida política discurrió en dos fases diferenciadas. La primera, de triunfo de la moderación, que comprendió hasta marzo de 1821. Los rasgos que proporcionan a esta fase un perfil tan especial son varios: estrecha colaboración entre el Gobierno y las Cortes; aparente contención del monarca y las fuerzas sociales que apoyaban el absolutismo; y exclusión cuidadosa del ala izquierda del liberalismo, utilizada como señuelo para sacar adelante los contenidos más radicales del programa moderado.

A partir de la destitución del Gobierno Argüelles (marzo 1821), el panorama cambió. La estrategia de moderación entraba en crisis y se abrió un nuevo período cuyas características fueron: conflictiva relación entre el Gobierno y las Cortes; movimientos conspiratorios alentados por el Monarca y unas condiciones internacionales propicias; persecución de los liberales radicales considerados, como los absolutistas, enemigos del sistema constitucional.

6.1. Programa de reformas .-

Favorecidos por la inercia del cambio revolucionario y el engañoso impulso que proporcionaban las revoluciones del

sur de Europa, los dirigentes liberales impusieron, (la expresión castiza era trágala), un programa de reformas cuya medida fundamental estaba dirigida a socavar el poder económico, social, ideológico y, eventualmente político, de la Iglesia; la institución eclesiástica era percibida como el obstáculo a remover en una estrategia de largo alcance cuyo objetivo último era no tanto su derribo como la disminución de su poder.

Gobierno y Cortes comenzaron atendiendo los problemas de orden público y la seguridad. Reflejo de esta preocupación por la tranquilidad interior fué la polémica orden del Gobierno por la que mandaba la disolución del ejército de la Isla, (medida que provocó un intenso debate en las Cortes y acabó condicionando decisivamente el porvenir del sistema constitucional), y también las proposiciones que debatieron las Cortes para "exterminar" los malhechores y bandidos, "que comprometen la seguridad del pacífico ciudadano", y contra vagos, ex-gitanos y mendigos⁶²². Las disposiciones (abreviar procesos criminales y nuevo código criminal), estaban encaminadas a eliminar los argumentos de quienes, desde posturas absolutistas y con malignidad, arremetían contra la Constitución porque producía inseguridad.

⁶²² Preocupaba la aplicación perversa del art. 287 de la Constitución, que regulaba la garantía penal de los detenidos; y el descuido de las autoridades, art.321, con los consiguientes daños a la propiedad. Ver D.SS.Cortes, sesión 30 de julio de 1820.

Esta preocupación de las Cortes por "los infelices forzados por leyes injustas y bárbaras a buscar por este medio su subsistencia" pareció excesiva y provocó críticas. En opinión de Florez Estrada estos criminales eran "más dignos de compasión que de odio" y, mientras tanto, los criminales contra el sistema constitucional se movían con entera impunidad⁶²³. La observación del diputado por Asturias, contra la instrumentalización del orden para encubrir la inacción contra los conspiradores, fué silenciada alegando razones de Estado.

Otra interesante medida de carácter económico, dirigida a dar seguridad y estabilidad al sistema constitucional fué la ley encaminada a atender, con generosidad, la situación de los empleados públicos que, como consecuencia del cambio, pasaban a la condición de cesantes, sobrantes y jubilados⁶²⁴.

Aprobaron una ley de libertad de imprenta que establecía la institución de los jurados para proteger la libertad ⁶²⁵ (ley de 22 de octubre de 1820). Y por último, procedieron a regular en sentido restrictivo la libertad de discusión en

⁶²³ El entrecomillado corresponde a las observaciones que el diputado Florez Estrada hizo a la proposición presentada el 12 de julio por Martínez de la Rosa. Ver D.SS.Cortes sesión 31 de julio de 1820

⁶²⁴ Ver D.SS. Cortes, sesión de 28 de agosto de 1820.

⁶²⁵ El dictamen y proyecto de ley puede verse en D.SS Cortes, sesión de 14 de septiembre de 1820. La lectura (primera), corrió a cargo de Martínez de la Rosa.

materias políticas, con el propósito expreso, como veremos más adelante, de cerrar las sociedades patrióticas (ley de 21 de octubre 1820).

El objetivo último de este programa era no sólo que existiera seguridad, sino en frase que hizo célebre el eximio diputado Martínez de la Rosa "que haya la persuasión de seguridad". El escritor y diputado por Granada, especialmente sensible a los temas del orden, sustentaba la inquietante tesis según la cual "no basta que se haya perturbado el orden, es menester que no se tema esta perturbación"⁶²⁶.

Este importante conjunto de disposiciones fueron adoptadas por el Gobierno (disolución del ejército) o la mayoría del Congreso (seguridad pública, cesantes y regulación de sociedades patrióticas) sin tomar demasiado en consideración los intereses ni los planteamientos de los grupos afectados (ejército e instituciones subalternas de Cádiz y ciudadanos asistentes a las tertulias patrióticas), o de aquellos diputados del Congreso que, en defensa de aquellos intereses, hacían modestas propuestas de mejora. Este modo de proceder obedecía a sus planteamientos de principio. La mayoría liberal admitía la existencia del adversario político y sus miembros estaban dispuestos a escenificar la representación de los conflictos en el Congreso, pero por razones ideológicas les resultaba

⁶²⁶Intervención en apoyo de la ley para regular la libertad de instrucción en materias políticas, eufemismo de la ley de sociedades. D.SS Cortes, sesión de 4 de septiembre de 1820.

inconcebible que todos estuvieran preparados para sacrificarse por la patria, de ahí que el interés nacional único, indivisible entre partidos o facciones, les pertenecía en exclusiva.

La concepción ideológica moderada, la estrategia seguida y el contenido de las medidas adoptadas produjeron la división en el seno del liberalismo y la conversión del adversario absolutista en enemigo acérrimo del sistema constitucional.

La escisión entre los liberales venía arrastrándose desde el período provisional. Fueron los partidarios de la tendencia moderada, quienes tuvieron interés en poner nombre a la quimérica "exaltación", para desacreditarla, y proclamarse a sí mismos como defensores de la postura templada. En justa correspondencia, los exaltados arremetieron contra sus contrincantes a quienes tachaban de padecer "el delirio de una moderación insensata".

En las Cortes esa división fué apreciable, desde las primeras sesiones del Congreso, en la lucha entablada por el control de la agenda política entre las tendencias que se iban configurando. A partir de la disolución del ejército y la supresión de las sociedades patrióticas la división cristalizó y, sin duda, fué profundizándose. Las dos tendencias aceptaron sin inconveniente, desde el principio, designarse mutuamente con las expresiones de exaltada y

moderada, empleadas en ambos casos en sentido peyorativo, con ánimo de descalificar al contrincante político.

Inicialmente la facción moderada tuvo a su favor el control del poder, y la posición ventajosa de estar razonablemente en el centro. De sí mismos decían, que estaban entre el doble frenesí ambicioso de los hombres de religión y rey y el de la libertad⁶²⁷ que, como llegó a decir Martínez de la Rosa en sesión memorable, también crea fanáticos.

Los moderados trataron de responder a los problemas que tenía planteados el país a través de políticas que afectaban los intereses de grupos sociales importantes, (pertenecientes a la iglesia y el ejército), y descuidaron los intereses de la mayoría de la población campesina. Sus polémicas propuestas en vez de ser la solución, contribuyeron a agravar los problemas con conflictos añadidos que incrementaron las divergencias políticas. De esta manera consiguió que las divisiones entre las tendencias políticas rivales, fueran adquiriendo progresivamente no sólo contornos más precisos sino también un carácter más violento.

La escenificación política de los conflictos refleja el incremento progresivo de la distancia ideológica entre las corrientes liberales y también con respecto a los grupos

⁶²⁷ Ver D.SS, Cortes , sesión de 3 de marzo de 1822. Discurso del Secretario de Gobernación J.Mª Moscoso.

sociales más proclives al absolutismo. Los absolutistas con el devenir del sistema constitucional acabaron encontrando motivos suficientes para abandonar su más o menos fingida participación o su indiferencia militante, y decidieron emprender una lucha violenta contra el sistema.

Para analizar aquellas políticas y esta escenificación vamos a fijarnos en el proceso seguido para la adopción de diferentes decisiones. Por su mayor transcendencia, dedicaremos mayor atención a las que el Gobierno y las Cortes adoptaron sobre dos asuntos decisivos: la regulación de las sociedades patrióticas y la reforma de los regulares.

Eran problemas diversos, de participación política, el uno; y religioso-político-económico-financiero, el otro. Si en un caso el asunto afectaba los valores del liberalismo ; en el otro, estaba relacionado con los principios y los intereses de una institución antigua, cohesionada, poderosa, importante, organizada, con fuertes apoyos sociales y , en fin, con conexiones internacionales. Ambos problemas compartían el rasgo de que eran percibidos como problemas graves y apremiantes.

6.2. Participación política: La libertad de discusión en materias políticas.-

La propuesta de una regulación de las sociedades patrióticas surgió en el Congreso el día siguiente de la lectura del proyecto de ley de vinculaciones y coincidiendo con la presencia de Riego en Madrid⁶²⁸. Alvarez Guerra diputado por Córdoba, amigo y compañero de infortunio de Argüelles en el fijo de Ceuta, presentó una indicación en sustitución de otra anterior suya ⁶²⁹ pidiendo:

"(...)Nómbrese una comisión que proponga al Congreso una ley que asegure a los ciudadanos la libertad de ilustrarse con discusiones políticas, evitando los abusos⁶³⁰ (...)".

Parece como si el Congreso considerara oportuno proclamar la moderación como estrategia, (en línea con lo que venía actuando el Gobierno), antes de deliberar sobre dos proyectos de ley tan importantes como el de mayorazgos y regulares ⁶³¹.

⁶²⁸ "Vino velozmente" a Madrid, para negociar con el Gobierno el problema del ejército de la Isla. Ver DD.SS. Cortes, sesión 7 de septiembre de 1820.

⁶²⁹ Solicitando que los ministros no diesen cuenta de las exposiciones que no viniesen firmadas por individuos particulares o por corporaciones reconocidas.DD.SS.Cortes, sesión 4 de septiembre de 1820.

⁶³⁰ Ver DD.SS.Cortes, sesión de 4 de septiembre de 1820.

⁶³¹ La lectura de los dictámenes y proyectos de decretos sobre vinculaciones y regulares se produjo en las sesiones de 3 y 9 de septiembre de 1820, respectivamente. Ver

Como pretexto para incluir el asunto en el orden del día, fué utilizado un suceso tangencial a las reuniones patrióticas: los insultos al jefe político en el acto público de aclamación a Riego en el Teatro. Al margen de quienes tramaran los disturbios ocurridos en el Príncipe, -que implicaban a Riego-, y con independencia de que estuvieran urdidos para conseguir el descrédito del héroe de la Isla, el suceso sirvió para que las Cortes aprobaran la proposición de Alvarez Guerra de designar una Comisión especial que debía entender, no sobre los raros sucesos del Teatro, sino sobre las sociedades patrióticas. Estas asociaciones, percibidas como incómodos espacios de participación, influían a través del ejercicio colectivo del derecho de petición en la configuración de la agenda política y podían realizar un sonoro control sobre el poder ejecutivo. No gustó como procedieron durante el periodo del Gobierno provisional, de ahí que fueran consideradas, como el enemigo a batir por los moderados en el Gobierno y las Cortes.

En asunto de "tanta transcendencia" como las sociedades patrióticas era indispensable la intervención de las Cortes porque, según la Constitución, el Gobierno carecía de competencias en materias relacionadas con los derechos y las libertades.

La sesión del Congreso que deliberó sobre la admisión de

la proposición, estaba presidida por el moderado magistrado de Valencia y diputado por la Mancha, Ramón Giraldo. Después de que Alvarez Guerra, formulara su proposición el Presidente abrió el debate dando la palabra a Priego, eclesiástico y diputado por Córdoba. Con las prisas lo hizo incluso antes de que las Cortes admitieran la proposición a discusión.

Priego citó al "sabio Bentham" para rebatirlo, y defendió la necesidad de regulación de las sociedades, que "se malean" con el tiempo, y "bajo máscara de libertad pueden precipitarnos al despotismo". Pensaba en supresión porque la Constitución estaba cimentada, pero habló de la necesidad de regulación :

" (...) Antes que los malévolos abusando del candor de los que actualmente las componen, nos precipiten a la ruina y a la anarquía⁶³² (...).

Romero Alpuente, uno de los líderes del radicalismo en las Cortes, ajeno a lo que se estaba fraguando, aceptó, por su importancia, que la proposición fuese admitida y pasase a una comisión. Anticipando la dificultad, que a su juicio, había para resolverla:

"(...) ¿Quién puede dudar que la hay y muy grande en la calidad de de las trabas que han de ponerse en este género de

⁶³² Ver D.SS.Cortes, sesión de 4 de septiembre de 1820..

reuniones. Las trabas, si han de ponerse algunas, han de ser no las que quieren los enemigos de la libertad (...) mirando con ojos espantadizos estas reuniones (...) sino las que dictarán los liberales⁶³³ (...)." .

Entonces intervino el jurista extremeño Calatrava. Fingiendo estar sorprendido, llamó la atención de las Cortes acerca de la ausencia de noticias respecto a estas corporaciones (las sociedades patrióticas) y sus abusos, "por el conducto regular" del Gobierno, por lo que señaló:

"(...) Creo indispensable que se oiga ante todas cosas a los Secretarios del Despacho.⁶³⁴ (...)." .

Y cerró el turno Moscoso para fijar la cuestión a su modo, esto es, denunciando ante el Congreso que el jefe político había sido insultado y su autoridad desconocida. Después presentó a la proposición de Alvarez Guerra una adición solicitando la asistencia a la sesión de los Secretarios del Despacho:

"(...) Para juzgar de la necesidad de ocuparse las Cortes del asunto (...) y formar un juicio exacto del estado de la seguridad y tranquilidad pública⁶³⁵ (...)." .

⁶³³Ibidem.

⁶³⁴Ibidem.

⁶³⁵ Ibidem.

El diputado por Galicia manifestó, en otra de sus intervenciones, estar preocupado porque "su imaginación exaltada", le ofrecía las sociedades rodeadas de todos los peligros. En su imaginación las sociedades patrióticas podían "arrastrar a la patria al torrente de disensiones civiles".

Según hemos podido comprobar, una proposición relacionada, en su origen, con las exposiciones dirigidas al Gobierno al amparo del art. 373 de la Constitución, por parte de las Sociedades patrióticas, fué transformada en la necesidad de regular la libertad de instruirse a través de discusiones políticas, quedando al final convertida en un asunto de seguridad.

Como veremos, en la perspectiva del sector moderado del liberalismo, permitir que los ciudadanos "se instruyeran en discusiones públicas sobre materia política" era peligroso, pero sobre todo resultaba escandaloso que tomando la voz del pueblo dirigieran las sociedades o las instituciones subalternas (ayuntamientos y diputaciones)⁶³⁶, representaciones o peticiones sobre negocios públicos a las Cortes, al Rey y al Gobierno, porque esa libertad podía degenerar llevando al sistema constitucional de la anarquía al despotismo.

⁶³⁶ Las consecuencias de este planteamiento se concretarán al final de la legislatura. Ver intervención de Martínez de la rosa en D.SS. Cortes extraordinarias, sesión de 9 de febrero de 1822.

En torno al peligro que representaban específicamente las Sociedades para la libertad giró la segunda parte del debate. Se reanudó la sesión cuando acudieron los Secretarios del Despacho de Gobernación de la Península y de Ultramar. Se concedieron doce nuevos turnos de palabra y todos los que intervinieron, salvo Romero Alpuente, manifestaron a coro su opinión contra las Sociedades y defendieron la necesidad de su regulación. A estas alturas de las deliberaciones, una cuestión procedimental, el debate sobre la conveniencia o no de admitir una proposición para regular las sociedades, se había convertido en un proceso contra las sociedades patrióticas.

Comenzó el constitucionalista Gareli, hablando de la Gran Carta de Inglaterra, del Acta federativa de Estados Unidos. Después de recordar que el edificio de las Cortes estaba en Madrid, y hacer un canto a las sociedades como "contrapeso y garantes de la naciente libertad" señaló :

"(...) Donde las atribuciones de los poderes y derechos de los individuos están prefijados con una admirable claridad y sabiduría, (...) no veo una necesidad de que haya semejantes celadores de la observación de la Constitución. Los ciudadanos que velan a sus representantes, que disfrutan la libertad política del pensamiento, que gozan el ilimitado derecho de petición, ¿cómo podrían aspirar a más, sin aspirar

en demasía?⁶³⁷ (...)

A continuación, el considerado promotor de la primera cátedra de Constitución ⁶³⁸ hizo un comentario polémico sobre las actitudes y propensiones, "resabios" dijo, de los liberales más radicales:

"(..) Los mismos que se llaman constitucionales, y en verdad lo son, adolecen de ciertos resabios de la leche que mamaron y del ejemplo que nos rodeaba en todo sentido; resabios que nos arrastran hacia la arbitrariedad con el lenguaje constitucional; y mientras no se forme una nueva generación (..) el mismo afán de una libertad no marcada por ley (orden) nos haría propender a (..) inquisiciones y bastillas⁶³⁹ (...)"

Finalizando con una recomendación sobre lo que, en su opinión de experto constitucionalista, constituía el comportamiento más adecuado en el sistema constitucional:

"(...) Lo verdaderamente constitucional es que todo español sea justo y benéfico. Séalo cada cual en el seno de su familia, en su oficina respectiva, entre sus amigos,

⁶³⁷ Ver D.SS Cortes, sesión de 4 de septiembre de 1820.

⁶³⁸ En la Universidad de Valencia según Ardit Lucas, Ver su obra Revolución liberal y revuelta campesina, Barcelona 1977.

⁶³⁹ Ibidem.

deudos y vecinos. (...) La casa, el taller, y la oficina de cada uno es la cátedra del verdadero apostolado constitucional⁶⁴⁰ (...)" .

En nombre del Gobierno, intervino el Secretario del Despacho de Gobernación quien, consultado de oficio, había acudido al Congreso para ilustrar sobre la conveniencia de la formación de una ley relativa a las sociedades patrióticas:

"(...) La indicación del Sr. Alvarez Guerra es la que en juicio de los Secretarios del Despacho señala justamente el camino que puede seguir el Congreso sin temor a equivocarse ⁶⁴¹ (...) " .

Pero no se limitó a esto el ministro Argüelles, sino que decidió emitir su juicio sobre las sociedades. Comenzó alabándolas por sus "rectas intenciones y celo patriótico". Continuó expresando su preocupación porque las Sociedades patrióticas, como toda reunión ilegal y abandonada a sí misma pueden tener una tendencia más o menos peligros. En resumen el Gobierno las tachaba de ilegales y opinaba que eran peligrosas. El Gobierno manejó para eliminar las sociedades, el razonamiento paradójico de que demasiada libertad es un peligro para la propia libertad:

⁶⁴⁰ Ibidem.

⁶⁴¹ Ver D.SS Cortes, sesión 20 de septiembre de 1820.

"(...) El Congreso no ignora que las reuniones patrióticas, hijas de un noble movimiento de exaltación que se apoderó de los que ilustremente se pronunciaron por la justa causa de la libertad, han hecho servicios importantísimos a la Patria; sin embargo es imposible prescindir de la idea de que su tendencia puede ser perjudicial si les falta todo género de responsabilidad ⁶⁴²(...) ".

El Secretario de Gobernación de Ultramar, intervino para dar otra perspectiva sobre el mismo asunto. Consideró de sumo interés y de grave urgencia extinguir o por lo menos regularizar de un modo conveniente las "asociaciones patrióticas", pero defendió su postura haciendo un razonamiento diferente:

"(...) Creadas con (...) un laudable fin de reconquistar nuestra libertad política civil (...) de rechazar la fuerza con la fuerza. (...) Cumplidos estos santos fines, la ley debe subrogarse en lugar de la fuerza (...). las autoridades que la Constitución establece y no otras, son las que nos los han de conservar. Los representantes de la Nación, el Gobierno, los tribunales y las demás autoridades establecidas en nuestra Carta. (...) Las asociaciones de otra especie son excrescias o berrugas del cuerpo político, que corrompiéndose con el

⁶⁴² Ibidem.

tiempo, vician sus humores y al cabo lo destruyen⁶⁴³ (...)".

Reforzó la tesis del Gobierno, sobre la ilegalidad y el peligro de las excrencias del cuerpo político, Martínez de la Rosa con otro discurso bien trabado. Comenzó hablando de las dos bases firmes contra las que se estrellarían las pasiones y los partidos⁶⁴⁴; en primer lugar, la perfecta unión entre el Gobierno y el cuerpo legislativo, que "asegura la libertad estrechando al Monarca con la Nación". Y la otra base era, a su juicio, "el fondo de cordura y sensatez española"; puso como ejemplo nuestra gloriosa revolución. Continuó haciendo frases sobre la importancia de la seguridad, el orden, y las obligaciones del Gobierno:

"(...) En un Estado libre y bien constituido no basta que haya seguridad; es menester que haya la persuasión de esa misma seguridad(..) El Gobierno tiene la obligación de impedir cuanto pueda causar a los ciudadanos hasta el más leve recelo de inseguridad. No basta que no se haya perturbado el orden; es menester que no se tema esta perturbación; (...) es necesario manifestemos a la Nación que no se debe confundir la libertad con la licencia; y que sabemos gozar de aquel bien supremo sin caer en los

⁶⁴³ Ibidem.

⁶⁴⁴ Término empleado por de la Rosa en sentido peyorativo como sinónimo de facción y, por lo tanto, contrario al interés nacional. Ibidem.

extravíos⁶⁴⁵ (...)".

De acuerdo con su concepción geométrica del poder, y en nombre de una libertad sin extravíos, ofreció su apoyo a la proposición de una ley sobre las sociedades:

"(...) Que las circunscriba dentro del círculo conveniente, de suerte que ayuden a llevar a cabo nuestra obra, que aunque establecida no está afianzada, (...) pero es necesario impedir su extravío, (...) tenemos en los acaecimientos de una nación vecina el funesto cuadro de los males que pueden producir al desviarse⁶⁴⁶ (...)".

A juicio del diputado por Granada en el estado de ignorancia actual, los hombres ilustrados debían ir allanando la senda a las reformas, destruyendo las preocupaciones y rectificando la opinión, que era el mayor apoyo de las leyes. En este sentido, las sociedades patrióticas debían ser una especie de cuerpos propagadores de las luces, pero añadía:

"(...) Para no confundir con la voz de la Nación la que sea solamente de algunos individuos, juzgo necesario que esas sociedades no puedan ejercer en cuerpo el derecho de petición⁶⁴⁷ (...)".

⁶⁴⁵ Ver D.SS. Cortes sesión de 4 de septiembre de 1820.

⁶⁴⁶ Ibidem.

⁶⁴⁷ Ibidem.

Después de solicitar limitaciones al ejercicio del derecho de petición iba a finalizar su espléndido y conservador discurso, el escritor y poeta, propugnando la restricción de la libre discusión. En opinión del catedrático de Granada, debatir sobre esa materia debía estar reservado a quienes sabían leer y escribir, dicho de otra forma, era preciso excluir a la mayoría del pueblo de la participación política. En fin, la justificación a todas estas limitaciones a la libertad y la participación las argumentó con la clásica retórica reaccionaria sobre los peligros de la libertad:

"(...) La libertad de discutir públicamente de palabra las cuestiones políticas necesita circunscribirse en límites precisos como lo está la libertad de imprenta. (En quien escribe y corrige) el extravío de la pasión tiene un cierto freno, pero en un discurso ¿qué freno tiene(..)? La libertad tiene su fanatismo, no menos perjudicial que el religioso: la libertad tiene su estrecha senda entre dos principios opuestos, pero se confunden (..) ¿y quien podrá olvidar con las tristes lecciones de la historia, que no hay sino un paso de la libertad a la licencia, de la licencia a la anarquía, de la anarquía al despotismo . En favor pues de la libertad misma se debe poner coto y señalar sus justas lindes a unas asociaciones que tan fácilmente pueden comprometer la tranquilidad pública ⁶⁴⁸ (...)".

⁶⁴⁸ Ver D.SS.Cortes sesión de 4 de septiembre de 1820.

El diputado Romero Alpuente hizo constar su perplejidad por el modo en que había discurrido un debate, tan inoportuno como bien orquestado; atacó a quienes mezclaban lo ocurrido en el teatro con las sociedades, porque hacían el juego a los "infames serviles". Después de denunciar abiertamente que estaba tratándose de introducir esta semilla de discordia entre los liberales, arremetió contra las críticas vertidas sobre las sociedades en todos los discursos:

"(...) Esto empezó con un aparato el más extraordinario y ha venido a parar en nada (...) ¿Para qué se llamó a los Secretarios del Despacho? (...) Todos han convenido aun los que más han atacado estas santas reuniones sancionadas por nuestras leyes que deben subsistir (...). Como nosotros hemos sido criados en el cenagoso despotismo, y salimos apenas de él, los olores aromáticos de la libertad nos matan. (...) No se mezcle este punto con lo ocurrido anoche en el teatro del Príncipe, ni con la seguridad⁶⁴⁹ (...)"

Antes que fueran designados por el Congreso los diputados que compondrían la Comisión especial⁶⁵⁰, intervino el Conde de Toreno. No tuvo inconveniente en admitir que la proposición había sido provocada por "las circunstancias

⁶⁴⁹ Ibidem.

⁶⁵⁰ La Comisión Especial nombrada estaba integrada por : Alvarez Guerra (Extremadura), Moscoso (Galicia), Benitez (sup.Cuba), Cosío (Granada), Perez Costa (Galicia), Couto (sup México), Gareli (Valencia). Ver D.SS.Cortes, sesión 4 septiembre de 1820.

desgraciadas de estos días", más concretamente, por "el acaloramiento de algunos de los que se tienen por liberales". Aprovechó la ocasión para teorizar sobre la necesidad de una política moderada:

"(...) Una nación vecina nos ha mostrado la verdad (...) primero perecieron los más moderados, luego los menos, por últimos los exaltados, y la nación cayó en manos de la tiranía militar. (...) Unos son los medios de conquistar la libertad, otros los de conservarla. La violencia suele por desgracia necesitarse para restablecerla, pero nunca se afirma por ella; nunca, sino por el dulce y suave movimiento que convierte a una nación en ilustrada y sabia; las luces se difunden, cada uno conoce sus verdaderos intereses y se llega en fin a establecer aquella santa tolerancia⁶⁵¹ (...)".

Detrás de esta discusión sobre las sociedades patrióticas estaban disputando quienes defendían formas bien distintas de entender el proceso de cambio iniciado. De un lado estaban los dirigentes liberales que se encontraban al frente de las instituciones, denominados moderados, quienes partiendo de una definición restrictiva de la política, defendían la limitación de la participación.

Con su planteamiento estaban rechazando los intentos de politizar la sociedad, y circunscribían la política a las

⁶⁵¹ Ibidem.

instituciones representativas y a una limitada participación formal en el proceso electoral. La raíz de este miedo a la participación estaba en la creencia persistente, avalada por su interpretación de la historia reciente, de que un exceso de participación podía poner en peligro el frágil sistema liberal recién instaurado. Su imaginación exaltada les hacía ver la peligrosa tendencia de las sociedades patrióticas sobre todo considerando esos "resabios que arrastran a la arbitrariedad".

También justificaron su postura apelando de manera difusa a las fuerzas de la Santa Alianza. Su amenazante presencia fué utilizada por los liberales moderados para justificar la necesidad de evitar comportamientos que, siquiera remotamente, pudieran dar pie a que los enemigos del régimen percibieran como una provocación y utilizaran ese pretexto para la temida intervención de las potencias europeas.

Los ciudadanos defensores de un liberalismo más radical, promotores de la revolución y cuidadosamente excluidos de los centros de poder, compartían la creencia de que debían intervenir de forma directa y al margen de las instituciones representativas oficiales. Después del cenagoso despotismo querían respirar los aromaticos aires de la libertad.

Quienes se inclinaban a esta tendencia, cuya presencia se hacía sentir en determinados núcleos urbanos, presionaban

sobre los dirigentes para configurar la agenda política; tratando de participar en la adopción de decisiones y contribuir a la consolidación del sistema, desarrollaron actuaciones diversas, (impulsando o vetando medidas, y vigilando la actuación de las autoridades), dirigidas a lograr un cierto influjo y control sobre la actuación de sus gobernantes. Su campo de acción era un espacio de política no institucional pero cuya existencia estaba prevista, hasta cierto punto, en la doctrina y la práctica de la política liberal. Recurrieron a formas de acción perfectamente legitimadas y reconocidas como la libertad de expresión y el derecho de petición. En cuanto a sus objetivos, pretendían que la comunidad asumiera los valores y planteamientos reconocidos por la Constitución.

No compartieron y de ahí los enfrentamientos, la tesis defendida por los liberales moderados en virtud de la cual, en interés de una supuesta estabilidad política del régimen, había que restringir la participación. Estimaban que los liberales defensores de la moderación, utilizaban la excusa de la Santa Alianza para mantenerse en el poder, ejercerlo sin freno, y arrinconar valores consagrados por la Constitución. Cuando percibían que los valores consagrados por la Constitución estaban amenazados por medidas o actuaciones concretas, emprendieron campañas para su defensa. En suma, las distintas corrientes del liberalismo proponían programas de actuación política diferentes para llevar a cabo proyectos afines, y estrategias políticas distintas para

poner en práctica esos programas.

Fué en la sesión del Congreso del 4 de septiembre, cuando los liberales moderados atacaron y mostraron su deseo explícito de acabar con las sociedades patrióticas, sus prácticas políticas, y lo que ellas representaban como ámbito no institucional de participación política popular. El posterior debate que un mes más tarde tuvo lugar, giró sobre un proyecto en el que la regulación de la libertad de discusión, en sentido restrictivo, había sido suavizada. Pero la división y el enfrentamiento entre las dos corrientes del liberalismo ya se había producido. Las Cortes lo que hicieron fué formalizar su regulación, colocándolas bajo el mimisterio de Gobernación, aunque lo que verdaderamente hubieran deseado los moderados era decretar la supresión sin contemplaciones de esta especie de excrencias o "berrugas del cuerpo político".

El dictamen que acompañaba el decreto sobre las sociedades patrióticas, cuando fué presentado ante las Cortes, argumentaba "que habían dejado de ser convenientes". La Comisión comenzaba su escrito haciendo las consideraciones políticas siguientes:

" (...) Las sociedades patrióticas () erigidas por el más desinteresado patriotismo para sostener la vacilante opinión pública en los días de mayor crisis, cooperaron a preservar tal vez a la Nación de las reacciones ominosas (...)

pero sentado ya majestuosamente el edificio de nuestra libertad civil (...) la regeneración política consiguiente al nuevo sistema debió ser obra de los elementos que ha señalado la Constitución (...). Las sociedades , (...) se encontraron naturalmente en una posición muy difícil desde la instalación del Congreso ⁶⁵² (...)" .

A la hora de hacer referencia al riesgo que suponía mantener esas sociedades mencionaba los excesos derivados de una participación excesiva:

"(...) Debía temerse o que el ardor del celo entorpeciera a los respectivos poderes en el desempeño de sus atribuciones, invocando como auxiliar el extravío de la opinión incauta de la muchedumbre, o que en un momento de fogosidad se avanzasen procedimientos inconsiderados, cuyo menor resultado sería el descrédito de las nuevas instituciones ⁶⁵³ (...)." .

Y como ejemplo inevitable de esos excesos aludieron, discretamente, a lo ocurrido durante la revolución en Francia:

"(...) La comisión no hará ciertamente las odiosísimas comparaciones del desenredo que tuvieron en una nación vecina

⁶⁵² Consultar D.SS.Cortes Procedió a la lectura del Dictamen el diputado Gareli en la sesión 16 de septiembre 1820.

⁶⁵³ Ibidem.

las juntas que habían empezado como el modelo del amor de la patria y que blasonaban de ser el baluarte de la libertad⁶⁵⁴ (...).".

Por último, finalizaba el dictamen señalando los fundamentos jurídicos sobre los que reposaba el decreto. En tal sentido, comenzaba delimitando el contenido de los derechos que otorgaba la Constitución a los ciudadanos:

"(...) La Constitución otorga a todo español el derecho de censurar por escrito las operaciones y conducta pública de los funcionarios, como un freno a la arbitrariedad de los que gobiernan. Otórganles además el derecho de petición ante las Cortes o el Rey, creando esta acción popular para la estabilidad de la ley fundamental(...) ⁶⁵⁵ ".

Ahora bien, como en el sentir de la comisión, ni la libertad de imprenta ni el derecho de petición tenían que ver con las sociedades patrióticas, resultaba imposible sustentar sobre los derechos reconocidos por la Constitución la existencia de las reuniones públicas.

De otra parte, a juicio de la comisión redactora del proyecto, las sociedades patrióticas estaban desempeñando tareas de instrucción y, por ley, ese cometido no les estaba

⁶⁵⁴Ibidem.

⁶⁵⁵Ibidem.

permitido, en virtud de lo cual debían ser suprimidas. Merece la pena recoger en extenso la argumentación:

"(...) Cuando trata (la Constitución) de la instrucción pública, de este agente tan poderoso para arraigar el sistema, lejos de autorizar a cada uno para que levante cátedras, arengue en plazas o cafés y se inaugure con el dictado de maestro, previene por el contrario que la enseñanza sea uniforme y corra a cargo de la Dirección de estudios, bajo la autoridad del Gobierno y sobre las bases que dictaren las Cortes. Luego no sólo no permite, sino que prohíbe virtualmente las patentes de propagandistas que se abrogasen los individuos aislada o colectivamente.(..) La Comisión, partiendo de estos principios califica de ilegal y reprehensible, así la frialdad o desafecto, como el calor y celo que no se halle prevenido por la ley fundamental⁶⁵⁶ (...)" .

A los dirigentes liberales, partidarios de una enseñanza uniforme bajo la autoridad del Gobierno, les disgustaba las sociedades no porque instruyeran, sino por las indeseables consecuencias prácticas que acompañaban al proceso generalizado de instrucción política que estaba produciéndose. Lo preocupante de las reuniones en los cafés era que empezaban a coordinar sus actuaciones y suscribir peticiones conjuntas que aparecían impresas. Atemorizaba, en

⁶⁵⁶ Ibidem.

fin, que los individuos ejercieran con tanto ardor su libertad, que las sociedades patrióticas se autoproclamaran representativas y actuaran de manera coordinada:

"(...)La índole de nuestra Constitución actual, el origen y objeto de las sociedades (...) se encaminan a difundir las luces, rectificar la opinión y a desplegar por los medios legales el derecho de petición que concede a todo español la ley fundamental(...). Pero la comisión debe manifestar al Congreso, (...) que estando todavía en su infancia dichas asociaciones se advierte ya una fraternidad y enlace entre sí mismas (...) impresos en tono amenazador (...) bandos cuyo lenguaje es enteramente subversivo; escritos dirigidos a las Cortes en los cuales se califican de parte integrante de la Representación nacional⁶⁵⁷ (...)".

De ahí que la comisión después de invocar nada menos que las Partidas, (que desaprueban y califica de ilegales todas las reuniones en forma de corporación que se organizan por autoridad propia), y apelando a la letra y el espíritu de la Constitución política propusieron la supresión de las sociedades. En palabras de uno de los defensores del proyecto⁶⁵⁸, por ser unos cuerpos políticos que la Constitución no contempla, porque su espíritu podía extraviarse y ser un estorbo a la marcha de los tres poderes:

⁶⁵⁷ Ibidem.

⁶⁵⁸Razones de Alvarez Guerra en el debate del proyecto. D.SS.Cortes, sesión de 14 de octubre 1820.

"(...) La Constitución otorga a todo español el derecho de censurar por escrito las operaciones y conducta pública de los funcionarios (...) el derecho de petición ante las Cortes o el Rey (...); pero cuando trata de la instrucción pública, de este agente tan poderoso para arraigar el sistema (...) previene que la enseñanza sea uniforme y corra a cargo de la Dirección de estudios, bajo la autoridad del Gobierno y sobre las bases que dictaren las Cortes. Luego no sólo no permite, sino que prohíbe virtualmente las patentes de propagandistas que se abrogasen los individuos aislada o colectivamente (...) su enseñanza () no puede fiarse sin previo examen del sujeto a quien se encarga.(...)

La comisión (...) califica de ilegal y reprehensible, así la frialdad o desafecto, como el calor y el celo que no se halle prevenido por la ley fundamental(...). En ellas están señaladas las juntas electorales, su forma y atribuciones; los cuerpos permanentes o transeúntes que ejercen como delegados de la Nación esta o aquella parte de su imprescriptibles soberanía. ¿Quién osaría dar existencia política a otra corporación alguna? (...) ⁶⁵⁹."

En su defensa de las sociedades patrióticas, los liberales radicales refutaron a sus detractores combinando razonamientos de tipo constitucional, (las sociedades como expresión de la libertad de palabra y condición para la libertad de prensa), ideológico, (indispensables para

⁶⁵⁹ Ibidem.

rectificar opiniones y contar con ciudadanos favorables a las reformas), político, (necesarias para la consolidación del sistema impulsando la libertad y frenando el poder).

Los liberales partidarios de las sociedades patrióticas argumentaron que las Cortes no podían atropellar "la libertad de palabra en las reuniones", por ser:

"(...) un derecho más fuerte, más natural y mucho más antiguo que el de escribir, naciendo éste de aquel⁶⁶⁰ (...)".

Hablaron de la necesidad de estas reuniones públicas, donde el pueblo se congregaba para debatir libremente sobre materia política:

"(...) Son la principal escuela práctica de los pueblos libres (...) donde pueden instruirse las clases pobres que no tienen medios para mantener a sus hijos en otras cátedras y universidades⁶⁶¹ (...)" .

El reiterado argumento en que se apoyaban los enemigos de estas reuniones de ciudadanos, según el cual las sociedades podían causar convulsiones políticas y trastornar

⁶⁶⁰ Discurso de Florez Estrada en defensa de las Sociedades Patrióticas, ver D.SS.Cortes sesión 14 de octubre de 1820.

⁶⁶¹ Ibidem.

el Estado fué refutado argumentando sobre los beneficios que reportaban a la libertad:

"(...) Las conmociones que produce esta libertad son siempre el espíritu conservador de la Constitución. No pasan de una ligera fermentación que, en vez de ser perjudicial es utilísima al procomunal; es indispensable para que se rectifique la opinión general, y es necesaria para que se prevengan los excesos a que caminaría todo Gobierno si no hubiese esta vigilancia⁶⁶² (...)".

Insistieron muy especialmente en que antes de decidir acerca de su supresión había que tomar en consideración su papel fundamental para afianzar el sistema constitucional contribuyendo a la formación de los ciudadanos:

" (...) Ellas fomentan el espíritu público, (...) acostumbran a los españoles a tratar de materias políticas; en ellas el pueblo se ilustra muchas veces, y siempre se aficiona a la libertad y a ocuparse como en causa propia en la causa del Estado. (...) El pueblo español ha menester para andar por la senda de la libertad, más espuela que freno⁶⁶³ (...)".

En orden a su utilidad política, destacaron la

⁶⁶² Ibidem.

⁶⁶³ Ver la intervención de Solana en DD.SS.Cortes sesión de 14 de octubre de 1820.

importancia de conservar estas reuniones para contrarrestar el influjo del clero, en un momento en que estaban llevándose a cabo reformas fundamentales que ocasionaban disgusto, y podían ser combatidas desde el púlpito:

"(...) Hay además otra razón(...), al emprender útiles reformas las Cortes se ven precisadas a chocar con algunos intereses. Sabido es que estos intereses son defendidos alguna vez en el púlpito (...) para contrarrestar la influencia de este, (...) es preciso lidiar con iguales armas; con las de las oraciones populares, más eficaces que los escritos. (...) Contra los enemigos de la libertad no es contra quienes se encamina el proyecto de la comisión; que no fué en sociedades patrióticas donde se tramaron las conspiraciones de Burgos, de Murcia y de otros puntos⁶⁶⁴ (...)" .

A la argumentación de los detractores de las sociedades de que fueron necesarias durante el periodo provisional pero "sentado majestuosamente el edificio de nuestra libertad " sobran, porque ya están las instituciones que establece la Constitución, replicaban sus partidarios:

"(...) Antes de la reunión de las Cortes eran mucho menos necesarias y más peligrosas que ahora (...) Ahora se están haciendo reformas y estableciendo leyes, para lo cual

⁶⁶⁴ Ibidem.

es muy conveniente que se ilustren clases enteras de la sociedad, haciéndoles conocer con claridad las ventajas de dichas reformas ⁶⁶⁵(...)".

Entre la irritación y la jocosidad el diputado radical Moreno Guerra interrogó e increpó a la comisión. Valiéndose de la propia lógica argumental de los detractores de las sociedades, rebatió sus argumentos desvelando su sesgo y los efectos perversos que podían derivarse de los mismos:

"(...) ¿Quién ha dicho a la Comisión que han dejado ya de ser convenientes las sociedades?(..) ¿qué males han causado estas sociedades? ¿Se ha visto algún escándalo en ellas, si lo hubo fué en el teatro; y por eso, ¿le ha ocurrido a alguno decir que se cierren los teatros? (..). Y aún cuando hubiesen hecho (algo) ¿en la iglesias no hay escándalos? ¿Y por eso se habrían de cerrar las iglesias? (...)".

Finalizaba su entusiasta discurso el diputado de Cádiz destacando las funciones que habían desempeñado hasta ahora las Sociedades, y la contribución a la racionalización de la vida política, permitiendo articular las reivindicaciones y canalizar la participación:

⁶⁶⁵ El pasaje corresponde a la intervención del diputado La-Santa. Ver D.SS.Cortes, sesión de 14 de diciembre de 1820.

"(...)La conducta observada hasta el día, no solo prueba la moderación y el buen juicio de los españoles, sino en cierto modo su apatía. Y ¿queremos aún más apatía y aumentar la fuerza de la inercia, y debilitar la energía del pueblo y su valor en las circunstancias en que está la Europa? Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora , yo no veo el horizonte político claro y brillante; (...) en el mes de enero nos hemos puesto en contradicción con los principios de Europa, de la santa alianza. (...) Los individuos de las sociedades patrióticas han sido los batidores de la ley, los que han cooperado al acierto en las buenas elecciones, y los que han hecho lo que está hecho. A ellas es a quien se debe en gran parte las nuevas instituciones, el restablecimiento del Congreso; ellas son las que han sabido dirigir el espíritu público, designar al pueblo las personas que eran meritorias de representarlo, porque el pueblo no tenía los conocimientos necesarios (...) si se quitan las sociedades, y con su extinción se extingue el espíritu público, corren riesgo la libertad y la Constitución⁶⁶⁶ (...)".

Fueron reiteradas las alusiones al amenazante entorno internacional como argumento para rebatir la supresión de las sociedades :

"(...) Los papeles públicos nos están anunciando reuniones de soberanos, aparatos de guerra(...)¿ Será

⁶⁶⁶ Debate sobre libertad de discusión en materias políticas, D.SS.Cortes, sesión de 14 de octubre de 1820.

conveniente que en tal estado, cuando más necesitamos sostener el espíritu público, (...) de un golpe se echasen abajo? ⁶⁶⁷ (...) "

La deliberación sobre las Sociedades patrióticas puso de relieve la confrontación básica que en torno a la participación política existía entre las corrientes del liberalismo moderado y radical.

En fin, las sociedades no se suprimieron, únicamente se pusieron bajo el control del Ministerio de Gobernación y sus autoridades subalternas. Se reunían previo permiso de los Jefes políticos y para evitar abusos podían suspender las reuniones indefinidamente. Abuso del poder que sería denunciado por entender que equivalía a una supresión.

6.3. Plan de Hacienda.

El artículo 131 de la Constitución, facultaba a las Cortes para fijar el presupuesto de gastos y el plan de contribuciones, propuesto por el Gobierno y presentado ante el Congreso por el Ministro de Hacienda. La Comisión de Hacienda de las Cortes elaboró un dictamen favorable a la propuesta del encargado del Despacho de Hacienda de rebajar

⁶⁶⁷ Ver discurso de La-Santa en D.SS.Cortes sesión de 14 de octubre de 1820.

de los impuestos a la mitad⁶⁶⁸.

La medida propuesta, discutida en el Congreso cuando se había producido la escisión en la corriente liberal, convertía en legal lo que era una realidad. Durante el cambio de régimen el pueblo, de forma más o menos espontánea o incitado a ello por motivos diversos, había dejado de pagar impuestos. En algunas prvincias, como vimos, las Juntas y autoridades en el ejercicio de su potestad entonces soberana, decidieron por su cuenta una rebaja en la contribución.

La comisión del Congreso presentaba la aprobación a la medida propuesta señalando que era una respuesta al rechazo que, en su opinión, provocaba en el pueblo la contribución directa. Hasta tal grado llegaba la aversión que el miembro de la comisión, Calderón, en defensa del dictamen no dudó en indicar:

"(...) Para mí - decía -, es más que probable que el descontento general que causó la contribución fué una de las principales causas que influyeron en que la Nación se decidiese a liberarse a toda costa de los males que sufría con ella (...)"⁶⁶⁹

Después de apelar a esa poderosa razón política -que el

⁶⁶⁸ Dictamen de la Comisión de Hacienda, D.SS. Cortes, ses. 6 octubre 1820.

⁶⁶⁹ D .SS. Sesión 6 oct. 1820.

descontento popular por la contribución estuvo en la raíz del cambio-, el mencionado diputado por la provincia de Palencia, pasaba a justificar la rebaja (siempre y cuando no fuera incrementada peligrosamente), alegando al tiempo razones de peso para mantener la contribución. Merece la pena seguir su razonamiento:

"(...) Si no fuesen tan urgentes y perentorias las necesidades del Estado(...) y si no estuviésemos amenazados de un préstamo(...) no sólomente pediría al Congreso que aprobase el dictamen de la comisión en cuanto a rebaja la mitad de la contribución, sino que propondría la rebaja de algo más. Es una máxima constante en política, que no deben imponerse contribuciones que choquen con la opinión, con los hábitos y con la situación de un Estado ⁶⁷⁰ (...)".

No obstante, insistió sobre el rechazo popular ofreciendo datos al respecto:

"(...) El nuestro ha mirado con horror esta contribución directa; la ha pagado con gran resistencia, y la ha considerado como una de las principales causas de los males y las calamidades que le afligen(...) ⁶⁷¹ ".

Y tratando de ilustrar el horror que inspiraba la

⁶⁷⁰ Ibidem.

⁶⁷¹ Ibidem.

contribución en el pueblo señaló los problemas sin cuento que acarreaban su gestión:

"(...) Véanse para el que lo dude las dificultades que ha ofrecido su cobranza desde que se estableció, los continuos recursos y reclamaciones, sin contar con los pleitos suscitados en cada partido y en cada pueblo⁶⁷² (...)." .

En resumen, es posible afirmar que la Comisión estaba dispuesta, en materia de impuestos, a hacer en su discurso todas las concesiones precisas en el campo de la retórica política, con tal de conseguir que el pueblo volviese a pagar impuestos. Pero ese radicalismo en los principios no encontraba reflejo en medidas políticas concretas distintas de la propuesta del Gobierno. Y esta distancia entre teoría y práctica política fué inmediatamente subrayada.

En efecto, del Congreso surgieron otras voces, de tendencia exaltada, que propusieron al Gobierno y a la Comisión una mayor coherencia con sus postulados. En concreto sugerían que, en vez de la odiada contribución directa, se optara por una contribución de valores (Moreno Guerra), o bien solicitaban la suspensión del pago de contribuciones (lo que en muchas provincias estaba ocurriendo) hasta que los grandes, las corporaciones y esos usurpadores del estado

⁶⁷²Ibidem.

restituyan al pueblo lo que les pertenece (Romero Alpuente).

La propuesta de contribución de valores fué realizada, en su réplica al diputado Calderón, por el diputado exaltado Moreno Guerra⁶⁷³, quien partiendo de idéntica definición del problema:

"(...) Ha dicho el señor preopinante (Calderón) que la contribución directa es perjudicialísima a los pueblos, que la llevaron muy mal en el año 17 y que los ha destruido⁶⁷⁴ (...)" .

Fué a parar, con buena lógica, y utilizando las eruditas razones que el Ministro Canga había puesto al servicio del Congreso, una propuesta de solución distinta:

"(...) Estando España en el día sin estadística (afirmación de Canga) , y siendo preciso tener dinero prontamente, no hay otro medio que los valores de las fincas; y sacando e imponiendo luego un tanto al millar, como se hacía en la contribución llamada de utensilios y paja, que siempre se repartió por el valor de los capitales, no por sus utilidades (...)." .

En defensa de su propuesta adujo el diputado gaditano la

⁶⁷³ Ver D.SS.Cortes, sesión 6 octubre 1820.

⁶⁷⁴ Ibidem.

simplicidad del cálculo y la justicia en la recaudación:

"(...) Las contribuciones por valores son las mejores y las más sencillas. En los pueblos los valores de las tierras son conocidos por los libros de la contribución de utensilios de paja y de otras. Sin salir de la sala del ayuntamiento en una hora se pueden calcular todos los valores sin equivocación(...). En cuanto a las casas, es lo único que tendrá más que hacer (...). Es menester dinero, y es preciso que lo dé el que lo tiene; los hombres poderosos o hacendados, puesto que ya pueden vender sus haciendas, porque en el pueblo no lo hay. El pueblo es un pozo seco ⁶⁷⁵(...)".

Detrás de la polémica proposición de Moreno Guerra estaba el objetivo constitucional de una mayor justicia, como quedó resumido en su metáfora sobre el pueblo como "pozo seco", y la significativa frase " es menester dinero y es preciso que lo de el que lo tiene". Pero previendo que esa razón de justicia podía parecer insuficiente a la Comisión y a las Cortes, añadió otra de naturaleza política y de una mayor profundidad:

" (...) Es menester que pague el que tenga las propiedades que le conservaron en la guerra de la Independencia ⁶⁷⁶ (...)".

⁶⁷⁵ Ibidem.

⁶⁷⁶ Ibidem.

Finalizando su fogosa intervención con una demanda concreta:

"(...) Hasta que los privilegiados no restituyan al pueblo lo que es suyo, no se cargue al pueblo con un maravedí (...)".

El diputado Romero Alpuente ⁶⁷⁷ intervino para solicitar la suspensión de la discusión, igual que se había procedido a suspender la discusión del empréstito:

"(...) Debe suspenderse hablar de la contribución general hasta que se vea el resultado de las contribuciones indirectas. La contribución directa me parece más cruel que el empréstito (...) aumentaría el préstamo antes de cargar un maravedí sobre los pobres labradores⁶⁷⁸ (...)".

La razón de fondo que existía tras esta solicitud del diputado por Aragón la expuso claramente:

"(...) El que no tiene ¿cómo ha de dar? ¿y por qué no tienen esos miserables? Porque lo tienen otros. Esos señorones, esos grandes, esas corporaciones con tales y tantos privilegios, son los que lo tienen todo; y hasta que esos usurpadores del Estado lo restituyan, de ninguna manera debemos echar al pueblo contribución alguna. El pueblo

⁶⁷⁷ D.SS Cortes, Ses. 8 octubre 1820.

⁶⁷⁸ Ibidem.

español está ya como un miserable animal cargado de tal manera que no puede levantarse del suelo⁶⁷⁹ (...)".

En defensa de la proposición de la comisión de hacienda no habló, extrañamente, el Ministro de Hacienda, sino el de Gobernación. Después de señalar que un país en apuros no está para teorías, finalizó su intervención con un discurso jurídico que versaba sobre lo que, desde el punto de vista de la hacienda, implicaba verdaderamente el régimen constitucional. Esto es, no que el pueblo deja de pagar la contribución, (que era lo que estaba sucediendo), sino que pagaba con equidad y desaparecían los apremios. En extenso, su razonamiento lo expresó en los siguientes términos :

"(...) Se acabaron con la Constitución los apremios, esas ejecuciones militares, las visitas domiciliarias, la prisión de los alcaldes, y otras tropelías que sufrían los pueblos; pero no por eso se acabó la necesidad de contribuir con equidad y proporción.(...) Cuando un Gobierno se ve en tales apuros, no puede convenir unas teorías que serán buenas si se quiere para otra época(...). Me reasumo diciendo que en atención a las urgencias de que nos hallamos rodeados es indispensable adoptar la contribución directa, sin perjuicio de tomar en consideración la indirecta (...) ⁶⁸⁰ ".

⁶⁷⁹Ibidem.

⁶⁸⁰ Ver D..SS. Cortes, Sesión 8 octubre 1820.

En fin, haciendo una grosera simplificación es posible concluir afirmando que el dilema planteado sobre el sistema impositivo era el manteminimio de la contribución general o que, atendiendo a la demanda del pueblo, se reduzca su sacrificio. Lo que en la práctica significaba esta opción era liberarle de cargas y, en aras de una mayor justicia, arbitrar otros impuestos pensados para que paguen sólo los que tienen propiedades. La mayoría del Congreso aprobó la propuesta del Gobierno, y se inclinó por aceptar el hecho consumado de rebajar los impuestos a la mitad manteniendo, desde luego, el sistema de contribución propuesto.

Lo que entendían el Gobierno y la mayoría del Congreso por "contribuir con equidad y proporción" se hizo evidente también por las mismas fechas. Fué con motivo de la discusión entablada en las Cortes sobre la propuesta del Gobierno de los 200 millones de empréstito. El diputado Gasco, reticente al empréstito, recurriendo al almacén de información que había proporcionado al Congreso la exposición del encargado del Despacho de Hacienda, efectuó un enunciado distinto del problema para hacer una propuesta alternativa al empréstito:

"(...) ¿No se deben a la hacienda nacional 260 millones por atrasos de contribuciones? (...) Los pueblos deben, por resto de contribución directa 93 millones de reales, y a ellos les debe la nación el importe de suministros que tienen hechos(...), conclúyase la correspondiente liquidación. (...) Por el servicio de lanzas se deben a la Nación cerca de

70 millones de reales, y los deudores de esta cantidad son precisamente los ciudadanos más ricos y acomodados (...) ¿Por qué no se le ha exigido esta deuda a la alta nobleza?(...) Si bien puede carecer de dinero, abunda en bienes, y bienes que es muy fácil reducir a dinero, si, como es de esperarse, se sanciona la benéfica ley de desvinculaciones (...). Lo mismo se puede decir de los 30 o 40 millones que debe el clero por el atraso del subsidio(...) Perdónese en buena hora lo que pueda deber el clero pobre; pero cóbrense las partidas de que sea deudor el alto clero y las corporaciones eclesiásticas⁶⁸¹(...)" .

Los datos fueron confirmados por el Secretario del Despacho de Hacienda, quien aunque se mostraba dispuesto a compartir el planteamiento en el ámbito vaporoso de los principios, discrepaba en cuanto a tomarlo en serio:

"(...) No puedo menos que convenir con su señoría que la nobleza debe pagar lo que debe por lanzas y medias anatas, porque al cabo es una contribución impuesta a la vanidad y al lujo (...) En otra ocasión he manifestado lo mucho que debe el clero por el subsidio, y añadiré ahora que se le ha apremiado al pago, aunque sin fruto; se le han librado letras que devolvió protestadas. (...) Algunos (cabildos) han dicho que no pagaban porque no cobraban los diezmos⁶⁸² (...)" .

⁶⁸¹ Consultar D.SS. Cortes, sesión de 7 de octubre 1820.

⁶⁸² Ibidem.

En defensa de la alta nobleza que no pagaba por lanzas salió nada menos el diputado asturiano, el Conde de Toreno, quien mostrando poseer un detallado conocimiento del asunto, no en balde era individuo de la comisión, pronunció un sospechoso discurso con un cinismo espléndido:

"(...) Se ha dicho (Gasco) (...) que se apremie al alto clero para que pague los atrasos, y a la grandeza para que satisfaga las lanzas, (...) Dice (...) que se podía tratar de vender las fincas de los que están debiendo esas lanzas y medias anatas; pero debe advertirse, en primer lugar, que de muchos de esos Marqueses y títulos nada se podría sacar, porque no tienen más que el título; y en segundo, que aunque lo tuviesen, esto no nos sacaría del ahogo. ¿Cuanto no cuesta a un particular cobrar sus créditos? ¿Cuánto más nos costaría a un Gobierno, debiendo proceder todos los trámites judiciales?⁶⁸³ (...)." .

El liberal Conde de Toreno, desde la presidencia de la asamblea no tuvo el menor empacho en sugerir, la condonación de las deudas que los privilegiados tenían con la hacienda, porque su cobro además de costoso podía resultar inútil. Esta especial sensibilidad hacia la difícil situación por la que atravesaban los marqueses y títulos, no se generalizaba a otros grupos sociales. Como veremos, para sacar al Estado de apuros, la mayoría en el Congreso permitía cargar de

⁶⁸³ Ibidem.

impuestos al pueblo, estaba dispuesta a consentir el despojo, sin contrapartida, de las rentas de los Hospitales y Casas de Misericordia y, en fin, proceder al despojo del codiciado patrimonio de la Iglesia.

Los Gobiernos liberales gracias a estas y otras actuaciones emprendidas respecto a la nobleza pudieron contar con el apoyo, real o fingido, de parte de los individuos pertenecientes a este grupo social. En distintas ocasiones alardearon de esa adhesión de la nobleza al sistema constitucional:

"(...) No puede menos la comisión de aprovechar gustosa esta oportunidad para colmar de elogios a la ilustre nobleza española, que está presentando un fenómeno único quizá en la historia. En todos los países del mundo en todas épocas han dado los privilegiados mayor importancia a sus más ridículas e insignificantes prerrogativas, y no han reparado por conservarlas en sacrificar su patria (...). Reservada estaba a la grandeza española (...) , no solamente una resignación magnánima al perder con sus privilegios sus intereses mismos, sino la gloria de correr a sacrificarlos en el altar de la Patria⁶⁸⁴ (...)" .

⁶⁸⁴ Dictamen de la comisión especial del estado político del Reino, D.SS.Cortes, sesión de 15 de junio de 1822.

6.4. Reforma de los monacales.

Quienes sufrieron, de manera especial, la práctica del "trágala" del Gobierno y la mayoría liberal en las Cortes, fueron los considerados como naturales adversarios políticos del liberalismo, esto es, "los hombres de religión y Rey con hábitos antiguos". El discurrir del debate del proyecto de ley de reforma de monacales puede constituir un buen indicador. La puesta en escena de la ley, reflejo fiel de la seducción teatral de algunos diputados, fué semejante a la empleada para la de Sociedades.

Empezaron creando sensibilidad hacia el problema a través de la lectura de desoladoras representaciones de conventos de monjas, sobre las dificultades que tenían para la secularización; seguían debates conmovedores; luego venían las variadas proposiciones y, por fin, aparecía la propuesta de un proyecto de ley. Lo notable aquí, como en tantos otros procesos de toma de decisiones, era que las Cortes sintieran la necesidad de apelar a los ciudadanos, lo que se conocía como el elemento democrático, para justificar la adopción de una determinada medida.

El proyecto de decreto presentado por el antiguo miembro de la Junta provisional, Sancho, para mejorar la suerte del clero regular fué leído por primera vez el 23 de julio. Fundaba su propuesta el diputado por Valencia en "las repetidas reclamaciones que habían dirigido al Gobierno desde

el mes de Marzo último muchos regulares de todas las órdenes religiosas, quejándose de su "suerte desgraciada", y la ineludible necesidad de las Cortes de "dictar varios decretos en favor de esta numerosa y distinguida clase del Estado".

El proyecto estaba enmarcado constitucionalmente en la protección que la patria debe a todos sus hijos⁶⁸⁵ y en particular "a las lumbreras de la verdad y los directores de la moral de los pueblos". El modo propuesto para dar protección a los regulares que desarrollaban los vientitrés artículos⁶⁸⁶ consistía, en esencia, en vigorosas medidas racionalizadoras encaminadas a su supresión, pero dirigidas en una primera fase a conseguir la reducción de conventos y expropiar sus bienes que se nacionalizaban.

Entre los objetivos que perseguía la medida unos eran manifiestos, como pagar la deuda y reparar el Estado ("curar

⁶⁸⁵ Sin citarlo estaba refiriéndose al art. 4 de la Constitución. "La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos (...).

⁶⁸⁶ Sus artículos sujetaban los regulares a los ordinarios (art.1); prohibían la fundación de conventos, dar hábitos (art.3); amparaban la secularización (art.4); declaraban bienes nacionales todos los que poseían los regulares (art.8); distribuían estos bienes entre militares de esclarecidos servicios (art.9), pago de la deuda e hipoteca de empréstitos (art.10), a fin de aliviar contribuciones del pueblo. El protector art. 23 decía: "el que contravenga o embarace su exacto cumplimiento, será extrañado del Reino y perderá temporalidades". Ver D.SS. sesión 23 de julio de 1820.

las llagas profundas del Estado"), a costa de un clero regular desacreditado y necesitado de reformas; y también cabe incluir en este apartado el propósito de aumentar con la distribución de esa propiedad, el número de ciudadanos verdaderamente interesados en el sistema constitucional. El objetivo latente, para los liberales equiparable en importancia, consistía en disminuir por este medio el influjo del clero.

La medida fué presentada envuelta en argumentos humanitarios (enjugar lágrimas de enclaustrados y traer la siglo a quienes lo deseen), económicos (remover los males de las manos muertas a la agricultura), fiscales (aliviar las cargas insufribles que abruman a los pueblos)⁶⁸⁷, de gratitud nacional (premiar los servicios de los esclarecidos militares).

El dictamen de la ley sobre abolición de mayorazgos cuando hablaba de "arrancar de raíz el árbol productor de frutos tan amargos", seguramente exageraba. Sin embargo, la oposición moderada al proyecto de monacales estaba en lo cierto cuando estimaba, que la mal llamada reforma de los monacales lo que hacía era arrancar el árbol de cuajo⁶⁸⁸. Es innegable que esta reforma tenía un carácter más radical.

⁶⁸⁷ Ver D.SS. Cortes. sesión de 23 de julio de 1820.

⁶⁸⁸ Ver al respecto discusión suscitada durante la segunda lectura del proyecto de decreto sobre regulares. D.SS.Cortes, sesión de 21 de agosto de 1820.

En la comisión redactora del proyecto en el Congreso, participaron eclesiásticos ajenos al clero regular. Los obispos de la comisión que, con los restantes prelados iba a ser los que implementaran un "proyecto tan benéfico", veían en principio con buenos ojos la reforma. Pero el proyecto pareció injusto a dos miembros de la Comisión porque, con la extinción absoluta de las órdenes, no era respetado el derecho al retiro del claustro.

En efecto, el diputado por Valencia, Gareli, y el obispo Castrillo en su voto particular otorgaron, en principio, su apoyo a la reforma. No obstante, hacían constar, que "el clero debía ser interpelado"⁶⁸⁹ ", o "que en todas las reformas que propone la comisión, intervenga la autoridad eclesiástica"⁶⁹⁰. Las razones alegadas por la minoría de la comisión, para defender la conveniencia de negociar con la iglesia eran, básicamente, porque además de las nacionalizaciones de los monasterios, estaba abriéndose más la puerta a las secularizaciones. Este razonamiento, fué compartido por otros integrantes de la comisión, como el diputado por Mallorca Victorica, aunque no formulara su voto particular.

Se trataba de una de las reformas más importante de las

⁶⁸⁹ Ver voto particular del Sr. Gareli, en Dictamen y proyecto de ley de reforma de los regulares. D.SS Cortes, ordinarias, sesión de 9 de septiembre de 1820.

⁶⁹⁰ Expresión utilizada por el Obispo Castrillo en su escueto voto particular. Ibidem, .

Cortes. Como bien lo percibieron los propios liberales de ella dependía el porvenir del sistema constitucional. Su mayor virtud era el carácter integral, esto es, que la reforma propuesta proporcionaba una vía de solución a diferentes problemas. Desde la óptica liberal, esta ley significaba en primer lugar la salvación del estado en bancarrota, pero además brotaban de ella muchos otros efectos benéficos. Así, la división de la propiedad que la reforma de los monjes iba a traer consigo, contribuiría a la consolidación del sistema constitucional, fomentaría el interés y la prosperidad económica, apartaría con mano poderosa los alicientes a la holgazanería, y por último, de manera indirecta, conseguirían reducir el influjo social, económico político e ideológico de la iglesia. Desde la perspectiva liberal la mayor virtud de esta ley espléndida era que en ella todas las cosas buenas iban juntas.

El proyecto de ley de reforma de los regulares era una medida económica del gobierno liberal, conectada con la hacienda y el sagrado derecho de propiedad. sin duda uno de los más cruciales de los ventilados en las Cortes y, posiblemente, el que tuvo mayor trascendencia política. Lo realizó una comisión especial⁶⁹¹, creada para examinar la proposición efectuada por el Diputado Sancho poco después de haber leído el ministro de Hacienda su Memoria. Constaba de veintiséis artículos, redactados en estilo directo,

⁶⁹¹ D.SS.Cortes, sesión de 23 de julio de 1820

comprensible y sin eufemismos de ningún tipo:

"(...)Art. 1." Se suprimen todos los monasterios de las órdenes monacales(...); art.11."El Gobierno protegerá la secularización (...);art. 12."La Nación dará 100 ducados de cóngrua a todo religioso (...) que se secularice (...);art. 20." (...)Quedan aplicados al Crédito público todos los bienes (...)" .

El tema era especialmente delicado por razones diversas. En primer lugar de tipo jurídico, al estar relacionado directamente con el sagrado derecho de propiedad. En segundo lugar, por motivos políticos, ya que se trataba de los bienes terrenos de la Iglesia católica en manos de las órdenes religiosas, es decir que la medida a adoptar afectaba directamente a grupos sociales privilegiados y poderosos. Y por último, aunque no por ello menos importante, existían razones sociales, de la explotación de los bienes del clero vivían un número crecido de familias.

Según consta en los Diarios de Sesiones, el debate del proyecto se realizó bajo una presión externa importante. Hasta el punto que la indicación del diputado Casaseca, previa al debate, solicitando "se lean íntegras las representaciones hechas a las Cortes en razón del referido decreto" se rechazó aduciendo que tanto en la Secretaría y como en la Comisión habían muchas y muy extensas. Razón por la cual no fué admitida la indicación.

En última instancia, lo que hicieron las Cortes en su proyecto de ley fué definir de forma diferente los parámetros jurídicos en base a los cuales había que regular la vida económica. Comenzaron proclamando el principio de que la propiedad del clero era de la nación; y procedieron a la expropiación del clero para tratar, a su costa, de saldar las deudas públicas. Junto al objetivo financiero, la reforma perseguía la eliminación de clases estériles, (expropiando a los monjes y vaciando conventos); dar ensanche a la propiedad, mediante la distribución del patrimonio arrebatado al clero entre los acreedores del Estado; confiaban que este "ensanche de la propiedad", convirtiéndola en particular, contribuía abrir las fuentes de riqueza⁶⁹².

La reforma de los regulares era de gran transcendencia para los intereses liberales. Tuvieron la pretensión de que su revolucionaria medida causara el menor escándalo y trastorno posibles, por lo que manejaron todo su arsenal de argumentos. En primer lugar, para justificar la ley utilizaron un razonamiento de tipo económico, a saber:

" (...) Una sencilla verdad (...),- diría el diputado Victorica - , que la religión cristiana nunca puede estar en

⁶⁹² Consultar D.SS.Cortes sesión de 9 septiembre 1820. Lectura del dictamen y el proyecto de ley de reforma de los regulares.

contradicción con la prosperidad de los pueblos (...) "⁶⁹³.

Este postulado, tan ilustrado como poco evangélico, sirvió para agregar a continuación un argumento, de carácter político, y de una racionalidad típicamente burguesa, en virtud del cual afirmaban lo siguiente:

"(...) Cuando existen instituciones o prácticas, que lejos de servir a la creación y progreso de la riqueza general, sean (...) una de las causas de la pobreza y de la miseria, fuentes fecundas de calamidades y de males, no debe haber escrúpulo en que dejen de existir o existan de otra manera (...) "⁶⁹⁴ ".

Una vez definida la institución religiosa de la forma que lógicamente deseaban, en virtud de la cual resultaba que la propiedad de la Iglesia era una calamidad, lo que seguía, esto es extraer de esa construcción del problema las debidas consecuencias, caía por su propio peso:

"(...) En el estado de esta desgraciada Nación atraso, pobreza y oprimida por una deuda enormísima de más de 14.000 millones, es preciso recurrir a medios extraordinarios y estos no pueden hallarlos en su población (de 10 millones 9

⁶⁹³ D.SS Cortes. Sesión de 9 de septiembre de 1820. Lectura del Dictamen y del Proyecto de ley de Reforma de los Regulares.

⁶⁹⁴ Ibidem.

son pobres), defiende como un derecho de justicia de los habitantes pobres el ser socorridos, y (...) reclamar para ellos lo que salió de los pueblos(...) ⁶⁹⁵ ".

Aunque persistieron en apelar a los pobres y a un principio de justicia distributiva, ("lo que salió de los pueblos"), para sustentar la licitud de la medida, no hay que dejarse engañar. Esas apelaciones formaban parte de la más estricta retórica política y en modo alguno significaba que los liberales estuviesen pensando, como veremos más adelante, en devolver al pueblo real los bienes de los monacales imaginando para ello alguna fórmula. Lo que la Comisión se limitó a proponer fué:

"(...) La supresión de los monacales y de algunos otros institutos calificados tiempo ha por la opinión pública cuando menos de muy gravosos y aplicar al Crédito público todos los bienes muebles e inmuebles de los monasterios, conventos y colegios que se suprimen ahora ⁶⁹⁶(..)".

El proyecto, fué defendido en las Cortes como un recurso extraordinario. La fórmula de la que propusieron las Cortes para la ejecución de la medida fué bien simple. Dando

⁶⁹⁵ Ibidem.

⁶⁹⁶ El dictamen que acompañaba el Proyecto de ley, leído en las Cortes el 9 de setiembre 1820, después de sentar el principio de que la religión cristiana nunca puede estar en contradicción con la prosperidad de los pueblos, daba por históricamente probado que los institutos religiosos habían sido "una de las causas de la pobreza y la miseria".

por supuesto lo que para ellos era obvio, es decir, que constituía un mal funestísimo absorber una parte de capitales en la compra de fincas del Estado (expropiadas a la Iglesia), los diputados se inclinaron por una propuesta más generosa para los acreedores :

"(...) El plan adoptado por las Cortes no admitir en pago ningún metálico, y sí sólo las varias especies de créditos liquidados, se quitan todos los obstáculos a la venta inmediata de bienes nacionales, se va amortizando la Deuda, se inspira mayor confianza a los acreedores, y se dejan en circulación más capitales en metálico, para que puedan emplearse en beneficio y provecho de la Nación (...) ⁶⁹⁷ ".

Para crear las condiciones propicias a que algunos hicieran un magnífico negocio, los diputados liberales de las Cortes, apelaron a la opinión pública, había que desacreditar a los monasterios; y a la Nación, imprescindible para justificar el despojo de la Iglesia. La opinión nacional fué, por tanto, el argumento ideológico que utilizaron para justificar el despojo.

Uno de los obstáculos que existían para echar mano de los bienes de los monacales era el sagrado derecho de propiedad consagrado por la Constitución. Pero los miembros de la comisión mostrando su adiestrada capacidad para

⁶⁹⁷ El pasaje corresponde al discurso de Martínez de la Rosa. D.SS.Cortes, sesión de 13 de octubre 1820

racionalizar sus intereses supieron estar a la altura de las circunstancias. Elaboraron espléndidos razonamientos para justificar la legalidad de su medida sin dañar, desde luego, el derecho que proclamaban sagrado. Entre todos llama la atención uno por su impronta rusoniana. Parafraseando al autor del Contrato para utilizaron una sutil argumentación jurídica, sobre la que construyeron la distinción entre la propiedad natural, que es la de un individuo, y la política, la del cuerpo moral. El razonamiento que esgrimieron para justificar su propuesta no tiene desperdicio :

"(...) La propiedad de un individuo no pende de la ley; es anterior a ella; más la propiedad de un cuerpo moral en el Estado, pende de la ley y subsiste por ella; y cuando le admitió, ni abdicó ni pudo abdicar el derecho de no garantirla en el momento que la reconozca perjudicial al interés común ⁶⁹⁸(...)".

El problema de este razonamiento era que si se aplicaba a ese cuerpo moral, que era la nación, no se podía llevar a cabo la expropiación. De ahí posiblemente la precisión polémica ("la propiedad de un cuerpo moral en el Estado"), que excluía al Estado mismo.

Aunque después de tanta racionalización, el argumento

⁶⁹⁸ D.SS Cortes, Sesión 21 de septiembre de 1821, intervención de Sr.Castrillo.Ver también sesión de 20 de septiembre de 1820.

a la postre, acabó dominando fué, en última instancia, de carácter político:

"(...) El bien público de la Nación y la desgraciada suerte de tantos menesterosos han obligado a la comisión a tomar estas medidas dolorosas⁶⁹⁹ (...) ".

En el debate se oyeron discursos graciosos que, en nombre del derecho sagrado de propiedad, se oponían casi frontalmente a un proyecto que declaraba "como nacionales o mostrencos" los bienes de los monasterios:

"(...) Los artículos que nos presentan aquí los señores de la comisión están concebidos con tanta sabiduría que yo, como soy tan tonto, no los puedo comprender (...) se quieren agregar al Crédito público unos bienes que no son de la Nación, sino que es una propiedad de los fundadores o de los herederos de estos (...) es necesario hacer una inquisición de estos bienes para ver si tienen legítimo dueño ⁷⁰⁰ (...) ".

El deán de Salamanca y diputado por León, en su arremetida contra el proyecto de ley de regulares, porque amenazaba el sagrado derecho de propiedad, estaba oponiéndose

⁶⁹⁹ Ibidem.

⁷⁰⁰ El diputado Lobato respondía al argumento de la Comisión de que los Monasterios no tienen propiedad con este discurso sobre el verdadero despojo a la propiedad de los testadores y donantes. Ver D.SS. Cortes, sesión 25 de septiembre de 1820.

a la reforma haciendo uso de la tesis del riesgo.

Se alzaron otras voces prudentes, que admitían la necesidad de la ley pero arguían contra la propuesta de supresión absoluta. Lo hicieron desmontando, con razones, todas las pretendidas justificaciones alegadas por la comisión. Adujeron, en este sentido, que ni la conducta particular de los monjes, ni razones de utilidad pública, ni la necesidad de reparar pronto la miseria del Estado, ni siquiera la pobreza de la agricultura ("hay abundancia de tierras lo que faltan son medios"), justificaban la drástica medida :

"(...) El interés verdadero del Estado consiste en que las tierras y propiedades se hallen en las manos más industriosas, que tengan fondos par cultivarlas, y a fuerza de labores e instrucción se saquen de ellas cosechas. Si las separamos de los monasterios, ¿llegarán a para a manos más activas, y darán más copiosos frutos? ⁷⁰¹ (...)"

Dentro de este grupo se encontraban quienes sugirieron con reiteración, pero sin éxito, que el Gobierno se pusiera de acuerdo con la autoridad eclesiástica para ejecutar la ley:

⁷⁰¹ Los comentarios y la cita pertenecen al diputado por Navarra y miembro de la Junta de legislación de Cádiz Alejandro Dolarea. D.SS.Cortes, sesión 22 de septiembre de 1820

"(...) pues de este modo se facilitaba todo, y aun entre otras cosas se proporcionaría la venta de bienes y adquirirían más valor, toda vez que constase al público que se hallaban removidos todos los obstáculos⁷⁰² (...)".

Los prohombres moderados no necesitaron excesivos apoyos dialécticos para justificar la medida, ni fatigaron en exceso su inteligencia. Sus discursos estuvieron dirigidos a proteger la decisión adoptada y eliminar a los que no la compartían. No pusieron freno alguno a sus excesos retóricos, apuntaron muy alto y no les importó utilizar como coartada para defender su política principios igualitarios en los que verdaderamente no creían:

"(...) Yo pregunto a S.S si todas esas propiedades hubieran estado divididas en suertes pequeñas y hubiera habido mayor número de individuos que tomasen interés en su cultivo ¿no estaría más floreciente la agricultura? ⁷⁰³ (...) "

Tampoco se tomaron la molestia de replicar con argumentos el discurso del contrincante político. Un rápido recorrido por la guerra con los moros y la agricultura floreciente de Inglaterra y Francia, sirvió a Martínez de la

⁷⁰² Intervención del diputado por Palencia y obispo de Sigüenza, Manuel Fraile.D.SS. Cortes, sesión, 25 de septiembre 1820.

⁷⁰³ D. SS. Cortes, sesión 24 de septiembre de 1820.

Rosa para persuadir al Congreso de la necesidad de la ley:

"(...) Volviendo la vista a nuestra España ¿qué vemos con dolor, sino despoblación y miseria?. Han quedado los conventos, y los pueblos han desaparecido; (...) al lado de cada rico monasterio se ve un enjambre de infelices que van a mendigar su sustento, pudiendo ser útiles a familias y al Estado; y las leyes que han aglomerado en pocas manos la riqueza y la propiedad, han condenado a la pobreza y a la muerte a miles y miles de habitantes (...) La Nación debe reclamar esas propiedades y salir del abismo en que se mira sepultada (...) ¿será justo que por consentir abuso tan escandaloso permanezca la Nación agobiada con el inmenso peso de la Deuda Pública ⁷⁰⁴ (...) "

Por su parte el Presidente de la sesión, el Conde Toreno, dió colorido a su intervención con algún tinte demagógico:

"(...) Es vergonzoso que unos cuantos individuos del sexo femenino tengan rentas tan cuantiosas como las de San Payo de Santiago, San Pelayo de Oviedo, las Huelgas de Burgos⁷⁰⁵ (...) "

Después de indicar que la Nación tenía el derecho de

⁷⁰⁴ Ibidem.

⁷⁰⁵ Ibidem.

suprimir los monasterios despachó el asunto del posible conflicto entre el Estado y la autoridad eclesiástica con un quiebro dialéctico:

"(...) Se necesitaría de Roma para abolir las órdenes pero no para suprimirlas y no permitir las en España⁷⁰⁶ (...)."

Distinta opinión que el Conde de Toreno sostuvo, sobre este asunto, el General de los Capuchinos en una contundente representación que dirigió al Congreso:

"(...) Ninguna autoridad, (salvo el Romano Pontífice) puede desobligarles de lo que han prometido (los monjes) (...) Desde el instante, pues, en que por cualesquiera autoridad se rompan los lazos de obediencia y disciplina (...) estrecharlos a su observancia sería ponerles en precisión, o de violar sus solemnes promesas, o de resistir como ilegítimos e incompetentes los mandamientos y disposiciones que a estos se ordenaren, por no serles lícito obedecerlas (...) siendo contrarias a lo dispuesto por Dios (...) ⁷⁰⁷ ".

La lectura en ese preciso momento del debate del escrito que, haciendo uso del derecho de petición había dirigido al Congreso, al Monarca y al Gobierno la mencionada autoridad

⁷⁰⁶ Ibidem.

⁷⁰⁷ D.SS.Cortes, sesión 24 de septiembre de 1820.

eclesiástica, no obedecía a que acabara de llegar a la Secretaría del Congreso. Según indicamos más arriba, momentos previos al comienzo de las deliberaciones, Luis Casaseca, diputado por Zamora, había presentado la indicación:

"(...) Siendo religiosa y políticamente de la mayor transcendencia el proyecto de decreto sobre regulares, pido que se lean íntegras las representaciones hechas a las Cortes en razón del referido decreto⁷⁰⁸ (...)".

La representación fué escamoteada a propósito, acaso por temor a los efectos imprevisibles de su lectura, o porque podía perturbar el comienzo de las deliberaciones o, en fin, embarullar el debate y empañar la aprobación de la ley ⁷⁰⁹.

Pero una vez que el Congreso aprobó lo esencial del proyecto, proceder a la lectura no sólo era inocuo, sino que podía contribuir a acelerar la discusión, como efectivamente sucedió.

El impacto que produjo en la asamblea la calculada lectura de la representación del General de los Capuchinos

⁷⁰⁸ La indicación del canónigo fué desechada pretextando que había muchas en secretaría y también en la comisión. Ver D.SS.Cortes sesión de 21 de septiembre de 1820.

⁷⁰⁹ En concreto el artículo 1º declarando " Se suprimen todos los monasterios de las órdenes monacales (...) asimismo los conventos y colegios de las cuatro militares (...) de comendadores hospitalarios y hospitalarios de San Juan de Dios". Aprobado por 107 votos contra 32. D.SS Cortes, sesión de 22 de septiembre 1820.

fué grande. En un largo y no improvisado discurso, el diputado por Salamanca Martel tachó el papel de subversivo, amenazante e insultante. Varios diputados, normalmente moderados, propusieron llevar a los tribunales el escrito. El escritor y economista Florez Estrada, diputado por Asturias, considerado exaltado, fijó debidamente la cuestión aclarando al Congreso que por ninguna ley podía castigarse a quien dirigía una representación.

El Secretario del Despacho de Gobernación, que acudió para tranquilizar los alterados ánimos, restó importancia al asunto. Manifestó competentes sobre el escrito, caso de que circulara impreso, al fiscal nombrado para esos asuntos, designó a las autoridades subalternas como las competentes para tomar providencias y finalizó Argüelles preguntando con desdén:

"(...) Si el Gobierno hubiese de descender a esos pequeños negocios, ¿cómo pudiera ocuparse de los graves y arduos que están a su cargo?⁷¹⁰ (...)".

El proyecto de ley fue aprobado sin concesiones a pesar de las advertencias sobre el riesgo que significaba la adopción de la medida de parte de eclesiásticos liberales. Aunque sólo sea para comprobar la lucidez de los representantes de Cortes, conviene mencionar a alguno de los

⁷¹⁰ D.SS. Cortes, sesión de 24 de septiembre de 1820.

diputados que avisaron sobre el riesgo y la futilidad de la proyectada reforma de los monacales. merecen citarse las reflexiones que hizo a la cámara el Sr. Victorica:

"(...) Nos vamos a meter en un enredo de funestísimas consecuencias (...)".

Agregando a continuación la razón por la cual temía se adoptara la medida:

"(...) Sólo serviría para mantener un centro de resistencia y envolvería al Gobierno en gravísimos embarazos (...)"⁷¹¹.

El propio devenir de los acontecimientos se encargaría de darles la razón en ambos sentidos. Bien es verdad que, a la vista de las representaciones que llovieron sobre la Comisión, las Cortes y el Monarca, no hacían falta grandes dotes adivinatorias para intuir lo que se avecinaba. Al compás de la discusión de esta ley, se fué fraguando el llamado centro de resistencia. Era liderado por el Nuncio, y lo integraban los Prelados y la mayoría del clero.

Los liberales moderados que creían haber conseguido en poco tiempo desactivar al radicalismo exaltado y contener al Monarca, debieron considerar que era la ocasión para adoptar esta ley tan llena de simbolismos. No contemplaban para nada

⁷¹¹ D.SS. Cortes, sesión de 21 de septiembre de 1821.

sus artículos las propuestas negociadoras recogidas en el voto particular y planteadas en el curso de los debates.

El decreto de la supresión total de los monacales obtuvo la aprobación, en un momento de euforia por la buena marcha que llevaba la "regeneración" política; después de haber resuelto el incómodo problema del ejército, haber tratado sobre la dificultad del costoso empréstito, y la presentación de una propuesta de ley sobre esos "remedos de Club franceses" que eran las Sociedades.

El proyecto significaba una ambiciosa tentativa de cambio que pretendía dar respuesta a problemas distintos, todos muy importantes desde la óptica liberal: económico (desestancar la propiedad equivalía a prosperidad), financiero (el problema de la deuda quedaba encauzado), político (creaba propietarios con intereses sensibles en el provenir del sistema), social (reducía las denominadas clases estériles y el influjo económico de la Iglesia), ideológico (disminuía el ascendiente social e ideológico de una Iglesia "desapropiada"). La ley resolvía todo un catálogo de males que posiblemente había que extirpar. El único problema era que los liberales adoptaban una medida radical sin tomar en consideración los condicionamientos y ni medir las reacciones que podía provocar.

Para el estabilidad del sistema constitucional era un asunto de vida o muerte (De la Rosa, Argüelles). Posiblemente

en esta percepción dramática estaba el único punto de contacto entre los fervientes defensores de la supresión y algunos miembros de la jerarquía eclesiástica y las órdenes religiosas, que la consideraban como una intolerable intromisión en su autoridad y un acto de despojo.

La ley fué una de las medidas decisivas del programa de reformas del Trienio. De ella los liberales hicieron depender el porvenir del régimen, y ciertamente, así fué. Pero tan preocupados estuvieron con los objetivos que se desentendieron de las reacciones que su discutible decisión podía provocar. En efecto, con la sanción de la ley de reforma de los monacales por el Monarca, comenzó una lucha interminable que fué desgastando hasta crear las condiciones propicias para el fin del sistema constitucional.

Entre las representaciones que los obispos dirigieron al Congreso contra el proyecto aprobado, se dió especial relevancia a la que envió el Arzobispo de Valencia:

"(...) Haciendo a las Cortes muy graves cargos por haberse introducido a hacer reformas que solo pueden hacerse por la potestad eclesiástica ⁷¹² (...) "

La representación del prelado suscitó una discusión en sesión secreta:

⁷¹² D.SS. Cortes, Actas Secretas, sesión 4 noviembre 1820.

"(..). Después de haber hablado varios (diputados) sobre las medidas que deben adoptarse para cortar los daños que de estas y otras gestiones semejantes pueden originarse se leyó una indicación del Conde Toreno:

"(..)Que se diga al Gobierno (..) tome todas las providencias necesarias para poner en ejecución, con la energía conveniente, lo que previenen las leyes ⁷¹³ (...)" .

El diputado Del Moral propuso, que la resolución tomada por las Cortes a propuesta del Sr. Conde Toreno, fuera leída en sesión pública, pero fué denegada la propuesta. Finalizando la sesión con el acuerdo de que el Sr. Presidente, en los términos que le dicten su prudencia y celo, indique al Prelado el exceso cometido por dirigirse a la Representación Nacional "en términos tan destemplados, audaces, impolíticos e injustos como los que contiene su representación ⁷¹⁴ (...)" .

Destacados miembros de la Cámara, al debatirse el proyecto de ley de reforma de los monacales, realizaron una defensa entusiasta de las benéficas consecuencias a que la medida daría lugar. Destaca entre ellos el admirable discurso que, en un brillante raptó poético, pronunció sobre el asunto el diputado Martínez de la Rosa:

⁷¹³ Ibidem.

⁷¹⁴ Ibidem.

"(...) Desestánquese la propiedad, quítense las trabas, ábranse las fuentes de riqueza pública, y la abundancia y la prosperidad nacerán por sí mismas. La nación debe reclamar esas propiedades y salir del abismo en que se mira sepultada.(...) Compárese el número de conventos con la despoblación del Reino, la riqueza acumulada por los unos con la miseria general y respóndase de buena fé: ¿será justo que por consentir abuso tan escandaloso permanezca la Nación agobiada con el inmenso peso de la Deuda Pública? No queda otro recurso: o vender esas propiedades, o perecer; esta es una cuestión de vida o muerte (...) "⁷¹⁵ .

El diputado por Granada fué, sin pretenderlo, profético. En la reforma de los frailes, como la llamaban coloquialmente, cifraban los liberales el porvenir del régimen. Y el método que los liberales siguieron para poner en práctica la reforma causó la ruina del sistema constitucional.

Los beneficios esperados de esta importante reforma iban más allá de lo estrictamente económico y financiero. Detrás de la medida propuesta existía una razón política. Confiaban que produciría la súbita consolidación el sistema, mediante el incremento del número de propietarios y la disminución de la influencia del clero. Oíase en este sentido la opinión manifestada al respecto por Martínez de la Rosa:

⁷¹⁵ D.SS.Cortes sesión de 22 de septiembre de 1820.

" (...) Mas no son solas las ventajas económicas a las que debemos atender en esta materia; hay otras aun más importantes, cuales son las políticas, en las que creo vinculadas la salvación del Estado y la firmeza del régimen actual (...) ⁷¹⁶ ".

Y entró en el relato de las posibles ventajas políticas de la medida refiriéndose a Francia, como modelo para ponderar la importancia de la reforma. Por cierto, que fué una de las escasas ocasiones en que un destacado miembro de la tendencia liberal en el poder apelaba al país vecino como modelo a imitar. Pero oigamos la parte central del discurso de Marínez de la Rosa:

" (...) A la vista de un ejemplo tan palpable como el de la nación vecina, no mereceríamos disculpa si olvidásemos el único medio de consolidar el nuevo sistema. Ni el terror, ni las persecuciones, ni la exaltación de principios políticos, pueden producir ese efecto: no es seguramente el verdugo el que asegura las revoluciones ⁷¹⁷ (...) ".

Este final de naturaleza antijacobina, tenía un carácter polémico. Estaba dirigido contra los escaños vecinos que ocupaban los liberales de la corriente exaltada, minoritaria en el Congreso.

⁷¹⁶ Ibidem.

⁷¹⁷ D.SS. Cortes, sesión de 13 de octubre de 1820.

Después de arremeter contra las veleidades revolucionarias de los radicales, continuó el diputado su discurso añadiendo apreciaciones de enorme importancia, sobre cómo se consolidan las revoluciones:

"(...) En el estado actual de las sociedades europeas, tampoco se puede fiar en el interés que inspire la defensa de los derechos políticos; es difícil que antes de apreciar por hábito los efectos de la libertad, se arriesguen a todo trance los ciudadanos por conservar el derecho de votar en las elecciones. Es necesario crear intereses más sensibles⁷¹⁸. (...)"

Descartado del ejemplo francés el verdugo y habiendo expresado su desconfianza en que sus compatriotas estuviesen dispuestos a arriesgar su vida por la libertad y el voto, el romántico diputado adoctrinó al Congreso indicando la única opción válida para poder contar, en estos tiempos, con la adhesión de los ciudadanos:

"(...) Unirlos al nuevo sistema con vínculos más fuertes; y estos no pueden ser otros que los que nacen de la propiedad. En viendo enajenada una inmensa porción de bienes nacionales; en viendo nacer de repente un gran número de propietarios, ya podemos decir tranquilos: "tenemos

⁷¹⁸ Ibidem.

Constitución"⁷¹⁹ (...)".

El interés de este magnífico discurso, de impronta benthamista, de Martínez de la Rosa estriba en que con su teoría del interés bien entendido y la supremacía que otorgaba a la propiedad, nos está proporcionando con nitidez el contenido de los planteamientos políticos que defendían los liberales moderados. El planteamiento moderado no iba más allá de la racionalización de los monacales en términos de la prosperidad que proporciona a todos el auténtico y sagrado derecho de propiedad.

Por su parte el diputado y eclesiástico liberal Villanueva trató, sin éxito, de que la Cámara valorara si verdaderamente merecía la pena la reforma. Sus palabras fueron :

"(...) ¿Cuál es la futura utilidad de la renta de los monasterios? Menos sin duda de lo que parece a la Comisión con respecto a las dotaciones efectivas que deben anticiparse a los monjes (...)"⁷²⁰ .

Y los hechos muy pronto vendrían a confirmar la hipótesis esbozada por la perspicacia del diputado. Al menos esta es una de las posibles deducciones que se pueden inferir

⁷¹⁹ D.SS.Cortes, sesión 13 de octubre 1820

⁷²⁰ D.SS. Cortes, sesión de 21 de septiembre de 1820.

del dictamen presentado a las Cortes de la Comisión de Visitas del crédito público:

"(...) La comisión conoce y respeta las razones que movieron a las Cortes para proteger y estimular la secularización de frailes mendicantes y de las monjas; pero no puede menos de hacer presente que los bienes de los monacales, la mejor y más sana parte de la hipoteca de la Deuda pública, gravados sobre la pensión de los monjes con la que se paga a los frailes y monjas que se secularizan, se puede ya considerar como nulos para su primitivo objeto; y dentro de pocos meses, a medida que se vayan aumentando el numero de secularizados, y se vayan disminuyendo con las ventas los productos de las fincas, no alcanzarán a cubrir sus obligaciones, aunque se tome en cuenta la mortalidad de los pensionados ⁷²¹ (...) "

Cuando ya era público el fiasco financiero de la operación, las Cortes, fieles a sus prejuicios, siguieron abordando urgentes y continuas reformas del clero. El experimentado diputado Argüelles tratando de paralizar una nueva reforma del clero adujo como argumento las "urgencias" en las que estaba sumido el país -la invasión de los cien mil-, pero para dar mayor fuerza a su postura, el diputado por Asturias argumentó sobre la futilidad de la medida, ya

⁷²¹ Dictamen de la comisión de Visita del Crédito público.D.SS. Cortes extraordinarias, sesión de 14 de noviembre de 1821. La Comisión fué creada en 1811 para asegurar la suerte de los acreedores de la Nación, reconocer la deuda y pagarla.

que gracias a decretos benéficos anteriormente aprobados por las Cortes:

"(...) Se ha disminuido la influencia del clero en términos que jamás puede oprimir a la nación, y lo han reducido a que se emplee únicamente en el ejercicio de sus obligaciones religiosas. Por las disposiciones de las Cortes no ofrece la carrera eclesiástica en España los alicientes que ofrecía en algún tiempo, y que arrebatában la parte más preciosa de nuestra juventud; en el día solo emprenderán la carrera eclesiástica los que tengan verdadera vocación para ella, pues como no se proveen esas pingües prebendas(...) ni esos obispados, que más bien parecían principados, ha desaparecido el lucro que antes ofrecía. (...) Esas reformas son muy considerables y han sido hechas de un modo indirecto⁷²² que es el que corresponde a los Cuerpos legislativos en negocios de esta clase⁷²³ (...)" .

Disminuir la influencia del clero de forma que no pueda oprimir más al país era, por tanto, una de las funciones latentes de la reforma. A pesar de la valoración que hacía Argüelles sobre su alcance, la reforma no fué tan considerable. Lo que olvidó mencionar el eximio diputado Argüelles en su intervención fueron los graves efectos que

⁷²²Sobre los métodos oblicuos o indirectos de legislación propuestos por Bentham, puede verse John Dinwiddy, Bentham, Madrid, 1995.

⁷²³ Ver D.SS. Cortes, sesión 2 de febrero de 1823.

desencadenó la reforma.

Entre los perjudicados por la reforma se encontraban los campesinos, aspecto que no contemplaron quienes, como Argüelles y Martínez de la Rosa, hicieron una encendida defensa de la reforma. Según estos diputados el proyecto era beneficioso para todos; sin embargo, hubo entre los exaltados quienes a partir de una valoración más ponderada de la medida, valoraron de forma diferente sus consecuencias.

En primer término, eran plenamente conscientes de que estas reformas realizadas en nombre del pueblo miserable y para conseguir la prosperidad de la Nación podían tener, eventualmente, previsibles efectos colaterales negativos cuando se tratara de poner en práctica. Concretamente, estimaban que podían constituir un riesgo para los campesinos que trabajaban en monasterios o las propiedades vinculadas. Por esta precisa razón al discutirse, poco después de aprobada la reforma de monacales, los presupuestos de Gobernación, algunos diputados (como Cortés, Florez Estrada) presentaron una propuesta al Gobierno, solicitando dirija su atención al fomento de la agricultura o la promoción de obras públicas, para emplear jornaleros que con motivo de la reformas de los monjes iban a quedarse en el invierno sin ocupación.

La indicación fué presentada por el diputado Cortés, antes de la sanción de la ley de regulares. Iba dirigida al

gobierno para que ocupara en obras públicas los brazos que se podían quedar sin trabajo por las reformas aprobadas por las Cortes (monacales, mayorazgos), al menos hasta que los agricultores "de jornaleros pasasen a propietarios"⁷²⁴.

La propuesta que la mayoría consiguió diferir su discusión, provocó de inmediato la respuesta airada del diputado Sancho. Su meditada intervención se puede desglosar en varios apartados. En primer término empezaba dejando muy claro al Congreso, su pretensión cuando promovió el proyecto sobre los monjes:

" (...) Nosotros no vamos a disponer los bienes de una clase para dárselos a otra, porque tiene aspecto de limosna y nosotros no somos limosneros (...)".

Lo que con esta afirmación displicente estaba queriendo dejar claro era que los bienes de los monacales iban a ser para quienes estén en disposición de adquirirlos. Por tanto, como reconoció sin empacho, los jornaleros no tenían que hacerse demasiadas ilusiones, porque las reformas previstas no habían sido diseñadas, bajo ningún concepto, para convertir, de la noche a la mañana los jornaleros en propietarios.

Una vez que este asunto quedó aclarado, continuó el

⁷²⁴D.SS.Cortes sesión de 27 de septiembre de 1820.

orador señalando que no se oponía a que se destinen cantidades para algún objeto de utilidad pública. Aunque acto seguido volvió a hacer una precisión al Congreso sobre lo que, en su opinión, no consideraba que fuese de utilidad pública: " dar trabajo a nadie". Y para que no quedara al respecto la menor sombra de duda añadiría:

"(...) Que se lo busque cada uno (el trabajo) pues esto no es atribución de las Cortes (...)"

Y por último, tratando de zanjar la cuestión hizo notar que las reformas que estaban emprendiendo (como vender los monasterios y quitar las trabas que tenían los mayorazgos), favorecerían de suyo a los pobres y las personas sin trabajo por un motivo obvio y fundamental. En el caso de los monasterios la razón era, en opinión del Sr. Sancho porque:

" (...) Cuando sean de particulares ellos cuidarán de mejorar su capital (...)"

Y respecto de los mayorazgos:

"(...) El permitir que pasen a otras manos también contribuiría a hacerlos más productivos(...)"

Por su interés y lo matizado del discurso, merece la pena recoger en extenso la intervención del citado diputado:

"(...) ¿Cuál es la reforma que puede producir esos efectos? -se refiere el Sr. Sancho a dejar los jornaleros sin trabajo- ¿Es la de mayorazgos, o es la de los monjes?. (...) Cuando se suprime un monasterio, los bienes ¿han de quedar abandonados? (...), no se tendrán que ocupar en ellos algunos brazos (...), si se venden, parece que se emplearán más brazos porque cuando sean de particulares, ellos cuidarán de mejorar su capital. Respecto de los mayorazgos, ¿se les ha quitado los bienes a los que los tenían? Lo que se les ha quitado son las trabas, a fin de que puedan pasarlos a otras manos y hacerlos más productivos(...). Juzgo necesario hacer esta advertencia a fin de que no se crea que las medidas que adopta el Congreso, justamente para favorecer a los pobres, son las que han de causar su ruina, porque esto podría traer gravísimas consecuencias (...)".

Como puede fácilmente deducirse de esta réplica, al Diputado Sancho y a los partidarios de la reforma les molestaba que se utilizara la retórica de los efectos perversos para atacar su medida. No toleraban que una mejora, como a su juicio era la venta de los monacales, proyectadas como solución a varios problemas, (deuda del Estado, propiedad amortizada, atraso económico, consolidación del sistema constitucional), fuese presentada como una reforma desgraciada, que en vez de remediar esos problemas contribuía a agravarlos.

Detrás de esta vehemente defensa de la reforma de

monacales estaba, - en el mejor de los casos-, la concepción optimista ingenua en virtud de la cual si cada propietario se dedicaba a perseguir su interés egoísta, a la larga beneficiaba a otros individuos y contribuía al progreso social.

El diputado Cortés, que había expresado su preocupación sobre los efectos que las reformas podrían tener para los jornaleros, no se dejó convencer por las teorías expuestas y volvió a insistir, inútilmente, en sus planteamientos, aportando datos que lo avalaban:

"(...) Los monjes, habiendo sabido ya las medidas que se preparaban en el Congreso, no tratan de ocupar a los jornaleros, sino de conservar el dinero que tengan. Con respecto a los grandes, sucede lo mismo: y lo cierto es que ahora gastan lo menos que pueden, y no piensan en dar trabajo alguno, sino en mirar por sí mismos. Esto (..) ha sucedido ya. Yo hablo por eso (..) de que el Congreso mire por la clase de jornaleros (...) ⁷²⁵ ".

Las predicciones de Cortés y Florez Estrada se cumplieron y esos jornaleros sin trabajo ni tierras acabarían ingresando en la facción para hacer la guerra al sistema constitucional.

⁷²⁵ D.SS. Cortes, sesión 27 de septiembre de 1820.

6.5. Enfrentamientos y derrota del Gobierno.-

Sistema Constitucional y Jerarquía eclesiástica.

El proyecto de ley de monacales contó con el dictamen favorable del Gobierno y del Consejo de Estado⁷²⁶, pero el Rey fué más receptivo a las presiones en contra de la sanción del proyecto, que protagonizaban el Nuncio, la jerarquía eclesiástica⁷²⁷ y las órdenes religiosas⁷²⁸. Desde su posición diplomática, el Nuncio había asumido una defensa sin reparos de los principios ultramontanos y se atrevió a atacar a las Cortes porque traspasando el límite de su potestad secular violaba la inmunidad eclesiástica, infringía la clausura de las monjas, quería "reducir a la Iglesia a una lastimosa desnudez y al estado de vil mercenaria"⁷²⁹.

El Rey presionado por el Nuncio y la jerarquía eclesiástica se resistió, en principio a dar su sanción a la benéfica reforma que repudiaba. Pero la amenaza de un movimiento de presión popular promovido, según todos los

⁷²⁶ Al respecto puede consultarse la intervención de Palarea en D.SS. Cortes, sesión 3 de marzo de 1821.

⁷²⁷ Exposición del señor Obispo de Orense a S.M. para que no sancione el proyecto de Regulares, Orense 8 de octubre de 1820. Citado en M. Revuelta, La política religiosa de los Liberales en el siglo XIX. Trienio Constitucional, Madrid 1973.

⁷²⁸ Ver D.SS. Cortes sesión de 24 de Septiembre 1820.

⁷²⁹ Un resumen de las críticas del Nuncio en D.SS. Cortes, Memoria del habilitado de la Secretaría del Despacho de Hacienda, sesión de 7 de marzo de 1822.

indicios por el Gobierno, forzó al atemorizado monarca a sancionar la ley que, al cabo, tanto iba contribuir a la ruina del sistema constitucional. La famosa representación de la sociedad patriótica de la Cruz de Malta, pidiendo la remoción de los Ministros, dedicaba uno de sus párrafos a esta peculiar actuación:

"(...) Nosotros hemos visto el nombre de V.M comprometido por la rara conducta del ministerio en la sanción del famoso decreto de los monacales⁷³⁰ (...)".

Los miembros de la jerarquía eclesiástica consideraban la ley de monacales como un ataque a la autoridad de la Iglesia y una despojo injusto de su patrimonio. Además de nacionalizar las posesiones "sólo de la Iglesia" para hacer frente a la Deuda, atacaba a la institución porque regulaba aspectos internos relativos a la potestad y disciplina eclesiásticas.

Los liberales creyendo disponer de un poder del que carecían, despreciaron a sus adversarios, como lo prueba el desdeñoso "si el Gobierno hubiese de descender" de Argüelles. No ponderaron su debilidad ni la del movimiento revolucionario europeo, e impusieron, sin pactar con las autoridades eclesiásticas, la grave decisión. Incluso como si

⁷³⁰ Miscelánea, n° 304, 29 de diciembre 1820. Citado en su capítulo sobre La Fontana y la Cruz de Malta por Gil Novales, ob.cit.

gozaran de regalías los diputados arremetieron, públicamente contra Roma, amenazaron a los generales de las poderosas órdenes, y presionaron al Monarca para que procediese a sancionar la ley⁷³¹. La presión institucional ejercida por el Gobierno sobre el Monarca, ocasionó el enfrentamiento del Rey con su Gobierno y provocó la ruptura definitiva de la jerarquía eclesiástica con el sistema constitucional⁷³².

Antes de la aprobación de la ley, periódicos de Cataluña, Aragón, Madrid, y Zamora referían el escándalo con que las comunidades religiosas se apresuraban a deshacerse de cuanto poseían. Enajenaban, no sólo los frutos, sino "los ganados y otros enseres de bastante utilidad". El asunto fué comentado públicamente en el Congreso al objeto de poner remedio a unos desórdenes de esta naturaleza. La indicación de Flórez Estrada fue pasada a una comisión del Congreso para que propusiese una medida general para contenerlos⁷³³.

Las Cortes recibieron infinitos recursos y representaciones, solicitando la permanencia de los conventos, no sólo por parte de religiosos afectados, sino de

⁷³¹ D.SS Cortes, sesión de 12 de octubre 1820.

⁷³² Salvo tres o cuatro prelados, según M. Revuelta, el resto del episcopado cerró filas en torno al Nuncio y se solidarizó con el escrito de protesta hecho público por el Arzobispo de Valencia. M. Revuelta, op. cit. pág. 187 y sigs.

⁷³³ Ver D.SS.Cortes, sesión 12 de octubre de 1820.

particulares y corporaciones manifestando su interés⁷³⁴. De mayor gravedad fueron las acciones que emprendieron los miembros de la jerarquía eclesiástica. Recuperados los prelados de las consecuencias psicológicas del cambio y desengañados por la actuación emprendida por el Gobierno, abonadonaron su actitud general de cautela inicial o apoyo y, casi en bloque, pasaron a la ofensiva.

Aquellos prelados que desde los inicios se habían opuesto al sistema atacaron frontalmente la ley, caso de los obispos de Orihuela y Valencia. Fueron los primeros sancionados con la ocupación de temporalidades y la expulsión. Otros pusieron en duda la competencia de las Cortes para adoptar esas disposiciones legislativas sobre la Iglesia, (los obispos de Pamplona y Barcelona). La mayoría, manifestaron los inconvenientes para poner en ejecución lo resuelto sin que intervenga la Silla Apostólica⁷³⁵.

El Nuncio en su exposición a las Cortes dejó claro los motivos del descontento:

"(...) La adjudicación al Estado sin autoridad legítima

⁷³⁴Ver información al respecto en la comedia Memoria del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, D.SS.Cortes, sesión de 7 de marzo de 1821.

⁷³⁵ El encargado del despacho de la Secretaría de Gracia y Justicia citaba: obispos de Lugo, Orense, Vich, Avila, Urgel, Santiago y otros

de los bienes procedentes de las encomiendas militares, de las pensiones y beneficios asignados a la Real capilla, igualmente de las prebendas (...), la destrucción de todas las capellanías y patronatos, la abolición que se prepara de los diezmos, el despojo de los bienes de los regulares y finalmente, la declaración que se ha hecho de ser absolutamente incapaz la Iglesia de poseer en adelante, bajo cualquier título que sea bienes estables e inmuebles⁷³⁶ (...)" .

En suma, el sistema constitucional contó en los inicios con la oposición de algunos obispos y parte del clero. Pero la situación de partida cambió cuando los dirigentes liberales abordaron su política de reforma religiosa, con medidas acaso muy atinadas adoptadas sin contemplaciones. El decreto de 2 de septiembre de 1820 sobre pluralidad de beneficios, (que obligaba a los eclesiásticos a elegir uno y las rentas de los demás ingresaban en el Tesoro), y la ley de 25 de octubre de supresión de los monacales, produjeron un cambio de orientación. Estas disposiciones y la estrategia seguida para su puesta en práctica, ocasionaron la reducción del número de partidarios y el aumento de los enemigos.

Buena parte del clero regular, secular y la jerarquía eclesiástica liderados por el Nuncio, adoptaron una actitud abiertamente hostil contra un sistema que les había humillado

⁷³⁶ Consultar Memoria del habilitado de la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia, sesión de 7 de marzo de 1821.

pero no arrebatado su poder. De adversarios del sistema consitucional, a partir de esta y otras medidas se convirtieron abiertamente en su mayor enemigo. En la contienda recurrieron exposiciones, quejas, recursos, ataques verbales y también, de forma más o menos velada a la violencia, alentando la formación de partidas armadas.

La sanción de la ley de reforma de los monacales, a finales de octubre, coincidió con las últimas sesiones de la primera legislatura. Las Cortes finalizaron sus actuaciones envueltas en una campaña contra el sistema, debida al profundo malestar de los eclesiásticos, y con el aviso del Monarca anunciando que no acudiría al acto de cierre de las Cortes de la primera legislatura. De esta manera entendió el Monarca que debía hacer pública su ruptura formal con el sistema constitucional. Los diputados tan dados a los simbolismos y la teatralidad, aceptaron mal el gesto del Monarca hacia la Representación nacional:

" (...) Porque puede prestar armas a la suspicacia y la maledicencia⁷³⁷ (...)".

De ahí que acordara el Congreso dirigir una exposición al Monarca respetuosa y enérgica en la que mostraban sus sentimientos:

⁷³⁷ D.SS.Cortes, Actas sesiones secretas, sesión de 7 de noviembre de 1820.

"(..) No pueden menos de mirar con dolor, que en la primera legislatura, cuando más se necesita mostrar a la Nación y a la Europa la estrecha alianza entre V.M y las Cortes; cuando se ven aparecer en algunos puntos de la Península síntomas de descontento de los malvados, (..) se dé pretexto a los enemigos del Estado para suponer cierta falta de intimidad entre los principales poderes que lo constituyen. (..) No basta Señor que exista la unión; es necesario que aparezca ⁷³⁸ (...)" .

Después de la inevitable frase hecha de Martínez de la Rosa, hicieron los diputados en la exposición una mención al irresistible espíritu del siglo, y los ojos de Europa como pretextos para hacer una poética llamada al orden:

"(...) La experiencia ha mostrado que no es posible hacer retroceder a una Nación, ni contrarrestar el espíritu del siglo. Vuestra majestad lo sabe; V.M lo ha tocado en su propia Nación; V.M lo ve confirmado en el estado actual de Europa. Y puesto que toda ella tiene fijos los ojos en España; puesto que le hemos dado el singular ejemplo de haber restablecido el régimen legal, sin convulsiones ni trastornos, no permita V.M. que aparezca de lejos ni la más leve nube que amenace turbar un horizonte tan hermoso; antes por el contrario, dígnese dar V.M una nueva prueba de unión

⁷³⁸ D.SS. Cortes, Actas secretas, sesión de 7 de noviembre de 1820.

y armonía con sus representantes⁷³⁹ (...)".

La decisión simbólica escogida por el Monarca tenía además un ingrediente táctico, de esta forma eludía dar respuesta a la demanda de convocatoria inmediata de Cortes Extraordinarias.

Monarca contra el sistema constitucional.

Cuando cerraron las Cortes comenzaron en distintos lugares del país las conspiraciones. En medio de esta atmósfera el Monarca decidió poner a prueba la fortaleza del sistema. Actuó abiertamente contra la Constitución, procediendo mediante una carta autógrafa y sin el visto bueno del Secretario del Despacho, al nombramiento inconstitucional del Capitán General de Castilla la Nueva (Carvajal sustituye a Vigodet). La actuación inconstitucional del Rey, contra lo prescrito en el art.225, provocó un grave enfrentamiento entre la Diputación permanente de las Cortes y el Monarca.

La importancia de ese reducto de la Representación, que era la Diputación permanente se puso de manifiesto en esta crisis. Su cometido era velar sobre la observancia del

⁷³⁹ Ibidem,

Código (art. 160). El Presidente consideró que lo decidido por el Monarca constituía un ataque al Código y comenzó sus actuaciones para:

"(..) atender a la conservación del Estado (..) y con la decisión más firme por sostener a todo trance la Constitución ⁷⁴⁰ (...)" .

La Diputación decidió actuar, elevando al Monarca distintas Exposiciones. En la primera se abstenía, por respeto, de hacer al Rey las reflexiones "que le excita este extraordinario suceso, contrario a un artículo expreso de la Constitución", sin embargo no dudó en consignar una clara advertencia:

" (..) No puede menos la Diputación de hacer presente a V.M. que respetando su sagrada Persona, declarada inviolable por la misma Constitución, no mirará con indiferencia que se infrinja de manera alguna esta ley fundamental(..) sin poner en práctica todo el lleno de sus legítimas facultades (art.162), para cumplir con la primera de sus obligaciones que es salvar el Estado.⁷⁴¹ (...)"

Entre esas legítimas facultades reguladas por el apartado segundo del mencionado artículo figuraba la de

⁷⁴⁰ D.SS. Cortes, Actas de las Sesiones Secretas y de las Diputaciones permanentes, sesión de 16 de noviembre de 1820.

⁷⁴¹ Ibidem, Sesión del día 16 de noviembre de 1820.

"tomar las medidas que estime convenientes a fin de asegurar la inhabilidad del Rey". El presidente de la Diputación permanente y uno de los artífices del Código, el diputado por Extremadura Muñoz Torrero, no se anduvo por las ramas.

La Diputación se constituyó en sesión permanente. Muy pronto obtuvo apoyos dentro y fuera de las Cortes. Para apaciguar los ánimos decidieron celebrar sesión pública, según consta en las Actas. Los acontecimientos, se sucedieron sobre poco más o menos así: al edificio de las Cortes se acercaron oficiales del ejército, ministros del santuario, ciudadanos pacíficos y honrados, y en suma, un inmenso pueblo, que pedían a grandes gritos la convocación de Cortes extraordinarias. Asimismo, la guarnición se puso sobre las armas, la Milicia Nacional Local había volado a la defensa de los justos derechos del pueblo y del Código. Para concluir señalando que, habida cuenta la creciente efervescencia de los ciudadanos que clamaban por Cortes extraordinarias, la Diputación resolvió franquear al pueblo la entrada del salón de sus sesiones para enterarle de todo lo ocurrido⁷⁴².

La Diputación permanente elevó una segunda exposición al Rey, en la cual sugería la conveniencia de su regreso al seno de este heroico pueblo; rogaba que alejara de sí individuos que abusaban de su Real persona y que no cesaban en sus maquinaciones hasta precipitar al trono y a la Nación en un

⁷⁴² Ver Ibidem, sesión 16 de noviembre de 1820, que refiere en extenso lo ocurrido.

abismo de males, y finalizaba haciendo otro nuevo aviso:

" (...)El funesto recuerdo de estos últimos años ha hecho a esta Nación sumamente celosa de sus derechos cuya pérdida le costó tantas lágrimas; (...) cualquiera que trate de confundir el año 20 con el de 14 quiere la desolación de la Patria y la ruina de V.M.(...). Preste su confianza a las autoridades designadas por la Constitución y no a consejeros sospechosos y convocara Cortes extraordinarias⁷⁴³ (...)" .

Insistió con una tercera exponiendo al Monarca los motivos en base a los cuales la Diputación permanente podía fundar la inhabilitación:

" (...) Se supone dominado el ánimo de V.M por personas enemigas del bien público, hasta el punto de juzgarle sin la libertad precisa para gobernar a una gran Nación que se halla en circunstancias tan extraordinarias. De aquí nacen necesariamente las voces y las reclamaciones a la Diputación, para que medite si ha llegado el caso segundo del art. 162. de la Constitución. Esta idea, Señor, que estremece a la Diputación, la indica únicamente para hacer conocer a V.M. toda la extensión de los peligros que existen ⁷⁴⁴ (...)" .

⁷⁴³ Ibidem. La Diputación permanente presidida por Muñoz Torrero, estaba bajo el influjo de la experiencia de 1814.

⁷⁴⁴ Ibidem, sesión de 17 de noviembre de 1820.

Pasado el enfrentamiento, la Diputación permanente volvió a dirigir una nueva exposición al Monarca, movida por "el deseo de fortalecer su Real ánimo contra las sugerencias de los enemigos de la Constitución, la Nación y el Rey" . Consituía una especie de inventario de los agravios que, a la postre, "habían debilitado en gran manera la autoridad constitucional del Rey y aterrado a los enemigos de la Constitución"⁷⁴⁵ :

"(...) los esfuerzos empleados para impedir la sanción de las justas reformas dictadas por la imperiosa necesidad del bien público (se refiere al decreto de reforma de los regulares); la ausencias de V.M de la capital, la especie de desaire que sufrieron las Cortes (...) al mismo tiempo de cerrar sus sesiones; su permanencia en el Escorial; el modo de dar el mando militar de esta provincia a una persona poco acreedora a la confianza de los buenos; el aislamiento en que se hallaba colocado V.M respecto de sus Ministros y de las demás autoridades constitucionales; las oscuras maquinaciones de los enemigos de las nuevas instituciones para corromper la opinión y asalariar facciosos que trastornasen el Estado; los síntomas de sedición que se descubrían en varios puntos de la Península, y sobre todo, el no ser imposible sorprender el ánimo de V.M. y la memoria aciaga de los seis últimos años de abatimientos, desgracias y de miserias "⁷⁴⁶ (...)" .

⁷⁴⁵ Actas Diputación permanente, sesión de 25 de noviembre de 1820.

⁷⁴⁶ Ibidem.

La reconfortante exposición, de carácter polémico, tiene un interés añadido. Contenía la definición oficial de la situación que los moderados estaban interesados en difundir en ese momento. No deja de ser significativa, en este sentido, la percepción que sobre la real persona transmitían al Monarca constitucional:

"(...) Las Naciones, Señor, no perecen pero los tronos caen, y la amarga experiencia habrá convencido a V.M. que los prestigios que arrastraron en el año 14 el pueblo español a una servidumbre vergonzosa desaparecieron ya para siempre⁷⁴⁷ (...)".

No sólo creían, (o deseaban hacer creer), que el carisma del Monarca se había desvanecido, sino que además tachaban de insensatos a aquellos que fundaban sus esperanzas en las potencias extranjeras para separar al Rey de sus pueblos:

"(...) V.M sabe cuán poco ha pesado el Gabinete español en la balanza de las transacciones políticas durante los seis últimos años, y la memoria de lo pasado y el conocimiento de la situación violenta en que se encuentra toda la Europa, deben demostrar a V.M que el único apoyo sólido del trono que ocupa es el amor de sus pueblos; que los Gabinetes extranjeros obrarán siempre sin cuidarse más que de

⁷⁴⁷ Ibidem.

sus propios intereses⁷⁴⁸ (...) "

Otras instituciones subalternas (Argüelles), como la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Madrid, elevaron exposiciones destempladas al Monarca :

" (...) sin una demostración pública de adhesión a las nuevas instituciones (...) la confianza no se puede restablecer (...) Esta demostración (...) no puede ser otra que el suspirado regreso de V.M. (...) y la inmediata convocación de Cortes extraordinarias ⁷⁴⁹ (...) ".

Sociedades patrióticas contra el Gobierno.-

La Comisión especial creada por las Cortes, para informar sobre el estado político de la Nación, admitía que la sanción del decreto de regulares, el cierre de las sesiones del Congreso, la exposición del obispo de Valencia y la marcha del Rey al Escorial constituyeron ocasiones favorables para los ataques:

"(...) Este movimiento de la capital se auxilió con la explosión de las tramas que se urdían en las provincias; y a la rebelión del partidario Morales acompañaron los escándalos de Valencia por su arzobispo, el robo de la correspondencia

⁷⁴⁸ Ibidem.

⁷⁴⁹ Actas Diputación permanente, sesión del 16 de noviembre de 1820.

junto a Vitoria, y otras muchas señales de menos importancia que manifestaban la inteligencia que había entre los conspiradores (...) Los malvados tomaban al Rey por pretexto para sus maquinaciones y se alentaron con la impunidad por no haberse puesto en práctica todos los medios que la diputación permanente propuso en sus enérgicas exposiciones ⁷⁵⁰ (...)"..

El sesgado informe era importante no sólo por lo que decía, sino por lo que silenciaba. No mencionaba la serie de acontecimientos desencadenados por el bando del jefe político de Madrid, notificando el cese de las reuniones públicas existentes sin su consentimiento⁷⁵¹. Tampoco aludía a la representación contra el Gobierno, de los ciudadanos de la tertulia de la Cruz de Malta. La importancia de la exposición es comparable a las anteriormente mencionadas de la Diputación permanente de las Cortes.

El escrito comenzaba citando la facultad que el Código atribuía al Monarca, de nombrar y separar libremente a los Secretarios del Despacho (art.171,16), y finalizaba "suplicando" en honor a la nación Española, "se digne relevarles lo más antes posible, en nombre de la salud del Estado". Y entre la cita del Código y la súplica, vertían sus

⁷⁵⁰ Informe de la Comisión Especial nombrada para examinar el Estado político de la Nación. D.SS. Cortes, sesión de 20 de marzo de 1820.

⁷⁵¹ Gil Novales, ob. cit.p. 583.

anónimos autores denuncias: la inmensa carga del erario con los cesantes, la corrupción (sueldos crecidos correspondientes a los seis años últimos), lenidad de los jueces y, en fin, "las repetidas farsas con las que se ha comprometido a la Nación", entre las que citaba la de disolución del ejército bajo sospechas de república, la persecución de Riego, apremios por el cobro de impuestos, la rara conducta del ministerio en la sanción del decreto de monacales, y la última farsa del 16 de noviembre haciendo volver al Monarca a la Corte ⁷⁵².

Para valorar la representación cuya paternidad es discutible, seguramente haya que distinguir entre su contenido de verdad y la utilidad política. Por su contenido era una crítica indiscreta y despiadada al Gobierno, de parte de gentes bien informadas, con el objetivo de pedir al Monarca su remoción. La exposición de la Cruz de Malta expresaba, en opinión de Gil Novales "el descontento, mejor el desencanto de los reunidos en Malta con sus Ministros".

Pero si la analizamos con algún detenimiento, y conectamos su aparición con la situación que la produce, no creemos disparatada la conjetura de que la exposición, en apariencia exaltada, (con reivindicación de Riego incluida), era obra del entorno de los partidarios del Monarca, los "aterrados enemigos del sistema constitucional". Amenazado el

⁷⁵² El Miscelánea, 304, 29 de diciembre de 1820. Recogida por Gil Novales, en ob. cit. (1975), pág. 587.

Rey por la Diputación permantente con la estremecedora inhabilitación, decidieron pasar a la ofensiva. Pero para no debilitar la autoridad real cambiaron de estratagema y decidieron la explotación perversa del conflicto existente en el liberalismo. Es el papel más adecuado, por cierto, de los en la concepción de estos hombres podía desempeñar la oposición. Estar en la oposición, significaba contribuir al fortalecimiento del poder.

Sustentar nuestra conjetura sobre su filiación política después de efectuar una comparación de los agravios incluidos en la exposición de la Diputación permanente de las Cortes, con los vertidos en la exposición de la Cruz de Malta. Existe entre ambas una sospechosa coincidencia temática.

En principio, el simple hecho de dirigir los ciudadanos al Rey la representación significaba un varapalo para quienes habían afirmado no hacía mucho que los prestigios que arrastraron al pueblo en el 1814 hacia el Monarca habían desaparecido ya, para siempre.

En relación a los contenidos, la correspondencia que, eventualmente, puede establecerse entre ambas representaciones es más que notable. Pueden ser analizadas globalmente como réplica motivada la una de la otra. Al examinarlas con algún detenimiento se comprueba que no hay asunto importante, tratado en las exposiciones de la Diputación permanente de las Cortes durante el conflicto con

el Monarca, que no tenga la correspondiente respuesta en la exposición de la Cruz de Malta.

Así, la conducta inconstitucional del monarca (el modo de dar el mando de capitán general); la contraponían con la "inconstitucional y tortuosa" conducta de los ministros con su política favoritos, despojo tiránico de los empleados, destierros arbitrarios y corrupción.

Al cargo de aislamiento de las autoridades constitucionales dirigido contra el Monarca; respondían con que los ministros estaban alejados del pueblo: desatendían las quejas sobre contribuciones de labradores, y daban empleo en comisiones y destinos a extranjeros y advenedizos que jamás podrán sostener nuestros derechos.

La acusación de que el Monarca estaba detrás de las oscuras maquinaciones y los síntomas de sedición; la atacaban señalando la rara conducta del ministerio en la sanción del decreto de monacales y la última farsa del 16 de noviembre, en la que "infinitud de medidas extraordinarias nos hicieron creer en V.M alguna novedad", y el abuso del Secretario de Gobernación de la voz la patria está en peligro.

Al reproche sobre lo poco que había pesado el gabinete español durante los "seis años"; contestaban lamentando la apática indiferencia que han observado los ministros ante movimientos políticos y militares de otras naciones, "como si

el sistema actual no necesitase para su conservación otro apoyo que nuestra firme decisión".

La referencia a la memoria de los años de abatimiento y desgracia que hacía la Diputación; correspondían señalando "al pasado desorden hemos visto sustituir otro mayor, con perjuicio del crédito del actual sistema"

Al comentario sobre la autoridad del Rey debilitada, y el enemigo del sistema aterrado; contraponían los de La Cruz la indiferencia ministerial, mientras los desórdenes y los delincuentes impunes animan un cierto fuego.

Y por último, aunque no lo menos importante, la Diputación permanente indicó al Monarca que el único apoyo sólido de las instituciones era el amor de los pueblos. Los firmantes de la exposición de la Cruz de Malta finalizaban su escrito con la fórmula:

"(...) somos verdaderamente libres; sostendremos con decoro nuestra opinión respecto a los ministros, mantendremos el orden como hasta aquí, obedeceremos las leyes y a V.M.⁷⁵³ (...)"

En conclusión, existen evidencias suficientes como para

⁷⁵³ Miscelánea, n° 304, 29 de diciembre de 1820. Mi planteamiento matiza el que sostiene sobre la exposición Gil Novales, quien extrañamente afirma de que "ni siquiera se atreve con las Cortes moderadas". ob. cit. 575 y sigs.

considerar más que sospechosa tanta coincidencia. De ahí que nos sintamos inclinados a considerar que la "exposición reconfortante de la Diputación permanente al Monarca", de 23 de noviembre, y la que apareció el 28 de "diciembre en la Cruz de Malta", constituían el fiel reflejo del conflicto real que existía entre el Gobierno y las Cortes moderadas (representadas interinamente por su Diputación permanente) contra el Monarca y sus sospechosos consejeros.

Objetivamente, y al margen de quienes pudieran haber sido los verdaderos autores del controvertido papel, la exposición atribuida a los exaltados benefició al Rey. La autoridad constitucional del Monarca, salió fortalecida a costa de los ministros.

C A P I T U L O 7

Capítulo 7. Elecciones de 1821: entre la la reacción y la subversión.-

7.1. La moderación en crisis.-

Las Memorias sobre el estado político de la Nación que el Gobierno debía presentar al comienzo de las sesiones ordinarias de las Cortes, fueron leídas por los habilitados para las Secretarías del Despacho⁷⁵⁴. No pudieron leerlas los miembros del Gobierno porque Fernando VII había decidido su destitución ⁷⁵⁵, coincidiendo con la apertura solemne de las Cortes ⁷⁵⁶. De esta manera ponía fin el Monarca a la larga crisis iniciada en noviembre, con motivo de la ley de reforma de los regulares.

El Rey aprovechó su protocolario discurso al Congreso

⁷⁵⁴ Salvo la del Secretario del Despacho de Marina, Juan Jabat, único ministro no destituido. Ver D.SS.Cortes, sesión de 11 de marzo de 1821.

⁷⁵⁵Sobre los decretos de exoneración, habilitaciones y nombramientos interino, ver D.SS Cortes, Actas de Sesiones secretas de las Cortes ordinarias. Segunda legislatura. Sesión 2 de marzo 1821; y D.SS. Cortes, sesión de 3 de marzo de 1821.

⁷⁵⁶Se mandó leer el oficio del Srio Marina (Juan Jabat): "El Rey se ha servido: He tenido por conveniente exonerar de las respectivas Secretarías del Despacho, a D. Evaristo Perez de Castro (Estado), a D. Agustín Argüelles (Gobernación), a D. Ramon Gil de la Cuadra (Ultramar), a D. Manuel García Herreros (Gracia y Justicia), a D. Jose Canga Argüelles (Hacienda) y a D. Cayetano Valdés (Guerra). Ver D.SS.Cortes, sesión 3 de marzo de 1821.

para expresar públicamente, entre conspiraciones⁷⁵⁷ y resoluciones de invasión⁷⁵⁸, su repulsa hacia el Gobierno que acababa de cesar. En su mensaje de apertura denunció la falta de energía y vigor del poder ejecutivo, haciendo responsable a sus ministros de los insultos y desacatos⁷⁵⁹ cometidos contra su dignidad y decoro. Descuidando las formas, pero haciendo uso de sus facultades constitucionales, el Rey se desquitaba de la presión y agravios recibidos.

El origen de la grave crisis de Gobierno radicaba en el enfrentamiento del Monarca con la política de sus Secretarios del Despacho⁷⁶⁰. El Rey intentó diluir la crisis en un

⁷⁵⁷ Hasta el propio Martínez de la Rosa, de natural imperturbable, estaba dispuesto a admitirlo: "entre tantos motivos de pesar y de desconsuelo como deben tener los amantes de la libertad en estos días críticos en que se ven anuncios terribles de que los enemigos del orden, ufanos con la impunidad prosperan y amenazan". Ver D.SS.Cortes, sesión 3 de marzo de 1821.

⁷⁵⁸ Era pública la resolución tomada en Troppeau y continuada en Laibach por los soberanos de Austria, Prusia y Rusia de intervenir en la mudanza del Reino de las Dos-Sicilias.

⁷⁵⁹ El Rey fué insultado a la vuelta del Escorial, el 16 de noviembre de 1820; y se responsabilizaba a los liberales de los sospechosos insultos en la plazuela del Palacio. Son de interés los comentarios que al respecto elaboraban los absolutistas en panfletos finalizado el régimen. Cfr. Apología del Benéfico Sistema, Madrid, 1823.

⁷⁶⁰ El diputado por Murcia, Palarea, responsabilizaba de ello a los consejeros privados: "La Constitución señala a S.M un Consejo de Estado, de cuyas luces puede valerse en los casos arduos, y unos Ministros con quienes poder consultar también; y sin embargo, hemos visto contrariadas algunas leyes que ambos Consejos, es decir el de Estado y el de Ministros habían aprobado. ¿Y qué significa, que demuestra esto? Que hay consejeros secretos y que habrán tenido influencia en la resolución tomada en el día de ayer". Ver D.SS.Cortes, sesión 3 marzo 1821.

problema constitucional, mediante el ardíd de solicitar a las Cortes le propusieran los nuevos ministros. Aunque no del todo, el Monarca consiguió que las Cortes debatieran como problema: ¿pueden y deben las Cortes designar, a instancia del Rey, a los miembros del Gobierno?. De esta forma el Monarca y sus consejeros intentaron distraer la atención de los diputados y la opinión pública del grave problema de fondo.

Los diputados de la mayoría no se sintieron incómodos con el planteamiento dado al debate ⁷⁶¹. Y disponiendo de algún tiempo para preparar la sesión, abordaron la destitución de los ministros con discursos medidos y razonados. Formalmente la sesión giró en torno al oficio que, a través del Secretario del Despacho de Marina, remitió el Rey a las Cortes :

"(...) Queriendo dar un testimonio irrefragable de la sinceridad y rectitud de mis intenciones, y ansioso de que cooperen conmigo a hacer guardar la Constitución en toda la Monarquía personas de ilustración (...) he resuelto dirigirme a las Cortes (...) y valerme de sus luces y su celo para acertar en la nueva elección de Secretarios de Despacho(...)

⁷⁶¹ Aprobada la indicación de Romero Alpuente, con la oposición del Conde de Toreno, (que hacía de portavoz de la mayoría), acudieron a las Cortes de los ex-Secretarios del Despacho para ilustrar sobre el estado de la Nación. Dijeron que nada podían contestar. Ver D.SS.Cortes sesión extraordinaria de 4 de marzo de 1821.

Sé que esta prerrogativa es mía; pero también conozco que el ejercicio de ella no se opone que las Cortes me (...) designen las personas que más merezcan la confianza pública⁷⁶² (...)" .

El problema planteado dió lugar a que el Congreso declarara sesión permanente y sus señorías elaboraran interesantes reflexiones sobre la interpretación posible de la Constitución en orden a las relaciones Monarca, Gobierno y Cortes. Intervino el Conde de Toreno, en nombre de la mayoría. Fijó la cuestión y ofreció su dictamen sobre si las Cortes podían y, en su caso, debían ilustrar a S.M respecto de los Secretarios de Despacho que deben reemplazar a los que acababan de ser exonerados. Comenzó especulando sobre el problema desde la perspectiva constitucional:

"(...) A las Cortes no toca por atribución ilustrar en esta materia a S.M.: sólo les toca examinar su conducta y sus providencias y aprobarlas o atacarlas oficialmente ⁷⁶³ (...)" .

Recurriendo a los usos parlamentarios vigentes en otros países y la indispensable colaboración entre los poderes manifestó el modo en que debía haber procedido el Monarca constitucional:

⁷⁶²Ver D.SS.Cortes, sesión 3 de marzo de 1820.

⁷⁶³ Ibidem.

"(...)Lo que se hace y se ha hecho en todos los países en que hay Cuerpo legislativo, es que para variar el Ministerio y nombrar otro que le suceda se cuenta con el dicho Cuerpo; porque aunque es cierto que en este género de gobierno cada poder tiene sus facultades y atribuciones particulares, es preciso que la legislativa y ejecutiva se entiendan mutuamente, pues sería imposible llevar a efecto las providencias si no obrasen de acuerdo como también lo sería en cuanto al poder legislativo, si sin contar con el ejecutivo diese una ley; (...) Lo mismo nos sucederá cuando un ministro no cuente con la mayoría del Cuerpo legislativo: es preciso que deje el Ministerio⁷⁶⁴ (...)".

Finalizaba su reflexión teórica destacando que el artificio maravilloso de este sistema se iba estableciendo por toda la Europa, a pesar de todos los obstáculos, como un torrente que todo lo arrastra, porque éste era "el espíritu del siglo".

Después de su digresión, en abstracto, abordó el Conde de Toreno el asunto concreto. Habló de la unión existente entre el Gobierno y las Cortes, del momento procesal oportuno para plantear la cuestión de confianza del Gobierno ante las Cortes y concluyó, a la vista de lo que no se había actuado,

⁷⁶⁴ Ibidem. Las agitaciones de diciembre harían modificar al Conde de Toreno su interpretación pasando a defender la facultad del Rey de nombrar libremente a sus ministros, prescindiendo de las Cortes. Ver D.SS.Cortes extraordinarias, sesión 2 febrero de 1822.

formulando su opinión negativa al preciso encargo del Monarca, ateniéndose al tenor literal de la Constitución :

" (...) El Ministerio pasado había tenido hasta ahora la confianza de la Nación, teniendo además una mayoría constante en el Cuerpo legislativo; y para una separación hecha con arreglo al espíritu de las nuevas instituciones era preciso haberse entendido con el Congreso. (...) Era la ocasión en esta reunión de Cortes al manifestar el estado de la Nación, de saber si merecían la misma confianza, o se habían hecho indignos de ella. Esto se hubiera mostrado en las primeras sesiones, y por las votaciones hubiéramos visto si habían de continuar o no. Así, que no habiendo los consejeros de S.M. tenido a bien consultar a este Cuerpo legislativo, (...) para saber si podían contar con la mayoría de ellos, las Cortes no deben contestar a este oficio sino con arreglo a la Constitución ⁷⁶⁵ (...)".

Aprovechó Toreno la oportunidad para denigrar a los consejeros privados del Monarca, los mismos que habían conducido al Trono al borde del precipio en estos doce años⁷⁶⁶, porque estaban obligando decir a las Cortes que los Secretarios del Despacho que merecían más la confianza de la

⁷⁶⁵ Ibidem.

⁷⁶⁶El diputado Giraldo señaló que en esta discusión veía : "un lazo tendido al Rey y a las Cortes por los intrigantes consejeros que seducen el justificado ánimo de S.M. (...) Creyendo que los diputados, por la pueril ambición de tener parte en el nombramiento de Secretarios de Estado, darían el paso falso de mezclarse en este punto". Ibidem.

Nación eran los mismos que había separado el Monarca de su lado:

"(...) Yo no veo en la separación de los Ministros más que un sistema combinado desde la separación de las Cortes. La Nación yacía como muerta hace un año, y por la restauración política fueron llamados por la opinión pública estos hombres que tantas pruebas habían dado de adhesión a la Real persona y a toda la Nación. Al principio de la revolución se creía que habría grandes desórdenes: han visto que no, sino que el sistema se consolida y al ver que con el decreto de monacales más y más se consolidaba, no ha habido desde entonces más que una serie de intrigas para destruir este sistema y envolver hasta la sagrada persona del Rey⁷⁶⁷ (...).".

Después de encomiar la unión del Gobierno depuesto con las Cortes dedicó unas palabras a la confusa y equívoca trama conspiratoria⁷⁶⁸, y el recurso de los enemigos del sistema al juego de los agentes dobles, que había venido operando desde el cierre de las sesiones de la legislatura:

⁷⁶⁷Ibidem.

⁷⁶⁸Sobre esto el acuerdo era unánime, Romero Alpuente, llegó a afirmar: "El paso dado por S.M. con los Ministros es el más agradable que han podido recibir los enemigos del sistema, porque es contra el sistema mismo. (...) Esos malvados (...) abusando de la moderación española, creen (...) que porque el Rey es sagrado e inviolable en su persona, (...) pueden hacer por su medio cuanto se les antoje. Ibidem.

" (...)Se les ha visto durante estos tres meses, ya envolviéndose bajo la máscara de la exaltación liberal, ya disfrazados de otros mil modos, atacar el actual sistema(...). Todos sabemos las conspiraciones que en estos tres meses han estado urdiendo; todos sabemos que la trama está clara, que tiene relaciones exteriores e interiores; todos sabemos que existen documentos por donde se prueba que los insultos hechos a la persona del Rey viene de la misma mano, y ninguna ha venido de personas adictas al sistema constitucional⁷⁶⁹ (...)."

Para finalizar su intervención aludió a los desórdenes y atentados recientes en Francia, como muestra de que también tenían puntos sensibles los regímenes que contaban con dos Cámaras:

"(...) Yo veo que otras naciones, aun aquellas en donde se dice que la Constitución da más garantías al poder Real con la división de las Cámaras, (...) ha habido más ataques a la autoridad Real que en España, ¿No vemos en la vecina Francia (...) el asesinato horrible cometido contra una persona de su augusta familia? ¿No vemos las calles de París durante varios días en junio convertidas en un campo de batalla ?¿ No vemos la conspiración de agosto?⁷⁷⁰ (...)" .

⁷⁶⁹ Ibidem.

⁷⁷⁰ Ibidem.

De manera discreta, el diputado por Extremadura, Calatrava, postuló una interpretación distinta de la realizada por Toreno sobre si las Cortes podían cooperar con el Monarca en el nombramiento de los Secretarios del Despacho. Su dictamen, basado en una lectura rigurosa de los preceptos de la Constitución y fundado en una escueta consideración política fué contundente:

"(...)Creo que conviene tener presente que la Constitución prohíbe a S.M (...) renunciar a ninguna de sus prerrogativas (...) artículo 172 (...) en la tercera restricción (...), la Constitución le prohíbe cederla en obsequio de las Cortes (...) El Congreso nacional no debe tener influencia alguna en el poder ejecutivo pues de lo contrario se turbaría indudablemente el orden⁷⁷¹ (...)".

Referido al segundo punto ¿deberían hacerlo las Cortes aunque pudieran? contestó este interrogante sirviéndose de dos argumentos, el uno constitucional:

"(...)Creo que no (...) de la designación de personas hechas por las Cortes con violación de todos los principios constitucionales (resultaría) que las Cortes serían responsable a la opinión pública, si estas personas no correspondían (...) ¿De qué modo podría el Congreso convenir

⁷⁷¹ Ibidem.

a los Secretarios de Estado de sus desaciertos?⁷⁷² (...)".

Y el otro, de carácter político, en virtud del cual sostenía que si las Cortes accedieran al requerimiento del Rey estaban legitimando, implícitamente, las destituciones realizadas por el Monarca sin su consentimiento:

"(..) Pero por otra parte, (y esta es la consideración más importante para mí) la designación de personas hecha por las Cortes, consiguiente a esta indicación, ¿ no sería una aprobación tácita de la remoción que S.M. nos ha participado, y ha hecho sin habernos pedido consejo para ella?. Creo que sí, y estoy muy distante de pensar que convenga que las Cortes den esta aprobación virtual (...). Creo que al decoro de las Cortes y a la opinión nacional conviene que éstas no hagan semejante designación.⁷⁷³ (...)".

En forma parecida a lo manifestado por Toreno, expresó su preocupación por las tramas que amenazaban el sistema, indicando la conveniencia de que los ministros acudiesen al Congreso a informar:

"(...) Se ha dicho que hay graves males que amenazan la existencia de la Nación , de que son seguro anuncio los ultrajes y desacatos cometidos contra la sagrada persona del

⁷⁷²Ibidem.

⁷⁷³Ibidem.

Rey. (...) Las Cortes deben tomar las providencias más oportunas para evitar que se repitan estos excesos (...) los malévolos no son esos anarquistas que dice el Sr. Cañedo (...) esos son hombres que quieren como nosotros el bien y la felicidad de su Patria, aunque con un poco más de exaltación (...) Es menester saber los ocultos resortes que han movido estos sucesos y estas noticias solo puede tenerlas el Congreso por medio del Ministerio⁷⁷⁴ (...).".

Los liberales más radicales del Congreso, que percibían el cese como muestra del fracaso de la estrategia moderada, consiguieron la comparecencia de los ex-ministros; que como particulares decidieron que nada tenían que decir:

" (...) Es preciso llamar a los ex-ministros (...) quieren poner al Rey en el borde del precipicio, abusando de la moderación española, (...) porque el Rey es sagrado e inviolable en su persona, creen poder hacer por su medio cuanto se les antoje. (...) En un tiempo en que ese mismo Ministerio nos había de revelar todo cuanto había oculto, (...) ¿Cuál es el resultado de la deposición de estos Ministros? Dejar a las Cortes sin acción; lo mismo que cerrarlas: ha sido abrirlas con una mano para cerrarlas con otra. (...) Que no tenemos ministerio, que la Constitución está infringida en lo más sagrado, en el Ministerio, que es

⁷⁷⁴ Los ex-ministros llamados al Congreso comparecieron y decidieron, como particulares, no informar. Ibidem.

una de las piedras angulares de la Constitución misma⁷⁷⁵ (...).".

Por su parte el diputado radical Moreno Guerra encuadró el episodio en la trama conspiratoria que envolvía a la Nación, una parte de la estrategia utilizada por los enemigos del sistema constitucional para debilitarlo:

"(...) Estamos en una crisis violenta, en una lucha entre la libertad y la tiranía; y, según noticias, parece que los ejércitos de Austria caminan ya sobre el Garellano por haber adoptado nuestra Constitución. Por consiguiente se va a hacer la guerra a España (...) a nuestra Constitución (...) debemos prevenirnos (...). La Constitución española se dice que es incompatible con la seguridad de los Tronos. Esta misma es la que el año 12 se publicó con pompa y majestad sobre las orillas del Neva, y entonces se nos alababa porque se nos necesitaba. (...) El año 12 todos los Príncipes legítimos de Europa estaban sujetos a un maestro de escuela, que los dirigía con una caña y los hacía marchar de parte a parte, y entrar en enlaces y casamientos con sus primas (...) y este maestro el año 20 está cerrado en Santa Elena, y está encerrado por la Constitución española (...)

(...) Las conspiraciones se han sucedido unas a otras desde que se cerraron aquellas puertas en el mes de noviembre. Hay ramificaciones: vengo de Andalucía y sé que la causa seguida en Cádiz a los asesinos del 10 de Marzo han

⁷⁷⁵ Ver intervención de Romero Alpuente en D.SS. Cortes. sesión 3 marzo de 1821.

declarado algunos que había ramificaciones en Extremadura. (...) No debemos por un exceso de delicadeza, dejar perder la Nación. (...) Repito que la libertad y la tiranía están en guerra (...) Amante de la Constitución quiero que cada poder conserve su decoro y sus derechos. S.M. tiene su Consejo de Estado, que propondrá al que le parezca; y si los Ministros que nombre tienen la confianza de la Nación y del Congreso, muy bueno; y si no, el Congreso usará de sus facultades en este punto, acusando a los ministros, exigiéndoles responsabilidad⁷⁷⁶ (...).".

Las Cortes acataron el nuevo Gobierno nombrado por el Monarca con auxilio del Consejo de Estado. Pero formalmente quisieron hacer patente su constitucional desagrado proponiendo al Rey, como veremos, los Secretarios del despacho recién cesados, para cubrir las plazas vacantes existentes en el Consejo de Estado.

Aunque formalmente evitaran intervenir en la designación de los ministros⁷⁷⁷, avisaron de las eventuales dificultades de un Gobierno sin apoyos⁷⁷⁸. Se limitaron, por tanto, a

⁷⁷⁶ Ibidem.

⁷⁷⁷ Segundo Gobierno (5 de marzo 1821-28 febrero 1822): Estado: E.Bardají; Gobernación: M.Baldemoro pronto sustituido por R.Feliú; Ultramar: R.Feliú, sustituido por A. Pelegrín; Gracia y Justicia: V.Cano Manuel; Hacienda: A.Barata; Guerra: T. Moreno Daoiz; Marina : F.Paula y Escudero.

⁷⁷⁸ El conde Toreno, llegó a preguntar ¿qué ministerio podría sostenerse nombrado contra la voluntad de un Cuerpo legislativo, manifestada oficialmente?. Ibídem.

ejercer su influjo indirecto a través de sus intervenciones:

"(...) En esta crisis de la Europa, cuando se necesitan tanta firmeza y maestría para conducir la nave del Estado; ahora que se va a decidir la libertad de los pueblos o su esclavitud, ¿podremos creer o sospechar que la presuntuosa ignorancia o la pérfida lisonja de los que se prostituyeron a mendigar favores de la tiranía, vengan a profanar este lugar sagrado? (...) Los españoles son amantes de su Rey pero también lo son de su libertad (...) Por un extremo de lealtad sufrieron seis años la más ignominiosa servidumbre; pero yo considero esa época desgraciada como el invierno riguroso que debe preceder a la estación de las flores y de los frutos. En esos seis años de tiranía se ha arraigado hondamente el árbol de la libertad, y los españoles conocen demasiado su precio para dejarlo cortar impunemente⁷⁷⁹ (...)"

Lo que Martínez de la Rosa decía en su sencilla intervención es que no creía al Monarca capaz de designar como Secretarios del Despacho, en estos tiempos de crisis, a enemigos del sistema constitucional.

El Gobierno Feliú entró a desempeñar sus funciones en medio de planes subversivos, conspiraciones y partidas de facciosos contra el sistema constitucional. No eran, ciertamente, las condiciones más a propósito para obtener la

⁷⁷⁹ Ver D.SS., Cortes, sesión de 3, de marzo de 1821.

confianza de las Cortes. Sin un programa, en medio de las fatales circunstancias y aislado de las Cortes, el nuevo Gobierno optó por proceder con independencia "para ocupar un espacio en la balanza de poderes". El espíritu que inspiró su actuación lo expuso Feliú ante las Cortes:

"(...) Nadie tiene derecho a pedir explicaciones que el Gobierno no tiene obligación de dar, y que sería una debilidad el darlas sólo por complacencia"⁷⁸⁰ (...)"

Su obstinado silencio fué un refugio a sus desaciertos. Diputado en las Cortes del 14, Feliú sufrió persecución con la Restauración absolutista, circunstancia que alegaba como mérito. Cuando por sus torpezas se vió metido en un "sepulcro de amarguras" declaró su amor por "la libertad bien entendida, que es la conserva el orden público y los derechos de los ciudadanos"⁷⁸¹. A los cuatro meses del nombramiento eran objeto de censuras y burlas en la prensa. Las Cortes le reprocharon su inoperancia por no haber sabido gestionar el presupuesto ni ejecutar sus decretos, como el de reemplazo⁷⁸².

Ante las censuras que recibía el Gobierno por su

⁷⁸⁰ Ver D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 13 de diciembre de 1821.

⁷⁸¹ D.SS.Cortes Extraordinarias, sesión de 14 de diciembre de 1821.

⁷⁸² Ver D.SS.Cortes extraordinarias sesión de 12 de octubre de 1821.

silencio, se defendió del reproche alegando como argumento dificultades de naturaleza burocrática:

" (...) Serían menester 50 secretarías, y aun no serían bastantes para satisfacer a todos, y solo se conseguiría armar una guerra de papeles que no tendría fin ⁷⁸³ (...)".

Como veremos, fueron las Cortes quienes llevaron la iniciativa política a partir del cambio de Gobierno y se encargaron de sacar adelante el programa de acción política diseñado en colaboración con el Gobierno Argüelles.

7.2. Presión de la Santa Alianza.

La crisis de Gobierno desencadenada por el Monarca con la destitución de sus ministros fué especialmente grave por el momento escogido. El país estaba amenazado por las conspiraciones absolutistas y además envuelto en un panorama internacional que resultaba de lo más inquietante.

Las potencias Europeas de la Santa Alianza reunidas en diciembre en la conferencia de Tropeau y, más tarde, en Laibach habían decidido la intervención en Nápoles. Desde enero venían circulando alarmantes noticias sobre los

⁷⁸³Ibidem.

acuerdos de principio y las medidas adoptadas por las potencias congregadas en Troppeau. Trascendió que las potencias manifestaban "su desaprobación por el ejemplo que en algunos Estados ha dado la tropa, declarándose abiertamente en revolución". Asimismo, anunciaban habían acordado tomar las medidas convenientes para restablecer el buen orden; lo que significaba poner fin a la anarquía de Nápoles⁷⁸⁴.

Insistieron las potencias en divulgar la noticia de que jamás existió en Troppeau la especie de transigir con el partido que dominaba en Nápoles, ni imaginaron la posibilidad de reconocer una Constitución, "parto de un poder ilegal". Y, en fin, que en razón a los principios Monárquicos desechaban e invalidaban "todas aquellas instituciones no decretadas y llevadas a efecto por la propia y libre voluntad del Monarca"⁷⁸⁵.

Resultaba tan evidente la alusión a lo sucedido en España, que el redactor de la Gaceta no pudo por menos de añadir un comentario a la noticia inserta:

"(...)Esto es decir en propios términos que el Congreso sólo admite y reconoce una clase de Gobierno, a saber: la Monarquía absoluta; creemos que todas las instituciones que

⁷⁸⁴Ver Gaceta del Gobierno de 19 enero de 1821.

⁷⁸⁵ Ibidem.

ahora existen, y cuantas en adelante existan han sido y serán establecidas por medio de revoluciones o arrancadas a los Monarcas (...) El dogma o principio arriba expresado podrá ser excelente para los Monarcas absolutos; pero jamás será admitido por un pueblo libre. El derecho de resistir cuando la sociedad lo exige, es uno de los derechos más sagrados de la humanidad, y a él debe nuestro actual Soberano la posesión de estos reinos. (...) Los Gobiernos constitucionales deben declarar que "el principio monárquico asentado por los tres Soberanos expresados, es enteramente incompatible con la civilización europea ⁷⁸⁶ (...)".

En vísperas del anuncio de la exoneración del Gobierno apareció publicada la circular expedida por Austria, Prusia y Rusia dirigida a todos los agentes diplomáticos cerca de las cortes extranjeras.

Comenzaba declarando la preocupación que los acontecimientos catastróficos de España, Nápoles y Portugal debían necesariamente causar en todos cuantos hombres tenían a su cargo la conservación de los Estados. Postulaba la necesidad de unión y acuerdos, para "evitar a la Europa todos los males que iban a descargar sobre ella". Declarando, en fin, que:

⁷⁸⁶ Ver Gaceta del Gobierno 21 de enero 1821. El artículo tomado del Morning-Chronicle de Londres, del día 1 de marzo, había sido publicado en La Gaceta del Gobierno de Berlín.

"(...) los Gobiernos que acababan de vencer a la revolución, y que la veían volver a aparecer triunfante; y era (...) natural que para repelerla por tercera vez recurriesen estos Gobiernos a los mismos medios ⁷⁸⁷ (...)".

Las potencias integrantes de la Alianza, "formada en medio de las circunstancias más críticas, coronada de triunfos, perpetuada en las actas de 1814, 1815 y 1818", estaban convencidas y así lo hacían saber :

" (...) Que esta unión que propuso, fundó y llevó completamente a efecto la pacificación del mundo, liberando al continente del despotismo militar que ejerció el hombre de la revolución, la libraría igualmente de un nuevo poder, no menos tiránico ni menos fatal, del poder del crimen y de la rebelión. Tales han sido los motivos y el objeto de la reunión de Tropau. (...) Las potencias han usado de un derecho incontestable al decidirse a tomar medidas comunes de precaución y de represión para con ciertos Estados, cuyo trastorno, causado por la rebelión, aunque no se considere más que como ejemplo, sería un acto hostil contra todas las instituciones y todos los Gobiernos legítimos; pero sobre todo para con aquellos Estados, que no contentos con sus propias desgracias, procuran por medio de sus agentes

⁷⁸⁷ Ver Gaceta del Gobierno, 22 de febrero de 1821. Según indica la redacción, la nota de 19 enero de 1821, estaba fechada en Francfort el 30 de enero.

llevarlas a otros países, introduciendo en ellos los disturbios y la insurrección. La situación y conducta de estos Estados constituye una infracción notoria del pacto que asegura a los Gobiernos europeos, con la integridad de sus territorios, la conservación de aquellas relaciones pacíficas, cuyo primer efecto es excluir hasta la idea de perjudicarse mutuamente⁷⁸⁸ (...)" .

Respecto de los Estados que habían padecido una alteración violenta en la forma de su régimen interior, decidieron empezar ya a ejercer su "influjo saludable y eficaz". Expresaban su disposición de intervenir por la fuerza en el reino de las Dos Sicilias:

"(...) Como la revolución de Nápoles va echando cada día raíces más profundas, como ninguna otra amenaza de un modo más evidente e inmediato la tranquilidad de los Estados vecinos, ni puede esta ser perturbada de un modo más pronto y directo, se ha conocido la conveniencia y la necesidad de hacer al reino de las Dos Sicilias la aplicación inmediata de los principios que acaban de indicarse ⁷⁸⁹ (...)" .

Y una vez proclamada la decisión de atentar contra la independencia de otro Estado, manifestaban su firme resolución de conservar la paz en Europa y preservarla de la

⁷⁸⁸ Ibidem.

⁷⁸⁹ Ibidem.

revolución:

"(...) No reconocer los Gobiernos fundados por la sedición, no (...) entrar en relaciones sino con la persona del Rey; (...) ha dictado la resolución de las potencias, las cuales no quieren más que conservar la paz, preservar la Europa del azote de las revoluciones y reparar y evitar en cuanto esté de su parte las desgracias que acarrea el olvido de todos los principios de orden y de moral. En esta inteligencia no pueden menos las potencias de prometerse una aprobación general⁷⁹⁰ (...)" .

Algunos diputados precisaban motivos para apaciguar su inquietud, quisieron encontrarlos en la equívoca postura oficial de Inglaterra⁷⁹¹ que no dudaron en elogiar. En resumen, el planteamiento inglés ante la crisis, (todo un prodigio de la diplomacia), consistía en condenar el derecho a la intervención de las potencias, condenar la revolución de Nápoles y, dadas las circunstancias, afirmaba su comprensión hacia los Estados (Austria y Prusia) que, en aras a su propia seguridad, defendían la intervención:

"(...) El Gobierno de SM no cree que, según los tratados existentes, tengan los aliados derecho de aspirar

⁷⁹⁰Ibidem.

⁷⁹¹ Así el Conde de Toreno diría: " Algunas potencias han declarado que no entraban en estos principios (...) la Inglaterra lo ha hecho de un modo claro (...) ". Ver D.SS.Cortes, sesión de 3 de marzo de 1821.

como tales a unos poderes generales de esta especie (...) a no ser que quieran atribuirse una soberanía incompatible con los derechos de los demás Estados. (...) Por lo que respecta (...) a los asuntos de Nápoles, no ha tenido reparo el Gobierno británico en manifestar desde luego con energía que desaprobaba el modo con que parecía se había hecho la revolución (...); pero al mismo tiempo declaró (...) tener facultad para aconsejar que en aquellos negocios no se mezclase la Gran Bretaña. (...) No obstante, el Gobierno reconoció abiertamente que otros Estados europeos, y en especial el Austria y los Estados de Italia, podían conocer que eran diferentes las circunstancias con respecto a ellos, y declaró que no era su intención juzgar anticipadamente la cuestión (...) ni entrometerse en el sistema que dichos Estados tuviesen por conveniente adoptar para su propia seguridad ⁷⁹² (...)." .

Indagando argumentos que persuadieran a los diputados sobre la imposibilidad de que las potencias llevaran a cabo la anunciada amenaza de invasión en España, el Conde de Toreno no dudó en apelar a los Soberanos virtuosos, recordándoles que la Constitución de 1812 mantuvo sus tronos⁷⁹³. Pero su preocupación principal, como puede verse, estaba en el estímulo que los anuncios de invasión

⁷⁹² Ver Gaceta del Gobierno sábado 17 de febrero de 1821

⁷⁹³ En su extensa intervención señaló Toreno: "España, (...) sostuvo la legitimidad de los Tronos ¿(...) será posible se trate de atacarnos?". Ver D.SS.Cortes, sesión 3 de marzo 1821.

proporcionaban a los enemigos del sistema constitucional:

"(...) La España no puede ser atacada (...) como Nápoles(...) El ejemplo grande que hemos dado a toda la Europa pondrá obstáculos invencibles (...) Parece increíble que los Soberanos más grandes y virtuosos que están al frente de las naciones europeas puedan ser dirigidos por sus consejeros hasta el punto de contribuir a excitar estos desórdenes entre nosotros. (...) Existe una declaración oficial en que se envuelve a la España y se la confunde con la revolución de Portugal y Nápoles; ¿y qué alientos no da esto a los enemigos del sistema y a los descontentos? En esta declaración se supone a los militares como instrumentos de esta revolución, que es hija de la Nación entera, (...) porque en esto no hicieron más que sujetarse a los mismos juramentos que habían prestado en el año 12⁷⁹⁴ (...)".

7.3. Las Cortes y el orden constitucional .-

La amenaza de invasión de Nápoles influyó, de manera decisiva, en la configuración de la agenda política. Las Cortes corrigiendo actuaciones pasadas, propusieron una nueva ley de Sociedades patrióticas "que sin coartar la libertad impidiese el desorden". Puigblanch diputado por Barcelona e

⁷⁹⁴ Ver D.SS.Cortes, sesión 3, de marzo de 1821.

insigne catedrático de Griego, fué el autor de la proposición. El proyecto de ley ⁷⁹⁵ consagraba el derecho de reunión:

"(...)Art.1º. Siendo una emanación directa e inmediata de las soberanía del pueblo velar sobre su propia conservación (...) celar la recta administración de los negocios públicos, sin lo cual no puede darse ni libertad ni seguridad personal, todos los ciudadanos tiene derecho a reunirse ⁷⁹⁶ (...)" .

Haciendo uso de ese derecho (art.2º) los ciudadanos podían constituirse en reuniones de carácter periódico o esporádico. A través de estas reuniones los ciudadanos, según el art. 9º, tenían derecho:

"(...) de exponer y pedir al Gobierno o las Cortes lo que juzguen conveniente al bien del Estado; pero se abstendrán de tomar en ningún caso la voz del pueblo⁷⁹⁷ (...)" .

El Monarca vetó la ley, de conformidad con el dictamen

⁷⁹⁵ D. SS Cortes, sesión 17 de marzo de 1821.

⁷⁹⁶ Ibidem.

⁷⁹⁷ Ibidem.

del Consejo de Estado ⁷⁹⁸ y la complacencia de sus nuevos ministros. Entre las razones en que fundamentó su negativa mencionó la experiencia reciente :

"(...) El objeto de esta ley es la de precaver los gravísimos males y desórdenes a que puedan dar lugar las reuniones públicas en que se discuten materias políticas; desórdenes verificados ya en varias ocasiones y que pueden repetirse y aun hacerse más trascendentales en el estado de agitación en que se hallan hoy los ánimos de los ciudadanos⁷⁹⁹ (...)".

También recurrió a razonamientos familiares a las cámara, por haber sido utilizados en octubre por los liberales para proceder a la regulación de las Sociedades en sentido restrictivo:

"(...) ¿ Para qué pueden estimarse necesarias tales corporaciones, en un país cuya Constitución asegura la libertad (...) con más garantías que ninguna de las que se conocen en Europa? El pueblo español tiene sus Cortes anuales (...) tiene el derecho de petición⁸⁰⁰ (...) y tiene la

⁷⁹⁸ El decreto de 13 de abril de 1821 sobre sociedades patrióticas fué devuelto a las Cortes sin sanción real. Ver D.SS.Cortes, sesión de 12 de mayo de 1821.

⁷⁹⁹ D.SS.Cortes sesión de 12 de mayo de 1821.

⁸⁰⁰ Esta interpretación generosa del artículo 373 de la Constitución duró poco. La presión de las circunstancias forzaron a llevar a cabo un análisis más riguroso del precepto. Ver D.SS.Cortes sesión de 9 de febrero de 1822.

libertad de imprenta (...). Por la imprenta se instruye a mayor número de ciudadanos: el que escribe está menos expuesto a errar que el que habla⁸⁰¹ ; y aquel contra quien se escribe, puede vindicarse de una calumnia (...).

La existencia de tales corporaciones, si se reconocen por la ley, parece poder destruir esencialmente el sistema representativo. (...) Para que el pueblo use de sus derechos más fácilmente y sin tantos peligros, se han ideado y existen en las naciones cultas los cuerpos de representantes⁸⁰² ; y estos llegarían a ser inútiles de hecho, si los representados, tienen facultad para reunirse y tratar y decidir a su modo sobre las materias políticas . (...) ¿Qué será cuando reconocidas por ley, se crean más poderosas? (...) Ni las autoridades locales ni el Gobierno podrían responder de la tranquilidad pública, ni aun de la conservación del sistema; y que por último, si todos tienen derecho para discutir reunidos, y pueden de hecho hacer que se lleve a efecto el fruto de sus discusiones, las Cortes y el Gobierno llegarían a ser por demás⁸⁰³ (...)." .

En esta nueva etapa, la iniciativa de la vida política del país fué asumida por el Congreso. Las Cortes dirigieron la atención del nuevo Gobierno hacia los apremiantes

⁸⁰¹ Razonamiento empleado por Martínez de la Rosa cuando por vez primera se discutió la ley de Sociedades.

⁸⁰² Razonamiento utilizado por Garely.

⁸⁰³ D.SS.Cortes sesión de 12 de mayo de 1821.

problemas⁸⁰⁴ de orden público. Seguridad y orden pasaron a ser los objetivos fundamentales de la acción política. Los conspiradores y las maquinaciones contra el sistema ocupaban un lugar central, por no decir obsesivo, en la agenda de los poderes públicos .

Las Cortes justificaban su dedicación a estas materias en base a razones constitucionales, decían ser las "principales conservadoras" de la Constitución, pero además adujeron motivos políticos, la seria limitación que tenían las personas que el Rey había puesto "a la cabeza de los negocios":

"(...) Se han de pasar muchos días antes que se pongan al corriente de los negocios, y los negocios al corriente de la urgencia pública⁸⁰⁵ (...)." .

Antes de proponer su plan de acción, las Cortes nombraron una Comisión especial para que procediera, con carácter de urgencia, a examinar el estado político de la

⁸⁰⁴ A veces, según Giraldo, las conspiraciones eran imaginarias: "(...) Los pérfidos consejeros que rodean a S.M. llevan adelante el proyecto que empezaron (...) así que se cerró el Congreso. Yo veo ahora el mismo cuadro que en noviembre último: tan enemigos del Rey como del sistema constitucional, tratan de precipitarnos a todos (...) Estos malvados son los inventores de las tramas en Burgos y en Avila". D.SS.Cortes, sesión 3 de marzo 1821.

⁸⁰⁵ Ver Informe de la Comisión especial para examinar el estado político de la Nación. en D.SS.Cortes, sesión de 20 de marzo de 1821.

Nación ⁸⁰⁶ . El informe presentado refería que uno de los objetivos de los conspiradores fué "quitar el ministerio":

"(...) El ministerio removido tiene la gloria de haber conservado el orden⁸⁰⁷ , y de que todos los enemigos del actual sistema mirasen como imposible todo trastorno(..). "Mientras no se quite este ministerio no podremos sacar de aquí la tropa", (dicen los conspiradores) ni disponer de la guarnición; segunda medida que miraban como necesaria para dar aquí el golpe que se proponían para comunicarlo a las ramificaciones que tenían en las provincias (...) Con efecto de las declaraciones de los arrestados y de los documentos que se les han interceptado, resulta que hay una junta suprema (...) tiene ramificaciones en todas las provincias (...) también en (...) Francia (...) trata de que la sublevación sea simultánea⁸⁰⁸ (...)" .

Los autores del informe relataban las diversas conspiraciones habidas desde el cierre de las sesiones de Cortes: partidas armadas en Burgos, Asturias, Zamora, y

⁸⁰⁶ La comisión, nombrada a indicación de Romero Alpuente y otras alternativas, estaba Integrada por José María Calatrava, Vicente Sancho, José M^a Moscoso, José Manuel de Vadillo, Juan Alvarez Guerra. Ver D.SS.Cortes, sesión de 6 de marzo de 1821.

⁸⁰⁷ En razón a sus servicios las Cortes propusieron para las plazas vacantes del Consejo de Estado, en clase de ciudadanos particulares, a Agustín Argüelles, Miguel G^aHerreros, José Canga, Cayetano Valdés y Evaristo Perez de Castro.Ver D.SS Cortes, Actas sesiones secretas, sesión de 28 de marzo de 1821.

⁸⁰⁸ Ibidem.

Orense; la aparición de la cuadrilla del Abuelo, la trama de Vinuesa, el atentado de los Guardia Real, la trama de Ramón Valladolid, el robo de la valija de Aragón. Señalaban que "el espíritu público de la Nación no puede ser mejor", pero no dudaron en reconocer el riesgo que la caída del régimen liberal en Nápoles suponía para el sistema:

"(...)No debemos perder tampoco de vista que los enemigos de la libertad de España hacen causa común con los enemigos de la libertad del género humano, y que si el Austria llegase a triunfar en Nápoles, los enemigos interiores del sistema mirarían como suya la victoria, y a nosotros como botín de la batalla ⁸⁰⁹ (...) "

Proponían los redactores del dictamen dos especies de remedios. Unos dirigidos a reprimir⁸¹⁰, incluía entre estas medidas la ley para abreviar los trámites en las causas contra los perturbadores ⁸¹¹; la recomendación al Gobierno para que estorbe las maquinaciones de Francia; y el aumento

⁸⁰⁹ Ibidem.

⁸¹⁰ Según diría Toreno: "Las Cortes desde marzo o abril no han hecho más que dar facultades al Gobierno para conservar el orden público". Ver D.SS.Cortes, sesión de 5 de mayo de 1821.

⁸¹¹ El dictamen de la comisión encargada de la elaboración de esta ley, presentado con urgencia a las Cortes, adoptaba el sistema de jueces de hecho para juzgar los delitos contra la Constitución. Ver D.SS Cortes, sesión 10 de abril 1821.

y mejora de la milicia ⁸¹². Otros remedios estaban dirigidos a precaver: que se active la venta de bienes nacionales, reparto de baldíos y propios, que las comisiones presenten su dictamen sobre diezmos, y remover los obstáculos para la ejecución de la ley de regulares⁸¹³.

Cuando las Cortes tuvieron conocimiento ⁸¹⁴ de las tristes noticias de la invasión de Nápoles por el ejército austríaco, "se cubrieron de dolor". El Secretario del Despacho de Guerra leyó⁸¹⁵ una minuta de Fernando VII, donde manifestaba los más firmes sentimientos de adhesión al sistema constitucional y afirmaba que "los españoles no somos napolitanos⁸¹⁶ ".

⁸¹² Sobre la milicia en el Trienio ver el trabajo monográfico de J.Sisinio Pérez Garzón, "Milicia nacional y revolución burguesa, Madrid, 1978.

⁸¹³ D.SS.Cortes, sesión de 6 de marzo de 1821.

⁸¹⁴ Ver D.SS.Cortes, Actas de las sesiones secretas, Sesión 4 de abril.1821. El Secretario del Despacho de Estado comunica las ocurrencias últimas en Turin con motivo del levantamiento del Piamonte para publicar la Constitución Española, y de los sucesos de los ejércitos napolitano y austríaco en los Abruzos.

⁸¹⁵ Ver D.SS. Cortes, Actas sesiones secretas, sesión 7 de abril 1821.

⁸¹⁶ El Secretario del Despacho de Guerra, leyó el oficio del capitán general de Cataluña, fecha 2 de abril, Coronel napolitano y diputado D.Lorenzo Conciliis por oficio de nuestro embajador manifiesta : Que a su salida de aquella ciudad se hallaba el ejército austríaco, que el parlamento se había dispersado con la entrada de dicho ejército el día 26 de marzo. Ibidem.

Ante la gravedad de los sucesos, una comisión designada por las Cortes, acudió a entrevistarse con el Monarca. Del resultado de la conferencia con el Rey dieron traslado a las Cortes, reunidas en sesión secreta. En primer término leyeron los diputados una nota conjunta y, posteriormente, cada uno de los asistentes a la conferencia relató el contenido específico de su intervención:

"(...) La influencia de tales ocurrencias no pesará jamás sobre la suerte de la Nación, pues esta se ve afianzada en la sabiduría de sus leyes fundamentales, en la decisión de V.M y de las Cortes en observarlas y en la del heroico pueblo español en defenderlas. Pero obrará sobre los ánimos de los españoles, más agitados (...) dando una quimérica confianza a los malvados, e infundiendo justos recelos en los patriotas, cuya exaltación sería terrible al primer síntoma de reacción y provocaría la guerra civil⁸¹⁷ (...) "

Entre las ideas que a Martínez de la Rosa en aquella ocasión se le pudieron ocurrir destacaba :

"(...)Que los sucesos de Nápoles no podían comprometer la seguridad de España; primero por la situación, fuerza moral y recursos de la Nación; segundo por la debilidad propia de los Gobiernos absolutos (...); tercero por los

⁸¹⁷Ver D.SS.Cortes, Actas sesiones secretas. Sesión del día 9 de abril de 1821. Nota de la conferencia de la Comisión de Cortes con el Monarca.

intereses de todos los Estados constitucionales, y muy particularmente, Inglaterra y Francia, interesadas en sostener nuestra independencia. Los Gobiernos por más que afirmen que intentan sostener la legitimidad de los tronos y la plenitud de sus derechos (...) no tratan de los fines de su política. (...) La única alianza que nunca falta es la de los pueblos (...) La estupidez de los enemigos del sistema (...) la imposibilidad de dar un paso más allá de los límites constitucionales, o de dar un paso atrás en la carrera emprendida sin comprometer y poner en peligro el mismo trono⁸¹⁸ (...)"

Calatrava comunicó al Monarca la preocupación de las Cortes por las conspiraciones del clero:

"(...) Que las Cortes (...) desearan que el Gobierno adoptase providencias enérgicas contra los desafectos al sistema que conspiran contra él; (...) muchos individuos del clero abusando de lo más sagrado (...) sólo tratan de sostener intereses y privilegios incompatibles con el bien general de la Nación.⁸¹⁹ (...)"

Por su parte Gasco transmitió su preocupación por la

⁸¹⁸ Ibidem.

⁸¹⁹ Ibidem.

lentitud de los procesos contra los conspiradores⁸²⁰ contra el sistema constitucional:

"(..) La Nación tiene sed de justicia, sed tanto más legítima cuanto en el tiempo de un año que ha corrido desde que se juró la nueva alianza entre el pueblo y el Rey, no se ha descargado la cuchilla de la ley sobre la cabeza de ninguno de los malvados que han intentado, aunque en vano, destruir el sistema constitucional y el trono de V.M, apoyado sobre la base de la Constitución. Las causas de Cádiz, Burgos y otras se encuentra casi en el mismo estado que cuando se cometieron los crímenes (..) la Nación ha visto con sentimiento que se repiten y reproducen los ataques y conspiraciones contra la ley fundamental (..) Así que las Cortes desean que haya mucha vigilancia y cuidado en la elección de los magistrados⁸²¹ (...)" .

La llegada de los emigrados italianos a principios de abril, huyendo de la invasión de las tropas austríacas en los reinos de Nápoles y del Piamonte hizo cundir el pánico entre los liberales de algunos núcleos urbanos. En Barcelona desembarcaron el general napolitano Guillermo Pepé, y otros varios emigrados. El jefe político de Cataluña dirigió a las

⁸²⁰ En breve las Cortes aprobaron para la Defensa de la Constitución la ley de 17 de abril de 1821 que condenaba a muerte a los conspiradores y la de procedimiento en las causas de conspiración que las atribuía a la jurisdicción militar. Ver comentarios en García R. La rebelión militar en derecho penal, Albacete 1990.

⁸²¹ Ibidem.

Cortes un oficio, dando cuenta de las ocurrencias .Comentaba que en la noche de 3 al 4 se habían visto precisadas las autoridades políticas, militares, eclesiásticas y civiles a convenir, para calmar la efervescencia, que salieran de la provincia personas, entre ellas el reverendo Obispo, que se habían hecho odiosas por su conducta sospechosa y contraria al sistema constitucional⁸²².

7.4. Fragilidad del sistema constitucional.-

Autoridades y jueces.

Las expulsiones llevadas a cabo en Cataluña, embarcando a ciudadanos tachados de desafectos al régimen constitucional, no constituyeron un hecho aislado. El Secretario de la Gobernación requerido por las Cortes, hizo una recapitulación de otros "movimientos principales" que habían tenido lugar en varios puntos de la Península. Refirió que en Oviedo el 16 de Abril, una Junta de autoridades acordó la prisión de algunas personas por la misma razón que las de Barcelona; en Sevilla, Málaga y Granada el 14 de Abril se repitieron escenas semejantes; en Algeciras, el 25 de Abril, una reunión de autoridades acordó también el arresto de varias personas; en Cartagena el 27 de

⁸²² Ver D.SS. Actas sesiones Secretas de las Cortes, sesión 23 de abril de 1821

Abril; en Cádiz el 29 y 30 de abril se procedió al arresto de algunas personas de resultas de haber amanecido enlodada la lápida de la Constitución.

Señalaba en su exposición a las Cortes que el Gobierno, veía con "la mayor amargura estas ocurrencias", porque desacreditaban en Europa el sistema actual y conspiraban a aumentar el número de los enemigos interiores:

"(...) Es muy sensible que gentes demasiado acaloradas, o demasiado celosas de la libertad, sean tal vez las que comentan tales atentados⁸²³ (...)".

Finalizaba comunicando las indispensables providencias que había tomado el Gobierno para evitar la repetición de tales desórdenes.

En apoyo de las tesis del Gobierno intervino Martínez de la Rosa⁸²⁴ abundó en la consecuencia de esta fatal conducta, que no se limitaba a causar la desgracia de un sinnúmero de familias, a enconar los ánimos y entibiar el afecto a la Constitución; sino que acabarían por desacreditar a los ojos de Europa nuestra Restauración política.

Por el contrario, el doceañista Calatrava dando muestras

⁸²³ Ver D.SS.Cortes, sesión de 11 mayor de 1821.

⁸²⁴ Ibidem.

de irritación preguntó al encargado del despacho de la Gobernación: sobre las medidas que el Gobierno había tomado o pensaba tomar para evitar que los pueblos se entreguen a estas inquietudes:

"(...). Yo seré el primero que vea con amargura que el pueblo se toma por sí la justicia (...); pero deseo igualmente que el mismo calor con que miramos justamente estos abusos del celo, lo empleemos también para calmar con igual o mayor vehemencia por que no se dé lugar ni se ponga a los pueblos en la casi necesidad de que se comentan estos excesos, creyendo comprometida la salud del Estado. Cuando los enemigos del sistema levanta osados su frente, cuando se burlan del Gobierno y escarnecen nuestras instituciones; cuando creen tal vez que el Gobierno no quiere o no puede tomar las providencias oportunas para contenerlos; cuando las manos a quienes se han confiado la administración de justicia son débiles, ¿por qué hemos de ser tan injustos, y hemos de extrañar que el pueblo se desenfrene y se entregue a excesos ciertamente desagradables?⁸²⁵ (...)".

Aludiendo a las motivaciones de este movimiento señaló el diputado Moreno Guerra, que su origen estaba en los malos jefes políticos, intendentes y jueces, no sólo no adictos a la Constitución, sino enemigos implacables de ella:

⁸²⁵ Ibidem.

"(...) Y ¿se querrá que los patriotas se estén pasivos viendo las maniobras de los facciosos y la apatía o criminalidad de las autoridades, para que llegue otro año de 14?⁸²⁶ (...)".

Precisó que los últimos movimientos y sacudimientos de Cádiz el problema estaba en haber enviado de intendente a Don Bernardo Elizalde, "al cual se resistió desde luego la Diputación Provincial" :

"(...) Este caballero, el año de 814, estando también de intendente (...) fué el primero que se puso de acuerdo con Villavicencio para entregar la plaza y destruir la Constitución; y que el año 820 fué comisionado por Freire para abrir en el Puerto de Santa María la correspondencia de los patriotas⁸²⁷ (...)".

La política de nombramientos seguida por el Gobierno iba a acabar provocando, como veremos, graves conflictos entre el Ministerio y las provincias. Pero con ser graves no era el únicos problemas. En su preocupación por la estabilidad del sistema, las Cortes detectaron distintos puntos sensibles que entorpecían el funcionamiento del sistema constitucional. A este respecto, prestaron atención a las dificultades que en la gestión planteaban las Diputaciones provinciales, los graves problemas que ocasionaba la

⁸²⁶ Ibidem.

⁸²⁷ Ibidem.

actuación "tortuosa" de los jueces que procedían del antiguo régimen, el malestar que sembraban en los pueblos los recaudadores de impuestos, y en fin el grave obstáculo que significaba, para la puesta en práctica de las medidas desamortizadoras, la incuria de los funcionarios de la oficina del crédito público.

Las Diputaciones provinciales ⁸²⁸ colaboraban con el Estado en el reparto y gestión de los impuestos. Pero los ciudadanos elegidos para estas instituciones provinciales, ante el inevitable conflicto de lealtades (la provincial y estatal) salían del paso como podían, normalmente en perjuicio de la hacienda estatal:

"(...) No se crea que el entorpecimiento en la distribución y cobranza de la contribución dimana en el presente año de la dificultad de reunir datos estadísticos (...) ; sino de que los jefes económicos, tímidos por el influjo de las Diputaciones(...); las Diputaciones no se pueden esperar que caminen con rapidez (para aprobar el repartimiento de la contribución) porque los elementos de que se componen las arrastran a impedir en cuanto puedan las exacciones por la natural inclinación de consolar al pueblo

⁸²⁸ El art. 335 de la Constitución asignaba a las diputaciones competencias vastas en gestión y administración tributaria; intervención pública en infraestructuras, economía, agricultura, industria, bienestar, educación, sanidad; velar por la observancia de la Constitución y, en Ultramar, las misiones para la conversión de los indios infieles.

que las ha nombrado (...). Una prueba de esta verdad se ofrece en las provincias de Valencia, Sevilla, Cataluña y Murcia⁸²⁹ (...)" .

De otra naturaleza era el obstáculo que para la implantación del sistema constitucional representaban los jueces. Constituía una evidencia que entre ellos estaban sus silenciosos enemigos. En la Memoria que no pudo leer, refiría Canga la actuación disparatada de los jueces contra la Hacienda pública:

"(...) La concentración de los negocios de Hacienda en los jueces de primera instancia ha causado males al Erario (...). El Ministerio tiene a la vista varios expedientes promovidos en las provincias de Granada, Cuenca, Cartagena, Valencia, Cataluña, Mancha, Extremadura, Bilbao y Madrid, en los cuales aparece condenada la Hacienda pública, sin haber sido oída, al pago de grandes sumas; embargada alguna Tesorería por auto de un juez de primera instancia, para asegurar el pago de un crédito atrasado, reintegrados en sus destinos dependientes quebrados en el manejo de los caudales públicos; nombrados por dichos jueces, sin intervención del Rey, fiscales, escribanos y alguaciles para el juzgado de las rentas; absueltos algunos empleados suspensos sin obligarles

⁸²⁹ Ver D.SS.Cortes, sesión 8 marzo 1821. Memoria sobre el estado de la Hacienda de J.Canga Argüelles.

a restituir los alcances que contra sí tenían⁸³⁰ (...)".

Preocupaba que la abrumadora mayoría de los jueces dedicaran sus esfuerzos a garantizar la persistencia del antiguo régimen, en detrimento del cumplimiento de las leyes constitucionales. Llamó la atención de las Cortes sobre comportamientos escandalosos el diputado Moreno Guerra mediante la lectura de un documento:

"(...) Es un bando arrancado de las casas Capitulares de Aguilar el 7 de febrero de 1821(...) del licenciado Pimentel, juez de primera instancia del partido de Montilla, en el que manda que los privilegios exclusivos de almotacén y fiel medidor se devuelvan al Duque de Medinaceli ¿ Qué cosa más conocida por feudal, y exclusivamente privilegiada que el bárbaro derecho de que nadie pudiera vender ni comprar sino con las medidas de un señor? ¿Puede darse un ataque mayor a la libertad individual?(...) Aquí se ve cómo están los pueblos; aquí se ve cómo los pueblos han de interesarse en el sistema cuando se les engaña, y se les dice que están lo mismo; a que aquí no venimos más que a hacer figura y a dar voces, y a cobrar los 110 rs. de dietas(...)"⁸³¹.

Era tal el número de reclamaciones y quejas contra los jueces que los ciudadanos escandalizados por sus actuaciones

⁸³⁰ Ibidem.

⁸³¹ Ver D.SS.Cortes sesión de 4 de abril de 1821.

hacían llegar a las Cortes, y tantas las evidencias que se acumulaban, que entre los diputados se generalizó la creencia de que los jueces no cumplían las leyes del Congreso y estaban burlando la representación nacional:

"(...) Desde el 10 de Marzo del año pasado, día de los asesinatos horrorosos de Cádiz, hasta el presente, se han fraguado multitud de conspiraciones en Burgos, Zaragoza, Tuy, Madrid etc.; se han detenido y aprehendido centenares de individuos comprometidos en ellas, agentes o primeros autores de las mismas (...) ninguno ha sufrido el castigo ejemplar que las leyes señalan a estos criminales; todos se hallan todavía impunes. Es un escándalo que se repitan cada día nuevos atentados; pero es una consecuencia necesaria, inevitable, de la falta de justicia que se observa, de la impunidad que todos notan⁸³² (...)".

A la adiestrada torpeza de los jueces se atribuía muchos de los tumultos y otros "funestos resultados" que tenían lugar en las provincias. La explicación que daban los diputados sobre este escándalo universal era obvia:

"(...) ¿ y cómo es posible otra cosa, subsistiendo ésta (la administración de justicia) en las mismas manos que la

⁸³²Intervención en la discusión de la indicación Villanueva solicitando que se adopte una vigorosa y enérgica medida que enfrente a los facciosos y proporcione al Reino la paz y tranquilidad interior. D.SS. Cortes, sesión 5 de abril de 1821.

han estado manejando en los últimos seis años, en que las pasiones y el despotismo han ejercido completamente su poderoso y fatal imperio sin traba y sin freno alguno? (...) que han ajustado la administración de justicia como libra de peras". (...) Yo veo varios individuos de la Audiencia de Granada entorpeciendo la causa de conspiración que trataba de descubrir un juez de primera instancia de la misma ciudad (...); la Audiencia de Valencia, con malicia o sin ella, empeñada en detener el proceso que seguía otro juez de la propia capital (...); la Audiencia de Valladolid eternizando las causas de Burgos⁸³³ (...).".

Una exposición de los ciudadanos de Burgos lamentando la protección y la impunidad que la Audiencia territorial dispensaba a los facciosos, (causas de Erroz y Barrios sepultadas, el malhechor Arijá indultado), dió lugar a la proposición de Flórez Estrada solicitando nombrasen las Cortes una comisión ambulante o visitador, para corregir a estos funcionarios, "principales enemigos del sistema constitucional"⁸³⁴. Las Cortes acordaron, previamente, pedir al Gobierno un informe con justificación de jueces y

⁸³³ Ibidem.

⁸³⁴ La comisión especial encargada del estado político del reino con respecto a la seguridad pública, decía : "(...) Hemos visto con dolor ser repuestos en sus empleos los hombres de los seis años, los paniaguados de los Lozanos y Mataflorida, los perseguidores de los patriotas, en fín, todos los atletas del despotismo (...)". D.SS. Cortes Extraordinarias, sesión de 9 de octubre de 1822.

tribunales sobre las causas de Cádiz y las formadas sobre conspiración en Burgos, Ávila, Orense, Zaragoza y Valladolid.

La indiscreción de un juez, y la torpe imprevisión del Gobierno⁸³⁵ facilitaron el espantoso asesinato a martillazos del capellán real, Matías Vinuesa, que se encontraba detenido por conspiración en la cárcel de la Corona⁸³⁶. El juez Arias, hizo pública su sentencia el día 4 de mayo, (fecha desdichada por coincidir con el día en que tuvo lugar la abolición por el Rey del sistema constitucional en 1814), con una condena más blanda de la que él había anunciado. El asesinato del cura Vinuesa hay que enmarcarlo, según los propios moderados, en el proceso contrarrevolucionario⁸³⁷ por entonces en marcha.

La tortuosa actuación de los jueces y la impunidad de los conspiradores fué alegada por los diputados, entre las causas de los movimientos de desobediencia de diciembre en las provincias, en el curso de las deliberaciones celebradas en las Cortes :

"(...) El entorpecimiento en la administración de

⁸³⁵ Sobre su desdichada actuación ver discurso de Toreno en D.SS.Cortes, sesión de 5 de mayo de 1821.

⁸³⁶ En un "Variedades" del periódico gubernamental, poco sospechoso de simpatía por la exaltación, se decía: "varias gentes que los vieron pasar (a sus autores) por debajo de sus balcones, no notaron que fuese entre ellos gente rota ni descamisada". Gaceta de Madrid, 30 de octubre de 1821.

⁸³⁷ Ver Toreno Ibidem.

justicia es tan grande, que sólo se conoce por el nombre; y ahora añadido que de la rutina tortuosa que se ha adoptado para las causas criminales, resulta que no se atiende a los códigos, que no hay leyes determinadas, que hay escándalos (...) ; por estos abusos ha quedado sin fuerza moral la administración de justicia; el juez que obra bien se ve comprometido ⁸³⁸ (...)"

Hacienda y Crédito público.

La actuación del Gobierno que provocaba más queja y mayor descontento en el pueblo era la que llevaba a cabo la administración en materia de contribuciones. Las Cortes denunciaron que los recaudadores de las rentas del Estado, "se apartaban de su senda, y seguían la marcha del régimen absoluto", apremiando y estrechando a las clases indigentes, pero no a las opulentas y poderosas:

"(...) No tiene inconveniente en asegurar en su Memoria (el Ministerio de Hacienda) que ha autorizado a los intendentes para que usasen de los apremios que indica la instrucción del año 1725, para el cobro de las contribuciones corrientes(). para activar la rápida cobranza de los

⁸³⁸ El pasaje corresponde a la intervención de Romero Alpuente. Ver D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 14 de diciembre de 1821.

impuestos⁸³⁹ (...)".

Al tiempo que los encargados de la recaudación de hacienda recurrían a los apremios de las clases indigentes, disculpaban ante las Cortes la recaudación insignificante a la nobleza y clero. Diferencia de trato que movió a la comisión de hacienda de las Cortes señalar en su dictamen:

"(...) Parecen poco exactos los datos del tesorero para decir que muchos ramos han tenido un valor insignificante con respecto a lo calculado; porque de que el clero no haya pagado solamente hasta el día 239.086 reales no se sigue el que no deba y produzca este impuesto la suma de 15 millones; (...) El que el tesorero sólo haya percibido del servicio de lanzas 296.079 rs., renta calculada en 4 millones y que no haya percibido un solo maravedí de los 8 millones en que se reguló la tercera parte pensionable de mitras, no prueba que el valor de estas rentas sea insignificante ⁸⁴⁰ (...) "

La comisión de Cortes comentó cuáles fueron los resultados de los desiguales procedimientos empleados para el cobro de los impuestos:

"(...) Haber cobrado de los pueblos, no obstante su

⁸³⁹ Ver Dictamen de la comisión de hacienda acerca del atraso en el cobro de contribuciones, en D.SS.Cortes sesión 9 Mayo de 1821.

⁸⁴⁰ Ver D.SS. Cortes, sesión de 9 de mayo de 1821.

miseria, y a fuerza de apremios, muy cerca de la mitad de la contribución directa, y nada o poquísimos de las clases acomodadas y opulentas ⁸⁴¹(...)".

Abundando en esta denuncia, leyó en el Congreso el diputado Moreno Guerra la carta que había recibido del alcalde de una provincia de las de Castilla la Vieja, en que relataba las tropelías que estaba sufriendo su pueblo por una corta cantidad que debía:

"(...) En la capital nadie paga; (...) a los señores y a los canónigos nadie los apremia, mientras que los pueblos pequeños están siempre saqueados y oprimidos como antes o peor que antes, sin experimentar algún alivio por la Constitución. (...) Este alcalde se queja (...) porque se ha enviado un vejiguero o un lechuzo (que así se llaman, porque son (...) los que chupan la sangre de los pueblos). Así, repito que a los pobres en los pueblos se los oprime y obliga a vender su camisa para pagar mientras que en las capitales los ricos que andan en coche no pagan nada⁸⁴² (...)".

A la vista de lo anterior, no es extraño que causara sorpresa el atrevimiento de los funcionarios de hacienda. No dudaron en dirigirse a las Cortes solicitando más poder y

⁸⁴¹ Ver D.SS.Cortes sesión de 9 de mayo de 1821.

⁸⁴² Ver D.SS.Cortes, sesión 30 de abril de 1821.

menos frenos para "mejorar la administración" ⁸⁴³.

En estas rudas actuaciones de los recaudadores más que en las seducciones del clero, (como discurrían algunos diputados), es donde posiblemente haya que buscar los motivos de descontento que indujeron a los campesinos a movilizarse contra el sistema constitucional.

Junto con las desigualdades producidas por la recaudación entre diferentes grupos sociales, algunos diputados llegaron a expresar también su profundo malestar por las que existían entre distintas provincias. El diputado por Palencia Calderón declamaba:

"(...)Deben derrocarase para siempre estos privilegios enemigos del orden social, y que (...) las contribuciones deben ser iguales en todas las provincias⁸⁴⁴ (...)".

Teniendo presente lo que establecían la Constitución y las leyes, y lo que exigían la razón y la justicia, las

⁸⁴³Que las Cortes autoricen provisionalmente a los intendentes para que en materia de contribuciones puedan obrar sin necesidad del poder judicial; que con inhibición de las Audiencias, jueces y demás magistrados, puedan los mismos intendentes decretar y llevar a efecto los apremios que consideren indispensables; y que su facultad se extienda a hacer militares dichos apremios. Ver D.SS. Cortes sesión 9 mayo de 1821.

⁸⁴⁴ Discusión del dictamen de la comisión de hacienda sobre remesa de papel sellado de letras y causas a las provincias exentas y Canarias. Ver D.SS. Cortes, sesión 30 Abril 1821.

Cortes decretaron, haber llegado el momento de igualar las contribuciones en toda la Monarquía:

"(...) Demasiado agraciadas se hallan estas provincias; demasiados intereses se han proporcionado con perjuicio de las demás; demasiado se ha reclamado por todas las Diputaciones provinciales contra la falta de justicia e igualdad, para que las Cortes sean insensibles, y para que la comisión haya dejado de tomar en consideración este negocio con aquella exactitud y sabiduría con que acostumbran sus individuos. En una cosa de tanta importancia y transcendencia, ¿se teme desagradar a estas provincias y no se teme desagradar al resto de la Nación⁸⁴⁵ ? ¿Se teme que alguna provincia como Navarra, etc., se resientan de esta disposición y no se teme que toda la Nación se resienta de la falta de cumplimiento de la Constitución?⁸⁴⁶ (...)".

Cuando las Cortes extraordinarias discutieron el proyecto de división del territorio surgió entre los motivos de oposición al aumento de provincias, la repercusión que podía tener en los presupuestos. El temor era que aumentando el número de provincias, tuviera lugar el inevitable incremento de los empleados públicos y las contribuciones.

⁸⁴⁵ Se refiere el diputado por Extremadura al desagrado que ocasionaron las Cortes, revocando la disposición que concedida a los pueblos de que pagasen las contribuciones que les correspondiesen con los créditos de los suministros hechos a la tropa en tiempo de guerra. Ibidem.

⁸⁴⁶ D.SS.Cortes sesión de 30 de abril de 1821.

Por este motivo hubo diputados que consideraron la reforma propuesta poco apropiada para las circunstancias. A este respecto el diputado Banqueri manifestaba :

"(...) El pueblo (...) no está en el día como estaba antes (...) con motivo de las nuevas contribuciones (...). Mi provincia (Granada) se gozaba de jubilo y alegría cuando en la legislatura de 1820 decretaron las Cortes bajar una tercera parte la contribución directa de los pueblos: (de 9.855.112 a 6.569.741) (...). En seguida redujeron las Cortes dicha contribución a la mitad (a 4.927.556) (...) por la razón que dieron de la imposibilidad en que se hallaban los pueblos de poderla pagar. (...) Pero ahora que en la legislatura de este año se le han cargado 18 millones ha cambiado de aspecto (...) Los pueblos dirán(...): sin este aumento de provincias, los impuestos han subido a lo que no esperábamos; pues aumentándose el número de ellas, precisamente crecerán las contribuciones para sostener los mayores gastos de sueldos y empleados que ha de producir esta novedad ⁸⁴⁷ (...)." .

Banqueri haciendo gala de un peculiar provincialismo, tuvo gran interés en poner de manifiesto, para que llegara a oídos de su provincia, su actitud contraria al aumento en la contribución aprobada por las Cortes ordinarias:

"(...) Sé que los de mi provincia se quejan de sus

⁸⁴⁷ Intervención de Banqueri ver D.SS.Cortes, 4 de octubre de 1821.

Diputados; pero nosotros no tenemos la culpa de que la cuota de contribuciones por directa y consumos se hubiese puesto a discusión en los últimos momentos de la legislatura y a deshora prematuras de la noche del 29 de junio⁸⁴⁸ (...)".

Después de poner a salvo su responsabilidad desmontó el discurso que conectaba incremento de la contribución con la supresión de diezmos, ardid que se venía utilizando para justificar aquel aumento:

"(...)No se puede acallar a los pueblos con decirles que si se les han aumentado las contribuciones también se les ha aliviado no pagando más que la mitad del diezmo; porque a esto contestan el fabricante, el artesano, el comerciante, el casero, el médico, el abogado y demás profesiones: nosotros no hemos tenido alivio en esta baja ⁸⁴⁹(...)".

En fin, también ocupó la atención de las Cortes la diligencia de los funcionarios de la oficina del Crédito público, es decir, aquellos que tenían en sus manos la puesta en práctica de la venta de bienes expropiados a la Iglesia. La comisión nombrada en la crisis de marzo, para informar sobre el estado político de la nación propuso se activase la venta de los bienes nacionales, como medio para lograr la extinción de la deuda, el restablecimiento del crédito, y el

⁸⁴⁸Ibidem.

⁸⁴⁹ Ibidem.

que cuantos más compradores hubiese, tantos más interesados se contarían en la conservación y marcha del sistema:

"(...) Constaba que había personas que entorpecían⁸⁵⁰ la enajenación de fincas(..) desde que se acordó por las Cortes la ley de extinción de monacales (..) parecía que habían ocultado los títulos de muchas de sus fincas, eludiendo la entrega a pretexto de haberse extraviado, con lo cual se retardaba y aun imposibilitaba el sacarlas a pública subasta (..), a estos obstáculos se añadían las sugerencias y persuasiones secretas con que se procuraba arredrar e inspirar recelos a varios acreedores, que, más timoratos que ilustrados, se retraían a comprar⁸⁵¹ (...)" .

El diputado por Jaén, Marín Tauste, presentó meses después una indicación a solicitando que las Cortes advirtieran al Gobierno de las irregularidades que estaban produciéndose:

"(...) Demoras considerables en los funcionarios, que no reclaman con energía ni las fincas ni los réditos de caudales y establecimientos que las Cortes han agregado al Crédito (),

⁸⁵⁰ Cano Manuel que presidía esta sesión mencionó como los dos principales : "el Nuncio de su Santidad y la resistencia de los Rdos. Obispos". D.SS.Cortes, sesión de 22 de marzo de 1821.

⁸⁵¹ Intervención del diputado Arrieta en D.SS.Cortes, sesión de 22 de Marzo 1821.

(con) gravísimos perjuicios a la Nación entera, ⁸⁵²(...)".

Ante las reiteradas quejas el Gobierno dispuso una visita a las oficinas de Hacienda y a las del Crédito público. Según su dictamen existían graves problemas pero obedecían a motivaciones diversas. Unas provenían de las comunidades religiosas, que ocultaban los títulos de muchas de sus fincas, eludiendo la entrega a pretexto de haberse extraviado, con lo cual se retardaba y aun imposibilitaba el sacarlas a pública subasta; pero a este obstáculo se añadían las "sugestiones y persuasiones secretas con que se procuraba arredrar e inspirar recelos a varios acreedores" que, más timoratos que ilustrados, se retraían a comprar. Y por último estaban las de carácter más objetivo, que puso de relieve en su informe la comisión de Visita del Crédito público:

"(...) Los bienes de los monacales, la mejor y más sana parte de la hipoteca de la Deuda pública, gravados sobre la pensión de los monjes con la que se paga a los frailes y monjas que se secularizan, se puede ya considerar como nulos para su primitivo objeto; y dentro de pocos meses, a medida que se vayan aumentando el numero de secularizados, y se vayan disminuyendo con las ventas los productos de las fincas, no alcanzarán a cubrir sus obligaciones⁸⁵³ (...)"

⁸⁵² Ver D.SS. Cortes sesión 15 de mayo de 1821.

⁸⁵³ Ver D.SS. Cortes extraordinarias, sesión de 14 de noviembre de 1821.

7.5. Revolución y Reacción .-

Malestar del clero.

De todos los problemas que tenía planteados el país, las Cortes dedicaron una atención mayor a los relacionados con la Iglesia. Partiendo de su particular y reductiva definición de la realidad, siguieron embarulladas con el tema de los eclesiásticos, ("son la causa de los males que tenemos y de los que nos amenazan, y son responsables de la sangre que se ha vertido y que pueda verterse"⁸⁵⁴). Como veremos, el ataque contra la fortaleza eclesiástica seguía siendo frontal, a las reformas planteadas se añadieron otras nuevas y para combatir el descontento que todas provocaban estaban dispuestos los diputados a recurrir a la represión.

De una parte, siguieron profundizando aquellas reformas económicas que además de remover obstáculos a la prosperidad de los pueblos debilitaban la posición de la Iglesia, como la supresión del medio diezmo⁸⁵⁵. Estimaban poseer la fórmula para dotar adecuadamente al clero sin perjudicar el fomento de la agricultura. En apoyo del proyecto sobre diezmos

⁸⁵⁴ Ver intervención de Romero Alpuente con motivo de la "efervescencia desgraciada" de Salvatierra. Ver D. SS. Cortes, sesión de 26 de abril de 1821.

⁸⁵⁵ Ver en especial D.SS. Cortes, sesión de 21 de mayo de 1821. Y decreto de las Cortes de 29 de junio de 1821, de reducción de diezmos e indemnización de partícipes legos.

proyecto de 29 de abril de 1821 dirigidas al castigo de los eclesiásticos. Considerando tan notorio como "funesto a la Monarquía" el abuso que hacían algunos eclesiásticos de su sagrado ministerio, para fomentar directa o indirectamente la sedición, el Gobierno exigía la más estrecha responsabilidad a cualquier Obispo que dé licencias de confesar y predicar, o las conserve a sacerdotes desafectos al régimen constitucional.

El decreto hacía responsables a los Prelados de las diócesis de cualquier defecto que contra el crédito y la observancia de la Constitución cometiesen sus súbditos. Quedaban eximidos los obispos de esta responsabilidad, cuando hicieran constar que habían procurado corregirlos oportunamente, o castigarlos según los cánones y las leyes del Reino. Planteamiento que equivalía a sentar la doctrina de que los prelados eran culpables mientras que no demostraran lo contrario. Por último, exigía en sus disposiciones al Rdo. Obispo de Tortosa, el cumplimiento de la ley de 25 de octubre de 1820⁸⁵⁷.

Las Cortes, no se anduvieron con paños calientes⁸⁵⁸. Para evitar los problemas que les daban los eclesiásticos

⁸⁵⁷ Ver Dictamen de la comisión especial nombrada por las Cortes para proponer las medidas que exigió el diputado moderado por Valencia Sancho en D.SS. Cortes, sesión de 29 de abril de 1821.

⁸⁵⁸ La expresión fué utilizada por el doceañista diputado por Extremadura Calatrava. Ibidem.

alegaba el diputado por Madrid:

"(...) ¿Será justo que siendo los partícipes de los beneficios del culto y de las ventajas de la religión todos los individuos del Estado, sola la clase agraria satisfaga el sustento de sus ministros? (...) Siendo una contribución, no encuentro razón para hacer que exclusivamente grave sobre una clase. (...) ¿Y será justo que formando la riqueza de una nación la masa total de sus productos unos paguen y otros no? Otras razones de conveniencia pública exigen que se atendiese a ésta clase, que es el ramo principal de nuestra riqueza; porque en vano queremos fomentar nuestra industria, mientras nuestros campos estén áridos, nuestro labradores llenos de andrajos, y nuestras familias rústicas no puedan lograr lo que un Rey de Francia deseaba a las de su país, a saber, que pudiesen comer una gallina en su puchero. No comerán, no, mientras este gravamen persiga a la agricultura (...) Si se quiere que el clero se interese verdaderamente en el sistema constitucional, y que tome interés en que se consolide y marche adelante, hagamos de manera que la subsistencia de los clérigos dependa del Estado⁸⁵⁶ (...)".

De otra, aprobaron leyes de carácter represivo "para destruir el espíritu de sedición que propagan". Dentro de las medidas que los liberales adoptaron contra el clero, resultaban de especial dureza las contempladas por el

⁸⁵⁶ Pasaje de la intervención del diputado por Madrid Gasco, ver D.SS Cortes, sesión de 18 de mayo de 1821.

plantearon confinar al clero del proceso electoral. Al final la medida se redujo a hacer extensivo a los arzobispos y obispos lo que mencionaba el art. 97 de la Constitución en relación con los empleados públicos. En virtud de lo cual, no podían ser nombrados Diputados por la provincia en que se hallen empleados. Motivaron la decisión alegando que el ministerio ejercido por esas dignidades episcopales, aunque principalmente era espiritual y eclesiástico, tenía además alguna parte de político y secular ⁸⁵⁹.

En su concepto los Prelados eran los más desafectos al sistema, de ahí que pretendieran remediarlo, sin éxito, con toda una serie de disposiciones de carácter represivo ⁸⁶⁰, para dar vigor a las leyes y tranquilidad al Estado. Su resultado fué reducir las adhesiones y, posiblemente, intensificar el conflicto:

"(...)Apenas se ha levantado una partida en España que no contase entre sus filas y a su frente indignos ministros de una religión dulce (...) ¿ Habría quien siguiese a los

⁸⁵⁹ La idea era extender la medida a canónigos, curas párrocos y demás eclesiásticos afectos al servicio de la Iglesia. Ver D.SS.Cortes, sesión de 5 de abril 1821; la proposición era del diputado Arrieta. Discusión del dictamen de la comisión primera de legislación el 20 junio de 1821.

⁸⁶⁰ Según sugerencia de Muñoz Torrero, el Gobierno no podía privar a los eclesiásticos de sus destinos, ni suspenderles el ejercicio de ellos; porque el decreto de 24 septiembre 1810 hablaba sólo de los empleados civiles y militares y no incluía los eclesiásticos. En cambio, podía impedirles el que los ejerzan en nuestro territorio. Ibidem.

forajidos que intentan honrarse con el título de defensores de la fé si los párrocos persuadieran a sus feligreses ? (...) Nada de esto se hace (...) En muchas partes no explican los curas la Constitución (...) y los Prelados lo consienten o toleran. (...) Acaso las maquinaciones de algunos eclesiásticos contra la Constitución, desde que lo últimos decretos sobre diezmos les han dado motivo⁸⁶¹ (...)"

De acuerdo con el Informe de la comisión especial creada por las Cortes, si el clero estaba "extraviado" y ejercía un influjo fatal sobre los pueblos provenía de la indotación de esa "parte preciosa" del clero que eran los curas párrocos:

"(...) Según las noticias que se reciben todos los días por medio de los comisionados del crédito público, de las maquinaciones de las Juntas diócesanas, que lo menos malo que hacen por lo general es no hacer nada para activar y hacer productivo el medio diezmo; (...) estas Juntas tienen a los párrocos en la mayor miseria⁸⁶² (...)"

7.6. Descontento de los campesinos.

Lo más grave de las leyes eclesiásticas aprobadas por

⁸⁶¹Dictamen de la comisión especial encargada de examinar el estado político del Reino. Ver D.SS.Cortes, sesión 15 de junio de 1822.

⁸⁶² Ver D.SS.Cortes, sesión 20 octubre 1822. Discusión del Dictamen de la comisión nombrada para examinar el estado del Reino.

las Cortes (supresión de monacales, reducción del diezmo a la mitad), era que aumentaron el descontento y el número de desafectos hacia el sistema constitucional, sin producir en cambio el beneficio esperado entre los campesinos. La razón de este singular fenómeno fué subrayada en las Cortes:

"(...) Se dice que se les ha dispensado de la mitad del diezmo. Yo (...) lo que sí sé es que hasta ahora, y especialmente desde que las ideas religiosas se resintieron con el trato de los extranjeros, el pago del diezmo era tan inexacto, que no llegaba a la mitad. Nada pues ha adelantado la Nación; antes ha perdido ⁸⁶³ (...)".

Las Cortes extraordinarias en vista de las representaciones de partícipes seculares de diezmos, quejándose de que ni se les había pagado diezmos ni se les había indemnizado los capitales⁸⁶⁴, propusieron una corrección de la ley de 29 de junio para dar solución a esos efectos perversos ocasionados por la reforma.

En cambio, los curas no consiguieron resolver el grave problema de su indotación ⁸⁶⁵; y a los campesinos (con el

⁸⁶³ Sobre todo si, como señaló Romero Alpuente, era utilizada como pretexto para aumentar otras contribuciones, Ver D.SS.Cortes, sesión de 15 de junio de 1821.

⁸⁶⁴ Según la comisión de Hacienda las representaciones las dirigieron el Duque de Frías, los Marqueses de Santiago y de Pontejos y otros varios partícipes en la diócesis de Valencia. Ver D.SS Cortes, sesión de 7 de enero de 1822.

⁸⁶⁵ Ver D.SS.Cortes, sesión de 7 de enero de 1822.

pretexto de la rebaja del diezmo) se les perjudicó con una reforma en las contribuciones que les gravaba en una proporción superior a las otras clases. El diputado por Aragón, Solanot, refiriéndose a la reforma propuesta afirmaba:

" (...) La contribución de 150 (millones de reales) sobre la rentas de los predios rústicos es enorme, porque gravita exclusivamente sobre estas rentas una contribución mayor que la que se impuso en el año económico que va a finar sobre todas las riquezas, agrícola, comercial, fabril e industrial; y unida a la contribución del medio diezmo, adoptada por las Cortes, hace que gravite sobre la clase agricultora exclusivamente un gravamen insoportable de 450 (millones) en estas dos solas contribuciones; y contribuyendo a más la clase agricultora en proporción con las demás clases (...). Parece justo se tenga con la miserable clase agrícola la consideración que merece (...). De otra manera, (...) privando del alivio y consideración que la Constitución atribuye a todos los españoles, a la clase agricultora, (...) ¿cómo podrá amar la Constitución, si ve que se la priva de este beneficio y se le deja sin subsistencia?⁸⁶⁶ (...) ".

Cuando los dirigentes liberales responsabilizaban a los

⁸⁶⁶ Dictamen de la comisión especial de hacienda sobre el valor aproximado de las rentas del estado que se establecen por el nuevo plan de la hacienda, y las cuotas de la contribución directa y de consumos. D.SS.Cortes, sesión de 28 de junio de 1821.

clérigos descontentos, (que tenía sumidos en la miseria), de seducir a los campesinos para luchar contra el sistema constitucional, estaban alterando la definición de la situación. Constituía una huída de la realidad atribuir esta alianza, entre eclesiásticos y campesinos, a "la sencillez o escasa instrucción de esos ciudadanos que creen, por lo común ciegamente, a las personas que están acostumbrados a respetar". Por más que se resistieran claramente a admitirlo, la reforma de la contribución en perjuicio de los campesinos, y los efectos negativos de la ley de reforma de los monacales y diezmos, proporcionaban motivos de descontento suficientes para entender aquella intensa alianza; implícitamente estaban reconociendo este planteamiento cuando proponían como remedios urgentes para contrarrestarla:

"(...) Creación de escuelas de primeras letras y la publicación de catecismos políticos y otros semejantes al alcance de los labradores, para que vayan empapándose en la doctrina constitucional, así como en la cristiana (...) la desamortización, distribución de baldíos y otras leyes paternales (...) que las Cortes procuren aliviar en lo posible su suerte, reduciendo las contribuciones⁶⁶⁷ (...)".

Las desacertadas reformas de la contribución en perjuicio de los campesinos, el justificado descontento existente por las reformas en el clero, y la persecución a

⁶⁶⁷ Ibidem.

los prelados, sin duda contribuyeron a crear las condiciones propicias para las insurrecciones. Era indiferente que fueran los empleados de hacienda o las Juntas diocesanas⁸⁶⁸ quienes, con sus prácticas de gestión, o sus insidiosas maniobras y resistencia terrible al cumplimiento de los decretos de las Cortes, provocaran la hostilidad al sistema. El resultado era que los párrocos no cobraban, a los campesinos se les apremiaba y a los prelados se les amenazaba o expulsaba.

Habiendo tantos motivos de descontento la denominada pomposamente Junta central de conspiradores, con ramificaciones en las provincias, y en permanente actividad, no precisaba de grandes esfuerzos para coordinar el malestar. Las agitaciones contaron con la participación de "la parte del pueblo de menor significación", y tuvieron lugar:

"(...) En los pueblos más atrasados en la instrucción y los más fanatizados (...) que siendo de escaso vecindario encierran en sus recintos catedrales considerables, número de clero desproporcionado (...) conventos y monasterios (...)

⁸⁶⁸ Para quitar de una vez el pretexto de que el clero tomaba parte en las facciones porque estaba indotado, los diputados Canga y Afonso hicieron a las Cortes de 1822 otra nueva proposición: "(...) Que el clero parroquial se componga y ajuste con los pueblos, pagándoles cada vecino en razón de su riqueza respectiva (...) y recibiendo el clero superior su haber de la Tesorería de la Nación, suprimiéndose el medio diezmo, apropiándose el Estado los bienes, y extinguiéndose las Juntas diocesanas". Ver D.SS, Cortes, sesión de 20 de octubre de 1822.

apegados a doctrinas ultramontanas⁸⁶⁹ (...)".

Citaba entre ellos los de las provincias de Aragón, Castilla la Vieja, La Mancha, Cataluña, Valencia y muchos de la provincia de Navarra⁸⁷⁰. Los meses de abril (Burgos y Salvatierra) a julio fueron los de mayor actividad de los facciosos⁸⁷¹. Sin duda el aplastamiento de la revolución de Nápoles contribuyó decisivamente a impulsar estas agitaciones:

"(...) Así como los acontecimientos exteriores favorables a la libertad habían contribuido en un principio a contener los perversos designios de los mal intencionados, así después con el funesto trastorno de las cosas políticas en Italia cobraron ánimo de repente, y tomaron de allí ocasión para desalentar a los tímidos, alucinar a los incautos y agitar a los descontentos. Desde aquella época precisamente sus movimientos son más activos y generales; (...) sus conjuraciones se convierten en insurrecciones

⁸⁶⁹ Voto particular del Informe sobre el estado político del Reino, de los diputados Ruiz de la Vega y Zulueta. Ver D.SS.Cortes, sesión 15 de junio de 1822.

⁸⁷⁰ Ver Voto particular de los diputados Ruiz de la Vega y Zulueta, sobre el Dictamen de la comisión especial encargada de examinar el estado político del reino. D.SS.Cortes, sesión de 15 de junio de 1822.

⁸⁷¹ Una información comedida ofrecían las Memorias leídas en las Cortes por los Secretarios del Despacho de Gobernación de la Península y del Despacho de Guerra. Ver D.SS.Cortes sesiones de 3 y 4 de marzo de 1822, respectivamente.

abiertas⁸⁷² (...)".

Las Cortes para premiar a las tropas que prendieron y exterminaron a los facciosos que infestaban las provincias de Burgos y Guipúzcoa, crearon la orden nacional de la Constitución. En su anverso estaba el símbolo de la Constitución y en su reverso figuraba la leyenda: "Antes muerto que esclavo"⁸⁷³.

No fueron en balde estas insurrecciones⁸⁷⁴. Gracias a la presión ejercida por el clero consiguió la Iglesia que las Cortes, suavizaran la aplicación de la ley de los frailes:

"(...) En la ley sobre regulares, las Cortes declararon reformados o extinguidos todos los monasterios y después de decretada solemnemente esta extinción, solo por una insinuación del poder ejecutivo se dejaron una porción de monasterios, volviéndose atrás el Congreso de lo que había declarado⁸⁷⁵ (...)".

⁸⁷² Ver Memoria del Secretario del Despacho de la Gobernación, D.SS.Cortes, sesión 3 de marzo de 1822.

⁸⁷³ Proposición presentada por Romero Alpuente, Gasco y Navarro, D.SS.Cortes, sesión de 10 de mayo de 1821.

⁸⁷⁴ Los desgraciados acontecimientos de Nápoles y la extensión del movimiento conspiratorio tuvieron efecto en las ventas de las fincas del Crédito Público. Ver intervención de Toreno en D.SS.Cortes sesión de 4 de mayo de 1821.

⁸⁷⁵ El comentario pertenece a un discurso de Palarea tratando sobre las deferencias del Congreso hacia el poder ejecutivo. Ver D.SS. Cortes, sesión de 3 de febrero de 1822.

Separación de América.

Obsesionados por los problemas internos los diputados no fueron capaces de atender adecuadamente a las denominadas provincias de Ultramar⁸⁷⁶. Cuando se acercaba el fin de la segunda legislatura de las Cortes ordinarias, y después de un dictamen de trámite de la comisión especial sobre ultramar, los diputados de aquellas provincias leyeron en el Congreso una larga exposición expresando su decepción:

"(...) Los diputados de las provincias de ultramar(...) han visto con el mayor dolor desvanecerse las halagüeñas esperanzas sobre la suerte futura de las provincias que representan (...) , del dictamen que se ha leído ayer, (Toreno) (...) se concluye únicamente que las circunstancias de America son las más críticas ⁸⁷⁷(...)"

A continuación referían que la Constitución no estaba vigente en aquellos países y que Las Américas continuaban gimiendo bajo el enorme peso del despotismo:

"(...) No menos ahora que en el sistema anterior (...), (aunque) ahora se les anuncia pomposamente que son libres(...)"

⁸⁷⁶ Ver M. Fernández Almagro, La emancipación de América y su reflejo en la conciencia española, Madrid, 1957.

⁸⁷⁷ D.SS.Cortes, sesión de 25 de junio de 1821.

Para proseguir relatando los inconvenientes de la Diputación de América y su sensación de aislamiento, inutilidad y el alejamiento de sus representados:

"(...)El sistema de elecciones establecido (.), y la remisión bienal de Diputados de America, es (...) impracticable (...) ¿Qué proyecto de ley ha podido hacerse extensivo a aquellos países?⁸⁷⁸(...) En el ejercicio del poder judicial corren no menos dificultades (...)".

No faltaron en sus reflexiones una mención en torno a la imposibilidad en que se hallaban los poderes para obrar en America según lo establecía la Constitución y el hecho consumado de la separación inevitable. Partiendo del axioma liberal y filantrópico según el cual, "las leyes se han formado par la felicidad de los pueblos, y no éstos para sacrificarse a las instituciones", y atendiendo al bien del Estado señalaban :

"(...) Careciendo la America en la realidad de los beneficios constitucionales, y no siendo posible al Gobierno hacerlos ejecutar sin adoptar medidas a propósito para establecerlos (...) nada más justo que proponer los medios

⁸⁷⁸ El propio Gobierno confesó -según le recuerdan los diputados- que no consideraba practicable el sistema de los jefes políticos y dejaba los mismos virreyes, con otro nombre pero con la misma autoridad. Ibidem.

(...) salvando así las bases sustanciales de nuestro Código⁸⁷⁹ (...)" .

Las quince medidas contempladas incluían: tres secciones de Cortes, delegación del poder real, cuatro ministerios, tres secciones del tribunal supremo y del Consejo de Estado, proclamación del libre comercio, e igualdad de derechos. A cambio, se comprometían al pago de la deuda de España, y contribuir a los gastos. La propuesta firmada por cincuenta diputados, obtuvo escasa réplica y poca aceptación.

7. 6. Elecciones de 1821.-

Atmósfera electoral.-

El Gobierno de Feliú no supo ganarse el apoyo de las Cortes, y mostró una torpeza notable en su gestión. La mayoría moderada en el Congreso le reprochó que, debido al general desorden de su Administración, incumplía los decretos de las Cortes sobre reemplazo en el ejército y había convertido en impracticable el sistema de Hacienda⁸⁸⁰ .

Más graves fueron los problemas provocados por su incapacidad para afrontar la tensa y conflictiva situación

⁸⁷⁹ ¿Cuántos artículos de la Constitución no se hicieron a un lado para acelerar como convenía la instalación del actual Congreso? Ibidem.

⁸⁸⁰ Un alegato contra la actuación del Gobierno en D.SS.Cortes extraordinarias, sesión 13 de diciembre de 1821.

por la que estaba atravesando el país. En medio de las insurrecciones absolutistas, el Gobierno se enmarañó en una serie encadenada de decisiones poco afortunadas, (desde la persecución del héroe a a la tibieza hacia los conspiradores), que fueron percibidas por los liberales radicales como atentados al sistema constitucional.

Comenzó con la discutida destitución de Riego⁸⁸¹ por la acusación velada de republicanismo⁸⁸², prosiguió con la suspensión de las Sociedades⁸⁸³ y la Circular reservada para elecciones y remató su actuación con una política de nombramientos que hizo cundir la alarma⁸⁸⁴. Su política fué provocando una respuesta de intensidad creciente, lo que comenzó con procesiones cívicas y representaciones en desagravio al héroe de Cabezas, finalizó en un movimiento

⁸⁸¹ Actas 2ª Diputación permanente Cortes, sesión de 7 septiembre de 1821. Da cuenta que una porción de personas se dirigió a la Diputación solicitando que cooperase con su influjo a que el Rey se restituyese a esta capital y que el Gobierno publicase los fundamentos de sus providencias respecto del general R. Riego.

⁸⁸² Como fué recordado en las Cortes, corriendo la voz que había un partido en España que trataba se pusiese la República se destruyó la Constitución el año 14. Ver D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 14 de diciembre de 1821.

⁸⁸³ El diputado Muñoz Arroyo dijo: "Al gobierno le incomodaba que le censurasen en estas sociedades las remociones que había hecho y las mandó cerrar". D.SS.Cortes sesión de 14 de diciembre de 1821.

⁸⁸⁴ A lo que contribuyó el Monarca con sus nombramientos de Secretarios del Despacho de Guerra, ver Actas secretas de la 2ª Diputación permanente, sesión 4 de septiembre de 1821.

general de desobediencia civil apoyado por las autoridades, que se inició en Cádiz y Sevilla y se extendió a otras ciudades.

Contribuyó decisivamente a esta conflictiva situación, las desacertadas medidas adoptadas por el Gobierno para controlar las elecciones a Cortes que debían celebrarse en los tres últimos meses del año, en particular su política de nombramientos y la circular reservada dirigida a los jefes políticos.

A través de los nombramientos pretendía el Ministerio llevar a cabo en un momento delicado, la destitución de todos los generales con mando en las principales capitales, que se habían "granjeado la veneración pública por sus esfuerzos a favor de la causa de la libertad":

"(...) ¿Quién del Congreso, al ver que todos los puntos fuertes e importantes estaban puestos en las manos de los hijos queridos y predilectos de la libertad, la Navarra en las de Lopez Baños, el Aragón en las de Riego, Cataluña en el bien opinado entonces Villacampa, Valencia en un compañero mio de (...) prisiones (...) Granada en Campoverde, Cádiz en Jaúregui, Galicia en Mina, Zamora en el Empecinado, Valladolid en Espinosa, Madrid en Villalba; no creyó asegurado el cumplimiento de las leyes regeneradoras, y la existencia de los regeneradores? (...) ¿Quién pues al contrario no había de sentir la mayor pesadumbre, y no había

casi de desfallecer al mirar que hoy uno, mañana otro, a este por haber dado permiso para pasear el retrato de Riego, a aquel por no haberle prohibido, al otro por haber representado, nos iban arrebatando a nuestros héroes, y entregándonos a nuestros enemigos o a quienes no conocíamos como amigos⁸⁸⁵ (...)?"

Los cambios tenían relación con la especial atención que el Gobierno dispensaba a las elecciones. En su afán por controlar el proceso electoral que comenzaba en octubre, envió una circular reservada a los jefes políticos de las provincias a quienes, por cierto, también procedió a renovar. La circular fué hecha pública por Copons, jefe político de Madrid, en la Fontana . En el dictamen de Las Cortes haciendo inventario de los desaciertos, al referirse a la circular señalaba:

"(...) ¡Cuánto no se aumentaron (las opiniones extraviadas) y hasta que punto (...) no llegó la desconfianza ominosa cuando ignorando los motivos en que pudo fundarse el Ministerio se enteró el público de la circular que por la Gobernación de la Península se remitió a los jefes políticos con ocasión de las próximas elecciones para diputados a Cortes! Esta medida, inspirada acaso por un celo poco reflexivo, irritó y dividió los ánimos, y provocó pasiones

⁸⁸⁵ Intervención de Romero Alpuente, en el debate sobre las agitaciones de Cádiz y Sevilla, ver D.SS. Cortes, sesión 23 de diciembre de 1821.

violentas, y encendió el resentimiento en un gran número de personas que, con fundamento o sin él, creían poder presentar títulos respetables a la gratitud nacional⁸⁸⁶ (...)" .

El Secretario de la Gobernación expresó su sorpresa ante el revuelo provocado por la circular. En su comparecencia ante el Congreso manifestó que encontraba exageradas las críticas recibidas y redujo el asunto a un problema de indiscreción de las autoridades:

"(...) Se ha querido hacer un crimen al ministerio de que hubiese dado el carácter reservada a dicha circular, sin advertir que debiendo resentirse de ella algunos sujetos, no era conveniente darle publicidad; y que el ministerio no tiene la culpa de que un jefe político se pusiese a leerla en un café⁸⁸⁷ (...)" .

La justificación que hizo de su actuación el Ministro de Gobernación era bien simple.. El Gobierno tenía noticias de la influencia que se quería ejercer en las elecciones y decidió intervenir para contrarrestarlas:

"(...) El Gobierno sabía que otra clase de personas y Gobiernos expedían circulares para influir en las elecciones; cuando no contentos con haberlo hecho entonces lo

⁸⁸⁶ D.SS.Cortes, sesión de 12 de diciembre de 1821.

⁸⁸⁷ Ver D.SS. Cortes, sesión de 13 de diciembre de 1821.

han repetido posteriormente, ¿cómo había de desentender un objeto tan importante? (...) En ningún Gobierno representativo se le ha inculcado nunca al Gobierno de indicar las medidas convenientes para evitar los abusos en las elecciones de diputados a Cortes(...) Me parece que el encargar a los jefes políticos que influyan del modo que les sea permitido (...) no es ilegal⁸⁸⁸ (...)".

La candidez del Gobierno con su circular, su política de ceses y nombramientos, su aislamiento y falta de apoyos impulsaron las agitaciones favorables a la Constitución. Tuvieron lugar en los pueblos "más ilustrados y adelantados en la civilización" : Cádiz, Sevilla, Granada, Málaga, Murcia, Córdoba, Jaen, Badajoz, Barcelona, Coruña, Valencia, Madrid, y Zaragoza⁸⁸⁹.

El conflicto discurrió coincidiendo con la celebración de las juntas electorales de Partido y Provincia (noviembre y principios de diciembre) respectivamente. Cádiz y Sevilla fueron las capitales en las que el movimiento alcanzó mayor intensidad y duración, llegando a convertirse en un movimiento de desobediencia civil que protagonizaron las autoridades civiles y militares de ambas provincias. Las autoridades constituidas en juntas, no aceptaron la sustitución de las autoridades militares propuestas por el

⁸⁸⁸ Ibidem.

⁸⁸⁹ Ibidem.

Gobierno por entender que no reunían las condiciones de lealtad al sistema constitucional requeridas por la ley⁸⁹⁰.

Desbordado por los acontecimientos el Ministerio recurrió a las Cortes en busca de apoyos para aplacar la agitación de las provincias andaluzas. Acudía el Gobierno al Congreso en nombre del Rey porque entendían que la desobediencia que estaban llevando a cabo los ciudadanos, so pretexto de amor a la Constitución, atentaba contra las facultades del trono y los principios del sistema. Adujeron la necesidad :

"(...) Que se conserven ilesas , así como las libertades públicas, las prerrogativas del Trono(...)".

En asunto de tanta trascendencia, los diputados en minoría de la asamblea se mostraron partidarios de solicitar la remoción de los ministros como causantes de la actuación de los pueblos. Entendieron que no había existido desobediencia ni un ataque a las facultades de la Corona que requiriera el correspondiente castigo de los culpables, sino que todo obedecía al extravío del Gobierno:

"(...) Examinando el asunto con la debida detención e imparcialidad , no podríamos desconocer que los causaron

⁸⁹⁰ Ver mensaje del Rey a las Cortes en D.SS. 26 de noviembre de 1821. El inicio de los acontecimientos tuvo lugar el 18 de octubre y en los meses de noviembre y diciembre persistía el conflicto.

únicamente los desaciertos y extravíos del Gobierno; (...) Examinemos ante todas cosas la conducta de los que componen el actual ministerio y veamos si con sus faltas y sus errores han podido preparar las demasías de los pueblos. (...) Si la comisión considera que la falta y errores de los ministros (escandalosa destitución de Riego, desorden de la administración, tibieza contra conspiradores y rumores maliciosos de facción republicana), eran tales que pudieron preparar los males actuales, ¿no tendrían bastantes motivo los pueblos para creer que se preparaba una agresión contra el sistema?⁸⁹¹ (...)" .

La mayoría del Congreso intentó enfriar el asunto pasándolo a una comisión que presentara el correspondiente dictamen. Hasta que no finalizaron las elecciones no tuvo lugar el debate sobre la complicada propuesta de Calatrava, que pretendía de un golpe "curar los males de la patria y defender la libertad en el mundo mediante una doble decisión".

En primer lugar el Congreso debatió el mensaje del Rey calificando la actuación de las autoridades de Cádiz y Sevilla como funesta para la Nación y la libertad:

"(...) Los jefes políticos y comandantes generales de Cádiz y Sevilla no sólo han errado, sino que no han advertido que con

⁸⁹¹ Intervención de Florez Estrada en D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 11 de dicimebre de 1821.

su conducta contribuían a legitimar, si fuese posible, las maliciosas acusaciones con que los fautores del despotismo pretenden desacreditar las instituciones liberales y persuadir que es incompatible la libertad con el orden (..) Han resuelto como medida preliminar hacer la solemne declaración de que unos y otros deben obedecer las órdenes de V.M. ⁸⁹² (...)" .

Posteriormente discutieron y aprobaron la segunda parte del dictamen, contenida en sobre cerrado, en la cual habiendo declarado públicamente que sólo la unión de las Cortes con el Monarca puede conservar la Constitución, acordaban.:

"(...) Para calmar los temores y la desconfianza pública, y para dar al Gobierno toda la fuerza se necesita que S.M. se digne hacer en su ministerio la reforma que las circunstancias exigen imperiosamente ⁸⁹³ (...)" .

La comisión redactora del expediente que dió lugar al mensaje de las Cortes, motivaba su solicitud de reforma del Ministerio alegando:

"(...) La inobediencia de las autoridades de que se queja S.M. en su mensaje, ha hecho ver que el ministerio no

⁸⁹² Ver D.SS.Cortes, sesión de 11 de diciembre de 1821.

⁸⁹³ Ver D.SS.Cortes, sesión de 12 de diciembre de 1821.

tiene ni fuerza física ni moral para mantenerse, y ha habido necesidad de acudir al Congreso. (...) Todo esto debe desengañar al actual ministerio y persuadirle que está en una situación delicada, y que no le queda otro recurso que abandonar su puesto para evitar males mayores⁸⁹⁴ (...)"

Finalizaban las Cortes el escrito, mostrando su disposición a deliberar sobre los proyectos de ley que el Monarca propusiese para remediar los males y los abusos.

A pesar de la solicitud imperiosa de las Cortes para que el Monarca reformara su Gobierno, el Rey opuso resistencia. Lo más que consiguieron las Cortes fué, debido a dimisiones, que los siete ministros quedaran reducidos a tres:

"(...) Como si estos sólo tuvieran la fuerza moral que faltaba a los siete juntos⁸⁹⁵ (...)"

En el decreto por el que el Monarca acordaba el cese de los ministros, advertía que aceptaba la dimisión no porque existiera motivo alguno, sino por la fuerza de las circunstancias. Lo que significaba respaldar públicamente a los ministros y desairar a las Cortes.

⁸⁹⁴ Ver intervención de Calatrava en D.SS.Cortes, sesión de 13 de diciembre de 1821.

⁸⁹⁵ Ver intervención de Calatrava en D.SS.Cortes sesión de 2 de febrero de 1822.

En suma, cuando el Gobierno recurrió a las Cortes en nombre del Rey buscando apoyos contra las agitaciones, con su gesto estaba reconociendo su incompetencia y absoluta incapacidad para controlar la situación. El Congreso estaba reunido, en sesión extraordinaria, para debatir exclusivamente proyectos como el de división del territorio, nuevo código penal y la ley de beneficencia. Ante la gravedad de los acontecimientos, sus miembros decidieron por mayoría interrumpir sus discusiones puntuales para deliberar sobre las agitaciones y dar el golpe de gracia al Gobierno.

Las acaloradas sesiones sobre las agitaciones en las provincias andaluzas, no afectaron para nada el curso de las elecciones; sin embargo la reacción del Congreso ante las agitaciones acabaría teniendo serias repercusiones en el porvenir del régimen.

Campaña del Gobierno: la circular.

Mediante la circular reservada a los jefes políticos "a fin de que influyan del modo más positivo para evitar que en las próximas elecciones tengan influjo, ni sean electos los conocidos con el nombre de exaltados, como ni los afrancesados", pretendía el Gobierno contrarrestar las diferentes intrigas que se movían en algunas provincias, en las que ya habían empezado a correr listas de las personas

que se designaban para diputados⁸⁹⁶.

El Gobierno se dirigía a los jefes políticos en nombre del Rey para que con la "conveniente prudencia" adoptaran las medidas apropiadas, para que recayera la elección de los diputados a Cortes de la legislatura de 1822 y 1823 en personas adornadas de las siguientes calidades:

" (...)1. Adhesión a la Constitución y al Rey constitucional.

2. Haber dado pruebas de amor a la independencia de la patria en la última invasión de los franceses, sin haber admitido empleo del Gobierno intruso, ni mantenido relaciones que puedan hacer dudoso su patriotismo.

3.No ser de aquellos a quienes la opinión pública designa con razón como promovedores de opiniones y principios exagerados.

4. Ser tan amante de nuestras instituciones como interesados en la tranquilidad de la patria. Para obtener este resultado, y siguiendo el espíritu del artículo noventa y dos de la Constitución, conviene que los elegidos sean, siempre que se pueda propietarios o individuos que por su posición y relaciones en la sociedad deban resistirse a innovaciones peligrosas y contrarias a la Constitución misma.

5. Como los eclesiásticos que pueden merecer la confianza pública para ser diputados serán más útiles

⁸⁹⁶ Según Mac-Crohon, "Impugnación a una circular del Ministerio de Gobernación de la Península", Madrid, 1821. Los entresijos de esta historia los desvela Novales, op. cit. pág. 639.

ocupándose en ilustrar al pueblo de sus respectivas diócesis, es conveniente que los que vengan a las Cortes sean en muy corto número (...)"

Finalizaba la circular indicando a los jefes políticos que para formar "una verdadera opinión pública y contrarrestar y destruir las intrigas de los enemigos de la Constitución, cualesquiera que estos sean ", recurrieran a la imprenta, y al influjo de algunas personas ilustradas y de buena reputación. Para lo cual se les recomendaba especialmente:

"(...) Haga una visita a los principales pueblos de su provincia, y establezca en ellos relaciones que aseguren el resultado de las elecciones próximas; bien entendido que los gastos que ocasionen estos viajes le serán abonados en cuenta, como hechos en un servicio el más importante que pueda hacerse a la nación, y en el cual espera S.M. encontrar confirmada la buena opinión que V.S. merece por su patriotismo, su celo por el bien público, y su amor a su real persona y a las instituciones que nos rigen⁸⁹⁷ (...)"

La aparición de la circular hizo del Gobierno blanco de las críticas de la prensa burlesca que en tono jocoso hacía

⁸⁹⁷ Circular reservada, Madrid, 27 de julio de 1821. en Vayo y Lafuente, Documentos, ob.cit.

inventario de sus desatinos ⁸⁹⁸:

"(...) Necesitamos armarnos de toda la paciencia de Gobierno cuando nos acercamos a un corrillo de la Puerta del Sol, de la Fontana, y (...) de todos los sitios públicos de Madrid. Allí se trata, por ejemplo, del Excmo. señor Secretario de Estado y del despacho de Gobernación de la Península, don Ramón Feliú, y oímos con la mayor pena que sacan a relucir todos sus trapos. Dice un exaltado que S.E. perdió absolutamente su opinión cuando expidió la circular reservada a los jefes políticos para que procurasen que no fuesen electos diputados a Cortes para la próxima legislatura los hombres de opiniones exageradas. Otro exclama que baje de su silla, pues no debe ocuparla un ministro que ha estampado bajo su firma que el pueblo español no tiene el derecho de representación que quiere apropiarse. Otro grita ¿donde tiene S.E los hilos de las tramas contra el sistema que dijo a las Cortes que estaban ya en su mano? Otro se atreve a proferir que es una infamia haber dicho S.E que había una facción (distinta de la ministerial) que quería robarnos nuestras libertades. Otro recuerda la separación del general Copons del gobierno político de esta capital, para colocar al señor San Martín, y deduce que este milagro se hizo para destruir la tertulia patriótica de la Fontana y perseguir a los liberales. Otro critica el elocuente discurso de S.E en la sesión del 12 de octubre apoyando la pretensión del

⁸⁹⁸ El Eco de Padilla, núm. 15. 15 de agosto 1821. Citado en Novales op. cit. 639.

ministerio de la guerra sobre los diez mil milicianos en la que ha recaído una resolución tan a gusto de la Nación entera.⁸⁹⁹ (...)".

Las páginas de la prensa que tomaban en serio al Gobierno conectaban la Circular con las denuncias de ridículas conspiraciones (citaban Granada y Zaragoza). Indagando al servicio de qué fines se inventaban lo que consideraban como patrañas, sacaron a relucir las elecciones:

"(...) Para legitimar la intervención del Gobierno en las elecciones; el ministerio quiere dirigirlas a su gusto, para ver si puede excluir a personas que le pedirían una cuenta muy severa de su administración; quiere ver si trae a las Cortes a paniaguados para que no le reconvenzan de lo que hace (...); y para que nadie interprete mal este paso, cuida de que pobres gentes a quienes paga, vengan en un tono sibilino a hablarnos de conspiraciones que todos saben que no existen⁹⁰⁰ (...)".

La circular expedida por el ministerio de Gobernación a los jefes superiores políticos provocó polémica ⁹⁰¹ y dió lugar a folletos con "improperios contra las clases de

⁸⁹⁹ Ver El Zurriago, n°12, 2 y 3.

⁹⁰⁰ Miscelánea del Comercio, Política y literatura, n°533. 14 de agosto de 1821.

⁹⁰¹ Desde otra perspectiva menciona el suceso Gil Novales, ob.cit. p.639.

propietarios"⁹⁰². Por encargo del Gobierno, los redactores de la Gaceta intentaron contrarrestarlos. Dedicaron un extenso artículo a justificar esta preferencia por los propietarios para el cargo de diputados en razón a su interés por lo público, preocupación por los derechos, mayor capacidad, y la confianza que inspiraba su generosidad:

"(...) La propiedad (...) en fondos territoriales, ya en capitales empleados en la industria o en el comercio, ha sido generalmente considerada como una calidad necesaria para dar a los representantes aquel grado de interés por el buen manejo de los negocios públicos, por la conservación de las libertades por la promoción de su prosperidad en todos los ramos útiles, y lo que es preferible a todo, para inspirar a los representados que han de obedecer sus decretos aquel grado de confianza tan necesario para que en todas sus resoluciones vean un objeto útil al pueblo, y no una mira de interés personal (...)"

Destacaba la Gaceta, que no constituía una particularidad de la Circular la preferencia expresada por los propietarios, sino que ese requisito figuraba en el articulado del sagrado Código:

⁹⁰² Entre otros se citaba el papel titulado "Contestación imparcial a la proclama del jefe político de León", Ver Gaceta de Madrid, 10 de octubre de 1821.

"(...) La sabiduría de nuestras Cortes extraordinarias reconocieron esta necesidad en el artículo 92, (...) y aunque por efecto de las circunstancias suspendieron sus efectos por el art. 93., queda en su vigor el convencimiento en que estaban (...) de la necesidad y conveniencia pública de que los diputados a Cortes tuviesen una renta anual proporcionada procedente de bienes propios; y estando ya hecha la desamortización civil y eclesiástica será un poderoso estímulo para aumentar el número de licitadores de las fincas desamortizadas y el de propietarios con conocida utilidad del Estado⁹⁰³ (...)" .

Resulta interesante comprobar la identidad que establecía la Gaceta entre la moderación del Gobierno, plasmada en la circular, y la propia Constitución. Supuesta esta armonía entre la circular y el espíritu de moderación de la Constitución, aquellos que atacaban a los autores de la circular caían en el descrédito automático :

"(...) Así es que consiguiente al espíritu de la Constitución la circular del ministerio (...) está de acuerdo con los principios (...) adoptados en nuestro sagrado Código. El espíritu de moderación, que debe ser el del legislador, porque el bien político, así como el bien moral se halla siempre entre dos límites⁹⁰⁴ (...)" .

⁹⁰³ Ibidem.

⁹⁰⁴ Ibidem.

Finalizaba el comentario de la Gaceta encarnando en la clase de propietarios las cualidades precisas, (constancia en el trabajo, prudencia, cálculo, previsión, disposición pacífica), para garantizar el orden público y la conservación de los derechos en las Monarquías moderadas:

"(...) La propiedad territorial hace la hombre indígena del país que habita; opone obstáculos invencibles a su emigración y vagancia (...) La propiedad industrial y comercial da también a sus poseedores calidades que los unen a los intereses comunes, y su existencia es absolutamente necesaria para la conservación y prosperidad de los estados modernos (...) y el comercio (...) está igualmente interesado en la conservación del orden público, y en el respeto a la propiedad y a la seguridad personal que son los elementos de todos los Gobierno⁹⁰⁵ (...)".

La circular sobre las elecciones, además de conmoción afectó el curso de los debates del Congreso sobre la nueva división del territorio. El proyecto de Decreto de división provisional del territorio fué presentado a las Cortes el 1 de octubre. La pretensión era, a tenor de lo que señalaba su articulado, que procedieran las Cortes a una aprobación inmediata del proyecto provisional, para que se celebraran las elecciones de acuerdo con la nueva división.

⁹⁰⁵ Ibidem.

El proyecto de división del territorio perseguía, en esencia, aumentar el número de provincias (cincuenta y una) y reducir su tamaño. Revelaba una preocupación por la racionalización del poder y el perfeccionamiento de la administración⁹⁰⁶ del Estado. Los argumentos aducidos por la comisión en favor de la medida fueron variados: de una parte, que la nueva división significaba el fin de la monstruosa actualmente existente, y por otra que contribuía a acelerar la acción del Gobierno y a estrechar la relación entre gobernantes y gobernados.

Los miembros de la comisión señalaron que sólo mediante provincias proporcionadas podían los ciudadanos disfrutar de sus derechos y aprovecharse de los benéficos decretos de las Cortes. La insistencia en la importancia de la división y la bondad de las provincias cortas provocó variadas intervenciones:

"(...) Por todo lo que he oído en la discusión a los individuos de la comisión, hallo que (...) la causa de que no progrese el sistema constitucional ni se sientan sus beneficios en año y medio que llevamos, consiste en que las provincias están mal divididas (...) pregunto al Sr. secretario del Despacho de Gobernación: respecto de las

⁹⁰⁶ Después de la Constitución el asunto más esencial, porque un "alma bella como la Constitución no podía estar ésta contenida en un cuerpo deforme"; según el diputado por Vizcaya Yandiola. Ver D.SS.Cortes extraordinarias, sesión 1 de octubre 1821.

provincias limitadas y cortas en sus extensión (...) ¿han adelantado más que las grandes en los ramos de administración económica y política? No señor; no veo ni una escuela de primeras letras (...), no advierto adelantamientos en caminos, ni en salubridad, ni en policía, ni en establecimientos de beneficencia, no veo remedio a la mendicidad (...). Luego el mal que se experimenta y el retraso en el sistema no consiste en la extensión de las provincias sino en otras causas⁹⁰⁷ (...)" .

El polémico proyecto además de una nueva división provincial, modificaba la asignación de diputados vigente (art.19). Dividía al territorio en cuatro clases de provincias y, como puede verse en los cuadros adjuntos, asignaba a cada categoría un número de diputados, en función de la población: las que pasen de 315 mil: 5 diputados; las que pasen de 245 mil: 4 diputados ; las que pasen de 175 mil: 3 diputados ; las que no lleguen: dos diputados⁹⁰⁸.

⁹⁰⁷ Intervención del diputado Gonzalez Allende. Ibidem.

⁹⁰⁸ El decreto definitivo corregía el plan general que recogemos en los cuadros adjuntos, entre las modificaciones incluían dos provincias (Villafranca y Vitoria) con un sólo diputado. Ver D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 14 de febrero de 1822.

PROYECTO DE DIVISIÓN DE PROVINCIAS EN CLASES SEGÚN POBLACIÓN Y NÚMERO DE DIPUTADOS A CORTES. -

PROVINCIAS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA CLASE

PRIMERA CLASE DIPUTADOS: 5	POBLACIÓN	SEGUNDA CLASE DIPUTADOS: 4	POBLACIÓN
ARAGÓN	315.111	ALICANTE	255.690
ASTURIAS	343.512	CADIZ	306.417
CATALUÑA	342.935	CUENCA	296.650
CÓRDOBA	337.265	EXTREMADURA	301.125
GALICIA	355.410	JAEN	274.930
GRANADA	322.305	LUGO	262.550
ORENSE	342.370	MADRID	290.495
PONTEVEDRA	344.765	MALAGA	298.312
SEVILLA	365.585	MANCHA BAJA	296.525
VALENCIA	353.760	MURCIA	253.370
		TOLEDO	302.470
TOTALES	3.423.018		3.138.634

PROVINCIAS DE TERCERA Y CUARTA CLASE.

TERCERA CLASE DIPUTADOS: 3	POBLACIÓN	CUARTA CLASE DIPUTADOS: 2	POBLACIÓN
ALMERÍA	223.305	ÁVILA	113.135
BALEARES	229.095	CALATAYUD	105.947
CANARIAS	215.105	CASTILLA	161.277
CASTELLÓN	192.250	GUIPÚZCOA	160.088
EXTREMADURA AL.	199.320	HUELVA	142.425
GERONA	210.920	JÁTIVA	164.795
GUADALAJARA	222.655	LÉRIDA	150.005
HUESCA	182.485	PALENCIA	136.102
LEON	186.697	SEGOVIA	160.757
MANCHA ALTA	186.260	SORIA	105.108
NAVARRA	193.410	TERUEL	105.191
RIOJA	196.440	VALLADOLID	147.710
SALAMANCA	226.832	VIERZO	86.385
SANTANDER	187.675	VIZCAYA	119.858
TARRAGONA	202.845	ZAMORA	150.885
TOTAL.....	3.055.610	TOTAL.....	2.009.768

Fuente: Elaboración propia a partir de los Diarios de sesiones. -

TOTAL DE POBLACIÓN : 11.627.030.

TOTAL DE DIPUTADOS : 168

Las disputas y rivalidades en torno al número , el aumento de autoridades y gastos ("sobrecargamos a la Nación con 8 millones de reales"), nombre, tamaño ⁹⁰⁹ , uniones⁹¹⁰ y separaciones, capitalidad⁹¹¹ y, en fin, la configuración del mapa de algunas provincias, resultaron interminables. Respecto al aumento de gasto implícito en el proyecto, el diputado por Madrid Gasco preguntó :

"(...) La extensión del territorio español y su población ¿son susceptibles de 51 provincias? ¿No será esto crear una porción de autoridades que no tendrán nada que hacer ? () ¿Y acaso la Nación se halla en el caso de atender a todos estos gastos (que ocasionará el aumento de autoridades)? (...) Las Cortes saben muy bien que han tenido que recurrir a empréstitos (...) y sin embargo queremos con el aumento de empleados sobrecargar a la Nación con unos gastos

⁹⁰⁹ Ramonet, diputado por Aragón, atacó el proyecto por su "notable desigualdad" y porque rebajaba a la cuarta clase a provincias de mucha consideración como Burgos y Valladolid. Ibidem.

⁹¹⁰ El diputado por Guipúzcoa, Romero, se manifestó contra la reunión de las provincias Vascongadas y la inclusión de Álava, que hablaba castellano, con Guipúzcoa, que hablaba la lengua vascongada. Ibidem.

⁹¹¹ A los conflictos derivados de la capitalidad (Canarias) y la separación de provincias (las vascas que aparecían unidas sin desearlo), tuvo a bien añadir la comisión los que ocasionaban la penalización de determinadas provincias por motivos puramente ideológicos (Burgos y Álava). Ibidem.

que bien podrán valuarase en 8 millones de reales⁹¹² (...)" .

El ostensible "provincialismo" de los diputados hizo imposible la rápida aprobación provisional del polémico proyecto. Como bien expuso el diputado por Murcia Palarea, todos los que intervenían en pro o en contra del dictamen convenían en la urgente necesidad de verificar la nueva división, pero cada uno la quería a su modo:

"(...)" Si analizamos los discursos, veremos que en todos se vislumbra el espíritu de provincialismo. (...) La comisión ha debido respetar hasta cierto punto los errores y preocupaciones de los pueblos; (...) tener presentes sus relaciones antiguas subsistentes (...) para no reunir provincias que no pueden reunirse, como por ejemplo (y dicho sea de paso), la provincia de Vizcaya y la de Alava, que en el día creo que sería más fácil unir lo blanco con lo negro⁹¹³ (...)" .

La discusión estuvo además contaminada por la circular reservada sobre las elecciones. Así, Díaz del Moral, después de arremeter contra la desmembración a que estaba siendo sometida la provincia de Granada, discurrió sobre lo expuesta que quedaba la libertad de las provincias pequeñas. Comenzó

⁹¹² D.SS.Cortes, sesión de 1 de octubre de 1821.

⁹¹³ D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 2 de octubre de 1822. Las comparaciones entre provincias acentuaban ese espíritu. Ver al respecto intervención del diputado Ezpeleta.

su razonamiento describiendo con parsimonia el desmesurado poder de esas autoridades subalternas del Gobierno en las provincias, que eran los jefes políticos, y los medios inmensos que poseían esos órganos del poder ejecutivo:

"(...) Es constante que los jefes políticos son nombrados y depuestos por el Gobierno cuándo y cómo quiere; que por consiguiente han de ser su eco y órgano, y han de realizar sus intenciones buenas o malas, so pena de perdición de empleo. El influjo que estos empleados de primer orden que se hallan al frente de la autoridad superior de la provincia pueden ejercer en ella, es tan claro, que aun hoy que en nuestro sistema se halla en la infancia, se perciben ya sus efectos. (...) El poder tiene a su disposición medios inmensos, primero para corromper, luego para oprimir, da galones, dijes, bordados, empleos, pensiones, y sobre todo, dispone del Tesoro público, y por desgracia el pueblo no tiene que contrarrestar fuerza tan temible sino con peticiones, clamores y el derecho de elegir representantes que cuiden de su libertad y la protejan⁹¹⁴ (...)".

El diputado por Granada, proporcionando todo lujo de detalles, se entretuvo en considerar las facilidades que la nueva división, en tantas y tan pequeñas provincias, proporcionaba a un Gobierno que tratara de influir en las elecciones:

⁹¹⁴ Intervención de Díaz del Moral, D.SS.Cortes extraordinarias, sesión 2 de octubre de 1821.

"(...) Pregunto yo: un Gobierno que trate de influir en las elecciones, ¿dónde lo hará con más facilidad; en una capital de corta población, o en una populosa, compuesta de corporaciones científicas, literarias, mercantiles y gremiales? Claro está que en las primeras, Para elegir un Diputado van cinco electores a la capital, () ;Con cuanta facilidad no puede un jefe que trate de obedecer a su superior, al que debe la merced de su nombramiento, influir con el eclesiástico, con el escribano o fiel de hechos intrigante, y con los labradores o propietarios arruinados que por desgracia pueden haber sido escogidos para electores! Yo me atrevo a decir que saldrán elegidos los que la autoridad proponga. Dichos medios son muy poderosos, y el último poderosísimo (..) ; y es seguro que en este caso el gobierno dará por bien gastado lo que le diga el jefe⁹¹⁵ (...)" .

La conclusión que extraía de sus razonamientos Díaz del Moral era que la nueva división del territorio convertía al Gobierno en árbitro de la contienda electoral en la mayoría de las provincias:

"(...) Así resulta que de las elecciones de 30 provincias a lo menos puede ser árbitro el Ministro de la Gobernación. Estos medios, aunque muy grandes, pueden ser inútiles en capitales de primer orden, donde está el centro

⁹¹⁵ Ibidem.

de las luces, y quizá el de una intriga saludable que contrarreste los esfuerzos del poder. (...) Téngase presente también que en un reino, cuya gran prosperidad se ha atribuido en mucha parte, quizá con razón, a una división en pequeñas provincias, aunque la libertad nada ha ganado, el despotismo nada ha perdido, porque los jefes superiores, tratando de obedecer al que los sostiene, han debilitado el espíritu público y herido la libertad por el lado quizá más importante⁹¹⁶ (...).".

Completando la anterior intervención, el diputado Banqueri recordó el papel de las provincias grandes (Galicia, Aragón) en el triunfo de la libertad y trató de probar que para la conservación de las nuevas instituciones interesaba que las provincias no fuesen pequeñas. Refiriéndose a las elecciones indicó:

"(...) No nos engañemos señor; es más fácil ganar la mayoría entre 5, 6 y 9 electores que entre 15 o 18; y así, para mí no es dudoso que en las provincias pequeñas de dos o tres Diputados siempre será elegido el que el Gobierno quiera (...).".

Muchos diputados subrayaron lo funesto que podía ser para la causa de la libertad, que se multiplicara la fuerza de los agentes del "poder ministerial", en proporción a la

⁹¹⁶ Ibidem.

disminución del tamaño de las provincias. Se consideraba imprudente aumentar el influjo y poder del Gobierno en un negocio de tanta consideración y transcendencia. Para dar más fuerza a sus razonamientos algunos⁹¹⁷ no dudaron en mencionar la circular reservada dirigida por el Gobierno a los jefes políticos.

Las interminables discusiones que provocó el proyecto impidió que las elecciones de 1821 se verificaran conforme a lo establecido en sus preceptos.

El Gobierno que no parecía muy afectado por las críticas provocadas con su circular, continuó con su particular campaña. En esta ocasión, adoctrinando a los empleados públicos, para que votaran al moderado partido ministerial. En un alegato anónimo aparecido en la Gaceta, reflexionaba el autor sobre que "los extremos se tocan" y desvanecía, a partir del equilibrio de poderes, los errores lógicos que los empleados podían padecer como consecuencia del tránsito repentino, finalizaba el panfleto reclamando de los empleados el voto para el Gobierno:

"(...) Uno de los errores que más excitan nuestro celo en el día es el de muchos empleados, que siendo asalariados por el Gobierno, y formando partes integrante de él, se han

⁹¹⁷ Ver intervención del diputado Zapata.D.SS. Cortes extraordinarias Sesión, 4 octubre.

constituido en sus acérrimos detractores, y vituperando sin reflexión ni tino todas sus operaciones, se unen íntimamente con los que llamaremos la oposición. Estos empleados, (...) desconocen absolutamente la naturaleza de un Gobierno representativo, la de sus obligaciones y atribuciones, y la del partido cuyo aplauso intentan merecer. (...)

El equilibrio de poderes es la base del gobierno representativo (...) esta predisposición del régimen monárquico constitucional hace que insensiblemente se formen dos partidos principales; uno a favor del Gobierno, y otro a favor de sus contrarios. Cuando ambos obran de buena fe, su objeto es el mismo; pero difieren en los medios y esto sostiene la lucha, que continuada con moderación, es más bien favorable que perjudicial al sistema.

(...) Pero se nos dirá: ¿luego los empleados por el mero hecho de serlo pierden la libertad de sus opiniones, y hechos unos satélites del Gobierno, deberán no solamente guardar silencio (...)? El empleado puede y debe tener su opinion; pero no debe manifestarla en parajes públicos hablando al público, ni unirse de sentimientos y de opiniones a un partido que teniendo por tipo la exageración de los principios, no puede servir nunca de norma a un individuo del Gobierno, con el cual está siempre en pugna abierta.

(...) ; Empleados de todas clases, que alucinados por una vana sombra de patriotismo habeis seguido hasta aquí una senda extraviada, conoced por fin cuáles son los deberes que os impone el cargo de que estáis revestidos ! Unidos íntima, pero constitucionalmente con el Gobierno de quien dependéis

inmediatamente, y de cuyas operaciones debéis facilitar con vuestro celo e inteligencia, y no entorpecer con vuestra resistencia y arbitrariedad, sed ejemplo de los demás ciudadanos (...) El partido que hemos llamado de oposición no puede ser nunca el vuestro, aun cuando procediese con moderación, mucho menos cuando la exageración verdadera o estudiada de sus ideas le pone en el extremo de que tanto debemos huir⁹¹⁸ (...) " .

La circular y las restantes estrategias de control del Gobierno liberal hay que encuadrarlas en lo que entendía que era su contenido esencial: vigilar los extravíos en la opinión. Su teoría al respecto fué desarrollada extensamente en varios artículos dedicados a la opinión pública:

"(...) En los Gobiernos liberales, lejos de ser la opinión pública el efecto de la fuerza o del engaño, es el resultado de la voluntad general, expresada libremente y dirigida hacia un objeto de utilidad común, cual es la libertad bien entendida; es decir, acompañada del orden y de la obediencia a las leyes. (...) "

(...) Si tan fatales pueden ser los extravíos de la opinión pública (como cuenta Hume en su historia de Inglaterra después de la muerte de Carlos I) ;cuán grande no deberá ser la vigilancia de los Gobiernos para que esta opinión no se pervierta y dé al traste con todo! Un Gobierno

⁹¹⁸ Ver Gaceta de Madrid, 25 de octubre de 1821.

celoso debe estar siempre al frente de la opinión y dirigirla constantemente hacia el más importante objeto , que es la conservación de la ley, de la cual debe ser el más firme y decidido defensor⁹¹⁹ (...)"

También el clero fué objeto de especial vigilancia por las autoridades dependientes del Gobierno. Durante el período de las elecciones, algunas zonas de España (Cataluña, Andalucía), estaban azotadas por la peste⁹²⁰ . Por este motivo las iglesias y catedrales oficiaban frecuentes ceremonias religiosas y rogativas públicas y privadas. En Cataluña, las aflictivas circunstancias generadas por la epidemia de peste fueron utilizadas por eclesiásticos para reanimar sus ataques desde el púlpito el sistema constitucional. El Jefe político consciente de que ni la ley fundamental, ni las autoridades estaban siendo respetadas se dirigió, en vísperas de las elecciones, a los obispados de Barcelona y Tortosa :

"(...) Pudiera haber algun individuo que olvidando de la santidad de estas virtudes, que han sido dictadas por la augusta religión única verdadera, que por la Constitución política profesan los españoles, se pronuncien en un sentido contrario a ella, llevando esto el criminal designio de complicar la exterminadora dolencia y la miseria con el

⁹¹⁹ Gaceta de Madrid, 11 de noviembre de 1821.

⁹²⁰ M.y J.L Peset, Muerte en España, (Política y sociedad entre la peste y el cólera), Madrid, 1972.

trastorno del orden público. Considero por lo mismo de necesidad urgente que V.S.I., guiado por los puros sentimientos de su celo apostólico, se sirva hacer un recuerdo dal clero de su diócesis sobre la delicada obligación que le incumbe en la dirección del espíritu público hacia el orden, que es la primera base del bien general⁹²¹ (...)" .

En su pastoral el obispo de Vich, Raimundo Strauch y Vidal, atendiendo a esta demanda repetía y completaba las palabras del jefe político :

"(...) Podría ser que algunos formasen el criminal designio de complicar la exterminadora dolencia y la miseria con el trastorno del orden público; podría suceder que algunos con el pretexto de las calamidades presentes intentasen infundir desconfianza y recelos, menos veneración y respeto a las autoridades y a las nuevas instituciones justas y benéficas para encender el fuego de la discordia o de una guerra civil, que sería el colmo de todos los males, y armaría de nuevo el brazo de la Divina justicia, que justamente nos castiga por nuestras muchas culpas y pecados⁹²² (...)" .

⁹²¹ Ramón Zarco del Valle, jefe político de Barcelona, dirigió su circular a los obispos el 30 de septiembre, y apareció en la Gaceta el 4 de noviembre de 1821.

⁹²² Ibidem.

7.7 Tendencias políticas.

El debate sobre los partidos.

El asunto de los partidos estuvo desde los comienzos del sistema constitucional flotando en el ambiente. Antes de la instalación de las primeras Cortes, se suscitó un debate sobre el tema provocado por la preocupación que despertaba el afán de participación que representaban las Sociedades. El origen de la polémica, un extenso artículo aparecido en el *Miscelánea*⁹²³ que proponía la adopción del "ingenioso sistema" utilizado en Inglaterra para reforzar el siempre precario equilibrio de poderes.

En concreto sugería "que se aclimatase entre nosotros" la admirable institución de los partidos. De un lado se encontraría el de oposición - que toma a su cargo la defensa del pueblo y la libertad - y, de otro, el ministerial - que haría frente a la oposición para que no se desquicie el edificio. El autor confiaba en que del "choque frecuente de un patriotismo impetuoso pero siempre ilustrado, con la moderación y la templanza", brotarían torrentes de luz y nos preservarían de los horrores de la anarquía y los furores del despotismo:

⁹²³ "Sobre un partido de oposición". *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura*. N° 104, 12 de junio de 1820.

"(...) Declaramos (...) no querer una oposición turbulenta o acalorada, (sino) exenta de exageración, patriótica (...) y a propósito para hacer la educación política de esta Nación (...) Partido de oposición (...) compuesto de diputados independientes por sus opiniones y por su fortuna; (...) que desestimen los empleos, honores y distinciones que por lo común hacen los hombres esclavos del poder (...) Así pues conviene que se entiendan entre sí los miembros del Congreso⁹²⁴ (...)." .

Otro diario de orientación afrancesada atacó el modelo propuesto por estimarlo envilecedor y una auténtica amenaza para la libertad. Rechazaban el modelo inglés por considerar que las cámaras deciden "lo que quieren sus ministros", pasan "las leyes que a los ministros les acomoda y son desairadas las peticiones que ofenden el interés y orgullo del ministerio". En resumen, proponía:

"(...) Dejemos a Inglaterra su decantada libertad (...) y contentámonos con aquella oposición que debe haber necesariamente en toda asamblea legislativa, en donde ni todos los miembros deben pensar de un mismo modo, ni todos pueden estar adornados en igual grado (...). No habrá ni debe haber (...) oposición por capricho ni aprobación por orden; o por mejor decir, no debe haber partidos: el que vota hoy a

⁹²⁴ Miscelánea, n° 104, 12 de junio 1820.

favor del poder ejecutivo votará contrario mañana ⁹²⁵ (...) "

El colaborador del Universal, mencionó también en su ofensiva la consecuencias perversas que ocasionaba el sistema de partidos inglés:

"(...) Júntanse allí los miembros del parlamento, no para deliberar libremente sino para cumplir con una vana ceremonia que alucine al pueblo y sancione su opresión ⁹²⁶ (...)".

Esta áspera impugnación obtuvo una contestación inmediata del Miscelánea. Pero ahora el enfoque del problema, como veremos, será otro muy distinto. En concreto, la nueva cuestión era:

"(...) ¿Conviene o no en España una oposición provechosa y arreglada, o vale más dejarlo todo en manos de la suerte, exponiéndonos a que los enemigos de la libertad vayan poco a poco socavando el edificio social?(...)." "

Construido así el nuevo problema, los autores del artículo propugnaban el partido de oposición como uno de los remedios para evitar la experiencia del 14 en un país en el

⁹²⁵ El Universal , n° 36, 16 de junio de 1820.

⁹²⁶ Universal Observador Español, n° 36, viernes 16 de junio 1820.

que ni las clases ínfimas del pueblo ni las corporaciones privilegiadas habían adoptado la causa de la libertad:

"(...) Las primeras porque componiéndose de jornaleros o de proletarios, necesitan sentir por experiencia inmediata la utilidad del nuevo régimen que se acaba de establecer, y estos efectos no pueden realizarse sino (...) (creando) los intereses materiales de la revolución (...). Las clases privilegiadas, (...) tampoco mirarán (...) con gran amor unas leyes con las cuales nada tienen que ganar (...)".

A la vista de estas adversas condiciones sociales, la natural tendencia del poder al abuso, y las facilidades del ministerio para traer a las Cortes una representación amoldada a su gusto propugnaba como remedios para los extravíos de la autoridad :

"(...) Una ley que amplie el derecho de petición, que sancione las reuniones públicas para radicar en ellas un partido de oposición al ministerio⁹²⁷ (...)".

En vísperas de la instalación de las Cortes aparecieron en las páginas del Miscelánea nuevas observaciones para aclarar la diferencia entre los partidos y las facciones, "una cuestión que nunca hasta ahora se ha examinado entre

⁹²⁷ Miscelánea, n°112, 20 de junio de 1820.

nosotros":

"(...) En los Estados libres existen siempre divisiones porque hay opiniones diversas; las unas son útiles y las otras peligrosas; estas propenden a trastornar las leyes, aquellas a conservarlas y darles vigor; (...) mas en toda clase de Gobierno puede haber facciones ⁹²⁸(...)".

Tratando de precisar más la diferencia señalaba:

"(...) Los partidos subsisten sin riesgo de que se altere la Constitución, porque jamás llevan por objeto destruirla, sino luchar entre sí (...) contribuir a que se hagan buenas leyes (...)"..

Finalizaban sus reflexiones insistiendo en la necesidad de partidos que defiendan los intereses públicos para garantizar la estabilidad del sistema constitucional, conservar la libertad y contener la exaltación:

"(...)Es pues necesario un estimulante activo, (...) el que nace de los partidos, con tal que ninguno salga de la senda constitucional, pues su acción y reacción conservan el equilibrio, y salvan al estado del despotismo y la anarquía (conviene) organizar con tiempo un partido de oposición que

⁹²⁸ Miscelánea n° 130, 8 de julio de 1820.

(...) observen vigile (...) ataje la exaltación ⁹²⁹ (...)" .

Este debate puso de relieve que el asunto de los partidos no era pacífico; existía temor al envilecimiento de la representación como consecuencias de implantar el modelo de partidos. Pero sobre todo reflejaba la preocupación que existía sobre los denominados exaltados. Es posible afirmar que el propósito fundamental del Miscelánea era, según sus palabras, atajar la exaltación mediante la creación de una oposición moderada al Ministerio que de paso controlase las Sociedades patrióticas.

Aparte de las razones ideológicas (apuntadas en el anterior capítulo), el modelo de partidos reseñado era difícil ponerlo en práctica porque los diputados no estaban dispuestos, por talante y condiciones sociales, a renunciar a las lealtades diversas a las que gustosamente estaban sometidos. Seguramente esto explica que nadie se extrañara de que Gareli, liberal moderado y que llegó a ser ministro, votara en contra la reforma de monacales; ni que Martínez de la Rosa y Palarea, moderado el uno y con veleidades exaltadas el otro, pronunciaran discursos en contra de la ley que suprimía los mayorazgos⁹³⁰ . Y no digamos nada si lo que estaba en juego eran los intereses corporativos o de la

⁹²⁹ Miscelánea, n° 130, 8 de julio de 1820.

⁹³⁰ D.SS.Cortes, sesión de 12 de septiembre de 1820. Como excusa alegó Palarea las ideas nobiliarias que dominaban en las cortes europeas.

provincia. Los nobles, a discreción y sin motivos, elogiaban y protegían a los de su grupo y algo parecido ocurría con los grupos profesionales (jueces o militares). Posiblemente los más generosos fueron los miembros del Congreso pertenecientes al clero. Y en asuntos relacionados con los intereses de la patria chica, independientemente de las proclividades ideológicas que uno tuviera, por encima de todo solían colocar su provincia.

A la vista de estas peculiaridades, y como no existía nada que verdaderamente agrupara a los diputados y los hiciera actuar con disciplina, tenían lugar fluctuaciones imprevisibles e irreprochables en las votaciones. Cualquiera podía votar con los absolutistas un día, los liberales al siguiente. Por cierto, al no estar contemplada la posibilidad de la abstención resultaban muy frecuentes las mezclas. Lo más notable era que nadie veía en estas oscilaciones un motivo de reproche.

Absolutistas, Moderados y Exaltados.

La contienda electoral de 1821 fué tensa, conflictiva y violenta. Mientras el Gobierno, (debilitado y sobrepasado), trataba de controlar el proceso electoral, las partidas absolutistas andaban en guerra abierta contra el sistema constitucional y los movimientos de desobediencia civil de

los liberales radicales retaban la autoridad del Gobierno. La eventual disputa ideológica discurrió entre los absolutistas o "serviles", moderados y radicales o "exaltados".

De un lado los absolutistas, que descontentos con las reformas, pretendían la destrucción de la Constitución. Para descalificarles se decía que estaban movidos por los extranjeros para introducir el desorden. Ellos para atribuirse poder, también decían contar con apoyos de los santos aliados. Desde la perspectiva moderada, los excesos de libertad y la anarquía beneficiaban los intereses de los absolutistas. Desde la perspectiva exaltada, el delirio de la moderación alentaba también la rebelión absolutista. En suma, las tendencias liberales para descalificarse recíprocamente tachaban al contrario de "servil".

Como vimos más arriba, la escisión en el liberalismo, (moderados y exaltados), que se venía fraguando desde antes de la instalación de las Cortes, se formalizó en la sesión de 4 de septiembre, con motivo de la disolución del ejército de la revolución y la discusión sobre el proyecto de ley de Sociedades patrióticas.

Más que la defensa de valores diferentes lo que estaba en juego en el campo del liberalismo, eran concepciones conflictivas sobre la manera en que se satisfacían los mismos valores.

La moderación era una estrategia sobre el modo de llevar a cabo reformas incluso radicales. No prejuzgaba los contenidos de la reforma. Los moderados defendían su estrategia como la más adecuada para sacar adelante con éxito el programa revolucionario liberal. Asumían como propio el planteamiento que atribuían a Hume sobre las revoluciones:

"(...) Cuando ya se halla establecida una Constitución en un país, los alborotos y conmociones, en vez de servir para arraigar la libertad que aquella establece, no sirven sino para disminuirla o destruirla; porque en la calma y tranquilidad, habiendo Constitución, se oyen y remedian fácilmente los abusos y las quejas, pero en el tumulto de las revoluciones la fuerza o los prestigios de la política son los que deciden la controversia⁹³¹ (...)".

Partiendo de la distinción entre revoluciones útiles y perjudiciales, señalaban haber escogido la mejor para España:

"(...) Será útil siempre que estando obstruidos los canales de felicidad y de la riqueza pública, o no teniendo la libertad sus justas garantías, sea necesario remover todos los obstáculos que se opongan al bien general, y se hace entonces una revolución, porque es útil. (...) Pero ¿qué no se ha ha hecho en España para esta revolución, y qué no han hecho las Cortes? Se han desamortizado casi todas las

⁹³¹ D.SS. Cortes extraordinarias, intervención del Conde de Toreno, sesión de 23 de diciembre de 1821.

propiedades, y se han quitado casi todas las trabas que se oponían a la prosperidad y a las libertades públicas: ¿y esto no es haber hecho una revolución útil al Estado y conforme a la ley?(...)".

Los moderados que se encontraban al frente de las instituciones, propugnaban una definición restrictiva de la política y de la participación. Rechazaban los intentos de politizar la sociedad, y circunscribían la actividad política a las instituciones representativas y a una limitada participación formal en el proceso electoral.

Temían los abusos de la libertad, que también crea fanáticos (Martínez de la Rosa), y el exceso de celo o desmesurado afán por participar de parte de las masas (Garely), porque podía dar pie a que el sistema se deslizara hacia la anarquía que, a su juicio, está en el origen de toda tiranía militar (Martínez de la Rosa, Toreno).

Los liberales moderados utilizaban como antídotos al afán excesivo por participar, argumentaciones sobre la revolución ("ya está hecha", Toreno), la existencia de Constitución, la instalación majestuosa de las Cortes, y el ejemplo que había que dar a Europa combinando los derechos del trono con los de la libertad (Argüelles).

Para los moderados, edificar el sistema constitucional sobre el pueblo equivalía a construir sobre arena. En cambio

opinaban que lo que creaba vínculos y una base sólida sobre la que edificar el nuevo régimen eran los intereses sensibles engendrados por el sagrado derecho de propiedad (Toreno, Argüelles y Martínez de la Rosa).

Reiteradamente defendieron el postulado según el cual, a medida que las naciones van haciéndose más civilizadas deben mirar con más respeto el derecho de propiedad. Consideraban este derecho sagrado como el cimiento de la sociedad civil. En una corta polémica entre Moreno Guerra (exaltado) y Martínez de la Rosa sobre la propiedad, se hicieron patentes las diferencias que al respecto existían:

"(...) La propiedad consiste no sólo en el uso que se puede hacer de las cosas, sino en el abuso y en el no uso, debiendo las leyes conceder el mayor ensanche posible a la libre y arbitraria voluntad del propietario. Así, la sociedad sólo por un motivo urgente y de grande utilidad pública puede exigir que un propietario, contra su querer, el uso de un terreno; porque a pesar de todas las indemnizaciones del mundo, "el no quiero" de un dueño no tiene precio, y el legislador debe respetarlo⁹³² (...)"

El planteamiento defendido por Martínez de la Rosa sobre la necesidad de respetar constantemente, y hasta con

⁹³² Dictamen presentado por las comisiones de Agricultura, Industria y Comercio sobre medidas (...) para mejorar el ramo de minería. D.SS.Cortes, sesión 13 de junio de 1821.

superstición, el sagrado derecho de propiedad, fué ásperamente atacado por el diputado Moreno Guerra:

"(...) Es muy extraño que el Sr. Martínez de la Rosa sea ahora tan acérrimo y aun supersticioso defensor del derecho de propiedad, cuando este derecho es hijo de la tierra, y es digámoslo así, mundano, y cuando S.S no ha tenido reparo en atacar el sagrado derecho de libertad, el cual es incomparablemente más precioso que el de propiedad, por ser hijo del cielo y divino, y S.S no ha tenido inconveniente en restringirlo en la ley de imprenta, en la de sociedades patrióticas etc. Es pues preciso ser justos y consecuentes. Si por el bien de la sociedad se coarta el divino derecho de libertad, ¿por qué por la felicidad de la misma sociedad no se ha de reprimir el mundano y terrestre derecho de propiedad?⁹³³ (...)".

En el curso de la agria polémica el diputado gaditano recordó las consecuencias de ese "no quiero" de un propietario, por el que tanto respeto había manifestado Martínez de la Rosa:

"(...) ¡Ojalá no se respetase este capricho (del propietario), ni se hubiese respetado en los propietarios de Andalucía(...)! Entonces no habría tantas tierras eriales, perdidas y llenas de palmas y malezas, sin producir nada a

⁹³³ D.SS.Cortes, sesión 13 de junio de 1821.

Dios ni al diablo, es decir, a los pobres braceros de los pueblos ni a sus llamados señores; (...) metidos en la Corte, no sabían lo que pasaba en las provincias, ni lo que en ellas tenían, pues ni lo habían visto ni visitado (...) por "ese no quiero" es por lo que las mejores tierras de España están hoy eriales (...).

Pero según hemos apuntado, estas diferencias estaban veladas por conflictos políticos relacionados con la distinta forma de concebir y organizar la participación. El miedo de la tendencia moderada a la participación de los ciudadanos, provenía de la creencia en que un exceso de participación ponía en peligro el frágil sistema liberal recién instaurado. El temor difuso a las fuerzas de la Santa Alianza, el Altar y el Trono, funcionaron como coartada para racionalizar ese rechazo a la participación.

Desde la versión política oficial percibían a los exaltados, que "lucían en el partido del pueblo (Argüelles)", de forma negativa, por considerar que expresaban contenidos y estrategias que no contribuían a dotar de la indispensable estabilidad al régimen. Consecuencia de esta imagen dominante era que frente a ellos propugnaban una estrategia que, de acuerdo con las circunstancias, podía ir desde la exclusión o veto (veto a Riego del Consejo de Estado) a la vigilancia (regulación de las Sociedades), y represión (disolución del ejército de la Isla y cierre de Sociedades patrióticas). Trataron de aislarlos y desacreditarlos para impedir que

obtuvieran el suficiente respaldo.

Si los moderados pensaban que las demandas de participación exaltada ponía en peligro la estabilidad del sistema constitucional; los miembros de la tendencia exaltada, por su parte, sentían que la política emprendida por los moderados provocaba la corrupción de esos valores comunes recogidos en las Constitución.

Entre los ciudadanos partidarios del liberalismo exaltado, cuya presencia se hacía sentir en determinados núcleos urbanos, se generalizó la creencia de que debían intervenir (Sociedades patrióticas), de forma directa (dº de petición) y al margen de las instituciones representativas oficiales (Congreso), presionando sobre sus líderes para configurar la agenda política, y participar en la adopción de decisiones que impulsen la revolución. Consideraban que estando en revolución no se podía obrar como si el régimen ya estuviera consolidado⁹³⁴.

A partir de esta apuesta por la participación como medio para afianzar la revolución, crearon y lucharon por mantener las Sociedades patrióticas desde la que desarrollaban actuaciones diversas, dirigidas a lograr un cierto control sobre las acciones de sus gobernantes. Su campo de acción era un espacio de política no institucional pero cuya existencia

⁹³⁴ Intervención de Florez Estrada, en D.SS.Cortes, sesión de 31 de julio de 1820.

estaba prevista en la doctrina y la práctica de la política liberal.

Recurrieron a formas de acción perfectamente legitimadas y reconocidas como la libertad de expresión y el derecho de petición. En cuanto a los objetivos, pretendían que la comunidad asumiera mediante la práctica, los valores y planteamientos reconocidos por la Constitución que, en interés de una supuesta estabilidad política del régimen, los liberales moderados en el poder, a su juicio, empezaban a abandonar:

Cuando veían que los valores liberales estaban amenazados trataban de emprender campañas para su defensa. Aunque no existía un verdadero conflicto fundamental entre valores diferentes, sino más bien sobre el modo en que se realizaban, los exaltados (mientras no ocuparon el poder), defendieron un modo diferente de realizar los mismos objetivos.

Las dos corrientes liberales perseguían, en materia de reformas económicas y sociales, parecidos objetivos: la supresión de los privilegios, impulso del trabajo, eliminación de las llamadas clases estériles, remover trabas y el ensanchamiento de la propiedad como medidas para hacer brotar la prosperidad. Sin embargo, existían diferencias sobre la estrategia y el contenido de aspectos concretos del programa. Estas diferencias, (según hemos subrayado más

arriba), tenían que ver con el sistema impositivo (actitud ante los impuestos de la nobleza, y la carga impositiva del pueblo), la política de intervención estatal para hacer frente a los posibles efectos colaterales que las reformas religiosas (léase monacales y diezmos) producían entre los jornaleros, interpretación de la ley de señoríos y, en fin, el hincapié que los exaltados ponían en la participación del pueblo a través de sociedades, como recurso para sacar adelante el programa de reformas. Pero las diferencias sobre cuestiones económicas y sociales, permanecieron eclipsadas por la excesiva relevancia que tenían los problemas de la lucha política.

Cada tendencia contaba con el apoyo de la correspondiente sociedad secreta. La Confederación de caballeros comuneros surgió⁹³⁵, "para promover la libertad del género humano y los derechos del pueblo español", a poco de la escisión en la corriente liberal. Desde la indiscreta Comunería y las ruidosas pero débiles Sociedades patrióticas, los denominados exaltados trataron de influir en la vida política.

Para superar su debilidad los exaltados promovían actos solemnes y rituales manifestaciones, coincidiendo con fechas señaladas que les proporcionaba identidad, sentimiento de

⁹³⁵ Constitución de la Confederación de Caballeros Comuneros y Reglamento para el gobierno interior de las fortalezas, torres y castillos de todas las merindades de España. Madrid, 1822.

pertenencia y fuerza. Pero sobre todo, trataron de compensar su debilidad estableciendo vínculos y alianzas con las Sociedades existentes en otras capitales del país, llegando hasta constituir federaciones. Esta federación de sociedades desparramadas por las provincias les otorgó una apariencia de poder y una robustez que las protegió frente a los eventuales ataques provenientes del Gobierno.

Hacia afuera daban a conocer sus planteamientos sirviéndose de escritos y también manifestaciones. Mediante estas tácticas trataron de atraer la atención de la opinión pública y movilizarla por medios legales. Compensaban su debilidad con la retórica de sus discursos y la vehemencia de sus planteamientos. Pero carecían de un cuerpo coherente de ideas formuladas y de una táctica. Si el carácter imprevisible de sus comportamientos les hizo ser mal tolerados por el gobierno, la incapacidad de respuesta del gobierno activó a su vez las acciones imprevisibles.

Las dos tendencias reclutaban sus apoyos entre los mismos grupos sociales: eclesiásticos, empleados públicos, militares, profesionales liberales, comerciantes e industriales. Ambas atraían a nobles pero el elemento popular, (artesanos, empleados), parece que abundaba entre los radicales. El núcleo de activistas lo constituía gentes de un nivel educativo importante y que podían dedicar tiempo a la vida pública.

En teoría podían coexistir ambas tendencias. No era infrecuente que un mismo individuo transitara de la una a la otra. Las fluctuaciones abundaban y eran percibidas como normal. Sin embargo progresivamente fueron surgiendo incompatibilidades que acentuaron la confrontación.

El inevitable conflicto entre ambos planteamientos estalló a medida que la variedad de actuaciones participativas desarrolladas comenzaron a ser consideradas, por los moderados en el poder, incompatibles con el mantenimiento del orden político institucional. Por tanto, el modelo participativo, que había empezado a regir de facto en los comienzos del régimen, terminó siendo concebido como peligroso⁹³⁶.

La razón última del rechazo a este afán de intervención en la vida pública provenía, no tanto de estimar como excesiva tanta participación al margen de los canales políticos existentes, sino sobre todo porque se consideraba ese exceso como el causante de una posible erosión de la autoridad política y de la capacidad de gobernar, lo que en la delicada situación que atravesaba el régimen se estimaba un grave riesgo para su estabilidad.

Los moderados dirigentes políticos trataron de adoptar, en primer término, medidas que hicieran inmunes a la clase

⁹³⁶ D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 2 de febrero de 1822.

política de las presiones, inquietudes y acciones de las gentes (disolución del ejército, supresión de sociedades, d° de petición). Estas actuaciones fueron progresivamente radicalizando las posturas, agravando el conflicto existente en el seno del liberalismo y, como veremos, prepararon el enfrentamiento .

Un efecto imprevisto de las medidas adoptadas fué que en vez de servir para fortalecer la autoridad y la capacidad del gobierno contribuyeron, a la larga, a ocasionar su ruina. Porque los enemigos del sistema percibieron, acertadamente, ese conflicto en el campo liberal como síntoma de desconcierto, y de debilidad en sus filas. Parece como si el citado conflicto fuese la señal, que los enemigos del sistema estaban esperando, para proceder a un ataque sin contemplaciones al régimen.

7.8 Desarrollo de las elecciones.

En vísperas del comienzo de las elecciones aparecieron las proclamas de los jefes políticos destacando la importancia del acontecimiento y advirtiéndolo a los ciudadanos contra las intrigas de los enemigos del sistema, a este respecto decía el Jefe político de Vitoria :

" (...) Lejos de mí la idea de influir de modo alguno en la

voluntad de los electores (...), respeto la libertad que gozan todos los ciudadanos (...) pero también conozco la obligación que el destino me impone de hacer entender a los incautos los riesgos (...) que deben evitar (...) mayormente cuando hay seres tan degenerados y perversos que disfrazados de mil maneras, y uniendo acaso la ambición de los destinos a un excesivo apego a sus intereses, o encubiertos bajo el hipócrita velo del celo por la religión de Jesucristo (...) tratan de torcer vuestra razón. Alaveses (...) desconfiad de todo aquel que no haya dado pruebas verdaderas y positivas de tener ciertas virtudes cívicas y sociales, amor sincero a la Constitución y al Rey Constitucional, adhesión invencible a la libertad e independencia de la patria, y (...) de ser tan amante de las nuevas instituciones como interesado en mantener la tranquilidad pública ⁹³⁷ (...)" .

La insistente advertencia de las autoridades contra los eclesiásticos constituía una prueba del influjo que ejercían en el primer escalón del proceso electoral. La prensa refería aquellas intervenciones dignas de ser imitadas pero centraba especialmente sus comentarios en quienes con sus discursos denigraban el sistema:

"(...) Elecciones en Logroño (...) atinado sermón del cura párroco de la parroquia de Sta. María de Palacio. En Palenzuela, provincia de Valladolid, noticia sobre especiosos

⁹³⁷

Ver El Universal, n° 281, 8 de octubre de 1821.

pretextos para dorar perversas intenciones de los acalorados declamadores contra el sistema constitucional(...)".

Las noticias mencionaban el contenido variado de los discursos que los eclesiásticos utilizaban en sus críticas hacia el sistema:

"(...) No hay arma que no se valgan los serviles para hacer al sistema la guerra más cruel (...) que la religión perece (...) al ver que tenemos la misa que teníamos, han mudado de táctica aquellos aciagos defensores de los derechos del cielo; (...) que al tratar las Cortes extraordinarias de la división del territorio no se han propuesto otro objeto que aumentar provincias y partidos para tener medios de colocar a ciertos paniaguados gravando a la Nación con nuevos empleos y sueldos que debían excusarse. La dotación del clero es otra áncora de que se agarran estos señores serviles."⁹³⁸
 (...) "

Para hacer propaganda electoral en pueblos controlados por los liberales, los absolutistas utilizaban pasquines:

"(...) Nuestras próximas elecciones serán (...) acertadas. Los liberales somos muchos; y reina entre nosotros la más perfecta unión (...) Los necios enemigos del bien (...) están arredrados y no tienen valor para presentarse a la

⁹³⁸ El Universal Observador, nº302, 29 de octubre 1821.

palestra. Días pasados aparecieron aquí unos indecentes pasquines contra la Constitución. Ha sido descubierto el delincuente; está preso (...) Este perillán era un dependiente del Ilustre Cabildo de la Catedral⁹³⁹ (...)".

Por el contrario, en los pueblos que no había mucho espíritu constitucional los absolutistas celebraban las elecciones tocando a muerto. Refiriendo lo que sucedió en Villarrobledo, provincia de la Mancha, relataba la prensa:

"(...) Gentes seducidas o bien halladas con el antiguo desorden suelen gritar algunas noches en términos ofensivos a las nuevas instituciones. (...) Lo más escandaloso que ha ocurrido en este pueblo (...) es que habiendo pedido el alcalde al teniente vicario en el día de las elecciones parroquiales que se cantase un Te Deum mandó este eclesiástico tocar a muerto y cantar el oficio de difunto con su correspondiente responso⁹⁴⁰ (...)".

Las Cortes trataron de regular los conflictos que planteaban las elecciones parroquiales en aquellas lugares que había "división, partidos o intrigas, y el alcalde estaba a la cabeza de un partido". A este respecto, para garantizar que las elecciones se hicieran con libertad y acierto,

⁹³⁹ El Universal, n° 285, 12 de octubre de 1821, la noticia de Baeza estaba fechada el 6 de octubre víspera de las elecciones.

⁹⁴⁰ El Universal n° 315, 11 de noviembre de 1821.

facultaron a los jefes políticos:

"(...)Que si al jefe político constare por documentos justificativos que el alcalde (...) está complicado en alguna intriga (...) podrá mandar (...) que presida () otro de los alcaldes (...) y en los pueblos (que hay solamente) uno, (...) a alguno de los regidores. Que si constare justificativamente que todo el ayuntamiento está complicado en parcialidades (...) el jefe político nombrará un comisionado⁹⁴¹ (...)".

En ciudades como Madrid llama la atención la larga duración de las elecciones parroquiales. Según la prensa dos días empleaban en la designación de electores de parroquia los ciudadanos :

"(...) Desde esta mañana están celebrándose las elecciones parroquiales en esta capital con un ardor (...) admirable(...). todo nos hace esperar que las elecciones serán a gusto de los amantes de la Constitución (...) Es la una de la noche y algunas parroquias han nombrado ya a sus electores, pero la mayor parte sigue todavía la votación⁹⁴² (...)".

⁹⁴¹ Dictamen de la comisión primera de legislación, con motivo de varias reclamaciones contra elecciones en ayuntamientos por haber presidido las juntas comisionados especiales de los jefes políticos. Ver D.SS.Cortes, sesión de 16 Junio 1821.

⁹⁴² El Universal, n° 281, 8 de octubre de 1821.

El día siguiente insertaba el periódico la siguiente noticia:

"(...) Las elecciones de parroquia (de Madrid) han continuado todo el día de hoy, y ahora que son las once de la noche acaban de concluirse en San Martín y estaban concluyéndose en San Sebastián ⁹⁴³ (...)" .

En la parroquia de San Luis (Madrid), sucedió lo que ocurriría posiblemente en tantas parroquias :

"(...)El domingo 7 de octubre (...) con admiración y escándalo de los concurrentes, ni el párroco, ni el teniente (sustituto del párroco), sino un regular, pronunció un discurso correspondiente a las circunstancias; pero no como lo manda la Constitución, esto es, un discurso donde se trata de los electores y de las cualidades de los elegidos, sino un sermón sobre el primer mandamiento de la ley de Dios (...); ni siquiera nombró ni una sola vez la Constitución, las Cortes, los diputados⁹⁴⁴ (...)" .

Finalizadas las largas elecciones parroquiales de Madrid sin problemas, la prensa más radical ironizaba contra aquellos que habían hecho circular presagios adversos:

⁹⁴³ El Universal, n° 282, 9 de octubre de 1821.

⁹⁴⁴ El Universal, n° 282, 9 de octubre de 1821..

"(...) Se han hecho las elecciones con la mayor tranquilidad ¿qué tal, señores serviles? y los jacobinos, anarquistas, republicanos y demás duendes que vmds. ven ¿cómo no han venido a interrumpir este acto grandioso de la soberanía del pueblo? De la soberanía, sí, de la soberanía del pueblo que no pueden vmds. tragar y que tragarán a la fuerza. Trágala, tonto / y eso te hallas / ¿a qué hacer ascos / si hay que tragarla? Ya nos duele la cabeza de oír decir en la Fontana , que S.E el señor San Martín ha renunciado a su empleo⁹⁴⁵ (...)".

En vista de las noticias existentes se puede afirmar que las elecciones que se celebraron con una indiferencia más beligerante fueron las de Málaga. La prensa relataba así su desarrollo :

"(...) A pesar de las enérgicas exhortaciones de nuestro jefe político a este ayuntamiento y cabildo eclesiásticos para que contribuyesen por todos los medios posibles a hacer tan interesantes como debe serlo el acto de las elecciones parroquiales, excitando a los ciudadanos a que concurriesen a él y eligiesen personas muy adictas al sistema constitucional, hemos visto en el mayor asombro que sólo se presentaron a votar veintinueve personas en una población de

⁹⁴⁵ El Zurriago, suplemento n°5, p.15 1821, San Martín, Jefe político de Madrid y blanco de las críticas de los radicales, había suspendido con carácter permanente las sesiones de la Sociedad Patriótica de La Fontana.

cuarenta mil almas (...) faltó el estímulo que debía dar con su ejemplo el Ayuntamiento, pues sólo asistieron dos o tres individuos de esta corporación (...) siendo de notar que habiendo presidido la Junta dos alcaldes, no quiso votar ninguno de ellos, haciendo lo mismo el secretario del ayuntamiento, el teniente del cura, el juez de primera instancia y algunas otras personas de quienes no debía esperarse tal indiferencia. Como quiera que sea, el resultado ha sido recaer las elecciones en sujetos muy liberales⁹⁴⁶. (...)"

Los resultados de las elecciones en algunas provincias ocasionaban preocupación, por haber recaído los nombramientos de electores parroquiales en sujetos que no tenían derecho a inspirar confianza a los amantes de las nuevas instituciones:

"(...) Ocurrió en Orihuela, y según nos escriben lo mismo ha sido el resultado en Zamora y en algunos partidos de la provincia de Guadalajara (...) Los que nos comunican estas noticias nos hablan de intrigas escandalosas, de proyectos hostiles contra la Constitución (...) Supongamos que Orihuela envia al congreso un sacristán, Zamora un Sochantre y Sigüenza un pertiguero (...) ¿qué habrán adelantado (...)? ¿ignoran por ventura que en las Cortes las resoluciones se toman a pluralidad de votos, que las sesiones son públicas y

⁹⁴⁶ El Universal n° 296., 23 de octubre de 1821; la noticia provenía de Marbella y estaba fechada el 13 de octubre. Málaga también se vió afligida por la peste y es probable que esta calamidad influyera en las elecciones.

que hay libertad de imprenta?⁹⁴⁷ (...) "

Un anónimo comunicante que informaba sobre las elecciones de parroquia celebradas en distintos pueblos de la provincia de Valencia, ampliaba la información sobre lo sucedido en Orihuela:

"(...) Las elecciones hechas en esta villa (Novelda), Elda, Monóvar, Agost, Monfort, Guardamar, Fundaciones, Rojales, .. han sido buenas (...). Las de Alicante (...) excelentes (...); pero el escándalo (...) han sido las de Orihuela, foco de servilismo más exaltado (...) por descontento los frailes dominicos y capuchinos han intrigado superiormente, en lo que no les han ido a la zaga los señores canónigos. En el acto de la elección se presentaron armados y al protestar un liberal le amenazaron con el garrote; con este motivo huyeron los buenos y los infames se apoderaron del campo de batalla y cantaron victoria (...) En celebridad del triunfo (...) resonaron los siguientes vivas : viva la buena elección, viva la santa religión, viva el Rey, mueran los francmasones y la Constitución⁹⁴⁸ (...) "

Los resultados de las elecciones de Orihuela tuvieron repercusión en Murcia. Refiriéndose al impacto que produjeron

⁹⁴⁷ Ver El Universal Observador n° 302, 29 de octubre de 1821.

⁹⁴⁸ El Universal, 291, 18 de octubre de 1821. La noticia procedía de Novelda y fechada el 13 octubre.

relataba la prensa:

"(...) Habiendo circulado en esta ciudad la lista de electores nombrados en Orihuela que por la mayor parte no inspiran confianza, alguna de los amantes del sistema constitucional (...) fué tanta la indignación (...) que la brillante oficialidad (...) de esta guarnición (...) reunida en la plaza por ser día de revista, no se detuvo un momento en entregar a las llamas tan inmundo papel, protestando hacer lo mismo con las personas señaladas en él⁹⁴⁹ (...)"

En la Junta de Provincia D. Miguel Butrón elector de Portugalete expuso que la acta de elección de Durango era nula porque los parroquiales se habían hecho por pueblos que según el censo de 1797 no tenían el número competente de vecinos; añadió que se presentara el censo del 97 para probar su planteamiento. El ayuntamiento de Portugalete, el de Guernica; y el elector de Bermeo manifiestan la irregularidad en se procedió a hacer la elección de Guernica y solicita su nulidad.

La Comisión apoyada en la facultad que la Constitución concede a la Junta de Partido para la decisión definitiva de esta clase de reclamaciones; opina que debe estarse a su fallo y que en consecuencia deben aprobarse los poderes a que

⁹⁴⁹ Universal n° 290, 17 de octubre de 1821. La noticia procedente de Murcia estaba fechada el 10 del mismo mes. El obispo de Orihuela había sido expulsado por sus reiterados ataques verbales contra el sistema constitucional.

se refiere.⁹⁵⁰

Juntas de partido.

Las elecciones de partido resultaron objeto de menor atención por la prensa. Seguramente porque el interés estaba centrado en los movimientos de desobediencia civil que por entonces estaban teniendo lugar en distintas provincias. Sin embargo, la comisión de poderes de las Cortes proporciona una información exhaustiva de incidentes y reclamaciones habidas en las juntas de partido celebradas en las provincias.

De las elecciones celebradas en Aragón hay reclamación de cohecho en las elecciones del Partido de Tarazona (3 de noviembre), presentada por Antonio Ochoteco vecino de la villa de Auñón, fundada en que hubo reuniones o juntas entre algunas personas de la ciudad de Tarazona para que la elección de los electores de su partido recayera en determinados sujetos, contraviniéndose lo que establece la Constitución. Según el Suplemento del Diario Observador de Zaragoza, los electores sufrieron amenazas y se pegaron pasquines en parajes públicos ⁹⁵¹.

En Canarias, el jefe político daba cuenta de disputas

⁹⁵⁰ Segunda Junta Preparatoria, D.SS.Cortes, sesión de 20 de febrero de 1822.

⁹⁵¹ D.SS.Cortes, Segunda Junta preparatoria, sesión 20 febrero 1822.

acaloradas en las juntas electorales de partido y parroquia por haber enviado algunos pueblos mayor número de electores que los que correspondían a su población⁹⁵² .

El acta de Extremadura recogía una reclamación de nulidad por electores de Villanueva de la Serena pretextando que algunos electores que habían asistido a la Junta de partido y votado se hallaban procesados criminalmente; y por suponerse también, que otros electores no habían reunido pluralidad absoluta de votos. Estas actuaciones motivaron recursos de electores parroquiales y de partido. La Comisión como mal menor resolvió que las elecciones debían juzgarse válidas. No obstante reconoció, que de los 129 electores parroquiales que concurrieron a la junta de partido 4 se hallaban procesados; que sin embargo ser solicitada la exclusión de los electores no se resolvió cosa alguna y se les permitió votar; y admitió que un sujeto fué nombrado sin contar con la pluralidad absoluta de votos⁹⁵³ .

De la provincia de Granada existían quejas de los Ayuntamientos de Velez Rubio y otros sobre que en las elecciones del Partido de Baza no hubo libertad en la votación, fundándose en que se hizo uso de la fuerza armada para intimidar a los electores. Como estas quejas fueron desestimadas en la Junta electoral de la provincia, en uso de

⁹⁵² Ibidem.

⁹⁵³ Ibidem.

las facultades que les concede la Constitución, opinaba la comisión que los poderes debían aprobarse⁹⁵⁴ .

El Acta de Jaén contenía una reclamación de nulidad hecha por Jose Manuel Osorio, Antonio de Moya Presb° y otros vecinos de Torredonjimeno. Estaba motivada en los vicios con que se practicaron las elecciones parroquiales y de Partido de Martos, al admitirse a votar en la Junta parroquial a un profeso de la orden de Calatrava y recayó en él la elección de compromisario⁹⁵⁵.

El elector de Mota, D. Alonso Montoya, representaba solicitando nulidad de las elecciones en la Mancha. Fundaba su pretensión en que no se le dejó por la Junta electoral de Partido de Alcázar examinar las certificaciones de las elecciones parroquiales. La comisión desestima la reclamación.

La Comisión desestimó los recursos de nulidad presentados por los vecinos de Cartagena, del Ayuntamiento de Villena y los electores de Chinchilla, Hellín, Cieza y Segura de la Sierra y la representación de un ciudadano de Calasparra a la Diputación permanente. Se fundaban en que habiendo tenido el partido de Murcia 4 electores, 2 cada uno de los partidos de Cartagena, Lorca y Cieza; y un sólo

⁹⁵⁴ Ibidem.

⁹⁵⁵ Ibidem.

elector cada uno de los demás resulta una disparidad en la representación de los partidos contraria al artículo 65 de la Constitución ⁹⁵⁶. La Comisión encontraba los poderes conformes y resolvía que debían aprobarse.

En la provincia de Sevilla existían reclamaciones de electores de Marchena y Arahal por habérseles excluido de la Junta Electoral de Partido celebrada en Paradas con el pretexto de la epidemia reinante. Existía queja de los electores de Morón sobre las elecciones de Partido: se excluyó un poder del pueblo de Gastón porque no se reunió pluralidad de votos de los compromisarios de parroquias. También se excluyeron dos poderes de Puerto Serrano, por el defecto de las firmas de los compromisarios y señal del Presidente, aunque se expresaba que no sabían escribir. En una parroquia de Morón aduciendo que se había dividido en secciones para facilitar el acto, nombraron un número de compromisarios más crecido al que les correspondía, con infracción del art. 42 de la Constitución. El Alcalde presidente sostuvo la legitimidad de la elección. Se aprobaron, no obstante este vicio, las elecciones parroquiales de Morón en tanto se dejaban fuera los poderes de los electores indicados, y con esta nulidad recayó la

⁹⁵⁶ Por orden circular de 17 de setiembre de 1821 se previno que para las elecciones de diputados se estuviera a lo practicado en las anteriores y esto es lo que se hizo en Murcia, Ibidem.

elección en el Marqués de Ariño vecino de Morón.⁹⁵⁷

Las páginas de la prensa manifestaron mayor interés por los resultados de las elecciones de partido. En la Gaceta de noviembre apareció el listado de electores de partido de las provincias de Madrid, Oviedo, Galicia, Barcelona, Cuenca, Valencia, y Burgos⁹⁵⁸ ; a comienzos de diciembre apareció la información sobre Salamanca⁹⁵⁹ . La información no era muy completa. A veces no recogían los nombres de todos los que obtuvieron el encargo de electores y otras no detallaba la profesión de los elegidos. No obstante estos defectos en la información, (en Galicia faltan veinte electores, en Barcelona aparecen cuatro electores sin que conste profesión), se puede elaborar un cuadro con la ocupación de los electores de aquellas provincias que suministran mayor información.

⁹⁵⁷ Segunda Junta preparatoria, D.SS.Cortes, sesión de 20 de Febrero de 1822.

⁹⁵⁸ Gaceta de Madrid 18 de diciembre de 1821.

⁹⁵⁹ Gaceta de Madrid, 1 de diciembre de 1821.

Cuadro 1. Electores de partido: clasificación por ocupaciones.

PROVINCIA	ECL.	FUN.	MIL.	EMP.	PRF.	HAC.	COM	OTR
BARCELONA	1	2		5	9	10	3	6
GALICIA	5	5	3	4	5	7		20
OVIEDO	1		3	1		1		
SALAMANCA	5	1		1	1	2		2

Fuente: Elaboración propia, Gaceta Madrid.

La columna de profesionales liberales estaba dominada abrumadoramente por los abogados; es posible que muchos de los que figuraban como abogados tuviesen además la condición de propietarios. Llama la atención el alto número de propietarios o hacendados que resultaron elegidos. Cabe imaginar sin mucho esfuerzo que en este aumento de compromiso podía haber influido la política desamortizadora en curso. En este sentido, aparecieron en la Gaceta en las fechas que se celebraban los comicios, páginas y páginas con anuncios de provincias en las que salían a subasta fincas de las aplicadas al crédito público para pago de la deuda nacional.

Juntas de provincias.

Un error observable en las Actas de las Juntas de la provincia de Toledo, Salamanca, Cádiz, Cataluña y otras, era que las Juntas electorales de provincia comenzaron a celebrarse el sábado día 1 de diciembre, cuando según la

Constitución lo correcto hubiera sido comenzar el domingo la primera Junta. La razón alegada por autoridades y electores fué el convencimiento de que la "Junta de elección" era aquella en que se verificaban las elecciones y no aquella con la cual principiaban las diligencias. El error en la fecha no parece que tuviera repercusiones en los resultados.

Las Juntas de las provincias de Cádiz, Sevilla, Granada, Barcelona, Valencia y Murcia, estuvieron envueltas en un clima de crispación por el enfrentamiento hacia el Gobierno. Hubo provincias, afectadas por la epidemia, caso de Sevilla, que celebraron la Junta fuera de la capital. Écija fué el lugar escogido en sustitución de Sevilla.

En vísperas de las elecciones de diputados, apareció un artículo en un periódico de cierta tirada, firmado por un supuesto elector de partido, en el que después de detallar las calidades que debían reunir los ciudadanos para merecer el voto proponía colaborara la prensa en la elaboración de un listado de candidatos. Posteriormente serían seleccionados por eliminación los que no reunieran alguno de los requisitos fijados:

"(...) 1. Adhesión decidida y acreditada a la Constitución
(...).2. Fortaleza del alma para votar lo que conceptúe
conducente al bien de la Nación sin dejarse seducir ni
intimidar por las personas ni por las circunstancias.

3. Buen juicio e instrucción bastante.

4. Conocimiento especial (...) de los intereses y circunstancias (...) de la provincia que lo elija.

5. Ser personas ya conocidas en su provincia, y cuyo nombramiento no se dude será bien recibido por la opinión pública. De honradez y lealtad no hablo porque las supongo en todos los españoles (...) Ahora bien, hallar personas dotadas en grado suficiente de todas las calidades que quedan referidas no es fácil; y así (...) ruego a vds., y (...) compañeros los editores de otros periódicos que nos ayuden (...) indicando personas que crean dignas de serlo, y povocando por este medio una especie de juicio de tachas entre los ciudadanos más distinguidos (...) que podrá contribuir grandemente a nuestro acierto⁹⁶⁰ (...).".

En respuesta los editores sugerían otro medio para ilustrar la conciencia de los electores que estimaban más sencillo y seguro:

"(...) Este sería el que reunidos todos los electores del partido de Madrid, propusiese cada uno cierto número de candidatos (...) Esta lista debería imprimirse y circularse en público para que cada ciudadano pudiese informar a los electores, o reservadamente o por medio de los periódicos, de la aptitud o incapacidad de los sujetos propuestos. Si se adopta este medio nosotros ofrecemos publicar las noticias

⁹⁶⁰ El Universal n° 315, 11 de noviembre de 1821.

que podamos adquirir⁹⁶¹ (...)" .

Finalizó la polémica con la carta de "Un verdadero patriota y constitucional", que vertía su opinión sobre el asunto suscitado por el elector de partido con objeto de hacer una elección acertada:

"(...) Por Dios y su Madre santísima que eviten uds. unos y otros el adoptar el medio de esas listas impresas, de esas circulaciones, de esos comprometimientos a publicar las noticias que uds. puedan adquirir (..) de esa especie de juicio; en fin, de tachas entre los ciudadanos más distinguidos (..) ¿Saben ustedes el cisco que van a mover y los males que contra su intención van a causar?(..)

Si los señores electores todos desean como es de creer, el mejoramiento, forme y lleve cada uno su lista de candidatos del mayor mérito (...); fíjense los informes reservados de personas imparciales (..) sobre los que en la primera propuesta reúnan mayor número de indicaciones y recaiga en fin la elección en los que resulten más recomendados en conciencia⁹⁶² (...)" .

Las listas de candidatos circulaban con profusión en Madrid y en otras capitales. Sobre una lista que corría por

⁹⁶¹ El Universal, n° 315, 11 de noviembre de 1821.

⁹⁶² El Universal n° 319, 15 de noviembre de 1821.

Salamanca desde el día 1 de diciembre⁹⁶³ comentaba la Gaceta:

"(...) Ya se nombran varios sujetos como candidatos de quienes se cree debe esperarse sean elegidos Diputados a Cortes, y apenas acabamos de saber quienes son los electores de partido (...)".

En Salamanca, según la representación de varios vecinos⁹⁶⁴, la noche precedente a las elecciones los electores recibieron la visita del comandante Butrón con otros dos oficiales y el administrador del crédito público. Según el escrito se les dijo:

"(..) Venimos de comisión para informarmar a vd. como forastero acerca de los que la opinión públbica designa como diputados a cortes que son a saber (expresaron los nombres de los tres SS que han sido nombrados..) esperamos del patriotismo de vd que contribuirá al bien de la patria y en seguida se despidieron (..)".

En Toledo obtuvo la designación de diputado Ramón Luis Escovedo, jefe político de Sevilla, que tenía pendiente la formación causa por resolución de las Cortes Extraordinarias

⁹⁶³ Gaceta de Madrid 3 de diciembre de 1821.

⁹⁶⁴ La fecha de la representación fué el 29 de enero. Ver D.SS.Cortes, Juntas preparatorias, sesión 20 de febrero de 1822.

de 24 de diciembre de 1821 a resultas de una representación que con fecha 17 de diciembre hizo a las Cortes relativa al mensaje de SM del 29 de noviembre⁹⁶⁵ .

Lo más notable fué lo sucedido en Cuenca. La comisión de poderes observaba que el acta de elecciones de la provincia de Cuenca, descubría "los vicios sustanciales con que fueron celebradas". En ella constaba que el nombramiento de Secretario y Escrutadores de la Junta electoral de la provincia se hizo por aclamación y a propuesta del Jefe político Presidente de otra Junta, que también fué elector en ella. La representación de los electores, reclamando sobre las elecciones decía del jefe político de Cuenca:

"(...) No sólo fué elector de partido en la Junta de provincia sino también parroquial en la del partido de la capital, lo que prueba el influjo fatal que tuvo en las elecciones, bien descubierto en el nombramiento de los escrutadores y secretario en la junta de provincia hecho por aclamación a propuesta suya (...)" .

Por ser contrario a los artículos de la Constitución (arts.81 y 82) y un ejemplo harto escandaloso, la comisión opinaba que las elecciones de Cuenca eran inconstitucionales

⁹⁶⁵ El asunto de Escovedo dió lugar a que las Cortes por decreto de 20 de marzo 1822 establecieran "para que sirva de regla" que por punto general desde el momento de la publicación de las elecciones los diputados electos no podrán ser juzgados por otro tribunal sino por el tribunal de Cortes.

y además nulas:

"(...) Si no se corrige amenaza el inminente riesgo de que por este riesgo se apodere un día el poder ejecutivo de las elecciones, de lo que podrán seguirse incalculables males a la libertad de la patria (...)".

Las Cortes resolvieron⁹⁶⁶ , a la vista del informe de la Comisión de poderes que se procediese a una nueva elección de diputados por la provincia de Cuenca desde las juntas de partido respecto de los de Huete y Cuenca; puesto que la del de San Clemente se celebró con arreglo a la Constitución.

El examen de los poderes de los diputados sirvió para poner de relieve que el conflicto del Gobierno con las ciudades, se había trasladado a las Cortes. El Ministerio de Gobernación mandaba (17 de febrero) a la Diputación permanente exigiese responsabilidad a Galiano, por su actuación como jefe político de Córdoba⁹⁶⁷ . El celo del Gobierno por activar las causas de infracción cuando aparecían implicados los elegidos diputados también se produjo en Valencia. Según el diputado Salvá:

"(...) Viendo el Gobierno(...) al espíritu público en

⁹⁶⁶ D.SS.Cortes sesión de 23 de febrero de 1822.

⁹⁶⁷ El Zurriago n° 20 p.9, dedicó al asunto comentarios del tenor: ¿Se podrá dudar que el señor Feliú es un enemigo de la patria?

contraposición con el suyo, ideó dejar fuera de combate a los verdaderos patriotas, a quienes la opinión general designaba para el honroso encargo de Diputados, mandándoles abrir causas so cualquier pretexto⁹⁶⁸ (...)

El peligro que para las elecciones y la Representación nacional comportaba la estrategia adoptada por el Gobierno fué puesto de relieve :

"(...)Si el decir el Gobierno que se exija responsabilidad a un ciudadano en el momento de ser elegido Diputado ha de servir para anular el nombramiento que haga una provincia, vendría a ser nominal la Representación nacional, porque en los tres meses que hay para celebrar elecciones, el Gobierno tendría medios para inhabilitar a los que pudiesen ser elegidos Diputados, que no tuviesen ideas acomodadas a las súyas ⁹⁶⁹ (...)".

En fin, en el siguiente cuadro aparece el listado de provincias que tuvieron algún tipo de reclamación. En comparación con el proceso electoral anterior, el examen superficial del cuadro pone de relieve la mayor conflictividad del proceso electoral vivido el año 1821. Es palpable la incidencia de los conflictos políticos existentes en el desarrollo de las elecciones.

⁹⁶⁸ Ibidem.

⁹⁶⁹ Intervención de Canga Argüelles, 2ª Junta, sesión de 20 de febrero de 1822.

Cuadro 2. Reclamaciones sobre las elecciones de 1821..			
PROVINCIAS	RECLAMANTES	SOLICITUD	MOTIVACIÓN
ARAGÓN	ELEC. PARTDO	NUL. ELECC.	COHECHO
AVILA	VECINOS	NUL. ELECC.	DEF. PROCED.
BURGOS Y SANTANDER	CIUDA Y CLER.	NUL. ELECC.	DEF. PROCED.
CADIZ	GOBIERNO	NUL. DIPUT.	PROCESADOS
CUENCA	ELECTORES	NUL. ELECC.	VICIOS GRAVES JEFE POLÍTICO
EXTREMADURA	MILICIA Y ELECT.	NUL. DIP Y ELECC.	ELECTORES PROCESADOS
BALEARES	VECINOS Y AYUNTAMEN.	NUL. POD. DIP.	
GALICIA	VECINO	NUL. ELEC	
GRANADA	AYUNTAMIENTOS	NULIDAD	FUERZA ARMADA
JAÉN	VECINOS PARR. Y PARTDO.	NUL. ELECC.	REGULAR
MANCHA	ELECT. PDO.	NUL ELECC.	ACTAS
MURCIA	JEF. POLÍT. VECINOS	NUL. ELECC.	DEF. JTA. PDO.
SALAMANCA	VECINOS	NUL ELECC.	COACCIÓN
SEGOVIA	ELECT. PDO.	NUL ELECC.	COHECHO
SEVILLA	ELECTO. PDO	NUL. ELECC.	EXCLUSIÓN
TOLEDO	DIP. PERMTE.	NULIDAD PODER	CAUSA PEND.
TORO	MILICIANOS	NULIDAD PODER	CAUSA PEND.
VALENCIA	GOB. MILITAR GOBIERNO	NULIDAD PODER NULIDAD PODER	+RESIDENCIA DEUDOR
VIZCAYA	ELECTORES	NUL. ELECC.	DEF. JTA. PDO.

Fuente, Diario de Sesiones.

F. Casas, Elaboración propia. 970

⁹⁷⁰D. SS. Cortes, sesiones de las Juntas preparatorias del 20 a 25 de febrero de 1822.

Valoración de los resultados.

Las Cortes reunidas en sesión extraordinaria, iban teniendo noticia de los resultados electorales, mientras debatían el informe de la Comisión creada con motivo del mensaje del Rey sobre las desobediencias de Cádiz y Sevilla.

En seguida conocieron que obtenían acta de diputados, ciudadanos que habían tenido una significativa participación en la lucha contra el Ministerio. La conclusión interesada de algunos diputados sobre los resultados fué simple: constituía otra prueba más de que el Gobierno había perdido la fuerza moral y debía dimitir:

"(...)Hay hechos que comprueban que ha perdido la confianza: ha removido una gran porción empleados; y ¿que ha hecho la opinión pública? Advierto que no hablo de la opinión de dos cuatro o seis personas, sino la expresado en términos legales. Removió al jefe político de Murcia (...) al otro día ha sido elegido por Valencia (...) diputado; removió al de Soria, y Soria lo ha electo por diputado; removió al de Sevilla y Toledo lo envía (...) diputado; removió al juez de primera instancia de Madrid Castejón, y Madrid y Zaragoza lo eligen para diputado⁹⁷¹ (...)"

Menos optimista era, en su valoración sobre las

⁹⁷¹Ver D.SS.Cortes sesión de 14 de diciembre de 1821, intervención del diputado por Valencia, Sancho.

elecciones, el diputado radical Romero Alpuente. A partir de la inclusión del proceso electoral en su concepción conspirativa, y atribuyendo a los enemigos del sistema una astucia y capacidad de intrigar desmedidas hacía el comentario :

"(...) Siendo los conspiradores poderosos, no tuvieron que hacer otra cosa más que llegarse a este ministerio para lograr mudar todo lo bueno y arreglarlo a su antojo; ¿y cómo lograron su fin los enemigos del sistema? Del modo más fácil, sus causas estaban en manos de los patriotas más decididos; en Madrid en poder de este Castejón, aue ha sido nombrado diputado para las Cortes inmediatas por la provincia de Madrid y de Aragón; en Valencia en poder de Serrano, que también ha sido elegido diputado por la provincia de Valencia; en Murcia en poder de un tal Guerrero, que si no ha sido nombrado diputado, es porque no han faltado intrigas, y así en otras partes, a los cuales han logrado separa de su magistratura sorprendiendo a los ministros, consiguiendo con esto que quedasen ocultos e impunes los delitos más atroces y las maquinaciones más diabólicas, salvando del rigor de las leyes a los enemigos de la patria, que había caído bajo su cuchilla⁹⁷² (...)"

La confusión inicial sobre el verdadero significado de las elecciones, la precipitada creencia de que había surgido

⁹⁷² Ver D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 14 de diciembre de 1821.

una representación muy radical, y la atribución de ese preocupante resultado a los movimientos de desobediencia que habían tenido lugar, fueron factores que tuvieron incidencia en la marcha del sistema constitucional. Como hipótesis se podría afirmar que una de las consecuencias más importantes de las elecciones fué que constituyeron el pretexto indispensable para poner en marcha más frenos a la participación. El Congreso estaba reunido en sesión extraordinaria, y la mayoría liberal más atemorizada emprendió, con renovados bríos su añorado programa para regular la libertad y la participación.

A iniciativa del Monarca, las Cortes extraordinarias deliberaron sobre la necesidad de remediar los abusos de las libertades. Una comisión del Congreso tradujo la proposición real en tres proyectos de ley que regulaban en sentido restrictivo la libertad de expresión, el derecho de petición y las sociedades patrióticas⁹⁷³. La propuesta encontró la oposición inmediata:

"(...) ¿Y se quiere ahora que vayamos a dar a este Gobierno nada menos que tres leyes represivas en que más o menos se atacan los derechos más preciosos de los

⁹⁷³ La respuesta de las Cortes ocasionó que el diputado Gasco hablara de que era : "el primer ejemplar de que a impulsos del Cuerpo legislativo se tratase de (...) engrandecer el poder ejecutivo". Ver DD.SS.Cortes sesión de 4 de febrero de 1822.

ciudadanos?⁹⁷⁴ (...)".

Se planteó la cuestión previa de si procedía entrar a discutir esos proyectos de ley, cuando las Cortes en su mensaje de 18 de diciembre además de otorgar su apoyo al Trono expusieron al Monarca que reformara su Ministerio, cosa que no había tenido lugar:

"(...)No habiéndose constituido todavía el ministerio con la fuerza moral necesaria para dirigir felizmente el gobierno de la Nación, no para sostener y hacer respetar la dignidad del Trono, a pesar de lo que reclama tna imperiosamente la situación del Estado y de los el Congreso expuso y suplicó a S.M. en 18 de diciembre último, las Cortes, que sin esta medida creen insuficiente y acosaso perjudicial cualquiera otra (...) consideran que no está en la ocasión oportuna de resolver útilmente sobre la paropuesta de algunas leyes represivas que les ha dirigido ⁹⁷⁵ (...)".

Las Cortes votaron a favor de admitir como proposición la cuestión previa planteada (por 94 contra 74 votos); acordaron que la proposición se sometiera a discusión sin mediar las preceptivas lecturas (por 96 contra 71 votos)⁹⁷⁶.

⁹⁷⁴ Ibidem.

⁹⁷⁵ Proposición la hizo el diputado por Extremadura Calatrava, ver D.SS Cortes extraordinarias, sesión de 2 de febrero de 1822.

⁹⁷⁶ Ver debates y votaciones en D.SS.Cortes sesión de 2 de febrero de 1822.

Y todo parecía encarrilado para que las Cortes rechazaran debatir los proyectos sobre libertades y derechos mencionados, cuando al día siguiente tuvo lugar un vuelco en las votaciones y fué impugnada la propuesta por un corto margen de votos (por 84 contra 90 votos).

Entrar en ese debate equivalía, en opinión de los diputados de tendencia más radical, aceptar que en el abuso de la libertad de imprenta estaba la fuente de los males que padecía el país:

"(...) ¿Se podrá atribuir a los abusos de la libertad de imprenta el nombramiento que expidió S.M. (...) en favor del general Carvajal para capitán general de Castilla⁹⁷⁷, cuyo nombramiento inconstitucional alarmó (...) Los sucesos acaecidos en los primeros días de febrero (...) en que el pueblo fué ultrajado⁹⁷⁸? (...) La destitución que se hizo (...) de un Ministerio que (...) ofrecía mil garantías a la Nación y a la libertad, ¿fué efecto del abuso de la libertad de imprenta? (...) La aparición del sacrílego Merino, (...) la facción de Salvatierra haciendo armas contra la Patria (...) ¿Se dirá que se deben a los abusos de la libertad de imprenta? (...) Las inquietudes que se notaron en Zaragoza por la remoción del general Riego ¿fueron también efecto de los

⁹⁷⁷ Suceso que provocó la crisis de mediados de noviembre D. SS. Cortes, Actas de las sesiones Secretas y de la Diputación permanente, sesión de 16 al 18 de noviembre de 1820.

⁹⁷⁸ Los sucesos se produjeron en febrero de 1821.

abusos de la libertad de imprenta, o fueron emanadas de una orden indiscreta e impolítica, comunicada por el Gobierno en unas circunstancias en que no debía hacerlo? ¿Fué también efecto de los abusos de la libertad de imprenta el nombramiento que se hizo en septiembre último para el Ministerio de la Guerra en personas que no tenían a su favor la opinión pública?⁹⁷⁹(...)".

Conmocionado el Congreso por los desórdenes y atemorizados algunos diputados por los resultados electorales imaginados debatieron y aprobaron, contra pronóstico, una ley adicional de la libertad de imprenta ⁹⁸⁰, (que declaraba subversiva la injuria hecha al Rey y aumentaba la capacidad represora del Gobierno)⁹⁸¹, del derecho individual de petición (para evitar representaciones colectivas y que se denigrara al Gobierno) y no tuvieron tiempo de aprobar otra de sociedades patrióticas (prescribiendo más reglas y límites a las asociaciones de los ciudadanos para perorar en público). Las dos leyes fueron debatidas precipitadamente, y aprobadas gracias al impulso que recibieron con motivo de los desórdenes e insultos a los diputados Martínez de la Rosa y

⁹⁷⁹ Intervención del diputado por Madrid Gasco en el debate sobre los proyectos de ley de libertad de imprenta, derecho de petición y sociedades patrióticas. Consultar D.SS Cortes extraordinarias, sesión de 2 de febrero de 1822.

⁹⁸⁰ Ley adicional a la del 22 de octubre de 1820. Consultar D.SS Cortes extraordinarias, sesión 4 de febrero de 1822.

⁹⁸¹ Ver intervención de Gasco, D.SS. Cortes extraordinarias, sesión de 4 de febrero de 1822.

Toreno⁹⁸². Hay indicios para pensar que algunos diputados variaron su voto, al ser seducidos por los empleos que ofrecían quienes, en breve, dejaban los escaños para ocupar una cartera en el Gobierno.

En suma, los desórdenes de Cádiz, Sevilla, y otras poblaciones contra la actuación del Gobierno, sirvieron para que las Cortes extraordinarias, en el ejercicio de su "función de magistratura", declararan haber lugar a la formación de causa por las actuaciones de las autoridades de Sevilla y Cádiz. Además la mayoría de las Cortes aprovecharon esos desórdenes que habían afligido la Nación junto a la idea imaginaria sobre los resultados electorales para proporcior más poder al Gobierno, lo que significaba, en sentido contrario, debilitar la posición de los ciudadanos y del Congreso.

Hubo diputados que denunciaron por inoportuno este furor en pro del Gobierno que asaltaba a unas Cortes a punto de expirar:

" (...) Estos proyectos tendrán siempre para mí el

⁹⁸²Refiriéndose a los insultos y atropellos a los diputados, en especial a Martínez de la Rosa y Toreno, que se produjeron coincidiendo con los debates diría Calatrava: "hay una facción liberticida (...) que afectando amor a la Constitución, y sirviendo (...) por el influjo extranjero de instrumento a los mayores enemigos del sistema constitucional, no trata sino de privar a esta infeliz Patria de la libertad. Ver .D.SS.Cortes, sesión de 5 de febrero de 1822.

defecto de habernos introducido a conocer de una cosa que no debíamos; y por lo mismo que un legislador sabio debe llevar muy adelante su vista perspicaz, debe no dar lugar a que se le hagan cargos de opinión. Nada se hubiera perdido en dejar pasar unos veinte días, en cuyo tiempo habría otras Cortes a quienes no debemos creer menos animadas del mismo celo y sentimientos patrióticos que las presentes, en querer contener los desórdenes, ... tanto más que haciéndolo nosotros y del modo que lo hacemos les atamos las manos a nuestros sucesores para que , si erramos como hombres, puedan ellos enmendar nuestras equivocaciones ⁹⁸³ (...)" .

Otros diputados sin embargo, actuaron pensando más en los nuevos cargos que muy pronto iban a desempeñar dependiendo del ejecutivo político. No es extraño, por tanto, que aplaudieran plenamente la definición de la situación que esbozó Toreno:

"(...) Yo creo que el poder ejecutivo de España, si algún defecto tiene, es su suma debilidad; y así como a aquellos Gobiernos fuertes y llenos de recursos es necesario vigilarlos para que no puedan suurpar más poderes que los que se les conceden por la ley fundamental, es necesario también que el Cuerpo legislativo los apoye y de bastante fuerza para que no llegue el mal que se teme , y el peor de todos, de la

⁹⁸³ Las reflexiones las hizo el diputado por Cádiz, Vadillo. Ver, D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 10 de febrero de 1822.

disolución del Estado (...)".

Martínez de la Rosa, que pronto sería encargado del nuevo Ministerio, fué uno de los diputados que con más ímpetu defendió las limitaciones a la libertad, o mejor dicho a los abusos de la libertad y la necesidad de robustecer la autoridad del Gobierno:

"(...) Podrá tener fuerza moral ni este ni otro Ministerio, mientras no se aprueben las leyes propuestas u otras semejantes? (...) resueltamente digo que no; porque los abusos sirven de pretexto para minorar la fuerza moral del Gobierno, y acaban por hacerla nula. (...) No se diga pues que estas leyes son perjudiciales a los derechos de los ciudadanos; no se diga que va a prestar al Gobierno nuevos instrumentos de opresión ; dígase con verdad y franqueza que van a quitar armas a la anarquía ⁹⁸⁴(...)" .

Quien iba a ser designado, en breve, como jefe del nuevo Gobierno no sólo estuvo especialmente interesado en que se aprobaran apresuradamente medidas que robustecieran al poder y debilitaran los extravíos de la participación, sino que realizó una encendida defensa del poder regio:

"(...) La Constitución ha concedido al Rey derechos y facultades que son tan legítimas y sagradas como las de las

⁹⁸⁴ Ver D. SS. Cortes extraordinarias, sesión de 2 de febrero de 1822.

Cortes porque se derivan del mismo principio: la voluntad de la Nación(...)".

A lo largo del debate defendió ardorosamente su tesis de que había que evitar que los elementos populares que aparecían en la Constitución produjeran la disolución del Estados :

"(...) Voy a manifestar una opinión exactísima , aunque a primera vista parezca una paradoja. En los Estados libres, (...) consituidos sobre bases liberales, debe haber en ciertos puntos más restricciones que en los Estados absolutos: esta es una verdad, es un axioma. Por lo mismo que en los Estados libres hay más derechos concedidos por la ley, debe haber más barreras para que no puedan traspasarse ⁹⁸⁵(...)".

La aprobación de estas leyes, encaminadas a contener los elementos populares, y de las medidas que, contra pronóstico, decretaron las Cortes extraordinarias para reforzarlas, (la necesidad de exigir responsabilidad a las autoridades que provocaron los desórdenes), significaron cosas diversas. En primer término, el triunfo de la opción moderada que atribuía los males del país al fanatismo de la libertad, frente a quienes pensaban que la causa principal de los desórdenes estaba en la falta de energía del Gobierno en combatir las

⁹⁸⁵ Intervención en defensa del artículo 9 del proyecto de ley sobre el derecho de petición que excluía a las autoridades de la posibilidad de representar. Consultar D.SS.Cortes sesión de 11 de febrero de 1822.

conspiraciones absolutistas. Las exigencias de responsabilidad y los proyectos de reforma de la libertad y d° de petición, estaban dirigidas a cicatrizar la herida horrorosa que se había hecho en el cuerpo de la Monarquía:

"(...) Los sucesos de Cádiz y Sevilla producen un extravío en la opinión, trastornan los principios fundamentales, preparan el triunfo a la anarquía, y secan el árbol de la libertad en su propia raíz (...)".

Pero la aprobación de esas leyes produjeron además la circunstancia paradójica de que unas Cortes a punto de expirar, otorgaban su apoyo al programa de un Gobierno por venir que salía de esas mismas Cortes.

Conscientes algunos diputados de lo que se estaba fraguando, presentaron dos días antes del cierre definitivo de las Cortes extraordinarias, una proposición para evitar que tal maniobra tuviera éxito: :

"(...) Pedimos que las Cortes declaren que ninguno de los individuos que actualmente las componen deben admitir empleo, condecoración, pensión, ni género alguno de distinción que pueda dar el Gobierno en los dos años siguientes al día en que concluya la presente legislatura⁹⁸⁶

⁹⁸⁶ La proposición, leída por el diputado por Valencia Felipe Navarro contaba con la firma veinte diputados. Impugnada por Torrero y Toreno, no fué admitida a discusión. Ver D. .SS.Cortes sesión de 12 de febrero de 1822.

(...) ".

Pero fracasaron estrepitosamente. En efecto, no se admitió a discusión la proposición suscrita por un grupo de diputados, para preservar el decoro de la Representación Nacional y evitar la maledicencia.

C A P I T U L O 8

Capítulo 8. Caída del sistema constitucional.-

8.1. El Gobierno de la crisis.

Las Cortes de 1820-21 prolongaron sus sesiones hasta febrero de 1822. Expiraron derrotadas por el Monarca, quien no procedió al nombramiento de nuevo Gobierno, ignorando la solicitud mayoritaria de la asamblea. Para mayor confusión, acabaron sus sesiones extraordinarias declarando se formara causa a quienes habían sido elegidos como diputados para las nuevas Cortes y aprobando leyes, (sobre el ejercicio del derecho de petición y la libertad de expresión), que reforzaban el poder ejecutivo y eliminaban incómodos mecanismos existentes en la Constitución para controlar la actuación del Gobierno y las autoridades subalternas dependientes de él.

La actuación final del Congreso estuvo encaminada, en última instancia, a remover todos los obstáculos que frenaban la acción expedita del Gobierno. De esta manera, algunos miembros del Congreso dedicaron sus últimas energías a preparar las condiciones más favorables para facilitar su labor en el cargo de Secretarios del despacho⁹⁸⁷ .

En efecto, uno de los rasgos más destacados del tercer

⁹⁸⁷ El tercer Gobierno (28 febrero - julio 1822), lo componían, Estado: F. Martínez de la Rosa; Gobernación: J.M. Moscoso de Altamira; Ultramar: D. Clemencín; Gracia y Justicia: N. Garely; Hacienda: F. Sierra Plambey; Guerra: L. Balanzat; Marina: J. Romarate.

gobierno constitucional en dos años, era que lo integraban mayoritariamente antiguos diputados de las finalizadas Cortes de 1820-21. Al frente de él y en Secretarías claves estaban Martínez de la Rosa, Moscoso, Gareli, Clemencín y Sierra Pambley. Los cuatro primeros destacaron como fervorosos partidarios de la estrategia moderada. Se distinguieron durante las deliberaciones de las Cortes por su reiterada preocupación por el orden público, los abusos de la libertad (contra sociedades patrióticas), la defensa vehemente de los derechos del trono y del sagrado derecho de propiedad. Únicamente manifestaron radicalismo en las medidas económicas de reforma de los monacales, salvo Garely y Clemencín, quienes más coherentes con su postura de real moderación⁹⁸⁸ asumieron también la estrategia negociada como fórmula para la elaboración y puesta en práctica de la reforma.

En defensa de los derechos del trono Martínez de la Rosa, Garely y Clemencín ⁹⁸⁹, votaron en contra del mensaje aprobado por las Cortes extraordinarias al Monarca, indicando que el ministerio no tenía "la fuerza moral necesaria para dirigir felizmente el Gobierno de la Nación, y sostener y hacer respetar la dignidad y prerrogativas del trono". Cuando el Rey ignoró el mensaje del Congreso, se manifestaron en

⁹⁸⁸ Tanto Gareli como Clemencín votaron en contra del proyecto de ley de Reforma de Monacales. D.SS.Cortes, sesión de 22 de septiembre de 1820.

⁹⁸⁹ Moscoso era miembro de la comisión y no aprobó el dictamen ni votó porque, según Calatrava, se encontraba enfermo. Ver D.SS.Cortes, sesión de 15 de diciembre de 1821.

contra de que las Cortes presionaran al Monarca para que adoptara las esperadas providencias de reforma del Gobierno, que tan "imperiosamente exigía la situación del Estado"⁹⁹⁰, alegando el derecho del Rey a nombrar libremente a sus ministros.

La actitud recelosa hacia la libertad, que compartían los antiguos diputados nombrados ministros, les movió a impulsar la estrategia en virtud de la cual las Cortes declararon haber lugar a la formación de causa a las autoridades de Sevilla y Cádiz⁹⁹¹. Además, yendo más allá de los requerimientos del Gobierno Feliú, consiguieron que el Congreso, modificando sus anteriores acuerdos⁹⁹², aprobara leyes represivas que regulaban el ejercicio de los derechos en sentido restrictivo: como la libertad de expresión, ("para que las libertades públicas no fueran ahogadas en los brazos de la licencia para ser luego presa del despotismo"), el derecho de petición⁹⁹³, convertido en individual y suprimido como tal derecho, (una nación libre debe impedir que un freno

⁹⁹⁰Consultar D. .SS.Cortes sesión de 15 de diciembre de 1821.

⁹⁹¹ Ver D. .SS.Cortes extraordinarias sesiones de 23 de diciembre de 1821 y 19 de enero de 1822.

⁹⁹²El acuerdo de 18 de diciembre de 1821 fué corregido por el que adoptaron las Cortes en la sesión de 3 de febrero de 1822, arrancando medidas represivas de la libertad sin tratar de corregir las causas principales de los abusos.

⁹⁹³Consultar D. .SS.Cortes extraordinarias a partir de la sesión de 4 de febrero 1822.

al gobierno sirva para destruir al Estado)⁹⁹⁴. Aparte de impulsar la aprobación por las Cortes del conjunto de leyes calificadas como represivas, intervinieron en contra del proyecto de ley de mayorazgos (Martínez de la Rosa), también se opusieron a la interpretación de la ley de señoríos más favorable a los pueblos. Por el contrario, se mostraron desde las primeras sesiones de las Cortes vivamente partidarios de la disolución del ejército de la Isla, de la primera y decisiva regulación restrictiva de la libertad de discusión pública sobre materias políticas, (es decir, contra las sociedades patrióticas).

El nuevo Gobierno accedió al poder en un momento de grave crisis reflejada entre otros en los siguientes hechos: existencia de una Confederación liberticida, empleados públicos (jueces y jefes políticos) que inspiraban poca confianza, protestas por los ataques a los derechos (petición) y libertades (discusión y de imprenta), voces de república inventadas para fomentar la desunión entre liberales, provincias al borde de la guerra civil, hacienda en estado lastimoso, emancipación de las colonias y confrontación políticas. Sin embargo, estas circunstancias no quedaban reflejadas fielmente en las Memorias que los Secretarios del Despacho leyeron durante las primeras sesiones del Congreso. Tampoco trataron en su comparecencia

⁹⁹⁴ Argumentación utilizada por Martínez de la Rosa en defensa de la restricción del derecho de petición. Ver DD.SS.Cortes extraordinarias, sesión 9 de febrero de 1822.

de dar a conocer un programa detallado sobre la actuación que pensaban llevar a cabo desde el Gobierno⁹⁹⁵. Les interesó, sin embargo, transmitir a las Cortes su definición de la situación, lo que sirvió para que mostraran el sesgo que existía en sus planteamientos.

En su primera comparecencia ante el Congreso, el Secretario de Gracia y Justicia, Nicolás Gareli, dedicó buena parte de su intervención a disculpar las actuaciones de jueces y magistrados. Trató de ofrecer una explicación razonable que ayudara a entender las dificultades existentes en el funcionamiento de la administración de justicia. Comenzó refiriendo los obstáculos que procedían del pasado :

"(...) Los estorbos que ha tenido los encargados de la administración de justicia para distribuirla (...) envilecida la judicatura en el sistema anterior por la aristocracia y el poder ilimitado de las Audiencias y Consejos no han tenido tiempo todavía los antiguos empleados para levantar su doblada cerviz (...) al llegar a las capitales de sus partidos se han encontrado estos jueces (de primera instancia) faltos de todos los elementos (...) ni fiscal, ni escribanos (...) adictos, (...) ni procuradores, alguaciles (...) De parte de las leyes han encontrado también estorbos (...) nuestra ajeja,

⁹⁹⁵ El Secretario del Despacho Universal de Hacienda Sierra Plambey, que se acababa de incorporar a la Secretaría, dijo que el informe era obra de su antecesor y no se hacía responsable de las opiniones. Ver D. SS. Cortes, sesión de 5 de marzo de 1822.

complicada y monstruosa legislación, ha puesto a los jueces y magistrados en mil embarazos⁹⁹⁶(...) " .

Continuó destacando los obstáculos que provenían del sistema constitucional, haciendo especial mención de las nuevas leyes que regulaban su funcionamiento, la nueva estructura organizativa y las dificultades económicas que padecían las Audiencias:

"(...) La justísima ley de la responsabilidad, que es el dique formado para que la independencia del poder judicial no arrebate en su corriente los más preciosos derechos (..) ha embarazado también la acción del poder judicial (..) temerosos sus agentes de verse envueltos en sus saludables penas (..) No ha sido menor el desaliento de las causas morales y políticas en el desaliento del poder judicial. (..) declarar su interinidad (..) ha producido efectos muy saludables para la consolidación del sistema. constituyó por otra parte a los jueces en una condición precaria, que los ha tenido pendientes y como colgados de la buena o mala voluntad de los informes (..) Por fortuna el poder judicial en España es íntegro y desinteresado pero tiene necesidades que satisfacer; es acreedor a que se le pague su asignación con puntualidad (..) no vuelvan a verse Audiencias con nueve meses de atraso⁹⁹⁷ (...) " .

⁹⁹⁶ Ver D.SS Cortes, sesión de 4 de marzo de 1822.

⁹⁹⁷ Ibidem.

Trató de desactivar las críticas contra los sospechosos procedimientos de los jueces, que hacían interminables los procesos de los conspiradores contra el sistema o promovían extraños indultos a malhechores, restando importancia a los presuntos beneficiarios y las actividades que llevaban a cabo para subvertir el orden. A juicio del encargado de la cartera de Gracia y Justicia quienes protagonizaban esos conatos de rebelión pertenecían a la clase proletaria ignorante y fanática :

" (...) Debo manifestar con franqueza a las Cortes que si no fuese por su mal sonido dentro y fuera de las Nación, (...) miraría el Rey con un alto desprecio las más de las tentativas hechas hasta ahora para subvertir el orden (...) el régimen constitucional se ha consolidado con los imponentes conatos de los partidarios del despotismo. (...) Hay en ciertas clases del Estado falta de educación y sobra de ignorancia y fanatismo político y religioso. Pero al ver que estos desbarros están por lo común limitados a la clase proletaria, a gentes que en todo tiempo han sido objeto de la solicitud de la policía, y que los hombres acomodados tienen interés en el suelo, en las fábricas, en el comercio o en cualquier ramo de industria, rara vez se ha visto que desbarren en ninguna acción que de indicios de desafecto al sistema⁹⁹⁸ (...) ".

⁹⁹⁸ D.D.SS.Cortes, sesión de 4 de marzo de 1822.

Algo que también merece ser subrayado de la Memoria del Secretario del despacho de Gracia y Justicia es la mención especial que dedicó en su exposición al clero. En efecto, refirió la actitud resignada que hacia el sistema había mantenido el clero en su conjunto, no obstante los sacrificios que con motivo de las reformas emprendidas se les estaba continuamente exigiendo. Se trataba de una mención importante, porque contradecía la tónica de los discursos habituales. Pero podía resultar excesiva, viniendo de un eclesiástico, y no resistía fácilmente el contraste con la realidad:

"(...) El clero español en su totalidad ha desplegado virtudes eminentes, ofreciendo por do quiera una resignación heroica, una ilustración poco común, una decidida confianza en los representantes de la Nación. Ni la derogación de su fuero, ni la minoración enorme de sus rentas, ni la posición triste que se halla (...) han dado lugar a reclamaciones. Y el extravío de uno que otro Prelado, y de algunos ministros de segundo orden ha sido casi siempre hijo de los errores de entendimiento⁹⁹⁹ (...)" .

La Memoria del Secretario del Despacho de Gobernación, tenía un sesgo diferente. Admitió el estado poco lisonjero de la Monarquía y dejaba a la perspicacia del Congreso "penetrarse de la amargura", por el cuadro de la situación

⁹⁹⁹ Ibidem.

doméstica:

"(...) Las agitaciones que a la sombra del ilimitado poder de la Majestad Real o de las libertades patrias se prometen dar rienda suelta a su frenesí ambicioso¹⁰⁰⁰ (...)".

Entre los "obstáculos que habían retardado la felicidad nacional", incluía el encargado de Gobernación la epidemia que había asolado las provincias Catalanas y pueblos de Aragón a partir de junio. Relató el estado lastimoso de los establecimientos piadosos y lo que no se había hecho para devolver la deuda contraída por el Estado con las casas de expósitos, hospitales y hospicios. Lamentó el estado deplorable de los caminos y las obras públicas no realizadas, por no haber librado Hacienda las partidas asignadas.

Como propuestas concretas anunció la creación de un cuerpo particular destinado exclusivamente a los salteradores que infestaban los caminos de las provincias meridionales; la aprobación de un plan de policía; la reforma de los presidios y casas de corrección para mujeres; repitiendo lo que dijo Argüelles, propuso de nuevo remover los obstáculos que existían en los ayuntamientos para poner en marcha las políticas dirigidas a activar la repartición de los propios y baldíos, mencionando como objetivo de estas medidas:

¹⁰⁰⁰ D..SS. Cortes sesión de 3 de marzo de 1822.

"(...) Sacar a los braceros de su abyecto estado, transformando en propietarios una porción numerosa de miserables colonos cuyo incesante afán apenas les granjea escaso y grosero alimento, y al fin de dar impulso a las faenas agrestes intersando en ellas por medio de la circulación de la propiedad a la benemérita clase de los guerreros imposibilitados en el penoso servicio militar ¹⁰⁰¹(...)".

El Secretario del Despacho de Estado, desconcertó a los diputados con la lectura de su Memoria. Era un clamor que con el pretexto de la epidemia que afligía a Cataluña se había desplegado en la frontera un ejército. Lo que comenzó como cordón sanitario, acabó como ejército de observación, que pertrechaba y protegía a los conspiradores contra el sistema constitucional. Pues bien, no se le ocurrió otra cosa a Martínez de la Rosa que señalar:

"(...) Nuestras relaciones de amistad y buena armonía con la corte de Francia no han sufrido la menor alteración ¹⁰⁰² (...)".

Además disculpó que persistiera en la frontera, ("tal vez por temor"), el denominado cordón sanitario, cuando el contagio había desaparecido, circunstancia ésta que fué

¹⁰⁰¹ Ver Memoria de Secretario del despacho de Gobernación en D SS Cortes, sesión de 3 de marzo de 1822.

¹⁰⁰² Ver D.SS.Cortes sesion de 3 de marzo de 1822.

criticada por la comisión que examinó los discursos y fué recordada meses más tarde:

"(...) El Gobierno con la voz, "tal vez", que usa para poner a cubierto al de Francia, manifestó que ignoraba absolutamente el objeto del cordón. Pero ¿no advertía que se aumentaba el número de las tropas a medida que el contagio mitigaba su rigor? (...) El Ministerio con su silencio en negocio de importancia tal, embotó los filos de la acción de las Cortes, inutilizó sus esfuerzos, y condenó a una inhumana desesperación a sus individuos; porque hallándose muchos persuadidos de la gravedad del mal, no podían contenerle por falta de la cooperación del Gobierno¹⁰⁰³ (...)".

Los miembros del Gobierno compartían la creencia de que la verdadera amenaza al sistema constitucional procedía de los excesos del ala exaltada del liberalismo. Un grupo de diputados criticó esta forma sesgada de percibir la realidad, cuando sometieron a la consideración de las Cortes su exposición sobre los males del país:

"(...) El Gobierno de 1822 mirando a la Nación por el prisma que le había legado el de 1821, veía en el fecundo calor del patriotismo la cruenta demagogia que llenó de luto a la Francia (...) arrastrado por los fantasmas que le ofrecía su imaginación enfermiza, calificaba de republicanos a los

¹⁰⁰³Consultar D^o.SS.Cortes, sesión de 9 de octubre de 1822.

constitucionales más o menos ardientes sostenedores de la libertad¹⁰⁰⁴ (...)" .

La moderación de las personas que ocupaban las Secretarías del Despacho no formaba parte, sin embargo, de ningún legado del Gobierno precedente. Era anterior en el tiempo y genuina, como se encargaron de mostrar durante el tiempo que tuvieron escaño. Siendo diputado de las Cortes extraordinarias Martínez de la Rosa, en una intervención dirigida a convencer al Congreso de la necesidad de restaurar la paz pública y el reposo de los ciudadanos mediante leyes conservadoras argumentaba:

"(...) La Nación no puede retroceder al despotismo sino por medio de la anarquía (...). La tiranía agotó sus fuerzas abusando de ellas violentamente, y es imposible que recobre en muchos años su imperio (...) Desengañémonos señores, si hubiese un ministerio capaz de conspirar contra la libertad pública vendiendo la confianza de la Nación para precipitarla a un abismo de males, ¿qué medio mejor pudiera elegir que el abandonarla al desenfreno y dejarla correr a rienda suelta por toda clase de desórdenes? ¹⁰⁰⁵ (...)" .

Aunque cada uno de los miembros del Gobierno describió el estado de la nación de forma diferente, el resultado final

¹⁰⁰⁴ Ver D.SS.Cortes sesión de 9 de octubre de 1822.

¹⁰⁰⁵ Ver D.SS Cortes, sesión de 2 de febrero de 1822.

venía a ser el mismo. Posiblemente todos estaban dispuestos a asumir el planteamiento del Secretario de Gobernación quien en un rapto poético señaló:

"(...) Ha prendido en nuestro suelo la Constitución; que esparce sus raíces en todas direcciones, a pesar de que la estación no la fué benigna (...) promete todavía esta tierna planta cobrar tal lozanía que a su sombra descansen nuestras generaciones futuras en paz, honor y abundancia¹⁰⁰⁶ (...)".

El Gobierno no tardó mucho en hacer público lo que podía esperarse de él sobre asuntos políticos fundamentales cuando el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia acudió a las Cortes para dar cuenta del veto del Monarca al decreto sobre señoríos¹⁰⁰⁷. En el mal llamado decreto de 7 de junio de 1821 sobre señoríos, (esa plaga, carcoma de la prosperidad pública en los pueblos), lo que en rigor hacían las Cortes eran declaraciones ¹⁰⁰⁸ sobre la inteligencia del decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de 6 de Agosto de 1811, que trataba sobre la incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la Nación.

El decreto de junio de 1821 traía su origen en una

¹⁰⁰⁶ Ver D.SS.Cortes sesión de 3 de marzo de 1822.

¹⁰⁰⁷ Ver D.SS.Cortes sesión 7 marzo de 1822.

¹⁰⁰⁸ Los artículos 131,1 y 261,10 de la Constitución facultaban a las Cortes para interpretar la ley fundamental emitiendo declaraciones sobre las dudas de los tribunales.

consulta de la Audencia de Valencia que presentó a las Cortes el 21 de septiembre de 1812. Planteaban la duda que había sobrevenido a los magistrados en el recurso de apelación introducido por el Conde de Altamira, sobre el sentido e inteligencia del art. 5° del decreto:

" (...) Si para continuar en el goce de las prestaciones que hasta entonces habían percibido los antes llamados señores, deberían presentar los títulos de adquisición, y qué genero de pruebas podría admitir si se hubiesen inutilizado o perdidos los títulos sin culpa del tenedor (...)".

Los artículos del decreto de junio de 1821 establecieron, que los antes llamados señores tenían que justificar por medio de los títulos de adquisición los terrenos en cuya posesión se hallaban, para continuar en la percepción de los derechos que hasta ahora habían solido cobrar por sus señoríos territoriales y solariegos; y en segundo lugar, que mientras lo dicho no se acredite, permanecía sin efecto el dominio que hasta ahora se había creído pertenecer a los tales señores en dichos terrenos.

El rey, oído el Consejo de Estado, al tiempo que participaba a las Cortes su negativa a sancionar la ley adujo, como razones en que fundaba la negativa de su sanción, en primer lugar que no había motivo para la duda:

" (...) Pues por disposición terminante del decreto

estaban abolidos los señoríos jurisdiccionales, y habían quedado los territoriales y solariegos en clase de propiedad particular, y no hay razón para que la Audiencia diese curso al expediente en puntos que concernían a los primeros y no a los segundos.¹⁰⁰⁹ (...) "

En segundo lugar señalaba que el decreto de las Cortes generales y extraordinarias no parecía exigir la previa presentación de títulos para que los señores continúen en la percepción de los derechos que cobraban por sus señoríos territoriales y solariegos, sino todo lo contrario:

" (...) No es conforme a lo que enseña la historia, y aun se opone a las leyes y a diferentes principios elementales de la jurisprudencia y la política el dar a dicho decreto una interpretación tan violenta como la que se le da en el proyecto (...) S.M entiende que no sólo no es esto lo que las Cortes quisieron significar en los artículos 5° y 6° del decreto de 6 de Agosto, sino que dijeron todo lo contrario de lo que por los arts. 2° y 3° del proyecto se quiere que dijese¹⁰¹⁰ (...) " .

Ironizaba el escrito del Monarca sobre los planteamientos de unas Cortes en las que brillaban ideas liberales, el respeto a la propiedad y el amor a la justicia,

¹⁰⁰⁹ D.SS.Cortes, sesión de 7 de marzo de 1822.

¹⁰¹⁰ ibidem.

pero que en apoyo de la previa presentación de los títulos citaba una ley injusta (ley 1ª Título VII, libro 1º de la Novísima Recopilación), dictada por el detestable espíritu fiscal, propio del tiempo que se hizo.

Paradójicamente asumió como argumento de autoridad para la defensa de los derechos de los señores, los preceptos de la Constitución. En efecto, el Monarca razonaba a las Cortes que requerir la previa presentación de los títulos no era un buen modo de conservar y proteger la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos según prescribía el art. 4º de la Constitución:

"(...) Si se quiere la previa presentación de los títulos, y los pueblos no están obligados a pagar hasta que se enteren por ellos de si son o no pertenecientes a propiedad particular, no dejarán de ser inquietados y turbados en el goce de sus propiedades mientras no presenten dichos títulos; y aunque los presenten, serán inquietados si los pueblos no están obligados a pagar cosa alguna¹⁰¹¹ (...)".

Después de mencionar la legitimidad de la adquisición de los señoríos territoriales y solariegos, ("la Nación es dueña de su patrimonio lo mismo que éste, y puede enajenarle; así lo ha hecho en todos los tiempos y así lo hace actualmente con tantas ventas de propiedades suyas"), apeló a los

¹⁰¹¹ Ibidem.

verdaderos intereses de los pueblos para justificar que los señores no debían verse perturbados en la posesión y disfrute de los terrenos y fincas que hasta ahora les habían pertenecido, como propiedades particulares:

"(...) Además (...) los pueblos ningún interés tienen en este despojo (...). Abolido (el señorío jurisdiccional) y reducida la disputa (...) a los derechos de propiedad particular, nada ganan en que se incorporen al Estado, ni pierden que se mantengan en poder de los particulares (...), no mejorarán de suerte. Y cualquiera que fuese la ventaja que en esto viniese a la Nación, sería siempre falsa, momentánea y adquirida por medio de una disposición acaso alarmante y ruinosa, siendo de temer que los interesados aumentasen mucho el número de los enemigos del sistema que felizmente nos rige ¹⁰¹² (...)".

Pero la cosa no quedó ahí, el Monarca ofrecía por sugerencia del Gobierno un proyecto alternativo. El propio Secretario del Despacho manifestó al Congreso que el Rey, en uso de su facultad decimocuarta del art. 131 de la Constitución, había tenido a bien prevenirle diese cuenta de un proyecto de ley sobre el propio objeto, que sometía a la deliberación de las Cortes:

" (...) El alivio de los pueblos y el respeto a la propiedad, tales son las dos bases sobre que estriba el

¹⁰¹² Ibidem.

mencionado proyecto. (...) Arrancar de raíz hasta el último resto del feudalismo, dejando ilesos los derechos de propiedad; sentar las reglas menos inequívocas para fijar la índole y naturaleza de las diferentes prestaciones; conceder cuantos alivios y rebajas son compatibles con los rígidos principios de la justicia; igualar en cuanto se dable la condición y los beneficios; procurar eficazmente la subdivisión de la propiedad y la consolidación del dominio directo con el útil, son los puntos capitales que (...) forman unido el contexto del presente proyecto de ley¹⁰¹³ (...)." .

En virtud de lo cual es posible hablar de la puesta en marcha de una especie de "veto constructivo". La propuesta además de una indudable muestra de ingenio del Gobierno, podía ser interpretada como un gesto de buena voluntad, encaminado a no bloquear la ley. Pero considerando la trayectoria recorrida por la norma, y el papel desempeñado por los miembros del Gobierno, en su pasada época como diputados, para entorpecer la actuación de las Cortes en este asunto ¹⁰¹⁴, resulta difícil pensar que los miembros del Congreso compartieran esa hipótesis. El Gobierno lo que verdaderamente hizo fué respaldar gustoso el veto del Monarca

¹⁰¹³ D.SS.Cortes, sesión de 7 de marzo de 1822.

¹⁰¹⁴ El presidente de las Cortes cuando se aprobó el proyecto era Moscoso, y según cuenta Romero Alpuente aprovechó el escaso número de diputados existentes para conseguir que lo que era una interpretación de la ley de señoríos, pasara a la sanción del Monarca como si de una ley se tratara. Ver Romero Alpuente , Historia de la Revolución de España en los años de 1820 a 1823. t.II cap.IV, Madrid 1989.

a una ley que, como miembros del Congreso en el pasado habían votado en contra¹⁰¹⁵ .

El veto y la estratagema provocaron la irritación del Congreso que se hizo visible al presentar la comisión de hacienda su dictamen sobre los presupuestos. Pero en la sesión de marras, únicamente el diputado por Cataluña Adán tomó la palabra para hacer un breve comentario:

"(...) Pocas veces se habrá visto en la historia de las Naciones, (...) que al mismo tiempo en que se desecha una ley o que se le niega la sanción por el Poder ejecutivo, se presenta otra por el mismo y sobre el mismo objeto¹⁰¹⁶ (...)" .

8.2. Las Cortes de 1822-23: Composición y estrategia.

Composición.

La instalación de las Cortes se produjo cuando todavía resonaban los ecos de los disturbios de diciembre en los que muy posiblemente habían tomado parte activa algunos de sus miembros. La tranquilidad había sido restablecida con ballonetas y prisiones, en Barcelona, Cádiz, Sevilla, Murcia y Valencia.

¹⁰¹⁵ Los ministros del Gobierno Martínez de la Rosa , Moscoso y Garely habían votado en contra en la sesión de 24 de abril de 1821.

¹⁰¹⁶ Ver D...SS cortes sesión de 7 de marzo de 1822.

Habían conseguido acta de diputados personas significadas por sus enfrentamientos con los anteriores Gobiernos. Destacaban entre ellas el jefe político de Sevilla, Escovedo, elegido diputado por Toledo y que por su participación en los movimientos de desobediencia civil estaba inhabilitado; y el general Riego, héroe de la Isla y figura mitificada, gracias a la desproporcionada persecución de que fué objeto por anteriores Gobiernos. Pero también personalidades relevantes, por diferentes motivos, como Serrano, juez de Valencia que condenó a Elío; Galiano, conspirador de Cabezas y conocido jefe político de Córdoba; Canga Argüelles, ex-diputado en el año 14 y ex-ministro; y la venerada figura de Argüelles que eclipsaba a todos.

Completando la información que suministran las Actas electorales ¹⁰¹⁷, con los folletos de "semblanzas" de los diputados¹⁰¹⁸, contrastada con la valiosa obra dirigida por Gil Novales¹⁰¹⁹ he elaborado un cuadro, semejante al que hicimos sobre las elecciones de 1820, que nos ofrece una imagen aproximada de la composición social de las Cortes.

¹⁰¹⁷Arch. Cortes, Actas Elecciones de Diputados a Cortes, Legislatura 1822-1823, Leg.8 y Leg.9.

¹⁰¹⁸ M.R. y Cerro, Condiciones y semblanzas de los Srs. Diputados a Cortes para los años 1822 y 1823, Madrid, 1822.

¹⁰¹⁹ Me refiero al Diccionario Biográfico del Trienio Liberal, Madrid, 1991.

Cuadro 1. Composición social de las Cortes de 1822-1823.

PROVINCIAS	ECLE	FUN	MIL	EM.P	PROF	H-NO	C.I	OT.
ALAVA			1					
ARAGÓN		1		6	1	1		
ASTURIAS	1	1	1	2				
AVILA					1			
BURGOS	2		1	2	1	1		
CADIZ*				2			2	
CATALUÑA	1	2	1		3	2	3	
CÓRDOBA	1	1	1			1N		
CUENCA	1				1	1		1
EXTREMADURA	1	1	1	1	2			
GALICIA	1	6	4		3	1	1	
GRANADA	2		3		2			
GUADALAJARA	1	1						
GUIPÚZCOA							1	
JAÉN	1		1			1N		
LEÓN	1	1	1					
MADRID				1	1	1		
MÁLAGA	1	1	1	1				
MANCHA	1			1	1			
MURCIA	1		1		1	2		
NAVARRA	1			1	1			
PALENCIA	1						1	
SALAMANCA	1	1	1					
SEGOVIA	1			1				
SEVILLA	1	1		4				
SORIA		1J				2		
TOLEDO	2		1	1		1		
TORO					1			
VALENCIA	4	1J	1	2	2	2		
VALLADOLID					1	2N		
VIZCAYA	1		1					
ZAMORA	1					1		
ISLAS			1	1	1			
CANARIAS	1						1	
TOTAL 821	30	19	22	26	23	19	9	1
" 820	<40	<32	<18	<6	<28	<12	<6	

Comparando los resultados con los de las anteriores elecciones, puede notarse una disminución notable en el número de eclesiásticos, aunque la presencia en las Cortes de individuos pertenecientes al clero siga siendo destacable. Desaparecen los obispos de la representación¹⁰²⁰; cabría explicar este hecho recurriendo a la modificación que llevaron a cabo las Cortes¹⁰²¹ de la normativa electoral, para entorpecer la elección de los obispos al incluirlo en lo estipulado por el art.97 ¹⁰²². Sin embargo me inclino a creer que el dato expresa, más bien, el disgusto generalizado de los prelados, y refleja la intensidad de la protesta eclesiástica contra el sistema constitucional que había procedido a llevar a cabo expulsiones de obispos (Orihuela, Valencia, Barcelona).

También llama la atención el ostensible aumento de los empleados públicos nombrados por el Gobierno, (consejeros de estado, jefes políticos) , o elegidos por los ciudadanos para el desempeño de puestos en la administración pública provincial y local (diputados provinciales y alcaldes). En este último sentido se podría decir que quienes se iniciaron en la vida política en el ámbito provincial trataron de dar

¹⁰²⁰ Salvo Santiago Sedeño, diputado por Segovia y obispo electo de Coria. Arch.Cor. Leg. 6, Exp.27.

¹⁰²¹ Un comentario al respecto supra.

¹⁰²² El citado artículo establece que los empleados públicos no pueden ser elegidos diputados "por la provincia en que ejerce su cargo".

el salto y pasaron a ocupar un escaño en la Representación nacional. Aparte de esta obviedad cabría especular sobre este aumento poniéndolo en conexión con la llamada especial que el Gobierno de Feliú dirigió a los empleados públicos incitándoles a la participación.

La presencia de propietarios, comerciantes o industriales requiere algún comentario. En primer lugar, la suma de los individuos pertenecientes a estos grupos en las anteriores Cortes era de 18, ahora son 28, es decir la cifra aumenta 10 más. En todo caso, es preciso tener presente que ambas cifras son engañosas, muchos de los que aparecen en las otras casillas podrían estar en esta. En qué medida el crecimiento de los pertenecientes a este grupo constituye una muestra del incremento de compromiso ideológico o de la sinceridad de los propietarios no es fácil dilucidar. En fin, parece razonable pensar que entre los miembros de estos grupo existía un interés lícito en defender las propiedades adquiridas o bien en apoyar la continuación de las políticas desamortizadoras en curso, de ahí su mayor implicación. En las provincias de Córdoba, Jaén y Valladolid quienes ocupan la casilla de hacendados son grandes títulos de la nobleza. En qué medida el Gobierno, con su circular y sus campañas de ventas de bienes nacionales (anunciados en los suplementes extraordinarios de la Gaceta) influyó en este incremento de

la representación de los propietarios¹⁰²³ .

Sobre los porcentajes totales que arrojan las elecciones de mayo de 1820 y diciembre de 1821 el cuadro resultante es el que aparece a continuación.

Cuadro 2. Composición social: Cortes de 1820-21 y 1822-23.

AÑO	ECL	FUNC	MIL	EMP.P	PR.LB	PRO	COM	OTRO
1820	27%	21,5%	12%	4%	19%	8%	4%	
1821	20%	12,5%	15%	17,5%	15,5%	12,7%	6%	0,6%

Elaboración propia.

Estrategia.

Los diputados llegaron dispuestos a arremeter contra el Gobierno que el Monarca acababa de cesar. Aunque se quedaron sin el adversario a batir, mantuvieron la estrategia y nada más comenzar las sesiones, (incluso antes de la lectura de las Memorias por los Secretarios del Despacho), comenzaron sus ataques. En sus intervenciones resaltaron el doble rasero que había venido empleando el ejecutivo, rudo a la hora de combatir las agitaciones promovidas por exceso de celo en

¹⁰²³ Durante todo el proceso electoral, (especialmente octubre y noviembre) la Gaceta consagró gran cantidad de espacio a dar publicidad sobre subastas de fincas nacionales en distintas provincias.

defensa de la Constitución, mientras que hacía gala de blandura para atajar los movimientos liberticidas que agitaban la Monarquía.

La primera proposición que se hizo en la asamblea estuvo dirigida a manifestar públicamente la preocupación por las maquinaciones ya sordas ya declaradas de los enemigos del Rey y de la Patria . En este sentido, Gomez Becerra solicitó:

"(...) Que se nombre una comisión especial de Tranquilidad pública () y que se discuta como comprendida en el art. 100 del Reglamento¹⁰²⁴ (...)".

Que el Congreso comenzara sus sesiones ocupándose con carácter urgente, de cometidos característicos del poder ejecutivo, como era la tranquilidad pública, sin haber sido requerido por el Gobierno, encontró inmediata oposición. Una parte de los diputados estimaron que la propuesta atentaba a la división de poderes (Melo) y era por lo mismo peligrosa (Lapuerta). Argüelles más ladino la defendió como muy acomodada a la Constitución, por estimar que entraba dentro de las facultades de suprema inspección sobre el ejecutivo que todos los cuerpos legislativos se han reservado, pero inoportuna porque no habían leído las Memorias los Secretarios del Despacho.

¹⁰²⁴ D: .SS.Cortes, sesión de 2 de marzo de 1822.

Quienes la apoyaban adujeron la necesidad de acabar con las causas de la incertidumbre penosa en que se hallaba la Nación, como era la impunidad que disfrutaban los que atacaban el sistema constitucional. En apoyo de la proposición señaló el diputado por Valencia Villanueva:

"(...) En todos los ángulos de la Monarquía. Por todas partes se mueven pasos que tienden (..) a la destrucción de la libertad; y si no recórranse las provincias (..) en Navarra, en Castilla la Vieja, en la Mancha, en las cercanías de Madrid, en Valencia, en Cataluña, en Aragón. (...) Propendiendo (estas facciones) a echar por tierra el sistema dichoso que nos rige ¹⁰²⁵ (...)" .

Otro de los diputados designados por Valencia, Falcó, utilizando la figura retórica introducida en las pasadas Cortes indicó:

"(...) Bien conozco que la Nación camina sobre el cráter de un volcan ¹⁰²⁶ (...)" .

El diputado por Valladolid, Seoane, culpó de estas llamaradas al anterior Ministerio y sus medidas antipolíticas y misteriosas:

¹⁰²⁵ Ibidem.

¹⁰²⁶ Fué el diputado exaltado Gasco quien, oponiéndose a las propuestas de ley del Gobierno, en las las Cortes extraordinarias señaló "caminamos hace mucho tiempo sobre un volcán". Ver D.SSCortes, sesión de 2 de febrero de 1822.

"(...) No hubiera sucedido así si desde un principio (...) se hubieran tomado providencias enérgicas y vigorosas para destruir sus planes criminales y liberticidas. (...) Este estado de fermentación (...) que hace que en los pueblos no se obedezcan las leyes, que ha paralizado casi completamente la marcha del sistema constitucional en algunas provincias. (...) Por otra parte (...), en varias provincias se ha turbado la tranquilidad pública, sin que esa alteración la hayan causado los enemigos de la Constitución, sino la desconfianza, justa o injusta, que llegaron a concebir los pueblos al ver las medidas antipolíticas y misteriosas del Ministerio anterior (); cuyos movimientos, por fortuna calmaron, tal vez por las esperanzas lisonjeras que han concebido los patriotas desde que se verificó el nombramiento de Diputados para estas Cortes (...)"

Causó extrañeza en Sedeño, diputado por Segovia, la oposición a una propuesta tan necesaria en el estado que se encontraba la Nación:

"(...) Esa hidra ponzoñosa (...) tiene paralizada la marcha del sistema constitucional; (...) ha introducido la desconfianza en la mayor parte de la Nación, en términos que no hay hombre que se atreva a emprender, ni en el comercio ni en la industria, ni en ningún ramo de los que constituyen la riqueza del Estado, empresa alguna. Esos entes perversos empiezan por denigrar al Rey (...) ¿no estamos viendo de que

están persuadidos de que le hacen el mayor obsequio cuando ponen en ejecución esos planes de destrucción de la Constitución y del Trono? Si no bastan las protestas que tantas veces ha hecho S.M. para sellar los labios a esos hombres (...) ¿no se han de tomar otras medidas? (...)".

La proposición fué la primera desaprobada a quienes defendían posturas características del liberalismo radical, siendo sustituida por otra alternativa que solicitaba el nombramiento de una Comisión para examinar, sin urgencia, el estado político del reino tomando las noticias que suministren los Secretarios del despacho en sus Memorias ¹⁰²⁷. De otra parte, en defensa de la libertad un numeroso grupo de diputados sometió a la consideración de las Cortes, la proposición según la cual los miembros de la representación nacional no podían obtener empleo alguno por provisión real hasta un año después de cumplir su legislatura. Entre quienes defendían la iniciativa, abundaban los liberales más radicales, y motivaban su medida:

"(...) Por medio de este arma poderosa de la dispensación de gracias y empleos, los mejores defensores de los derechos de los pueblos se han convertido en agentes del despotismo para reducirlos a la esclavitud! (...) ¿No hemos

¹⁰²⁷ La proposición fué realizada por Gil de la Cuadra en sustitución de la anterior, que al no querer el cambio propuesto fué rechazada. Ver D.SS.Cortes, sesión de 2 de marzo de 1822.

visto, Señor, que los diputados a Cortes de la Nación española de los años 20 y 21 han sido los que han merecido esta consideración del Gobierno cuando se han explicado con ideas de conformidad?¹⁰²⁸ (...)."

La polémica propuesta era semejante a la que presentaron las Cortes extraordinarias antes del cierre de sus sesiones. Su significación en este caso era compleja, pretendía ser un explícito homenaje a los diputados exaltados de las Cortes pasadas y una condena de la actuación de los diputados moderados. Pero como estos diputados estaba en el Gobierno, la proposición incorporaba un rechazo implícito de la actuación de los ministros actuales cuando ocupaban el escaño. En su fundamentación los autores no se anduvieron por las ramas:

"(...) Sus autores no se han propuesto llevar los hombres al más alto grado de perfección; han, sí, tratado de evitar que algunos caigan en la última degradación. Se trata (...) de debilitar y reducir al más estrecho límite la influencia ministerial, que en los Estados representativos (...) procura introducirse en el poder legislativo¹⁰²⁹ (...)."

¹⁰²⁸ Intervención del diputado por Cataluña Adan . Ver D..SS. Cortes, sesión de 12 de marzo de 1821.

¹⁰²⁹ Intervención del diputado por Burgos Velasco. Ver D..SS. Cortes sesión de 12 de marzo de 1822.

La propuesta provenía de los liberales más radicales siendo desechada por escaso margen de votos, (sólo tres). Aunque el objetivo explícito no fuera alcanzado, consiguieron los diputados con su propuesta hacer un homenaje testimonial a unos y la censura moral a los miembros del Gobierno.

A la vista de los resultados de las primeras y subsiguientes votaciones es arriesgado sostener que la conocida como exaltación fuera la tendencia que dominaba en las Cortes del año 1822-23. Ciertamente había en ellas un grupo de diputados, como Riego y Escovedo, que se habían significado por su radicalismo político; además las Cortes tuvieron el gesto de nombrar a Riego como el primer presidente de la nueva legislatura y aprobaron en recuerdo y como desagravio de las víctimas de Cádiz que el 10 de marzo fuera día de luto nacional:

"(...) Las Cortes no pueden ni deben mezclarse en las funciones judiciales, (...) pero las Cortes pueden dar un testimonio de consuelo y de aprecio a aquellos mártires de la libertad en este día de luto y amargura ¹⁰³⁰ (...)".

Pero no sería correcto definir el conjunto de la Representación nacional atendiendo sólo a una parte de sus miembros y prestando atención a engañosos actos simbólicos, que tanto contribuyen a desfigurar la realidad.

¹⁰³⁰ D.SS.Cortes, sesión de 10 de marzo de 1822.

Por el contrario, si se desea ponderar la orientación política e ideológica dominante en el Congreso hay que tomar en consideración que no dieron carácter de urgente a la comisión que debía informar sobre el estado del reino, rechazaron aprobar la propuesta dirigida a garantizar la independencia del Congreso y aunque por espíritu de cuerpo aprobaran "arrancar" del Tribunal Supremo las causas contra los diputados¹⁰³¹ combinaron esta actuación con el apoyo al jefe político de Madrid que, para evitar los abusos de los ciudadanos en el ejercicio de la libertad de discusión en materias políticas, mantenía suspendidas las sociedades patrióticas¹⁰³².

Retóricamente radicales, realmente moderadas, sería la definición más adecuada de las nuevas Cortes. Seguramente, la excesiva moderación del Gobierno haya contribuido a que pasaran a la historia con la consideración de más radicales de lo que verdaderamente eran. Reflejo también de la moderación de sus planteamientos fué la solución adoptada en relación con el poder del diputado por Toledo Escovedo.

En la lista de diputados electos, leída en la primera

¹⁰³¹ Las Cortes acordaron reclamar al Tribunal Supremo la causa que se había formado al diputado Alcalá Galiano e instruir un expediente por si el Tribunal hubiese incurrido en infracción de la Constitución. Ver D.SS.Cortes sesión de 2 de mayo de 1822.

¹⁰³² El debate fué motivado por la queja que realizaron ante las Cortes tres ciudadanos exigiendo responsabilidad de José Martínez de San Martín. Ver D.SS.Cortes, sesión de 20 de mayo de 1822.

sesión de la Junta preparatoria por Martínez de la Rosa como secretario de la diputación permanente, junto con el nombre del diputado electo por Toledo Luis Escovedo, figuraba una nota de la sesión de 28 de enero de 1822 que entre otras cosas decía:

"(...) Este señor se halla suspenso y mandado procesar por resolución de de las Cortes extraordinarias, acordó la diputación permanente que con esta expresión se anote su nombre para que en su vista la Junta preparatoria de las próximas Cortes resuelva lo que tenga por conveniente¹⁰³³ (...)." ."

Escovedo, jefe político de Sevilla durante las agitaciones de diciembre, fué elegido en las elecciones a Cortes del 2 de diciembre diputado por Toledo. Posteriormente las Cortes extraordinarias decretaron la suspensión de su destino y formación de causa¹⁰³⁴ . El problema que debía resolver la Junta preparatoria era si su nombramiento se consideraba válido.

El diputado por Toledo Saenz de Buruaga señaló que desde el día tres por la mañana estaba en la diputación permanente de las Cortes el nombramiento, añadiendo que fué en fechas

¹⁰³³ Ver D.SS Cortes, Actas de la Diputación permanente, sesión de 28 de enero de 1822.

¹⁰³⁴ Ver D.SS. Cortes extraordinarias sesión de 23 de diciembre de 1821.

posteriores:

"(...) Cuando se puso la nota capciosa, caprichosa y arbitraria; nota de la cual puede abusar siempre el Gobierno para que no haya ningún diputado (...) que defienda los derechos del pueblo (...) La nota que se le ha puesto no debe ser de ningún momento, ni puede darse un dictamen contrario a la buena opinión y a los derechos de ciudadanía que gozaba este individuo¹⁰³⁵ (...)" .

Otros diputados, sin embargo, partiendo de la distinción entre la formalización del poder de diputado y su ejercicio defendieron :

"(...) El poder le han aprobado las Cortes (...) pero el ejercicio del poder se suspende cuando se suspenden los derechos de ciudadano (...) en mi concepto no puede entrar a jurar ni a ejercer su poder hasta que el tribunal competente haya fallado en su causa¹⁰³⁶ (...)" .

Las Cortes barajaron como opciones la aprobación y suspensión del poder; la admisión sin más requerimientos de Escovedo (que después de jurar pasara a ocupar su asiento)

¹⁰³⁵ Ver D. .SS Cortes, sesión de 7 de marzo de 1822.

¹⁰³⁶ Postura defendida por el diputado nombrado por Navarra Munárriz, D. .SS. Cortes, sesión de 7 de marzo de 1822.

¹⁰³⁷; y la proposición que en última instancia prosperó, la del diputado por Cataluña Oliver, declarando aprobados los poderes:

"(...) Sin perjuicio de lo que después resuelva el Tribunal de Cortes (...)".

Rasgo de las Cortes.

Una diferencia sustancial entre estas Cortes y las de las anteriores legislaturas consistía en que ahora debían funcionar sin contar con las demandas ni las adhesiones que los ciudadanos colectivamente habían venido presentando ante el Congreso. Al amparo del artículo 373 de la Constitución, los ciudadanos habían adquirido el hábito de dirigir sus escritos al Soberano Congreso o al Rey. El número de las representaciones llegó a causar asombro entre los propios liberales. De ellas se sirvieron ciudadanos pertenecientes a muy diversos grupos sociales para defender sus particulares intereses. Ironizar con sorna sobre este derecho fué uno de los ejercicios preferidos de los enemigos del sistema. Miñano aprovechó sus Lamentos para dedicarle alguno de sus corrosivos comentarios.

Como hemos venido diciendo, las representaciones fueron decisivas durante esta experiencia constitucional. Exagerando se podría afirmar que la historia de este período es la de

¹⁰³⁷ Propuesta del diputado por Cataluña Adán, D.SS.Cortes, sesión 7 de marzo 1822.

una representación permanente. Ignorarlas equivale a no entender la rica complejidad de un momento histórico caracterizado por un afán de participación tan intensa. Las representaciones funcionaron como el resorte que ponía en movimiento el sistema. Fueron utilizadas para impulsar medidas y leyes, determinar su contenido, vetarlas, condicionar su aplicación (ejército, monacales, diezmos, señoríos); a través de ellas influyeron los ciudadanos en el nombramiento o la destitución de autoridades (Gobierno, jefes políticos, obispos); gracias a ellas se activaron la marcha de las instituciones en momentos difíciles (convocatoria de Cortes); sirvieron en fin para denunciar la actuación de cualquier autoridad que infringía lo establecido por la Constitución.

Desde los inicios del régimen, incluso antes de que estuvieran instaladas las Cortes, comenzaron las representaciones. Representaron las Sociedades contra medidas del Ministerio de Guerra; los campesinos por el vil precio de los granos; los ciudadanos porque los prelados no predicaban a favor de la Constitución; los eclesiásticos por el lastimoso estado de los hospitales; las monjas de clausura por las dificultades que tenían para su secularización; el ejército, la diputación y el ayuntamiento de Cádiz contra la disolución del ejército de la Isla; los frailes, abades, prelados y Nuncio contra la ley de reforma de regulares; los ciudadanos contra la escandalosa actuación de los jueces; la diputación permanente de las Cortes para llamar la atención

del Rey que había infringido la Constitución, procediendo al nombramiento de un capitán general sin las formalidades requeridas; la Diputación provincial y ayuntamiento de Madrid solicitando convocatoria de Cortes extraordinarias; las Sociedades patrióticas, solicitando la caída del primer Gobierno y manifestando su apoyo al Rey; las autoridades subalternas para expresar su opinión sobre algún aspecto de la división provincial; las autoridades provinciales constituídas en junta, contra el segundo Gobierno; los artilleros de Valencia en contra de las autoridades andaluzas y apoyando al Gobierno y así sucesivamente.

En resumen, sobre cualquier asunto percibido como importante objeto de decisión política o que estaba descuidado, aparecía una representación. Eran utilizadas para informar sobre problemas excluidos de la agenda, para definir y proponer soluciones sobre programas de acción que estaban siendo abordados, denunciar actuaciones descuidadas, desacertadas, inconstitucionales de cualquier autoridad (jefes políticos, jueces, intendentes, obispos, ministros). También las autoridades se sirvieron de ellas para expresar su desacuerdo hacia determinadas decisiones anticipando la resistencia a su cumplimiento.

En momentos percibidos por los afectados como de especial gravedad o bien que consideraran amenazados sus intereses, la representación adoptaba la forma de denuncia, y los ciudadanos y autoridades que representaban acompañaban

sus escritos con una amenaza o resistencia abierta al cumplimiento de las normas. Práctica ésta última que inauguraron ilustres miembros de la institución eclesiástica, (recuérdese el obispo de Orihuela, el Nuncio, el Obispo de Valencia, el general de las Órdenes Regulares), y acabó cundiendo el ejemplo en el resto del país.

Después de la intensa experiencia vivida con las medidas de reforma religiosa, los miembros del Congreso estaban de sobra familiarizados con las representaciones y sabían como manejarles. Por esta razón, cuando las Cortes extraordinarias debatieron, a instancias de los moderados, la ley reguladora del derecho de petición no fué debido al diluvio de representaciones que ciudadanos, militares, instituciones (diputaciones y ayuntamientos) hicieron llegar al Monarca y las Cortes denunciando o apoyando al Gobierno Feliú. La razón de esa prisa por una regulación restrictiva de derechos y libertades obedecía al afán de Martínez de la Rosa, que se sabía ministro, por disponer las cosas adecuadamente para cuando se incorporara como jefe del nuevo Gobierno.

Por tanto, las Cortes movidas por los diputados del futuro Gobierno, quisieron finalizar sus sesiones poniendo coto a ese derecho, que en su opinión había devenido en abuso. Lo que hicieron las Cortes para poner remedio a lo que percibían como extravío fué, partiendo de una interpretación rigurosa del precepto constitucional, eliminar la práctica del derecho de petición que, a partir de la interpretación

generosa que se venía haciendo del precepto, había dado lugar a todo tipo de representaciones. Justificaron la medida con la tradicional retórica reaccionaria: "los abusos de la libertad sirven más al poder absoluto que a la libertad". Abundando en la imperiosa necesidad de la ley los diputados que habían sido víctimas de ataques personales a la salida de las Cortes, no dudaron en recordar el terror revolucionario francés:

"(...) La Constitución francesa dada por la Asamblea constituyente fundadora de la libertad, expresó que este derecho de petición se permitía individualmente, porque los defensores de la libertad la amaban. (...) Vino después la época del terror: los anarquistas triunfaron, no para dar la libertad al pueblo seducido, sino para esclavizarlo. Forjaron la Constitución del año 1793; en ellas se quitó este adjetivo, y se dijo indeterminadamente que se concedía el derecho de petición. La Francia responderá cuanta sangre, cuánta ruina, muerte (...) calamidades le costó haber suprimido este adjetivo, que tuvo que volver a expresarse en la Constitución de 1795¹⁰³⁸ (...)" .

El mal llamado derecho de petición quedó convertido estrictamente en el derecho individual de reclamar la observancia de la Constitución. Lo que pretendía Martínez de la Rosa con la ley era, fundamentalmente, eliminar las

¹⁰³⁸ Intervención de Martínez de la Rosa en D.SS.Cortes, sesión de 9 de febrero de 1822.

representaciones colectivas que provenían de las sociedades, (es decir, la preocupante práctica de participación directa que en el marco de las sociedades patrióticas se había puesto en marcha en algunas ciudades); que los militares no pudieran reunirse para representar ni tampoco lo hicieran instituciones, como las diputaciones y ayuntamientos. En fin, que los ciudadanos supieran cuando estampaban su firma en una representación que se les podía exigir responsabilidad por los abusos de ese derecho.

En la ley aprobada por las Cortes extraordinarias de 1821, gracias al esfuerzo encomiable del Conde de Toreno y Martínez de la Rosa y el apoyo de la mayoría del Congreso, hay que distinguir entre el contenido de verdad y su utilización política. Desde un punto de vista estricto, la interpretación del precepto constitucional recogida en la ley es posible que fuese la jurídicamente correcta¹⁰³⁹. Ahora bien, desde un punto de vista político, la nueva ley estaba poniendo límites a la participación, hipotecando en el último momento la actuación de las Cortes recién designadas. Para quienes estaban próximos a abandonar su escaño, para pasar a desempeñar una Secretaría del Despacho, la utilidad de la ley era evidente: servía para contener el afán de participación que se había desatado y eliminar el freno que el ejercicio colectivo e institucional del derecho de petición podía significar para el Gobierno.

¹⁰³⁹ Marta Lorente, *Infracciones a la Constitución*, Madrid, 1988.

El objetivo de estas medidas era obvio y fué hecho explícito, apartar al Congreso de las presiones continuas de los ciudadanos. Pero de esta manera la representación nacional quedaba sin la información preciosa que suministraban los grupos sociales más activos. No sólo desaparecía un mecanismo que hábilmente utilizado podía servir en la lucha por el contenido de la agenda política, la confección de medidas, y conocer el apoyo real o inducido a las políticas propuestas; sino que la ley ocasionaba una reducción decisiva de las Cortes. Sin demandas ni apoyos constantes de las Sociedades, guarniciones, prensa, ayuntamientos, diputaciones, eclesiásticos, agricultores ; enfrentados al Gobierno y careciendo del respaldo de la Corona, las Cortes corrían el riesgo de quedar aisladas y agitándose en el vacío.

8.3. Confrontación Gobierno y Cortes.-

La impresión que transmite la lectura de las primeras sesiones de las Cortes de 1822-23 es que una parte de los diputados acudían con una estrategia trazada de antemano: insistir en el cambio de Gobierno. Uno de sus objetivos, por tanto, era idéntico al que persiguieron, sin éxito, las Cortes extraordinarias. Pero el Monarca desbarató la estrategia cuando procedió a nombrar nuevo Gobierno, dejando a una parte de los diputados desconcertados, sin rumbo por un tiempo. Las Cortes elegidas en medio de la agitación de las

provincias y la desobediencia, no podían evitar dirigir sus atención a las reclamaciones planteadas por los pueblos. Refiriéndose a esta circunstancia comentó el diputado Seoane:

"(...) Hubo un grito general contra el Ministerio anterior, que se transformó en un profundo silencio (...), se ha querido presentar esta transformación como efecto (...) de la esperanza de que el Gobierno remediará los males que aquejan a los pueblos, y de que estas Cortes no se harán sordas a sus reclamaciones¹⁰⁴⁰ (...)".

La persistencia del nuevo gobierno en las estrategias del pasado y el contenido entre insípido y provocador de las Memorias leídas en las Cortes facilitaron una rápida adaptación de la estrategia diseñada a la nueva situación.

Las desvaídas y desconcertantes Memorias de los Secretarios del Despacho, pronto encontraron réplica entre los diputados de forma individual y colectiva. En la misma sesión en que el Secretario del Despacho de Justicia notificaba el veto del Monarca a la ley de señoríos intervino el diputado Canga Argüelles. El ex-ministro que había radicalizado su postura, presentó un extenso dictamen en el bosquejaba el cuadro que presentaba el país en el comienzo de la tercera legislatura ordinaria:

¹⁰⁴⁰ Ver D.SS. Cortes sesión de 9 de marzo de 1822.

"(...) Pasados dos años desde que (...) volvió la Constitución política de la Monarquía (...); y cuando los pueblos debieran disfrutar de lleno sus benéficas influencias (...) mil y mil estorbos, (...) y negras intrigas se conjuran para hacernos retroceder a los hierros de la esclavitud (...).

Después de su breve introducción, hacía Canga una definición de la realidad de la que participaba la oposición al Gobierno en el Congreso. En especial hizo referencia a las escandalosas insurrecciones, la mortífera lentitud de las causas de conspiración, la persecución sufrida por los ciudadanos que practicaban sus derechos o celebraban su libertad, el descuido de las sociedades y las sátiras a la libertad, voces calumniosas de república para fomentar la desunión, ministros del santuario que conspiran en algunas provincias al borde de la guerra civil, estado lastimoso de la hacienda y desatención de América.

Merece la pena recoger en extenso el planteamiento del diputado por Asturias. Su texto era como el compendio de la crítica al Gobierno por parte de la oposición:

"(...) Primero . Yo veo a la Nación española abandonada a sí misma, luchando contra los errores domésticos y contra el encono disfrazado de los que no pueden sufrir que aspire a la elevación (); yo la veo abandonada a sus propios recursos, sin que descubra garantías seguras en la amistosa

correspondencia de otras Naciones.¹⁰⁴¹

(..) En vez de estas garantías, la voz pública denuncia(..) una confederación liberticida que forja sus planes en territorio extranjero, desde el cual atacan descaradamente la Constitución. (..) Las escandalosas insurrecciones de Aragón, Cataluña y Navarra se dicen ser producto horrible de las maquinaciones de algunos españoles espúreos que han hallado más franca acogida en un país amigo. (..).

Segundo. Multiplicadas y enérgicas exposiciones de ciudadanos y de las autoridades que dirigen varias provincias nos descubren la zozobrosa inquietud de los amantes de la libertad patria, por la mortífera lentitud con que se siguen las causas formadas contra los que han intentado trastornar el sistema, o se han manchado con la inocente sangre de sus conciudadanos; por la producción multiplicada de insurrecciones que, si hasta aquí han servido sólo para afirmar la Constitución, excitan sospechas sobre el móvil que las produce (..); y por la poca confianza que inspiran varios empleados públicos(..).

Tercero. El espíritu público, agente vital de las pueblos libres, se mira decaído (..); se calificó tumultuario el ejercicio del imprescriptible derecho de petición; se trató como a enemigos de la Nación a los que osaron denunciar noblemente los vicios de los gobernantes; a la débil sombra de leyes antiguas (..) y que han caducado con la Constitución

¹⁰⁴¹ Ver D.SS.Cortes sesión de 7 de marzo de 1822.

política, se persiguen como actos de rebeldía los movimientos de ciudadanos dirigidos a celebrar su libertad ; el teatro, que debiera ser el agente poderoso de las pasiones patrióticas, enmudecido, no emplea sus armas encantadoras en bien del sistema, y apenas resuenan los himnos de la patria (...).

Las sociedades patrióticas, en donde los ciudadanos se comunican sus ideas políticas, ilustrando al pueblo sobre sus derechos y sobre los negocios de interés general, aún reducidas a la ley que las regulariza, se miran con ceño por los que debieran sacar de ellas un partido ventajoso a la Nación; y alejados de su recinto muchos hombres celosos del bien general, a los desahogos de dichas reuniones suceden las murmuraciones, las sátiras sangrientas y los sarcasmos transmitidos a la imprenta para desacreditar su libertad, provocando reformas sensibles en este baluarte de nuestras inmunidades, y empeñando al Poder legislativo en acabar con unas corporaciones nacidas en el momento de nuestra regeneración, conformes al espíritu del sistemas político que nos dirige(...).

Cuarto. Al mismo tiempo (...) voces de república (...) inventadas acaso por los que (...) concibieron y llevaron a cabo el alevoso plan que en el año de 1814 despedazó el libro sagrado de la Constitución (...) sostenidas y derramadas en el sencillo pueblo (...) han fomentado la desunión, haciendo nacer, no partidos encarnizados (...), sino desvíos entre los que (...) no queriendo más que Constitución, expresan sus opiniones con mayor o menor viveza(...).

Quinto. Aprovechándose los implacables enemigos de la libertad de tan fatal combinación de circunstancias, pregonan la guerra; disfrazados con la máscara de la religión a quien insultan y capitaneados por los ministros del santuario (...).

Sexto. Esto sucede al mismo tiempo que comprometidos por causas conocidas de todos una lucha triste entre varios pueblos y el Gobierno, nos pone al borde lastimoso de una guerra civil(...).

Séptimo. La Hacienda pública, de cuyo buen o mal arreglo pende la prosperidad o la ruina de los imperios, se encuentra en un estado lastimoso. Desatendidos los pagos, hasta el de la Real Casa, y vacías las arcas, se acude para llenarlas a negociaciones mercantiles que la opinión califica de ruinosas; el clero se lamenta de la miseria en que yace sumergido; el crédito desaparece; el comercio levanta su voz contra la opresión en que le constituyen las nuevas leyes de aduanas; los pueblos lejos de acudir con exactitud al pago de las contribuciones, solicitan alivios; se quejan de la gravedad de los nuevos tributos y del método de recaudación; los empleados miran con despego el ejercicio de sus funciones, recelosos de la subsistencia de sus destinos; y clamores y reconvenciones, y penurias y escaseces son el resultado de las operaciones económicas, capaces por su influjo de promover disturbios en la Patria. (...)

Octavo. Finalmente, imposibilitados de prestar eficaces socorros a las Américas, las noticias últimamente recibidas de aquellas regiones nos instruyen de la emancipación de Nueva-España y de las desgracias del Perú (...).".

Después del completo relato sobre la desdichada situación de crisis que afligía a la Nación a los dos años del cambio de régimen, finalizaba Canga haciendo una llamada general:

"(...) La situación actual del Estado reclama imperiosamente la cooperación de todos los hombres ilustrados (...). Intimamente aliados con los amantes celosos de la libertad, fundada la fuerza de nuestros acuerdos sobre la opinión pública, hagamos ver al mundo que (...) no capitularemos jamás(...). "Constitución, según se proclamó y juró en Cadiz el año de 1812, y se juró y proclamó en las Cabezas el año 1820, o la muerte", sea la divisa de nuestra conducta (...)".

Una proposición firmada por cuarenta y un diputados exigió la comparecencia del Gobierno en las Cortes para que informara sobre el estado deplorable en que se encontraban algunos pueblos. Los firmantes denunciaban en su escrito la conducta de los funcionarios contra los defensores del sistema¹⁰⁴². En rigor la proposición estaba fuera de lugar, parecía impropio exigir al nuevo Gobierno responsabilidad por los eventuales desaciertos de una gestión en la que no había participado.

Sin embargo, la pretensión de los diputados firmantes

¹⁰⁴² Ver D.SS.Cortes sesión extraordinaria de 9 de marzo de 1822.

era manifestar su desacuerdo con el contenido de las Memorias leídas ante el Congreso por los miembros del gobierno. Eran muchos los diputados que opinaban lo que manifestó Canga sobre la exposición del encargado de Gobernación:

"(...) Se nos ha dicho que el estado de (la Nación), si no es muy bueno, tampoco es muy malo. Al oír esto no parece sino que se trata de adormecer a los representantes de la Nación, que como recién venidos de las provincias pueden saber cuál sea la situación en que se encuentran¹⁰⁴³ (...)".

La sesión de comparecencia estuvo especialmente dirigida contra el Secretario del despacho de Gobernación y las omisiones contenidas en su Memoria. Los diputados se dedicaron a completar la información suministrada por el Gobierno sobre el estado de la Nación. Así el diputado por Murcia Alix dió cuenta de los sucesos de su provincia, el 29 de Diciembre, ocasionados de haber dado voces subversivas una facción liberticida, integradas por personas próximas al jefe político, que proclamaban al Rey absoluto:

"(...) Se añadía la agravante circunstancia de que los que componían el mayor número de esta facción eran dependientes de rentas, sujetos en un todo a la autoridad del intendente, que reunía la cualidad de jefe político interino. (...) El Intendente y jefe político interino (...) no

¹⁰⁴³ Esta opinión la expresó para apoyar la comparecencia de los ministros. Ver D.SS.Cortes, sesión 9 de marzo de 1822.

quiso tomar ninguna de las medidas que estaban en sus facultades; (...). El mismo Ayuntamiento, una porción de curas párrocos, personas de las mejores intenciones creyeron que el único medio de salvar aquella ciudad era poner al frente del gobierno (...) el brigadier D. Gregorio Piquero(...). El pueblo se consideraba amenazado en sus derechos (...); se veía en los bordes del precipicio; creía que estaba en el mes de Mayo del año 14 (...). Los más amantes de la Constitución y más acomodados fueron los que se pusieron a la cabeza de los trastornos que se verificaron en el Gobierno político, porque ningunos están más interesados en la conservación del orden que los hombres de bien y que pertenecen a las clases industrial, agricultora y mercantil¹⁰⁴⁴ (...)".

El diputado por Galicia, Llorente, solicitó del Ministro de la Gobernación información acerca de los acontecimientos de la ciudad de Orense desde el 3 de Diciembre:

"(...) Es indudable que todos los patriotas se hallan perseguidos; es indudable que las mismas autoridades, tanto civil como militar, de Orense, han contribuido a esto¹⁰⁴⁵ (...)".

El diputado por Córdoba Saavedra sostuvo que en casi todas las provincias había una o dos ciudades, o algunos

¹⁰⁴⁴ D.SS.Cortes sesión extraordinaria 9 de marzo.

¹⁰⁴⁵ Ibidem.

pueblos de consideración, notables por su desafecto al sistema constitucional, que eran centros de los mayores desórdenes y "abrigo de los malvados":

"(...) Testigos de esta verdad son Ciudad-Real y Miguelturra en La Mancha, Lucena en Córdoba , Morella, Elche y Orihuela en Valencia, Orense en Galicia y Cervera en Cataluña. En todos o en la mayor parte de estos puntos se proclaman las doctrinas más sediciosas (...); y lo que es más doloroso, en muchos de estos pueblos ha corrido la sangre de los patriotas solamente porque hacían alarde de sus ideas liberales¹⁰⁴⁶ (...)" .

Lo que pretendía el diputado Saavedra no era tanto trazar un mapa de la conspiración, como destacar el doble rasero que venía utilizando el poder ejecutivo en función de quienes protagonizaran las agitaciones:

"(...) Como hemos visto que el Gobierno ha tenido tanto tesón y ha desplegado tanta energía para contener los desórdenes ocurridos en ciudades que acaso han delinquido por exceso de amor a las libertades patrias, yo no dudo que habrá tomado medidas de igual vigor para contener los escandalosos desórdenes de estos pueblos que se han declarado abiertamente contra la causa santa de la libertad. Por tanto, ruego (...)

¹⁰⁴⁶ Ibidem.

nos instruya de cuáles son las medidas¹⁰⁴⁷ (...)" .

El Secretario de Gobernación comenzó desacreditando a los promotores del debate por su "celo ardiente" y "loable impaciencia":

"(...) Que se aviene mal con los lentos progresos del tiempo, y con aquellas mejoras tardías y seguras que no está en manos del hombre acelerar¹⁰⁴⁸ (...)" .

Calificó de vagos los discursos, lo que dió lugar a nuevas intervenciones ilustrando sobre sucesos concretos. Relatando lo que ocurría en Lucena señalaría Saavedra:

"(...) Hace un año que se encuentra en el mayor desorden, fanatizada por unos cuantos hipócritas que acostumbrados a vivir de los fondos municipales, han monopolizado, (...) los cargos públicos, y desde ellos gobiernan la ciudad a su albedrío y ejercen a mano salva la más encarnizada persecución contra los patriotas¹⁰⁴⁹ (...)" .

Acabó el Ministro Moscoso rechazando la parcialidad de la que se acusaba al Gobierno y aceptando como inevitables los "males" que sufría la Nación, percibidos como

¹⁰⁴⁷ Ibidem.

¹⁰⁴⁸ Ibidem.

¹⁰⁴⁹ Ibidem.

inseparables del tránsito político:

" (...) No hay un solo punto de la Nación en que el Gobierno sepa que han existido enemigos del sistema, en que no haya dado las providencias más severas contra ellos (...) Vemos que existen males que afligen a la Nación; males nacidos de las circunstancias inseparables de todo tránsito político, y que ni la misma sabiduría de las Cortes, ni la energía del Gobierno, alcanzarían a extirpar con la brevedad que se desea; porque es imposible en el orden moral curar las dolencias envejecidas de una nación, sin contar para ello con la acción necesaria del tiempo, único que puede hacer que las opiniones se pongan al nivel de las leyes, y que produzcan su benéfico influjo la educación y las costumbres¹⁰⁵⁰ (...)".

Continuó la ofensiva de los diputados contra el Gobierno esta vez de la mano de la comisión de hacienda de las Cortes. Apelando al venerable ejemplo de las Cortes antiguas presentó la citada comisión un sorprendente dictamen sobre los presupuestos. En esencia lo que hacían los diputados era proceder a una drástica rebaja del proyecto de presupuestos que había presentado el Secretario del Despacho de Hacienda. De 861 millones presupuestados, la cuantía fué reducida en principio por la comisión a 500. Justificaban su dictamen en razón a la nueva situación que tenía el país, esto es, emancipadas de hecho las Américas y reducidos a la

¹⁰⁵⁰ Ibidem.

miseria. La comisión proclamaba el principio en virtud del cual, el aumento de los impuestos no podía dañar la producción de riqueza. En sus bases preliminares indicaba el dictamen :

"(...) las Cortes fijarán la magnitud de los gastos, graduándola por la posibilidad de sostenerlos, de modo que jamás excedan de la fuerza imponible del pueblo¹⁰⁵¹ (...)"

De acuerdo con los cálculos aproximados sobre la situación económica deducían:

"(...) Que los gastos públicos a cuya satisfacción debía responder el Erario no podían exceder de 500 millones de reales (...)"

En virtud de estas bases proponían medidas indispensables para hacer frente a la aflictiva situación, como suspender la traslación de los jefes políticos a las nuevas capitales señaladas en la división provincial, suspender la provisión de plazas en las Secretarías, reducir sueldos, y suspender jubilaciones y retiros entre otras economías.

El Secretario del despacho de Hacienda afirmó que el dictamen era contra la Constitución (citando los arts.

¹⁰⁵¹D.SS.Cortes sesión de 20 de marzo de 1822.

340,341 y 342), en los cuales se establece que primero había que fijar los gastos y luego decretar las contribuciones. En su apoyo intervino el Secretario del despacho de Estado, defendiendo :

"(...) La práctica que han adoptado todos los países libres, de fijar primero los gastos para decretar enseguida las contribuciones (...)."

Las Cortes defendieron su propuesta aduciendo que era ya tiempo de que el pueblo empezara a respirar con algún desahogo. Penetradas de que el pueblo estaba agonizando, la agricultura expirante, y la industria aniquilada aprobaron la rebaja de los presupuestos indicada por la comisión. Rechazaron¹⁰⁵² la pretensión del Gobierno porque ponía en riesgo la Constitución y además debían dar a los pueblos un consuelo que les indemnizara del cruel golpe que había supuesto la devolución del proyecto de señoríos:

"(...) El pobre pueblo se halla a la sazón oprimido por las pretensiones del feudalismo, (...). Vuelto a las Cortes por S.M el decreto que abolía de todo punto las prestaciones señoriales, los señores descargan sobre los infelices todo el

¹⁰⁵² El dictamen fué aprobado por 87 contra 48 votos. El cambio en el signo de la votación lo propició el veto a la ley de señoríos, ver D.SS.Cortes, sesión de 21 de marzo de 1822.

peso de los procedimientos judiciales¹⁰⁵³ (...)" .

Las Cortes también dirigieron su ofensiva contra el Ministro encargado de la Justicia. Arremetieron contra este Secretario del despacho por la política de nombramientos de jueces que Gobierno y Consejo de Estado habían venido llevando a cabo. Para fundar su rechazo los diputados utilizaron las manifestaciones del Ministro al presentar su Memoria en el Congreso:

" (...) El Secretario del Despacho (de Gracia y Justicia) mira con desconfianza a una gran porción de jueces de primera instancia, porque entre ellos hay muchos de los que fueron Corregidores o alcaldes mayores en la época anterior¹⁰⁵⁴ (...)"

En virtud de lo cual las Cortes, pretextando que había que aliviar al pueblo de la pesada carga de las contribuciones, propusieron al Gobierno la no provisión de empleo alguno sino en sujetos que disfruten sueldo por el Erario y con adhesión al sistema constitucional¹⁰⁵⁵. El debate sobre esta proposición contribuyó a poner de manifiesto el pesimismo reinante sobre la reforma de la justicia:

¹⁰⁵³ Intervención de Alix, D.SS.Cortes sesión de 21 de marzo de 1822.

¹⁰⁵⁴ Ver D.SS.Cortes sesión de 6 de abril de 1822.

¹⁰⁵⁵ Ver D.SS.Cortes sesión de 6 de abril de 1822.

"(...)La magistratura no se reformará nunca, o a lo menos tardará mucho tiempo. Y ¿por qué? (...) porque no pueden nunca ser separados estos jueces de sus destinos sino por una causa fundada¹⁰⁵⁶ (...)".

El estado en que se hallaba la administración de justicia y el abuso que hacían los tribunales, de las leyes de procedimiento y de la aplicación de las penas y los indultos, indujo a las Cortes, en uso de su facultad vigésimoquinta¹⁰⁵⁷, proponer visitas de las causas fenecidas, de acuerdo con lo previsto por el decreto de 24 de marzo de 1813. Se debían visitar con preferencia las causas criminales de ofensas hechas al Rey, las de insurrección, conspiración¹⁰⁵⁸, o sedición. Existía la creencia entre algunos diputados de que el poder judicial independiente, necesitaba el freno de la responsabilidad para atenerse al desempeño de sus funciones. Aplicando al poder judicial la lógica de la tesis del riesgo, subrayaban la amenaza que para la regeneración política podía suponer el abuso de la

¹⁰⁵⁶ Ver D.SS.Cortes sesión de 6 de abril de 1822.

¹⁰⁵⁷ El artículo 131,25 de la Constitución atribuía genéricamente a las Cortes la facultad de : "Hacer efectiva la responsabilidad de los Secretrios del despacho y demás empleados públicos".

¹⁰⁵⁸ En opinión de los diputados resultaba escandaloso que cuando la ley de 17 de abril de 1821 acortaba los trámites de estos procesos, causas origniadas con el comienzo del sistema constitucional estuviesen pendientes. Ver D.SS.Cortes sesión de 17 abril de 1822.

independencia del poder judicial ¹⁰⁵⁹. El decreto encontró la oposición del Gobierno alarmado porque, en palabras del Secretario del Despacho de Justicia, produciría el efecto contrario.

Los ataques "en guerrillas"¹⁰⁶⁰ de las Cortes al Gobierno se fueron intensificando al compás de la extensión de los movimientos conspiratorios, culminando en la elevación de un ambiguo mensaje del Cuerpo legislativo a la autoridad real patentizando los males y riesgos que amenazaban a la Nación. Las Cortes rogaban al Monarca diera vigor al Gobierno, "para que marche de acuerdo con la opinión" y, en el ejercicio de sus facultades, con "mano fuerte arranque de una vez la raíz de tanto desastres y peligros"¹⁰⁶¹.

El propósito malogrado del autor de la proposición era provocar un debate para conocer la concordancia o discordancia del Congreso con las posiciones del Gobierno :

"(...) Que de una vez se aclarase si la mayoría del Congreso convenía con las opiniones del Ministerio, y si su voto le era favorable, o si, por el contrario, desaprobaba la conducta por él observada; cuya declaración (...) daría al

¹⁰⁵⁹ Ver intervención de Romero en D.SS.Cortes sesión de 17 de abril de 1822.

¹⁰⁶⁰ Expresión utilizada por Galiano para referirse a esta confrontación de las Cortes y el Gobierno. Ver D.SS.Cortes sesión de 24 de mayo de 1822.

¹⁰⁶¹ Ver D.SS.Cortes sesión de 24 de mayo de 1822.

Ministerio una idea de que debía variar de conducta o retirarse (...) acabando con esa mayoría fluctuante tan perjudicial en un cuerpo legislador¹⁰⁶² (...) "

Durante las deliberaciones de la proposición, a las que no asistieron los Secretarios del Despacho, los diputados hicieron una ligera reseña del Gobierno. Elogiaron al ministro de Estado pero no a los sujetos, ("hijos de la rutina discípulos de Floridabanca y Godoy"), que tenían los encargos diplomáticos. Continuaron con el Ministro de Gobernación, al que acusaron de estar "empeñado en una lucha declarada y tenaz contra las personas calificadas con el nombre de exaltados"¹⁰⁶³; le hicieron responsable de que no estuviesen armadas las Milicias, y clamaron contra él porque tenía entregado el gobierno de las provincias a manos poco expertas y con un proyecto necio de Milicia nacional que armaba a los facciosos. En clara alusión al poder que seguía ejerciendo en el Ministerio de la Guerra el Marqués de las Amarillas (artífice de la disolución del ejército de la Isla), denunciaron la existencia de una facción aristocrática, que mandaba en el Ministerio, y la persecución sorda a los militares conocidos por su exaltación¹⁰⁶⁴. En

¹⁰⁶² Intervención de Galiano, D.SS.Cortes sesión de 24 de mayo de 1822. '

¹⁰⁶³ "En Murcia, en Cataluña, en Andalucía, y en una palabra en todo el Reino, sufren los patriotas, hace ya más de un año". Intervención de Marau, Ibidem.

¹⁰⁶⁴ La conspiración de 30 de mayo en Valencia aclararía las intenciones del Ministerio. Ver D.SS.Cortes sesión 3 de junio de 1822..

fin, arremetieron contra la Secretaría del Despacho de gracia y Justicia por la mala elección de personas; contra el Ministerio de Hacienda por sus inclinaciones a recaudar infringiendo la Constitución; y por último, ridiculizaron al Ministerio de Ultramar sin colonias¹⁰⁶⁵.

No faltaron en las deliberaciones, recomendaciones al Gobierno para que procediera a perseguir la facción sanguinaria y fanática, que rodeaba el trono, y propuestas dirigidas al Gobierno para que con vistas a la consolidación del sistema:

"(...) Eche mano de los que crea más a propósito, (...) de manera que nunca pueda decirse que el Gobierno es producto de un partido. Busquen los empleos a los hombres y no los hombres a los empleos¹⁰⁶⁶ (...)".

El diputado por Granada no fué el único que mencionó abiertamente su preocupación por la división de opiniones y sus fatales consecuencias. Previamente el diputado Gonzalez Alonso había pedido al Gobierno ausente dejara de fomentar (con su política de nombramientos ¹⁰⁶⁷) la hostilidad entre

¹⁰⁶⁵ Ibidem.

¹⁰⁶⁶ Intervención de Soria; D.SS.Cortes sesión de 24 de mayo de 1822.

¹⁰⁶⁷ "Busquen los empleos a los hombres y no los hombres a los empleos" diría Soria. Ibidem.

los partidos anilleros y exaltados¹⁰⁶⁸ que podía acabar por destruir la Constitución. El diputado por Extremadura preocupado por la profundidad de la crisis, señaló la necesidad de hacer un supremo esfuerzo porque la Patria estaba a punto de estrellarse:

"(...)No dudaremos un instante en tomar para salvarla cualquier medida, por extraordinaria que parezca, aunque sea con sacrificio de nuestras opiniones. (...) Dejémonos de esas personalidades, de esas pueriles disensiones apoyadas en los espacios imaginarios de unos partidos que deben (...) abochornar a los hombres (...) Unámonos, y con nosotros el Rey constitucional ¹⁰⁶⁹(...)".

La propuesta del diputado radical, al igual que el mensaje al Rey, posiblemente estuvieran pensados para desvanecer la invención de los enemigos de la regeneración política quienes con el ánimo de alimentar la discordia entre anilleros (Gobierno) y exaltados (Cortes), habían inventado la "farsa de las Cámaras y el proyecto de un gobierno republicano"¹⁰⁷⁰.

¹⁰⁶⁸ Refiriéndose a ellos diría Gonzalez Alonso invención de los enemigos de nuestras glorias, que saben que en nuestra división consiste su triunfo. Ibidem.

¹⁰⁶⁹ Intervención de Gonzalez Alonso, ibidem.

¹⁰⁷⁰ Sobre esos ominosos partidos y la invención de esas farsas consultar la intervención de Gonzalez Alonso, D.SS.Cortes ordinarias, sesión de 24 de mayo de 1822.

Cuando las Cortes llevaban algún tiempo funcionando, aparecieron publicadas las "Condiciones y Semblanzas de los diputados¹⁰⁷¹ " con el propósito, en el sentir de los editores, de que " España sepa con cuantos descamisados puede contar en el Congreso". Completando la información que suministra el panfleto con las intervenciones y los resultados de votaciones significativas, (exigencia de responsabilidad a jefes políticos por abusos de poder), hemos elaborado el siguiente cuadro. Podríamos decir que en él figuran las tendencias del Congreso desde la perspectiva radical.

¹⁰⁷¹ D.M.R.y Cerro, ob.cit.

Cuadro 3. Tendencias en las Cortes de 1822-1823.

PROVINCIAS	DIPUTADOS	ABSOL	MODER	EXALT
ALAVA	1		1	
ARAGÓN	9	1	5	3
ASTURIAS	5		3	2
AVILA	2		2	
BURGOS	7		5	2
CADIZ	4		1	3
CATALUÑA	12		8	4
CÓRDOBA	4		2	2
CUENCA	4		1	3
EXTREMADURA	6	1	4	1
GALICIA	16		11	5
GRANADA	6		3	3
GUADALAJARA	2		1	1
GUIPÚZCOA	1			1
JAÉN	3		1	2
LEÓN	3	2	1	
MADRID	3		3	
MÁLAGA	4		3	1
MANCHA	3	1	2	
MURCIA	5		2	3
NAVARRA	3	1	2	
PALENCIA	2	1	1	
SALAMANCA	3			3
SEGOVIA	2		1	1
SEVILLA	7	2	3	2
SORIA	3	1	2	
TOLEDO	5		1	4
TORO	1		1	
VALENCIA	12		6	6
VALLADOLID	3		2	1
VIZCAYA	2	1	1	
ZAMORA	1		1	
ISLAS	3		2	1
CANARIAS	2		1	1
TOTALES	149	11	83	55

F. Casas, elaboración propia.

Los autores del folleto eran partidarios de la exaltación, y se notaba. Clasificaban por tendencias a los diputados empleando a veces, para los otros, invectivas, y utilizando siempre un tono entre irónico y humorístico. Los absolutistas solían ser designados como "hombres de fé, amigos de las órdenes (religiosas) y partidarios de los señoríos". A los moderados se les motejaba de "divinistas, pasteleros, amigos del orden y con camisa". Los exaltados eran descritos como "enemigos de los emplastadores, descamisados, defensores acérrimos de la libertad y bravos hijos de Padilla".

La ostensible disminución de la representación absolutista reflejaba la eficacia de los manejos electorales por parte de las autoridades para excluir a la "facción", pero también el profundo rechazo que el sistema constitucional y sus reglas de juego político inspiraba a los absolutistas. El aumento de los representantes de la tendencia exaltada es apreciable en todas aquellas provincias que se vieron envueltas en las agitaciones contra la actuación del Gobierno durante los meses de celebración de las elecciones: Cadiz, Cataluña, Granada, Murcia, Sevilla y Valencia.

A continuación, incluimos un cuadro de los sujetos más proclives a la tendencia exaltada distribuidos por ocupaciones.

Cuadro 4. La exaltación: distribución por ocupaciones.

ECLE	FUN	MIL	EM. PU	PROF.	PRO.	COM.	OTR.
11 (30)	7 (19)	9 (22)	11 (26)	4 (23)	8 (19)	4 (9)	1 (1)

F.Casas. Elaboración propia .

Para facilitar la lectura de las cifras figura, entre paréntesis, el número total de las personas pertenecientes a ese grupo que existían en las Cortes. Dos de los ocho propietarios que adscribimos a la exaltación pertenecían a la nobleza (Duque de Rivas y Duque del Parque).

Aunque los exaltados aumentaran en número, contaban con una representación disminuida por pérdida de liderazgo¹⁰⁷². Esta debilidad de liderazgo y la carencia de verdadera organización explican que fueran eclipsados y anulados con tanta facilidad por la figura de Argüelles. Cuando el sistema constitucional entró en crisis debido a la contrarrevolución organizada por el Rey en julio, el diputado de Asturias acabó imponiendo naturalmente su moderada autoridad.

8.4. Fin de la Constitución: Jornadas del 7 de julio.-

La sospechosa pasividad del Gobierno, la inoperancia de

¹⁰⁷² Los diputados exaltados Alix, Saavedra y Marau , por ejemplo, distaban mucho de Florez Estrada, Romero Alpuente y Moreno Guerra.

las Cortes y los violentos e inútiles enfrentamientos entre los liberales, cuando el estado constitucional, acosado desde fuera, estaba envuelto en guerras y amenazado por conspiraciones, restaron apoyos al sistema y propiciaron la contrarrevolución.

La preocupación obsesiva del Gobierno de Martínez de la Rosa por los exaltados, le llevó a tolerar los ataques que el sistema constitucional recibía de parte de quienes:

"(...) Irreconciliables con las libertades patrias, atizan el incendio civil a la sombra de la impunidad que gozan fuera, y por los medios que les facilitan los fautores y partidarios del poder arbitrario¹⁰⁷³ (...)" .

Con motivo de los atentados de los artilleros en el mes de marzo en Valencia, (donde estaba preso Elío), el diputado exaltado Adán habló de la tibieza del Gobierno, y propuso al Congreso tomar la supremacía que le correspondía:

"(...) El Gobierno debe persuadirse de ahora para siempre que si no cambia de sistema, y si no busca los elementos correspondientes a esta revolución (..) nos envolvemos en los mismos males que el Gobierno quiere evitar, es decir, en la anarquía. (..) Aunque en el día no haya

¹⁰⁷³ Como reconoció el propio Secretario del despacho de Gobernación en su memoria. Ver intervención de Moscoso en D.SS.Cortes sesión de 3 de marzo de 1822.

méritos bastantes para que el actual Ministerio sea responsable de los acontecimientos anteriores, ni tampoco pueda formarse de él idea sospechosa, sin embargo, permítaseme decir que sigue el mismo sistema que dejó el anterior, aquel de quien el Congreso declaró que había perdido la fuerza moral. Es preciso cambiar los medios, y que las Cortes tomen una marcha distinta que hasta aquí, y también el Gobierno. Esto no se podrá conseguir mientras que los españoles, los comprometidos en la suerte de su Patria, y los que restablecieron las instituciones liberales y derrocaron el despotismo sean desatendidos. El partido vencedor debe mandar ¹⁰⁷⁴ (...)" .

El Gobierno por su parte, vinculaba el suceso de Valencia con nuevas tentativas integradas en un vasto plan para introducir la desunión entre la fuerza armada y el pueblo, y proclamó retóricamente ante la asamblea su política conservadora del orden :

"(...) Todos los propósitos, (...) deben encaminarse a persuadir a la Nación que están asegurados sus derechos en la ley fundamental; que es menester medidas conservadoras que aseguren lo adquirido, y que con el amor al orden y la sumisión a las leyes empezará a disfrutar los grandes bienes

¹⁰⁷⁴ Sobre el escandaloso atentado de los artilleros al pueblo de Valencia el 17 de marzo, ver D.SS. Cortes, sesión de 22 de marzo de 1822.

de las libertades ¹⁰⁷⁵ (...)".

Una comisión de Cortes reunida con el Secretario del despacho de Gobernación y el de Guerra propuso, para hacer frente a los tristes acontecimientos de los artilleros de Valencia¹⁰⁷⁶, que removieran al comandante general, al jefe político, y trasladaran al regimiento de artillería, medidas que fueron abiertamente rechazadas ¹⁰⁷⁷. Relatando mes y medio después la reunión con el Ministro de Guerra diría uno de los diputados intergrantes de la Comisión:

"(...) El Secretario del Despacho de la Guerra con una risa irónica e insultante, se negó a lo que se le pedía, no obstante habersele indicado que era el único medio de que no se repitiesen los excesos el que le proponía la comisión¹⁰⁷⁸ (...)".

En el transcurso de las discusiones que tuvieron lugar en el Congreso, el Gobierno recibió duros reproches del diputado Velasco por rechazar las medidas propuestas por la comisión de Cortes para apaciguar Valencia:

¹⁰⁷⁵ Intervención del Secretario del despacho de Estado, Martínez de la Rosa, D.SS.Cortes, sesión de 22 de marzo de 1822.

¹⁰⁷⁶ Un relato sobre los sucesos en V.Boix, Historia de la ciudad y reino de Valencia, Valencia, 1847

¹⁰⁷⁷ Ver, D.SS.Cortes sesión de 23 de marzo de 1822.

¹⁰⁷⁸ D.SS.Cortes, sesión de 3 de junio de 1822.

"(...) Estoy seguro de que si se tratase del abuso de la libertad, el Gobierno se creería autorizado para hacer la separación que ha indicado la comisión sin previa formación de causa¹⁰⁷⁹ (...)"

Y mientras las Cortes debatían las propuestas sobre los acontecimientos de Valencia y solicitaban del Gobierno, sin éxito¹⁰⁸⁰, información sobre las providencias adoptadas para asegurar la tranquilidad pública llegó la noticia del estallido de otra rebelión en Pamplona durante los días 17, 18 y 19¹⁰⁸¹ y en Cataluña¹⁰⁸².

El día 30 de mayo, onomástica del Rey, tuvieron lugar de nuevo conmociones en Valencia, Aranjuez, Aragón, Galicia y seguía la guerra en Cataluña. En Valencia los artilleros intentaron realizar el plan de sacar al general Elío de prisión y ponerle al frente de los facciosos. Se trataba de una conspiración anunciada :

"(...) Al Gobierno se le avisó; se le presentaron documentos y los motivos que teníamos para pensar de este

¹⁰⁷⁹ D.SS.Cortes sesión de 23 de marzo de 1822.

¹⁰⁸⁰ Argüelles convenció al Congreso, en beneficio del Gobierno, de que "el ejecutivo necesita de cierto desembarazo para desempeñar sus obligaciones", por tanto no había que pedirle cuentas antes de tiempo. Ver D.SS.Cortes sesión de 27 de marzo de 1822.

¹⁰⁸¹ Informe del Secretarios del Despacho, D.SS.Cortes sesión de 23 de marzo de 1822.

¹⁰⁸² Ver D.SS.Cortes, sesión de 27 de marzo de 1822.

modo¹⁰⁸³ (...)".

En el Congreso tuvo lugar un encendido debate con motivo de las nuevas agitaciones de mayo en Valencia. Los diputados acusaron al Ministro de la Guerra de complicidad en las rebeliones, solicitaron la exigencia de responsabilidad (por haberse negado a relevar el regimiento de artillería), y llegaron a pedir "la sangre del ministro". Fué el diputado a Cortes por Valencia, Bertrán de Lis, quien entre interrupciones de la Presidencia, manifestó públicamente sus conclusiones por las ocurrencias de Valencia:

"(...) ¿Qué consecuencia sacaré yo de todo esto, mucho más si atiendo a que se han puesto al frente de la revolución para atacar el sistema individuos del cuerpo cuya remoción se había solicitado? La consecuencia que yo saco es que el Secretario de la Guerra, se halla complicado en el plan que ha estallado en difentes puntos de la Monarquía(..). Aunque yo no haga al Secretario del despacho un cargo por esto, porque sin embargo de que tengo vehementísimas sospechas carezco de datos justificativos para formalizarle, como lo haría si los tuviese, se lo haré, y terrible, por no haber evitado, como pudo, las desgracias ocurridas. La sangre que se ha derramado no es la de un solo individuo; esa sangre pesa sobre mi corazón, porque al fin, sea de criminales, sea de inocentes, es sangre española; esa sangre debe pesar sobre

¹⁰⁸³ Intervención de Marau sobre los sucesos del 30 en Valencia. D.SS Cortes, sesión de 3 de junio de 1822.

la cabeza del Ministro de la Guerra y esa sangre pide la sangre del Ministro ¹⁰⁸⁴ (...)".

La actitud indiferente del Gobierno de Martínez de la Rosa ante los que invocaban el rey absoluto, condujo a que el tiempo se consumiese en reproches sobre el pasado, (no se esperó un sumario para separar al general Riego de Zaragoza, ni Mina de la Coruña, ni al jefe político Puente¹⁰⁸⁵), y una confrontación inútil entre diputados y ministros del Gobierno. Aquellos hablando de la necesidad de medidas para contener el cráter del volcán y éstos desatendiendo a las Cortes y calificando de poca importancia los estallidos de rebelión que incesantemente aparecían en Madrid, Valencia , Navarra , Cataluña y Aranjuez, cuyas acciones prepararon las jornadas de julio:

"(...) El fuego de la rebelión que apareció en Navarra y Cataluña, llegó a minar sordamente los cimientos de la corte. En uno de los regimientos de la Guardia Real se notaron síntomas de rebelión¹⁰⁸⁶ (...) "

Por acción y omisión la política del Gobierno de Martínez de la Rosa propició la contrarrevolución de julio y

¹⁰⁸⁴ Ver D.SS.Cortes sesión de 3 de junio de 1822.

¹⁰⁸⁵ Intervención de Adán, 23 de marzo de 1822.

¹⁰⁸⁶ Representación a las Cortes firmada por varios diputados, DD.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 9 de octubre de 1822.

"el negro misterio con que el Gobierno se envolvió":

"(...) Convenció que la Nación no debía esperar el remedio de los males que la afligían sino de sus propios esfuerzos (...) y los sucesos de los seis días primeros del mes de julio, en los cuales ni el Gobierno dió señales de vitalidad ni desplegó los poderosos recursos que aún le quedaban para dar el último golpe a los enemigos acreditaron la exactitud de las sospechas de los ardientes defensores de la libertad¹⁰⁸⁷ (...)" .

La nueva sublevación de los Guardias de Palacio se inició, como venía siendo habitual, con el cierre de la legislatura ordinaria de las Cortes. Siguiendo el plan de Vinuesa, los sublevados simularon el secuestro del Monarca y Gobierno. Parte de la Guardia Real que había abandonado sus puestos, procedió a atacar Madrid. La insurrección militar fué aplastada por la milicia nacional de la capital¹⁰⁸⁸ .

Las Jornadas de Julio sirvieron para probar la debilidad de los conspiradores y del propio sistema constitucional. Cuando era público que el Rey conspiraba, el empeño liberal por mantener al frente del sistema Constitucional, a un Monarca que irresponsable, por ley, urdía tramas, había

¹⁰⁸⁷ Exposición de diputados a las Cortes sobre los males que aquejan a la Nación, D.S.S.Cortes, sesión de 9 de octubre de 1822.

¹⁰⁸⁸ Sobre los acontecimientos de julio, J.S.Perez Garzón, Milicia Nacional y revolución burguesa, Madrid, 1978

participado en una rebelión y seguía amparando a los conspiradores¹⁰⁸⁹ debió resultar desmovilizador.

La solución dada a la crisis de julio consistió en encubrir al Monarca, cambiar de Gobierno¹⁰⁹⁰, impedir el ingreso en prisión de un antiguo ministro acusado de conspiración¹⁰⁹¹ y, al fin, decretar la suspensión de la Constitución. La solicitud de Regencia, por parte de un grupo de diputados a la Diputación permanente fué desatendida¹⁰⁹².

Las Cortes acordaron dotar al nuevo Gobierno de San Miguel con mayores facultades a fin de combatir a los autores de sedición¹⁰⁹³. De acuerdo con las nuevas medidas aprobadas, el poder del Gobierno dejaba de estar sujeto a la Constitución. En la misma proporción en que aumentaban la

¹⁰⁸⁹ Al respecto véase Gil Novales, ob. cit., cap.XIX.

¹⁰⁹⁰ La composición del cuarto Gobierno, designado en torno al 5 de Agosto de 1822, cesado el 19 febrero 1823, pero que se mantuvo hasta el 24 abril 1823, era: Estado :Evaristo San Miguel, Gobernación: Fdez. Gasco, Ultramar: Vadillo, Gracia y Justicia: Benicio Navarro, Hacienda: Mariano Egea, Guerra: Lopez Baños, Marina: Dionisio Capaz. La exaltación ocupaba el Ministerio.

¹⁰⁹¹ Se trataba de Garely. Hubiera sido un oprobio para el fundador de la primera cátedra de Constitución que por atentar contra el Código le hubieran metido en prisión, al respecto D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 9 de noviembre de 1822.

¹⁰⁹² Sobre la crisis de julio ver Gil Novales, ob.cit, cap.XIX.

¹⁰⁹³ D.SS.Cortes, extraordinarias, sesión de 31 de octubre de 1822. El proyecto contó con el apoyo de diputados exaltados: 76 a favor y 61 en contra fué el resultado de la votación.

capacidad represiva del poder ejecutivo, menguaban los derechos de los españoles; y muy especialmente los eclesiásticos y empleados que quedaban sujetos a la acción arbitraria de la autoridad. Pero lo justificaron apelando a las enseñanzas de la historia y con hermosa retórica alegando:

"(...) Hay épocas de tan exquisita calamidad, en que es necesario (...) echar un velo sobre la estatua de la ley para afianzar la seguridad del Estado (...) Si en algún país ha sido disculpable y necesaria (...) nunca con más razón que ahora en España, cuando una coalición de soberanos, desafecta a las doctrinas que forman las bases de nuestro sistema de Gobierno, nos mira desde afuera con ojos casi de enemigos ¹⁰⁹⁴ (...)".

No satisfechos con la llamada Ley Marcial de 17 de abril de 1821, (que asignaba a la jurisdicción militar la defensa de la Constitución contra los conspiradores ¹⁰⁹⁵), aprobaron nuevas medidas; empezaron por el clero, es decir en su contra; la primera iba dirigida a rebajar más al clero que "tan inmensa influencia tiene sobre el pueblo". A este respecto acordaron activar las expropiaciones de las riquezas de los cabildos, como medio de cortar una "corriente perenne de subsidios" a los alborotadores y a los enemigos de la

¹⁰⁹⁴ D.SS. Cortes extraordinarias, sesión 17 de octubre de 1822.

¹⁰⁹⁵ N.García Rivas, ob.cit.

Patria; además, con objeto de atajar los abusos que a la sombra de la religión comentían los eclesiásticos, el Gobierno quedaba autorizado para desterrar, sin formación de causa¹⁰⁹⁶, a los eclesiásticos que tuviesen recogidas las licencias¹⁰⁹⁷.

Casi a igual dependencia del Gobierno quedaban sujetos los empleados. Por último, el Gobierno podía acordar, a propuesta de los jefes políticos, la suspensión de los ayuntamientos reemplazándolos por individuos que hubieran sido de ellos¹⁰⁹⁸. Junto con estas escandalosas medidas represivas, aprobaron para el fomento del espíritu público, un nuevo decreto moderado, sobre sociedades patrióticas y otro sobre teatros que daba un confuso matiz ilustrado a un programa de gobierno despótico.

Mientras eran aprobadas estas discutidas medidas represivas, propuestas por uno de los "exaltados" Secretarios del despacho, la situación definida como de "exquisita calamidad" era verdaderamente atroz:

¹⁰⁹⁶ Medida 3ª. D.SS.Cortes, sesión 20 octubre 1822. Prado, diputado por León, en desacuerdo con esta medida preguntaría: (...) ¿No hay tribunales (...) leyes (...) patíbulos hasta para los Obispos.? Esto dice la Constitución y la ley de 17 de abril de 1821.

¹⁰⁹⁷ De acuerdo con lo establecido en el art. 10 de la ley de 29 de junio de 1822.

¹⁰⁹⁸ Medida 8ª, D.SS. Cortes Extraordinarias sesión de 22 octubre 1822.

"(...) Las montañas de Cataluña, regadas con sangre de patriotas; las llanuras de Castilla, taladas por los facciosos; Navarra y Vizcaya, agitadas, sediciones más pequeñas rompiendo o amagando en otras provincias; los malos eclesiásticos agitando los pueblos¹⁰⁹⁹ (...)".

Tan dramáticas y apuradas debían ser las circunstancias que Congreso y Gobierno decidieron abandonar el sendero de quienes les precedieron en la faena de gobierno y se dejaron llevar por lo que, a juicio del ex-ministro moderado y diputado exaltado Canga, constituían "manías económicas".

Entre estas manías destacaba la que formuló al Gobierno, el diputado catalán Surrá. El comerciante catalán afincado en Madrid, propuso dar impulso a inversiones productivas, (no en espías) ¹¹⁰⁰, para proporcionar trabajo y ocupación a los habitantes de las provincias afligidas por una encarnizada guerra civil. Por su parte, el Gobierno solicitó a las Cortes 2 millones rs. para formentar la instrucción y 12 millones rs. para indigentes.

Lo importante de estas propuestas (que fueron considerablemente reducidas), es que ponen de relieve que

¹⁰⁹⁹ D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 22 de octubre de 1820.

¹¹⁰⁰ Intervención del diputado catalán Surrá, en D.SS.Cortes, sesión de 6 de noviembre de 1822 en la Discusión del dictamen de la comisión de hacienda sobre el presupuesto adicional de gastos del ministerio de la gobernación.

entre los diputados y los secretarios del despacho comenzaba a abrirse paso, en medio de la grave crisis, una nueva definición sobre la situación de la Nación, según la cual el origen de los males que afligían y turbaban el orden social estaba en la ignorancia junto con la pobreza¹¹⁰¹. Fué el diputado catalán quien, sentando como hecho la hipótesis según la cual "en el día, el que no tiene con qué subsistir, se hace faccioso", insistió sobre la necesidad de precaver los efectos de la miseria, (fuente y fomento de nuestros males), proporcionando ocupación y socorros a los que los necesiten para vivir.

Tan extravagantes medidas para una óptica liberal, contaron con el rechazo frontal de diputados como Canga. El antiguo ministro de hacienda propugnó que debían ser las provincias quienes se encargaran de atender a sus enfermos y a sus pobres, porque los proyectos de beneficencia general sólo servían, a su entender, para establecer oficinas. Durante su refutación de las nuevas medidas, el diputado asturiano no olvidó recitar la famosa copla española del "Sr.D.Juan de Robres".

En resumen, el nuevo Gobierno radical salido de la contrarrevolución de julio, continuó interfiriendo en el

¹¹⁰¹ D.SS.Cortes extraordinarias, 6 de noviembre de 1822.

proceso seguido contra los conspiradores del 7 de julio¹¹⁰² y encubriendo a un Monarca conspirador que no apreciaba. Procedió, de acuerdo con las Cortes, a desarrollar una intensa labor legislativa encaminada a suspender formalmente lo que quedaba del sistema constitucional, al tiempo que hizo amagos de preocuparse realmente por la situación de los indigentes. Además de la instrumentalización tardía de las políticas sociales, trató de organizar, sin recursos¹¹⁰³ ni apoyos la defensa de un sistema en el que pocos creían. No deja de ser paradójico que los liberales radicales en el Gobierno, trataran de salvar la dignidad del poder regio a costa de derribar el sistema constitucional y atentar a los principios en que se sustentaba.

La llegada de las notas de Verona¹¹⁰⁴ condenando el sistema y anunciando la próxima intervención¹¹⁰⁵, sirvió para desahogo de un Congreso sumido en la impotencia. El

¹¹⁰² D.SS.Cortes, sesión de 3 de diciembre de 1822, sobre aprobación por las Cortes del indulto a los conspiradores del 7 de julio que se entregaron.

¹¹⁰³ Sobre estas dificultades ver D.SS.Cortes, Actas de sesiones secretas; la sesión de 1 de noviembre de 1822 versó sobre las reducidas existencias de armas, y la sesión de 4 de noviembre de 1822 sobre las dificultades de hacer quinta en las provincias infestadas de facciosos.

¹¹⁰⁴ D.SS.Cortes extraordinarias, sesiones de 9 y 11 de enero de 1823.

¹¹⁰⁵ Chateaubriand se mostraba persuadido que este "acto de fuerza y alta política" para aplastar una revolución demagógica, halagaría el amor propio francés y honraría a los ministros. Memorias de Ultratumba, Vol II, Barcelona 1982.

Gobierno se atrevió con la expulsión del Nuncio¹¹⁰⁶; mostró firmeza y desprecio constitucional ante el Monarca, no aceptando su cese imprevisto en la fecha acostumbrada¹¹⁰⁷; pero bastó el discurso de Luis XVIII¹¹⁰⁸, notificando la próxima intervención de la Santa Alianza en España, para que las Cortes y el Gobierno acordaran su traslado a un paraje más seguro¹¹⁰⁹.

Cuando el sistema estaba extinguiéndose, las Cortes decretaron, sólo por unos días, que el Monarca había perdido el juicio. Y para poder trasladarse al refugio liberal de Cádiz, designaron una Regencia.

¹¹⁰⁶ D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 23 de enero de 1823. En respuesta al rechazo de Roma al nombramiento del ex-diputado Villanueva como Plenipotenciario ante la Santa Sede.

¹¹⁰⁷ El nuevo Gobierno, el quinto, cuyos ministros no llegaron a tomar posesión fué nombrado en vísperas de la apertura de las Cortes ordinarias (28 de febrero de 1823) y se mantuvo en suspenso hasta el 18 abril de 1823, en que tuvo lugar la deposición de unos ministros que no habían tomado posesión. Lo integraban en Estado: Alvaro Florez Estrada; Gobernación: Antonio Díaz del Moral; Guerra: Jose Torrijos; Gracia y Justicia: Jose Zorraquín; Hacienda: Lorenzo Calvo Rozas; Marina: Ramon Romay.

¹¹⁰⁸ Valoraciones sobre la intervención en D.SS.Cortes sesión de 23 de mayo de 1823.

¹¹⁰⁹ D.SS.Cortes extraordinarias, sesión de 14 de febrero de 1823. Seis diputados no se presentaron a Sevilla y treinta y dos no concurrieron a Cádiz, Actas Secretas, sesión de 4 de julio 1823.

Conclusión.

El denominado Trienio liberal (182-1823) ocupa un lugar central en el largo proceso de transformación del Antiguo régimen en España¹¹¹⁰. Encrucijada en la larga posguerra, el espasmo revolucionario de 1820 constituyó una alteración inoportuna del concierto europeo. La revolución liberal estallaba en España durante la resaca posterior a la revolución y en medio de la apoteosis legitimista; es decir, después que las potencias vencedoras de Napoleón hubieran sellado un acuerdo en virtud del cual los preceptos religiosos debían regir la política de los Estados, y creado una Santa Alianza para actuar de policía internacional en defensa del principio de legitimidad Monárquica¹¹¹¹.

La instauración en España de un régimen monárquico y representativo, a partir de una rebelión militar constituía, en la Europa de la Restauración, un despropósito. Perjudicaba también al sistema constitucional español el que, en comparación con otros de su tiempo, otorgara una participación excesiva a los ciudadanos. En suma, había motivos suficientes para que España y su régimen, estuvieran

¹¹¹⁰ El comienzo de la crisis tienden los historiadores a situarlo en los motines que se produjeron en 1766, y suele señalarse 1840 como la fecha en que el mencionado proceso culmina R.Herr, "Hacia el derrumbe del antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV", Moneda y Crédito n°118, 1971.

¹¹¹¹ Jacques Droz, "Europa: Restauración y Revolución .1815-48." Madrid, 1974 págs. 235 y sigs.

durante estos años en el punto de mira de las potencias de la Santa Alianza.

El advenimiento del sistema constitucional se produjo en circunstancias difíciles, pero en unas condiciones internas favorables. La Monarquía restaurada no había respondido a las esperanzas que una parte importante de la población tenía puesta en ella. La ineficacia y el descrédito del régimen monárquico absolutista, crearon una atmósfera receptiva hacia las pretensiones reformadoras de los liberales.

Los liberales llegaron al poder mediante un golpe frustrado, gracias a la incapacidad de la monarquía absoluta, el descontento del ejército, el apoyo de importantes grupos sociales urbanos y ante la indiferencia de la mayoría del país campesino, en un momento en que persistía la crisis nacional, consecuencia de los desastrosos años de la guerra y de los desaciertos de la Restauración absolutista.

Los liberales accedieron al poder en unas condiciones hasta cierto punto ventajosas. Sus dirigentes habían disfrutado de un intenso proceso de adiestramiento en el pasado reciente, contaban con una Constitución y, por tanto, no precisaban dedicar sus mejores energías en profundos debates acerca de perturbadoras cuestiones de principios. Asuntos tan conflictivos como los relacionados con la soberanía y forma de gobierno, facultades del Rey y las Cortes, derechos fundamentales, relaciones Iglesia y Estado,

organización de poderes, participación política, por citar algunos, estaban resueltos por la Constitución. Los dirigentes liberales podían dedicarse desde los inicios a lograr el imprescindible acuerdo sobre las reglas de juego político, que permitieran la incorporación de las ideas e intereses sociales en la nueva organización política estatal.

La forma en que había tenido lugar el cambio, constituía para sus protagonistas un motivo de satisfacción. En efecto, estimaban que habían protagonizado un acontecimiento en verdad extraordinario, sin precedentes en la historia del mundo: los militares por primera vez se ponían al frente de los pueblos para darles la libertad¹¹¹²; creían además que su revolución era prodigiosa, por haber sido incruenta y sin convulsión¹¹¹³; y hasta llegaron a pensar que podían controlar y orientar el proceso revolucionario:

"(...) Tomando la revolución en el instante de su crisis, podrían darle una dirección fija y favorable, y conseguir así el asegurar sus resultados a cálculo, porque sin una dirección determinada, las revoluciones marchan ciegamente entregadas al acaso¹¹¹⁴ (...)".

¹¹¹² Ver intervención de Moreno Guerra en D.SS.Cortes, 13 de junio de 1821.

¹¹¹³ Memoria del Secretario del Despacho de Gobernación en D.SS.Cortes, sesión de 3 de marzo de 1822.

¹¹¹⁴ Manifiesto de la Junta provisional a las Cortes, julio de 1822.

Gracias al respaldo que obtuvo en las provincias el fracasado pronunciamiento de Riego España ensayaba por primera vez el sistema constitucional diseñado en el código. Téngase en cuenta, que la obra transformadora de las Cortes de Cádiz, apenas había tenido vigencia práctica. Limitada a un rincón del país ocupado, durante los años de guerra, fué barrenada al finalizar la contienda, cuando el Monarca regresó de su cautiverio y restauró el régimen absoluto.

No obstante, los liberales consideraban la experiencia revolucionaria de 1820 como una prolongación de la iniciada con la crisis de 1808. Incluso hablaron de restauración, para indicar que lo que hacían era poner en práctica el proyecto político pergeñado por las Cortes de Cádiz en el anterior período de regeneración. El sistema constitucional instaurado impulsó un delicado proceso de reformas, las más importantes fueron sin duda las de apariencia religiosa; desencadenó, a su pesar, lo que fué percibido como un desmedido afán de participación; y sirvió de estímulo al liberalismo revolucionario europeo.

La finalidad de los dirigentes liberales cuando ocuparon el poder fué dotar de mayor eficacia la acción del Estado para proporcionar más seguridad a la sociedad. Perseguían como objetivo la sustitución de la sociedad del antiguo régimen, "desestancando la propiedad, liberando las trabas,

y removiendo obstáculos, para permitir que las fuentes de riqueza y prosperidad broten por sí mismas ". Abiertamente se mostraron dispuestos a la utilización del Estado para la realización de amplias reformas económicas, educativas, sanitarias, religiosas y sociales, completando las de carácter político y administrativo destinadas, en la óptica de sus discursos, a beneficiar a la mayoría de la población campesina y menguar el poder y los privilegios de las clases tradicionales.

La crisis política y social, junto al colapso financiero, en vez de constituir un acicate y ser definidas como una buena oportunidad para adoptar medidas atrevidas de reforma política, fueron percibidas como un obstáculo para emprender esta parte del programa. Los dirigentes liberales utilizaban las dificultades internacionales, una veces como excusa y otras como coartada, para reducir sus ambiciones especialmente en materia de participación política, hasta desmovilizar las fuerzas sociales que apoyaban al régimen. Sin apoyos y desmoralizado, el sistema dejó de constituir una amenaza para las fuerzas reaccionarias, antes de que tuviera lugar la invasión del ejército de la Santa Alianza.

El Gobierno y las Cortes, (estas últimas siempre con mayoría liberal moderada), fueron incapaces de encontrar una respuesta adecuada a los graves problemas existentes. Sin embargo, emprendieron medidas revolucionarias, (como la reforma de los regulares), en perjuicio de la mayoría del

país, campesino, ásperamente combatidas por las fuerzas sociales e instituciones más tradicionales lideradas por el Monarca y el Nuncio, (nobleza, jerarquía eclesiástica, parte del clero y del ejército). Adoptaron estrategias políticas tan contradictorias como desconcertantes, que debilitaron a los partidarios de las políticas de reforma y dieron alas a sus adversarios políticos.

Las propensiones moderadas del Gobierno y las Cortes se vieron reforzadas por las de las autoridades de las provincias (Diputaciones y ayuntamientos), y los funcionarios o empleados públicos - intendentes y jueces, por ideología y formación más vinculados al antiguo régimen-. Con demasiada frecuencia las autoridades mencionadas hicieron uso, de su adiestrada capacidad para no poner en práctica aquellas medidas indispensables que consideraban aborrecibles (instrucción rápida de los procesos, recaudación de impuestos, liquidación de los bienes de los regulares). Los ejemplos más notables de escaso celo correspondieron a los integrantes de la judicatura. En el ejercicio de su jurisdicción practicaron técnicas dilatorias que convertían en interminables procesos importantes, (el juicio a los asesinatos perpetrados por el ejército en Cádiz), se mostraron extremadamente benévulos con los autores de conspiraciones contra el sistema constitucional y, sin embargo, siempre estuvieron dispuestos a compartir el fervor represivo de las autoridades dispuestas a frenar al liberalismo radical.

Los dirigentes liberales fueron complacientes con la incapacidad, escaso celo y la torpeza de los individuos que desempeñaban funciones y empleos públicos. Sin embargo, dirigieron desde el principio contra el clero toda su intolerancia. El clero comenzó siendo el chivo expiatorio de los fallos del sistema constitucional. Es posible conjeturar que la facilidad con que alcanzaron los liberales el poder les proporcionó una definición equivocada de la realidad y sobre la fortaleza eclesiástica. Confundieron la ruina de las instituciones políticas del antiguo régimen, con la de los grupos sociales que le apoyaban. De forma que atribuyeron a la Iglesia una debilidad superior a la que padecía, y así mismos, se otorgaron una poder que para nada tenían. Reflejo de esta percepción equivocada y la confianza excesiva en sus propias fuerzas puede encontrarse en el dictamen del simbólico proyecto de ley por el que procedían a la supresión de los mayorazgos:

" (...) El antiguo edificio amenaza ruina, va caminando rápidamente a su destrucción, se va desplomando por su propio peso: ya no tienen quien le sostenga, ni el despotismo, ni la tiranía, ni la adulación, ni las pasiones desenfrenadas, ni la ignorancia, ni las preocupaciones ¹¹¹⁵ (...)".

El errado diagnóstico sobre la debilidad del antiguo

¹¹¹⁵ Ver Dictamen del proyecto de ley de mayorazgos. D.SS.Cortes, sesión de 3 de septiembre de 1820.

régimen en su conjunto les hizo creer que había llegado el momento de emprender reformas radicales de las antiguas instituciones:

"(...) Una feliz reunión de circunstancias (..) facilita una reforma completa de nuestra instituciones viciosas. La razón, la filosofía y el interés general de la sociedad dictan imperiosamente que desconfiando poder remediar tan grave mal con paliativos, innovaciones y reformas superficiales, tratemos de arrancarlo de raíz¹¹¹⁷ (...)".

La estrategia directa y violenta, cifrada en arrancar el mal de raíz, inspiró las medidas de reforma religiosa. Sorprende comprobar cómo los dirigentes liberales, tan moderados en materia de participación política, se atrevían a imponer sin concesiones un programa de reforma eclesiástica que constituía un atentado al poder social, ideológico y político de la iglesia y un despojo de su patrimonio.

El excesivo optimismo de los dirigentes liberales sobre su poder y la proverbial incapacidad para negociar un programa más aceptable provocó, casi en sus inicios, el enfrentamiento de la Iglesia y los eclesiásticos contra un régimen que amenazaba su posición social y su poder. Este enfrentamiento acabó en guerra abierta contra el sistema y produjo la resurrección de la guerrilla, esta vez contra el

¹¹¹⁷ Ibidem.

liberalismo¹¹¹⁷ . La contienda discurrió especialmente en los medios rurales, contó con la inapreciable colaboración de los campesinos y llegó a adquirir proporciones de guerra civil. La duración e intensidad de este enfrentamiento acabó ocasionando el desgaste y la ruina de la experiencia liberal.

Los liberales intelectualmente tan valiosos, no fueron capaces de proyectar un programa de reformas que, además de beneficiar a la burocracia, y a la escuálida burguesía urbana, atrajera a los campesinos¹² y no provocara demasiada hostilidad entre los miembros de la poderosa institución eclesiástica. Tampoco supieron superar uno de los más importantes obstáculos para el éxito de cualquiera de sus actuaciones: el conflicto interminable y a veces mezquino, en que lograron enzarzarse las tendencias moderada y exaltada, en que muy pronto quedó escindida la corriente liberal.

La razón por la cual los liberales llevaron a cabo políticas y estrategias desconcertantes, que propiciaron e impulsaron a las fuerzas de la reacción, tiene poco que ver con la mezquindad, ambición y otras características personales de sus dirigentes. Distraídos por el presionante entorno de la Restauración, condicionados por sus ideologías

¹¹¹⁷ Pero esta vigorosa oposición campesina al liberalismo no puede asimilarse a la defensa de la monarquía tradicional. Al respecto, Torras, *Liberalismo y rebeldía campesina 1820-1823*, Barcelona 1976.

¹² Artola, M, *La España de Fernando VII*, Madrid 1968, p. 485 y ss.

y prejuicios, y muy alejados de los deseos e intereses del pueblo, fueron incapaces de diseñar respuestas y estrategias adecuadas para hacer frente a la profunda crisis ¹³. La arrogancia y debilidad ideológica de los dirigentes y, en fin, la pobreza de su imaginación les impidió ponderar el enorme peso de las fuerzas tradicionales.

Esta debilidad ideológica, los fracasos y las infidelidades políticas a ella ligados provocaron una situación de desmoralización generalizada. La desmoralización junto con las divisiones existentes ¹⁴ tuvieron efectos paralizadores que supieron aprovechar los enemigos del sistema constitucional, (el Monarca, la institución eclesiástica, parte de la nobleza y de la burocracia estatal y la Iglesia), quienes contaron con el apoyo vigoroso de los campesinos y el imponente y continuo de las fuerzas de la Santa Alianza para debilitar y derribar al régimen. Antes de que tuviera lugar la invasión del ejército francés, el sistema constitucional desmoralizado y sin apoyos ya estaba hundido.

¹³ Se trataba -nos dice Pabón- de la España menos capaz de vivir limpiamente una Constitución; y de la Europa menos dispuesta a considerar benévolamente el intento liberal. Narváez y su época, Madrid 1983.

¹⁴ Sobre la disposición hispánica a "no deponer las discordias domésticas ante la amenaza extranjera" F.Murillo, En que se trata de los hispanistas, en Ensayos sobre sociedad y política II, Barcelona, 1988.

Desde el punto de vista internacional, el proceso de cambio revolucionario, iniciado en nuestro país tuvo una importancia innegable: hizo célebre la Constitución de 1812¹⁵ y, sobre todo, constituyó el primer asalto victorioso a la fortaleza del legitimismo monárquico¹⁶. Algo ciertamente notable, porque contradice la imagen tópica existente sobre España y su historia, tan cargada de prejuicios, que tiende insistentemente a identificar a nuestro país y su pasado casi con la vanguardia del reaccionarismo europeo¹⁷.

La victoria y el acceso al poder de los partidarios del sistema constitucional, tuvo una repercusión inmediata en Italia. Las revoluciones en el sur de Europa (se unieron Grecia y Portugal), provocaron un aumento de las esperanzas e ilusiones entre los liberales españoles, realzado por el temor de los adversarios políticos. Ante estos sucesos los responsables del Gobierno constitucional reaccionaron tranquilizando a las potencias de la Santa Alianza, irritadas por las convulsiones. Desde un principio se preocuparon en defender y practicar como fórmula política la estrategia de la moderación. Es posible afirmar, por tanto, que durante

¹⁵ Mirkine-Guetzevitch, "La constitution espagnole de 1812 et les débuts du libéralisme européen", Introduction à l'étude du droit comparé, Paris 1938.

¹⁶ M. Artola, ob.cit.

¹⁷ Sobre la identificación de nuestro pasado con la reacción, consúltense las atinadas reflexiones de Murillo, F. "En que se trata de los hispanistas", en Ensayos sobre sociedad y política, Barcelona 1988.

estos años de experiencia constitucional, la presión de la Europa continental y atlántica interfirió de manera decisiva sobre el desarrollo de la historia peninsular; aunque es también uno de esos períodos que vienen recibiendo un tratamiento más "casticista" ¹⁸.

El denominado Trienio liberal ha sido percibido y valorado de forma diversa. Para unos, fueron tres años de anarquía ¹⁹. Otros consideran que el "significado profundo" de esta nueva experiencia constitucional fracasada radica en que supuso el abandono del modelo revolucionario de transición del Antiguo régimen ²⁰. En fin, desde una perspectiva sociológica, el episodio cabría percibirlo como una muestra más de esa falta de sincronía entre la estructura social y el mundo de las ideas, tan característica de nuestro primer tercio del siglo XIX ²¹.

Suele señalarse como un ingrediente notable del espíritu del Trienio el intenso afán por participar en los asuntos públicos. Esta explosión de la participación era reciente, y

¹⁸ Interesantes reflexiones sobre los sesgos ideológicos de la historiografía del período pueden encontrarse en J.M. Jover, España en la transición del siglo XVIII al XIX, en Política, Diplomacia y Humanismo popular, Madrid 1976

¹⁹ F.Suàrez, La Crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840), Madrid 1958.

²⁰A.Gil Novales, El trienio liberal, Madrid 1980.

²¹ Murillo, F., El Manifiesto de los Persas y los orígenes del liberalismo español. en "Ensayos sobre sociedad y política".I, Barcelona, 1987..

estaba relacionada con la extraña seducción que, por esos años de crisis, ejercía en los habitantes de los núcleos urbanos, la idea de que podían intervenir para cambiar la sociedad a mejor, se entiende. No faltan los que consideran ²² que en esta característica general del régimen habría que buscar una de las causas de su ruina. Olvidan sin embargo, que tras esa aparente exaltación liberal se ocultaba, a veces, una real moderación y, en ocasiones, la frustración de la impotencia²³.

Analizando esos apasionantes años de profunda crisis, desde la perspectiva de la participación, es posible conjeturar que la historia del Trienio fué una lucha de los liberales contra el deseo de participación existente en diferentes grupos sociales de determinados núcleos urbanos. Entre los líderes del liberalismo, (primero los moderados y al final también los exaltados), predominaba la creencia que un afán excesivo por participar, (de las masas, se entiende), constituía una amenaza para la consolidación del sistema constitucional. Esta firme creencia la combinaban con una actitud positiva, (más específica de los moderados), según la cual el estímulo del interés que ocasiona la propiedad, además de proporcionar prosperidad económica, daba firmeza a

²² Marqués de Miraflores, "Apuntes histórico- críticos para escribir la historia de la revolución de España desde el año 1820 hasta 1823", Londres, 1834.; J.L Comellas, "Los realistas en el trienio constitucional", Pamplona 1958.

²³ Gil Novales, A, Las Sociedades patrióticas, 2 vols. Madrid, 1975.

las instituciones políticas.

Las racionalizaciones sobre este entusiasta combate, que los dirigentes liberales emprendieron contra la libertad y la participación, fueron de carácter histórico, (el ejemplo francés, donde la anarquía condujo a la tiranía) y sociológico (educados en el cenagoso despotismo los aromas de la libertad nos matan). Las minorías dirigentes compartían la convicción de que las pasiones intempestivas de los ciudadanos hacia la libertad, (exceso de celo), conducían a la anarquía e impedían consolidar un sistema representativo. Estimaban, por el contrario, que la única garantía de estabilidad de ese sistema de libertades, se encontraba en el sagrado derecho de propiedad. Motivo por el cual los moderados, que controlaron los destinos del país en los años decisivos, dedicaron sus mejores esfuerzos a contener la participación y dar ensanche a la propiedad a costa del despojo de la Iglesia.

No debe causar extrañeza que en esa atmósfera utilitarista, de terror al radicalismo político y a la participación de las masas urbanas, característica de esos años de Santa Alianza, se generalizara el uso del término exaltado. Empleado en sentido peyorativo, fué utilizado para designar y denigrar a los partidarios del liberalismo radical que postulaban extender la participación política más allá de las instituciones .

Reflexionando sobre este "primer ensayo en la carrera de la libertad", cuando ya todo estaba perdido, diría Argüelles:

. "(...) Nuestros errores, si los hubiéramos cometido, no son de aquellos que pueden desfigurar el hermoso cuadro de una restauración conducida hasta aquí con una moderación y prudencia que no tiene ejemplos en la historia. Nuestro primer ensayo en la carrera de la libertad, en todo caso, hallará indulgencia en la imparcialidad y buena fe de los que conocen cuán difícil es triunfar de tantos elementos de contrariedad puestos en acción por propios y extraños. El célebre David Hume, (...) hablando del reinado de Carlos I, dice que la libertad de aquel país se debe a singular ventaja de que la Europa, envuelta en violentas se ocupó muy poco de aquellos disturbios, y por lo mismo dejó a los ingleses exclusivamente el establecimiento y consolidación de sus propias instituciones. Así nos sucedería a nosotros si la ambición, la imprudencia y el fanatismo no alucinasen a los que provocan en Europa la espantosa reacción, que al fin habrá de sumirla en un abismo de revoluciones²⁴ (...) "

Las interpretaciones posteriores del período han contribuido a arruinar la predicción de Argüelles. Como era previsible ha faltado indulgencia y como suele ser inevitable tampoco ha habido imparcialidad.

²⁴ D.SS.Cortes, sesión de 23 de mayo de 1823.

Siguiendo la recomendación de Argüelles, emprendí este estudio sobre las elecciones, las Cortes y la lucha por la participación en el Trienio. Una de las conclusiones posibles de mi análisis ha sido contrastar cuánto había de cierto en la afirmación de Argüelles. Los liberales españoles durante los años del sistema constitucional fueron, por miedo a la revolución y a la Santa Alianza, de una prudencia generosa y una moderación delirante. Sin embargo, la historia les ha asignado el papel de anárquicos y exaltados. Paradójicamente, aquel que a toda costa quisieron evitar.

Fuentes y Bibliografía.-

Legislación, Diario de Sesiones y Actas de Cortes.-

Colección de Decretos y órdenes de las Cortes de Cádiz, (24 de septiembre de 1810 a 14 de septiembre de 1813, Cádiz, Imprenta nacional, (Cuatro tomos).

Martín de Balmaseda F., Colección de reales resoluciones y Decretos del Rey D.Fernando VII, del año 1818, Madrid Imp. Real 1819 (T.V).

Martín de Balmaseda F., Colección de reales resoluciones y Decretos del Rey D. Fernando VII, del año 1819, Madrid, Imp.Nacional 1820 (T.VI).

Colección de los decretos y órdenes de las de las Cortes de 1820 a 1823, (Cinco vols)., Madrid, Imp. Nacional, 1823.

Martín de Balmaseda F., Colección de Decretos y resoluciones de la Junta provisional, Regencia del reino y los expedidos por su Majestad desde que fué libre del tiránico poder revolucionario del año de 1823. T.VII, Imp.Real.

Diario de Sesiones y Actas de las Cortes.-

Diario de las sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, Madrid, Imp. J.A.García 1870 (Nueve vols).

Diario de las sesiones de las Cortes. Legislatura de 1820 (junio a noviembre del mismo año), Madrid Imp. J.A García, 1871 (Tres vols.).

Diario de las sesiones de las Cortes. Legislatura de 1821,

(Febrero a junio del mismo año), Madrid, Imp. J.A. García, 1873, (Tres vols.).

Diario de las sesiones de Cortes, Legislatura extraordinaria, (septiembre de 1821 a febrero de 1822), Madrid, Imp. J.A. García, 1871. (Tres vols.).

Diario de las sesiones de Cortes, Legislatura de 1822 (febrero a junio del mismo año), Madrid, Imp. J.A. García, 1872 y 1873 (Tres vols.).

Diario de las sesiones de Cortes, Legislatura extraordinaria (octubre de 1822 a febrero de 1823), Madrid, Imp. y Fund. J.A. García, 1875 (dos vols.).

Diario de las sesiones de Cortes celebradas en Sevilla y Cádiz en 1823. Madrid, Imp. Nacional 1858.

Actas de las sesiones secretas de las Cortes ordinarias y extraordinarias de los años 1820 y 1821, de las de los años 1822 y 1823 y de las celebradas por las Diputaciones permanentes de las mismas Cortes ordinarias. Madrid, Imp. J.A. García, 1874

Actas de las Juntas preparatorias para celebrar las elecciones de diputados a Cortes de 1820. Archivo Cortes, Legajo. 4º, expedientes nº 1 a 33.

Actas de las Juntas electorales de Provincia, Elecciones a Cortes de 1820. Arch. Cort. Legajo 6 y expedientes nº 1 a 34.

Informe de la Comisión de poderes sobre los de los Diputados electos. Arch. Cort., Leg. 4 nº 106.

Actas de las Juntas electorales de provincias, elecciones de a Cortes 1821, Legajo nº 8 expedientes nº 1 a 30 y Leg. 9

Prensa y folletos.-

Gaceta de Madrid, 1820-1823. .

La Colmena, 1820

El Conservador, Madrid 1820.

El Constitucional, Madrid, 1820.

La ley, Madrid. 1820.

Miscelánea del comercio, (artes) política y literatura,
Madrid, 1819-1821.

El Tribuno del Pueblo español, Madrid 1820.

El Universal Observador Español, Madrid 1820-1823.

El Zurriago, Madrid, 1821 y 1822.

Folletos.-.

"Cartilla crítico- política. Instructivo- constitucional para el gobierno de los señores diputados de Cortes". Reimpreso en Toledo Imp. de la Viuda de Aznar, 1820. (B/N -Biblioteca Nacional-, V°-C° 634-4).

"Cartilla forense o continuación del Catecismo político constitucional", Valencia Imp. Domingo y Monipié. 1820. (B/N C° 277-5).

"Catecismo constitucional y civil, donde se explica las obligaciones del ciudadano español". Madrid Imp. Alvarez 1820. (B/N.R/C° 780-8).

"Catecismo político arreglado a la Constitución española para ilustración del pueblo, instrucción de la juventud y uso de las escuelas de primeras letras", por D.J.C, Palma Imp. M. D. Plaza. Año 1812. (B/N 61.225).

"Catecismo cristiano constitucional. (Dirigido a los niños)", Palma de Mallorca, Imp. F.Guasp, 1823. (B/N V.E. 612-33).

"Catecismo político, que contiene ideas principales de Política ignoradas de muchos, por estar escritas en grandes volúmenes", por DRV y F. Barcelona Imp.I.Estivill. (B/N,V/C*3339-13).

"Condiciones y semblanzas de los Srs. Diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821", Madrid, Imp. J.Ramos García. (B/N V, C*2703-28).

"Condiciones y semblanzas de los Srs.Diputados a Cortes para los años 1822 y 1823", Madrid, Imp. del Zurriago. (B/N, V/C* 2721-43).

"Apología del benéfico sistema que felizmente nos regía", Madrid, Imp. León Amarita. 1823

Fuentes bibliográficas.-

Alcalá Galiano A.(1955): "Obras escogidas", Memorias (T.I), Madrid, BAE Atlas,

Argüelles A (1970): "Examen histórico de la reforma constitucional", Madrid, Narcea.

Arroyal León de (1968): "Cartas político-económicas al Conde de Lerena", Madrid, Ciencia Nueva.

Boix V. (1847): "Historia de la ciudad y reino de Valencia", Valencia, Imp. Benito Monfort.

Blanco W.J.(1972): "Cartas de España", Madrid, Alianza.

Borrego A (1970): "De la situación y de los intereses de España en el movimiento reformador de Europa, 1848", Ed.de D.Gomez, en El 48 Autocrítica del liberalismo, Madrid,Iter.

Cabarrús Conde de (1973):" Cartas", Madrid, Castellote.

Castro C. (1910): " Antología de las Cortes de 1820", Madrid, Imp.J.A. García.

Chateaubriand F. (1982): "Memorias de Ultratumba", 2 Vols., Barcelona, Orbis.

Consergues, Clausel de (1823): "Observaciones varias sobre la revolución de España, la intrvención de la Francia y las actuales y antiguas Cortes", Perpignan, Imp. Alzine.

Constant, B.(1820): "Curso de política Constitucional", traducido libremente al español por D.Marcial Antonio López (...) diputado de las Cortes ordinarias; Imp. de la Compañía.

Constant B.(1968): "Curso de política constitucional", Madrid, Taurus.

Díaz del Moral,A.(1973): "Historia de las agitaciones campesinas andaluzas", Madrid, Alianza.

Escudero D.A. (1837): "Ensayo sobre las opiniones políticas en España", París, Imp. Messard,

Florez Estrada A (1973): "En defensa de las Cortes". Madrid, Castellote.

Gudin,(1821):" Suplemento al Contrato Social de Rousseau aplicable a grandes naciones", Madrid, Imp. de Brugada.

Haller (1823): "Análisis de la Constitución española", Madrid, Imp. José Collado.

Hamilton, Madison & Jay (1957): "El Federalista", México, FCE.

Jovellanos M.G. (1956):" Obras", BAE,3 Vols. Atlas, Madrid.

Mably (1820): "Derechos y deberes del ciudadano", Escrita en francés por el abate (...) y traducida al español por D.M.M.P. Imp. Rosa Sanz.(B.Congreso S.817,A-38).

Martínez Marina F (1966): "Obras escogidas", Madrid, BAE, Atlas.

Martínez Y. F.(1914): "Antología de las Cortes de 1821 a 1823", Imp.V.Tordesillas.

Mesonero R. de (1984): "Ligero bosquejo de Madrid en 1820 y 1821", Edición facsímil de Mendez eds.

Mesonero R. (1982): "Memorias de un setentón", Madrid, Abacc.

Miñano,S (1968): "Lamentos políticos de un pobrecito holgazán", Madrid, Ed.Ciencia Nueva.

Miraflores Marqués de (1834): "Apuntes histórico críticos para escribir la historia de la Revolución española desde el año 1820 hasta 1823". Londres, R.Taylor.

Moreau de Jonnes, A.(1835): "Estadística de España", trad. y adicionada P.Madoz, Barcelona, Imp. Rivadeneira Cía.

Quintana M.J. (1972): "Memoria sobre el proceso y prisión de D.Manuel José Quintana en 1814". en Quintana revolucionario, Madrid, Narcea.

Quintana M.J. (1946): "Obras completas", Madrid, BAE Atlas.

Rico y Amat J (1861): "Historia política y parlamentaria de España", T.I, Madrid, Imp. Escuelas Pías.

Romero Alpuente,J (1989): "Historia de la revolución española y otros escritos", Ed. A. Gil Novales, Madrid, CEC,(2 Vols).

Salas R (1982): "Lecciones de Derecho público constitucional", Madrid, CEC.

Smith A.(1987): "Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones", México, FCE.

Toreno Conde de (1953): "Historia del levantamiento guerra y revolución de España", Madrid,BAE, Atlas.

Vayo y Lafuente (1842): "Historia de la vida y reinado de Fernando VII", Madrid, Imp. Repullés. (3 vols.)

Velázquez S. J. (1856): "Bosquejo histórico", Sevilla, Imp. Juan Moyano.

Bibliografía.-

Althusser, L (1968): "Montesquieu, la política y la historia", Madrid, Ciencia nueva.

Anderson P (1985): "Teoría, política e historia", Siglo XXI, Madrid.

Anes G. (1972): "Economía e ilustración en la España del siglo XVIII", Ariel, Barcelona.

Anes G. (1975): "El antiguo régimen: los borbones", Alianza U., Madrid.

Apter D. (1970): "La política de la modernización", Buenos Aires Paidós.

Arendt H (1967): "Sobre la revolución", Madrid, Rev. de Occ.

Aron R. (1962): "Dimensiones de la conciencia histórica", Madrid, Tecnos.

Artola M (1979): "La burguesía revolucionaria (1808-1875)", Alianza. Madrid.

Artola M (1959): "Los orígenes de la España contemporánea", Madrid IEP. (2 vols).

Artola M. (1968): "La España de Fernando VII", en Historia de España (M. Pidal), Madrid, Espasa T. XXVI.

Aya Rod (1985): "Reconsideración de las teorías de la revolución", Madrid, Zona Abierta 36-37,

- Baena M (1968): "Los estudios sobre administración en la España del siglo XVIII", Madrid, IEP.
- Baechler J (1974): "Los fenómenos revolucionarios", Barcelona, Península.
- Barber E. (1975): "La burguesía revolucionarias", Madrid, Rev. de Occ.
- Baroja, P (1970): "Juan Van Halen". El oficial aventurero. Madrid, Espasa.
- Barrington Moore, Jr. (1969): "Poder político y teoría social", Barcelona, Anagrama.
- Barrington Moore, Jr. (1973): "Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia", Barcelona Península.
- Bendix R (1964): "Nation-building and Citizenship. Studies of our Changing Social Order", J. Wiley & Sons, Inc., New York.
- Beauvoir S. (1971): "El pensamiento político de la derecha", Barcelona, Edhasa.
- Bergeron L, Furet F. Koseleck R: (1989): "La época de las revoluciones europeas", Madrid, Siglo XXI.
- Bergeron L. y otros (1977) : "Niveles de cultura y grupos sociales", Madrid, Siglo XXI.
- Blanco V.R. (1988): "Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823", Madrid, Siglo XXI.
- Blondel J. (1972): "Introducción al estudio comparativo de los gobiernos". Madrid, Rev. Occ.
- Bouthoul G. (1969): "La Guerre", Paris, PUF.
- Brinton C. (1966): "Las Vidas de Talleyrand", Espasa Madrid.
- Brinton C (1962): "Anatomía de la revolución", Madrid, Aguilar.

- Buldain J.B(1988): "Régimen político y preparación de Cortes en 1820", Madrid, Congreso de los Diputados.
- Burdeau G.(1969): "Traité de Science Politique", Paris
- Burke (1978): "Reflexiones sobre la revolución francesa", Madrid, CEC.
- Burkhardt J(1980): "Reflexiones sobre la historia universal", Madrid, F.C.E..
- Caro Baroja J(1970): "El mito del carácter nacional. Meditaciones a contrapelo". Madrid, Seminario y Eds.
- Carrasco C.(1975): "La burocracia en la España del siglo XIX", Madrid, IEAL.
- Castro C. (1979): "La revolución liberal y los municipios españoles", Madrid, Alianza.
- Clavero, B.(1974): "Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836", Madrid, Siglo XXI.
- Clavero y otros (1979): "Estudios sobre la revolución burguesa en España", Madrid, Siglo XXI.
- Comellas J.(1958): "Los primeros pronunciamientos en España, 1814-1820", Madrid, CSIC.
- Comellas J. (1958): "Los realistas en el Trienio constitucional (1820-1823)", Pamplona, Stud.General.
- Comellas J (1963): "El Trienio Constitucional", Madrid, Rialp.
- Cortés C.(1984): "La Restauración y las primeras oleadas revolucionarias", Madrid, Akal.
- Coser L. (1961): "Las funciones del conflicto social", México, F.C.E.
- Crick, B.(1968): "En defensa de la política", Madrid, Taurus.

- Cuenca J.M (1976): "Sociología de una élite de poder de España e hispanoamérica contemporáneas", Córdoba.
- Cuenca, J.M (1979): "Iglesia y burguesía en la España liberal", Madrid, Pegaso.
- Decouflè, A (1976): "Sociologie des révolutions", PUF, Paris.
- Derozier, A. (1975): "Escritores políticos españoles", Turner, Madrid.
- Derozier, A. (1978): "Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España", Turner, Madrid, 1978.
- Díez del Corral, L.(1973): "El liberalismo doctrinario", Madrid, I.E.P.
- Dinwiddy J(1995): "Bentham", Madrid, Alianza.
- Dominguez Ortiz, A. (1993): "Sociedad y Estado en el siglo XVIII español", Barcelona, Ariel.
- Droz (J (1974): "Europa: Restauración y revolución (1815-1848)", Madrid, Siglo XXI.
- Dufour G., (1985): "Del catolicismo liberal al liberalismo exaltado: el canónigo D. Santiago Sedeño y Pastor", Rev.Trienio, n°1.
- Duverger M (1964): "Les constitutions de la France", Paris, P.U.F.
- Duverger M. (1974): "Los partidos políticos", México, FCE,
- Easton (1969): "Esquema para el análisis político", Buenos Aires, Amorrortu.
- Eisenstadt (1966): "Los sistemas políticos de los imperios", Madrid, Rev.Occ.
- Elías, N.(1982): "La sociedad cortesana", Madrid, F.C.E.

Elorza A (1970): "La ideología liberal en la Ilustración española". Madrid, Tecnos.

Elorrieta T (1926): " Liberalismo", Madrid, Reus.

Etzioni A, (1964) : "Los cambios sociales", México, FCE.

Favello, M (1976): "Historia del periodismo asturiano", Ayalga, Oviedo.

Fernandez Almagro .M (1976): "Orígenes del constitucionalismo español". Labor, Barcelona.

Fernandez Almagro M. (1943): "Las Cortes del S.XIX y la práctica electoral", Rev.Est. Pol. Vol, V.

Fernandez García A. (1985): "La Europa de Metternich", Madrid, Rev. Cuadernos Historia 16.

Ferrer Benimelli J. (1980): "Masonería española contemporánea". 2 Vols. Madrid, Siglo XXI.

Fiestas A. (1977): "Los delitos políticos, (1808-1936)", Salamanca, G.Cervantes.

Fontana J. (1970): "Colapso y transformación del comercio exterior español entre 1792 y 1827". Moneda y crédito, 115.

Fontana, J. (1971): "La quiebra de la monarquía absoluta (1814-1820)", Barcelona, Ariel.

Fontana J (1973): "Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX", Barcelona, Ariel.

Fraga M (1962): "Guerra y conflicto social", Madrid, IEP.

Furet F (1980): "Pensar la revolución, Barcelona", Petrel.

García-Pelayo M (1967): "Derecho Constitucional Comparado, Rev de Occ., Madrid.

García Rivas N (1990) : "La rebelión militar en derecho penal", Albacete, Universidad Castilla-la Mancha.

Germani G (1969): "Sociología de la modernización política". Buenos Aires Paidós.

Gerth, Johnson y Mills(1967): "El cambio social", Buenos Aires, Paidós.

Gil Novales A (1980): "El trienio liberal", Madrid, Siglo XXI.

Gil Novales,A (1975): "Las Sociedades patrióticas", 2 Vols., Madrid, Tecnos.

Gil Novales A.(1976): "Rafael de Riego, Cartas,Escritos y Discursos, Madrid, Tecnos.

Gil Novales A.,(Dir.) (1991): "Diccionario Biográfico del Trienio Liberal", Madrid Ed. El Museo Universal..

Goldstone J.A. (1985): "Repensar la revolución francesa", Zona Abierta 36-37.

Gramsci A.(1971): "La política y el estado moderno", Barcelona, Península.

Gray J.(1992): "Liberalismo", Madrid, Alianza

Hauriou M (1927): "Principios de Derecho público y constitucional", Madrid, Ed.Reus.

Hearder H y Waley. D.P.(1966): "Breve historia de Italia", Madrid, Espasa.

Hennesy M.A.C (1966): "La República federal", Madrid, Aguilar.

Herr R (1971):"Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen:Crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV", Rev.Moneda y Crédito, 118.

Herr R (1988): "España y la revolución del siglo XVIII", Madrid, Aguilar.

- Herrero J. (1973): "Los orígenes del pensamiento reaccionario español", Madrid, Edicusa.
- Hill C. (1968): "The english revolution 1640", London, Lawrence & Wishart, Ltd, .
- Hirchsman A. (1977): "Salida, voz y lealtad", México, FCE.
- Hirchsman A. (1978): "Las pasiones y los intereses", México, FCE.
- Hirchsman A. (1986): "Interés privado y acción pública", México, FCE.
- Hirchsman A. (1991): "Retóricas de la intransigencia", México, FCE.
- Hobsbawn, E (1974): "Las revoluciones burguesas", Madrid, Guadarrama. (2 vols)
- Hobsbawn, E. (1976): "Bandidos". Barcelona, Ariel.
- Huntington S. (1965): "Political development and political decay". World Politics XVII.
- Jover J. (1976): "Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX", Madrid, Turner.
- Jellinek (1978): "Teoría general del Estado", trad. F. de los Ríos, Buenos Aires.
- Juretsschke J (1962): "Los afrancesados en la Guerra de la Independencia", Madrid, Rialp.
- Kedourie E. (1985): "Nacionalismo", Madrid, CEC.
- Key V.O. (1962): "Política, partidos y grupos de presión". Madrid, IEP.
- LaPalombara J. (1970): "Burocracia y desarrollo político", Buenos Aires Paidós.
- Lenk K. y Neumann eds. (1980): "Teoría y sociología críticas

de los partidos políticos", Barcelona, Anagrama.

Lipset M. (1970): "El hombre político", Buenos Aires, Eudeba.

Linz J.J (1974): "El sistema de partidos en España", Madrid, Narcea.

LLuch E. (1973): "El pensament econòmic a Catalunya (1760-1840). Els orígens ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burguesia catalana", Barcelona, Ed.62.

Loewenstein (1964): "Teoría de la Constitución", Madrid, Ariel,

López Guerra, L.(1977): "Las campañas electorales en occidente", Madrid, March&Ariel.

Lorente M (1988): "Las infracciones a la Constitución de 1812", Madrid, CEC.

Lovett G.H. (1975): "La Guerra de la Independencia y el nacimiento de la España contemporánea", 2 Vols., Barcelona, Península.

Lukes S (1985): "El poder. Un enfoque radical", Madrid, Siglo XXI.

Macpherson C.B.(1984): "Burke", Madrid, Alianza.

Macpherson C.B.(1979): "La teoría política del individualismo posesivo". Barcelona, Fontanella.

Macpherson C.B. (1982): "La democracia liberal y su época", Madrid, Alianza.

Mackenzie, WJM.(1962): "Elecciones libres", Madrid, Tecnos.

Mannheim,K (1966): "Ideología y Utopía", Madrid, Aguilar.

Mannheim, K (1962): "Ensayos de sociología de la cultura", Madrid, Aguilar.

March J. y Olsen J (1984): "The New Institutionalism:

- Organizational in Political Life", The American Political Science Review, Vol,78, 3.
- Martínez Cuadrado M(1969): "Elecciones y partidos políticos de España, (1868-1931)", Taurus, Madrid.
- Martínez Sospedra (1978): "La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español", Fac.Derecho, Valencia.
- Martínez Yagües F.(1914): "Antología de las Cortes de 1821 a 1823", Congreso Diputados, Madrid.
- Marx C (1971): "El 18 brumario de Luis Bonaparte", Barcelona, Ariel.
- Marx C.y Engels F.(1973): "Revolución en España", Barcelona, Ariel.
- Maza E(1987): "Pobreza y asistencia social en España", Universidad Valladolid.
- Mina MªCruz (1981): "Fueros y revolución liberal en Navarra", Madrid, Alianza.
- Montesquieu Ch. L.(1962): "Grandeza y decadencia de los romanos", Madrid, Espasa.
- Montesquieu CH.L. (1972): "Del espíritu de las leyes", Madrid, Tecnos.
- Moral J.R (1975): "Hacienda y sociedad en el Trienio Constitucional (1820-1823)", IEF.
- Morlino (1985): "Cómo cambian los regímenes políticos", Madrid, CEC.
- Morodo R. y Díaz E. (1966): "Tendencias y grupos políticos en las Cortes de Cádiz y en las de 1820", Cuadernos hispanoamericanos, nº 220.
- Murillo F.F(1987): "Ensayos sobre sociedad y política".

Vol.I, Barcelona, Península.

Murillo, F.F (1988): "Ensayos sobre sociedad y política".

Vol.II, Barcelona, Península.

Nadal, J. (1975): "El fracaso de la revolución industrial en España", Barcelona, Ariel.

Naef W. (1947): "La idea del Estado en la Edad Moderna", Madrid, Nueva época.

Nicholson H (1985): "El congreso de Viena", Madrid, Edersa.

Olson, M. (1992): "La lógica de la acción colectiva", México, Limusa.

Pabón, J (1983): "Narváez y su época", Madrid, Espasa.

Pasquino J (1974): "Modernización y desarrollo político", Barcelona, Nova terra.

Payne, S. (1977): "Los militares y la política en la España contemporánea", París, Ruedo ibérico.

Payne S. (1983): "Ejército y sociedad en la España liberal", Madrid, Akal.

Pérez Garzón J.S. (1978): "Milicia nacional y revolución burguesa", Madrid, CSIC.

Peset M y JL (1972): "Muerte en España", Madrid, Seminario y Ediciones.

Peset J., Garma S. y Pérez JS. (1978): "Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa", Madrid, Siglo XXI.

Pintos M.C. (1958): "La política de Fernando VII entre 1814 y 1820", Pamplona, Est.Gral.Navarra.

Popper K R. (1961): "La miseria del historicismo", Madrid, Taurus.

- Portero J.A. (1978): "Púlpito e ideología en la España del siglo XIX", Zaragoza, Pórtico.
- Posada A. (1891): "Estudios sobre el régimen parlamentario en España", Madrid, Bib.Econ-Filos., Vol, LVII.
- Powell GB y Almond GA.(1972): "Política comparada", Buenos Aires, Paidós.
- Prados J. (1967): "Jovellanos, economista", Madrid,Taurus.
- Roca E (1986): "América en el ordenamiento jurídico e las Cortes de Cádiz", Real Academia Jurs.y Legislación, Granada.
- Revuelta M. (1973): "Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio constitucional", Madrid, CSIC.
- Romero de Solís P (1973): "La población española en los siglos XVII y XIX", Madrid, Siglo XXI.
- Rudé G. (1971): "La Europa revolucionaria, 1783-1815", Madrid, Siglo XXI.
- Rudé G.(1978): "La multitud en la historia", Madrid, Siglo XXI.
- Ruiz Alemán J. (1970): "El levantamiento realista de Orihuela en 1822", Murcia Academia de Alfonso X el Sabio.
- Runciman W. G. (1963): "Social Science and Political Theory", Cambridge University Press, London.
- Saavedra P Y Villares (1991): "Señores y campesinos en la península ibérica, siglos XVIII-XX", Barcelona, Crítica.
- Sanchez Agesta L(1963): "Historia del constitucionalismo español", Madrid, IEP.
- Sanchez Agesta (1962): "Las primeras cátedras españolas de derecho constitucional", en Rev.Est.Políticos, nº 126.

- Sanchez-Albornoz N (1975): "Jalones en la modernización de España", Barcelona, Ariel.
- Sanchez Mantero,R(1972): "Las conspiraciones liberales en Francia (1815-1823)", Sevilla, Public. Universidad.
- Schmitt C (1971): "Legalidad y legitimidad", Madrid, Aguilar.
- Schmitt C (1934): "Teoría de la Constitución", Madrid, Rev.Derecho Privado.
- Sckocpol T. (1979): "States and Social Revolutions: A comparative analysis of France, Russia, and China", Cambridge, Cambridge University Press.
- Seco C (1973): "Tríptico Carlista", Barcelona, Ariel.
- Siegfried A (1995): "Tableau politique de la France de l'Ouest", Paris, Imprimerie Nacional. (2 vols.)
- Smit J.W.(1981): "La revolución en los países bajos", en VV.AA. Revoluciones y rebeliones de la Europa moderna. Madrid, Alianza.
- Soboul A (1976): "Problèmes paysans de la revolution 1789-1848", Paris, L.F.Maspero.
- Soboul A.(1987): "Los Sans-Coulottes. Movimiento popular y gobierno revolucionario", Madrid, Alianza.
- Solé Tura y Aja E (1978): "Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936)", Ed.S. XXI, Madrid.
- Solís, R (1958): "El Cádiz de las Cortes", Madrid.IEP.
- Stendhal(1975): "Vida de Henry Brulard y Recuerdos de egotismo", Madrid, Alianza.
- Stone L.(1966): "Theories of Revolution", World Politics, tomo 18,núm.2 (enero)

- Stone L. (1981): "La revolución inglesa"; en VV.AA., Revoluciones y rebeliones en la Europa moderna, Alianza U.
- Stuart Mill, J. (1984): "El utilitarismo", Madrid, Alianza.
- Stuart Mill J. (1965): "De la libertad, Del Gobierno representativo", Madrid, Tecnos.
- Suarez, F. (1958): "La crisis política del Antiguo régimen en España. (1800-1840)", Madrid, Rialp.
- Thomson E.P. (1981): "Miseria de la teoría", Barcelona, Crítica.
- Tierno G.E. (1962): "Tradición y modernismo", Madrid, Tecnos.
- Tilly Ch. (1993): "Las revoluciones europeas", Barcelona, Crítica.
- Tilly Ch. (1995): "Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes", Madrid, Alianza.
- Tocqueville A. (1969): "El Antiguo régimen y la Revolución", Madrid, Guadarrama.
- Tocqueville A. (1984): "Recuerdos de la revolución de 1848", Madrid, Ed. Nacional.
- Tocqueville A. (1963): "La democracia en América", México FCE.
- Tomás y Valiente F. (1972): "El marco político de la desamortización en España", Barcelona, Ariel.
- Torras, J. (1976): "Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823", Barcelona, Ariel.
- Tuñón de Lara M. (1974): "La España del siglo XIX", Barcelona, Laia.
- Vallespín F. (Ed). (1993): "Historia de la Teoría política" Vol. 5, Madrid, Alianza.

Varela J. (1983): "La teoría del estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico". (Las Cortes de Cádiz), Madrid, C.E.C.

Veblen T (1971): "Teoría de la clase ociosa", México, FCE.

Vilar P (1983): "Crecimiento y desarrollo", Barcelona, Ariel.

Vives J.V. (1961): "Cataluña en el siglo XIX", Madrid, Rialp.

Vives J.V. (1970): "Aproximación a la historia de España", Madrid, Salvat.

Vives J. (1971): "Coyuntura económica y reformismo burgués", Barcelona, Ariel.

Woodward E.L. (1982): "Historia de Inglaterra", Madrid, Alianza.

Zavala I. (1972): "Románticos y socialistas", Madrid, Siglo XXI.
Zavala I. (1971): "Masones, Comuneros y Carbonarios", Madrid, Siglo XXI.

REUNIDO EL TRIBUNAL QUE SUSCRIBE EN EL DIA DE
LA FECHA, ACORDO CALIFICAR LA PRESENTE TESIS
DOCTORAL CON LA CENSURA DE apto con laude
por unanimidad MADRID, 12 de febrero 1998

Mark
Can
Calme
Cuigull
Jan 1 / - de /